REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

38.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN
BEATRIZ ARGIMÓN
Presidenta

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, SECRETARIOS, Y VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI, PROSECRETARIOS

SUMARIO

		Páginas
1)	**Texto de la citación.....**	1456
2)	**Asistencia.....**	1456
3)	**Asuntos entrados.....**	1456
4)	**Proyectos presentados.....**	1457

Páginas

– El señor senador Sartori presenta un proyecto de ley por el que se implementa el uso de tiques electrónicos por parte de comercios y empresas, a fin de reducir el consumo de papel y desechos producidos por tiques impresos.

• Pasa a la Comisión de Ambiente.

– El señor senador Botana presenta un proyecto de ley sobre pago justo y reabsorción laboral de los exfuncionarios de Casa de Galicia.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

5) Inasistencias anteriores..... 1468

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

6), 8), 10) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo..... 1468, 1468, 1504 y 1507

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Sánchez, Manini Ríos, Da Silva, Rubio y Niffouri.

– Quedan convocados los señores senadores Barrera, Methol, Silva, Brenta y Saravia.

7), 9), 11) y 13) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2022..... 1468, 1470, 1504 y 1507

– Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

14) Levantamiento de la sesión..... 1911

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 4 de octubre de 2023

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana jueves 5 de octubre, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

- Discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2022.

Carp. n.º 1062/2023 - rep. n.º 766/2023 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII y LXIII.

José Pedro Montero
Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro
Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores **Álvarez**, **Asiaín**, **Bianchi**, **Blás**, **Botana**, **Brenta**, **Caggiani**, **Cardoso**, **Carrera**, **Castillo**, **Coutinho**, **Della Ventura**, **Domenech**, **Gandini**, **Kechichian**, **Lazo**, **Liberoff**, **Manini Ríos**, **Methol**, **Niffouri**, **Nunes**, **Peña**, **Rodríguez**, **Russi**, **Sabini**, **Sánchez**, **Sanguinetti**, **Sartori** y **Silva**, e ingresan posteriormente, por licencia de los titulares respectivos, los señores senadores **Barrera** –entre las 13:30 y 22:04– y **Saravia**.

FALTAN: con licencia, los señores senadores **Andrade**, **Batlle**, **Bergara**, **Camy**, **Da Silva**, **Moreira**, **Nane** y **Rubio**. Se retiran con licencia los señores senadores **Niffouri** y **Sánchez**, que reingresa a las 22:04.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 10:17).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite mensaje por el que comunica la promulgación del proyecto de ley por el que se autoriza la salida del territorio nacional de una delegación de trece efectivos del Ejército nacional, a efectos de participar en la ejecución del ejercicio combinado Ceibo 2023, que se llevará a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina, desde el 25 hasta el 29 de setiembre de 2023. (Carpeta n.° 1077/2023).

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Junta Departamental de Flores remite copia de las palabras pronunciadas por el señor edil Carlos Mecol, relacionadas con la desforestación del monte natural en nuestro país.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE AMBIENTE.

La Junta de Transparencia y Ética Pública remite nota comunicando que se ha notificado al señor senador Juan Sartori sobre actuaciones relacionadas con su declaración jurada.

TÉNGASE PRESENTE.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes de la señora senadora Irene Moreira, relacionado con el estado actual de las obras ferroviarias entre Montevideo y Salto. (Asunto 160193).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA IRENE MOREIRA».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Juan Sartori presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se implementa el uso de tiques electrónicos por parte de comercios y empresas, a fin de reducir el consumo de papel y desechos producidos por tiques impresos. (Carpeta n.º 1091/2023).

A LA COMISIÓN DE AMBIENTE».

(Texto del proyecto de ley presentado).

EXPOSICIÓN MOTIVOS

El mundo va, cada vez más, hacia la digitalización de los procesos. La eliminación de los tickets en papel y la implementación de tickets electrónicos en supermercados y comercios, es una transición necesaria que se traducirá en un beneficio no solo para los clientes y las empresas, sino que impactará de manera positiva en el medio ambiente, reduciendo de forma significativa el uso de papel y la producción de desechos.

En cuanto a lo ambiental, la propuesta busca reducir el impacto de la producción de papel, una actividad que consume grandes niveles de agua y energía, y emite cantidades significativas de dióxido de carbono. A su vez, los tickets de papel, en su mayoría térmicos, contienen bisfenol-A (BPA), una sustancia química perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por ello, al eliminar o reducir su uso, se contribuiría a disminuir esa huella ambiental.

La implementación de tickets electrónicos también conlleva mejoras significativas en la eficiencia. Tanto para los clientes como para los comercios, la gestión de tickets electrónicos es más rápida y sencilla. En el caso de los clientes, pueden acceder a sus recibos de compra de manera instantánea a través de dispositivos móviles o correo electrónico, lo que facilita la organización y la recuperación de la información en caso de reclamos, devoluciones o garantías. A su vez, con los tickets electrónicos se evita la posibilidad de que se dañen, que la tinta desaparezca o que se pierdan, dándole mayores ventajas a los consumidor.

Por otro lado, los comercios pueden optimizar su proceso de ventas y contabilidad al eliminar la necesidad de imprimir y almacenar tickets en papel. Asimismo, esta medida implicará reducir costes, ya que el uso de tickets físicos, implican gastos constantes en papel, tinta, impresoras, mantenimiento y logística. Al migrar hacia los tickets electrónicos, se eliminan gastos innecesarios, lo que les permitirá a los supermercados y comercios destinar recursos financieros a áreas más productivas y sostenibles.

El presente proyecto de ley, establece que las empresas u organizaciones que emitan tickets elaborados con papel térmico (supermercados y comercios) están obligadas a ofrecer la opción de e-tickets a los usuarios. Sin embargo, el consumidor final tendrá el derecho de exigir la entrega de un ticket en papel si así lo prefiere.

La transición de los tickets en papel a los tickets electrónicos en supermercados y comercios es una medida necesaria y beneficiosa en múltiples niveles, que apunta hacia un futuro más sostenible y tecnológicamente avanzado.

Montevideo, 04 de octubre de 2023

Juan Sartori
Senador

ARTICULADO

Artículo 1.- Objeto: Implementar el uso de e-tickets enviados por medios electrónicos a fin de reducir el consumo de papel y desechos producidos por los tickets impresos.

Artículo 2.- Definición: Se entiende por e-Ticket el comprobante fiscal electrónico utilizado para documentar operaciones con consumidores finales.
Los medios electrónicos son aquellos canales de comunicación y transmisión de información que emplean dispositivos electrónicos, ya sea, correo electrónico, aplicaciones móviles y aplicaciones de mensajería instantánea.

Artículo 3.- Las empresas u organizaciones que emitan tickets elaborados con papel térmico (supermercados y comercios) están obligadas a ofrecer la opción de e-tickets a los usuarios.

Artículo 4.- Las empresas y organizaciones mencionadas en el artículo 3 deberán enviar los e-tickets a través del medio electrónico elegido y proporcionado por el titular del ticket en el momento de la compra. El consumidor final tendrá el derecho de exigir la entrega de un ticket en papel.

Artículo 5.- Los e-tickets enviados por medios electrónicos tendrán la misma validez que los tickets impresos en papel a los efectos de tener asistencia al momento de realizar un reclamo, soporte o garantía por parte del usuario.

Artículo 6.- Establécese un plazo de transición de 180 días siguientes a la promulgación de la presente ley, en el cual las empresas deberán implementar el uso de e-tickets enviados por medios electrónicos, discontinuando la emisión de tickets en papel.

Artículo 7.- Reglamentación: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de 90 días a partir de la fecha de su promulgación.

Montevideo, 04 de octubre de 2023

Juan Sartori
Senador

«El señor senador Sergio Botana presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre pago justo y reabsorción laboral de los exfuncionarios de Casa de Galicia. (Carpeta n.º 1092/2023).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

Montevideo, 4 de octubre de 2023.

Sra. Presidente del Senado

Esc. Beatriz Argimon.

PRESENTE.

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 168 del Reglamento de la Cámara de Senadores, me dirijo a Usted a efectos de presentar el Proyecto de Ley sobre **Pago justo y reabsorción laboral de los ex funcionarios de Casa de Galicia**, y su Exposición de Motivos.

Sin otro particular saluda a Ud. atentamente.

Sergio Botana. Senador

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por Resolución del Poder Ejecutivo, de 26 de octubre de 2021, se dispuso la intervención administrativa de Casa de Galicia por el plazo de hasta un año, con desplazamiento de sus autoridades naturales, y designándose una comisión interventora, al amparo de lo establecido por el artículo 280 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Por Sentencia Interlocutoria N° 2539/2021, de 18 de noviembre de 2021, dictada por el Juzgado Letrado de Concursos de Primer Turno, en autos caratulados "CASA DE GALICIA. CONCURSO LEY N° 18.387", I.U.E. N° 2-48219/2021, se resolvió declarar el concurso voluntario de Casa de Galicia, suspender su legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, designar como Síndico a la Liga de Defensa Comercial (LIDECO), disponer el cese de la intervención administrativa del Ministerio de Salud Pública, y convocar a la Junta de Acreedores para el día 17 de mayo de 2022.

Por Sentencia Interlocutoria N° 2881/2021, de 23 de diciembre de 2021, el Juzgado Letrado de Concursos de Primer Turno, decretó el cese inmediato de actividades de Casa de Galicia, a excepción de los servicios brindados por los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE).

Con fecha 29 de enero de 2022, cesó la vigencia del certificado que emite el Banco de Previsión Social de situación regular de pagos con las contribuciones especiales de seguridad social, correspondiente a Casa de Galicia; quedando así impedida de realizar cualesquiera de los actos previstos en los artículos 663 y 664 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, no pudiendo por tanto percibir cobros del

Seguro Nacional de Salud, así como tampoco obtener créditos en instituciones públicas o privadas del sistema financiero.

Por Resolución N° 8/022, de 16 de febrero de 2022, la Junta Nacional de Salud resolvió declarar rescindido el Contrato de Gestión suscripto con Casa de Galicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N° 18.211 y la cláusula Cuarta del Anexo aprobado por Decreto N° 81/012, de 13 de marzo de 2012.

A consecuencia de un proceso concursal antes referido, a finales del año 2021 se produjo el cierre de la Sociedad Civil Casa de Galicia.

La Ley N° 20.022, de 14 de febrero de 2022 facultó al Poder Ejecutivo a determinar los prestadores integrales de salud a los cuales se derivarían los afiliados de Casa de Galicia, mientras que con relación a los trabajadores del dicha Institución, el artículo 4 de la referida Ley referida, se encomendó la realización de una base de datos en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los datos de los trabajadores que reunieran las condiciones necesarias para encontrarse en la historia nominal al 31 de diciembre de 2021 y registraran actividad con aportes a dicha fecha, a los efectos de que los prestadores de salud que recibieran a los afiliados también contrataran a los extrabajadores de Casa de Galicia.

Con el fin de concretar lo dispuesto en la Ley N° 20.022, se llevó adelante un proceso de negociación colectiva en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo que culminó con acuerdos entre trabajadores y empleadores.

El Decreto N° 141/022, de 4 de mayo de 2022 dispuso que la distribución de los trabajadores médicos se realizaría conforme a lo acordado por las partes en el ámbito de la negociación colectiva, en tanto, el Decreto N° 142/022, del 4 de mayo de 2022, dispuso que la distribución de los trabajadores no médicos se realizaría conforme a

lo acordado por las partes en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo.

A su vez, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por Resolución N° 43, de 5 de abril de 2022 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 20.022, estableció un régimen especial de subsidio de desempleo para los extrabajadores de Casa de Galicia.

De esta forma el Poder Ejecutivo tomó diversas medidas para atender la especial situación de cierre de actividades de Casa de Galicia garantizando la atención de salud de los usuarios, pero al mismo tiempo, atendiendo a los aspectos laborales de los extrabajadores de esta importante institución prestadora de salud.

El presente proyecto de Ley procura dar una respuesta concreta, justa y particular para este colectivo de extrabajadores respecto a los créditos laborales insatisfechos, que como consecuencia del cierre de la Institución, no pudieron ser saldados con el resultado del proceso concursal.

De acuerdo con los datos del Poder Ejecutivo existen 2.036 extrabajadores con créditos laborales post concúrsales contra la ex institución de asistencia médica colectiva Casa de Galicia.

En nuestro actual sistema de seguridad social la Ley N° 19.690, de 29 de octubre de 2018 de Garantía de Créditos Laborales da respuesta a la contingencia de insolvencia del empleador, pero garantizando sólo los créditos laborales pre concursales verificados en el ámbito del concurso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la referida Ley. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo considera necesario atender la especial situación de estos trabajadores creando un marco jurídico que permita atender la contingencia de falta de pago de todos los créditos laborales y la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 del 13 de

setiembre de 2009, que no hayan podido ser cubiertos con el producido del concurso.

El presente proyecto de ley, que presentamos a consideración tiene como finalidad instrumentar un mecanismo para que los extrabajadores de Casa de Galicia se reinserten laboralmente y puedan recibir las prestaciones que por derecho les corresponden.

Saludamos a la Señora Presidente con la mayor consideración y estima.

Montevideo, 4 de octubre de 2023.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Cométese al Ministerio de Salud Pública, en ejercicio de sus competencias legales, y de conformidad a los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 9.202 de fecha 12 de enero de 1934, la verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 20.022 y sus Decretos reglamentarios, así como la aplicación de las sanciones que puedan corresponder, incluyendo lo dispuesto en el art. 76 del TOCAF, a los prestadores de salud que incumplan con las disposiciones antes citadas.

Además de lo dispuesto en el inciso anterior, a las instituciones prestadoras de salud que incumplan lo dispuesto en la Ley número 20.022, sus decretos reglamentarios y por la presente Ley, les será descontado el 50% del valor de las cápitas recibidas por la distribución de socios dispuesta por la Ley número 20.022, por el tiempo que dure el incumplimiento.

Artículo 2º.- El Estado se obliga a pagar la totalidad de los los créditos laborales post concursales (sueldos o jornales, licencias, sumas para el mejor goce de la licencia anual, aguinaldo, e indemnización por despido legal, en cuanto correspondan y la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 del 13 de setiembre de 2009, generados por la ex Institución de Asistencia Médica Colectiva, Casa de Galicia, que no hayan podido ser cubiertos con el producido del concurso de dicha Institución a todos los trabajadores, médicos y no médicos dependientes, trabajadores independientes, trabajadores profesionales universitarios en ejercicio libre de su profesión y

técnicos especialistas en ejercicio libre de su profesión. Dichos créditos deberán ser satisfechos en un plazo máximo de 18 meses, a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 3º.- A efectos de dar una respuesta para aquellos ex trabajadores de Casa de Galicia que aún no han sido reinsertados laboralmente por las instituciones prestadoras de Salud obligadas a ello, por la Ley Nº 20.022, deberán ser contratados por ASSE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 in fine, de dicha ley, que la hace un prestador elegible y permanecerán trabajando allí hasta que ingresen a las empresas prestadoras de salud antes aludidas. La referida contratación deberá respetar, categoría laboral, carga horaria, condiciones laborales en general y remuneración, de dicho personal. Dichas contrataciones deberán ser concretadas en un plazo máximo de 60 días, a partir de la promulgación de la presente ley.

Las Instituciones prestadoras de salud que hayan absorbido ex funcionarios en el marco del Artículo 4 de la Ley número 20.022, deberán mantener a los mismos por un plazo un mínimo de 2 años a partir de su ingreso, respetando la categoría laboral, carga horaria, condiciones laborales en general y remuneración que tenían en Casa de Galicia.

Montevideo, 4 de octubre de 2023.

Sergio Botana. Senador

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión extraordinaria del 4 de octubre no se registraron inasistencias.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de octubre de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por el día de la fecha, a partir de las 13:30.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 17. **Afirmativa.**

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otheguy y Lucía Etcheverry han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

7) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2022

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día para continuar considerando el único punto: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2022. (Carp. n.º 1062/2023 - rep. n.º 766/2023 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII y LXIII».

(Antecedentes).

(Ver 36.ª SE).

–Continúa la discusión particular.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑORA BLÁS.- Formulo moción en el sentido de que el Cuerpo pase a cuarto intermedio hasta las 11:30.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–15 en 17. **Afirmativa.**

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 11:30.

(Así se hace. Son las 10:19).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:41).

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de octubre de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 9 hasta el 19 de octubre, inclusive, del corriente año.

Guido Manini Ríos. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 14. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Rivera Elgue y Gonzalo Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Marcos Methol, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Formulo moción en el sentido de que el Cuerpo pase a cuarto intermedio por treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–15 en 15. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 11:42).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 12:28).

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio hasta las 14:00.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–14 en 14. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 14:00.

(Así se hace. Son las 12:30).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 14:09).

–Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de octubre de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 9 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 15. **Afirmativa.**

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otheguy y Lucía Etcheverry han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de octubre de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por los días 10 a 12 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otheguy y Lucía Etcheverry han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

9) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2022

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión particular del articulado de la rendición de cuentas.

Retomamos el análisis de la sección IV, «Incisos de la Administración Central».

En consideración el inciso 36, «Ministerio de Ambiente».

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Vamos a solicitar que se voten en bloque los artículos 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 y 423.

El artículo 422 tiene un sustitutivo.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 y 423.

(Se vota).

–18 en 18. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Vamos a hacer un breve comentario sobre este inciso, antes de votar los artículos que corresponda, en nuestro caso, por la negativa.

Tal como quedó registrado en la versión taquigráfica, este inciso ha merecido la votación general del Frente Amplio. Se trata de un ministerio que es nuevo –aunque no es nueva la temática– y que está cursando sus primeros años de vida en cuanto a su funcionamiento autónomo.

Queremos referirnos a un asunto en particular, que mencionamos en la comisión, a esta altura, creo que en más de una oportunidad. El Ministerio de Ambiente tiene una relación directa con OSE y, en materia de saneamiento, en la página web de Presidencia de la República, el 1.º de julio de 2021, se expresaba: «El proyecto para universalizar el saneamiento fue aprobado este miércoles 30 de junio por el Directorio de OSE. Mediante acciones que insumirán 1.000 millones de dólares, permitirá la extensión de este derecho en 124 localidades del país, garantizará el acceso al servicio a más de 650.000 uruguayos y generará 12.000 puestos de trabajo […]. Las localidades en las que se intervendrá son las 124, con más de 2000 habitantes. Se estima que las familias u hogares beneficiados con el servicio de alcantarillado serán 250.000 y que el total de personas cuyos servicios serán mejorados totalizará 650.000».

Este anuncio fue más allá del documento *Compromiso por el país* exhibido en cuanto a metas que se propusieron y que no se cumplieron. En este caso, esta afirmación, que estaba en la web oficial de Presidencia de la República, luego fue modificada y ese anuncio de USD 1.000:000.000 a los pocos meses terminó siendo –si mi memoria no me falla– de unos USD 327:000.000.

En la rendición de cuentas siguiente preguntamos al ministro de la época, el ahora colega senador Peña, y se nos transmitió en ese momento que la cifra oficial ya no era la que se había dicho de USD 1.000:000.000 ni de USD 327:000.000, sino que pasaba a ser de menos de USD 300:000.000. Preguntamos, además –esa sesión fue el 15 de octubre del año pasado–, cuántas localidades eran. De las 124 comprometidas en este Gobierno habían pasado a 60, y cuando preguntamos cuáles eran las 60, nos dijeron que estaban en una lista reservada.

Un año después, y a un año y poco de terminar este gobierno, volvimos a preguntar lo mismo y se nos confirmó que serían unas 60 localidades y que la inversión estaría en el entorno de los USD 250:000.000. Les recuerdo que la cifra original prometida era de USD 1.000:000.000. Cuando preguntamos en qué estaba, cuál era el estado de situación hoy –mejor dicho, hace un mes– entre el anuncio de los USD 1.000:000.000, el de los USD 327:000.000 y el de los USD 250:000.000, la respuesta fue que se es-

taba diseñando la herramienta financiera para aplicar en cada localidad. La conclusión es una sola: de todo lo que se anunció, al día de hoy no se hizo absolutamente nada. No hay un metro de saneamiento resuelto en todo el Uruguay desde que anunciaron los USD 1.000:000.000, los USD 327:000.000 y los USD 250:000.000. Hoy se está en el diseño de la herramienta financiera; no hay licitación, no hay nada en curso, absolutamente nada. Y lo claro, por los plazos que se manejan en estas cosas, es que entre lo que se prometió y lo que se va a hacer, hay una distancia sideral. Lo más probable, lamentablemente para las posibles expectativas de las 60 localidades en las que finalmente se haría el saneamiento, es que ninguna de ellas –o prácticamente ninguna– va a tener desarrollada su obra.

Creo que a veces se es muy generoso a la hora de prometer, no solo en la campaña electoral, sino en este caso en el propio Gobierno. Al día de hoy, insisto: en el tema del saneamiento, que depende de OSE –y se podrá decir que pasó todo el lío de la crisis hídrica, etcétera, pero esto iba por otro lado y venía de antes–, no hay absolutamente nada resuelto. Todos los compromisos quedaron en discursos, en palabras, en promesas, y la realidad es que no se va a avanzar absolutamente nada en uno de los elementos más importantes de los cuales carece, particularmente, el interior del país porque Montevideo, desde los años noventa, con distintos niveles de acuerdo con el Gobierno nacional y con esfuerzos propios, ha logrado una cobertura casi universal del saneamiento. El déficit estaba en el interior. La expectativa que teníamos era que se avanzara, pero la realidad es que habrá cero avances.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quizás un tema central al que nos podemos abocar, además del saneamiento, es el relativo a cómo se llevó adelante Arazatí y se dejó de lado Casupá. Nos vamos a abocar, específicamente, al artículo 424 y a las contrataciones que, evidentemente, no vamos a acompañar.

Tenemos información de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente en la que se detalla que hay 234 trabajadores contratados bajo fondos de inversión o donaciones; que ninguna contratación es financiada bajo gastos de funcionamiento, y que se hizo un pedido de acceso a la información pública en el marco de la Ley n.º 18831, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, con fecha 7 de julio de 2021. Surge de la respuesta que las contrataciones realizadas para el Ministerio de Ambiente ascendían a 35 –por ese mecanismo de la corporación–, de las cuales 27 fueron por contratación directa.

Al 29 de junio de este año existían en total 234 contratos, de los cuales dos no son para cumplir funciones en el inciso, sino en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, situación que a la fecha no se ha solucionado. Por lo tanto, existe un total de 232 contratos que trabajan en el Ministerio de Ambiente.

Queremos centrarnos en el artículo 424 –disposición que fue rechazada por la asociación de trabajadores– cuando dice: «Facúltase al Poder Ejecutivo a designar en el Inciso 36 “Ministerio de Ambiente”, en cargos presupuestados del grado de ingreso al escalafón respectivo, a quienes se encuentren desempeñando tareas permanentes de carácter sustantivo, propias de un funcionario público, en régimen de dependencia, al 31 de diciembre de 2021, que cuenten con informe de desempeño favorable y que hubieran sido contratados a través de organismos nacionales o internacionales de cooperación siempre que se encuentren financiados con fondos presupuestales».

En ese artículo también se establece que las designaciones deberán realizarse bajo el régimen de provisoriato. Evidentemente, no menciona otros sistemas de ingreso.

Nos parece que este plenario no debería avalar este artículo. Recientemente ha quedado expuesto que no deben hacerse contrataciones directas, que no está bien que en el Estado se funcione de esta forma –lo que ha provocado los movimientos que todos sabemos y la interpelación que se dio–, y por eso creemos que no es bueno que se avale este artículo en el día de hoy, señora presidenta.

Gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Más allá de las consideraciones que ya hizo el señor senador Mahía con respecto a los destinos de este presupuesto, queremos hacer algunas consideraciones generales.

En 2020 se creó el Ministerio de Ambiente y la bancada del Frente Amplio fue parte en su creación, ya que la apoyó con su voto. Si vamos al fondo de la cuestión, su finalidad estaba centrada en dar prioridad a las políticas ambientales y coordinar acciones con OSE para fijar la política de agua potable. Sin embargo, desde esta bancada entendemos que siguen encontrándose algunas inconsistencias entre la jerarquía pretendida para la política ambiental y la que en los hechos ha tenido efectivamente el Ministerio de Ambiente y su derrame al bien común. En su momento se lo hemos expresado al propio ministro. Algunas de esas inconsistencias ya las mencionó el señor senador Mahía –no voy a reiterarlas– en cuanto a lo asignado en esta rendición. Entendemos que, en los hechos, en 2022 no hubo un apoyo significativo en recursos económi-

cos en lo que respecta a las principales competencias del nuevo Ministerio de Ambiente.

Consideramos que este pedido de asignación de créditos que se hace al 2024 –y así está en el detalle– está destinado a una campaña de educación en el uso responsable del agua, a contratar seguros del Banco de Seguros del Estado, a la implantación de un programa nacional para dinamizar el uso responsable de agua en la industria y actividades económicas, a la implantación de un sistema de control satelital de incendios forestales, incendios en vertederos y operaciones de extracción de minerales, a la gestión de recursos hídricos, a estaciones telemáticas destinadas al monitoreo de recursos hídricos y al Centro Experimental Regional de Tecnologías de Saneamiento, entre otros.

Por tanto, si consideramos un horizonte de dos años, el presupuesto solicitado totalizaría, redondeando la cifra, unos $ 89:000.000.

Respecto al presupuesto solicitado para OSE y, en particular, al denominado proyecto Arazatí –lo hemos dicho en forma permanente–, hubo errores en la presentación original que luego se rectificaron. Sin embargo, el dato presentado de USD 250:000.000 para 2023-2024 no corresponde a una inversión de OSE, sino que en definitiva estaría destinado a la inversión del privado y del gasto que OSE tendrá que hacer por más de diecisiete años –por lo menos, diecisiete años y medio–; el monto será bastante mayor al que se explicaba.

En la exposición de motivos no se menciona retomar el Proyecto Casupá y no vamos a profundizar en ese tema. La conclusión que sacamos es que van a transcurrir cinco años sin haberse ejecutado obras permanentes, dado que el Proyecto Arazatí se estima que estará operativo, en el mejor de los casos, en 2025.

Además del Proyecto Arazatí se deja planteado otro de iniciativa privada, el Plan de Universalización de Saneamiento para 60 localidades de más de 2000 habitantes en el interior del país. Obviamente que no nos negamos a esto, pero estamos dando una visión más general de esta asignación de recursos. Si sumamos estas dos iniciativas, que también tienen un ámbito de competencia privada, se va a dejar a OSE en condiciones –queremos dejar expresa nuestra preocupación desde el punto de vista financiero– que, entendemos, en el futuro la llevarán a una situación crítica.

También queremos dejar expresa constancia de algunas inconsistencias que consideramos que se dan, como decíamos al comienzo, entre esa jerarquía pretendida para la política ambiental –de la que hemos sido parte– y la que en los hechos ha tenido el Ministerio de Ambiente. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que durante el 2022 hubo un claro retroceso en normativas relativas a agroquímicos y a la caza. La propia Comisión de Ambiente ha recibido a delegaciones de organizaciones civiles que trabajan en el tema y también a la academia, porque tanto nosotros como estas organizaciones entendemos que se aumentaron los riesgos de la seguridad de las personas y el ambiente.

Para el caso de los agroquímicos hubo una rápida autorización de productos fitosanitarios que estaban prohibidos. Luego de que el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente constataron las faltas por el uso indebido, estuvieron dispuestos a aplicar sanciones. En las últimas horas se ha efectivizado, pero hubo algunas inconsistencias en lo que tiene que ver con agroquímicos y con caza.

También debemos decir que en el 2021 el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca firmaron un acuerdo para un desarrollo productivo sostenible. Justamente, uno de los puntos era la mejora del registro de productos fitosanitarios y entendemos que no se relaciona con lo que estábamos diciendo anteriormente.

Era todo lo que teníamos para decir, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Pido que pasemos al artículo 422.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 422.

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

(Dialogados).

SEÑOR PEÑA.- Señora presidenta: simplemente quería dejar alguna constancia –en su orden– sobre algunas afirmaciones que los senadores preopinantes han realizado.

OSE ha desarrollado y ha llevado adelante todas las inversiones que tenía previstas en materia de saneamiento para el presente período. El Plan de Universalización de Saneamiento es adicional a lo que OSE ya tiene planificado. Es un error y es falso decir que no se ha avanzado en saneamiento en el país, en todos los años de la actual gestión. Hay obras en San Gregorio de Polanco, en Paysandú y se viene desarrollando una inversión del orden de los USD 37:000.000 anuales en saneamiento en todo el país.

Nosotros vimos que, al ritmo que se venía invirtiendo en el Uruguay en materia de saneamiento, llegar a una cobertura del entorno del 90 % nos iba a llevar algo así como sesenta años y por eso generamos una herramienta para acelerar la inversión en saneamiento en el interior del país. Montevideo tiene una cobertura de saneamiento importante, de más del 90 %, pero la realidad es que para llegar al interior del país con esa cobertura se necesita un *shock* de inversión. Al ritmo que lo venía haciendo OSE desde Administraciones anteriores, no llegábamos en menos de cincuenta años a una cobertura del entorno del 90 %. Por eso generamos una herramienta, que es esta inversión de USD 1.000:000.000, que se divide en tres etapas. La primera etapa está avanzando, ya tenemos los proyectos ejecutivos para 61 localidades del país y en este momento se está avanzando en la estructura de financiamiento. En aproximadamente dos meses haremos el respectivo llamado y la adjudicación de la obra, que comenzará en la actual Administración y que asegurará llegar con saneamiento a esas 61 localidades. Eso significa avanzar de una cobertura actual del entorno del 50 % en el interior del país a una cercana al 70 % y, además, supone llegar a casi 500.000 personas más con saneamiento y a 70.000 hogares más.

Por lo tanto, no solo se viene realizando la inversión que OSE tenía planificada, sino que también se apuesta a este nuevo salto, a esta nueva inversión. Esto es muy importante, porque no debemos olvidar que cuando asume el actual Gobierno, también asume OSE con un déficit, una deuda, nada más y nada menos, de USD 400:000.000. Hoy el endeudamiento de OSE ha sido abatido de manera importante.

Con un déficit fiscal del país de cinco puntos y con OSE endeudada en USD 400:000.000, se logra avanzar en todas estas soluciones virtuosas a pesar de ese contexto tan negativo.

Entiendo que hay alguna confusión. Al momento de crearse el Ministerio de Ambiente, el Gobierno anterior destinaba a la materia ambiental en torno de $ 400:000.000 anuales. En el primer año, para el ejercicio 2021, el presupuesto aumentó en $ 170:000.000, quedando en $ 570:000.000. Luego, en 2022, el presupuesto del ministerio llegó a $ 770:000.000. En la actualidad, como bien decía la senadora Lazo, estamos cerca de los $ 900:000.000. Es decir que de $ 420:000.000 se pasó a $ 900:000.000. Es poco para la materia ambiental y para el Ministerio de Ambiente, pero es casi el doble de lo que destinaba el Frente Amplio a la materia ambiental; esa es la realidad. Entonces, hoy mal se puede decir que el Gobierno no ha priorizado estos temas, en la medida en que destinamos prácticamente el doble de los recursos.

Por otra parte, como es sabido, el ministerio tiene nueva sede, que supone erogación y comprometer parte de estos recursos. Esto tiene que ver fundamentalmente con la calidad de trabajo de las personas. Llegamos a un ministerio en el que el 60 % de las personas trabajaba en la entonces Dinama –Dirección Nacional de Medio Ambiente–, en un edificio con peligro de derrumbe, denunciado por esa circunstancia, con humedades, con problemas de electricidad, donde los trabajadores estaban hacinados. ¡Así trabajaban los funcionarios del Ministerio de Ambiente! Hoy están en una nueva sede, en un nuevo lugar, frente a Plaza Independencia. Me gustaría que conozcan el lugar y que vean las condiciones en las que actualmente trabajan los funcionarios del Ministerio de Ambiente, que están comprometidos con la tarea y que han salvado la gestión de la cartera, sobre todo en los tiempos de pandemia. Este ministerio funciona gracias al compromiso de su gente, pero lo cierto es que trabajaban de manera ¡indigna! en la Administración anterior y hoy logramos dignificar su trabajo en un lugar razonable, para que puedan desarrollar sus tareas. Cuando fui ministro usaba el vehículo más nuevo del ministerio, que era del 2014; tengo fotos, si esta discusión se intensifica, que muestran los vehículos que estaban tapados por los yuyos y las malezas. Los recuperamos y en diciembre de 2022 renovamos el cien por ciento de la flota del Ministerio de Ambiente. Tiene unos meses la flota actual, pero el vehículo más nuevo que nos habían dejado era del año 2014. Así se preocupaban por la materia ambiental y hoy nos vienen a señalar.

Por otro lado, nos parece importante mencionar algo. En todo este debate vinculado al agua este es el primer Gobierno que decide, efectivamente, encarar un proyecto para solucionar el problema del abastecimiento del agua potable en Montevideo. Desde el 2009 surgen los estudios sobre Casupá, pero el Frente Amplio no lo hizo. Cuando llegamos nos encontramos con que el proceso para que, efectivamente, se utilizara la presa de Casupá, que es necesaria, estaba en etapas preliminares. ¿Por qué? Porque no se hizo en quince años. ¿Eso quiere decir que no se hicieron otras cosas y que OSE no invirtió? No, pero en ese punto, en ese problema no se había hecho. Recién se atiende cuando llega este Gobierno, y si usted recuerda, señora presidenta, asumimos en Aguas Corrientes para decir al país que teníamos un problema de abastecimiento de agua potable y que debíamos encontrar una solución. Fue para dar una señal sobre la importancia que eso tenía. Sin embargo, hasta que no faltó agua en Montevideo, casi nadie se enteró. Esa es la realidad, pero la situación se dio. Evidentemente, en aquel momento habíamos hecho bien en priorizar el problema del agua potable y en encarar una solución.

A mí me tocó asumir el 27 de agosto de 2020 y el 30 de agosto de 2020, reunido con el presidente de la república y los directores de OSE, estábamos definiendo qué hacer en materia de agua potable y cómo actuar. Por eso en este Gobierno hay un proyecto ya licitado, un proyecto ya adjudicado y se comienza a caminar hacia esa solución, cosa que no se hizo antes.

Asimismo, hubo un error que tiene que ver con los agroquímicos. Fue el Ministerio de Ambiente el que advirtió que se estaban utilizando agroquímicos no auto-

rizados, y fue ese mismo ministerio el que sancionó por ese uso. El registro y la autorización exprés, como aquí se dijo, no fue del Ministerio de Ambiente, sino de los registros correspondientes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la Dirección General de Servicios Agrícolas, que es donde ellos deben registrar y donde el Ministerio de Ambiente advirtió que esos productos no estaban registrados. Gracias a la acción del Ministerio de Ambiente se realizó la gestión. Si fue más rápida o más lenta dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no es responsabilidad del Ministerio de Ambiente. Eso habla de una acción clara y rápida del Ministerio de Ambiente que hizo actuar al otro ministerio en cuestión.

Por otra parte, tenemos lo vinculado con el desarrollo sostenible que es muy importante y les cuento una anécdota. Cuando me tocó salir por primera vez del país –ayer se lo comentaba al senador Cardoso– me encontré con el CEO del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y le mostré lo que estábamos haciendo en materia de desarrollo sostenible para integrar las políticas productivas a las políticas ambientales y lo que veníamos trabajando para poder emitir un bono sostenible, como finalmente pasó en el 2022. También le comenté lo que veníamos haciendo con una herramienta única en el mundo, la huella ambiental de la ganadería, que mide sus efectos en el ambiente, y él me preguntó: «¿Y usted cómo hizo esto?». Le comenté: «¿Cómo hice esto?». Entonces, me dijo: «Claro, ¿cómo logró todas estas cosas con su ministro de ganadería en tan poco tiempo?». Entonces, le contesté que trabajamos, que se entendía que eso iba por ahí, y me respondió: «Su antecesora, cada vez que venía, lo único que hacía era quejarse de su ministro de ganadería porque no lograba nada, porque en ganadería, que era el que mandaba, no le dejaban hacer nada de la política ambiental». Esa era la integración de la política ambiental y la productiva durante la Administración anterior. La imagen que tenían en el mundo sobre lo que pasaba en Uruguay era que el ministerio de la producción no le dejaba hacer nada a la ministra de Ambiente. Eso cambió y les puedo asegurar que es una buena noticia.

Como este Parlamento votó por unanimidad la creación del Ministerio de Ambiente y hoy nos rinde cuentas, señalo que pueden estar tranquilos porque el objetivo de su creación y la integración real –real no para la tribuna y para gritar– de las políticas ambientales con las políticas públicas del país se están llevando adelante ahora y de eso no se vuelve.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Brevemente quiero decir que lo que hice fue dar lectura a la página oficial de Presidencia, donde se anunciaban los USD 1.000:000.000, las 124 localidades y los 12.000 puestos de trabajo, pero nada de eso va a estar.

Segundo, si en el Uruguay no hubiese llovido como llovió, hoy estaríamos en una situación extremadamente complicada. Como este no es un tema para tratar en la rendición, no lo vamos a desarrollar ni es nuestro trabajo. Lo cierto es que Casupá no está, Arazatí tampoco, y si no hubiese llovido, el país era una calamidad; eso fue lo que nos salvó, no otra cosa.

Tercero, se habló recién de *shock*. En el artículo 424 hay un *minishock* y, a diferencia del que votamos todos juntos que hablaba de «procedimiento concursal», acá hay designaciones directas. Por lo tanto, puede ser gente muy capaz, muy comprometida –yo no tengo ninguna duda con respecto a ello–, pero hay un cambio sustancial de criterio en este artículo que no tiene ni punto de comparación y, por lo tanto, este artículo es lo que es: una iniciativa que propone una designación directa de este personal.

Gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Nos referíamos a lo que entendemos es un desfase entre lo que se plantea en la creación del ministerio y las acciones directas, porque observamos un mayor énfasis en políticas vinculadas a las oportunidades que ofrece el ambiente en las finanzas sostenibles y en los mercados, como el bono indexado indicador sobre huella ambiental en ganadería, a que refirió el señor senador preopinante, y no tanto a las políticas vinculadas con el bien común y la conservación del capital natural del país. Para ello basta con leer la página 5 de la exposición de motivos del ejercicio 2022.

Cuando nos referíamos a los montos, si quitamos el monto que fue directamente transferido a algunos Gobiernos departamentales para poder cumplir con el Plan Nacional de Gestión de Residuos, vemos que el monto que queda representa, en realidad, en valores corregidos al 2022, algo similar a los montos recibidos en 2020 y 2019 de la Dinagua, sumada la Dinama.

Muchas gracias.

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Quiero plantear dos cuestiones.

Lo de los números no es acertado porque no incluyen toda la partida del rubro 0 que el ministerio recibió. Hasta el 2022 eran partidas que las abonaba el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, porque nuestra separación efectiva de esa cartera, el decreto de transferencia, tal como se llama, se da recién en abril de 2022. Entonces allí hay una confusión efectiva con los números.

La señora senadora me hizo acordar de un hecho histórico que había olvidado y es que el Gobierno nacional por primera vez apoyó a los Gobiernos departamentales para cerrar los vertederos a cielo abierto en todo el país. Hubo muchas promesas y carismáticos presidentes anunciaron soluciones y apoyos al interior del país para ese problema, pero recién ahora hubo una partida de USD 17:000.000 que llegó en diciembre del 2022, y ya van doce convenios firmados con las intendencias del interior del país para el cierre de vertederos que aportará USD 500.000 en un proyecto en Montevideo que, en una media de USD 700.000, va a intendencias del interior y que pondrá USD 1:200.000 para cerrar el vertedero del departamento de Canelones. Es la primera vez que un Gobierno nacional apoya a los Gobiernos departamentales para encarar esa problemática. Lo había olvidado, pero, por suerte, la senadora me lo recordó.

Hay una cuestión muy importante y es conceptual. Cuando uno dice que Uruguay ha emitido un bono de deuda atado a indicadores climáticos, no es una cuestión simplemente de finanzas, de enfocar en el mercado financiero lo ambiental. Si hay que lograr objetivos climáticos ambientales se deben desarrollar políticas para poder alcanzarlos y esas políticas son las que, precisamente, contribuyen a preservar el ambiente.

Cuando nosotros propusimos esta línea de acción no era para que el Uruguay ganara un pesito más o un pesito menos con una eventual tasa, sino para efectivamente poder integrar las decisiones estructurales del país a la preservación y al desarrollo sostenible.

Entonces, ¿cómo se logra esto? Porque son políticas en tres niveles. Si el Uruguay logra cumplir sus objetivos es porque en las políticas integradas nacionales ha llegado a ejecutar acciones que consiguen los resultados climáticos y allí está la integración de las acciones entre los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, y de Economía y Finanzas.

A su vez eso –y termino, señora presidenta– lleva a los actores de abajo –los productores, los industriales– a verse obligados a tomar determinado tipo de decisiones y acciones.

Por tanto, ahora tiene el Ministerio de Ambiente un socio implacable, el Ministerio de Economía y Finanzas, para lograr las acciones en materia de sostenibilidad y eso es un avance cualitativo inconmensurable en materia de políticas ambientales.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Ahora consideraríamos el artículo 422, que tiene un sustitutivo en la hoja 10 C.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Los artículos 414, 424, 425 y 426 no pueden votarse en bloque?

SEÑOR BLÁS.- Después…

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Y ahora, ya que estamos?

SEÑOR BLÁS.- Es que pueden generar discusión.

(Dialogados).

–Como se desee, señora presidenta, pero normalmente primero terminamos de votar los que están señalados en color verde.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, consideraríamos el artículo 422, que tiene un sustitutivo.

SEÑOR BLÁS.- Exacto.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 422 tal como viene de comisión.

(Dialogados).

–Vamos a ponernos un poquito a rueda.

El artículo 422, que está señalado en color verde, tiene un sustitutivo de la coalición de gobierno. Entonces, vamos a someterlo a votación tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–12 en 28. **Negativa.**

En consideración el sustitutivo de la hoja 10 C.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 414, 424, 425 y 426.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 28. **Afirmativa.**

Ingresamos a la sección V, «Organismos del artículo 220 de la Constitución de la república».

En consideración el inciso 16, «Poder Judicial».

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Solicitamos que se voten en bloque los artículos 427 al 437 y el 439.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Desde el Frente Amplio queremos hacer algunas consideraciones.

Nosotros estamos muy preocupados con todo el sistema de justicia, pero, en particular, tratando el inciso 16, «Poder Judicial», porque vemos que no hay un correctivo o un apoyo a lo que son las reivindicaciones del sistema de justicia y ese es un desafío enorme.

En estos días la sociedad uruguaya en su conjunto está hablando de la problemática que se ha constatado acerca de los temas relacionados con la falsificación de certificados para el otorgamiento de prisiones domiciliarias a narcotraficantes pesados. Eso nos tiene que hacer pensar o reflexionar que los temas de justicia tenemos que tratarlos en serio, como una política de Estado; tenemos que discutir al respecto porque eso nos está demostrando que algún grado de permeabilidad existió. No le quiero atribuir nada a las juezas, pero para que ese sistema de falsificación funcionara tenía que existir algún contacto dentro de algún organismo, tanto del sistema de justicia, del ITF, como en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Por eso hay que investigar en serio y esperemos que se profundice.

Consideramos que el sistema de justicia requiere recursos que son indispensables para su funcionamiento. De alguna manera hay que prepararse para esos embates futuros que se vienen porque, si uno mira lo que está pasando alrededor, están sucediendo situaciones muy complejas y todo tarda, pero finalmente llega a nuestro país. Entonces, en ese sentido, creemos que algunas de las solicitudes del Poder Judicial tenían una explicación, un fundamento.

También somos críticos en el sentido de que creemos que el Poder Judicial se tiene que mirar hacia dentro. Vemos con buenos ojos que se cree un tribunal de apelaciones de familia, pero preguntamos si no sería hora de suprimir algún tribunal de apelaciones en lo civil, que son siete, y crear alguno más en familia. Yo llamo a reflexionar en ese sentido porque en los temas que nos duelen más como sociedad, los de familia y de niñez, es donde más carencias tenemos. A su vez, nos encontramos con que el conflicto, el litigio, es más fácil de resolver en los temas civiles. Siempre pongo el ejemplo de cobrar un cheque, que es un juicio corto en el que se presenta una demanda y el juez decreta la ejecución. Allí están los mejores jueces. Tribunales de apelaciones en lo civil hay siete.

Estas consideraciones que hacemos como Frente Amplio apuntan a que tenemos que reflexionar hacia el futuro; tenemos que reflexionar al respecto y el sistema político debe ayudar a que se debatan estos temas porque es necesario exigir que, en su tratamiento, exista una mejor justicia, y las carencias las vemos.

En ese sentido, algunos de los aditivos que presentamos –y quiero englobarlo– apuntan, por ejemplo, a reforzar todo lo que tiene que ver con los defensores. En el 2021, la defensoría pública atendió a 306.000 personas; 236.000 audiencias. En todo el país tenemos 293 defensores públicos. Por lo tanto, se requieren –y este fue uno de los pedidos del Poder Judicial– 68 cargos de defensores públicos en el interior y 57 en la capital. Ese era uno de los pedidos que se había realizado. ¿Y quién atiende la mayor parte de las audiencias penales en el Uruguay? Los grandes penalistas que deben atender el 93 % de las audiencias penales son los defensores públicos, que se ocupan de los más débiles.

La senadora Bianchi señaló que en la Comisión de Constitución y Legislación tenemos que tratar dos proyectos que tenemos allí. Uno es el de la defensoría pública como un servicio centralizado, donde están todos de acuerdo. Ese es un proyecto que presentó el Frente Amplio. El otro proyecto es el del ITF –Instituto Técnico Forense– como un servicio descentralizado. Espero que nos pongamos a trabajar, porque hasta las autoridades están de acuerdo. El Poder Judicial requiere recursos para, por ejemplo, crear juzgados de género. Tenemos que cumplir con esa ley. Lamentablemente, no se está cumpliendo con la ley, no se dieron esos recursos.

Hay otro tema, cuya solución podríamos decir que es de voluntad política y es una lástima que no lo hagamos. En tal sentido, llamamos a la reflexión al presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda porque estamos hablando de algo que no tiene costo; se trata de habilitar la licencia, tal como es para el régimen general, a las juezas, a las defensoras. En el régimen general, todas las funcionarias públicas tienen veintiséis semanas de licencia para amamantar y en el Poder Judicial, trece semanas; creo que esto tiene que ver con un tema de

organización del trabajo. La Asociación de Magistrados del Uruguay nos está solicitando esto desde hace muchos años; por lo que recuerdo, lo han hecho durante la ley de presupuesto, en la de rendición de cuentas, etcétera. Creo que tendríamos que otorgar esta licencia que, en definitiva, es reconocer un derecho de las funcionarias y es algo que no tiene costo. Debemos definirlo en el inciso 16, a los efectos de que se respete su derecho, por lo menos, cuando estas mujeres tengan que amamantar. Creemos adecuado que este sea el régimen general que se aplique en el sistema del Poder Judicial.

En realidad, son muchas las solicitudes del Poder Judicial y lamentablemente no se ha cumplido con sus demandas, a pesar de que son temas serios. Llamo a esta reflexión y a dar este debate general.

Queríamos dejar constancia de estas consideraciones en la versión taquigráfica. En tal sentido, presentamos algunos aditivos que van en esta línea de reconocer los derechos y los problemas que hay, porque es necesario mejorar la defensoría pública. No puede ser que estos 293 defensores públicos atiendan a 306.000 personas y 236.000 audiencias en un año. Realmente, no se está cumpliendo con esa demanda, que es fundamental. El acceso a la justicia es fundamental y a ese respecto hay un debe; por eso hemos presentado una gran cantidad de aditivos que fueron fundamentados en nombre del Frente Amplio y que en su momento votaremos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: parecería que soy el causante de que las juezas no tengan licencia especial. ¡El presidente de la comisión dirige una comisión! De todas maneras, creo que el planteo es muy justo, tanto como viejo. Lo cierto es que las angustias nuevas me llaman la atención; este es un hecho que sucede desde siempre y ahora parece ser una necesidad urgente.

Asimismo, cabe aclarar que sí tiene un costo. Todos sabemos que por más que es algo necesario y justo, en realidad no se hace porque hay localidades que quedarían sin justicia, ya que no hay forma de suplir a la jueza. En consecuencia, ¡tiene un costo!

Si no se establece un sistema de cómo suplir a la jueza en el momento en que goza de su justa licencia, no podemos determinarlo. Ahí está la razón.

Igual, me emociona comprobar cómo las cosas que antes no importaban, desde hace tres años a esta parte han pasado a ser un tema de mala voluntad de tal o cual partido político. Está muy bien que sentimientos que no existían nazcan de repente.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Voy a coincidir con una propuesta del señor senador Carrera. Ya el año pasado coincidí cuando me vinieron a visitar los magistrados para promover la creación del Tribunal de Apelaciones de Familia. Reitero que fue el año pasado y a todos les consta que, como integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, impulsé su creación. En ese momento, se priorizó la creación de 18 cargos de defensores públicos y, tal como se decía ayer –creo que por parte del señor senador Peña–, gobernar es priorizar. En ese momento, se priorizó.

Estoy de acuerdo con que sería oportuno transformar un tribunal de apelación civil –de los siete que hay– en un cuarto tribunal de apelaciones de familia. En esta rendición de cuentas se crea el Tribunal de Apelaciones de Familia. Se hablaba de tratar en serio los temas de la administración de justicia como política de Estado, pero para ello hay que dotar de recursos y en esta rendición de cuentas, en el mensaje del Poder Ejecutivo, vienen 22:600.000; de la Cámara de Representantes, 54:000.000; y del Senado, 15:000.000. Por ello, en la comparecencia del Poder Judicial se dice que, sin lugar a dudas, ha habido una mejora del proyecto de ley que fue remitido por el Poder Ejecutivo. Destacan el aumento de los recursos y hacen referencia a que esta Administración también se ha hecho cargo del diferendo del 26,03 %, aquel arrastre por una supuesta equivocación en esos convenios que se suscribieron. Consultado el Poder Judicial acerca de lo priorizable, se optó –con su connivencia– por priorizar el expediente electrónico y por ello dotó ese rubro con 15:000.000.

La delegación del Poder Judicial decía –está en la versión taquigráfica–: «Vemos que desde el 2010 se ha registrado un franco descenso en la participación del porcentaje asignado al Poder Judicial en el marco de todo el presupuesto nacional. […] hemos vivido períodos de congelación absoluta del presupuesto…».

De esto también dan cuenta algunas notas de prensa. Por ejemplo, en el 2015, *El País* señalaba: «Del 26 % de aumento salarial que reclaman los funcionarios judiciales desde abril de 2011 no hay ni rastros en el proyecto de presupuesto…». Otra noticia, titulada «El No del 80 y el de 2015», y señala: «Esta semana la Justicia recibió un duro golpe. La mayoría legislativa del Frente Amplio le negó el presupuesto al Poder Judicial, es decir, mantiene el viejo, sin los incrementos indispensables».

Luego de la aprobación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género –en la que se previó la creación de los juzgados, pero no se los dotó de los recursos necesarios–, la nueva presidenta de la SCJ decía: «presupuesto actual impide creación de juzgados para violencia de género».

Esta Administración empezó a trabajar en ello. ¿Todavía falta? ¡Falta muchísimo! Que el Poder Judicial requiere, con justicia –valga la redundancia–, la votación de mucho más presupuesto, ¡nadie lo discute! Es un camino que se va transitando y se van saldando cuentas viejas, pero hay un rezago que viene de hace mucho, como dicen los propios protagonistas.

Con respecto a los defensores públicos, cabe destacar que en la pasada rendición de cuentas se crearon 18 cargos y en esta rendición vino una readecuación presupuestal porque no habían venido incluidos en el Mensaje del Poder Judicial, sino que fueron una iniciativa de la Cámara de Senadores. En esa oportunidad tuvimos en cuenta la liquidación que ellos mismos habían realizado, pero adolecía de un error, por lo que en esta rendición se sanea esa falta de recursos.

En lo que tiene que ver con la licencia maternal, quiero hacer una aclaración. No es que no exista licencia maternal a nivel del Poder Judicial para las magistradas; la hay, pero se pide su extensión. ¿Es justo? ¡Absolutamente justo! Sucede que en este momento, y también por conversaciones con la jerarquía del Poder Judicial, había que priorizar algo y se optó por el expediente electrónico, dado que no había disponibilidad de magistrados para suplir esas ausencias de la manera en que se estaba planteando.

Hay algunas otras cuestiones aparte de los incrementos y de la presupuestación de los funcionarios contratados, como las asignaciones para el funcionamiento de los juzgados de paz seccionales del interior del país.

Aquí quiero destacar una iniciativa del senador Camy, que suscitó un proyecto de ley de descentralización de la justicia y realzó el rol de los juzgados de paz seccionales del interior del país, manteniendo la justicia –que a veces es la única presencia estatal en determinadas localidades– con funciones para que no desaparezca. Bueno, se dota, pero falta. Falta mucho, pero se empieza a andar el camino con el Tribunal de Apelaciones de Familia, la transformación de cargos y algunas otras disposiciones sobre los bienes muebles, la chatarra y los remates. Por último, algo que va a agilizar mucho son los recursos para la implementación del expediente judicial electrónico, que ya existe, pero es necesario actualizarlo.

Estoy de acuerdo con el reclamo de más recursos para el Poder Judicial. Ojalá este reclamo hubiera estado presente también en el pasado. No caigamos en aquello de reclamar o hacer un pedido cuando a quien le corresponde cubrir las finanzas es otra administración y no se hizo en la propia.

Falta mucho y el compromiso de atender a este poder tan esencial al Estado de derecho sigue estando de parte de este Gobierno.

Muchas gracias.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Señora presidenta: solamente quiero dejar una constancia.

Por supuesto reconocemos que durante el tiempo en que el Frente Amplio fue Gobierno hubo necesidades del Poder Judicial que se entendió que no se podían atender y nos quedaron debes, como por ejemplo el de los juzgados en el marco de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

No obstante, me parece importante recordar –ante lo que se ha afirmado– que, con relación al presupuesto que recibía el Poder Judicial hasta el 2019, se han recortado USD 108:000.000 en el acumulado de 2020, 2021 y 2022. Si nosotros fuéramos a resolver un presupuesto para el Poder Judicial equivalente –como porcentaje del producto bruto interno– al que tenía en el 2019, deberíamos aprobarle recursos por USD 69:000.000 y acá no llegan a USD 2:000.000. Así que, sin negar los debes del Gobierno del Frente Amplio, quiero decir que se dispusieron más recursos para el Poder Judicial mientras que ahora se los han recortado.

Muchas gracias.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: habíamos propuesto votar en bloque los artículos que van del 427 al 437 y el 439, es decir todos, menos el 438.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–22 en 22. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 438.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–13 en 22. **Afirmativa.**

En consideración el inciso 17, «Tribunal de Cuentas».

Los artículos 440, 441 y 442 fueron votados por unanimidad en la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–23 en 23. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 18, «Corte Electoral».

Los artículos 443 a 448 fueron aprobados por unanimidad en la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–25 en 25. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 449.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 25. **Afirmativa.**

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: queremos dejar constancia de la razón por la que no acompañamos este artículo y es que el texto del artículo 449 no contempla los procedimientos que, a nuestro juicio, son los más correctos para el ingreso a la función pública, ya que permite que luego de los tres años que los funcionarios están en pase a comisión, pueden quedar desempeñando funciones allí. Más allá de saber que siempre hacen falta funcionarios públicos, creemos que se deben seguir los caminos adecuados para los ingresos.

Adelanto que vamos a presentar un aditivo, pero hablaremos de ese tema cuando sea el momento.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el inciso 19, «Tribunal de lo Contencioso Administrativo».

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: proponemos votar en bloque los artículos 451, 452 y 461. El artículo 450 está mal pintado.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 451, 452 y 461.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: solicitamos que se aplace la votación de este inciso porque nuestra intención es acompañar la votación de los artículos. La única diferencia que tenemos es en el artículo 455, que refiere al personal de los tribunales inferiores que hace parte del sistema orgánico de la jurisdicción contencioso-administrativa, porque queremos asegurar que sean nombrados por concurso. En ese sentido, creemos que el texto debería decir: «será nombrado por concurso, promovido y destituido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo…». Queremos asegurar ese aspecto.

Asimismo, estuvimos conversando con algunos integrantes de esta comisión de trabajo y queremos decir lo siguiente. Fuimos unos de los promotores del proyecto de ley que reformó y actualizó el proceso contencioso anulatorio que se votó en esta legislatura. Es un viejo proyecto de ley que presenté en la legislatura anterior con mis compañeros del Frente Amplio y en su momento fue votado por unanimidad. Fue así como se creó la comisión y se está trabajando. La idea del grupo de trabajo es presentar un código del proceso anulatorio. Queremos dar la señal de acompañar, pero con esa única observación sobre ese artículo. Si se pudiera hacer esa modificación ahora –debería confirmarlo la secretaría–, podríamos votarlo. Esa es la observación que hacemos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Es decir, en el artículo 455 se propone agregar que el ingreso sea por concurso.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: ¿eso no está establecido en la Constitución de la república?

SEÑORA PRESIDENTA.- No, no lo está.

SEÑOR BLÁS.- Entonces proponemos votar en bloque sin incluir el artículo 455. Lo dejaríamos pendiente hasta realizar la consulta pertinente.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Carrera aclara que por esa modificación pasaría el votar el resto del articulado en su conjunto.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Quiero referirme a la propuesta del senador Carrera.

Cuando concurrió la delegación del TCA a la comisión se tocó este tema y la presidenta, la doctora Klett, dijo que estaba de acuerdo. De hecho, lo consideraba incluido en el articulado. Ahora no tengo presente en qué otro artículo, pero había acuerdo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Consulto, entonces, si en el artículo 455 no podríamos agregar el tema del concurso.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

En comisión, desde el Frente Amplio, como señal política, acompañamos los artículos que disponían de los recursos para la reforma, pero lo que vemos es que hay una contradicción, como ahora señalaba la señora senadora Asiaín. El artículo 454 dice que los jueces ingresarán por concurso, y está bien. Nosotros queremos asegurar que el personal administrativo –que son 56 funcionarios– ingrese por concurso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estaríamos agregando la expresión «por concurso» a efectos de que las condiciones sean iguales, tal cual se mencionó.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- La secretaría verá cómo lo agrega para que quede en forma correcta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. ¿Cómo quedaría el artículo 455?

SEÑOR CARRERA.- Quedaría de la siguiente manera: «Artículo 455.- El personal de los tribunales inferiores que hace parte del sistema orgánico de la Jurisdicción Contencioso Administrativa será nombrado por concurso, promovido y destituido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 a 66 de la Constitución, en lo que corresponda».

SEÑORA PRESIDENTA.- Consulto a los senadores Blás y Asiaín si están de acuerdo.

SEÑOR BLÁS.- No tenemos problema.

SEÑORA ASIAÍN.- Consulto si puedo referirme al inciso cuando corresponda.

SEÑORA PRESIDENTA.- Está en uso de la palabra.

SEÑORA ASIAÍN.- Se trata de un inciso que vino en el mensaje del Poder Ejecutivo, naufragó en la Cámara de Representantes y fue reflotado, es decir que revivieron estos artículos y con ello esta reforma del sistema orgánico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la creación de juzgados de primera instancia. Quien no está en la materia, evidentemente no le da la trascendencia que esto tiene porque no está familiarizado con el tema.

Esto es un reclamo histórico, integré el grupo del Anuario de Derecho Administrativo muchos años y era permanente el reclamo por la necesidad de creación de estos juzgados.

Al respecto, quiero señalar que es un órgano creado por la Constitución de la misma jerarquía que la Suprema Corte de Justicia y que hace el contralor de que la Administración se rija adecuándose a derecho, es decir que no incurra en exceso de poder ni en ilegalidad, y atiende evidentemente a toda la república por ser el único órgano. Entonces, era necesario crear –pero para ello también era necesario dotar de recursos– juzgados de primera instancia. ¿Son suficientes los dos que se crean? No; para nada.

De hecho, la iniciativa del TCA hablaba de muchos más, pero por lo menos se empieza, se abre una puerta que luego podrá ser agrandada. Quiero destacar que se logra en esta Administración, y eso también lo destaca en su comparecencia la delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Señalan que hace muchos años lo vienen pidiendo, desde la restauración democrática, y es la primera vez que una Administración, que un Gobierno lo incluye en la rendición de cuentas dentro de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

También cabe destacar que, desde el punto de vista político, es una administración que está creando más órganos para ser controlada, y eso me parece que es muy destacable. ¿En qué consiste? Voy a mencionar las palabras de la doctora Selva Klett, presidenta del TCA, en su comparecencia en agosto. Señaló que la principal carac-

terística es que permite el acceso a la justicia y que está echando fases esta reforma.

La primera, implica un gasto presupuestal –que es el que se está aprobando en esta rendición de cuentas– del orden de los $ 55:000.000 en lo que sería el desarrollo del proceso contencioso anulatorio; esto es el aspecto procesal del proyecto de ley.

Luego, en una segunda fase –porque aquí hay algunas normas procesales–, la comisión creada por ley para la reforma del proceso contencioso anulatorio complementará la actualización de normas procesales que hoy se rigen por un decreto ley anterior a la restauración democrática. Lo que dice la presidenta es que se permite el acceso de los ciudadanos del interior a este tipo de procesos. La justicia contenciosa anulatoria es la única materia que no tiene jueces de paz ni letrados que atiendan los casos del interior. ¿Que atiende esta justicia anulatoria? Desde una multa de tránsito hasta la posible anulación de un decreto de aplicabilidad general para toda la república. Esto pone de relieve el congestionamiento que se da a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta medida descongestiona al tribunal, pero también acerca la justicia al justiciable con un diseño que es muy ingenioso porque establece los juzgados de primera instancia como itinerantes, es decir que el juez es el que se desplaza al interior del país para escuchar en audiencia y realizar diferentes diligencias, con lo cual, en este aguzar el ingenio, se llega a cubrir el país. Después, cuando haya otros tribunales, juzgados y, también, la creación –se prevé esa posibilidad– de un tribunal de apelaciones, se podrá perfeccionar el sistema.

El pedido del TCA es la creación de cargos de jueces y de defensores públicos, de un mínimo de funcionarios necesarios para que se instalen los juzgados y una partida para equipamiento inicial e inversión para la instalación.

Algunas particularidades o ajustes al procedimiento son, por ejemplo, establecer que los juzgados letrados van a atender en instancia única hasta determinado monto, la posibilidad de apelación después de determinado monto y se reserva la jurisdicción del tribunal cuando se demanda la anulación de actos con efectos generales y abstractos.

Lo expuesto me lleva a hacer referencia a un par de artículos que propusimos, previa anuencia de la delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que compareció, y que tienen que ver con la circunstancia –que no es tan frecuente, pero ocurre– en que el tribunal anula decretos, actos administrativos con efectos generales y absolutos. ¿Por qué? Porque constatamos que no estaba actualizada la base de publicaciones que lleva adelante el IMPO. Voy a citar dos casos.

En agosto de 2019, el TCA anuló con efectos generales y abstractos un decreto que tiene que ver con la Dirección Nacional de Aduanas. Sin embargo, en la base del IMPO sigue figurando ese decreto que desapareció del mundo jurídico, al decir de la doctora Cristina Vázquez, que es lo que hace la anulación del TCA. Insisto: desapareció del mundo jurídico, ya no es más norma y, sin embargo, sigue apareciendo en la base del IMPO, en el *Diario Oficial*. Es como que se desatendiera totalmente el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¡Es grave! Se descarta absolutamente la mala fe; simplemente, es necesario que la norma, la ley, obligue al *Diario Oficial* a actualizar esto en sus distintas bases –el IMPO– porque es lo que corresponde.

Otro ejemplo tiene relación con la Dirección General de Casinos, donde se anuló con efecto general y absoluto un decreto y, sin embargo, si uno mira en el IMPO sigue figurando allí.

Por estas razones estimamos que estos dos artículos deberían ser acompañados por todos. El primero de ellos mandata al TCA a remitir al *Diario Oficial* toda vez que anula un acto con efecto general y absoluto. Téngase presente que para anular un acto con efectos generales y absolutos hay que cumplir con dos requisitos: el tribunal necesita cuatro votos de cinco y, además, cuando el acto sea contrario a una regla de derecho o a la buena administración, no es en todos los casos; en los demás casos produce efectos en el caso concreto. Quiere decir que cuando le da efecto general y absoluto es por ser contrario a derecho y se estima que es necesario anular.

El otro artículo establece la obligación para el *Diario Oficial*, el IMPO, de hacer esta actualización desde 1985 a la fecha. A quienes tengan miedo de que se trate de una tarea muy difícil de abordar, les digo que yo hice un pedido a la repartición del TCA que se encarga de la base de jurisprudencia –a quienes felicito por la labor– e inmediatamente me informaron que son 50 las sentencias que debe actualizar el IMPO para que quienes nos regimos por lo que debería ser la base oficial sigamos haciéndolo de acuerdo con la información real de los actos que fueron anulados y no sigamos aplicando decretos o partes de decretos que ya no están vigentes.

Respecto a la creación de estos tribunales, realmente estamos muy conformes con que el apoyo sea unánime, sobre todo porque en legislaturas anteriores el inciso Tribunal de lo Contencioso Administrativo a veces era salteado. A mí me tocó en varias oportunidades estar en rendiciones de cuentas como senadora suplente y muchas veces quería referirme al inciso del TCA para remarcar la necesidad de dotación de presupuesto, pero cuando me disponía a hacerlo –porque venía en el orden–, no estaba. Entonces, cuando pedía la palabra me decían: «No, no, eso ya pasó». Claro, ya había pasado, naturalmente, porque ni siquiera estaba mencionado.

Por lo tanto, es bienvenido el apoyo unánime con el que ahora cuenta la creación de los juzgados letrados de lo contencioso administrativo, así como el robustecimiento y el inicio de una reforma contencioso-administrativa para

mayor contralor de que la actividad de la administración sea acorde a derecho.

Gracias.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de continuar, consulto si la propuesta de redacción del artículo 455 ha sido aceptada.

(Dialogados).

–Perfecto.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Con relación a lo que expresaba la senadora Asiaín, pediría que se aclarara la forma de financiamiento.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- La forma de financiamiento fue conversada tanto con los jueces del tribunal, concretamente con su presidenta, como con el contador y con la delegación del TCA que compareció ante la comisión. Creo que replica la que venía en el mensaje del Poder Ejecutivo, de aproximadamente $ 55:000.000, que están repartidos en tres artículos diferentes. Hay una asignación única que tiene que ver con inversiones inmobiliarias, amoblamiento y demás –creo que esos son diez, pero estoy hablando de memoria, en todo caso reviso los papeles–, y el resto ya es una asignación anual, por lo que se va a reiterar, y tiene que ver con remuneraciones, defensores, etcétera. Está todo en los artículos; lo que estoy haciendo es solo un resumen de lo que figura allí.

SEÑORA PRESIDENTA.- Recordemos que el texto original venía con la creación de estos juzgados. Todos conocemos a la comisión que trabaja en esto y que nos visitó pidiendo que por favor esto se pusiera en práctica. La Cámara de Representantes quitó estos juzgados y luego la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado volvió a incluir la previsión presupuestal tal cual venía en el proyecto de ley original para, como decía el señor senador Carrera, seguir dando forma a aquella ley orgánica. En síntesis, el dinero ya venía en la previsión presupuestal, se quitó en la Cámara de Representantes y ahora se volvió a disponer como venía originalmente.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Proponemos que se voten en bloque los artículos que van del 450 al 466 y que se vote el artículo 455 con la redacción dada por el señor senador Carrera.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar, con la modificación introducida por el señor senador Carrera en lo que hace al tema del concurso.

(Se vota).

–25 en 25. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Señora presidenta: me voy a referir brevemente a la situación de este inciso.

A mi entender, quizás lo más llamativo de esta rendición de cuentas, es que en el mensaje del Poder Ejecutivo no venía ningún artículo referido a la ANEP, organismo que hizo una solicitud presupuestal de $ 2.412:000.000. Es un pedido muy importante. Si uno analiza los rubros a los que se iba a destinar esta cifra puede ver que $ 787:000.000 son para la transformación curricular de la educación primaria y media superior. A su vez, $ 722:000.000 serán destinados a la transformación curricular del Consejo de Formación en Educación; $ 239:000.000 a la conformación de equipos multidisciplinarios para primaria y secundaria; $ 30:000.000 a rediseño organizacional; $ 433:000.000 a gastos de funcionamiento, y $ 200:000.000 a inversión en infraestructura.

Señora presidenta: tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento le otorgan cero pesos a la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Por qué digo cero pesos? Porque, en realidad, los recursos que se están redistribuyendo –que son los que la ANEP ejecutó a la Corporación Nacional para el Desarrollo–, ya estaban destinados a la construcción de obra nueva. Por lo tanto, para que esos recursos se vuelquen nuevamente a la ANEP, tienen que volver a rentas generales y, en teoría, esta administración los redirigirá para la contratación de los denominados mentores. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue qué es lo que se va a dejar de construir, porque, en definitiva, no creo que esos recursos sean excedentes, como dice el artículo. ¿Cómo pueden ser excedentes si la propia ANEP nos está pidiendo recursos para obras? Excedentes no son. Imagino que algunas de las cosas que se plantearon no se

van a hacer; esas obras no se van a hacer. Cuáles no se van a hacer no lo sabemos porque se lo preguntamos al presidente de la ANEP y dijo que, si le sacaban esa plata, verían cuáles iban a ser las obras que se iban a dejar de hacer.

Si analizamos las obras que se hicieron en este período, nos encontramos con que el 80 % correspondía a las obras por PPP –que fueron una iniciativa impulsada por los Gobiernos del Frente Amplio y que no fue acompañada en aquel momento por la oposición; reitero que representan más del 80 % de las obras que se hicieron en este período– y el resto, francamente, son muy pocas. Nosotros, señora presidenta –para aquellos que les gusta hablar–, muchas veces nos enfrentamos a organizaciones que no querían las PPP. Fueron la solución que se encontró para construir más de 150 centros educativos y, también, para el mantenimiento, la limpieza y la seguridad. El problema es que mantener un centro educativo en condiciones y que, además, tenga seguridad en enero y en febrero, sale plata. Muchas veces, lo que ocurría antes –y ocurre– en muchos centros educativos era que la ANEP no contaba con los recursos para tal fin. ¿Y en quién se recargaba eso? En la comunidad o en los directores.

Por lo tanto, señora presidenta, me pregunto –en este escenario, en el que no se le da nada a la ANEP– quién defiende la transformación educativa, porque la ANEP nos dice que tiene un costo de $ 787:000.000, y esos recursos no están. Además, Ana Ribeiro, la subsecretaria del MEC –a quien le tengo el mayor respeto, no solo porque fue mi profesora de Historiografía, sino porque realmente es una historiadora de primer orden– dice que no tuvo participación en la reforma educativa. También dijo que está encargada del tema de los archivos, pero de eso vamos a discutir, seguramente, la semana que viene. Ana Ribeiro ha dedicado su vida a la educación, pero señala que la reforma educativa es un proyecto de Robert Silva y de Pablo da Silveira, y que ella no tiene nada para decir.

Después nos encontramos con la carta de Óscar Yáñez –a quien también le tengo un enorme respeto–, quien cada vez que concurrió al Parlamento lo hizo con enorme altura y nunca lo escuché faltar el respeto a la oposición. ¿Por qué señalo esto? Porque en su carta de renuncia dijo: «No obstante, si estamos promoviendo un cambio educativo que implica un trabajo colaborativo, la parcialidad de datos, así como el hermetismo en el entorno de alguna dirección de Gestión, me deja en una situación muy comprometida. […] Esto significa que accedo a la información por la página web o por funcionarios…». Entonces, si el subdirector de Secundaria dice esto, ¿qué nos deja al resto? Si la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura expresa que no tiene ni idea y si una autoridad de trayectoria como Óscar Yáñez –que era el subdirector de Secundaria– afirma esto, ¿qué nos dejan al resto? Entonces, no podemos esperar otra cosa que la respuesta que han dado los docentes, que de 240 Asambleas Técnico Docentes, 238 se manifestaron en contra.

Señora presidenta: quizás a algunos senadores esto no les importa, pero realmente tengo una voz a mi espalda que me está taladrando y es bastante difícil continuar con la exposición.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le voy a pedir silencio a quienes están atrás del senador Sabini, ya que está haciendo uso de la palabra.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR SABINI.- Muchas gracias.

Por lo tanto, no puede sorprender a nadie que los colectivos docentes se hayan manifestado en contra, porque ni siquiera las propias autoridades del Gobierno saben de qué viene la reforma educativa.

Esto es más grave cuando uno lee algunas cosas que dicen personas que están a favor de la educación por competencias. No sé, señora presidenta, si leyó la nota que le hicieron a Pedro Ravela. Básicamente, expresa que este es un cambio cosmético, que hay un cambio que implica, simplemente, cómo se registra el trabajo en las aulas. Era obvio que esto iba a pasar, porque no se puede realizar una transformación educativa haciendo un curso virtual de treinta horas. Nadie puede creer que eso nos va a llevar a una mejor educación. Lo digo con sinceridad. Además, todos los que estamos aquí sabemos que para mover un organismo como la ANEP se necesitan recursos. Esto se dijo en EDU XXI, señalándose que se precisaban, por lo menos, USD 400:000.000 más y, lamentablemente, cuando uno ve cuánto y cómo evolucionó el presupuesto de la ANEP, advierte que estamos por debajo de lo ejecutado en 2019. Este no es un problema de la Administración, sino del país. Si realmente queremos mejorar nuestra educación, vamos a tener que invertir recursos en ella. No hay vuelta.

Tuve muchos debates en el Parlamento sobre la educación. Es verdad que la pandemia afectó duramente al sistema educativo. Yo también lo sufrí. Ahora, la ANEP devolvió recursos en 2020, y no fueron dos pesos, sino millones de pesos que se podrían haber destinado, por ejemplo, a equipos multidisciplinarios. El resultado educativo, comparado con la promoción, es inexplicable. ¿Cómo puede ser que el informe Aristas nos diga que se duplicó la ausencia de los estudiantes, que aumentó la inequidad y la brecha educativa entre los más pobres y los más ricos, que empeoraron los aprendizajes en matemáticas y lengua? Además, aumentó la inseguridad en los centros educativos y la ANEP no cumple con las metas trazadas. Ya lo dije en la comisión y no lo voy a repetir aquí, pero no cumplieron con ninguna de las metas que se propusieron. Sin embargo, al mismo tiempo, mejora el pasaje de grado. ¿Cómo es posible? ¿Hay menos aprendizaje y mejora el pasaje de grado? Esto ocurre por cambios de carácter administrativo, por cambios en el sistema del pasaje de grado. Entonces, no nos podemos sorprender de los resulta-

dos que tenemos si, lamentablemente, a lo único que se ha apelado para la transformación educativa es al criterio de autoridad. Sé que hay gente que piensa que las cosas hay que hacerlas sin importar los costos, pero en educación no. En educación, a veces, es preferible tomarse el tiempo de ponerse de acuerdo.

Además, en esto no me duelen prendas porque varias veces integré las comisiones interpartidarias de educación, y estoy convencido de que si no tenemos acuerdos en el mediano y largo plazo vamos a seguir en el mismo punto. Esto no quiere decir que tengamos que ponernos de acuerdo en todo, pero podríamos hacerlo en algunas cosas. Lamentablemente, siento que estamos muy lejos de esa situación.

Entonces, señora presidenta, estos son los resultados que tenemos. La inversión en educación cayó. No hay soluciones mágicas. Hay legisladores que están proponiendo la educación virtual como una solución a los problemas de la educación del país; parece que tienen la varita mágica. Después de que no le dieron un peso a la educación, vienen a proponer bachilleratos virtuales. La verdad es que eso es una tomadura de pelo al sistema educativo.

Lo que les preguntaría a esos legisladores es cómo piensan que la ANEP va a hacerlo, si en el Parlamento se le rechazó todo lo que pidió. A la ANEP le están diciendo: deje de hacer obras y ponga esa plata en los mentores, y ni siquiera saben qué obras van a dejar de hacer. Eso es lo que establece el artículo que aquí se va a votar.

Por esa razón, señora presidenta, digo que esto no es ningún aumento presupuestal. Hay quien dijo –en la Cámara de Representantes; aquí no, por lo menos no lo escuché hasta ahora– que esto es una reasignación. En todo caso, es una reasignación dentro de la propia ANEP, pero no es un aumento presupuestal porque son recursos que ya se ejecutaron.

Por lo expuesto, no vamos a acompañar este artículo, señora presidenta.

Es todo cuanto tenía para decir. Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Voy a ser lo más breve posible porque ni las horas que llevamos discutiendo ni el ámbito de la rendición de cuentas dan para tratar el tema que a todos nos preocupa. Estoy segura de que a todos los que estamos acá nos preocupó y nos preocupa, porque estamos en una rendición de cuentas.

Hay dos o tres cosas que quiero aclarar primero. Me molesta explicarlas, pero voy a hacerlo porque se trajeron a sala. Yo no habría traído situaciones personales, que conozco muy bien. En el caso de Ana Ribeiro –a quien le tengo el mismo aprecio–, es subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Si hubiera intervenido ese ministerio –que fue lo que se dijo, sobre todo cuando estábamos en el tratamiento de la LUC, y después en la campaña por el referéndum en contra de la ley– habría tomado decisiones y violado la autonomía de la ANEP. Por tanto, no podemos ser tan contradictorios.

Me llama la atención, conociendo al ministro, cómo se ha mantenido en lo que corresponde a las funciones y atribuciones que le otorga la Constitución, porque no es que el ministro no pueda intervenir en temas educativos –es de Educación y Cultura–, pero ha sido él y su subsecretaria quienes han enfocado –cada uno con sus características; los conozco muy bien a ambos– el respeto a la autonomía.

Quiere decir que acá hay un punto que es fundamental. Ustedes saben lo que pienso de las formas de gobernanza de algunas instituciones. Soy profundamente respetuosa de la autonomía. Eso sí, la autonomía técnica de las instituciones educativas debe ser un principio fundamental, no solamente porque así lo establecen nuestras bases fundacionales y constitucionales, sino porque es nuestra idiosincrasia, nuestra manera de haber manejado la educación desde Elbio Fernández, primero, y desde Varela, después, y nunca hubo problemas con ninguna Administración.

Así que en eso no me sorprende. No sé a qué se deben las declaraciones, no hablé con ella, pero me parece que no corresponden a este ámbito.

Con Óscar Yáñez somos muy amigos, repito, muy amigos. Durante tres años fue subdirector del liceo Bauzá. Casi podemos decir que hemos mantenido –y sin el «casi»– un contacto permanente debido a temas personales que él ha sufrido, entre otras cosas. Yo lo voy a decir acá y lo lamento: su tema no es la parte pedagógica de la reforma educativa en la que ha participado muchísimo –tengo en mi despacho los proyectos que elaboró; puedo compartirlos con el senador que quiera; trabajaba muy bien–, sino problemas de relacionamiento personal con la directora general. Es horrible estar hablando de estas cosas, pero se tomó una carta que alguien viralizó –no fue él porque estaba muy afectado por esto–, lo que no me parece éticamente correcto. Entonces, me veo en la obligación de decir –él me autorizó a hacerlo y además esto ya se nombró ayer– que se trató de un problema de relacionamiento con la directora general, y cuando hace alusión a las páginas webs, se refiere al problema de gestión en la Dirección General de Educación Secundaria. Por otra parte, no lo vamos a perder en lo que refiere a sus aportes sobre la transformación en las comisiones, porque ha participado sistemáticamente. Quedó aclarada la situación a la que hubiera preferido no hacer referencia, pero corresponde si alguien lo trae a colación.

Haré un breve comentario sobre las PPP en educación. Yo no tengo problema con la participación público-privada; es más, soy profundamente partidaria de la colaboración del capital público con el privado y, sobre todo, en soltarles la mano –en el buen sentido–, los hilos de la cometa a los sectores privados para que impulsen la economía, como este Gobierno lo ha querido hacer y lo ha demostrado. Personalmente, no considero adecuadas las PPP para el sistema educativo, porque no me parece que corresponda –y algo de experiencia tengo– que la seguridad de un centro educativo y su limpieza las realice una empresa que no sabemos siquiera quiénes son. No olvidemos que la comunidad educativa –tanto que se habla de ella– no solamente está integrada por el equipo de dirección, los adscriptos, los profesores, los alumnos y los padres. Cuando se trata de una verdadera comunidad, la encargada de la seguridad –en mi época, por suerte, era el servicio 222 exterior el que resolvía prácticamente todos los problemas– no debe ser una empresa privada porque su relacionamiento es permanente con alumnos y –como le gusta decir a muchos y yo lo respeto– especialmente con alumnas. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque deben formar parte de la comunidad. Muchas veces una limpiadora del liceo o un portero es un enlace para que la comunidad y las autoridades podamos tener conocimiento de las problemáticas de los alumnos. Claro que las tenemos por otras vías. Lo aclaro porque después se sale a decir que la senadora Bianchi se enteraba por el portero de los problemas de los alumnos; el grado de decadencia es muy grande. De verdad doy fe de que en una comunidad, sobre todo si es muy grande, todo colabora para que nos podamos dar cuenta de muchísimas cosas que les suceden a nuestros alumnos.

Reitero: en nuestra opinión las PPP en la educación son algo negativo, pero eso no quiere decir que se sigan usando en ciertos casos. Cuando me pidieron opinión dije que si era PPP para la construcción del edificio estaba de acuerdo, pero para proporcionar personal, de ninguna manera. En ese sentido opinamos y no recuerdo si fue durante este Gobierno o el anterior. Probablemente haya sido en el anterior, cuando yo formaba parte del Codicén como secretaria administrativa.

Con respecto a los recursos, señora presidente, está claro. Esto lo repito y lo voy a decir en una frase. Si hubo algo claro respecto a que la plata no es igual a los resultados, fue durante los años en que teníamos una enorme cantidad de dinero: USD 1.500:000.000 por año solo para la ANEP. Era tan impresionante que los que veníamos trabajando desde otras épocas nos dábamos cuenta de que se malgastaba mucho. ¿Por mala fe? En absoluto. Lo que pasa es que cuando hay abundancia, a veces la gestión falla, a lo que hay que sumar la falta de conocimiento de algunas autoridades o no ser de la educación. Reconozco que el doctor Yarzábal –presidente del Codicén a partir del 2005– era una excelente persona con quien nos relacionamos muy bien, pero era médico infectólogo. Por suerte, cada vez que hablábamos sobre temas educativos él tenía la mente suficientemente abierta para escuchar a los que sí sabíamos, pero, repito, era médico infectólogo y fue el primer presidente de la ANEP, en el 2005. Esto fue una enorme desilusión. En realidad, yo no lo conocía; después de que lo conocí tuvimos un muy buen vínculo.

Por tanto, plata no es igual a resultados. ¿Es cierto que ahora se administra muchísimo mejor el dinero? ¡Sí! ¿Quisiéramos tener más dinero para otros incisos, como por ejemplo para el Poder Judicial, tal como dijeron mis compañeros, especialmente la senadora Asiaín? Sí, claro que quisiéramos tener más dinero, pero hay que tener cuidado en cómo se lo administra porque, sinceramente, en resultados no fue.

Los problemas de la educación no empezaron en el 2005 ni ahora, sino a fines de la década de los sesenta. Las primeras grandes transformaciones de planes educativos las hacían las ATD en la época en que estas se dedicaban a lo que establecía la ley desde 1942 o 1943, que era el asesoramiento y nada tenía que ver con los sindicatos. En ese momento se hicieron muy buenas reformas. Después voy a hablar de este punto, pues el otro día se confundió reforma con transformación.

Entre las reformas estuvo el plan piloto; fui alumna de este plan desde 1963. ¡Miren ustedes cómo los docentes se dieron cuenta de que la cosa venía mal! Después estuvo la microexperiencia de 1993.

De modo que, en realidad, esto empezó a fines de la década de los sesenta. Luego vino la dictadura, después hubo que reorganizar todo el sistema y, posteriormente, cuando se empezó a querer hacer transformaciones o reformas, el Frente Amplio –del que yo formaba parte– y los sindicatos –de los que yo formaba parte– nos opusimos férreamente con un problema, además de las formas, sin un proyecto alternativo. Entonces, pregunto –algo de esto mencionaba el presidente de la comisión, señor senador Blás–: ¿ahora surgen estas inquietudes? ¿Por qué no se hizo un proyecto alternativo? Todos queríamos apoyar un proyecto alternativo, pero nunca existió. No me vengan a decir lo contrario, ¡por favor!, porque es así. ¡No existió proyecto alternativo! Al que estaba –en el que había cosas que me gustaban y otras que no–, se lo boicoteó todo lo que se pudo. Supervivieron cosas, que ayer fueron valoradas y yo lo dije, como el tema de los Centros de Formación para la Integración Regional o los bachilleratos tecnológicos que vienen de la reforma de Rama. Es decir, ahí todos tuvimos responsabilidad.

Sí creo que hay algo que es muy muy importante: se empezó un proceso de transformación.

No voy a decir hoy, acá –y va a quedar negro sobre blanco–, que estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo. Hay cosas que, incluso, ignoro, porque todavía no están terminadas en su elaboración, pues es un proceso. Esa es la diferencia fundamental entre una reforma y una

transformación. Por eso, el profesor doctor Robert Silva y todo su equipo –en el que está Óscar Yáñez también– hablan de transformación educativa, porque es un proceso. Como venimos de setenta u ochenta años de no haber tocado las cosas fundamentales de la educación –nótese cuántos Gobiernos para atrás, por lo que no estoy adjudicando la responsabilidad a ninguno en especial–, obviamente nos cuesta, porque es una musculatura que está quieta, es un barco de madera que cruje cuando uno lo quiere convertir en uno moderno, por usar algún tipo de imagen.

Entonces, lo que pido es que se actúe con responsabilidad y ecuanimidad; no podemos hacer las valoraciones –ya me referí a esto y no voy a repetirlo porque, incluso, hice una intervención en la media hora previa al respecto– solo por el resultado del informe Aristas. En dicho informe tuvo mucho que ver el doctor Fossati –además, hizo un trabajo que, en parte, leí aquí–, representante en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y de los que más sabe –como el doctor Ravela– de evaluación, en el instituto, que es público y que tiene integración política. Lo que hace él es una interpretación de la evaluación numérica por la situación que se vivió, primero por la partida, porque hay que reconocer que partimos de algo que no funcionaba bien y teníamos resultados espantosos. ¿Me causa gracia decirlo? ¡No!, porque si hay algo que soy –y moriré siéndolo– es educadora, pero, repito, los resultados eran espantosos.

En consecuencia, se parte de una situación de retroceso. Se arranca con una pandemia y esto no es una excusa, sino una explicación científica, porque Ravela y Fossati hacen un estudio de lo que pasó en el mundo occidental con la educación durante la pandemia, que afectó la seguridad, el estado de ánimo de los docentes y de las comunidades y, por supuesto, no iban a clase. Hace unos días yo traje este recuerdo. ¡Vamos, muchachos! ¿Acaso no recordamos que en 2020 algunas escuelas rurales empezaron en junio o en julio? ¡¿Qué evaluación se puede hacer de lo que pasó durante ese año?! ¡¿Y el año siguiente cuando empezaron las clases el 1.º de marzo y hubo que ir para atrás por una segunda ola de covid?! Tengamos un poco de honestidad intelectual –y lo digo con todo respeto–: no se puede hacer un cotejo sobre una situación que viene de décadas. Fueron dos años y poco. Miren que estoy siendo muy cuidadosa, a pesar de que insisto en que el Frente Amplio, cuando tuvo la oportunidad de tener plata, se equivocó en cómo la gastó.

Se trata de un problema país –¡claro que sí!–, pero no es solo para caerle al Gobierno cuando le toca enfrentar esas situaciones, el problema país es para hacer una evaluación con ecuanimidad.

Les comunico que los resultados no se van a ver antes de siete u ocho años. El que piensa que en educación los resultados van a ser de un día para el otro no sabe nada de educación. ¡Lo digo sinceramente! Podemos agarrar a tiempo a los chicos de primera infancia, de primaria, y lograr algunas transformaciones, pero tenemos gente que ya está en bachillerato o en la universidad y no tiene la formación acorde a la edad.

El informe –creo que del Instituto Nacional de Evaluación Educativa–, que ustedes también habrán visto, nos daba ganas de ponernos a llorar por el nivel que tienen los estudiantes de formación docente, o sea, los que van a ser profesores, con o sin título universitario. Un gran porcentaje –no lo quiero decir porque me duele– ni siquiera es capaz de comprender un texto básico de idioma español; eso es lo que antes decíamos de los alumnos de primaria. Entonces, ¡va a llevar mucho tiempo! Para eso necesitamos el apoyo de todos. ¿Por nosotros? ¡No!, por todos nosotros.

Tengo cifras de las obras. Las dio el propio presidente de la ANEP. No se quejó de que no pudiera hacerlas. Él siempre tuvo la mejor buena voluntad y ha dicho: «Nos vamos arreglando; nos vamos arreglando».

Entre 2015 y 2019 se realizaron 59 obras y, entre 2020 y 2022, 108 obras. Yo lo leo como ustedes. En el primer período considerado se construyeron 64.466 metros cuadrados y, en el segundo, o sea entre 2020 y 2022, 104.249 metros cuadrados de infraestructura educativa.

La modalidad de participación público-privada es del entorno de los USD 34:000.000 ¡por año! Eso se abona por fuera del presupuesto educativo. El doctor Robert Silva decía que las obras de PPP tienen mantenimiento, vigilancia y limpieza incluidas –yo ya dije lo que opino; pero bueno, tuvimos que asumir esa realidad–, que van a terminar la tercera, y a recibir 15 escuelas en octubre o noviembre.

Hay otra cosa que yo escucho y que me molesta muchísimo: «Inauguran obras que inició el otro Gobierno». ¡Y sí! ¿Qué quieren que hagamos? ¡¿Que las dejemos sin terminar?! ¡Además, la plata sale del bolsillo de los contribuyentes! O sea, ¡el Estado somos todos! ¡No existe la plata pública! Entonces, el Gobierno tiene la obligación de terminar obras, incluso obras con cuya ubicación ni siquiera está de acuerdo, ¡y las termina! ¡Claro que sí! ¿Y quién quieren que las inaugure? El Estado es una continuidad, lo que sucede es que hay, realmente, una especie de concepción fundacional en un Estado democrático republicano de gobierno. ¡Es natural que se cambie! ¡Las mayorías cambian! Todas son obras que la ciudadanía pagó peso sobre peso, porque fuimos nosotros los que lo hicimos; y si hubo que endeudarse, nos endeudamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, porque no vamos a pagar la deuda antes.

«Este año 2023» –dice Robert Silva– «estamos cercanos a los $ 900:000.000 de gasto en materia de seguridad». O sea que no tenemos más servicio 222, un craso error, porque no hay otra manera de controlar la seguridad, afuera, lo digo por las dudas. Y continúa diciendo: «Estamos en un aumento histórico, en valores constantes, de la

evolución del gasto en alimentación, entre los años 2010 y 2022. Es importante que esto se sepa porque –como saben– tenemos un impuesto destinado al tema y estamos superando la cantidad de $ 3.000:000.000 destinados a la alimentación de los servicios educativos en Uruguay. Allí también se incluyen los servicios que nos han habilitado a través de la ley de rendición de cuentas, o sea que con el impuesto de primaria pagamos, tanto UTU como secundaria…».

Se me está terminando el tiempo de que dispongo.

Agrego que lo único que sí lamento –y no quiero que sea interpretado mal políticamente– es que Robert Silva, por lo que me enteré, dejará la presidencia del Codicén y perderemos al gran líder de la reforma educativa; pero tiene un gran equipo –realmente, es un gran equipo– que le es muy leal. Entonces lo que necesitamos es que, seamos de la coalición o no, apoyemos el proceso de transformación. Cuando estemos en condiciones de evaluarlo realmente, hagamos los cambios que sean necesarios y mantengamos lo que se está haciendo y se va a hacer mejor.

Muchas gracias, señora presidente.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Ante todo, quiero decir que la carta de Yánez salió en la prensa. No sabía que no se podía hablar de ella. Por mi parte, simplemente interpreto lo que dice; después, el resto corre por cuenta de los demás. No creo que no sea ético; en todo caso, habría que preguntarle a él.

No quise, señora presidenta, hablar de los períodos frenteamplistas, pero bueno, lamentablemente, parece que en lugar de hablar de lo que no hace este Gobierno quieren hablar de lo que hicimos nosotros. Ahora bien, durante los Gobiernos frenteamplistas se invirtió como nunca en la educación y los resultados mejoraron, mientras que hoy son peores. Mejoró la cobertura, mejoró el pasaje de grado, mejoraron los aprendizajes y se redujeron las brechas con el sistema educativo privado. Se creó el Sistema Nacional de Becas, que no existía; se creó el Plan Ceibal; se crearon cientos de centros educativos en lugares donde la educación nunca había llegado; aumentaron las propuestas educativas; mejoraron los salarios docentes y no docentes. Todo eso se hizo con plata, porque sin plata hay políticas que no se pueden hacer, y todavía falta muchísimo para llegar a lo que invierten los países desarrollados.

Si uno mira cualquier indicador de la educación en los Gobiernos frenteamplistas, ve que hay mejoras; lo que no nos explican es por qué ahora son peores. No es solo un tema de gestión, si no, pregúntenle a la educación privada por qué invierte más que la educación pública. ¿Lo hacen porque son tontos o porque se necesitan esos recursos para hacer actividades extracurriculares, para tener apoyo estudiantil, para poder hacer cosas que los liceos y las escuelas públicas no pueden hacer porque no tienen esos recursos? ¿Alguien piensa que va a estar tirando la plata en la educación de sus hijos? ¡Claro que no! Se necesitan más recursos, señora presidenta, para tener más escuelas de tiempo completo, más escuelas de tiempo extendido, más liceos de tiempo extendido, para tener infraestructura donde no la tenemos, para tener gimnasios, para tener salas multidisciplinarias, para tener equipos multidisciplinarios, pero esa plata no está y esa es la realidad. Se podrá gestionar un poco mejor o un poco peor, pero sin plata hay muchísimas cosas que no se pueden hacer. Esto, para mí, es incontrastable.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Termino con esto, señora presidenta; permítame un segundo, por favor.

En el 2020 se inauguraron 44 obras nuevas –31 se hicieron por PPP– y, en el 2021, 56. Todas estas obras venían por arrastre –¡por arrastre!–, es decir que eran obras que…

(Dialogados).

–Por supuesto, estamos en un Estado de derecho, pero hubiera sido bueno que invitaran a alguien del Frente Amplio y no lo hicieran en soledad.

¿Saben cuántas se inauguraron en 2022? Un total de 8; es lo que figura en la información oficial.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

A mí me habían dicho que había una frase, que se le atribuye a la diplomacia británica, que reza, más o menos, así: Dios, procura que mis palabras sean suaves y dulces por si algún día tengo que tragármelas. Esto es lo que ha ocurrido con todo lo que se dijo durante la pasada campaña electoral en materia de educación y del estado de la educación en el Uruguay. Esa fue la situación.

Acá, en el Uruguay de hoy, gobierna una coalición legítimamente votada por los uruguayos, con un Poder Ejecutivo con todos los cargos que le corresponden y con mayoría en ambas cámaras. Hasta el día de hoy, en esta rendición de cuentas, se han jactado, justamente –con justeza– de tener todos los votos, es decir que hay una coalición que se hace valer en función de los votos que obtuvo

y son los que están gobernando hoy. Por lo tanto, se podrá hacer una retórica y volver a recrear algunas visiones sobre los Gobiernos del Frente Amplio, pero, en realidad, no es un buen camino gobernar mirando el espejo retrovisor y no tener la capacidad de mirar hacia adelante.

Acá hubo compromisos. El punto 8 del documento *Compromiso por el país*, que fue levantado por estos mismos partidos, habla de transformar la educación y ahí sí hay una serie de aspectos que plantean diagnósticos absolutamente catastróficos sobre el estado de la educación del Uruguay. Se venía a revertir mágicamente un estado que se le planteaba como la peor de las situaciones del país.

Es más: dos por tres escuchamos decir al presidente de la ANEP y a otras autoridades la frase «por primera vez», como si tuvieran esa ansia fundacional que, a veces, uno siente que invade a quien gobierna.

Pues bien, acá y a esta altura, tenemos que señalar qué es lo que ha pasado y en este «qué ha pasado» hay datos que son objetivos y que no son fijados por la opinión de la oposición sobre el estado de la educación.

Como bien decía el señor senador Sabini, los resultados que señala el Ineed –una institucionalidad creada durante los Gobiernos del Frente Amplio– provienen de un informe que realiza y que es lapidario. Ese informe establece, como bien se señaló, que acá, a nivel de la educación media –donde está ubicado este informe–, hay peores índices en cada uno de los aspectos que el documento señala: en repetición, en aprendizajes, en deserción y también en lo que respecta a inseguridad en los centros educativos. No está dicho esto por la oposición, sino por un informe de esta institución.

Segundo: en el día de ayer, casualmente, en el diario *El Observador* sale publicado el artículo «Fin de flexibilización de pasaje de grado afectó más a los estudiantes pobres», del periodista Tomer Urwicz. Es decir, acá hubo un cambio, que nosotros inicialmente dijimos que estaba bien –porque no hay que mirar según quién gobierna, sino si las cosas están bien o mal–, porque ante las condiciones de la pandemia había cambiado radicalmente el estado de las cosas para los aprendizajes y no podían pagar los estudiantes el cambio general que había ocurrido en el mundo y en el Uruguay; por lo tanto, cambiar y flexibilizar las pautas para la evaluación de los aprendizajes estaba bien. Eso pasó. Por eso una cantidad de estudiantes pudieron avanzar. Por ahí hay debates técnicos y académicos que no son para ahora, sino para después. Lo que no puede pasar es que, si se hace un cambio administrativo en el que de 3 bajas se pasa a 6 para pasar de año, después se hagan comunicados que digan que acá mejoraron los resultados educativos en estos términos. Está mal. Intelectualmente no es honesto hacerlo.

Por otra parte, esto tiene impacto en el segundo ciclo. Algunos de los cambios recién ahora están empezando a verse. Acá se ha citado a Pedro Ravela. Él habla de trabajo de terminología, de cambios de terminología. Hay un gran y muy buen *marketing* de comunicación. Sin duda que es así, pero los denominados cambios de la transformación educativa recién empezaron a aplicarse parcialmente en el mes de marzo. ¿A alguien, sensatamente, se le puede pedir resultados concretos a esto, a algo que empezó, que se hizo rápidamente para llegar sin duda a otros objetivos? Es imposible. Es más, lo que sí es inevitablemente criticable es la forma. Acá no se pretende, como a veces uno escucha que se establece en algunos razonamientos, que sean los sindicatos, y mucho menos los órdenes docentes, los que indiquen o marquen la gobernanza de la educación. Lo que sí sería bueno es que cuando se hace un compromiso público con el país y se dice, por ejemplo, que se van a fortalecer las Asambleas Técnico Docentes como ámbitos de reflexión y propuesta educativa, al menos se escuche su reflexión y su propuesta. Si se las va a escuchar, de 250 Asambleas Técnico Docentes que hubo en secundaria, 248 criticaron y dijeron que la anunciada transformación educativa tenía problemas de implementación, de diseño y de contenidos. La pregunta es si hay una conspiración de todos los docentes de cualquier signo político-partidario, gremial o de lo que fuera, o de ninguno, cuando hay 248 de 250 que opinan de esta manera. No. Cuando todos –o casi todos– están del otro lado y, a su vez, yo estoy en el opuesto, sensatamente se tendría que bajar un cambio y entender de qué lado hay que reflexionar y de qué lado hay que buscar otro ángulo para ver las cosas.

Se ha hablado, como uno de los elementos importantes en cuanto a ese *marketing* de comunicación, de los Centros Educativos María Espínola, que como todos sabemos tienen una base de inversión en infraestructura y en características de la propuesta en contenidos pedagógicos; en cuanto a la primera, es prácticamente la misma infraestructura que venía de Administraciones anteriores, y con relación a la otra, hay mínimos cambios de contenidos curriculares. Si vamos a poner el máximo que se aspira alcanzar en materia de educación en este período, esto es, hasta 60 centros de estudio –ese es el óptimo a lograr–, en ese marco tenemos, con toda claridad, un objetivo muy modesto: solo el 7 % del total de los estudiantes de educación media, si se logra el objetivo de los 60 Centros Educativos María Espínola, van a estar involucrados en esos centros. El resto no lo estará.

Por lo tanto, si esa era la enorme transformación educativa que se iba a hacer, si ese era el cambio, bueno, esta es la dimensión de ese cambio; reitero, esa es la dimensión del cambio.

Agrego: cuando se habla de inversión en educación, es claro que ha habido un recorte acumulado durante todos estos años en materia de educación. La inversión en educación se redujo, eso es indiscutible; si alguien afirma lo contrario, ¿qué quiere que le diga? Está hablando de números que no existen.

Añado: la educación del 2022 está por debajo de la del 2019 en USD 64:000.000 y el recorte acumulado en el gasto ejecutado es de unos USD 222:000.000. Es decir, ¿saben cuánto le costó al Uruguay llevar al 4,5 % el producto bruto interno destinado a educación? Bueno, ahora es menos que eso; se está más lejos del punto de partida de inflexión de asignación presupuestal que hubo en 2005. Además, en 2005 –hay que decirlo con todas las letras– los sueldos de las maestras –porque la enorme mayoría son mujeres– y de los profesores eran de hambre. En Uruguay, luego de un cambio sustancial de inversión en educación, los sueldos en materia de educación comenzaron a dignificarse como nunca antes había ocurrido en la historia. ¿Eso, en sí mismo, es un cambio curricular? ¿Eso, en sí mismo, es un cambio de transformación, de contenidos? No, claro que no lo es, pero sí es un cambio muy importante que se discontinuó y que fue, indudablemente, sustancial.

Recuerdo que en los primeros años en que empecé a ejercer la profesión de docente, al Liceo n.° 1 Manuel Rosé, de Las Piedras –del que fui alumno y luego profesor–, solo dos docentes concurrían en auto y ninguno de los dos vivía de la educación; reitero, ninguno de los dos. Acá, tanto el señor senador Uruguay Russi como el señor senador Sebastián Sabini saben de quiénes estoy hablando porque los conocen.

Por otra parte, cuando se invita a dar una mirada a larga distancia, está bueno poder hacerlo y tener consistencia con ello. Cité, creo que fue en el día de ayer, la extensión del tiempo de los CERP –Centros de Educación Regionales Promovidos– durante la administración de Rama, que inicialmente se criticó, pero se continuó aplicando.

Las escuelas de tiempo completo no solo se continuaron, sino que se multiplicaron como nunca antes sucedió en los quince años de gobierno del Frente Amplio.

La política de Estado de 1995 de ampliar la cobertura a cinco años y luego a cuatro años, entre 2005 y 2020 se universalizó y se llegó aproximadamente al 77 % hasta 2020. Teníamos la expectativa de que se llegara a universalizar en este período o que, por lo menos, quedara bien cerquita, pero eso no sucedió. Se discontinuó el ritmo de inversión y la modalidad de la educación en tres años. La modalidad es técnicamente discutible en el sentido de que puede haber más de una mirada sobre ello y eso uno lo acepta, pero consideramos que se podría haber hasta «aprovechado» –dicho entre comillas– las circunstancias demográficas; me refiero al bono demográfico en cuanto a que al haber menos nacimientos, hay menos cantidad de niños y niñas para incluir en la educación pública uruguaya. Los cambios drásticos desde el punto de vista de los nacimientos eran una oportunidad para mejorar la cobertura por estudiante, individualmente considerada, en este caso por niña o niño.

Termino con esto, porque no quiero ocupar todo el tiempo del que dispongo.

Creemos que las metas que se propusieron no se alcanzaron. No debió haber habido jamás una demonización de los procesos educativos ni de los actores educativos. Si uno de verdad quiere mirar a largo plazo y hacerlo en términos de políticas de Estado, tiene que trabajar incluyendo la opinión de los demás, la opinión de actores educativos, que dicen que son relevantes. Por supuesto, si de verdad queremos hacer esto, la mirada debería incluir al Gobierno y a la oposición. ¡Ojalá esto sea algo que podamos concretar en los próximos cinco años!

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Por varias alusiones pido la palabra.

Hay una que no me gusta nada, porque no va conmigo. Los que me conocen, saben –lo sabe el colega Mahía– que yo no me trago nada; al contrario. Lo que pasa es que cuando no estoy en condiciones de hacer críticas, no empiezo a hacerlas.

La situación de la educación era y es terriblemente mala; en eso todo el mundo está de acuerdo, todos los técnicos. Trabajé en ella hasta el 2013; no estaba sentada acá con los sueldos y las comodidades del Senado ni de la Cámara de Diputados.

En segundo lugar, estoy absolutamente de acuerdo con que la flexibilización no debe aplicarse y ya dije en este ámbito que voy a ser una fiel custodio de que eso no se haga. El señor senador Mahía sabe cuál fue mi proyecto de educación –por eso lo consideré una alusión– y si no lo sabe se lo digo: más resultados y más exigencias; ante más condiciones de vulnerabilidad, exigencia y facilitación del Estado para que el principio de igualdad sea posible. No hablo de igualitarismo, sino de igualdad. Si en algún momento detecta que eso pasa, me va a escuchar a mí primero que a nadie decirlo; ya lo señalé en algún ámbito público.

¿Nosotros recurriremos a los Gobiernos del Frente? Y sí, qué vamos a hacer, si nosotros venimos después del Frente. Incluso, yo arranqué en la década de los sesenta, pero tampoco les sirvió. Incluso, hice el reconocimiento de que la crisis en la educación venía de mucho más atrás. Ahora bien, ustedes también nos tienen realmente hartos –esta es la palabra– arrancando siempre en el 2001. ¡Cualquiera que se compare con el 2001 va a salir ganando, porque en ese año se cayó el país! Y no vamos a discutir de quién fue la culpa, porque a esta altura tampoco es menos que nada. Ustedes arrancan siempre en 2001. ¡Y gracias que se pagaron los salarios en ese año, porque no nos dejaron de pagar un solo mes los salarios y las jubilaciones!

Voy a terminar con algo que me mandó mi secretario en este momento. Ya que tanto se hace referencia a *El Observador*, voy a pedir que lean un artículo del maestro Juan Pedro Mir, en donde afirma: «El único responsable del estado de la educación es el Frente Amplio». Recordemos que viene del Frente Amplio. Recién se fue porque se tuvo que ir. Y agrega: «No me arrepiento de lo que dije, no me arrepiento de lo que pasó. Fue un cambio radical en mi propuesta laboral […] Hoy le agradezco a Vázquez que me haya destituido de mi cargo».

Lean el resto del artículo. No es solamente Graciela Bianchi.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: mi intervención va a ser muy breve porque los compañeros que han hablado me han representado totalmente. Simplemente, quiero dar algunos datos y dejar algunas cosas plasmadas más a nivel filosófico.

El Gobierno recortó el gasto, concretamente en educación, porque la masa salarial de la ANEP en 2022 era de USD 120:000.000, inferior a la de 2019 en términos reales. Se trata simplemente de la reducción del salario real de los docentes y de la cantidad de horas docentes. Si sumamos lo que se les sacó a los docentes durante estos tres años, en términos reales, llegamos a USD 280:000.000. Basta ver esa situación, las enormes necesidades y el desafío que enfrenta la educación. No es ahorro ni eficiencia; solo se lo puede catalogar de recorte, lo que evidentemente compromete el futuro.

Se puede afirmar –como acá se ha dicho– que no importan los recursos, sino la gestión, pero sin recursos es imposible que la educación mejore. Ahora se cambió la palabra «reforma»; se habla de proceso y de transformación, pero la promesa electoral fue de «reforma». También se habló de la reforma del Estado y tampoco se dio.

Sea reforma o transformación, no puedo dejar de decir que aquí autoritariamente se trató y se trata de imponer cambios que implican menos grupos, menos cargos docentes y la desaparición o sustitución de asignaturas, pero todo sin diálogo. En lo personal, lo que más me preocupa es que la vida dentro de los centros es con docentes y estudiantes, que en muchos casos están con miedo. Esto es lo que quiero remarcar y por eso me anoté para hablar.

La educación es un ámbito muy especial en el que debe generarse un clima de creatividad, de investigación y de libertad para el libre pensamiento, la reflexión y la promoción de la criticidad como un valor; es bueno que se critique, que la gente se organice y se pueda avanzar porque hay diferentes puntos de vista. Sin embargo, es doloroso para mí, como docente, que mis colegas muchas veces sientan miedo, ya sea por el trabajo gremial, por las formas de acercarse a la comunidad, etcétera. Hay varios ejemplos, como el caso de los profesores de San José, el del director del IAVA o el de los estudiantes, a los que se les sacó un salón gremial y aún no lo han recuperado. Son elementos que están ahí, que aparecen en la cabeza de los docentes y evidentemente no condicen con un clima acorde a lo que la educación debe generar; eso no se dio en los períodos del Frente Amplio. De eso podemos sentirnos orgullosos, pero realmente la tristeza o la preocupación surge por lo que se da en estos tiempos.

Realmente, a nivel de la educación se debería intentar la concreción de una política de Estado, con una transformación o una reforma mediante el diálogo con quienes llevan adelante la tarea educativa dentro del aula. Es imposible hacer eso sin el acuerdo o, por lo menos, con el acuerdo de la mayoría de los docentes que no son los sindicalizados, que no son aquellos a los que se les puede decir: «Ah, porque son de izquierda». Las ATD –las integré y participé en ellas desde que se generaron y hasta que me jubilé– son ámbitos en los que todos los maestros, las maestras y los profesores están más allá de sus ideologías.

Es evidente que no puede salir algo bueno si no se genera ese clima que tiene que darse para que se produzcan cambios reales dentro de la educación.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: estamos en el inciso de la Administración Nacional de Educación Pública y, por ende, debemos recordar la enorme fuerza que tiene la educación pública en el Uruguay y que en nuestra historia nos ha conformado como nación. Además, en el 2022 esa educación pública le dio cobertura al 85,6 % del total de la matrícula de educación inicial, primaria, media básica y media superior del país. El resto, el 14 %, corresponde a la educación privada. Por lo tanto, estamos hablando de algo absolutamente central.

La ANEP en 2022 aumentó su ejecución en USD 27:000.000 con relación a la del 2021. Sin embargo, la ejecución del 2022 continúa estando por debajo de la del 2019 en USD 64:000.000. El recorte acumulado de los recursos asignados desde el 2020 es de USD 135:000.000 y el acumulado del gasto ejecutado es de USD 222:000.000. Son datos, no relatos; son datos objetivos. No hay duda de que no hay educación sin inversión y de que no hay educación sin docentes bien pagados, con salarios dignos.

La ANEP tiene en sus manos casi 3000 establecimientos educativos, entre los cuales hay 231 jardines de infan-

tes, 1950 escuelas primarias, 81 escuelas especiales, 307 liceos, 193 escuelas técnicas y 31 centros de formación inicial.

No voy a ingresar en la comparación, pero no porque algún senador está harto –como se dijo acá– de que siempre comparamos con el 2001. De todas formas, no voy a obviar decir que es totalmente equivocado el relato de que nosotros en nuestra Administración tiramos la plata. Si tirar la plata fue aumentar los salarios docentes, si tirar la plata fue hacer la infraestructura que se hizo, si tirar la plata fue poner profesor de Educación Física a todas las escuelas públicas del país, si tirar la plata fue crear el Plan Ceibal –esencial para enfrentar la pandemia–, si tirar la plata fue crear escuelas de tiempo completo –de tiempo extendido, a las que van mis nietos, y son estupendas, de verdad–, si tirar la plata fue crear CAIF o poner maestros comunitarios, habremos tirado la plata. Sinceramente, no creo que haya sido así. Creo que ningún ciudadano, medianamente sensible –y es la mayoría de los uruguayos, porque estamos casi todos cerca de la educación pública–, puede pensar eso.

Entonces, para no hartar a nadie, no voy a comparar con el 2001 ni con el 2019, con el que también hay una obsesión y fue el peor de los quince años de gobierno del Frente Amplio. Fue el peor de los quince años y todo se compara con el 2019, incluso, el déficit fiscal, que fue el más bajo. El único más bajo fue el de ese año, porque en los otros catorce años fue más alto. Ese es, a veces, un problema de juego político en el que no quiero entrar porque este tema es muy serio.

Solamente voy a comparar con lo que este Gobierno le dijo a la ciudadanía en su campaña electoral, en la que habló de un aumento suficiente de la asistencia a la educación inicial. En el documento *Compromiso por el país* se habla de que transformar la educación se mide con el porcentaje de alumnos de cuatro y cinco años que asisten más de 140 días de clase al año. La meta que se habían puesto para el 2022 fue del 75 %. Sin embargo, llegaron al 55,5 %. No estoy comparando con ninguna otra cosa más que con ustedes mismos.

Asimismo, se comprometió a aumentar la asistencia suficiente en la educación primaria urbana pública, que se mide también con el porcentaje de alumnos de educación primaria que asistieron más de 140 días al año. El valor meta del 2022 fue el 91 % y llegaron al 80 %.

El tercer punto del documento *Compromiso por el país* fue aumentar y sostener la cobertura en edades de doce y catorce años y la asistencia suficiente en educación media básica, que se mide con el porcentaje de alumnos que tuvieron menos de 50 faltas en el año. El valor meta para el 2022 en educación secundaria fue del 90 % y se alcanzó el 82 %. Peor aún: en la Dirección General de Educación Técnico Profesional se aspiraba a un valor del 90 % y se llegó al 77,7 %.

En el documento *Compromiso por el país* también se hablaba de aumentar el egreso en la educación terciaria, que se mide con la tasa de egreso oportuno de cursos técnicos terciarios. El valor meta que se propuso este Gobierno para el 2022 era de 29 % y llegaron al 15 %, prácticamente la mitad, y se observa que todavía hay una cantidad de centros que no cargaron los datos. Por lo tanto, tampoco podemos decir que sea absolutamente veraz esta información.

Esto es muy contradictorio con el primer punto del documento *Compromiso por el país*, que hablaba de ampliar la cobertura, profesionalizar, fortalecer la atención de la primera infancia con foco en el niño y su derecho a ser cuidado y desarrollado y a aprender.

Entonces, ¿qué queremos decir? Es una rendición de cuentas importante, vuelvo a repetir, porque marca el rumbo hasta el 2026 en un tema tan central como es la educación pública. No tenemos más remedio que venir a poner estos temas sobre la mesa, sin dejar de lado lo que hicimos nosotros –que podemos defenderlo con la cabeza muy levantada– y sin dejar de aceptar que se pudo haber cometido errores, como todo el que hace, y el que hace mucho puede cometer algún error más.

Realmente nos da la sensación de que este único artículo, de que este cero presupuesto que el Poder Ejecutivo envió es una señal, es una señal clara del valor que se le da a la educación. Cuando hablamos de la pobreza y cuando hablamos de la indigencia, sabemos que la herramienta principal de ascenso social es la educación y su fortalecimiento.

Por lo tanto, queríamos dejar en claro que para nosotros el presupuesto de la ANEP no responde ni de cerca a las necesidades que hoy tienen el Uruguay, sus niños, sus jóvenes y ese futuro que además nos desafía con la transformación de la producción del trabajo, de la tecnología que va a requerir cada vez más niños y jóvenes formados.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tienen la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Creo que hay temas de los que hay que hablar con absoluta sinceridad. No se puede andar con gre gre para decir Gregorio y pienso que siempre lo he hecho dentro de mis limitadas posibilidades retóricas…

SEÑORA KECHICHIAN.- Todos hablamos honestamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- No dialoguen, señores senadores.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Yo no dije que no se hablara honestamente; digo que voy a expresar lo que realmente siento sobre el estado de nuestra educación.

Nuestra educación es heredera de la educación colonial, heredera de la educación vareliana, heredera de grandes polémicas a principio del siglo XX, pero desde mediados del siglo XX entró, en todos los niveles, en una creciente y progresiva decadencia.

Me parece bien que se reclamen más recursos, pero yo digo: ¿los recursos que tenemos los usamos correctamente? ¿Usamos correctamente el dinero que le votamos a la educación? Creo que no.

Tenía conocimiento en las décadas de los sesenta y de los setenta del enorme ausentismo de los docentes, de los paros y huelgas; se trabajaba en la actividad privada y no se trabajaba en la actividad pública. Transité por la educación privada, pero también transité por la educación pública. Soy un gran partidario de la educación pública, no en balde fui durante treinta y ocho años docente de la Facultad de Derecho.

Hay que reconocer, como le decía a un amigo días pasados, que los que egresamos de la Universidad pública somos sobrevivientes, porque las dificultades que tiene un estudiante de la Universidad pública no las tiene, obviamente, un estudiante de las universidades privadas. La primera dificultad que teníamos era que mucha gente iba a la Universidad pública a hacer proselitismo político; digámoslo sin pelos en la lengua. Se ha utilizado a la enseñanza como un campo de debate político, y eso es algo que está muy mal. ¡Es algo que está muy mal! Si hay algo deleznable, es el proselitismo político en la enseñanza. ¡Y tenemos que decirlo! Muchos de los recursos de la enseñanza se dilapidan en eso: en hacer proselitismo político. No me lo van a decir a mí, porque yo lo viví en el IAVA, cuando entraba por ese lugar que ahora resulta que es un salón estudiantil. ¡No, señores! Es la entrada lateral del IAVA, por la calle Eduardo Acevedo, la que atravesé innumerable cantidad de veces.

Ahora bien, si se quiebra el respeto a la autoridad, si se pretende adoctrinar a nuestros jóvenes, si se pretende hacer de la educación un campo de batalla política –como vemos que sucede a nivel de la Universidad, donde todas las listas del orden estudiantil responden a agrupaciones políticas de la oposición y del Gobierno–…

SEÑOR SABINI.- Fuera de tema.

(Murmullos en sala).

SEÑOR DOMENECH.- ¡No! Está totalmente dentro del tema porque estamos hablando…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: si tengo que leer nuevamente el artículo que leí ayer, que interpreto de una forma y el resto, cuando habla, de otra, todos están fuera de tema o la gran mayoría lo está. Entonces, como no lo hice con ninguno, no lo voy a hacer con el senador Domenech y lo voy a amparar en el uso de la palabra.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Creo que la educación tiene dos problemas y uno de ellos es su politización. A tal extremo es así, que aquí se dice que se defiende la educación pública, pero conozco senadores que mandan a sus hijos a la educación privada. ¿Esa es una forma de defender la educación pública? ¡Y no voy a dar nombres! No obstante, si hacen un examen de conciencia, tendrán que consentir en que estoy diciendo la verdad.

Entonces, defendamos la educación pública, porque es la única forma en que los pobres pueden ascender socialmente, pero no entretengamos a los jóvenes con discursos políticos y con proselitismo de ninguna clase. Lo que desalienta a muchos jóvenes de continuar en la educación –y lo vivo con gente cercana– es ir al centro de estudios y encontrarse con que no fue el profesor, hay un paro, una huelga o alguna actividad que impide que tengan clase. Creo que tenemos que sincerarnos un poco. ¿Realmente, estamos utilizando la educación para lo que deben ser sus fines o queremos instrumentarla para conseguir un objetivo de carácter político?

Quiero ser respetuoso del tiempo de los colegas, pero creo que estas cosas hay que decirlas y me gusta hacerlo frente a los jóvenes que nos están escuchando y que pienso que tienen una sincera preocupación por su futuro. El único futuro de la educación se dará cuando los educandos asistan a clase, estudien y puedan rendir satisfactoriamente sus exámenes. Es cierto que seguramente hoy hay muy malos resultados en la educación pública, como también los hubo durante los quince años del Gobierno del Frente Amplio. Entonces, es necesario que en algún momento reaccionemos frente a las causas profundas de esta decadencia de la educación pública, que a todos nos duele, porque es el mejor instrumento que tenemos para que el Uruguay se proyecte hacia un mejor futuro, que seguramente es lo que todos deseamos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Aparentemente se entiende que dentro de las instituciones educativas existe proselitismo, ¿en aras de quién? Del Frente Amplio, de la izquierda. ¡No sé qué es lo que se piensa! Creo que eso no

se puede dejar pasar, porque no es real. Hacer paro es un derecho de los trabajadores, que lo han ganado con sus luchas y nadie debería cuestionarlo. La Constitución, desde el período de Batlle, dice que hay que promover los sindicatos y que esa sería una tarea del Estado. No se puede dejar pasar que se diga que hay proselitismo político en nuestras instituciones educativas. Se puede discrepar de la forma en que libremente se agremian los estudiantes. Creo que hasta el día de hoy los estudiantes del IAVA no tienen otro salón sustitutivo y habría que ver si está bien que tengan su sala o no. Algunos podrán decir mejor no, eso no está bien, no debemos darles esa libertad; yo opino lo contrario. Creo que está bueno que los estudiantes de determinada edad se organicen también y puedan reclamar por sus derechos.

Quería dejar esta constancia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una aclaración vinculada al tema presupuestal.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Acá tengo los presupuestos ejecutados en el período 2015-2019 y en el 2020-2025. Si tomamos los tres primeros años del Gobierno anterior y los tres primeros años de este Gobierno, nos vamos a encontrar con que el consolidado del gasto en educación, en términos reales, creció un 5,84 %. ¿Cómo se desglosa eso? Existió una caída del 25 % en el gasto del Ministerio de Educación y Cultura, un crecimiento de 7 % en el gasto de la ANEP, un 8 % en el gasto de la Udelar y un 72 % en el de la UTEC, lo que nos da ese crecimiento. El consolidado de la educación es de 5,84 % de crecimiento en términos reales comparando 2015, 2016 y 2017 con 2020, 2021 y 2022.

Nada más, señora presidenta.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑORA SANGUINETTI.- Seré breve porque ya llevamos varias horas discutiendo este inciso. Simplemente voy a hacer tres precisiones.

Creo que hace dos años, vino una experta finlandesa a contar un poco lo vinculado a la educación en un país que vaya si será referente en el mundo. En esa oportunidad, le pregunté cada cuánto tiempo realizaban las reformas educativas. Me mostró un período bien largo y señaló que, en promedio, Finlandia cada diez años hacía una reforma educativa. ¡Vaya si será necesaria y bienvenida esta transformación y si será necesario ejercitar el músculo como decía una senadora!

Me parece que es justo mencionar la cabeza intelectual detrás de esta transformación, que es la doctora Adriana Aristimuño. Para cualquiera que la escuche –acá ya no hablo como miembro de la coalición, sino como uruguaya– creo que es motivo de orgullo por su solvencia, su formación. En definitiva, no podemos dejar pasar esta discusión sin mencionarla, porque está haciendo un esfuerzo titánico y agregando un valor absolutamente significativo.

Para finalizar, como se habló de los resultados, quiero decir que no hay transformación educativa en el mundo que dé resultado en el corto plazo. Esto es así acá y en Tanganica. Entonces, desde mi punto de vista, sería una falta de honestidad intelectual enorme pretender que una transformación educativa de la envergadura de la que estamos embarcados dé resultados ahora.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Realmente, a los números se les puede hacer decir muchas cosas. El gasto público en educación llegó al 4,9 % en 2019 y bajó al 4,6 % en 2021; seguramente baje nuevamente. Todavía no tenemos el dato del producto de 2022, pero es probable que, por razón del crecimiento, baje. Ahora pasemos a lo ejecutado.

No se ponga nervioso, senador.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, diríjanse a la Mesa.

Continúe, señor senador.

SEÑOR SABINI.- Justamente como estamos hablando de la ANEP, para no irme de tema, en el 2017 se ejecutaron –aunque podríamos hablar de lo asignado– $ 86.000:000.000; en 2018, $ 89.141:000.000, y en 2019, $ 92.000:000.000. A su vez, en 2020 se ejecutaron $ 89.297:000.000; en 2021, $ 87.727:000.000, y en 2022, $ 88.235:000.000. Entonces, a los números se les puede hacer decir cualquier cosa, pero 92.000 es más que 88.000, por lo menos en mi ábaco. Y si uno mira la variación presupuestal, verá que en la ANEP la cifra es menor. Es decir, la ANEP tuvo una variación negativa, por supuesto. Cuando uno tiene tres años que viene en crecimiento y después tiene la constante, le puede dar más, pero eso es hacer hablar a los números. Lo cierto es que la ANEP tiene y ejecuta menos plata. Esa es la realidad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Yo no puedo aceptar eso de que a los números se les puede hacer decir cualquier cosa, porque he hecho una comparación de los tres primeros años de cada uno de los quinquenios, y el senador puede tener la certeza de que cuando termine este año y el próximo va a tener bastante más que esa cifra que mencionó. De manera que la comparación es así y no hay vuelta.

Se ha invertido en educación –porque el gasto en educación es todo inversión– un 5,84 % más en este período que en el anterior, comparados los tres primeros años de cada quinquenio, como dije claramente. El crecimiento en la ANEP, particularmente, es del 7 %. No voy a involucrar a la senadora Kechichian en el tema, pero recién pedía no comparar con el 2019 y ahora el senador Sabini nos pide incorporar el 2019 en la comparación. El 2019 va a ser un año que va a ser comparado con el 2024, y puede quedarse bien tranquilo de que la cifra va a ser bastante superior a $ 92.000:000.000.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 467 tal cual lo manifestó el presidente de la comisión.

(Se vota).

–17 en 28. **Afirmativa.**

En consideración el inciso 26, «Universidad de la República».

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Propongo que se voten en bloque los artículos 469 a 473.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos 469 a 473, que fueron aprobados por unanimidad en la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 468.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Nosotros no habíamos votado el artículo 468 en su momento, porque el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes venía con $ 120:000.000 para la sala de salud mental en el Hospital de Clínicas y esa cifra se había bajado a $ 100:000.000. Dado que luego se propuso un aditivo por el que se otorgan $ 150:000.000 para la construcción de una nueva infraestructura del Hospital de Clínicas, creemos que ahora corresponde acompañar el artículo 468.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Quiero referirme brevemente al inciso Universidad de la República.

En primer lugar, quiero aclarar que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no traía artículos sobre este inciso y que la distancia con la solicitud de la Universidad era muy importante. La Cámara de Representantes incorporó una serie de artículos que reasignaron recursos. Son todos los que están menos el artículo 469, que fue agregado por el Senado.

El primero de ellos destinaba $ 120:000.000 a incorporar un programa de salud mental al Hospital de Clínicas. No estaba incluido; no estaba financiado. Estamos hablando de la principal puerta de emergencia del país, donde están las cátedras vinculadas al tema. Por lo tanto, no podía quedar afuera. En diálogo con el director del Hospital de Clínicas, doctor Villar, nos dijo que había solicitado $ 100:000.000, pero en toda la reasignación obtuvo un poco más. Cuando desde el Senado tuvimos que armar una reasignación de recursos para incorporar USD 31:000.000 –porque hubo que encontrar cómo financiar esa cifra–, entendimos que si en el artículo 469 incorporábamos una partida de $ 150:000.000, podíamos ir al pedido original y llevar esa cifra, entonces, a $ 100:000.000. Creemos que con los $ 100:000.000 que establece el artículo 468, el Hospital de Clínicas podrá cumplir con el cometido –por lo menos en esta etapa, como todo el Estado– para salud mental. En el artículo 469 se inicia un proceso para la construcción del nuevo Hospital de Clínicas.

Este es un compromiso que inicialmente planteó el presidente de la república en su informe al Parlamento el 2 de marzo de 2022. En ese momento dijo que el país merece un nuevo Hospital de Clínicas para el 2030 y esa iniciativa fue bien recibida por la Universidad, por los colectivos universitarios, por el sistema político, sin que en ese momento estuviera definido ni siquiera cuál era el modelo de gestión o de ejecución futura.

Con el tiempo el trabajo en la Universidad fue definiendo un plan, que ahora ya tiene un proyecto ejecutivo. La primera decisión que tuvo que tomar la Universidad fue si iba por un nuevo edificio –quizás en el mismo terreno donde está ubicado hoy el hospital– o hacia una remodelación profunda de su actual estructura, que ha demostrado ser muy noble, muy resistente y adaptable. Y llegó a la conclusión de que lo que debía hacer era bajar el hospital, en lo que refiere a su ubicación dentro del edificio; concentrarlo, y reequiparlo, reacondicionarlo. La propuesta es desarrollar el hospital desde el piso 11 hasta la planta baja, y del piso 12 hacia arriba hacer un modelo de otra gestión educativa, de investigación, de laboratorios, etcétera. Quizás también pueda desarrollar alguna actividad que le permita cierta rentabilidad al propio hospital por la venta de servicios médicos, pero siempre está prevista la posibilidad de la readaptación ante la emergencia. La idea es que, si el país llegara a necesitar más camas por una situación de emergencia, algunos de esos pisos rápidamente se puedan transformar en salas y recibir nuevas camas, nuevos pacientes.

Para ese modelo ya se ha presentado el proyecto ejecutivo y se sabe que tendrá un costo que no va a bajar de los USD 100:000.000. La Universidad dice que, si queremos tener un Hospital de Clínicas en 2030, hay que empezar las obras en 2026. Se necesitan recursos hoy, en primer lugar, para poder trabajar en un llamado a licitación, lo que requiere estudios previos muy importantes. Además, se podrían empezar los trabajos. Con estos $ 150:000.000, la Universidad y el Hospital de Clínicas nos dicen que podrían presentar al presupuesto quinquenal de 2025 una solicitud de recursos para alcanzar este objetivo, pero además podrían empezar ya algunas reformas. Dentro de ellas, la primera es bajar la sala de operaciones, el quirófano, del piso 17.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador. Mientras usted está hablando hay circulación en la barra. Quienes nos visitan saben que en la barra no se puede estar circulando, por un tema de seguridad, de manera que les agradezco si colaboran con nosotros en el cumplimiento de esta medida.

Muchas gracias.

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Decía que la Universidad sabe lo que le va a costar la obra, pero también sabe ya que con estos recursos puede comenzar un proceso de transformación llevando el quirófano y demás al sector más bajo –no sé si es planta baja o primer piso–, muy cerca de la puerta de emergencia, incorporando tecnología, tomógrafos, etcétera. Es decir, se trata de incorporar todos los nuevos conocimientos y tecnologías disponibles.

Quizás no advertí que votamos ya este artículo 469. Iba a proponer un pequeño cambio *in voce*, porque surgió la duda con respecto a la partida de $ 150:000.000 que aquí está establecida. Como no dice que sea anual ni para el período y además está referida a un destino que es de inversión –el financiamiento de la ejecución de obras–, podría interpretarse que es por única vez. Por lo tanto, iba a proponer que se aclarara que se trata de $ 150:000.000 anuales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Veamos si nos ponemos de acuerdo. El artículo 469, que ya fue votado y que tiene que ver con la partida para la Universidad de la República para construcción, como dice el senador, tiene una redacción que podría malinterpretarse. Entonces, si les parece bien, voy a poner a votación la reconsideración el artículo para después habilitar a que se proponga, *in voce*, la modificación planteada.

Se va a votar la reconsideración del artículo 469.

(Se vota).

–29 en 29. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 469.

Pido al señor senador Gandini que aclare para la versión taquigráfica cómo quedaría redactado el artículo.

SEÑOR GANDINI.- Después de «“Hospital de Clínicas”, con cargo a la Financiación 1.1 “Rentas Generales”, una partida» hay que agregar la palabra «anual».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 469 con la modificación propuesta por el señor senador Gandini.

(Se vota).

–29 en 29. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR RUSSI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUSSI.- Quiero manifestar el beneplácito ante lo planteado por el senador Gandini y hacer un breve comentario en cuanto a que nuestro Hospital de Clínicas realmente ha sido la cuna de todos nosotros. Creo que, como bien dijo sucintamente el senador, es un hospital que tiene muchos años, pero una absoluta modernidad en su concepción edilicia. Además, tiene una adaptabilidad para cosas que incluso hoy no están planteadas, pero que pueden aparecer en el futuro.

Voy a citar algún ejemplo, mínimo, para consolidar este tema. En esta crisis de la sequía y del problema del agua, pudimos rescatar el agua del pozo, pero a su vez

aquellos que estamos en la gestión hospitalaria vemos que actualmente en los modernos hospitales independizamos el agua que va a los sanitarios de la que se utiliza en la cocina, etcétera. El Hospital de Clínicas no solo ya tenía esto incorporado, sino que funcionaba adecuadamente. Con la reinstalación del agua de pozo, que se pudo controlar semanalmente con técnicos del propio hospital, vimos que su calidad era igual o mejor que la de OSE. Tanto es así que actualmente se la sigue utilizando y la estamos brindando, también, a servicios asistenciales anexos al Hospital de Clínicas. Creo que este es uno de varios detalles importantes que demuestran la viabilidad que tiene esa obra, porque en algún momento se nos planteó la posibilidad de tirar abajo el edificio.

En definitiva, estamos muy de acuerdo con el artículo que acabamos de votar. Creemos que este es un desafío, pero además un ejemplo de que proyectos de este tipo pueden ser apoyados por todos, más allá de las diferencias ideológicas o filosóficas que podamos tener.

Quiero recordar también que cuando empezó la pandemia nos preocupó el hecho de que el Ministerio de Salud Pública y ASSE no nos tuvieran en cuenta. Digo «no nos tuvieran» porque soy hijo del Hospital de Clínicas y me siento todavía vinculado, más allá de que ya estoy jubilado. En aquel momento la dirección y los docentes plantearon que el hospital se tenía que poner a disposición de la población para poder hacer la vacunación y realmente fue un ejemplo, porque 526.000 uruguayos desfilaron por allí.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya finalizo, señora presidenta.

Eso determinó que ASSE planteara al Hospital de Clínicas que fuera referente para la vacunación de todos los extranjeros y que se incorporara al servicio de vacunación nacional.

En suma, me parece muy bueno lo que plantea el señor senador Gandini. Considero que es mejor aún que lo votemos unánimemente. Además, también es un gran desafío, porque allí tenemos un capital –no solo para la atención, sino también para la educación y para poder transformar la sociedad– que, evidentemente, va a ser un elemento con un gran futuro para todo el país. Insisto: este es un ejemplo de que, en temas como la educación, la salud y el trabajo, que tienen que ser asuntos de Estado, podemos ponernos de acuerdo, y también es un ejemplo para quienes nos escuchan porque, más allá de las diferencias que tenemos en muchos de estos planteos, podemos coincidir en estos casos, lo que le hace muy bien a la sociedad uruguaya.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a aclarar que el señor senador Russi está jubilado de médico, pero que está activamente como senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 468.

(Se vota).

–28 en 28. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Por nuestra parte celebramos que se haya logrado esta votación unánime en estos aspectos, particularmente en lo que refiere al Hospital de Clínicas, que permiten que se asuma este compromiso presupuestal y que, además, nos involucran para próximas Administraciones, cualquiera sea el partido que gobierne. Obviamente, esta ley de rendición de cuentas va a estar vigente por un período acotado, pero refleja una política de Estado, como muy bien señalaba el señor senador Russi.

Con respecto a la Universidad de la República, quiero hacer una serie de comentarios.

En primer lugar, si analizamos no solo con una mirada de largo plazo estos años de Gobierno, sino particularmente la rendición de cuentas, vemos que la ANEP, la Universidad de la República, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y el Inisa son cuatro de los incisos que más perdieron. Particularmente, el gasto real se redujo un 6 % respecto a lo que se pedía como referencia anteriormente, que es el 2019. La masa salarial de la Universidad de la República, en términos reales, está un 4 % por debajo del mismo año, lo que representa unos USD 18:000.000. Si a eso le sumamos la disminución de los tres años, el recorte en la masa salarial es de aproximadamente USD 42:000.000.

A lo dicho agrego que es claro el rol que ha jugado la Universidad de la República en estos tiempos de pandemia. Hay que destacar la valoración que hemos tenido los uruguayos en general sobre la ciencia y el aporte realizado, que ha significado, en algunos aspectos, un diferencial de nuestro país con respecto a otros de la región. Esto para nosotros es un símbolo de orgullo y de identidad nacional. Por ejemplo, los tres grandes referentes del GACH o por lo menos los más visibles eran hijos directos de la Universidad de la República.

Creemos que dentro de los aspectos más importantes a destacar –y así lo hizo el informe de la Universidad la República, que fue muy serio, muy completo, muy riguroso– está el crecimiento que tuvo la Udelar en el interior. Es decir, el interior de la república ha tenido un cambio en cuanto a las oportunidades de formación a nivel universitario como no ha existido en la historia del país en los

últimos años. Esto ha sido, fundamentalmente, por los énfasis presupuestales que existieron hasta el 2020 y también por las políticas educativas que ha llevado adelante la Universidad de la República. Sin embargo, esto va a generar un problema importante en estos años, porque a pesar de ser una ventaja y algo positivo que haya más cantidad de uruguayas y de uruguayos matriculados que hayan podido acceder al nivel de estudios universitarios, la falta de refuerzo presupuestal da un solo resultado: que haya mayor cantidad de estudiantes por aula o por unidad de aprendizaje. Por lo tanto, va a haber mayores dificultades para el trabajo y los aprendizajes a nivel universitario en las distintas carreras que tiene la Universidad de la República. Es una ecuación muy sencilla y fácil de despejar. Es claro que un aumento de la matrícula con más o menos la misma cantidad de docentes afecta la calidad del trabajo de quienes forman a nuestros universitarios e indirectamente puede generar condicionamientos en los aprendizajes.

Por eso teníamos especial interés en que en este mensaje de rendición de cuentas –que es el último hasta la vigencia de un nuevo presupuesto nacional, recién en el 2026– pudiéramos rescatar al menos dos aspectos.

En primer lugar, ojalá que dentro del tsunami de aditivos y sustitutivos que tenemos hubiera alguno que refiriera, por ejemplo, a los cargos de alta dedicación, que, como todos sabemos, son cubiertos en muchos casos por jóvenes que se formaron en otros países y deciden retornar para continuar su trabajo en el país, brindando su conocimiento y formación de muchos años. Sin un adecuado énfasis presupuestal, sin recursos, va a ser muy complicado mantener, por lo menos, el ritmo con el que se venía trabajando hasta ahora. Además, creo que es uno de los aspectos que más hay que enfatizar porque refiere, en este caso, a la calidad que podemos tener nosotros como país a la hora de los aprendizajes a nivel universitario.

El otro tiene que ver con la posibilidad de extender las becas. Todos hemos hablado en sala sobre la situación económica y social del país y el crecimiento que ha habido en la demanda de becas por parte de las familias uruguayas. El acceso a una beca implica para muchos jóvenes la posibilidad de seguir estudiando o de empezar a estudiar, y su falta o insuficiencia es también la falta o la insuficiencia de oportunidades a la hora de seguir estudiando a nivel universitario.

Quiero terminar con un comentario.

En su momento iba a hacer una aclaración sobre una apreciación que hizo el señor senador Domenech, pero como iba a hablar después por este otro tema, esperé hasta este momento para hacerla.

El senador hacía una serie de valoraciones, que no comparto pero respeto, en cuanto a determinadas situaciones en la Universidad, pero además hacía una interpelación. Por lo menos yo personalmente quiero decirlo con todas las letras. Todos recordamos que el exsenador Olesker frecuentemente dividía sus intervenciones en varios puntos, pero en mi caso voy a dividir este comentario solamente en dos partes.

En primer lugar, respeto a mis colegas que pueden y quieren enviar a sus hijos a la educación privada. Es una opción que legítimamente tienen todas las uruguayas, los uruguayos, las familias con relación a sus posibilidades. Si acá hay senadoras o senadores cuyos hijos o familiares directos van a la educación privada, es una opción que tienen en cuanto puedan pagarla.

En segundo lugar, en términos personales, mis hijos han ido siempre a la educación pública, desde educación inicial hasta la Universidad de la República. Lo digo porque en este caso es un dato de la realidad. Y agrego: a veces siento que se le cargan determinadas responsabilidades y se le hacen críticas a la Universidad de la República, entiendo que en muchos casos en forma exagerada, pero creo que hay que plantearse qué pasaría si acá no existiera la Universidad de la República. Todos sabemos –espero que no me lo recuerden los miembros del Partido Nacional– que fue fundada por Oribe, y la segunda, la UTEC, se fundó con José Mujica. Ya vamos a hablar de ella. No es el punto. El punto sí es que gracias a la Universidad de la República hay una gran cantidad de gente que pudo recibirse y ser universitaria. Estamos hablando de la enorme mayoría de los profesionales, y eso hay que agradecerlo y reconocerlo porque, de lo contrario. el camino es pagar, poner plata.

Por lo tanto, luego de haber egresado de la Universidad pública –a la que todos, por supuesto, contribuimos–, el primer reconocimiento que hay que hacer, por supuesto, es a la sociedad uruguaya, en cuanto a los aportes que realiza, pero también a la institución. La Universidad de la República es la responsable fundamental de que muchos que hoy tienen títulos universitarios y a veces la denostan puedan decir que hicieron tal o cual carrera universitaria. Lo pudieron hacer porque hubo una institucionalidad que lo permitió, pública en este caso, autónoma y cogobernada.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero señalarle al senador Mahía –por el que tengo gran estima personal y también, subrayo, grandes diferencias políticas– que cuando yo hice esa afirmación de que había senadores de la oposición que mandaban a sus hijos a la educación privada, no lo hice con el afán de interpelarlo, sino de demostrar que había personalidades políticas de la oposición que estaban reconociendo el mejor nivel de la educación privada, cosa

que es terrible, porque nos está demostrando que hay una educación para pobres o personas que no tienen recursos y otra para gente que tiene disponibilidad económica.

En segundo término, soy un orgulloso defensor de la Universidad de la República. Tengo tres títulos universitarios expedidos por la Universidad. Nunca perdí un examen. Me recibí en seis años, que es el tiempo que corresponde a las profesiones de abogado y de escribano, y luego hice los cursos complementarios para ser doctor en Diplomacia, aunque quizás no me tendrían que haber dado ese título porque no soy nada diplomático.

Estoy agradecido con la Universidad de la República y tengo un alto concepto de ella, pero eso no me exime de hacerle críticas. Una de las críticas, que incluso le hice saber al propio rector en cada oportunidad que tuve, es que la Universidad de la República no puede seguir fabricando abogados, escribanos, contadores, y no sé si médicos –eso lo dirá el doctor Russi–, porque el Uruguay necesita otros técnicos. Estamos dilapidando dinero y frustrando gente al hacerla estudiar cosas que no le permitirán tener un futuro laboral plausible, venturoso. Creo que tenemos que criticar a la Universidad de la República en las cosas que hace mal y felicitarla en las que hace bien. Ha sido una Universidad señera, pero también debemos reconocer que en la valoración a nivel internacional ha perdido mucho pie y tenemos que ser conscientes de eso.

En ese sentido, tengo que ratificar que aprecio como institución a la Universidad de la República, pero obviamente, como todas las cosas públicas, no está exenta de crítica.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- El debate de vocación versus futuro laboral lo dejamos para otra instancia.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Voy a ver si en este inciso tengo más suerte para convencer a algunos senadores del oficialismo sobre la reducción presupuestal. Voy a tomar los números que presenta la propia Universidad de la República.

Para 2005 y 2009 la variación presupuestal fue de un 75 % de aumento; entre 2010 y 2014, un 22,3 % de variación presupuestal positiva; entre 2015 y 2019, un 20,1 % de aumento, también presupuestal, y con los números actuales –quizá esto pueda variar un poco–, entre 2020 y 2024, una reducción del 2,6 %. Tomé el criterio que usó algún legislador con respecto a la ANEP, es decir, comparando períodos.

Si ese argumento no convence, podemos ir nuevamente a lo ejecutado, donde pasamos de $ 23.000:000.000 en el 2019, a $ 21.926:000.000. Creo que el indicador más fuerte que señala la caída presupuestal que ha tenido la Udelar –es un indicador que claramente habla de la calidad de la educación– es el gasto por estudiante, que pasó de USD 4686 a USD 3404. Ahí tenemos una caída muy importante: no solo se dio una reducción en el presupuesto de la Universidad de la República, sino que hubo una reducción del presupuesto por estudiante, producto del aumento de la matrícula.

La Universidad que conocimos hace veinte, treinta o cuarenta años es muy distinta a la actual; esa es una gran noticia. Pasó de tener 60.000 estudiantes a prácticamente 150.000. Incluso, en quince años pasó de tener 3000 estudiantes en el interior a más de 20.000. Se trata de un aumento del 600 %, que fue posible por los aumentos presupuestales.

Quiero reconocer el esfuerzo que han hecho los legisladores aquí. Es verdad: acá los legisladores intentaron, de alguna forma, zurcir lo que el Gobierno no hizo, porque no mandó ningún artículo relativo a la Universidad de la República en cuanto a lo que era la solicitud presupuestal de $ 4.320:000.000. Esta solicitud presupuestal tenía que ver, justamente, con reducir esta tendencia y cambiarla para volver, en definitiva, a una relación docente-alumno más razonable –no digo óptima, pero por lo menos razonable– y para establecer a los docentes en el interior. Esto es fundamental si queremos que se desarrolle la investigación científica y que eso tenga una vinculación con el medio, tal como creo lo explicó muy bien el rector en la comisión. Sin esa dedicación total es muy difícil generar una masa crítica que permita efectivamente desarrollar procesos de carácter universitario en el interior. Además, entiendo que la Universidad ha hecho un gran trabajo en la creación de centros de carácter regional con ofertas que, justamente, vayan en sintonía con los territorios.

Esto tiene mucho que ver también con lo que hace la UTEC, pero si miramos cómo evolucionó su presupuesto, podemos notar que prácticamente es el único organismo de la educación que ha tenido aumentos importantes. Si analizan el presupuesto de la UTEC y el de la Udelar por estudiante –esto yo ya lo he mencionado– se van a llevar unas cuantas sorpresas. La inversión en la UTEC prácticamente es el triple que en la Udelar. Por supuesto, estamos hablando de una institución nueva frente a otra que tiene muchos años. De alguna forma esto deja entrever algunas políticas que, habiendo sido uno de los redactores del proyecto, no me terminan de convencer.

Señora presidenta: creo que la Udelar ha sido muy responsable en lo que nos ha planteado y nos quedan muchos debes. Por ejemplo, nos pide $ 220:000.000 para becas y nosotros estamos dando $ 20:000.000; la Udelar nos solicita $ 1.300:000.000 para revertir la tendencia negativa del gasto por estudiante y nosotros –el Estado,

digamos– le estamos dando cero. Para mejorar el salario universitario solicita $ 970:000.000 y le estamos dando cero; para consolidar los Centros Universitarios Regionales pide $ 249:000.000 y el Parlamento le está asignando $ 30:000.000; para desarrollar el Centro Universitario Regional Suroeste, pide $ 130:000.000 y le estamos dando $ 30:000.000 ¿Para qué digo esto? Para que después no nos sorprendamos cuando decimos que queremos la Universidad en el interior.

Algo que marcó el rector es que este enfoque, es decir, el hecho de que el Parlamento dirija recursos –no es algo nuevo–, en buena medida también debilita las facultades de Montevideo, algunas de las cuales tienen enormes problemas de infraestructura. Para garantizar, justamente, el flujo de dedicación total, la Universidad pide $ 116:000.000 y se le están otorgando $ 40:000.000. Para la nueva Facultad de Química pide $ 330:000.000 y no se le está dando nada, y lo mismo para la sede de Paysandú. Aquí quiero recordar que el rector dijo que los recursos no estaban; quizás alguna parte venga de la intendencia, pero el resto no lo sabemos.

Entonces, señora presidenta, cuesta entender esto cuando el Gobierno dijo que la ciencia iba a estar en el centro de sus preocupaciones. No sé si fue en esta campaña aquello de «vamos a innovar», pero no sé con qué van a innovar. Me acotan que fue en la anterior. Entonces, ya no vamos a innovar porque, en conjunto, la ciencia y la tecnología han perdido presupuesto, mientras que la Udelar –que es donde se produce más investigación y más del 80 % del conocimiento del país– ha sido sumamente afectada; diría que ha sido la institución más afectada dentro del sistema público. Eso es lo que marcan los números.

Realmente me hubiera gustado tener un proyecto de ley de rendición de cuentas que en parte solucionara estos problemas si es que realmente queremos entrar, como sociedad, en un mundo que apuesta al conocimiento. Creo que con este presupuesto, señora presidenta, estamos muy lejos de ser un país que apuesta al desarrollo, de ser un país que apuesta a la igualdad.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- En la misma comparación que hacíamos de los tres primeros años de cada quinquenio, el acumulado del 2020, 2021 y 2022, en términos reales y a valores del 2022, es de $ 65:485.726 contra $ 60:417.404. Es decir que tenemos un 8 % de incremento en términos reales a valores del 2022 en lo que ha sido la asignación presupuestal y la ejecución por parte de la Universidad de la República. Sin embargo, no quería referirme a ese tema, señora presidenta, sino elogiar el esfuerzo que está haciendo la Universidad por implantarse en el interior y por cómo está reforzando las diferentes sedes. Hay acá unas partidas destinadas a eso, de $ 30:000.000, para la sede suroeste y de otros $ 30:000.000 para su sede regional este.

Como bien decía el señor senador Sabini, hay plata para reforzar la dedicación total de los docentes y algunos dineros para las becas. De verdad hay un esfuerzo importante de descentralización de parte de la Universidad, que es lo que quería valorar. Esa descentralización fue hecha de dos maneras: con presencia física y con educación a través de las plataformas informáticas, que es una cosa nueva en nuestra Universidad. Esto se tuvo que acelerar con la pandemia; hubo que hacer una fuerte inversión y, sin dudas, la Universidad allí tuvo aciertos continuos en cuanto al *software* que eligió y al modo de dictar los cursos. Por supuesto, tuvo carencias de docentes cuando se volvió a la presencialidad, porque es obvio que hay que atender a dos tipos de estudiantes: los que están por la plataforma y los que están de modo presencial. Esto, como dije, generó carencias de docentes. Ahora, paulatinamente, con estos recursos, con esfuerzo, con mucha inteligencia y con ahorros por otro lado, la Universidad empieza a ir subsanando esos problemas.

Yo quería celebrar lo que ha sido ese lindo esfuerzo que se viene haciendo por abandonar una universidad reproductora de desigualdades sociales. La Universidad, lamentablemente, no tenía presencia en las zonas más pobres del país y, entonces, alimentaba una diferencia en los niveles educativos que después se traduce en diferencias en el ingreso de las personas. Quería destacar este esfuerzo que está haciendo la Universidad por estar donde debe estar, donde más se la necesita, porque no se trata solo de la generación de conocimientos a los estudiantes, de tener jóvenes con más oportunidades, sino también de la presencia de profesionales en el medio, que mejora la toma de decisiones de toda la sociedad y que constituyen un recurso activo para distintos tipos de emprendimientos. Entonces, esta presencia de la Universidad en el interior de la república tiene un impacto muy superior al que cualquiera de nosotros pueda suponer, y lo va a tener en términos de ir generando equidad territorial, como se dice ahora.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR LIBEROFF.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LIBEROFF.- En honor a la verdad, no iba a intervenir en el debate, pero en función de algunas de las declaraciones que he escuchado, no tengo más remedio que hacerlo por lo que la propia Universidad de la República representa para este país, como se ha señalado correctamente.

Estamos en octubre; hace poco, casi un mes atrás, el 12 de setiembre se estaba celebrando el cincuenta aniversario de las elecciones universitarias que, bajo la dictadura y por primera vez con voto secreto y obligatorio, demostraron qué profundo era el sentimiento antidictatorial en la Universidad de la República. Eso es parte de lo que nos debe enorgullecer a todos. Además, estamos a casi veinte días del cincuenta aniversario de la intervención de la dictadura en la Universidad de la República, lo que significó bloquear, arrasar con las tradiciones. Aquí correctamente se ha señalado el valor que la Universidad tiene para el Uruguay. Justamente, si una cosa también nos debe enorgullecer es que cuando los perseguidos en la Universidad de la República salieron del país, fueron reconocidos en el mundo por lo que se formaba en el Uruguay. Eso no tiene que ver solo con la Universidad, sino con un país que hace casi un siglo tiene más del 90 % de personas alfabetas y que tuvo un sistema educativo que efectivamente nos permitió llegar a la Universidad. Es cierto que alrededor del 5 % o el 6 % de la población universitaria es hija de los sectores más pobres de la sociedad uruguaya. Sin embargo, por primera vez, y por suerte, muchos de los que están en la Universidad de la República son los primeros de las familias que acceden a ella. Eso no es por casualidad.

Con relación a los problemas de territorialidad de la Universidad que se señalan, recuerdo haber venido al Parlamento a pedir recursos para poder implantarla en el territorio, pero nos fueron negados sistemáticamente porque se le daba menos de un tercio de lo que pedía y, de doce duodécimos, le pagaban diez al año. Esa situación llevó a que la Universidad no tuviera la posibilidad de hacer lo que afortunadamente ahora hace: territorializar. Es más, si alguno se toma el trabajo de mirar lo que era el proceso de descentralización que el profesor ingeniero Óscar Maggiolo planteó en 1972, verá que efectivamente esa es la política que estaba planteada para este país.

Además, yo escuché con sorpresa que la Universidad había perdido valoración internacional y capacidad de educación. Acabo de ver –me parece, si no vi mal– que en los *rankings* de América Latina está entre los primeros y del Uruguay es la primera. Me parece bien que haya universidades privadas a esta altura de la vida porque el proceso se ha dado como se ha dado, pero lo real es que efectivamente el respeto por una ley orgánica de 1958, con cogobierno, generó condiciones para tener lo que hoy tenemos, lo que no quiere decir que no haya que actualizarla, lo que no quiere decir que no tengamos que mejorar. Para eso se necesitan fondos y por ello –y con esto termino, señora presidenta–, en cuanto a las afirmaciones del senador Mahía respecto a en dónde poner el énfasis, esperamos que efectivamente se pueda encontrar todavía algún resquicio en este Parlamento para poder apoyar –sería muy importante que lo hiciéramos– porque, si no, después podemos cantarle muy buenas loas al rector cuando explique su informe de rendición de cuentas, pero en la práctica lo que estamos haciendo es cerrarle la puerta. Es por eso que me parece por demás saludable el esfuerzo del senador Gandini y de otros por encontrar resquicios porque, en definitiva, un presupuesto –o la economía– es la versión política de la orientación política que tengo con relación a un país, y cuando vienen artículos relacionados con la educación que son cero, eso demuestra cuál es la orientación de fondo que tenemos sobre la concepción del país.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Solamente quiero hacer algunas precisiones porque no me gusta dejar en el aire ese concepto de que este Gobierno no quiere a la Universidad.

Si analizamos los números de la economía, que son los oficiales, para el 2024 habrá un 5,5 % de aumento en los recursos para la Universidad. ¿Insuficientes? Sin duda, pero es un aumento. Si analizamos la ejecución, que depende de la propia Universidad, habrá un 5 % de aumento, no un 5,5 %. De la misma forma, la matrícula creció aproximadamente un 600 % en los últimos diecisiete años, mientras que en los anteriores quince años el presupuesto de la Universidad aumentó alrededor del 100 %. Ahí se genera un gran atraso. De la misma forma, según lo que dice la Universidad –afirmación que creemos–, del 2019 a hoy la matrícula aumentó un 6,7 % y su presupuesto, un 5,5 %. Sin duda que hay un atraso de 1,4 % en lo que le hemos podido dar a la Universidad, pero el atraso respecto a la matrícula nace cuando se acompañó, años atrás, ese 600 % de crecimiento nada más que con un 100 % de aumento.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GANDINI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Sabini.

SEÑOR SABINI.- Creo que el senador Blás se ha confundido con los números.

Cuando se habla del crecimiento del 600 % de la matrícula, se habla de la matrícula del interior; o sea, no es lo mismo, evidentemente, la matrícula total que la del interior. Por eso creo que la comparación que estaba haciendo no es conducente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Gandini.

SEÑOR BLÁS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GANDINI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Blás.

SEÑOR BLÁS.- El crecimiento de la matrícula total es 270, por lo que si le restamos el 100 % del que hablamos, el resultado es 170 %.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Si queremos hablar de números, entre lo que hizo la Cámara de Representantes y lo que está haciendo ahora el Senado, en esta rendición de cuentas reasignamos unos USD 39:000.000, de los cuales USD 9:000.000 van a la Universidad, es decir, la cuarta parte de los recursos que hemos reasignado, que incluyen educación, cultura, deporte, salud y muchas otras áreas.

Creo que el Parlamento ha hecho un esfuerzo, y eso es importante. Considero que es el resultado de un mejor diálogo que el Parlamento está teniendo con las autoridades universitarias. Esto tiene muchísimo que ver con los resultados, que no son solo los de la Universidad, pues está tomando los de otras gestiones de políticas públicas que impactan en ella.

La buena noticia es que la Universidad tiene casi cinco mil estudiantes nuevos; esa es una buena noticia porque ha mejorado –y no voy a decir quiénes son los responsables de estas buenas cosas porque debemos ser todos un poco– la transición educativa, es decir, hay más jóvenes que terminan la educación media y siguen estudiando. Eso es muy bueno. Más de la mitad son mujeres; la mitad de ellos del interior del país y casi la mitad vienen de familias que no tienen tradición universitaria y pertenecen a hogares humildes. Entonces, son todas buenas noticias; estamos haciendo lo que nos propusimos hacer.

A esto le podemos agregar la UTEC, que hace algunos años no existía y que fue una de las mejores creaciones de los Gobiernos anteriores, que nosotros hemos reconocido y continuado. Está instalada y pensada para el desarrollo educativo en el interior del país porque está vinculada a niveles terciarios del mundo laboral del interior del país. Con ella se terminó con aquella dicotomía de que la universidad no puede estar pensando en el mundo del trabajo porque esa una filosofía neoliberal y capitalista. Se creó una universidad pensando en el laburo de los muchachos que viven en el interior porque allí se dan cursos para que después se queden ahí a laburar con oficio y profesión.

Además, el nivel terciario de la UTU ha mejorado mucho.

Lo que estamos haciendo es una verdadera y auténtica política de descentralización de fondos, no del poder, sino del desarrollo real e integral del país en las oportunidades. Lo que veníamos haciendo hasta ahora era un modelo absolutamente centralista. Ponemos recursos para que los jóvenes del interior, en función de una supuesta igualdad, se vengan a estudiar a la capital; les damos becas, alojamiento, alimentación y los ayudamos a que se vengan a los dieciocho años. ¡Y no se vuelven más!, porque a los dieciocho años echan raíces con su núcleo social y de nuevos amigos, lo hacen con su primer y segundo trabajo, y lo hacen formando pareja; así es que cuando se reciben y tienen el título se quedan acá. Entonces, a los jóvenes del interior les dimos la oportunidad ayudándolos a que vengan, pero no le dimos oportunidad al interior para que se queden, y le arrancamos a los mejores. Después tenemos que ver cómo hacemos para que un especialista traumatólogo, ginecólogo, cardiólogo, qué sé yo, vaya una vez por semana a atender a Guichón, porque ahí no hay. A esos profesionales los tenemos que mandar desde acá porque no estudiaron allá. Ahora en el litoral hay doce carreras que se estudian enteras desde el primero al último año y tenemos mucha más chance de que los muchachos de Guichón se reciban en Paysandú, o en el eje de Paysandú-Salto, se queden allí, se especialicen y laburen de médicos. Esa es la mejor plata. Además, estamos profesionalizando y mejorando recursos humanos que hacen que esas zonas puedan captar la oportunidad de la inversión para el desarrollo; si no, los pesos que llegan al Uruguay se vienen al sur, que tiene mejores condiciones. Creo que es todo un cúmulo de buenas noticias que tienen mucho que ver con la cabeza de la Universidad.

Yo vengo –ahora que se hablaba del golpe de Estado y de todos estos años– de la generación de la Asceep; soy fundador con algunos que andan por acá y de la CGU. ¡Lo que luchamos, laburamos y nos peleamos con la izquierda de aquella época por la Regional Norte de la Universidad! Algunos se acordarán. ¡No querían que hubiera una Regional Norte en Salto! Era la misma Universidad con una cosita chiquitita, era como un lunar. ¡Teníamos unos líos bárbaros! ¡No nos querían dejar votar en las elecciones universitarias!

Todo eso, que siempre es un proceso, llegó al punto en que hoy estamos todos en la misma sintonía, pero eso requiere plata, no hay vuelta. Se requiere plata, ¡hay que poner plata!, y no hemos puesto la cabeza en cómo vamos a hacer para conseguirla, que es plata nueva, que no teníamos, como hicimos para la UTEC. Hemos hecho el esfuerzo, ya que ahora le pusimos plata hasta de las multas. Estamos haciendo edificios en una zona muy deprimida del país, como es el este. En Lavalleja –para el eje Cerro Largo-Treinta y Tres-Lavalleja– va a haber inversión en la UTEC, y ahora hay que poner plata para que haya profesores. Del mismo modo pasa con la Universidad. Si tenemos 5000 estudiantes más, la mayoría de ellos del interior, y queremos que se queden en el interior, se necesitan más horas docentes. ¡No hay vuelta! Por suerte empezamos

este diálogo. Yo me sumo al diálogo, pero plata no tengo. Conseguirla siempre significa sacarla de un lado para el otro –y si no es del déficit, sale de otros lugares–, visibilizar el problema y tomar decisiones políticas, a las que yo me sumo.

Es como en el tema de la ciencia y la tecnología. Hace diez años todos los candidatos a presidente firmaron un compromiso para que la ciencia y la tecnología tuvieran 1 % del PIB; tenían el 0,2 % y llegamos al 0,4 %, y pasaron gobiernos de varios presidentes.

(Dialogados).

–Está bien, duplicamos, pero no puede ser la plataforma del desarrollo con la que el Uruguay encare el desarrollo futuro. Nos gana la vaca siempre, pero si queremos hacer otras cosas tenemos que generar otras inversiones, por ejemplo, en educación, en ciencia y en tecnología.

Si la reforma educativa de la ANEP –que la discutimos todos los días– anda bien, vamos a tener que poner plata en la Universidad, porque es lo que le sigue y el éxito cuesta. ¡Bienvenida sea la discusión, tanto esta como la de la forma de cogobernar o gobernar la Universidad! La UTEC hoy tiene un nuevo modo de gobierno y funciona. Tenemos que pensar que la ley orgánica de 1958 debe estar en algún momento sobre la mesa. ¡Ojalá que la iniciativa venga desde la propia comunidad universitaria!

Han cambiado muchas cosas. ¡No puede ser que la Universidad de la República esté dirigida por profesionales, estudiantes y docentes honorarios! ¡Por favor! ¡En estos tiempos! Y así es.

Saludo que hayamos hecho un buen esfuerzo en el Parlamento, ya que la cuarta parte de lo que reasignamos, o sea USD 9:000.000, va a la Universidad. ¿Que falta? ¡Falta! Claro, pero para que aparezca la solución hay que hacer un esfuerzo y además discutir sobre política universitaria y orientación. De todas maneras, creo que no vamos mal.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra al señor senador.

SEÑOR NUNES.- Señora presidenta: quiero compartir el reconocimiento que hacía el señor senador Gandini al desarrollo y al gran aporte que ha hecho siempre –también últimamente– la Universidad de la República, así como a su proyecto de descentralización, tan importante para el país y la gente.

Quiero decir que ese proyecto fue posible por dos razones fundamentales: una, porque se dispuso de recursos para llevarlo a la práctica, y la otra, porque hubo voluntad política, o sea, una decisión de llevar adelante ese proyecto de descentralización.

Esa decisión no fue del Parlamento ni del Gobierno, sino de la Universidad de la República, que es autónoma y cogobernada. A diferencia de lo que decía el señor senador Gandini, sin perjuicio de que siempre tenemos que discutir, creo que esa es una gran virtud y que los progresos de la educación universitaria y de la Universidad de la República se explican en gran medida por su autonomía.

Si queremos mejorar la enseñanza, también a otros niveles, tenemos que avanzar en la autonomía de las organizaciones de la enseñanza pública. No ha sido el rol del Parlamento nacional o del Poder Ejecutivo –decidiendo la orientación de la Universidad– lo que ha llevado esos progresos adelante, sino la autonomía universitaria, la decisión democrática, el debate de la propia Universidad y la decisión política de apostar a la educación pública y a la investigación científica como un camino para el desarrollo nacional y para lograr una sociedad más justa e igualitaria, así como un país con mayor soberanía nacional. La soberanía en este mundo deviene del conocimiento y de la capacidad científica.

Por otro lado, quiero decir que la presentación que hizo el rector de la Universidad de la República en la comisión cierra con los números que manejamos, pero contradice la información que nos daba recién el señor senador Botana, así que después tendremos que sentarnos a intercambiar números.

Acá se habla de un crecimiento significativo del presupuesto universitario, en el período 2005-2009, del 75,40 %; en el período 2010-2014, del 22,30 %, y en el período 2015-2019, del 20,10 %. El rector tomó en cuenta los incrementos de recursos que había aprobado la Cámara de Representantes y en el período 2020-2024 hubo un deterioro, un decaimiento, del presupuesto universitario –a pesar de haber incorporado los aditivos mencionados– del 0,9 %.

En definitiva, de la información brindada por el rector –que es la misma que manejamos nosotros– se desprende que el presupuesto de la Universidad de la República se ha visto recortado con relación al que tenía antes de instalarse esta Administración, cosa que naturalmente es muy negativa. La relación presupuesto por alumno o docente por alumno –como aquí se ha señalado– ha variado. A modo de ejemplo, el rector nos decía que en la Facultad de Ingeniería esa relación se había incrementado en un 56 %. Es decir que cada profesor tiene que atender un 56 % más de alumnos.

Hace muchos años, también fui a la Universidad de la República y a la Facultad de Ingeniería, y tomábamos clase de matemáticas en el cine de la facultad. Éramos 600 o 700 alumnos y en ese escenario era imposible hacerle una pregunta al profesor. El que no llegaba una hora antes, se

tenía que sentar en el fondo. Evidentemente, no podemos ni queremos volver a esas realidades.

Estamos hablando de la rendición de cuentas y lo primero que se está consagrando aquí es que el Gobierno no va a cumplir su compromiso con las trabajadoras y los trabajadores universitarios. Este Gobierno se comprometió a que al final de su gestión se iba a recuperar el salario real que tenían las trabajadoras y los trabajadores en el 2019. Sin embargo, en el caso de los docentes y demás funcionarios de la Universidad de la República, eso no se va a cumplir porque van a tener una pérdida salarial del 2 %.

En primer lugar, acá se está consagrando el incumplimiento de un compromiso asumido públicamente por las autoridades del Gobierno. En segundo término, se está consagrando un deterioro de las condiciones para la educación que –como bien se dijo acá– perjudica a los que menos tienen, a los que no pueden sustituir lo que les da la universidad pública mediante profesores privados u otras condiciones, y a los que tienen que trabajar y no tienen la jornada completa para estar en el centro educativo. Es decir que estamos consagrando esa situación.

Se decía que los recursos destinados a la Universidad de la República se han incrementado en el orden de USD 9:000.000. A su vez, para este año hay un incremento –ya votado en rendiciones de cuentas anteriores– de alrededor de USD 7:000.000. Es decir que entre lo que ya está previsto para este año y lo que estaríamos votando para 2024, estamos hablando de USD 16:000.000 más.

Ahora bien, según los datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas en su exposición de motivos –que tiene la debilidad de ser en valores corrientes–, en el 2024 vamos a tener un PBI de USD 81.030:000.000, mientras que en el 2022 tuvimos un PBI de USD 71.177:000.000; creo que esa es la cifra. Quiere decir que el producto bruto interno del 2024, con relación al 2022, se va a ver incrementado en USD 9.853:000.000, como mencioné en el informe en minoría. De esos USD 9.853:000.000 que va a crecer la riqueza que se produce en el país entre 2022 y 2024, para la Universidad de la República solo va a haber USD 16:000.000. Eso va a consagrar el deterioro de la calidad educativa por la relación hora docente y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de las docentes y los docentes universitarios y del resto de las trabajadoras y los trabajadores. Es una cuestión muy lamentable y negativa para el país, que esperamos poder revertir en 2025.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero expresar algunas constataciones.

Realmente el informe que hizo el rector Arim fue excelente, muy detallado con gráficas y comparativos, y creo que a todos nos quedaron claras algunas cosas.

Evidentemente, creció la matrícula, o sea, hay más población educativa –a modo de paréntesis digo que esto tiene que ver también con el buen desempeño de nuestra educación pública, porque no podría crecer la matrícula si estos estudiantes no hubieran salido de educación pública– y hay una primera generación de profesionales en las familias; esto se ha ido incrementando y es algo muy positivo. También está el tema de la extensión al interior, que es algo que saludamos, porque creemos que la descentralización es vital. En mi caso, como alguien que viene del interior, de Florida, considero siempre negativo el centralismo, por eso es bueno que se extienda al interior esto tan importante que es la Universidad.

Además, nos decía que hoy el 60 % de la matrícula son mujeres, que muchos están trabajando a la vez que estudian y que los salarios docentes son los más bajos de la región; ese fue otro elemento que nos quedó de la participación del rector en la comisión.

Una cosa que solicitaba la Universidad era que se la incorporara al consejo honorario del Parque Tecnológico Regional Norte, de Rivera, y por suerte tuvo aceptación por parte de la coalición y se incorporó.

En la misma línea de lo que planteaba el senador Nunes quiero decir que está bien, se buscan estos recursos y, por suerte, al Hospital de Clínicas se le dan $ 150:000.000 anuales. Sin embargo, falta todo eso que estaba pidiendo la Universidad y que con más población, con bajos salarios docentes, con menos cargos docentes, se pone en riesgo todo esto tan positivo que se hace sobre la base del esfuerzo de esta Universidad autónoma que tenemos.

Voy a leer algo que me llegó hoy por correo electrónico –según creo le llegó a todos los senadores y senadoras– del Ceico –Centro de Estudiantes de Información y Comunicación–, muy cortito: «Lamentablemente, apuntamos a que no empeoren las pobres condiciones que tenemos al momento. La Universidad soñada, esa que debe llegar a todas las juventudes que deseen estudiar y desarrollarse en nuestro país, nos resulta utópica en el contexto en que nos encontramos.

Cuando hablamos de la Udelar, hablamos del desarrollo social y productivo nacional. Hablamos del 87 % de la matrícula universitaria del país. Hablamos del futuro profesional uruguayo, que abarca desde las ciencias sociales y humanas hasta la salud, la arquitectura y la ingeniería, entre tantas otras áreas».

Me parece que tenemos que atender a estos jóvenes estudiantes; estamos a tiempo porque no hemos terminado aún. Entonces, estaría bueno que venga algún aditivo para que realmente se incorporen nuevos rubros para la Universidad. Nosotros tenemos dos aditivos con respecto a la dedicación total que ojalá la coalición acompañe.

Gracias, señora presidenta.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de octubre de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día 6 del presente mes, sin goce de sueldo, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sebastián Da Silva. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 26. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Ana Stopingi ha presentado nota de desistimiento informado que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Adrián Silva, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de octubre de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores
De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales por el día 6 de octubre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. **Afirmativa.**

Se comunica que la señora Adriana Barros ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Brenta, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

11) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2022

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión particular del articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas.

En consideración el inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay». Consta solo del artículo 474.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: solicitamos que se desglose el inciso primero con el que estaríamos de acuerdo, no así con el resto del artículo. El inciso primero dice: «Facúltase al Inciso 27 “Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay” (INAU) a contratar bajo el régimen de provisoriato a quienes, a la fecha de la promulgación de la presente ley, se encuentren desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de horas docentes, talleristas, contrato de función pública o contratos eventuales». Planteamos agregarle: «luego de una prueba escrita y test psicolaboral». Nos parece que con ese elemento podemos acompañar la primera parte del artículo.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señora senadora, repita la propuesta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- La propuesta sería que luego de «contratos eventuales» se ponga una coma y

se diga: «con una prueba escrita y test psicolaboral». Estamos hablando de contratos de provisoriato.

SEÑORA PRESIDENTA.- El tema está en que no podemos separar el inciso primero y, por eso, se sugiere presentarlo como un aditivo al final.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 474 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–16 en 27. **Afirmativa.**

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: no entendí cuál fue la propuesta sobre este artículo 474.

SEÑORA PRESIDENTA.- Que se presente un aditivo.

SEÑORA KECHICHIAN.- Nosotros queremos acompañar esta propuesta. Somos críticos del camino recorrido, porque al final de nuestra Administración quedaron 250 concursos hechos que faltaban homologar y que la actual no tomó en cuenta. De cualquier manera, estamos haciendo un esfuerzo para que estos funcionarios, en carácter de provisoriato –ahí entrarían todos los que concursaron o no–, por lo menos cumplieran con esa condición de prueba escrita y test psicolaboral. Ahora, lo que no me queda claro es si se acepta o no, o si lo discutimos al final.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- En principio, la sugerencia fue discutirlo al final. Sin embargo, no puedo entender que, según el instituto que sea, busquemos cosas distintas. Si se quiere asegurar una forma de entrar, creo que la fórmula es la del artículo 52, que establece el proceso concursal de organismos y organizaciones. Es la misma fórmula y me parece que aparezca una prueba escrita en un instituto de un día para el otro, porque sí…

(Dialogados).

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Seguramente nosotros, aunque no puedo asegurarlo, podemos redactar un aditivo que puede ser sustitutivo de este artículo teniendo en cuenta la parte concursal.

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTA.- Pido a los señores senadores que guarden silencio.

SEÑOR MAHÍA.- Recién el senador Blás hacía una pregunta. Primero, creo que el tipo de test que planteó la senadora a esta altura del partido debe ser generalizado hasta para entrar acá. Vamos a entendernos, ¿no? Si específicamente estamos hablando del INAU con la población objetivo con la que trabaja, creo que es más necesario aún. Podemos ver después si hay posibilidad de presentar un aditivo, pero aspiramos hasta que pueda ser una iniciativa propia del Directorio del INAU que se proceda en estos términos.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se está hablando del test psicolaboral.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: lo que está proponiendo el senador Blás está en contradicción con el primer enunciado de la parte que sigue, que no compartimos. Allí se establece: «Estas contrataciones están exceptuadas de la selección mediante concurso de oposición y méritos». Entonces, evidentemente es de descarte poner método concursal, pero queríamos que al menos se agregara que fuera con prueba escrita y test psicolaboral.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda claro que hay gente que está trabajando hace mucho tiempo y tendrían derechos adquiridos –estoy reflexionando en voz alta–, pero ya se ha dicho que se puede presentar un aditivo y podemos tener tiempo para considerarlo.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Antes de pasar al siguiente inciso, me gustaría hacer algunas consideraciones de carácter general.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ya fue votado, lo que podría hacer es fundamentar el voto.

(Dialogados).

SEÑORA DELLA VENTURA.- La señora presidenta, en general, tuvo la buena voluntad de permitir que a veces se votara y se fundamentara después o al revés. Espero que continúe así.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Efectivamente, la consideración de la problemática que aborda este artículo al que le estamos tratando de buscar una solución tiene que ver con algo que para nosotros es fundamental, la gestión, y se lo dijimos al director del INAU. En momentos en que más que nunca todos atendemos lo que son las autopercepciones y las respetamos, el director del INAU ha tenido permanentemente una autopercepción, al punto que desde los presupuestos y desde las rendiciones de cuentas solo se habla del éxito que tienen las políticas del órgano rector en infancia y adolescencia a nivel nacional. No lo vemos reflejado en esta rendición de cuentas y no podemos dejar pasar que estamos hablando nada más y nada menos que de niños, niñas y adolescentes. Entonces, nos parece que esto también tiene que ver porque, por un lado, entendemos que se puede estar frente a un ingreso indiscriminado de funcionarios cuando sí necesitamos ingresos, pero con el debido proceso, tanto de concurso como de sorteo, sobre todo en áreas específicas, y no lo vemos reflejado en esto. Desde el punto de vista presupuestal, el propio presidente del INAU reconoció la no ejecución del presupuesto en el rubro 0 y sobre la devolución ha planteado la construcción de un mito exponiendo que es falso. Nosotros entendemos que ese mito no es falso porque la devolución es comprobable en cada una de las memorias anuales del organismo que configura la propia página web del INAU. Queríamos, por lo menos, dejar esta constancia y hacer un análisis crítico acerca de la gestión en un área tan sensible como la que nos ocupa.

En varios incisos hemos asistido al reconocimiento de que hay preocupación en todos los integrantes de esta casa por un incremento en la pobreza infantil y adolescente; por determinados espacios donde se reconoce el deterioro de la seguridad alimentaria y por los impactos negativos en algunos casos de las trayectorias educativas, en un análisis, si se quiere, a largo plazo, pero no lo vemos luego reflejado en esta rendición de cuentas.

En la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión han presentado una institución modelo que está realizando importantes avances y, en realidad, nos llama la atención que esos índices de pobreza infantil y la preocupación que todos reconocemos en cuanto al déficit alimentario en algunas capas de nuestra sociedad, desde el punto de vista de la pobreza infantil y de que son factores estructurales, no están repercutiendo en las demandas del INAU. No sabemos si a la institución están llegando las problemáticas de mayor vulnerabilidad y si se está saliendo a buscar a quienes van quedando fuera del sistema de bienestar que tanto se predica. Esto nos parece importante porque en el articulado no se incluyeron disposiciones vinculadas a la institución, sin perjuicio de lo cual se dijo que se iban a traer algunos aditivos. Creemos que hay que decirlo porque, a diferencia de otros incisos, el INAU no cerró programas, servicios ni generó cambios significativos en sus diseños, pero ha sostenido la gestión en las líneas de trabajo y programas que se venían desarrollando en Administraciones anteriores. Nos ha resultado muy difícil darle seguimiento porque hubo cambios en los parámetros que se tomaban para hacer los comparativos.

Todas las rendiciones de cuentas se han caracterizado por mostrar los éxitos de la gestión pero, por otro lado, tenemos las valoraciones de, en este caso, la integrante del Frente Amplio en el directorio, que han sido muy críticas y hemos asistido a varias denuncias públicas que dan cuenta de algunas situaciones, fundamentalmente en el ingreso de funcionarios, que nos dejan preocupados.

Por un lado, reitero, se muestran avances desde el punto de vista administrativo en la gestión, pero la información que se presenta en las rendiciones de cuentas no nos permite realizar ese seguimiento.

Se discontinuaron algunas plataformas interoperativas –como, por ejemplo, la denominada Pitanga– que se venían desarrollando a través de proyectos con la Agesic y con el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Reitero: de acuerdo con la información brindada por el equipo que trabaja desde la oposición como contralor, existen grandes dificultades en el acceso a la información; no tenemos otra posibilidad de expresarlo que no sea en este ámbito. Consideramos que uno de los temas más críticos de la gestión es la política de desarrollo humano que, de alguna manera, barre con la línea de profesionalización de los trabajadores y de las trabajadoras.

A lo largo de tres años y medio de gestión ingresaron 1317 trabajadores, entre los tres perfiles: educadores, psicólogos y asistentes sociales. Los ingresos se hacen con la modalidad de talleristas y después se regularizan a través de un contrato de provisorato. Realmente, estas son las situaciones que entendemos que están contrarrestadas por los informes que nos llegan.

Desde el punto de vista presupuestal voy a dar un dato. De acuerdo con la información de la estructura de cargos vigentes que figura en el SIAP, en presentismo, se establece que el INAU recibe un presupuesto para 6310 funcionarios y actualmente tiene 4224 ocupados; mientras tanto, seguimos con 2086 vacantes. Además, existen 1240 encargaturas dentro de los ocupados que se financian con créditos de las vacantes; también hay pagos de horas extras por carencia de recursos humanos que se financian con esos mismos créditos. Entonces, efectivamente quedan créditos para 846 cargos totalmente vacantes.

Nos parece que cobra relevante importancia la discusión que venimos dando en cuanto a la discrecionalidad en el ingreso de funcionarios, nada más y nada menos que al organismo rector de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia.

(Ocupa la presidencia el señor José Carlos Mahía).

–Por una cuestión de tiempo y por respeto a las horas que hace que estamos aquí vamos a dejar de lado una cuestión –aunque queremos que conste en la versión taquigráfica–, que son las denuncias de vulnerabilidad de los más vulnerados, como les decimos, que han sido públicas y materia de atención de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En ese sentido fue que realizábamos una pregunta al Directorio del INAU sobre cuál era el relacionamiento entre este organismo y la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo porque, en realidad, prácticamente se desestimaron los propios informes y las propias recomendaciones realizadas por la actual institución. Por ese motivo nos parecía importante dejar esta constancia.

Gracias, señor presidente.

(Desorden en la barra - Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En aplicación del artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Senadores, se va a proceder al desalojo de la barra.

(Así se hace).

–Continúa la sesión.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de octubre de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores
Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos personales, por el jueves 5 y viernes 6 de octubre del presente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Amin Niffouri. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. **Afirmativa.**

Queda convocado el señor Jorge Saravia, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

13) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2022

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Continúa la discusión particular del proyecto de ley de rendición de cuentas.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, señor presidente. Adelanto que voy a ser muy breve.

No quiero dejar pasar este momento para hacer referencia al inciso y manifestar que, en 2019, el INAU tenía vínculos….

(Murmullos en sala).

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Hay murmullos en sala. Les pido silencio.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Sigo hablando, señor presidente; sigo su ejemplo. Me dirijo a usted, que sigan hablando.

En 2019, el INAU tenía vínculos con 5298 trabajadores. Era una cifra prácticamente idéntica a la que tenemos hoy, que es de 5232 trabajadores, pero acá tenemos que hacer una salvedad. De ese número, 3311 están trabajando de forma directa con los internos. Por eso es importante aclarar los números de ingresos. Es decir que ingresaron 1317 trabajadores en estos tres años. ¿Qué es lo que sucede? Ahora hay menos trabajadores porque muchos se han jubilado y otros se desvincularon de la institución. Por eso el Directorio del INAU, con el apoyo del sindicato, está brindando los presentismos. Esta era una de las cosas que quería aclarar.

Por otro lado, realmente se han utilizado los dineros del presupuesto y de la rendición de cuentas.

Se dice que no se ha avanzado, pero sí se ha hecho con aperturas y reconversión de centros. No quiero ser muy extensa, pero tenemos todo lo que realmente ha realizado esta Administración.

Quiero destacar los nuevos CAFF, que amplían la atención a los niños, niñas y adolescentes en Montevideo y en cuatro centros en el interior.

Debemos precisar las atenciones que se realizan, que eran semanales y las que eran de seis horas, ahora son de ocho.

A su vez, queremos resaltar las familias de acogida. Realmente se ha fortalecido ese sistema que es, justamente, para que estos chicos no permanezcan en un internado, sino que tengan un vínculo familiar para una posible adopción.

Según lo que manifestó el presidente del INAU, Pablo Abdala, tenían previstos unos mil cupos entre 2021 y 2024.

También, señor presidente, es de hacer notar que en 2021 y 2022 se generaron 689 cupos de familias de acogida. Esta cifra representa la duplicación, porque teníamos 1726 familias de acogida que hoy están a cargo de 2758 niños. Con relación a los que teníamos en 2019, que eran 861, esto implica un incremento significativo de niños, niñas y adolescentes viviendo en ese acogimiento familiar. Reitero que en 2019 eran 1926 y hoy, 2758.

No podemos desconocer cómo se ha incrementado el número y se han acortado los plazos de la valoración para las adopciones. Hoy se ha concretado un número superior de esos vínculos.

En 2021 y 2022 se registró mayor cantidad de integraciones desde que el INAU lleva un registro. Esto se produce por un trabajo coordinado, por una reestructura, reorganización y la incorporación de recursos humanos.

Sí se está enfrentando algo que no es nuevo: la dificultad de las adopciones en el caso de los niños mayores de cinco años. En este sentido, ahora el INAU está realizando una campaña de adopción porque, realmente, los niños mayores de cinco años tienen serias dificultades para ser adoptados.

No podemos desconocer el avance y la reestructura de los CAIF, que recientemente cumplieron treinta y cinco años. Hay un cambio por el cual se adecuan a las realidades y a la demanda de la comunidad.

En cuanto al SIPI –Sistema de Información para la Infancia–, debemos decir que realiza un seguimiento de los niños que están en hogares de acogida o institucionalizados. Todos estos son programas nuevos de esta Administración.

A su vez, queremos señalar que en 60 CAIF se están instalando las salas móviles.

Señor presidente: acá no estamos buscando nada. Comparé el 2019, pero ese no es el espíritu. Sí quiero dejar claro que los recursos se están administrando correctamente y que se ha avanzado en la protección para que estos chicos no permanezcan institucionalizados e internados. A raíz de la aprobación de la LUC, hoy podemos decir que son más los niños que tienen la posibilidad de vivir en familia, que es el deseo de todos.

Tenemos más datos para dar, señor presidente, pero respetando las largas horas que llevamos en sala y que otros senadores seguramente quieren hacer uso de la palabra, finalizo, pero no sin antes dejar bien en claro que se han utilizado muy bien los recursos y que se ha avanzado. ¿Hay problemas en los centros? Por supuesto que sí. Nosotros lo vivimos, y en la Administración anterior los denunciamos, pero no responsabilizando a las autoridades del momento, que muchas veces sí tenían responsabilidades porque no actuaban en consecuencia. Lo que tenemos que hacer, señor presidente, es buscar lo mejor para estos niños que no han tenido la oportunidad de vivir en familia; otros la han tenido, pero no les brindaban la protección. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes y no realizando comparaciones ni acusaciones que muchas veces se hacen con mucha liviandad.

Muchas gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra por una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Coincido con la señora senadora preopinante en cuanto a que esto nos preocupa a todos y a que no podemos tener liviandad en el tema. En este caso no se hacen acusaciones, sino simplemente se cotejan determinados datos que no tienen que ver solamente con la comparación año a año. Quiero dar datos objetivos que tienen que ver con lo que fue la judicialización de las distintas situaciones de vulneración de derechos que, entre 2020 y 2022, se incrementó en un 73 %. En el 2022 se recibieron 43.105 oficios del Poder Judicial. Yo no estoy afirmando que no se ha hecho nada, digo que ha habido un incremento y que para eso debemos tener una planificación y no la vemos reflejada en los números ni en el accionar, en lo que tiene que ver con el sistema de protección. En cuanto a las denuncias a través de la Línea Azul, de 2019 a 2022, hubo un aumento del 57 %, y el propio director del INAU dijo que estamos en una sociedad que ha incrementado la violencia; son datos objetivos. Las reiteraciones de denuncias crecieron un 112 %. La reiteración se contabiliza cuando llaman más de tres veces por una misma situación. En 2020 y en 2022 la violencia creció en un 52 %. La cantidad de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección no ha descendido: actualmente hay 7347 niñas,

niños y adolescentes en este sistema de protección. Además, entendemos que en gran parte de estos centros hay un sobrecupo: 462 niños, niñas y adolescentes a diciembre de 2022, y la fuente es, precisamente, la que citaba la senadora que me antecedió, que implica condiciones de hacinamiento. Incluso hay centros con padrones con más de 100 niños, niñas y adolescentes. Esa es la preocupación que tenemos seguramente todos quienes integramos este sistema, pero no podemos obviar que eso no se refleja en la presentación de los números en esta rendición de cuentas.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En consideración el inciso 29, «Administración del Servicio de Salud del Estado».

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Podemos hacer un bloque con los artículos 476, 477, 479, 481, 483 al 488, 491 al 495, 498 y 499.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 476, 477, 479, 481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 493, 494, 495, 498 y 499.

(Se vota).

–18 en 18. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Queríamos hacer algunas consideraciones.

En 2022, la ejecución presupuestal de ASSE fue de USD 50:830.000 y aumentó 3,5 % respecto a 2021. El recorte acumulado en la asignación presupuestal en los tres años del Gobierno de coalición es de USD 88:000.000 y en el gasto ejecutado es de USD 96:000.000. ASSE recibió una asignación de USD 21:000.000 para 2022 y 2023 y el destino de esos fondos era la instalación de una primera etapa de ampliación de servicio en dos de las actuales Casas del Desarrollo de la Niñez. Teníamos también algunas acciones que se realizaron, pero ASSE ya venía llevando a cabo estrategias de Casas del Desarrollo de la Niñez y, a su vez, no se relaciona con esa partida que mencionaba hace un ratito, sino que lo comprometido en el convenio para 2022 era fortalecerla con más horas de especialistas. Esto es lo que no sucedió con esas casas de atención a la niñez. Se ejecutó una ínfima parte de la partida en 2022 y, además, a mediados de 2023 aún no se ha culminado la ejecución de los recursos de 2022.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–En realidad, en la ley de presupuesto se asignaron recursos a ASSE para la conformación de equipos especializados en salud mental y adicciones y todas eran asignaciones para el rubro cero. A su vez, no se ven al día de hoy equipos conformados ni conocemos la distribución geográfica, algo que se preguntó en su momento.

Por otro lado, nos preocupa el tema de la atención en salud de cárceles, porque en realidad sabemos que a ese nivel, sobre todo en salud mental, hay mucha dificultad porque no se cuenta con los técnicos, psicólogos y psiquiatras, que deberían atender esta población que, más allá de que estén privados de libertad, no tienen por qué no recibir la atención que necesitan.

SEÑORA LAZO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: para complementar lo que está manifestando la senadora Della Ventura, no podemos obviar toda esa circunstancia que se dio en cuanto al informe que brindó alguien que tiene resorte en esta casa y que es justamente el comisionado parlamentario, con respecto a la solicitud de las historias clínicas. Él mismo ha denominado la denegatoria por parte de ASSE al acceso a estas historias clínicas como una obstaculización a la tarea del Parlamento, en tanto –reitero– la Oficina del Comisionado Parlamentario es una institucionalidad que depende de este Parlamento. Consultamos en su momento al director de ASSE, pero no tuvimos respuesta a esa negativa.

También debo decir que se ha denunciado la ausencia de personal ginecológico en la unidad 5, donde hay unas 750 mujeres privadas de libertad. Esa denuncia surgió a raíz de la ausencia de un lugar especializado en salud mental, como sí hay en algunas cárceles de varones, y se nos respondió algo que tenía que ver con la atención ginecológica y que estaba específicamente acotada a la realización de PAP, a pesar de que sabemos –las mujeres, pero supongo que también los hombres que están aquí en sala– que no solamente el tratamiento de una afección ginecológica está acotada a la realización de los PAP. Estas consultas tampoco tuvieron una definición en cuanto a qué planificación se va a hacer para estas mujeres privadas de libertad.

Gracias, senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente quería mencionar que al momento en que escuchamos a las autoridades de ASSE, esa visión triunfalista que se reitera en muchos de los jerarcas del Gobierno, también la vemos aquí y es evidente que no se condice con lo que sucede, por ejemplo, en las policlínicas y en los hospitales, porque es una realidad que para muchos conciudadanos faltan medicamentos de uso cotidiano, a pesar de que las autoridades nos decían que estaba todo cubierto y que no había faltantes. Como ese ejemplo hay otros.

Queremos dejar constancia de esto porque estamos hablando de la población que también tiene menos recursos y que es la que se atiende comúnmente, más allá de que hay excepciones, en ASSE.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BARRERA.- Señora presidenta: la verdad es que una de las preocupaciones que tenemos es la salud mental de las personas privadas de libertad, que desgraciadamente no reciben atención importante. Muchas de ellas presentan problemas de salud mental crónicos y persistentes, aunque fueron imputables en el momento de ser juzgadas por su delito, que en la cárcel se van agudizando. La misma forma de vida dentro de las cárceles, es decir, el estrés y el hacinamiento, hacen que cada vez estén peor y se vayan deteriorando más. Es muy muy bravo ver la falta de atención de las personas privadas de libertad. No hay técnicos ni personal de enfermería para tratarlos. Cuando llegan a un hospital psiquiátrico es porque ya algo muy grave pasó.

Yo creo que todo eso va en desmedro de toda la sociedad porque esas personas en algún momento vuelven a la sociedad, pero tenemos que pensar en qué condiciones. Familias enteras nos piden ayuda para ver de qué forma podríamos revertirlo.

Integro la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, que también integra el señor senador Niffouri –que ahora lamentablemente no está presente en sala–, y hemos estado tratando de poder hacer alguna cosa, pero no lo hemos logrado. Falta mucho por hacer con relación a la salud de los privados de libertad.

Por otro lado, también merecen especial atención las historias clínicas a las que se refería recién la señora senadora. Otro tema por considerar es el de los médicos del interior. Los médicos de ASSE del interior se sienten solos. Necesitan que ASSE se preocupe más por ellos.

Es todo lo que quería decir. Muchas gracias.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Mocionamos para que se voten en bloque los artículos 475, 482, 489, 490, 496 y 497.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 475, 482, 489, 490, 496 y 497.

(Se vota).

–13 en 20. **Afirmativa.**

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Ahora deberíamos votar el artículo 478 que tiene un sustitutivo en la hoja 79 de la coalición.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 478.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Ese artículo nosotros no lo acompañamos porque nuevamente se trata de incorporar al personal contratado por la Comisión de Apoyo o la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata que se encuentre prestando funciones en forma ininterrumpida por al menos dieciocho meses al momento de la presupuestación. Entendemos que nuevamente aquí se falta a ese principio que estábamos diciendo que, de alguna forma, era el correcto para el ingreso a la Administración pública.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Si miramos la hoja 79, lo que hicimos fue aclarar qué es lo que se está haciendo, por lo que el argumento que recién formuló la señora senadora Della Ventura es equivocado. Ese ingreso está habilitado desde rendiciones pasadas en función de las 2000 personas

contratadas antes de 2019, que están ingresando, como ingresaron también durante Gobiernos anteriores por el concepto del patronato, a ASSE. Como no había forma de hacer entender esto pusimos el sustitutivo, que lo único que hace es establecer: «En ningún caso la presupuestación podrá significar un mayor costo para el Estado por lo que el personal contratado que optase por incorporarse al padrón presupuestal de la Administración de los Servicios de Salud de Estado percibirá las retribuciones correspondientes a la función que desempeñen o pasen a desempeñar de acuerdo con las escalas salariales vigentes en el organismo. Derógase toda disposición que contravenga lo dispuesto en el presente inciso». O sea que a través de este artículo no entra nadie al Estado, ni por la ventana, ni por el costado, ni por el contrato, ni por nada; o sea que no se crea ningún cargo, ni grande, ni chico, ni poco ni mucho. Lo único que se establece es que esa diferenciación que quedaba para siempre en función del que está en el patronato cobra más, entonces, quedaba cobrando más que los otros, en una alternativa que, precisamente, es opcional –puede o no tomarlo el trabajador–, no genera ningún tipo de diferencia, como, por ejemplo, que el mismo enfermero de la misma ambulancia no cobre lo mismo. Quiere decir que lo que vamos a votar es algo que tiene mucho que ver con la justicia y la equiparación laboral.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente, pensamos que no pasa por el costo, ese no era el problema que planteábamos. El artículo 478 dice: «… por al menos dieciocho meses al momento de la presupuestación». Entonces, nos parece que debería también tenerse en cuenta que se hubieran hecho los llamados concursales correspondientes, tal como se estableció también en otro artículo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 478 tal como viene de la comisión.

(Se vota).

–0 en 23. **Negativa.**

En consideración la hoja 79 presentada por la coalición.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 23. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 480 que tiene un sustitutivo del Frente Amplio.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Señora presidenta: quiero explicitar que este artículo que modifica una norma aprobada en la pasada rendición de cuentas del 2021, lo que hace la propuesta aprobada por mayoría que viene de la comisión, es sacar, excluir del Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica en el Ámbito Rural al Ministerio de Salud Pública y a la Universidad de la República. O sea que la resolución original establecía que este programa iba a ser gestionado coordinadamente por ASSE, el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República, y el artículo que propone la comisión, por mayoría, excluye a la universidad y al ministerio, dejando la gestión del programa en manos de ASSE.

Nuestra propuesta, el sustitutivo que hemos presentado, mantiene a estas dos instituciones –o sea, al Ministerio de Salud Pública y a la Universidad de la República, a través de la Facultad de Medicina–, en la coordinación del programa, e involucra al Gobierno departamental del departamento de que se trate.

Esa es la diferencia: si aprobamos el artículo que viene de la comisión vamos a dejar este programa gestionado solo por ASSE, y si aprobáramos el sustitutivo propuesto por el Frente Amplio estaríamos manteniendo en su coordinación a ASSE, al Ministerio de Salud Pública, a la Universidad de la República y al Gobierno departamental de que se trate.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 480 tal como viene de comisión.

(Se vota).

–15 en 23. **Afirmativa.**

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- No me quedó claro si se votó el artículo 497, que había que desglosar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Todos.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pero de ese artículo nosotros habíamos acompañado el inciso segundo y no el primero, y creo que ese desglose del artículo 497 no lo hicimos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Que yo sepa, el artículo 497 no se desglosó.

Entonces, si le parece bien, señora senadora Della Ventura, hacemos la rectificación de la votación y reconsideramos el artículo 497.

Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 24. **Afirmativa.**

En consideración el inciso primero del artículo 497.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 24. **Afirmativa.**

En consideración el inciso segundo del artículo 497.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 31, «Universidad Tecnológica».

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Ahora pasaríamos al artículo 500.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. **Afirmativa.**

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Como ya fue dicho en sala, y personalmente lo afirmamos, la UTEC es una de las apuestas estratégicas del país. Constituye la segunda universidad pública del Uruguay y tiene un desarrollo potencial muy importante, particularmente para jóvenes –hombres y mujeres– radicados en el interior que ven la posibilidad de desarrollar carreras tecnológicas que, de no existir esta universidad, sería muy complicado o prácticamente imposible llevar adelante.

Hemos asistido, desde su creación, en el segundo Gobierno del Frente Amplio, a su crecimiento, a su desarrollo y a la inauguración de muchas sedes, que fueron presupuestalmente posibles a pesar de las dificultades.

Hemos visto también cómo la matrícula ha ido incrementándose. Tiene algunos filtros en ciertos lados porque, en algunos casos, hay que sortear espacios, dar pruebas para poder ingresar a determinadas especialidades, como consecuencia de las limitaciones presupuestales que se le aplican. En este caso hemos celebrado que estén por comenzar algunas regionales en el interior donde no había este tipo de carreras. En particular, creo que es un motivo de orgullo general. El problema que estamos teniendo, que tienen las autoridades de la UTEC, es que para ponerlas en marcha hay que tener el lugar físico, la infraestructura, una sede, contar con los recursos para tener docentes, pero estos no han sido ni cercanos a los que se han solicitado. Seguramente dentro del paquete de propuestas que hay de aditivos podamos presentar –aunque no sea más que testimonial– la voluntad del Frente Amplio de poder incrementar la inversión en la UTEC, por supuesto, con la debida presupuestación que exige la Constitución a la hora de asignar los gastos. Por eso este único artículo que vino se votó a favor, y entendemos muy necesario seguir trabajando en esta materia.

Gracias, presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Coincidimos. Yo llamo a la Universidad Tecnológica la joya de la corona. Sinceramente ha tenido una evolución fundamental para lo que significa la nueva educación. No quise intervenir en el inciso Universidad de la República porque la quiero; pasé dos veces por ella, pues en mi época escribanía y abogacía eran dos carreras distintas. Entiendo que esa endogamia en que se mueve la Universidad nos impide que la sociedad toda –no es cierto que es a través de lo que votamos; obviamente que he votado en distintos órdenes y estoy en el orden de egresados– vea las cosas que no funcionan bien, que seguramente son las menores. Cuando uno no se evalúa, cuando no se deja evaluar, cuando no acepta que se cometen errores, no los resolvemos y nosotros lo que queremos es solucionarlos. Uno de los errores que se ha cometido lo hablamos con el actual rector, con quien tenemos un muy buen vínculo, y coincido con el senador Gandini, que es una persona sumamente abierta al diálogo, cosa que también ha dicho Robert Silva en más de una oportunidad. Es muy importante el diálogo entre la

Universidad, las demás universidades en este caso, y las demás ramas de la educación.

Creemos que la Universidad Tecnológica tiene un costo muy alto por estudiante, y lo reconocemos, pero al menos quien habla –respeto la opinión de todos– está dispuesta a ponerle más plata por estudiante, porque no solamente está pensada para el interior, sino también para las carreras del futuro. La Universidad de la República en esa endogamia comete ese error que sería tan fácil de arreglar entre todos. Se gasta mucho dinero en carreras que hoy día ya generan mano de obra desocupada, como por ejemplo las carreras que yo seguí, para no ofender a nadie. En cambio, la Universidad Tecnológica no solo está en el interior, sino que además ha generado carreras que son del mundo del siglo XXI. Cuando visito alguno de los locales o veo los materiales que nos mandan –los directores tienen el gusto de hacerlo– me parece que estoy en otro país. Además, también se hace mucha investigación. Conecta a nuestros estudiantes, no solo con el Uruguay, que es su lugar en el mundo, sino también con universidades del exterior. Incluso se hizo referencia a los directores, que muchas veces van a perfeccionarse al exterior –porque ese tipo de carreras están en el exterior– y, entonces, pueden hacer posgrados y seguir especializándose. La mayoría vuelve al Uruguay, lo que es muy importante, porque quiere decir que hay trabajo para esas personas que están altamente capacitadas. Yo soy incapaz, si no las leo, con respecto a algunas de las carreras y los títulos que se obtienen en la Universidad Tecnológica.

Nosotros queremos dejar claro que estuvimos en permanente comunicación con los directores tratando de ver cómo podíamos acercarnos a las necesidades mínimas que nos plantearon. Son datos públicos que tengo por escrito. El otro día, en un acto de la Comisión Especial de Futuros que tuvo lugar en el Parlamento, el doctor Rodolfo Silveira me comentó que si le conseguíamos $ 60:000.000, ellos no resolvían crear nuevas carreras, pero no tenían que dejar en suspenso las que están funcionando ni afectar ningún servicio. Bueno, a través del artículo 288 que ya votamos –la hoja 3– les conseguimos, con la recaudación de las multas por infracciones de tránsito, aproximadamente –pido a los compañeros que manejan números que me ayuden porque yo con los números no me llevo muy bien– $ 100:000.000 anuales. Es una muy buena noticia, aunque no estaban contentos del todo, como todos, porque no se pudo llegar a los $ 300:000.000 que nos pedían. De todos modos, superamos ampliamente los $ 60:000.000 adicionales, llegamos a $ 100:000.000, y más los $ 4:000.000, en realidad, la UTEC va a recibir $ 104:000.000 anuales.

Seguiremos profundizando en las inquietudes en ese sentido y apoyándolos no solamente con dinero. Cuando otra vez esté la oportunidad de que podamos dar más recursos, lo haremos, porque sinceramente acá sentimos que estamos apostando al futuro. A veces siento que estamos poniendo dinero en educación que no va para investigación, sino para otras carreras. Reitero que no es un problema solamente de la Udelar –y lo hablamos en la comisión con el rector– y como ciudadanos tenemos la responsabilidad de desarrollar, desde la educación primaria, otras potencialidades en los chicos para que después no pase lo que vemos, sobre todo los directores de bachillerato, que todo el mundo elige humanístico porque no tiene matemáticas, y esto sigue dándose. Y después hay determinadas carreras que ya sabemos cuáles son.

En consecuencia, me afilio a la postura de la señora ministro de Economía y Finanzas, quien dijo claramente que quieren que se gaste más eficientemente en la Universidad de la República, y yo también. ¿Porque no la quiero? No, porque la quiero. Entendemos que en la Universidad Tecnológica se hace todo lo que se debe para apostar al futuro y para que nuestros nietos –a esta altura– no tengan que irse del país y puedan traer conocimientos del exterior. Una nación crece como lo hizo Corea del Sur, Singapur o Finlandia –porque no se crean que siempre fueron potencia; todos sabemos que nosotros éramos casi un país del primer mundo mucho antes, pero después nos pasaron por arriba y nosotros caímos– porque apuesta a la educación y a este tipo de educación.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el inciso 32, «Instituto Uruguayo de Meteorología».

Los artículos 501 al 504 fueron aprobados por unanimidad en comisión.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–21 en 21. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 33, «Fiscalía General de la Nación».

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en primer lugar, queríamos señalar que la Fiscalía General de la Nación, el señor fiscal y el gremio de fiscales han realizado una serie de solicitudes que son de recibo, porque refieren a su funcionamiento. Los fiscales, por ejemplo, han solicitado la equiparación salarial. Hay normas que reconocen la equiparación entre fiscales y jueces, pero no se cumplen. Los fiscales han solicitado la equiparación entre el fiscal adjunto y el fiscal adscripto. Se ha solicitado la creación de fiscalías de homicidios y de fiscalías que tienen que ver,

por ejemplo, con el sistema carcelario, y lamentablemente no se ha logrado aprobar ninguno de esos aditivos.

Lo que nos preocupa desde el Frente Amplio, señora presidenta, y lo queremos plantear ahora porque pensamos que hay que dar un debate en torno a este tema, es el aditivo que prohíbe por tres años el ejercicio del trabajo del fiscal general y que inhibe asimismo a los fiscales letrados en lo penal.

Hemos visto que esta norma fue mutando, porque al principio eran cinco años y ahora son tres. Hoy, para tratar de darle un viso de constitucionalidad se agregaron otras figuras, porque está el fiscal general y el fiscal de gobierno y alguna otra autoridad, y se trató de dar un subsidio, señora presidenta, a los fiscales letrados en lo penal, pero eso no resuelve la inconstitucionalidad.

Entonces, queremos decir de forma muy clara, desde el Frente Amplio, que esta prohibición o limitación que está proponiendo la coalición de gobierno no encuentra antecedentes en nuestra legislación. Lo tenemos que decir en forma clara, repito: esta prohibición no encuentra antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Hay un ensañamiento con un tipo de funcionarios –y lo tenemos que decir así–: los fiscales. No tiene ninguna razón de ser por qué se establece esta norma. Aparentemente –tengo que decirlo– esta disposición no responde a un interés general, es la solicitud de un grupo de abogados que se denominan «abogados penalistas», una Asociación de Abogados Penalistas. Aparentemente, repito, ellos hicieron esta solicitud. Ahora, desde el Frente Amplio queremos señalar –porque somos seres políticos, que vivimos en esta sociedad y vemos actos y acciones– que esta norma tiene un fin político que es la persecución, el hostigamiento y el acoso de parte de la coalición de gobierno contra los fiscales de gobierno. Esa es la explicación. Puede existir manija de un grupo de penalistas, pero la razón es el hostigamiento porque no hacen lo que quieren. Lo tenemos que señalar así, porque las declaraciones que vemos constantemente en la prensa contra este grupo de funcionarios realmente nos preocupan, por el Estado de derecho y por la república, como muchos dicen. Un derecho se limita por razones de interés general. ¿Cuál es el interés general aquí? Hay una serie de profesiones que podrían encuadrar en el poder político que tienen estos funcionarios. Si el interés general es limitar el poder público que tienen algunos funcionarios, ¿por qué no limitamos el poder de los jueces? ¿Por qué no limitamos el ejercicio de la profesión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no limitamos el ejercicio de la profesión de los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? ¿Por qué no limitamos el ejercicio de la profesión de los inspectores de la Dirección General Impositiva, entre otras profesiones? Si los fiscales generan una presión –como dicen algunos–, habría que limitar todos aquellos cargos que tienen el poder público y pueden ejercer tal o cual presión.

Estamos dispuestos –hoy se lo señalé a algún colega de la coalición– a votar una inhibición por un año al fiscal general –es el plazo por el cual cobra el subsidio– si sumamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Estamos dispuestos a discutir un estatuto de inhibiciones para los fiscales de la república, pero no se puede hacer en una rendición de cuentas. A modo de ejemplo, un expresidente, que es abogado, puede salir y al otro día ejercer la profesión. Es decir que tiene mucho más poder un expresidente de la república que un fiscal adscripto de la república que se dedique a la materia penal.

Además, el hecho de que se establezca un subsidio por un año a los fiscales penales –como vi que se presentó el aditivo–, no modifica el carácter inconstitucional de la norma. No se hace lugar a los justos reclamos de la Fiscalía y no se hace lugar a los justos reclamos del gremio de fiscales que, en diversas oportunidades, han hablado con la comisión en torno a la equiparación salarial entre adjuntos y adscriptos para que se adecuen los salarios entre fiscales y jueces, y para tener recursos suficientes para un buen funcionamiento.

De acuerdo con nuestra visión –que es la visión del Frente Amplio–, no hay fiscales ideologizados. La historia reciente nos ha mostrado que han existido procesamientos de funcionarios de todos los partidos; reitero, de todos los partidos. Algunos se pueden reír, pero no es gracioso lo que están haciendo, señora presidenta. No es gracioso. A nosotros, al Frente Amplio, no se nos pasa por la cabeza pensar que cuando los fiscales y los jueces de la república proceden en aplicación de la Constitución y de la ley, están aplicando una ideología. No se nos pasa por la cabeza, señora presidenta, porque hay que respetar. Qué mensaje le están dando al resto de la sociedad las críticas que hacen algunos senadores del oficialismo contra esta institución cuando una persona es imputada o formalizada y tiene que respetar una decisión. No puede existir esa desconfianza.

Realmente, nos gustaría que este artículo no se votara y que se reflexionara al respecto. Si se vota algo hoy, que sea únicamente lo relativo al fiscal general –que cobra un subsidio por un año–, al que se deben sumar otros cargos que son tan importantes y tienen tanto peso como, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entre otros funcionarios.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: tengo toda la intención de no adjudicar intenciones a los demás y de tratar este tema con mucha ecuanimidad. Hace muchos

años que tenemos problemas. Incluso, recuerdo que existen desde antes de ser legisladora.

Acá existe un problema de fondo del que somos responsables, o lo fueron, quienes votaron el Código del Proceso Penal debido a que le da un enorme poder a la Fiscalía. Le da un enorme poder en ese efecto pendular que tenemos los uruguayos por el que de haberlos tenido, de alguna manera, sumisos a los jueces –lo reconozco, porque conozco la situación, si bien no fue así porque eran los acusadores públicos– cuando en un juzgado daban su opinión, que primara el peso de los jueces –no digo que en todos los casos– era lo más normal.

Fue un error este Código del Proceso Penal. Estamos haciendo cambios y después se instalará la comisión que tenga que instalarse, con la gente que sabe, por supuesto. Siempre recuerdo lo que dijo el doctor Abal cuando concurrió –en dos oportunidades– a la Comisión de Constitución y Legislación: no toquen más el código, ya lleva diecisiete modificaciones y se ha convertido en algo realmente preocupante para el justiciable. ¡Hagan otro nuevo!

Por un lado, no le adjudico intenciones a nadie, no hay más que analizar el tema de fondo.

Después se hizo una ley orgánica –a la medida, obviamente, del Código del Proceso Penal– que dio todo el poder a los fiscales y convirtió a los jueces en homologadores, porque eso fue lo que pasó en la realidad. Yo no digo que el doctor Chediak –que integraba uno de los equipos que hizo el Código del Proceso Penal, que ahora se arrepintió y dijo: nos equivocamos– haya visto las consecuencias, pero resulta que ahora más del 90 % de las cosas se resuelven por acuerdos abreviados y aquellos juicios orales que todos queríamos ver, prácticamente no existen.

No hablo de inconstitucionalidad porque para eso está la Suprema Corte de Justicia, pero, como si fuera poco, además de las inconsistencias que tiene el Código del Proceso Penal –como lo dice el doctor Abal–, la última ley que se creó –la ley orgánica– le dio autonomía absoluta a la Fiscalía, con lo cual no puede intervenir absolutamente nadie. ¿Y puede intervenir? Sí, claro que debiera intervenir, con otro diseño, porque hay que decirle a la ciudadanía –cuando uno se preocupa de los mensajes que le damos a la ciudadanía– que no integra el Poder Judicial; ene veces lo hemos repetido. Es hasta una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos. Es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, pero hay quienes crearon esa forma de poder aplicar el derecho penal, que es muy cuestionada y por muchos abogados –ya no es solamente la Asociación de Abogados Penalistas, el otro día me visitó el Colegio de Abogados por este mismo tema– y esto se convirtió en una situación realmente preocupante. Precisamente, es preocupante porque está absolutamente cerrada a toda posibilidad de control de la ciudadanía, excepto la venia. ¡Excepto las venias! ¡Ni el presidente de la república puede intervenir!

En una situación de un Código del Proceso Penal que tiene toda la acción penal en sus manos –reitero, los jueces prácticamente se convirtieron en homologadores–, el poder del riesgo de la Fiscalía aumentó enormemente. Por eso no tiene antecedentes en el Uruguay, ¡porque no hay antecedentes en el Uruguay de que la Fiscalía General de la Nación tenga el poder que tiene hoy! Encima, con un fiscal general adjunto, con el cual tengo un excelente relacionamiento institucional –ayer, por ejemplo, me estaba pasando mensajes por el tema de las venias–, pero no podemos cambiar porque no tenemos mayorías.

¿La responsabilidad es de la clase política? ¡Y sí! Claro, pero a la oposición no le interesa cambiar al fiscal. Eso lo he dicho muchas veces. Yo no conspiro por atrás; al contrario, hemos sido muy francos y hablamos mucho más de lo que la gente piensa.

Por ejemplo, nosotros regulamos cosas muy graves como que el sistema de elección de los fiscales fuera aleatorio y dejara de funcionar el Deparmento DPA que los designa a dedo, excepto la flagrancia, pero no se hizo nada para ponerlo en funcionamiento.

En la pasada rendición de cuentas, fijamos un régimen de licencia permanente o circunstancial para el fiscal general. Si el fiscal general entiende que no debe usarla, no la usa –se lo he dicho, él lo sabe y me lo acepta–; ha estado, por ejemplo, en una mesa de operaciones y no pidió licencia porque nosotros fijamos un criterio objetivo que es el fiscal penal más antiguo de Montevideo, y al fiscal general no le gusta. En definitiva, estamos como en una encerrona bastante complicada.

¿Nos queremos vengar de los fiscales? ¡En absoluto! La mayor parte de los fiscales son probos, trabajan y están sobrecargados de trabajo, pero hubo una impronta del exfiscal Díaz –que ya ha dicho cuál es su ideología política y ha ido por todos los medios de comunicación atacando al Parlamento, frustrado porque no pudo llegar a la Suprema Corte de Justicia, lo que estaba decidido, pero no aceptamos el acuerdo– que realmente nos preocupa mucho y nos da más la razón en cuanto a que debemos contar con ciertos controles. ¡Las venias no alcanzan! Debemos tener algo que nos permita guarecernos de determinadas impunidades.

Una de las cosas que me dio mucha pena –porque nunca pensé que fuera capaz– fue la de aplicar la ética. No podemos escribir que una persona no puede ejercer una profesión liberal, cuando dejó de cumplir funciones, nada menos que en materia penal, y al otro día no puede entrar a la misma oficina que creó, cuyos funcionarios designó y cuyas bases de concurso determinó. El exfiscal Díaz fue llamado a comisión y cuestionamos la forma en que se desarrollaron las bases de los concursos. Es más, muchos fueron recusados, dos están en sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y uno acaba de ganar. Existe

un clima de trabajo que es realmente muy insostenible y es lo que nos produce inestabilidad a los justiciables.

Señora presidente: está de moda usar la tercera persona porque está mal visto el individuo como tal en los regímenes o en las ideologías colectivas. ¡Y yo lo voy a decir! En este momento estoy haciendo uso de la palabra, pero en la coalición negociamos esto, cedí parte de mis posturas iniciales al igual que algunos compañeros y se llegó a un acuerdo. ¿Nos gusta? ¡No! ¡La ética no se debería escribir!

Quien habla perdió casi veinte años de aportes a la Caja de Profesionales porque entendió que cuando fue electa diputada no debía entrar a una audiencia de las materias que ejercía, dado que enfrentar a un juez, a un fiscal, a las partes y a un abogado de la otra parte –estoy pensando, sobre todo, en familia–, era falto de ética. ¡Perdí casi veinte años de aportes! Cualquiera puede entrar a la Caja de Profesionales y corroborar que hice una declaración negativa de ejercicio de la profesión porque, reitero, hacer lo contrario es falto de ética. Desgraciadamente tenemos que decir por escrito lo que a las personas se les tendría que ocurrir no hacer.

¿Es peligroso el derecho penal? ¡Sí! En este momento es tal vez la rama más peligrosa del derecho. Siempre lo fue, porque maneja la libertad de las personas, pero ahora, con el poder de los fiscales, las dificultades para trabajar y con la formación o deformación que tienen algunos, lo es más aún. ¡Basta con ver las cuentas de Twitter! No voy a perder el tiempo del Senado, no voy a bajar de nivel ni a adjudicar intenciones, pero eso de que hay dos listas de fiscales, es así; los que están a favor y los que están en contra. La mayoría quiere estar tranquila y no puede porque los extremos no se lo permiten. Por ende, mientras no podamos llegar a la solución definitiva, buscamos mecanismos.

Señora presidente: ¡no pueden sentirse tan impunes! No todos, pero basta con que haya uno, dos, tres o cuatro –incluso, compañeros de trabajo– que, además, generan en los demás y en el justiciable, el mecanismo de la autocensura porque no se animan. No voy a citar solamente a la fiscal Fossati; acá tengo la comparecencia –que no voy a leer porque no es necesario y está colgada en la página web– de la exfiscal Domenech, que pudo hablar cuando se jubiló y yo cité a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados en 2017, y es calcado con lo que dice Fossati, a la que tanto cuestionan.

No los dejamos sin trabajo, en primer lugar, porque si alguien quiere irse de la Fiscalía puede ejercer otra rama del derecho. Pregunto: ¿qué abogado sale de la Facultad de Derecho sabiendo solo derecho penal? Al contrario, tal vez sea una de las ramas del derecho, para la aplicación práctica, más fácil, porque se repiten los delitos, y se puede ejercer todas las demás ramas del derecho. ¿¡Cómo vamos a dejar a una persona sin trabajo!? ¡En absoluto! ¡Para nada! Pueden ejercer excepto en la rama del derecho penal por un tiempo determinado, y justo en los lugares donde aplicaban el código del lado del ministerio público donde, además, tienen conocidos y amigos.

Por favor, yo no quiero desvirtuar esta discusión, pero voy a dar algunos datos porque hay muchos antecedentes. Por ejemplo, los jueces –el otro día hablaba con un integrante de la Corte que está muy preocupado por su jubilación que va a ser muy magra– ni siquiera pueden afiliarse a la Caja de Profesionales; tienen la prohibición de hacer cualquier otro tipo de tareas; no pueden hacer más nada que ser jueces, incluso los miembros de la Suprema Corte de Justicia, porque siempre se limitó en función del interés general. No hay derechos absolutos, señora presidente, porque, si no, la Constitución se convertiría en totalitaria y no lo es.

Los escribanos del Banco Hipotecario, desde hace casi cuarenta años –me preocupé de averiguar si esto estaba vigente y lo está– tienen prohibido ejercer la profesión si tienen el cargo de escribano en el banco, y le hicieron un juicio y perdieron. ¿Por qué? Porque es la competencia desleal lo que se está tratando de evitar. Acá me podrán decir que tienen el trabajo del banco. Sí, ¡pero no pueden ejercer la escribanía, no pueden jubilarse como escribanos!, y eso funcionó durante cuarenta años en el Uruguay y sigue funcionando.

Los escribanos de los bancos privados, señora presidente –yo soy mayor que usted, pero seguramente debe acordarse–, tuvimos aquel problema en la Asociación de Escribanos cuando imponían su condición de escribanos de la parte compradora, porque eran empleados de los bancos privados, y eso era una competencia desleal y se les prohibió. Solo pueden actuar por las entidades financieras para controlar y la parte compradora va con su escribano.

Entonces, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta adjetivación? Si me preguntan si me gusta este artículo, repito: me gustaría que la gente se diera cuenta sola de lo que no debe hacer, pero desgraciadamente no es así.

Otra cosa, el Código de Ética nos prohíbe a los escribanos tener inmobiliaria, por ejemplo, y los militares no pueden tener actividades comerciales. La libertad es el derecho que más se ha limitado. Reitero: no los dejamos sin trabajo. El señor fiscal o la señora fiscal que se quiera retirar y que diga que no puede ejercer las otras ramas del derecho, entonces no puede ser fiscal penal, porque puede ejercer cualquier otra rama del derecho. No los dejamos sin trabajo; al revés.

Es cierto que hay compañeros que razonaron por el lado de que la persona podría estar teniendo problemas económicos –aunque todavía no puedo imaginarme a un abogado que no pueda ejercer otra rama del derecho– y por eso se puso un subsidio de 85 % del salario. Quiere decir que les estamos dando todas las seguridades habidas y por haber. Sobre todo nosotros, señora presidente,

debemos tener en cuenta lo que aprendí acá en 1985 de un muy buen legislador que era del Frente Amplio. Vino un sindicato a pedirle algo, y me dijo: «Deciles a los fulanitos que yo no soy senador de ninguna corporación. Soy senador de los que me votaron». Me estoy refiriendo a Germán Araújo. Entonces, yo lo aprendí en ese momento: nosotros no somos legisladores de una corporación.

Además, uno lee las declaraciones, los tuits y el enfrentamiento que tienen con el Senado de la república quienes deberían saber que nosotros somos el único poder del Estado que, entre todas las facultades, tenemos la de ejercer el contralor de los otros poderes, y si no lo saben, a leer la Constitución y a los Jiménez de Aréchaga. Por algo nosotros otorgamos las venias, porque como Poder Legislativo y como representantes de la ciudadanía tenemos el poder de control. No es solamente legislar; también tenemos el poder de control. ¡Es algo tan básico! ¡Si al menos hubieran reaccionado de otra manera y no escrito los disparates que escribieron, que son una subversión al orden constitucional! Lo cierto es que podrían ser llamados a responsabilidad desde acá, que somos quienes tenemos la potestad de controlar. ¡Hay que leer el penúltimo y el último comunicado de la Asociación de Fiscales, con nombre y apellido!

Estando denunciada, señora presidente, yo nunca me callé porque no le tengo miedo a nadie y menos a los fiscales; sé que hay de todo y que la mayoría son probos, pero hubo dos declaraciones de la Asociación de Fiscales que nombraban al sistema político. El sistema político somos los representantes de la ciudadanía. ¡Acá están sentados aquellos a los que la gente votó! Con nombre y apellido estaba denunciada y una de las personas que firmó era la fiscal que estaba a cargo de la denuncia en mi contra, ¡y yo no dije nada! Podría haber planteado una cuestión de fueros al revés porque de febrero hasta ahora se afectaron los fueros del Senado. Además, hay una pésima gestión. ¿La puedo adjudicar a alguien en especial? Está mal el diseño, pero hay una pésima gestión; no tienen obligación de notificar.

Pregunten por qué están tan enojados los abogados penalistas. Puedo dar nombres, y no voy a dar la afiliación política porque todo el mundo la sabe: Homero Guerrero, que fue secretario –creo– del último Gobierno del Frente Amplio. Homero Guerrero firma esas declaraciones de los abogados penalistas y también quiero mencionar a Fagúndez, pero la filiación de Guerrero es más clara todavía; y están desesperados en el ejercicio de la profesión de abogados penalistas. Sin embargo, resulta que después salen y todos esos conflictos que están adentro, olímpicamente los pueden volcar o quizás no, pero si tienen la conciencia tranquila, esto no le molesta a nadie. No le estamos sacando el trabajo a nadie y reitero que estamos dando un subsidio –subsidio que a otros no se nos dio– para preservar un poco más.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: en este inciso vinculado a la Fiscalía General de la Nación quiero destacar la creación de cinco fiscalías, la transformación de nombres de fiscalías para violencia de género y delitos sexuales, la creación de dos fiscalías penales especializadas en delitos sexuales y también la autorización de pases en comisión para cubrir las necesidades; en total son veintidós cargos.

También me gustaría hacer referencia a un artículo que fue incluido en este inciso y tiene que ver con la posibilidad de que en casos de violencia sexual, doméstica o de género, el juez pueda disponer la colocación de tobillera a un adolescente como medida cautelar. Evidentemente, todos hemos estado consternados con el caso que ocurrió en Maldonado, con Valentina Cancela, y ante la alarma que causó salieron voces que decían que no había nada que impidiera la colocación de tobillera a adolescentes. Sin embargo, resultó que sí, que había una acordada que establecía que era para mayores de edad. Por ese motivo presentamos este artículo que está acotado a cuando el juez considere que está en riesgo el derecho a la vida o la integridad física de una víctima de violencia doméstica o de género, pero, además, el juez tiene que fundar que no hay otro tipo de protección suficiente o idónea para estos fines.

Me gustaría referirme al reclamo de un grupo de fiscales por la equiparación. Por supuesto, compartimos la idea de que a igual función o tarea corresponde igual remuneración, más allá de alguna discusión doctrinal que existe en la materia porque se establece que esto también tendrá que ver con el escalafón, con el grado en la jerarquía que ocupa y que a veces en lo material puede realizarse exactamente la misma función, pero la antigüedad y el haber ascendido pueden justificar una diferenciación en la remuneración.

Es cierto que este es un reclamo muy antiguo, es anterior a esta Administración, y lo que nos resulta un escollo para responder a este reclamo es una sentencia reciente, del 15 de agosto de este año. Fue entablada por un fiscal adscrito que, justamente, sostenía que realizaba idénticas tareas al adjunto y al titular, pero fue desechada por el juzgado por entender, en primer lugar, que el juez no debe disponer pagos que no correspondan. La expresión «constitucional» que alude a la justa distribución también alude a la distribución imparcial y equitativa del trabajo, argumento que le daba a pensar al juez que también se distribuye el trabajo y por eso hay distintos escalafones. También se entendía que si se amparase el reclamo de la parte actora resultaría desplazada toda normativa de rango constitucional y legal en materia presupuestaria, se crearía una suerte de presupuesto paralelo que, en lugar de estar orientado a contemplar en forma equilibrada el interés general, atendería reclamos aislados e individuales que

pueden y deben canalizarse por vías respectivas. A lo que se refiere la sentencia es a que debió haberse accionado frente a la propia Fiscalía mediante recursos o peticiones administrativas, que el derecho de los accionantes a percibir diferencias de salario debe ser inexorablemente una decisión expresa de la Administración –en este caso, la Fiscalía– y que los principios aplicados al trabajador privado son ajenos a la relación pública.

Según creo, lo que fue crucial para motivar el rechazo de esta demanda fue que el tribunal no consideró acreditado que efectivamente se cumplía la misma función. Es decir, la parte actora, el demandante, no logró probar que realmente hacía la misma función. Por lo tanto, quizás haya fiscales adscritos que sí cumplen la misma función que otros que reciben una remuneración superior, pero como no sucede en todos los casos, corresponderá que sea la justicia la que laude o que se accione por vía administrativa en este sentido.

Por último, debo confesar que no es sin profundo malestar que tengo que compartir, pero con el propósito de explicar por qué no acompaño el artículo que refiere a la restricción del trabajo de los fiscales. Tengo cuestionamientos de distinto orden y también cierta inconveniencia en cuanto al subsidio y al momento.

No quiero extenderme más; sí quiero decir que me hago cargo, doy la cara y me siento en la necesidad de explicarlo. Podría no haberlo hecho, pero como también lo he manifestado públicamente fuera de este recinto, quería hacerme cargo de esto.

Gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: en la intervención de la señora senadora Bianchi en sala se planteó que el Frente Amplio no había contribuido, no había querido, no había tenido interés en el cambio del fiscal de Corte. Quiero decir que eso no es cierto. Fui coordinadora en el momento en que dialogamos con el exsenador Penadés, que era quien encabezaba las negociaciones. El Frente Amplio hizo, no una, no dos, no tres, sino varias propuestas de nombres –ninguna del Frente Amplio– y realmente no fueron aceptadas. Por lo tanto, no puedo más que rechazar ese planteamiento de que nosotros impedimos la designación de un nuevo fiscal de Corte porque siempre hemos considerado que habría sido muy bueno que se hubiera podido resolver y así lo hicimos y por eso aportamos nombres.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: parecería que hay algún grupo de senadores que duda sobre nuestra adhesión a los principios de independencia de la justicia.

En lo personal y por mi experiencia con el trato con la justicia de otros países, debo decir que siempre me he enorgullecido de nuestro Poder Judicial, pero debo señalar que cuando se creó la Fiscalía General de la Nación y se modificó la normativa en materia procesal penal, a mí me sorprendió enormemente que se vituperara el antiguo sistema y se le tejieran loas al nuevo sistema acusatorio. Aparecieron las palabras «inquisitivo» y «acusatorio», cuando en realidad lo que estábamos haciendo, como en tantas cosas que están sucediendo en este mundo moderno, era someternos a directivas que vienen de otro lado, porque no solo en el Uruguay se estableció este «magnífico» –y lo pongo entre comillas– sistema acusatorio en vigencia, sino también en la Argentina, Colombia y en una cantidad de países. Yo recuerdo al entonces fiscal Viana que dijo que esto venía desde el Departamento de Estado. No sé si vino del Departamento de Estado, pero sí por esas influencias globales que a veces nos bajan y resulta que nos hemos transformado un poco en receptores de cuanta novedad anda por el mundo. En realidad, teníamos un sistema penal con muchas deficiencias, pero creo que funcionaba algo mejor que el vigente, que ha recibido desde su aprobación no menos de una docena y media de modificaciones y debería recibir muchas más. Además, ya hay un gran sector del foro y de la propia academia que dicen que hay que modificar radicalmente este sistema.

Obviamente, rechazamos cualquier intención persecutoria. Realmente no nos parece bien que se nos adjudique una intención de esa naturaleza. Tenemos que reconocer que vimos a un exfiscal general que, habiéndose transformado en una figura emblemática del nuevo sistema procesal penal imperante y habiendo sido responsable de la elección o el ascenso de una innumerable cantidad de fiscales –todos sabemos que siempre quedamos en una relación de cierta subordinación moral con quien nos designa o nos asciende, porque es hasta humanamente explicable–, de un día para el otro pasó a estar del otro lado del mostrador. La verdad es que eso no solo me impresionó a mí, sino también a una innumerable cantidad de abogados y, evidentemente, a la Asociación de Abogados Penalistas, a la que no me referiría despectivamente porque la integran nombres que todos los que hemos tenido o quienes tienen alguna relación con el ejercicio de la abogacía reconocemos como penalistas de nota: Juan Fagúndez, Eduardo Sasson, Laura Robatto, Enrique Möller, Jorge Pereira Schurmann, Jorge Barrera, Alejandro Balbi, Sara Durán, Martín Frustaci, Gumer Pérez, Daiana Abracinskas, Ricardo Carbone, Homero Guerrero, Marco Pacheco, Paula Gutiérrez y Nicolás Pereyra. Cualquiera que haya ejercido

el derecho, aunque sea por breve lapso, tiene que reconocer que estos son abogados de nota en materia penal y que, por tanto, creo que su opinión tiene cierto peso.

¿Y cómo comienzan su declaración pública? Diciendo: «La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay expresa su profunda preocupación por las situaciones que se vienen generando y que afectan sustancialmente la imagen, credibilidad y funcionamiento de la Fiscalía General lo cual demuestra la necesidad imperiosa que el sistema político adopte las medidas adecuadas para terminar con este estado e imagen de caos institucional». Y culmina con un petitorio que me parece vale la pena leerlo. En primer lugar, pide: «implementar las reformas del Código del Proceso Penal para que otorgue más garantías a víctimas, imputados y defensores a cuyos efectos hemos presentado ante el Parlamento nuestras propuestas». Luego pide: «regular las incompatibilidades de los funcionarios que dejan sus cargos con las materias o las instituciones donde han ejercido cargos de poder». Y termina pidiendo: «designar un Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación que termine con esta situación de provisoriato que no hace bien al Sistema de Justicia, a la Fiscalía General, ni a quien hoy ocupa ese cargo».

No vamos a referirnos a los desastres que ha protagonizado la Fiscalía en estos últimos tiempos con grave afectación de los derechos de los ajusticiables, llámese operación Océano –que terminó con una cantidad de personas sobreseídas– o el famoso caso del Cordón, en el que no solo se hizo mangas y capirotes de los tan manidos derechos humanos de los procesados que terminaron sobreseídos, sino que, además, se sancionó a un fiscal por, simplemente, pedir que la prisión preventiva fuera modificada. Esto demuestra las arbitrariedades que se vienen cometiendo –y para muestra basta un botón– en esta Fiscalía General de la Nación.

Y si tuvieran alguna duda de la politización –porque se ha dicho que no está politizada–, acá tengo la desgrabación de las declaraciones de la exfiscala Fossati en *Montevideo Portal*, en *Polémica en el bar* y en el programa *Periodistas* de Canal 5. Creo que merecería que el sistema político le prestara cierta atención a esta exfiscala.

Concretándonos a lo que es motivo de esta rendición de cuentas, tenemos que decir que, primero, nos sorprende que la norma proyectada –porque todavía no ha sido votada– sea calificada de inconstitucional pero que es constitucional si incluimos a los jueces. Yo creo que deberíamos incluir a los jueces y quizás también a los inspectores de la Dirección General Impositiva, pero está aquella vieja frase que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y me parece bueno comenzar por la Fiscalía General de la Nación, que ha dado tanto que hablar en todos estos años y seguirá dando que hablar si es que el sistema político no asume la responsabilidad de adoptar medidas que cambien este panorama desastroso.

Quisiera agregar que, honestamente, me parece que no debería subsidiarse por la inhibición. Lo acepto como parte de la coalición, porque es la forma de que ella lo acompañe, pero existen múltiples situaciones en que determinados funcionarios no pueden ejercer actividades y no son objeto de ningún subsidio; todo lo contrario.

Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la norma proyectada que se presenta ante esta cámara, en el entendido de que lo que se está haciendo es dictar normas que prestigian el ejercicio de la función pública y, particularmente, el ejercicio de la función pública en materia de acusación penal, donde se juegan los intereses más importantes que puede tener un sujeto: su honor y su libertad. Con este espíritu nosotros vamos a votar la norma proyectada.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- En primer lugar, le pido disculpas a la senadora Kechichian porque me tuve que levantar cuando me nombró; ni siquiera lo considero una alusión porque es sobre un hecho y quiero aclararlo.

Sé que se intentaron hacer nuevas negociaciones y yo también lo intenté. El problema es que los nombres que estaban dispuestos a aceptar ustedes no los aceptábamos nosotros. Yo no dije que no hubo negociación; lo que dije es que no había voluntad de la oposición de cambiar al actual fiscal adjunto.

En consecuencia, no voy a hablar más del tema, pero lo quería aclarar y pedirle disculpas a la senadora, porque me levanté y no es mi costumbre; usted sabe que yo siempre estoy acá.

Yo también hice negociaciones, pero no hay voluntad de cambiar al fiscal Gómez; las pruebas están a la vista.

Gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Cuando se dice que no hay voluntad, en realidad se está queriendo decir que no hubo colaboración para resolver el tema. Nosotros aportamos nombres. Si no hubo voluntad, tendría que decir que fue el Gobierno el que no aceptó los nombres, que no eran del Frente Amplio. Eso es lo que quiero decir. Hubo voluntad;

que no se haya logrado el acuerdo es otro tema y no es responsabilidad solamente de esta bancada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a hacer una aclaración.

Yo estuve presente en las reuniones de negociación junto con el entonces senador Penadés. Es verdad que se dieron nombres y es verdad que, por múltiples razones, no se llegó a un acuerdo. Como fui testigo y soy escribana pública, debo decirlo. Me parece importante decir que en las negociaciones que estuve presente, en las que estaban el exsenador Penadés, la senadora Kechichian y el senador Coutinho –también estaban los secretarios y prosecretarios–, se dieron nombres con los que nunca se llegó a un acuerdo. Las cosas son como son.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Concretamente, me quiero referir a dos temas puntuales que se hablaron aquí, aunque uno de ellos tal vez no se vote en este bloque.

En primer lugar, me referiré al fiscal de Corte. En realidad, no nos parece sano que se legisle prácticamente con nombre y apellido, porque los argumentos que acá se han dado fueron en contra de determinado nombre, contra cierta persona que ha tomado determinadas decisiones. Eso no está bien, siempre se ha dicho que eso no está bien.

Por otro lado, sí creemos que poner en cuestión al fiscal o a otros elementos de la justicia no le hace bien a la democracia, porque es cuestionar la institucionalidad. Gustará o no, pero fue nombrado con las garantías que hasta este momento se tienen. Quienes defienden la democracia no deberían cuestionar a los jueces y a los fiscales; deberían decir lo que siempre decimos: la justicia se podrá equivocar, pero la defendemos. No se debería estar legislando para que una persona, de la que se dudan las garantías, quede sin trabajo. Se dirá lo que se dirá, pero en última instancia, el subsidio es un año y, con la propuesta que trae la coalición, por tres años no va a ejercer. No estamos de acuerdo con eso.

Por otra parte, nosotros presentamos un aditivo referido a la equiparación de los fiscales adscriptos con los adjuntos. Más allá de esa resolución de agosto por un caso concreto en el que se determinó perdedora a la fiscala que hizo el recurso, seguimos convencidos de que es justo este reclamo que desde hace tanto tiempo tienen estas fiscalas. Me parece que, en realidad, se está obligando a que, ante la misma tarea, no se pague igual remuneración.

Tuvimos la posibilidad de atender ese reclamo: debido a que esa equiparación costaba determinada cantidad de millones, estaba la voluntad de bajar el monto. Es más, en nuestra propuesta el costo es mucho menor a lo que debería ser. Además, hay garantías de que no se va a continuar con los juicios, así como otras garantías y, sin embargo, no se va a votar afirmativamente.

Queríamos fundamentar esto. Más allá de que se va a votar después como aditivo, como se habló del tema, me parece que correspondía hacerlo ahora.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: quiero hacer algunas aclaraciones, porque el tema está derivando hacia donde no debería.

Es inaceptable escuchar que, por ejemplo, mi partido está en guerra con la Fiscalía en función de lo que dice tal o cual. Todos son libres de tener las opiniones que quieran, pero ni el Partido Nacional ni la coalición están en guerra con la Fiscalía; tenemos diferencias justas, como todos tenemos, y creo que en una sesión anterior dije lo mismo. Parecería que, cuando nosotros criticamos lo que hace el fiscal equis, atacamos la democracia y la juridicidad, pero cuando otros atacan a la fiscala hache, no atacan nada.

Entonces, es clarísimo que la posibilidad –no de atacar– de no estar de acuerdo con la decisión de un juez o un fiscal, hace precisamente a la democracia. Lo que no hace a la democracia es cuando se mete un poder en otro poder, pero hay que dejar en claro que la Fiscalía no es un poder del Estado. ¿Se ataca a la democracia? No. ¿Se perjudica al sistema judicial? Algunas acciones podrán perjudicarlo, pero no pongamos la democracia donde no está ni quitemos la posibilidad de que cualquier uruguayo –sea político o no– pueda criticar la acción de un juez o un fiscal; es la base poder hacerlo.

No tengamos la soberbia de pensar que, cuando alguien critica lo que a mí me parece bien, es un atacante de un sistema, pero yo puedo criticar lo que a mí me parece mal. Tomemos las cosas en su justa medida. En este caso de la Fiscalía, si algo falta es la justa medida y se quiere mezclar todo con todo.

Yo acabo de escuchar que esta norma es en base a un fiscal que se fue. Pero no existe la retroactividad ni se puede agarrar al que se fue; eso es un disparate más grande que una casa. El señor fiscal Díaz, de quien tengo mi opinión y me la guardo, no es alcanzado por esta norma. Entonces, si esta norma es para atacar a Díaz sería disparar un tiro a la luna, porque se escapó hace tiempo. Quizás puede ser cierto que por la actividad de Díaz vimos que era necesario tomar medidas, pero no es para atacar a Díaz; no tenemos cómo hacerlo. Ya se pasó de un lado del

mostrador a otro de forma inmediata y sin ningún tipo de recaudo, y eso sí genera el análisis de un sistema.

Eso nos muestra un peligro porque, además, es necesaria la coherencia en las cosas que decimos. Todos coincidimos durante el debate de esta rendición con las nuevas formas del delito, con el poder del narcotráfico, de esto, de aquello y de lo otro. Si ante el progreso de determinadas formas no estamos dispuestos a avanzar en ciertas protecciones a los sistemas, no somos coherentes. Un fiscal penal tiene en su poder toda la información de un delincuente o de un posible delincuente. Lo estudia, lo investiga, lo analiza; sabe qué hizo y qué no; lo escuchó; sabe por dónde va la investigación y por dónde va la policía, pero en un santiamén puede pasarse para el otro lado para defenderlo. Eso puede destruir cualquier acción penal, esta o una futura y más cuando del otro lado hay poderosos. Y vean que no estoy hablando de política, sino de derecho penal; no mezclo la política. No es una decisión política; es proteger una actividad que puede resultar perjudicial. ¿Lo hacemos prohibiéndole a alguien algún derecho de esos que no se pueden prohibir? No. Nuestro derecho está lleno de inhibiciones y de protecciones. Nosotros hoy tenemos y las tenemos mañana, y la tienen los directores de los entes autónomos. También la tienen muchos profesionales que trabajan. Posiblemente este artículo sea corto y no tengo ningún problema –aunque lo digo de forma personal, después lo hablaremos todos juntos– en que esto alcance a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no? Sí; no tengo ningún problema. Quizá tenga que alcanzar a alguno más. Se puede analizar o podemos simplemente empezar por esto solo.

¿Los estamos mandando a morirse de hambre? Hay un subsidio del 85 % del sueldo durante el tiempo que dure la inhibición, que es parcial. No digan el disparate de que queremos que se mueran de hambre. No pueden trabajar en lo penal, pero son abogados y hay ocho o nueve ramas del derecho que van a poder ejercer. La penal no, por un tiempito, para tratar de que la investigación en la que estuvieron termine sin que hayan tenido la oportunidad de meterse del otro lado.

Es una señal muy buena. ¿Cuánto dura el subsidio? El tiempo que dure la inhibición. Entonces, dejo de ser fiscal, cobro el 85 % del sueldo durante un año si soy un fiscal letrado, pero, además, divorcio a quien quiera, me ocupo de lo que quiera, del lío civil. Además, si quiero poner un quiosco, lo hago. Esto no es un ataque a los fiscales. No lo es. Es una protección a un sistema que tiene este problema y que lo hemos visto en algún caso en particular, pero no sabemos en cuál no lo hemos advertido.

¿Esto tiene alguna relación con alguien? Yo no permito que se diga eso. ¿Se debe a que tal fiscal tomó tal decisión en el caso de fulano? No, señor. ¿Es porque el fiscal tal tiene a su estudio la denuncia sobre el senador cual o el director tal? No, señor.

Además, sería muy absurdo pensar que, los que están a favor o los que están en contra, queremos incidir en la decisión de un fiscal poniéndole una multa a futuro. Ni siquiera es una multa; es responder a un llamado de atención que, seguramente, deba existir en el nuevo funcionamiento para proteger a las instituciones, así como de un tiempo a esta parte los que estamos en esta casa pasamos a tener que hacer declaraciones juradas. ¿Bajo sospecha? Sí, todos bajo sospecha. Todos estamos en una función delicada.

Desde la primera Constitución y hasta en los tiempos modernos se protegieron los sitios de poder para que no abusen de ciertas circunstancias. Hoy estas protecciones suben hasta para los políticos, para los que deciden y por qué no para los señores jueces y hasta para los fiscales. ¿O no hemos visto que han largado caminando a grandes narcotraficantes? ¿No hemos visto cosas que antes no pasaban? ¿No hablábamos ayer de la Senaclaft y del cuidado del lavado de activos que puede llegar hasta el que vende un chorizo en el estadio Centenario? Si no estamos dispuestos a analizar la movilidad de las prohibiciones y de las capacidades con qué responder y protegernos de cosas que pueden pasar, no estamos entendiendo nada.

En definitiva, si hay que aumentar y se puede aprovechar la oportunidad para incluir más en esta inhibición, que es reparada con un subsidio importante, no hay ningún problema, pero creo que es el momento de iniciar un camino de protegernos de lo que puede pasar, para no lamentarnos después.

No tiene nada que ver esto con el encono de fulano con mengano, con atacar a fulano o a mengano, con amedrentar a los señores fiscales diciéndoles: «Mirá que hoy te estamos prohibiendo trabajar y, si no te portás bien, mañana te vamos a prohibir alguna otra cosa». ¡No! Hay que tener una cabeza muy retorcida para pensar en esas circunstancias. Hay que tener una cabeza muy complicada para pensar que cuando uno protege algo está sospechando del otro. ¡No! Yo no me siento sospechado porque me exijan una declaración jurada o porque tenga que llenar ochocientos formularios para mandar $ 10 a mi hija en Nueva Zelanda. No; es la norma, que nos protege, y voy y la cumplo.

Ahora bien, si determinadas profesiones se tornan complicadas por el cumplimiento de la norma, no es por sospechar, sino para proteger al sistema. Ese es el único argumento que nos motiva a votar esta norma y no acepto otra intencionalidad, al menos en mi voto; no la acepto. Sí acepto que a cualquiera lo motive lo que quiera, pero es el interés general lo que realmente motiva esta norma. Creo que es claro que se trata del interés general. No escucho a nadie que me diga que no es peligroso que el investigador pase de un día para otro a defender al investigado o a destruir la investigación, a través del conocimiento que toma por su propio arte. ¡Es ilógico! ¡Es totalmente ilógico! ¿Dejamos eso a la ética? ¿Lo mandamos al colegio de

fiscales para que lo condene moral o éticamente? ¡No! Hay que evitarlo. De eso se trata este aditivo.

Muchas gracias.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Yo no iba a intervenir, pero luego de escuchar los distintos argumentos que se han dado en este tema, quiero decir que estoy de acuerdo con los reclamos de los fiscales en cuanto a los salarios, más allá de que no se haya logrado un acuerdo.

Ahora bien, en este tema que estamos considerando nadie me convenció de que esta sea la solución, por más que hay un acuerdo político y que podamos votarlo. Yo tuve una primera discusión –me la trae a la memoria este tema– cuando se creó este organismo medio extraño que es el fiscal general de la nación. En ese momento, junto con el entonces senador Ope Pasquet, presentamos una idea, un proyecto de ley, que pretendía que ser fiscal fuera una carrera totalmente independiente, en el sentido de que los fiscales no pudieran ser jueces, ni los jueces ser fiscales, es decir, que tuvieran autonomía técnica, presupuestal y que llegaran por carrera a la Fiscalía. Eso sería lo que solucionaría todo el problema que se está planteando.

Puedo cuestionar algunas decisiones de los fiscales –tengo derecho a hacerlo– y ciertas resoluciones de los jueces, más allá de que respete al Poder Judicial, que es independiente hasta cierto punto, porque nosotros los legisladores le marcamos el presupuesto a la Suprema Corte de Justicia y, por lo tanto, le limitamos la independencia; de la misma manera, el Ministerio de Educación y Cultura, al nombrar a los jueces, también le limita la independencia técnica.

Entonces, es un tema mucho más de fondo que un artículo que puede cuestionarse. Yo creo que los errores de los fiscales que se han cuestionado, como en la operación Océano, pueden no ser de mala fe, pueden ser errores técnicos por capacidad de formación del fiscal. Decía mi padre: «Es bueno estudiar, pero la universidad no acorta las orejas». Bueno, yo creo lo mismo: «la universidad no acorta las orejas». Entonces, muchas veces se trata de errores o falta de capacidad técnica de un fiscal.

Eso no quiere decir que este artículo solucione el problema de fondo. No lo va a solucionar. Además, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar un subsidio a los jueces también? Los fiscales pueden acogerse al subsidio y hacer un vaciamiento en la Fiscalía, ¿ y qué hacemos con la seguridad? Si yo soy fiscal, me acojo al subsidio, paso un año ejerciendo con el Código Civil y después me puedo reintegrar de cualquier manera a la actividad.

Esto lo digo como reflexión; no estoy cuestionando lo que los compañeros plantearon ni creo tampoco que nosotros –los de la coalición o del Partido Nacional– estemos en contra de los fiscales. Se le está buscando la vuelta a una llave para solucionar un tema, pero creo que esta no es la forma. No lo soluciona. Hay que reflexionar que no lo soluciona.

¡Vamos a poner arriba de la mesa una discusión de fondo! ¡Vamos a crear una fiscalía de verdad, autónoma, con autonomía técnica, autonomía presupuestal y de carrera! ¡Que lleguen a ser fiscales generales de la nación por carrera y no «a dedo» por los políticos de turno, que se ponen de acuerdo en el número de las mayorías parlamentarias exigidas para nombrar un cargo político!

En definitiva, tampoco eliminamos un problema base: que ese fiscal que sale no está inhibido de hacer política para cargos de diputado o de senador. Yo creo que es mucho más importante inhabilitar al fiscal de Corte, que es un cargo político, a ejercer la política. Eso es mucho más importante que inhabilitarlo por un año para ejercer la función, porque en definitiva va a ejercer otras funciones como abogado, pero políticamente puede ser candidato. ¿Y qué sucede con la información que tiene o con lo que sabe de cómo se maneja la Fiscalía?

Estoy de acuerdo con los cuestionamientos. Además, los abogados penalistas han cuestionado todo ese desorden anodino que hay en la Fiscalía General de la Nación, pero, en definitiva, reflexionen, piensen: ¿ustedes creen que esto soluciona el problema? Yo no lo creo; yo pienso que tenemos que ir por otro lado. Este artículo no va a solucionar el problema y me parece que tendríamos que poner arriba de la mesa el viejo proyecto de ley de Ope Pasquet –que yo apoyé– para discutir, en serio, qué vamos a hacer con una fiscalía que tiene que ser de carrera, porque si queremos llegar a una justicia totalmente independiente y de alta calidad, como la tienen otros países del mundo, tenemos que ir por otro camino que debemos discutir.

Era cuanto quería decir.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solo para hacer un aporte a este debate y siendo las 20:24, quiero decir que permitimos hablar de este artículo de la inhibición, que no está incluido en este capítulo del que estamos hablando, pero forma parte del inciso.

Lo que les digo es que, como lo estamos discutiendo ahora, supongo que no lo vamos a volver a discutir.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Entiendo que no es tan tarde, pero todavía nos queda un trecho largo por recorrer.

Este tema es muy trascendente y, obviamente, quienes formamos parte de este Cuerpo tenemos distintas experiencias y diversas formaciones profesionales. Hay temas que dominamos más que otros, pero tenemos que hacernos cargo de todas las decisiones.

Acá se nos está planteando tomar una decisión sumamente trascendente, porque implica legislar, sentar un precedente, inhabilitar a un exfuncionario para desempeñar determinada tarea por un tiempo determinado, establecer subsidios ahora y dejar abierta la posibilidad de que sean otros.

Recibimos una propuesta el día martes, hoy temprano recibimos otra y, ahora, un poco más tarde, recibimos una tercera propuesta sobre el mismo asunto. Esto da la medida de cómo se está analizando un tema de esta complejidad.

Entonces, realmente, me parece que no corresponde resolver algo tan importante de esta manera, sin darle un tratamiento debido en la comisión. Hay constitucionalistas que dicen una cosa y constitucionalistas que dicen otra, pero las dicen por los diarios. No ha habido una comisión de esta cámara que se haya sentado a estudiar el tema, que los haya convocado, que los haya escuchado ni que les haya preguntado al respecto.

Me parece absolutamente inaceptable acompañar cualquier propuesta de este tipo, por más que abarque a otros funcionarios, en este momento, en estas condiciones y con este nivel de análisis. No desconozco que este es un problema, pero no tenemos que resolverlo de hoy para mañana.

El problema de las incompatibilidades es múltiple. El senador Carrera señalaba la eventualidad de un presidente de la república. ¿Cuántas personas destacadas que integraban distintos equipos económicos –algunos de ellos de mi fuerza política–, a los pocos meses de terminar su gestión estaban trabajando para un organismo de crédito internacional con el cual el país había estado negociando? ¿Eso no es incompatible? ¿Nosotros no tenemos una incompatibilidad? ¿Quien se desempeña como ministro en un área y luego se dedica a una actividad productiva en la misma área no tiene una incompatibilidad?

Entonces, creo que sí tenemos una mirada parcial sobre la Fiscalía, porque ha habido –y los hemos escuchado a todos– dirigentes políticos que han cuestionado la actuación de los fiscales. Por ese motivo se centra la cuestión en la Fiscalía, pero la verdad es que hay muchos otros asuntos que podrían dar lugar a tráfico de influencias, a intereses creados, a prácticas que terminan siendo de corrupción. No me parece que podamos resolver el problema de esta forma sumaria, estableciendo una norma tan trascendente que limita el derecho de una persona, más allá de que pueda hacer otra cosa. Estamos restringiendo un derecho sin analizar el tema en profundidad. ¿Cuánto tiempo las bancadas han dedicado a discutir este tema? No hay ninguna comisión que haya analizado este tema, ni siquiera la propia comisión en la que se consideró la rendición de cuentas.

En definitiva, me parece que no corresponde para nada ponernos ante esta discusión cuando hay un espacio para construir un acuerdo, cuando hay una voluntad de establecer incompatibilidades. Insisto: el tema merece otro tipo de análisis.

Hay otros problemas graves, como, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos, pero a nadie se le ha ocurrido incluir una cláusula sobre ese tema en la rendición de cuentas. El asunto se está analizando en la Cámara de Representantes con el objetivo de aprobar una resolución en un plazo breve, pero como corresponde de acuerdo con los procedimientos de la cámara. No es la rendición de cuentas un ámbito para tomar una decisión de esta naturaleza, absolutamente parcial, porque se trata de un tipo de funcionarios.

Entonces, nosotros no vamos a acompañar esta propuesta, y nos gustaría que se reflexionara sobre esto. Y creo que hablo en nombre de mis compañeras y compañeros de bancada cuando digo que estamos dispuestos a analizar este tema en comisión, a buscar avanzar rápidamente, a no dormir este asunto, pero no podemos resolverlo de esta manera. Me parece que no hacemos honor a lo que debe ser este Cuerpo y a cómo debe tratar temas transcendentes para la vida del país.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR NUNES.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- He escuchado las distintas intervenciones sobre este tema, particularmente la última que realizó el senador Saravia, y comprendo que este tipo de artículos normalmente llevan un debate muy intenso en cualquier partido político y mucho más en una coalición. Obviamente hay compromisos y demás, que son legítimos, pero a esta altura del debate, por las propias intervenciones de miembros de la coalición, me da la impresión de que la gravedad y la profundidad de la problemática que se está analizando no puede ser resuelta en cuarenta minutos en la discusión de una rendición de cuentas. Si hay algún artículo que no corresponde que sea debatido en este contexto es este, porque abre una puerta que de alguna manera colide con el derecho al trabajo. Me parece que este es un elemento que también hay que considerar. Acá estamos limitando el ejercicio del derecho al trabajo

de un conjunto de ciudadanos, y a algunos se les otorga un subsidio y a otros no. A algunos se les impide ejercer su labor en determinadas áreas, cuando a los legisladores, por ejemplo, se les otorga un subsidio, pero no se les limita la posibilidad de trabajar en ninguna área y también pueden tener intereses concretos que estén vinculados a su actividad particular y privada, como muchos tenemos.

Por lo tanto, comparto algunas intervenciones de miembros de la coalición, particularmente la última del señor senador Saravia, porque me parece que apunta correctamente a la profundidad del problema y marca el camino, que es un análisis en el ámbito de la comisión.

Insisto: en nuestra opinión debería someterse a consideración del Cuerpo la posibilidad de que este artículo sea enviado a comisión y no votado en la noche de hoy. Me parece que sobran argumentos, y no ha sido precisamente la oposición la que ha puesto la mayor parte de los argumentos sobre la mesa. La mayor parte la han puesto miembros de la propia coalición de gobierno.

En definitiva, solicitamos que se considere la posibilidad de ir a un análisis en profundidad que comprenda otras áreas donde hay problemáticas vinculadas a la transparencia, que son graves y que pueden ameritar acciones de características similares a las que se están proponiendo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Nunes.

SEÑOR NUNES.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En primer lugar deberíamos considerar los artículos que vinieron votados por unanimidad de la comisión.

En consideración, entonces, los artículos 505, 507, 508, 509, 510, 511 y 512, que fueron aprobados por unanimidad en la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 27. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 506, tal cual viene de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 27. **Afirmativa.**

En consideración el inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública».

Los artículos 513 a 517 vinieron aprobados por unanimidad de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente».

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Solicitamos que el artículo 523 se desglose para que sea considerado al final de la discusión. Recién hablábamos con el señor senador Blás respecto a que cuando terminemos la discusión del articulado y antes de empezar con los aditivos vamos a pedir un cuarto intermedio de media hora. Sobre este tema en particular queremos tomar posición a nivel de bancada.

SEÑORA PRESIDENTA.- La bancada del Frente Amplio nos está solicitando desglosar el artículo 523.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Queda desglosado el artículo 523.

En consideración los artículos 518 a 521.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–29 en 29. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 522.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 29. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 524 tal como viene de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 28. **Negativa.**

En consideración el sustitutivo del artículo 524, que figura en la hoja 12 C.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Ingresamos a la sección VI, «Otros incisos».

En consideración el inciso 21, «Subsidios y subvenciones».

Los artículos 526 a 530, 533 a 542, y 544 fueron aprobados por unanimidad en la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 525 tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 531 tal como vino de la comisión.

Aclaro que este artículo tiene un sustitutivo.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Solicito a los senadores de la coalición que nos expliquen el sustitutivo.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Este sustitutivo se presenta para atender una sugerencia que hizo el Frente Amplio durante la votación en comisión.

De acuerdo con la redacción original, la contaduría tenía que buscar el rubro para esta partida, y eso se corrigió, porque ahora va a un rubro que ya existe. Fue una sugerencia del senador Bergara.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 531 como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 27. **Negativa.**

En consideración el sustitutivo del artículo 531.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 532.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. **Afirmativa.**

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- El artículo 532 dice: «Asígnase en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”, programa 400 “Políticas transversales de desarrollo social”, unidad ejecutora 015 “Ministerio de Desarrollo Social”, Financiación 1.1 “Rentas Generales”, una partida de $ 2:000.000 (dos millones de pesos uruguayos), con destino a la Asociación Civil Seguridad y Justicia».

Nosotros tenemos una posición absolutamente contraria a esta adjudicación de recursos a una organización que, entendemos, no justifica su actividad. Además, una de las personas tiene vinculación activa con determinadas áreas del Estado. Creemos que este artículo debería ser reconsiderado por la bancada oficialista. Hay algún tiempo para hacerlo.

Este artículo no pudo ingresar en el paquete general de acuerdo de todos los partidos que se hace habitualmente. Por lo tanto, intentar ingresar en forma aislada esta asignación para esta asociación civil, nos parece un error muy importante.

En definitiva, llamamos a que este artículo se reconsidere y se vote negativamente.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Voy a manifestar mi posición y voy a informar al Cuerpo sobre algunos aspectos de este artículo.

Lo primero que quiero decir es que deberíamos tener todos conciencia de que en el Uruguay la asistencia a las víctimas del delito no es la que debería ser. En sala tenemos a una vocacional en esta materia, que trabaja en el tema –me refiero a la señora senadora Barrera– y que seguramente, a pesar de discrepar de mi posición, va a dar testimonio de la necesidad de que en la sociedad civil se desarrollen mecanismos de atención a las víctimas del delito.

Nos aburrimos de votar medidas y recursos para atender a los delincuentes, para rehabilitar al que comete los delitos. Sin embargo, para aquel a quien le matan al padre, al hijo, a la hermana, a la madre, la verdad es que la atención del Estado es muy pobre. La atención que se da desde los servicios oficiales es una atención de corte absolutamente burocrático que, de verdad, no le recupera un golpe a ninguna persona.

Por mi parte tuve la iniciativa de crear una unidad en el Mides para trabajar estas cuestiones, que son de corte absolutamente social. No hubo tiempo material de hacerlo. Siempre es imprescindible que participen las organizaciones de la sociedad civil.

Se ha acusado a esta organización por la presencia de una persona que tiene actividad política, pero esa persona no integra esta asociación civil. Desde noviembre de 2021 la presidenta es Lena Oxley; la secretaria general es Miriam Camejo; el tesorero es Tabaré Barrios; la secretaria de actas es Eglis Martínez, y el vocal es Enrique Ruggiero. La Comisión Fiscal está integrada por Noris Quintana y Santiago Castagnaro, y también es miembro de la directiva Graciela Flores.

Esta señora, que ha sido nombrada además públicamente –no quiero nombrarla en el Senado de la república–, renunció a su cargo en la organización hace ya más de un año.

Por lo tanto, creo que no es para nada justo involucrar lo que no se debe, porque además esta señora tuvo discrepancias con el grupo que está en la dirección de la organización. O sea que las acusaciones públicas que he escuchado no son fundadas. No hay ningún antecedente negativo.

Quiero decir también que nosotros investigamos el tema debidamente frente al llamado de atención que se nos hizo. Fuimos a los registros del ministerio, pedimos la información que corresponde, y no hay ninguna contraindicación. Tengo el informe frente a mí.

SEÑORA BARRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BARRERA.- Obviamente que no estoy de acuerdo con este artículo, pero no porque haya más intervenciones de organizaciones no gubernamentales. Lo que ocurre es que, según nos consta, hay una denuncia en fiscalía contra quien es hoy la directora del Centro de Atención a Víctimas del Delito. ¿Por qué? Porque se utilizaba el lugar para reuniones en donde se favorecía a esta ONG.

En segundo término, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía –a la que creo que se tendría que dar un muy buen respaldo, porque está trabajando muy bien–, es la encargada de la atención a las víctimas a nivel del Estado. Esta unidad quisiera llegar a todo el país. ¿Qué pasa? No sé si los señores senadores recuerdan que la Ley n.° 19039, *Creación de una pensión a las víctimas de delitos violentos*, establece –quise decir esto en comisión y no se pudo cuando concurrió el ministro del Interior– que el 10 % de lo que reciben por su trabajo las PPL –las personas privadas de libertad– debe destinarse a la atención a las víctimas. Ese dinero se le dio al Cavid en ese momento. Cuando en el 2017 entra en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, esos recursos tendrían que haber pasado a la Unidad de Víctimas y Testigos, pero nunca llegaron a pasarse. Siguieron en el Centro de Atención a Víctimas del Delito, que pasó a atender a los policías.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–En mi caso integré la Asfavide –Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia–, pero a partir del momento en que prometí aquí, me fui de esa organización. Pueden corroborarlo. En ese momento empezamos a brindar atención psicológica y, a través de un convenio con la Udelar y el Ministerio del Interior, se instaló el primer consultorio penal. Todo esto se hace. Que haya otra ONG me parece fantástico, pero el hecho es que, de buenas a primeras, aparecieron personas que en su momento quisieron utilizar muchas cosas y no lo hicieron, pero cuando llegaron a cierto poder, en lugar de abandonar lo que estaban haciendo, lo volcaron en beneficio de las organizaciones que integraban. Hay fotos, etcétera, donde se puede corroborar que lo que digo es verdad.

En definitiva, me parece que no es el lugar adecuado para brindar el dinero, porque todas las organizaciones tenemos que buscar lo que se necesita.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Luego de las palabras de la señora senadora Barrera, creo que sobran argumentos en el sentido de lo que quería expresar.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 543.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palaba la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Este artículo autoriza a destinar del crédito presupuestal aprobado para el Instituto Nacional de Colonización un importe máximo de UI 21:000.000 a la adquisición de los inmuebles designados para ser expropiados, por causa de utilidad pública, donde se dispondrá el obrador para la construcción de la represa de Casupá, y menciona los padrones.

Nosotros siempre dijimos que nuestro expresidente Tabaré Vázquez dejó todo listo y le entregó personalmente al actual presidente todos los trámites. Es cierto que desde mucho tiempo se venían haciendo, pero ya estaba prácticamente todo pronto para que se pudiera hacer la represa de Casupá. Este Gobierno optó por no hacerla.

Ahora a través de este artículo se pretende que el Instituto Nacional de Colonización sea quien pague por estas expropiaciones. Tengo en mi poder la resolución n.° 658/021 del directorio, sobre la petición formulada por el señor Juan José Portela y la señora María Isabel López reclamando los daños y perjuicios que dicen haber padecido como consecuencia de las expropiaciones dispuestas por OSE en los inmuebles de su propiedad. Allí se menciona que son tres padrones del departamento de Florida y uno del departamento de Lavalleja. Se agrega que a la fecha dichos trámites expropiatorios no han culminado, peticionando los reclamantes los daños y perjuicios que les ocasionó su dilación. Luego se establece que, a efectos de evitar un litigio eventual y sin que ello implique reconocimiento de clase alguna a la pretensión de las partes, la gerencia jurídico-notarial de OSE arribó a un acuerdo transaccional con los peticionantes, sujeto a la aprobación del directorio, por el cual la Administración les abonará por todo concepto una suma de USD 300.000, declarando los reclamantes, que luego de abonada esa suma, nada tendrán que reclamar por ningún concepto vinculado al acuerdo. Es decir que el directorio resolvió aprobar el acuerdo transaccional por el cual OSE asumía este compromiso con los dueños de estos padrones.

En consecuencia, se resolvió autorizar un crédito por la suma de USD 300.000 que corresponde sea imputada por la gerencia financiero-contable en la forma de estilo y remitir las actuaciones a la intervención del tribunal. Sin embargo, finalmente pasó un año de lo acordado y eso no se cumplió. Se decía que a efectos de finalizar el trámite expropiatorio, en caso de ocurrir que en un plazo de un año no se pagara la suma acordada, sería imputada como parte de pago de la indemnización de la expropiación.

Quiere decir que OSE asumía que era la que tenía que pagar por las expropiaciones. ¿Por qué camino optó este Gobierno? Optó, una vez más –porque acá somos testigos de que durante hace tres años y medio ha habido diferentes disposiciones que han tendido a debilitar al Instituto Nacional de Colonización– por que fuera el instituto el que tuviera que pagar. Señora presidenta: nos parece que eso no es justo porque seguimos atentando contra un instituto que debería preocuparnos –me refiero a todo el Cuerpo– porque no ha sido fortalecido. Es un instituto que tiene una historia de décadas y beneficia justamente a quienes no tienen recursos, pero que están dispuestos a anotarse –había una lista de 1000 aspirantes, pero parece que ya hay cerca de 2000– para ocupar terrenos. Mucho se habla del despoblamiento de la campaña, pero al instituto que puede facilitar las tierras le quitamos dinero.

Nosotros pensamos que el camino correcto era que el Ministerio de Economía y Finanzas viera la manera de que OSE pagara por esas expropiaciones, pero como no va a ser así, no vamos a acompañar la redacción del artículo 543.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: OSE entiende que es necesario construir la represa de Casupá y el proceso de expropiación está iniciado, o sea que, de alguna manera, el Estado tiene que asegurarse esas tierras desde ahora; no puede iniciar otra vez todo el proceso de expropiación.

Tenemos otra situación y es que por ahora no se va a construir la represa porque se va a ir primero a la solución de Arazatí antes que a la de Casupá, por lo cual no podemos correr el riesgo de que OSE adquiera los predios y sean ocupados por terceros. En consecuencia, lo mejor es cumplir con la finalidad del Instituto Nacional de Colonización, que es la de tener un campo donde hacer forrajes. Ese es uno de sus objetivos y en este caso las tierras son absolutamente compatibles.

Lo que se ha dicho es que, en lugar de adquirir otro predio se compra ese, no se permite que tenga ocupantes y se lo utiliza para hacer forrajes, evitando todo riesgo. De acuerdo con el artículo, cuando se vaya a construir la represa, antes del inicio de las obras habrá que reembolsarle al Instituto Nacional de Colonización lo que haya pagado por el predio. Esa es una solución inteligente: se cumple con los objetivos del INC y de OSE, se evitan riesgos y de inmediato contaremos con el campo que debemos tener.

Por otro lado, quiero decir que no es cierto que el Instituto Nacional de Colonización no esté comprando campos ni distribuyendo porque se han comprado 4500 hectáreas en los últimos tiempos; el último de los negocios se termina en los primeros dos meses del año próximo. ¡Son USD 15:000.000! Esa es la inversión de campos de 600 hectáreas en Rocha; 1300 hectáreas en la cuchilla Grande; 580 hectáreas en el sur, y la adquisición a colonos propietarios, lo que permite adquirir más tierras.

La verdad es que no es justo que se afirme lo que se está diciendo. Estamos frente a una buena solución, inteligente, que les sirve al Instituto Nacional de Colonización, a OSE y al país. Creo que hay que tratar de perfeccionar los hechos y este es uno de esos casos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 543.

(Se vota).

–15 en 27. **Afirmativa.**

En consideración el inciso 23, «Partidas a reaplicar».

Los artículos 545 y 548 fueron aprobados por unanimidad en la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 28. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 546.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 547.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 549.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. **Afirmativa.**

En consideración el inciso 24, «Diversos créditos».

Los artículos 550 al 558 fueron aprobados por todos los miembros de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 29. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 559.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. **Afirmativa.**

Ingresamos a la sección VII, «Recursos».

En consideración los artículos 561, 567 a 570, y 574, que fueron aprobados por unanimidad en la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–28 en 30. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 560.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 562.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 563 a 566.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–18 en 31. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 571 y 572.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora

SEÑORA KECHICHIAN.- Me gustaría dar una opinión sobre el artículo 571.

Este es un artículo que, en realidad, no terminamos de comprender porque establece que las empresas que no adhieran al Plan de Gestión de Envases no tendrán los certificados necesarios para importar, pero todas las empresas que importan y que fabrican ya están adheridas al Plan VALE, de julio de 2022, firmado por el hoy senador Peña. Ya hay 2700 empresas que están adheridas al plan de la Cámara de Industrias.

Tampoco comprendemos por qué se le pone cero valores al Imesi –que es un impuesto que nunca pagaron las empresas y ahora lo fijen por ley–, antes de determinar las metas a alcanzar. Es decir, el eventual pago de esos montos exonerados para mí es inaudito porque, en realidad, no se exonera ninguno pues nunca hubo uno fijado a pagar.

Entonces, realmente es un artículo muy confuso; establece cuestiones que ya existen y hay otras que no entiendo por qué están. Realmente, me gustaría tener alguna explicación de la coalición de gobierno.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Algún senador puede explicar el artículo 571 que, además tiene un sustitutivo?

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Con respecto a la primera parte de la consulta de la senadora Kechichian, digo que las empresas adhieren al plan, pero el artículo prevé una sanción para aquellas que no lo hagan. Las obligadas son todas las empresas, como lo establece la Ley n.º 19829, *Aprobación de normas para la gestión integral de residuos*, votada en la Administración anterior. Entonces, por primera vez se prevé una sanción para aquellas empresas que no adhieran al plan, y eso es muy importante porque si este no tiene la cobertura que se necesita, no se va a llegar a los niveles de recuperación a que se aspira.

Esta es una introducción que ha hecho Cabildo Abierto, pero a instancias del pedido del grupo del PIT-CNT que trabaja en esta materia. Por lo tanto, consideramos que es un aporte interesante. No se encontraba en el proyecto original, es un aporte que trae Cabildo Abierto, pero también toma en cuenta la posición de los trabajadores. Nosotros entendimos que era virtuoso, que sumaba y por eso está en la nueva redacción.

Con respecto a lo del Imesi, sí tiene su complejidad, pero trataré de explicarlo en pocos minutos. Lo que hace el artículo es asegurar que no se cobrará a las empresas el Imesi previsto en la ley siempre que cumplan con las metas de recuperación establecidas. Esas metas de recuperación exigidas están en las resoluciones ministeriales n.º 271/020 y n.º 272/020, pero a partir de esta rendición estarán en el artículo, es decir, tendrán fuerza de ley.

Entonces, lo que estamos haciendo es generar un resguardo para que la Cámara de Industrias, que es la responsable del Plan VALE, pueda invertir lo suficiente para alcanzar las metas a las que el Estado la obliga en materia de recuperación de envases. Lo que se propone es que, si alcanzan la meta exigida, no tendrán el cobro del Imesi por diez años; queda como en suspenso. Ahora bien, si esto no pasa, queda habilitado el cobro del Imesi. Este y su eventual adicional están previstos en la Ley n.º 19829, así como la creación del Fonagre, Fondo Nacional para la Gestión de Residuos.

Cuando nosotros asumimos en el ministerio, la ley estaba votada pero no se había comenzado a aplicar. Como Administración entendimos que el proceso era aplicar esta ley que se había dado el Uruguay y fue lo que comenzamos a hacer con diferentes decretos reglamentarios: las resoluciones ministeriales que tenían que ver con envases, pero también los decretos sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de la construcción, de baterías. En fin, todas las líneas de residuos que la ley discrimina tienen su decreto reglamentario o están en proceso de avance. Por primera vez tenemos un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, que es lo que establecía la ley, o sea que comenzamos a aplicar la norma votada en la Administración anterior.

El punto es que en esas decisiones que se tomaron apenas asumió el Gobierno, estuvo la de no instalar el Imesi previsto y la de no generar el fondo. Fue una decisión básicamente consultada al equipo económico en su momento. Entonces, lo que se hizo fue establecer estas resoluciones para poder exigir a las empresas el aumento del nivel de recuperación, que en Uruguay hoy formalmente está apenas en el 4 % o 5 %. Al no aplicar el Imesi y no tener el fondo, nosotros creímos que había que obligar a la Cámara de Industrias de algún modo a mejorar sus niveles de recuperación. Está bien, no se le aplica el impuesto, pero va a tener que recuperar y para eso va a tener que invertir. La cámara siempre había dicho que podría recuperar de manera mucho más eficiente, con un plan gestionado desde el lado privado, sin la intervención del Estado, y que podría llegar a los niveles previstos sin necesidad de impuesto y de un fondo a nivel estatal. Bueno, le dimos esa oportunidad a la Cámara de Industrias, no se puso el Imesi, no se generó el fondo, pero debe cumplir. Por eso las metas que nosotros impusimos, que fueron muy polémicas. Hubo una gran discusión con los operadores privados, sobre todo con la cámara que representa a la bebida, porque son los mayores aportantes a esta cuestión, pero la realidad es que se ha ido avanzando. Hoy la cámara tiene el Plan VALE: lo presentó, lo tiene estudiado y financiado; contrató una consultora para esto. Va a llegar con su plan a

los diecinueve departamentos cuando estaba solo en seis; va a establecer por primera vez en Uruguay el depósito de reembolso, que significa que cuando uno lleva un descartable a una máquina, esta le devolverá un importe. En fin, todo eso necesita una inversión importante y la cámara pidió un resguardo: tener la tranquilidad de que mientras se desarrolla todo esto no va a venir otro que le va a fijar, además, un impuesto.

Entonces, lo que se hace es lo siguiente: «Si vos cumplís con la recuperación, con las metas e instalaste todo lo que dijiste, no te voy a poner el Imesi; quedate tranquilo. Ahora, si no cumplís con las metas, corre el impuesto». Eso es lo que dice el artículo, nada más.

El que no entendió, estoy a disposición después de las cinco de la mañana.

(Hilaridad).

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- No termino de entender cuál es la sanción para los que no adhieran, porque ya sabemos que los que no adhieran no pueden fabricar ni importar. ¿Cuál es la sanción? ¿Qué es lo nuevo que se pone aquí?

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Estamos accediendo a una solicitud, sobre todo del PIT-CNT, que pedía que en este artículo esto estuviera especificado. Ayer hablamos con el senador Manini Ríos acerca de que esto ya existe. Es decir, cuando alguien no cumple con un plan de residuos del Ministerio de Ambiente, se suspende su certificado de importación, pero no resta nada dejarlo explícito en este artículo que específicamente habla del tema envases.

Era un pedido, creo que correcto, al igual que la solicitud de que las metas tuvieran rango de ley en lugar de establecerse en una resolución ministerial que mañana puede ser cambiada por un ministro. El artículo no tenía estas cosas incluidas originalmente en la versión que se trabajó en la Cámara de Representantes y luego en la comisión, pero tuvo esos agregados, fundamentalmente atendiendo a los pedidos de estas partes interesadas, o sea, de un grupo de trabajo que funciona en el PIT-CNT, que incluye a la Universidad de la República y a trabajadores en materia de clasificación de residuos, con el que hemos tenido mucho intercambio en todo este tiempo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Eso que usted ha explicado, señor senador –que nos queda a todos más que claro–, está en el sustitutivo de la hoja 90 C.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 571 tal cual viene de la comisión.

(Se vota).

–0 en 29. **Negativa.**

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el sustitutivo de la hoja 90 C.

(Se vota).

–17 en 29. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 573, que tiene un sustitutivo en la hoja 13 C.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar primero el artículo 573 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 28. **Negativa.**

En consideración el sustitutivo que está en la hoja 13 C.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 29. **Afirmativa.**

Ingresamos a la sección VIII, «Disposiciones varias».

Los artículos 575 al 581, 583, 585, 591 al 593, 624 y 626 fueron aprobados por unanimidad en la comisión.

Los artículos 633, 634, 635 y 636, cuya votación fue 14 en 14, no están coloreados de verde.

(Dialogados).

–Entonces, incorporamos los artículos 633 a 636.

Lo mismo pasa con los artículos 641 y 642, que tienen que estar en verde, pues el resultado de la votación en comisión fue de 14 en 14.

El artículo 642 tiene un sustitutivo.

Luego vienen del 644 al 648.

El 645 ya fue votado.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- El artículo 646 no, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- No. Serían los artículos 647 y 648.

SEÑOR BLÁS.- El artículo 648 sí, y después los artículos 651 y 652.

SEÑORA PRESIDENTA.- Exactamente, señor senador. El artículo 653 tiene un sustitutivo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Para esto de las columnas verdes vamos a agregar el artículo 582, señora presidenta. Lo vamos a acompañar.

SEÑORA PRESIDENTA.- O sea que el artículo 582 también estaría de color verde. Como son varios artículos, si los señores senadores están de acuerdo, repasamos nuevamente lo que vamos a votar.

Por favor, señor senador Blás, le agradezco que me los confirme.

Sería del artículo 575 al 583.

SEÑOR BLÁS.- Correcto.

SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 585.

SEÑOR BLÁS.- Sí.

SEÑORA PRESIDENTA.- Del artículo 591 al 593.

SEÑOR BLÁS.- Sí.

SEÑORA PRESIDENTA.- Artículos 624 y 626.

SEÑOR BLÁS.- Correcto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Del artículo 633 al 636.

SEÑOR BLÁS.- Correcto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Luego los artículos 641, 644, 647 y 648.

SEÑOR BLÁS.- Sí.

SEÑORA PRESIDENTA.- También los artículos 651 y 652.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 575 al 583, 585, 591 al 593, 624 y 626, 633 al 636, 641, 644, 647 y 648, 651 y 652, aprobados por unanimidad en la comisión.

(Se vota).

–30 en 30. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- ¿Nosotros ya votamos el artículo 626?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, porque vino por unanimidad.

SEÑOR CARRERA.- Quisiera fundamentar mi voto porque es un artículo que ha pasado inadvertido y creo que es un gran logro que lo hayamos aprobado por unanimidad.

Este artículo refiere a las personas que están en el *clearing,* a quienes por estar allí no les vamos a negar el acceso a los servicios básicos, como UTE, OSE, Antel, Internet –hoy es un servicio básico– y tampoco el acceso a la garantía de alquileres. Hay muchas personas que a lo largo de su vida son buenos pagadores del alquiler, pero si ingresaron al *clearing*, cuando tienen que renovar el contrato terminan pasando por el martirio de tener que comprar una garantía.

Entonces, nosotros agradecemos porque pudimos llegar a un acuerdo. Era un artículo que no vino bien redactado de la Cámara de Representantes –hay que reconocerlo–, pero en el trabajo de la comisión pudimos poner los puntos sobre las íes. Además, agregamos que para todas aquellas políticas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial –hay políticas públicas muy importantes–, el hecho de estar en el *clearing* no es obstáculo para que la persona pueda acceder a la garantía de alquiler. También pasaba que a veces se realojaba a personas y, por estar en el *clearing*, no podían escriturar.

Quiero destacar que pudimos llegar a un consenso muy positivo, pero no se ha manifestado con el suficiente énfasis. A partir de las visiones y las discusiones que se dieron, pudimos concretar una norma muy relevante y ampara a un conjunto muy importante de personas. Estamos levantando la muerte civil de un montón de personas. Realmente es importantísimo el acuerdo político al que llegamos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sería bueno que tuviera publicidad porque es un artículo que le cambia la vida a muchísima gente. Me parece que a veces no se le da suficiente difusión a iniciativas que benefician a la población.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señora presidenta.

Yo también me congratulo de haber llegado a un acuerdo unánime. Nosotros lo habíamos trabajado a nivel de la bancada del Partido Nacional cuando tratamos el tema de los deudores. Luego se llegó a un acuerdo en la coalición y, posteriormente, con toda la oposición, haciendo recíprocas concesiones. Lo que nos interesaba era que quedaran cubiertos aquellos servicios esenciales que brinda el Estado, no la venta quizás de un aparato de teléfono, pero sí la telefonía, el agua, la energía eléctrica y también aquellos servicios para la vivienda, tanto la garantía de alquiler como el acceso a los planes y beneficios de la Agencia Nacional de Vivienda, etcétera. Si bien son perfectamente lícitas esas bases de datos privadas que se manejan entre comerciantes y que las comparten, el estar incluido en ellas no debe obstar para que se pueda acceder a estos servicios, que son públicos y que la Constitución también establece como esenciales.

(Murmullos).

–Por lo tanto, también me congratulo. Lamento el murmullo. Quizás están celebrando.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- En comisión recibimos a AEBU –Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay–, que en general nos dio una mano con estos temas, y hay que hacerle un reconocimiento en ese sentido. Sus integrantes vinieron muy ilustrados y nos dijeron que no había ninguna ley que obligara a determinada cosa; lo decimos para que no haya dudas. Incluso fueron más allá, porque dijeron que en su trabajo, que incluye el tema de la aprobación de las carpetas para los préstamos, muchas veces hay resoluciones gerenciales que no tienen en cuenta que la situación del *clearing* perfectamente se puede manejar. Entonces, ya que vamos a dar difusión, también lo debemos hacer con ese tema y eso yo lo aprendí de la representación de AEBU, que vino hace un tiempo a la comisión. Además, son prácticas bancarias y nadie mejor que ellos para ilustrarnos, pues no se desprende de ninguna norma. La ciudadanía, como se decía recién, puede no enterarse de eso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Yo estaba pensando de qué manera se podría difundir este artículo y no sé si no tendríamos que poner una obligatoriedad en ese sentido.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: quiero hacer una pequeña reflexión. Este artículo es una muestra clara de cuando el Estado se llena de soberbia y abusa de poder. Yo he gritado lo que hoy se vota desde hace al menos dieciocho o veinte años y la verdad que poca pelota me dieron. Era una forma permanente de que ingresara el Estado a usar un servicio privado de información crediticia para negar servicios públicos; algo de locos. Es la pérdida del objetivo. No hubo caso. Tengo catorce misivas de la junta departamental de los últimos catorce años diciendo que el Estado no podía asociarse a un sistema que privaba a la gente del acceso a un servicio público. Hubo momentos en los que OSE no daba servicio y había que hacerlo por excepción. Se hicieron viviendas sociales y no podían acceder las personas que estaban en el *clearing* y los directores no escuchaban. Hoy cuando se está votando esto, en realidad ya no queda nadie en el Estado usándolo, porque cuando la ANV –la más porfiada que quedaba– empezó a escuchar la voz del Parlamento y vio que esto salía, lo sacó hace quince días y, además, lo anunció. La ANV no pide más. ¡Por favor! Pedí personalmente seis veces por teléfono que tomaran una decisión que era de los directorios y no voy a entrar a mencionar las fechas, aunque voy a decir que no fue en este Gobierno, que ya había decidido eso. La fue levantando Antel, UTE y toda una serie de oficinas del Estado que recurrieron a pagar el servicio de un alcahuete privado creado para proteger los créditos de los privados y bastante dudoso es ese intercambio de datos privados. El Estado se sumó a eso, como si no tuviese suficiente forma de proteger sus créditos. Si hay alguien que tiene abuso sobre la gente para proteger sus créditos, para ejecutarlos y para tratar de cobrarlos es el Estado uruguayo, pero mataron durante quince o veinte años varias oportunidades de que algún uruguayo accediera por estar en el *clearing.* Es de locos. Hoy se termina, sí, pero lo importante es que no venga otro adelante que se le vuelva a ocurrir hacerlo, porque hoy no está funcionando, pues este Gobierno lo desactivó desde el día uno en todas las oficinas, salvo en los caprichosos.

Esta es una muy buena medida, que hace que el Estado esté en su verdadero lugar. Yo estoy para prestar servicios y para dar acceso a la gente a determinadas cosas que son mi función y no para ponerle trabas, pues ya bastante tuvo con no poder pagar como para que se la castigue con cosas que a veces son esenciales y se le quite la posibilidad –lo repito porque es indignante– de acceder a una vivienda.

Durante el Gobierno anterior, en Maldonado para otorgar las viviendas del realojo de El Placer, tuvimos un gran problema: no se las podíamos dar a los que estaban en el *clearing.* ¡Miren lo que estoy diciendo! Estoy hablando de un asentado al que se saca de un asentamiento, se le quiere dar una vivienda social pero, como había convenio y el fideicomisario era la Agencia Nacional de Vivienda, no se le podía adjudicar porque estaba en el *clearing* y hubo que hacer una resolución expresa para liberarlo. ¡De locos! Esa locura hoy se termina.

Sin duda, la señora presidenta tendría que poner un cartel en la página web del Parlamento y darle la información a todos los medios periodísticos para que los uruguayos vean que por lo menos una locura cometida entre todos durante quince o veinte años se terminó.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero decir que me parece un hecho trascendente que se haya adoptado esta iniciativa. En realidad, la iniciativa surgió originalmente de la bancada del Frente Amplio. Cuando se planteó en comisión consideramos inmediatamente que era necesario aprobarla y nos alegramos de que lo haga en pleno toda la coalición.

También quiero decir que las principales víctimas del *clearing*, de esta base de datos, son las personas que sufren los efectos de una ley de tasas de interés absolutamente injusta, que ha determinado que miles y miles de personas sean víctimas de una usura legal en violación de las normas constitucionales. El sistema político, aparte de eliminar la exigencia de algunos organismos públicos de estar libres de inscripciones en el *clearing*, tiene la responsabilidad de asumir que el Uruguay tiene miles y miles de víctimas de una ley que favoreció a los grupos financieros y que ha perjudicado precisamente a quienes están inscritos en él.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que me gusta destacar lo que se logró porque se sigue aplicando y quería tomar su propuesta de que hay que difundir esta norma. El IMPO, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, tiene dentro de sus objetivos la difusión de las normas. Creo que podríamos votar que se le encomiende a la presidencia que haga gestiones, porque es un gran logro que hay que difundir.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- El secretario ya mandó poner la noticia en todas las redes del Parlamento. Se puso en la página web del Parlamento como noticia destacada, pero si les parece nos pondremos en contacto con el director del IMPO, como solicitud del Senado, porque creemos que es importante comunicarlo a la población.

SEÑOR LIBEROFF.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LIBEROFF.- Se podría agregar a los medios públicos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a agregar a los medios públicos. Todos nosotros podemos dar la noticia en nuestras redes porque todos tenemos seguidores.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Simplemente quiero hacer un comentario. Me parece que está bien que el Parlamento difunda esto. Ahora, lo cierto es que esto todavía no es ley, por lo que no podemos encomendar a nadie que divulgue algo que aún no ha sido aprobado por el Parlamento y, además, tiene que ir a la tercera cámara. Compartimos plenamente lo que se dice acá sobre la divulgación, pero para eso están las redes del Parlamento y de los legisladores. Creo que no podríamos encomendarle al IMPO que haga nada con algo que todavía no es ley.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero decirles que pusimos que se votó en el Senado. Vamos a esperar, vamos a esperar. La casa es seria, señor senador.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto sobre el artículo 644.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta.

Quiero también resaltar este artículo para la restitución de los derechos de identidad de origen, que fue votado por unanimidad. La identidad de origen hace referencia a la identidad del ser humano y a su dignidad.

En cuanto a la búsqueda de la identidad, señora presidenta, cuando las personas transitan por un proceso de adopción legal, el INAU cuenta con una oficina receptora que está en la División Adopciones donde le pueden brindar los datos al solicitante. Sin embargo, persisten casos donde el proceso de desvinculación con la familia de origen y la incorporación a la nueva familia no se realiza dentro de dependencias de ningún organismo del Estado. Esa persona después se basa en relatos de familiares que, muchas veces, tienen inconsistencias, en otras, ese vínculo directo que tienen fallece, y en otros casos sabemos que también se dan los pactos de silencio, que es muy común y se ve en el interior del país. ¿Qué sucede, entonces? La persona comienza a deambular de una oficina a la otra generando una preocupación dentro del mismo INAU, que hoy cuenta con esa información, pero antes no la tenía. Sabemos perfectamente que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los derechos a la identidad. ¿Qué es lo que promueve este artículo? La creación de un ámbito institucional donde la persona puede dirigirse allí, sin tener que deambular de un lado a otro, donde le brindan las garantías de tener conocimiento de su identidad de origen.

Este es un artículo sumamente importante que respeta los derechos de identidad que todos tenemos. Por eso quería resaltarlo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 584.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 28. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 586 a 590.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–15 en 28. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 594 a 623.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–15 en 28. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 602 y 614, para los que se necesita mayoría absoluta.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 625, 627, 628 y 629.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 630, que tiene un sustitutivo en la hoja 93 C.

Aclaro que este artículo tiene que ver con las personas que ocupan los cargos de fiscal de Corte y fiscales letrados, y la inhibición de los tres años que hoy se discutió.

(Dialogados).

–Si no se hace uso de la palabra, se va a votar tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 30. **Negativa.**

En consideración el sustitutivo de la hoja 93 C.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: solicito que la votación de este artículo sea nominal.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

¿Podemos seguir votando y dejar para lo último este artículo? No vamos a votar ahora el artículo, sino que lo pasamos para el final, así no perdemos el hilo.

(Apoyados).

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTA.- Es muy difícil seguir el hilo de la votación con tanto ruido.

Vamos a ordenarnos.

En consideración los artículos 631 y 632.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Propongo hacer un bloque con los artículos 637 al 643, por favor.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 642 tiene un sustitutivo que ya se votó.

SEÑORA ASIAÍN.- Sí, pero de todas maneras pido un bloque con esos artículos, es decir, del 637 al 643, que refieren a la pensión alimenticia.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: el criterio que estamos siguiendo desde que empezamos es que aquellos artículos que tienen un sustitutivo se votan negativamente primero y después el sustitutivo. Así que, si le parece, votaríamos los artículos del 637 al 641.

(Dialogados).

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Quiere fundamentar primero?

SEÑORA ASIAÍN.- Sí.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias.

Lo primero que quiero hacer es una corrección *in voce* del artículo 637 que, en el inciso primero, habla de la omisión injustificada de los alimentos y plantea una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia. En la última frase dice: «… a los efectos previstos por los artículos 279 BIS y 279 TER del Código Penal». Como ese 279 TER, que viene dentro de los artículos a votar, no se vota, correspondería removerlo porque, de lo contrario, va a quedar una remisión a un artículo que no va a alcanzar estado legislativo. Así que, la corrección *in voce* es eliminar «y 279 TER».

Hecha esa aclaración, quiero explicar un poco el porqué de esto. Podríamos decir que estos artículos son sin costo, pero cuando nos referimos a ellos tenemos que hacer una precisión. En realidad, son sin costo presupuestal para la rendición de cuentas, pero para las personas con discapacidad, que son los beneficiarios de la pensión alimenticia, ¡vaya si tiene un costo esencial para la vida!

En definitiva, este es un tema que protege el derecho de los niños y de las personas con discapacidad y, a su vez, es un deber de los padres.

¿Qué busca esto? Esto surge de una experiencia de campo y de ejercicio profesional, por supuesto que rentado en alguna parte; cuando es rentado da menos con las realidades más duras. La experiencia más dolorosa y que me puso en contacto con esta realidad tan dura es haber atendido, con otro colega, un consultorio jurídico gratuito en Malvín Norte, donde mucho más de la mitad –no tengo la estadística– de las consultas que realizaban las personas, justamente era por el pago de la pensión alimenticia a los hijos menores de edad.

(Murmullos).

–Solicito que se me ampare en el uso de la palabra. Realmente me cuesta seguir el hilo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a pedir nuevamente silencio, por favor.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Entonces, en estas poblaciones más vulnerables aparecían este tipo de situaciones. Incluso, a veces había madres con hijos de parejas diferentes que no tenían ni los datos identificatorios ni la cédula de identidad del progenitor como para poder reclamarle la pensión que le correspondía pagar.

Por eso, cuando se aprueba la Ley de Registros Públicos-Deudores Alimentarios, se prevé esta circunstancia y por ello se puede dejar constancia solo con el nombre y el apellido, aunque no se tenga el número de cédula de identidad. A nosotros nos alarmaba esta situación y decíamos: «¿Cómo? No sirve de nada». Entonces, hoy que es posible el cruzamiento de datos, una de las medidas para lograr ubicar a la persona y que se haga cargo de aquello que se tiene que hacer cargo es que el juez de la causa reoficie al registro de identificación civil para que remita la información –de la misma manera que se hace cuando alguien quiere comprar un inmueble y pide al registro los datos registrales de los embargos y demás–, a efectos de que la parte que está reclamando pueda identificar a la persona porque, quizás, haya muchos con nombres y apellidos comunes, como, por ejemplo, Juan Pérez. Estas son medidas que van recorriendo los distintos códigos como el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Registros Públicos-Deudores Alimentarios, el Código General del Proceso, así como una previsión sobre el Código Penal que no va a prosperar.

También se ha consultado con jueces penales y de familia. En tal sentido, quiero destacar el asesoramiento y las sugerencias de redacción y de texto que brindó el ministro de Tribunal de Apelaciones de Familia, el doctor

Eduardo Cavalli, que estaba muy preocupado por estas cuestiones.

Yendo al articulado, el 637 es una modificación en un *nomen iuris* «Omisión injustificada de alimentos», que establece que se notifique y se remita de inmediato ante el incumplimiento reiterado y contumaz a la Fiscalía General de la Nación para que se dispongan las medidas que correspondan. También se establece una medida para que quien haya representado a los niños continúe haciéndolo; esto fue requerido por los jueces, justamente, porque había dificultades en este sentido.

Se establece explícitamente la retención como forma de ejecución forzada. Cuando se establece la retención sobre el salario por sentencia judicial o por acuerdo homologado judicialmente, está claro que el incumplimiento da lugar a la ejecución, pero cuando se establece un pago en un convenio y no se dispone la retención, se planteaba la dificultad de que ello no estaba explicitado, por lo que fue necesario incorporarlo.

También está la posibilidad de que se decreten medidas de constreñimiento y que en la inscripción del Registro de Deudores Alimentarios también consten otros datos –como las redes sociales, etcétera– para ubicar a las personas.

Se habla de un mínimo aun cuando no se conozcan fehacientemente los ingresos de un deudor. A veces existen ingresos por changas de manera informal, por lo que, por lo menos, se establece un mínimo.

Se plantea una excepción a la no embargabilidad de los bienes cuando se trata de pensiones alimenticias de los hijos decretadas u homologadas judicialmente. Es en este artículo 642, que modifica el Código General del Proceso, que hay un sustitutivo en la hoja 15 C, que quizás haya que rectificar para votarlo en lugar del 642.

Luego, pasamos al tema penal. ¿De qué estamos hablando? De una obligación alimentaria que es un deber constitucional, el de hacerse cargo, que también parte de la corresponsabilidad en la crianza. Estamos preocupados por esta realidad y sobre todo por los casos de pobreza infantil, de infantilización de la pobreza, en donde niños en tales condiciones están a cargo de madres solas que tienen que hacer frente a esa situación.

¿Qué es lo que quisimos hacer con esta batería de medidas? Involucrar también una explicitación en lo penal. Primero, está la creación de un delito autónomo que, insisto, está en el artículo 643 y que no va a alcanzar la aprobación porque no están los votos. De todas maneras, lo reivindico. Existe en otras legislaciones y lo que se hace es colocarlo a continuación de un delito –está en el capítulo sobre protección de la familia– que habla de la omisión en el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Este delito de omisión en el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad ya se ha aplicado para convocar a un deudor por rehusarse al pago de la pensión alimenticia.

Se ha dicho que van a ir presos los que estén enfermos o no tengan trabajo, pero no es así, porque lo que se exige para que este delito se tipifique es que haya una intención de no pagar. El que no tiene trabajo o está enfermo, evidentemente, tiene una causa justificada para no pasar esa pensión, como se había previsto en el delito. Además, no debemos perder de vista que estamos hablando de que en la situación en que el padre no pueda pasar la pensión alimenticia, hay niños que la necesitan igual. Entonces, se va a perseguir a aquel que se niega, existiendo una obligación por sentencia judicial y una intimación para el pago, y que no tiene una causa justificada. Todo ello debe reunirse para que se tipifique el delito. ¿Es una locura uruguaya? ¡No!; existe en muchos países, como por ejemplo en España, y solamente por el hecho de no pago. ¿Es una prisión por deudas? ¡No!; esto no es por la falta de pago, sino por no cumplir –insisto– con deberes inherentes a la patria potestad.

Estamos hablando de algo gravísimo y en algunos casos ni siquiera se acompaña el agravante que ponemos, que es cuando se utilizan estratagemas para eludir el pago o se ocultan los bienes. Acá estamos hablando de una estafa –a través de la utilización de estratagemas– a los propios hijos.

Tanto en el autónomo –que ya sabemos que no se acompaña– como en el sustitutivo que presentamos en la hoja 16 C, simplemente se intervenía el delito que ya existe y que fue utilizado por los jueces para reclamar el pago de la pensión alimenticia. Lo que provocaba era que se convocara a ese padre que se rehusaba y que, pudiendo, no pagaba; esa persona, apremiada, terminaba arreglando y pagando. Ese delito que es excarcelable, porque tiene un máximo de doce meses de prisión, juega con un artículo que votamos a propuesta del sector Ciudadanos, que modifica el artículo 304, y habla de la posibilidad de sustituir la pena, por ejemplo, por trabajos comunitarios. Está claro que el juez nada gana enviando a prisión a esa persona que no va a poder generar los recursos que sus hijos necesitan.

El diario *El País* analizó esta serie de disposiciones que proponemos y dice: «Abogados penalistas advirtieron a *El País* que ya ha habido denuncias penales y condenas contra quienes no pagan la pensión alimenticia…». Esto es al amparo del artículo que ya existe, el 279 bis. Más adelante dice el artículo: «… bajo el argumento de que incurren en la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad». Luego dice: «… los consultados plantean que crear este nuevo delito habilita a clarificar la conducta sancionada». Quiere decir que apoyan.

Es para el caso de padres desaparecidos que eluden la responsabilidad y creo que el sistema político debe tomar cartas en el asunto.

También recordemos que este país, durante el Gobierno de Lacalle Herrera, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y anteriormente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con ello se comprometió a tutelar el interés superior del niño como deber primordial.

En estos casos se está privando al niño del ejercicio de un derecho y este artículo intenta protegerlo. El bien jurídico protegido por este delito penal es el derecho al sustento, a la vida y a la integridad física –lo más preciado– de adolescentes y de incapaces, que son los beneficiarios de la pensión alimenticia. ¡No es la mamá! Las consecuencias de la falta de pago de estos alimentos son gravísimas para los beneficiarios.

Hablamos de estafa a los niños, pero también del perjuicio a los abuelos porque seguramente se acuda a ellos, que también estarán en una situación de precariedad, para que hagan frente a lo que en general el papá no quiere hacer.

Todos conocemos casos. En el despacho, cuando estaba preparando este articulado, salieron algunos de los asesores y ayudantes a la calle a consultar a las personas a la salida de los juzgados de familia para ver si conocían casos y la verdad que las respuestas fueron muy unánimes. Decían, por ejemplo: «Sí, mi vecina; se trata de un incapaz y no le quiere pasar la pensión». Son casos de ocultamiento; se trata entonces de perseguir a los que esconden los bienes.

El Código Penal traza una línea y separa esas conductas que va a perseguir, porque las condena y las considera reprobables, de las conductas que autoriza.

En este caso, la conducta de aquel que, pudiendo, no hace frente a sus obligaciones, considero que tendría que estar si no como delito autónomo, por lo menos explicitado como agravante dentro del delito que ya existe. Lo único que se hace con el artículo 279 BIS es, en omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, explicitar que también va a incluir la falta de cumplimiento intencional de la pensión alimenticia y luego los agravantes de las estratagemas.

Personalmente no me han convencido –quisiera que se explicaran más– los fundamentos para dejar esto fuera, para abstenerse de perseguir a quienes intencionalmente eluden esta responsabilidad y, más aún, estafan a sus hijos.

Aclaro que hay un sustitutivo del artículo 642 en la hoja 15 C –no me queda claro si se votó o no– y un sustitutivo del artículo 643, en la hoja 16 C.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La señora senadora Asiaín propuso eliminar una parte del artículo 637.

SEÑORA ASIAÍN.- Efectivamente, cuando hace referencia al artículo 279 TER.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 637 con la eliminación propuesta por la señora senadora Asiaín.

(Se vota).

–15 en 27. **Afirmativa.**

En consideración los artículos 638, 639 y 640.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–16 en 29. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 642, que tiene un sustitutivo en la hoja 15 de la coalición.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 642 tal como vino de la comisión.

(Se vota).

–0 en 30. **Negativa.**

En consideración la hoja 15 de la coalición.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 643, que tiene un sustitutivo en la hoja 83.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 643 tal como vino de la comisión.

(Se vota).

–0 en 31. **Negativa.**

En consideración la hoja 83.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–14 en 31. **Negativa.**

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: evidentemente que compartimos la preocupación de la senadora Asiaín.

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor!

Estoy amparando a la senadora en el uso de la palabra.

Adelante, senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En realidad estábamos diciendo que evidentemente es un tema muy sensible. Compartimos el objetivo porque ese derecho al cobro para la alimentación de los hijos es el que anhelamos también y conocemos las infracciones que se cometen muchas veces. Lo que nos parecía, y por eso no acompañamos, es que ameritaba un tratamiento diferente porque también tiene connotaciones –podemos decir difíciles– en cuanto a consecuencias y ameritaba que se tratara en una comisión para que tuviera un tratamiento diferente, donde en días, en horas, estamos decidiendo estos temas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

Compartimos la preocupación y la necesidad de hacer cumplir todas las normas, pero no compartimos que se establezca pena de prisión para incumplidores porque, en definitiva, el actual Código Penal prevé las omisiones a la patria potestad, y determinado tipo de omisiones ya son punibles. No creemos que sea bueno crear nuevas figuras, sobre todo, teniendo en cuenta la magnitud que puede llegar a tener este tema. Nosotros pensamos que no sería bueno establecer prisión como castigo por no cumplir, sino que habría que dejarlo encarado o incluido dentro del tema de las omisiones a la patria potestad que ya están previstas en nuestro Código Penal.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias.

No se trata de una nueva figura, por eso lo propuse y lo voté. Es una figura que está subsumida dentro de la otra, por algo se ha aplicado en el pasado y ya lo han hecho los jueces. Por eso es muy falaz una noticia que surge cuyo titular dice: «Cabildo Abierto frena cambio y no será considerado un delito no pagarlas». Esto no es así. Esto no es así porque, evidentemente, al amparo del delito que ya existe, va a seguir siendo un delito y la fiscalía podrá perseguirlo, como ya en algunas oportunidades se ha hecho. Esto debería tenerse en cuenta.

De todas maneras, señora presidenta, creo que se ha instalado en la sociedad el tema y quizás –así lo espero– sirva para alentar a quienes deben las pensiones o quienes rehúsan hacerse cargo a que lo hagan, así como a quienes lo reclaman, que vayan por todas las vías procesales pertinentes y efectivas para hacerlo.

Gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido que se reconsidere la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar la reconsideración de la hoja 83.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: se acaba de votar el artículo. Por lo tanto, no necesita reconsiderarse, con que se rectifique la votación ya está. No pasamos a otro artículo. Se rectifica la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me lo piden, yo pongo a votación la reconsideración.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Claro, pero no se pasó a otro artículo. Cuando uno reconsidera es porque ya avanzó en el articulado y quiere volver atrás, pero cuando se está fundamentando el voto del artículo, con que se rectifique alcanza.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación.

(Se vota).

–10 en 30. **Negativa.**

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: en el marco de la Ley n.º 19580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, el artículo 279-BIS (omisión de los deberes inherentes a la patria potestad o a la guarda), dice: «El que intencionalmente omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela, la curatela o la guarda judicialmente conferida, poniendo en peligro la salud física, psíquica o emocional de las personas a su cargo, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión. Constituye agravante de este delito el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento de los deberes de asistencia económica inherentes a dichas responsabilidades». El Uruguay ya tiene vigente una ley que contempla estos temas. Los temas inherentes a la patria potestad fueron una parte importante de la discusión de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que sería conveniente que la señora senadora Asiaín tratara de explicar la diferencia entre lo que propone y lo que la señora senadora Kechichian trae y está vigente.

SEÑORA ASIAÍN.- En primer lugar, deseo aclarar que no se trata de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, sino que figura en el Código Penal. El artículo que la señora senadora Kechichian leyó –al que también aludí– es el que intervenimos para simplemente explicitar al lado de los deberes inherentes a la patria potestad, la guarda y el cumplimiento de la pensión alimenticia. ¡Si tendremos presente ese artículo! Lo que hicimos fue que no pasara inadvertido que también comprendía a la pensión alimenticia, para advertir a quien pudiera aprovecharse de ese artículo para reclamar, y también explicitar un poco más el agravante. Quiere decir que estamos totalmente en línea.

En el fundamento de voto mencioné que ya existe, que por eso es falaz decir que ya no será delito no pagar la pensión alimenticia intencionalmente porque ya existe. Lo que tratábamos era de precisarlo. En el fondo, no innovábamos, sino que explicitábamos. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con la señora senadora Kechichian.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Debe quedar claro que sigue siendo delito no pagar la pensión alimenticia y el incumplimiento de los deberes de la patria potestad para madres y padres.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: deseo dejar una constancia.

Desde el Frente Amplio no compartimos que un tema tan serio y delicado sea tratado en la ley de rendición de cuentas. Estos asuntos requieren otra discusión. Acá se está modificando hasta lo que es el concepto de alimentos y, por eso, no acompañamos estas normas. Ese fue el motivo. Se requiere otro tipo de discusión y escuchar a la academia. Estas normas tienen impactos y hay que analizarlos. Hay que tomar otro tipo de medidas. ¡Ojalá esto se resolviera creando un delito, pero no es así! Hay que tomar otro tipo de medidas y, por eso, fue que no acompañamos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 646, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar como viene de la comisión.

(Se vota).

–0 en 29. **Negativa.**

En consideración la hoja 17 correspondiente a la coalición.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 649.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Tengo que excusarme de votar porque refiere al rubro gastronómico.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si el Cuerpo lo autoriza puede votar.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Señora presidenta: este artículo es un disparate –quiero ser respetuoso– porque deroga la Ley n.º 18856 que establece el régimen de descanso para los trabajadores hoteleros y gastronómicos. Esta norma legal no solo surge de la negociación colectiva, sino de convenios internacionales que Uruguay ha firmado con la OIT,

que establece los regímenes de descanso y cuándo puede reiterarse la jornada laboral a los efectos de que el trabajador tenga un mecanismo que disponga cuál será el tiempo de descanso mínimo exigido por las normas generales de la OIT.

Por lo tanto, esta flexibilización que se agrega a través del artículo 3.º que dice que lo anterior se aplica en tanto no exista un acuerdo entre empleador y trabajador, como si estuvieran en las mismas condiciones de llegar a un acuerdo para convenir un régimen de trabajo, es violatorio de convenios que el país ha firmado a nivel internacional. Además, nos parece que claramente significa la pérdida de un derecho de los trabajadores hoteleros y gastronómicos que tienen derecho al descanso y que no quede sujeto a la voluntad del empleador. Un acuerdo entre trabajador y empleador en lugares donde hay una cantidad escasa de trabajadores, sabemos que la voluntad del empleador prima notoriamente sobre la del trabajador y que a veces, cuando no se aceptan estas condiciones, terminan en el despido. Estamos hablando de sectores que tienen alto nivel de zafralidad que lleva a que tengan una inestabilidad adicional a la que puede tener cualquier trabajador del sector privado.

Francamente, creo que estamos cometiendo un grave error que afecta a decenas de miles de trabajadores, eliminando un derecho; podrá decirse que es una opción, pero en todo caso se trata de una opción que no se corresponde con la realidad. Cualquier empleador de este sector en un eventual acuerdo con el trabajador hará primar su voluntad por encima de la norma legal que, repito, tiene que ver con convenios que Uruguay ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo y que rigen a nivel mundial. Por lo tanto, sugiero que el artículo sea retirado.

Gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: en realidad a nosotros no nos consta que exista ningún convenio internacional en esta materia. Lo que hace esta disposición es restablecer el régimen de la Ley n.° 12468 y permite a patrones y trabajadores acordar un cambio en el período de descanso. La verdad que esto se justifica por la grave dificultad que está viviendo la industria hotelera y, en particular, los pequeños hoteles donde, además, estos acuerdos se hacen al margen de la ley. Por lo tanto, nos parece que esto regulariza una situación que ya se da de hecho.

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: en realidad me gustaría sumar argumentos contra este artículo. Efectivamente, al igual que el senador Brenta argumento en el sentido de que se retire esta iniciativa por varias cosas. En primer lugar, por los argumentos que manejaba el senador Brenta, pero además por otros aspectos de razonamiento común. Estamos hablando del sector gastronómico y hotelero, y todos los que estamos acá sabemos –lo hemos visto en los últimos días– que las cosas no están bien para el sector turístico. En realidad, el cambio de moneda en comparación con Argentina y los países vecinos no es favorable y esto también golpeó en la temporada turística anterior, pero no solo afecta a los empleadores porque a quien más golpea es a los trabajadores que tienen menos puestos de trabajo, menos horas y no han logrado hacer los convenios colectivos como lo habrían hecho en otra situación. Si además ahora el Parlamento se mete en la negociación colectiva, sigue quitando derechos y establece que el patrón puede decirle a la trabajadora o al trabajador que, por ejemplo, el fin de semana no puede descansar, todo el mundo sabe que si no acepta puede quedar sin trabajo y, en consecuencia, desocupado. Como bien explicaba el senador Brenta, estamos haciendo alusión a una ley que es anterior a la negociación colectiva, pero que desde 1957 da derechos al trabajador gastronómico y ahora la estamos cambiando en un acto de rendición de cuentas en el Parlamento. Por lo tanto, no corresponde que se debata en este ámbito.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: me quiero sumar a lo ya expresado. Realmente es un artículo incomprensible para el 2023, en el siglo XXI y después del avance que ha habido en la relación de la negociación colectiva y en este momento que están viviendo los trabajadores del turismo, de las fondas, de las confiterías y de los restaurantes. Esto abarca a toda esa masa de trabajadores que no van a tener recuperación de su salario y no van a llegar a lo que ganaban en el 2019 hasta el 2026, y todavía les queremos imponer esto. La Ley n.° 18.856, que en el 2011 votó el presidente Mujica y el actual senador Brenta, que era ministro de Trabajo y Seguridad Social, tuvo una larguísima discusión y se logró aprobar por acuerdo. Allí hay dos artículos en los que se establece el número mínimo de horas de descanso en las actividades referidas y se dispone que no será inferior a dieciséis horas. Se tomaron en cuenta todas las particularidades que tenía este trabajo que muchas veces tiene nocturnidad o situaciones especiales porque, obviamente, se trabaja cuando todo el mundo descansa o en los feriados. Entonces, volver a una negociación mano a mano entre un trabajador y un patrón, donde siempre va a perder el trabajador, es algo inaudito. No podemos hacer esto a los trabajadores de la gastronomía, de la hotelería, de las confiterías y del turismo que están viviendo uno de los peores momentos de su historia.

Realmente sería de una enorme sensatez que este Parlamento retirara este artículo.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA KECHICHIAN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Recomendaría leer el C172, Convenio sobre las Condiciones de Trabajo (hoteles y restaurantes), 1991, de la Organización Internacional del Trabajo, que Uruguay suscribió, en el que se hace referencia al respeto por las normas generales del trabajo en este sector.

Por lo tanto, hay un convenio internacional firmado por Uruguay y una ley votada, por supuesto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- He terminado, señora presidenta.

SEÑOR LIBEROFF.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LIBEROFF.- De alguna manera y a partir del lineamiento que ya se planteó, quiero señalar que hace pocos días este mismo Parlamento aprobó una flexibilización hasta el 31 de diciembre, particularmente para los sectores de la hotelería y de la gastronomía por la situación que están atravesando.

Asimismo, quiero informar a este Parlamento que, en estos momentos, desde Colonia, Piriápolis y Salto hay pedidos de pase al seguro de paro por las condiciones que se están dando. Esta ley que se está fijando realmente conspira contra el funcionamiento de un sector que viene golpeado desde hace años y por el que, incluso, hemos solicitado la creación de un fondo de emergencia para generar mejores condiciones de desarrollo del turismo interno.

Es algo absolutamente contradictorio y llama la atención que, además, ciertos representantes de algunos de los departamentos que tienen problemas hayan fundamentado su participación en esto.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Creo que son muy elocuentes las argumentaciones. Simplemente, quiero decir que, de alguna forma, aquí se está optando por privilegiar al empleador y por perjudicar al trabajador.

Recuerdo –lo dije en la comisión– cuando en la LUC se preveía el tema de que la forma del cobro del salario fuera decidida entre el empleador y el trabajador. Siempre dijimos que eso era inequitativo, que no era justo, porque no se puede pensar que un empleador y un empleado puedan negociar en igualdad de condiciones. Esto es como pasarle por encima a las normas internacionales, pero también a la negociación colectiva.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 649.

(Se vota).

–10 en 23. **Negativa.**

En consideración el artículo 650.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar tal cual viene de la comisión.

(Se vota).

–11 en 25. **Negativa.**

En consideración el artículo 653, que tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar tal cual viene de la comisión.

(Se vota).

–0 en 27. **Negativa.**

En consideración el artículo 653 que tiene un sustitutivo en la hoja 18 C.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–14 en 27. **Negativa.**

(Dialogados).

–Hay que volver a votar la hoja 18 C.

Por favor, la Mesa solicita que presten atención, dado que se va a rectificar la votación.

(Dialogados).

–Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 653, que tiene un sustitutivo en la hoja 18 C.

(Se vota).

–29 en 29. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Tenemos que reconsiderar los artículos 650, 651 y 652.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a terminar con esto y después vemos.

¡Estén atentos, por favor!

En consideración el artículo 654 tal cual viene de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

En consideración el artículo 655 tal cual viene de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Hay que reconsiderar los artículos 650, 651 y 652. ¡Por favor, señora presidenta, escúcheme a mí!

SEÑORA PRESIDENTA.- Es a quien estoy escuchando, señor senador.

(Dialogados),

–Perfecto. Si hacen un poquito de silencio, creo que nos entenderíamos mejor.

En consideración nuevamente el artículo 650.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. **Afirmativa.**

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Solicito la consideración del artículo 572 que quedó sin votar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 572.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. **Afirmativa.**

(Dialogados).

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Quedó sin tratar el artículo 630.

SEÑORA PRESIDENTA.- Porque se solicitó votación nominal.

SEÑOR BLÁS.- Sí, por eso. Hay que ir a él.

SEÑORA PRESIDENTA.- Allí vamos.

(Dialogados).

–Solicitamos a los señores senadores que se hagan de la hoja 93. Eso es lo que vamos a pasar a votar en forma nominal.

Tómese la votación.

(Se toma en el orden siguiente).

SEÑORA ÁLVAREZ.- Afirmativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Afirmativa.

SEÑORA BIANCHI.- Afirmativa.

SEÑOR BLÁS.- Afirmativa.

SEÑOR BOTANA.- Afirmativa.

SEÑOR BRENTA.- Negativa.

SEÑOR CAGGIANI.- Negativa.

SEÑOR CARRERA.- Negativa.

SEÑOR CASTILLO.- Negativa.

SEÑOR COUTINHO.- Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Negativa.

SEÑOR DOMENECH.- Afirmativa.

SEÑORA KECHICHIAN.- Negativa.

SEÑORA LAZO.- Negativa.

SEÑOR LIBEROFF.- Negativa.

SEÑOR MAHÍA.- Negativa.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Afirmativa.

SEÑOR METHOL.- Afirmativa.

SEÑOR NUNES.- Negativa.

SEÑOR PEÑA.- Afirmativa.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Afirmativa.

SEÑOR RUSSI.- Negativa.

SEÑOR SABINI.- Negativa.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Negativa.

SEÑORA SANGUINETTI.- Afirmativa.

SEÑOR SARAVIA.- Afirmativa.

SEÑOR SARTORI.- Afirmativa.

SEÑOR SILVA.- Afirmativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Afirmativa.

Dese cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Han sufragado veintinueve integrantes del Cuerpo: dieciséis lo han hecho por la afirmativa y trece por la negativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- La votación ha resultado: **Afirmativa**.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Solicito rectificar la votación porque, si no escuché mal, los trece senadores del Frente Amplio votamos negativo y un senador que no es del Frente Amplio también votó negativo. Por lo tanto, me da catorce votos negativos.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Se refiere al senador Saravia?

SEÑOR NUNES.- No.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Si quieren, votamos de nuevo.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Discúlpeme, me equivoqué.

SEÑORA PRESIDENTA.- A las órdenes.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Dado que se ha votado el articulado menos el artículo que quedó desglosado, solicitamos un cuarto intermedio de treinta minutos para volver por los aditivos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Senador Blás: ¿primero quiere tratar el artículo 523?

SEÑOR BLÁS.- Lo hacemos cuando tratemos los aditivos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el cuarto intermedio de treinta minutos.

(Se vota).

–27 en 29. **Afirmativa.**

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 22:44).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 23:31).

–Como recordarán, el artículo 523 quedó desglosado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 24. **Negativa.**

En consideración los aditivos.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Tenemos dos bloques. Vamos a iniciar con los aditivos de la coalición. La hoja 92 se retira, porque vamos a votar la hoja 28 del Frente Amplio. Deberíamos votar las hojas 5 y 6, que refieren a recursos de $ 37:000.000 para el Sodre.

SEÑORA PRESIDENTA.- Las hojas 5, 6 y 11 podrían ir en un bloque.

SEÑOR BLÁS.- Las hojas 5, 6 y 11 establecen que los recursos del Fondo Nacional de Recursos vayan al Centro Hospitalario Pereira Rossell.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración las hojas con los aditivos 5, 6 y 11.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–24 en 24. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR BLÁS.- La hoja 8 refiere a la reorganización de los funcionarios que hoy están en el patronato o en la Comisiones de Apoyo para el Ministerio de Salud Pública.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 8.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 24. **Afirmativa.**

SEÑOR BLÁS.- La hoja 95 es una modificación de la norma sobre los clubes de campo.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 95.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–13 en 29. **Negativa.**

SEÑOR BLÁS.- La hoja 86 a último momento había quedado afuera. Se incluye la Fundación Tótem en el artículo relativo a donaciones especiales.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 86.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR BLÁS.- Ahora vienen las hojas 96, 97 y 98.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Brevemente, quiero decir que nosotros no vamos a acompañar la hoja 97 y la hoja 98, o sea que podemos hacer un bloque y vamos a pedir que se desglose la hoja 96.

A modo de resumen, esto simplemente tiene que ver con las modificaciones que se hicieron en la LUC, que le dieron la potestad al INAC de hacer un conjunto de controles. Lo que nosotros queremos habilitar es algo que ya hizo el Senado de la república en una minuta y es que las pollerías no estén bajo la égida del INAC, pero no estamos de acuerdo con revertir todo como está planteado. Por eso, señora presidenta, lo que vamos a plantear es que se desglose, de la hoja 96, el inciso segundo –porque no lo vamos a acompañar–, que expresa: «6) La habilitación, registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor en el departamento de Montevideo». El resto sí lo vamos a acompañar con nuestro voto.

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Gracias, señora presidenta.

Quiero informar que no voy a participar de la votación de estos artículos porque es una materia que me involucra por mi actividad privada.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador está comprendido y quiere excusarse.

Se va a votar por separado el contenido de la hoja 96.

(Dialogados).

–Si me permiten, señores senadores, tenemos que ordenarnos por la versión taquigráfica.

Lo que les pido es votar tal como se nos está solicitando, es decir, el acápite y el inciso tercero.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Acá tenemos un aditivo que viene a ser considerado. Lo que está proponiendo el señor senador Sánchez es otro aditivo diferente. Por tanto, votamos uno u otro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: la Mesa considera que se está poniendo el aditivo a consideración, parte del cual no va a ser acompañado por la bancada del Frente Amplio, pero es un solo aditivo.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- No he fundado el voto en aras de la economía de tiempo, pero lo que dice el Reglamento es que, frente a la solicitud de cualquier legislador de desglose, debe ser desglosado. Entonces, lo que está solicitando el Frente Amplio es que de la hoja 96 se desglose la expresión que dice: «6) La habilitación, registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor en el departamento de Montevideo».

Estamos en condiciones de votar toda la hoja que lo que hace es quitar de la regulación, en acuerdo con las intendencias, lo que hace a las pollerías, pero nosotros no compartimos –como tampoco lo hace el INAC– que se le quite el control y el contralor sobre las carnicerías. Por eso estamos pidiendo el desglose.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Voy a solicitar que esta hoja se vote por incisos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

En consideración el acápite de la hoja 96.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el inciso segundo de la hoja 96, que dice: «6) La habilitación, registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor en el departamento de Montevideo».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. **Afirmativa.**

En consideración el inciso que establece: «Los locales de venta al público de carne aviar y derivados en todo el país serán habilitados para su funcionamiento por las intendencias respectivas que realizaran la comunicación correspondiente al Instituto Nacional de Carnes para que este lo incorpore a sus registros».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el último inciso que expresa: «Las habilitaciones se ajustarán a un protocolo específico para esta actividad que será acordado entre el Congreso de Intendentes y el Instituto Nacional de Carnes con la participación de los acotes del sector en un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración los aditivos de las hojas 97 y 98.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque.

(Se vota).

–16 en 30. **Afirmativa.**

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Solamente quiero dejar constancia de que no he votado estas dos hojas más por razones de forma que de fondo, pero no las he acompañado.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 82.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Creo que es la habilitación de la venta del derecho de superficie, lo mismo que establece la normativa departamental sobre dimensiones mínimas de predios.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. **Afirmativa.**

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Ahora deberíamos considerar la hoja 87, que tiene que ver con la posibilidad de la incorporación de los contratos de *leasing* inmobiliarios al fondo de garantía.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 87.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. **Afirmativa.**

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Ahora tenemos la hoja 94, que es la incorporación de los departamentos de Maldonado y Colonia a la excepción de la ley de las cinco hectáreas, como mínimo, de fraccionamiento.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 94.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. **Afirmativa.**

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- La hoja 99 se retira.

Deberíamos ver ahora la hoja 100, que establece la vigencia de los artículos 528, 626, 627, 628, 629 y 655 a partir de la promulgación de la rendición de cuentas.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 100.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con ánimo de colaborar, pregunto si no deberíamos habilitar –en todo caso, votar y habilitar– que se incorpore, en cada uno de esos artículos que entrarán en vigencia a partir de la promulgación de la esta ley, más que agregar un artículo a la ley que diga eso.

SEÑORA PRESIDENTA.- Compartimos lo manifestado por el señor senador Sánchez porque, en realidad, una de las cosas que íbamos a proponer es lo que hacemos siempre: dar a la secretaría potestades para que arregle todo el articulado, como corresponde.

Si les parece, ya votamos el otorgar a la secretaría potestades para que ordene todo el trabajo que hemos hecho.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Voy a decir algo para que quede claramente establecido en la versión taquigráfica y no haya problemas, luego de votados los artículos.

Acabamos de votar un artículo que no va a ser numerado. Tiene el solo objetivo de que quede plasmada la voluntad del Cuerpo de que en esos artículos que allí se detallan se incorpore, como último inciso en cada uno de ellos, la

frase tradicional: «El presente artículo entrará en vigencia en la fecha de la promulgación de la presente ley».
Esto lo digo solo para que quede claro en la versión taquigráfica.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Ahora tenemos la hoja 28, que establece la venia de la Cámara de Senadores para los ascensos de grado de comisario general y de comandante general.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 28.

(Dialogados).

–Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Tenemos ahora la hoja 40, que establece una modificación, subiendo a trece semanas la licencia de los funcionarios públicos que adopten niños.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 40, que viene con la firma de todos los coordinadores.

(Dialogados).

–Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Ahora la pelota está en la cancha del vecino.

Propongo que se voten en bloque –y luego fundamentan el voto– los aditivos restantes: hojas 36, 41, 24, 47, 52, 53, 35, 30, 23, 37, 34, 88, 43, 55, 57, 31, 50, 63, 26…

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador. Tal cual usted está haciendo el recorrido de las hojas, además lejos del micrófono, es imposible tomar la versión taquigráfica y que las secretarias puedan llevar adelante el registro. Le voy a pedir que diga los números de las hojas en forma pausada, en voz alta y cerca del micrófono.

SEÑOR BLÁS.- Bien.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BLÁS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: dado que algunos queremos decir algo, quizás podrían votarse, por ejemplo, de a diez hojas y así vamos fundamentando nuestro voto. Otra alternativa es que primero digamos todo lo que queremos y después se habilite la votación. No sé cómo van a votar los demás, pero se supone que algunas de estas hojas no las van a acompañar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Blás.

SEÑOR BLÁS.- Nosotros ya votamos lo que queríamos votar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo que presentó el Frente Amplio y votábamos todos, ya fue votado. Lo que ahora está proponiendo el señor senador Blás es que todo lo que no se votó, se vote en bloque.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Solicito un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 30. **Afirmativa.**

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 23:50).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 23:59).

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Solicito que se vote la hoja 19, que plantea un cambio del orden de la notificación en herencias yacentes.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Como saben la Mesa y los integrantes del Senado, hay un conjunto de hojas que ha presentado el Frente Amplio, que incluyen ciertas propuestas de reasignación de gastos, así como algunos otros artículos que refieren a temas, digamos, sin costo.

La coalición nos ha trasmitido que va a acompañar algunas hojas y otras no. Por lo tanto, voy a solicitar que se traten individualmente las hojas que voy a mencionar a continuación. O sea que, del conjunto de hojas presentado por la bancada de Frente Amplio, pedimos desglosar las hojas 23, 29, 30, 31, 35, 36, 43 y 51.

Entonces, reitero, vamos a solicitar que se voten individualmente esas hojas y en bloque el resto del conjunto de hojas propuestas por el Frente Amplio.

(Dialogados).

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Si lo que quieren es sacar cinco hojas del bloque que tenemos –a la Mesa se le complica votar el otro bloque si no se enumera–, podríamos enumerar las que forman el bloque. Si no, a las otras las votamos de a una.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- A los efectos de la votación y de la versión taquigráfica, lo de los bloques es una consecuencia. Lo que debemos dejar claro es cuáles son las hojas cuyos números vamos a votar ahora. Si votamos en las que estamos todos de acuerdo o no, no me importa, pero como vamos a votar en conjunto una cantidad de hojas, deben enumerarse.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador Sánchez: ¿cuáles son las que vamos a votar ahora?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Entonces, tengo que pedir un cuarto intermedio, porque yo tengo solo las que voy a desglosar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Era lo que yo estaba diciendo y que complementó el señor senador Blás. Lo que vamos a votar son las que quedan por fuera de las que enumeró el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: si me permite, yo voy enumerando las hojas y el senador Sánchez va diciendo cuáles no.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien.

SEÑOR BLÁS.- Sería el bloque de las hojas 41, 24, 47, 52, 53, 35…

SEÑOR SÁNCHEZ.- La 35 no.

SEÑOR BLÁS.- Hoja 30.

SEÑOR SÁNCHEZ.- No.

SEÑOR BLÁS.- Hoja 23.

SEÑOR SÁNCHEZ.- No.

SEÑOR BLÁS.- Hojas 37, 34, 88, 43…

SEÑOR SÁNCHEZ.- La hoja 43 no.

SEÑOR BLÁS.- Hojas 55, 57, 31…

SEÑOR SÁNCHEZ.- La hoja 31 se desglosa.

SEÑOR BLÁS.- Hojas 50, 63, 26, 56, 58, 51…

SEÑOR SÁNCHEZ.- La hoja 51 se desglosa.

SEÑOR BLÁS.- Hojas 21, 22, 25, 44, 59, 60, 61, 62, 64, 33, 45, 20, 29…

SEÑOR SÁNCHEZ.- La hoja 29 no.

SEÑOR BLÁS.- Y las hojas 38 y 46.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración las hojas 41, 24, 47, 52, 53, 37, 34, 88, 55, 57, 50, 63, 26, 56, 58, 21, 22, 25, 44, 59, 60, 61, 62, 64, 33, 45, 20, 38 y 46.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–13 en 31. **Negativa.**

Ahora pasaríamos a votar las que en primera instancia enumeró el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Las queremos votar de a una.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Solicito que se considere la hoja 29.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 29.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: la hoja 29 tiene que ver con una facultad para autorizar al Poder Ejecutivo a descontar IVA en localidades fronterizas y en un radio de hasta 50 kilómetros. El asunto es que se limita solo a las localidades fronterizas con la República Argentina y yo creo que deberíamos ampliarlo a todas las localidades fronterizas del Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA.- Consulto si ampliamos a todos los límites fronterizos lo establecido en la hoja 29, que solamente toma medidas para el litoral.

SEÑOR BOTANA.- A todas las localidades fronterizas del país.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: aquí la idea es que los pasos de frontera con la República Federativa de Brasil estén incluidos en la facultad que, de alguna manera, estamos otorgando o solicitando al Poder Ejecutivo.

La hoja está redactada de forma taxativa, por lo que habría que poner «los pasos de frontera con la República Argentina y la República Federativa de Brasil».

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: las consecuencias del contrabando, que es lo que se intenta desalentar, están llegando mucho más allá de los 50 kilómetros. En realidad, la mercadería está llegando a las ferias de Montevideo, pero también están copando el mercado en ciudades que están a 100 o 120 kilómetros. Entonces, habría que poner una mayor distancia.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo tiene la facultad de extenderlo. Tiene voluntad propia.

Por lo tanto, nosotros podríamos votar con el escenario de mínima de 50 kilómetros. Además, el senador Botana debe tener casi todos los teléfonos del Ministerio de Economía y Finanzas y probablemente logre convencer a la ministra, sobre la base de la votación que vamos a hacer, de que lo extienda a los kilómetros que él planteaba.

SEÑORA PRESIDENTA.- En principio, votaríamos con el agregado de todas las zonas de paso de frontera y mantenemos los kilómetros.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: quiero recordar que esta norma requiere iniciativa del Poder Ejecutivo y no la tiene. La palabra «facúltese» no resuelve la iniciativa del Poder Ejecutivo y no puede delegar el Poder Legislativo una atribución que la Constitución no le otorga. Por lo tanto, este es un artículo inconstitucional. No lo voy a votar.

El objetivo es muy loable y compartible, pero si yo votara esto nunca más votaría una minuta de comunicación e iríamos directo. Hasta ahora no he votado ninguna de las normas que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo. Me he ausentado de sala todas las veces, pero en este caso –en el que hay un acuerdo general– quiero dejar expresa

constancia de mi opinión: comparto el objetivo, pero no me parece que lo estemos haciendo bien.

Muchas gracias.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Señora presidenta: obviamente vamos a acompañar este acuerdo que se está generando.

El objetivo de nuestra moción no era establecer una política para combatir el contrabando, sino generar una exoneración tributaria al comercio y a los consumidores del litoral del país para que no vayan a comprar del otro lado del puente sino en nuestros comercios. Esto sería una forma de defender, en primer lugar, el salario de los que no pueden cruzar, porque no todos pueden hacerlo y, en segundo término, el comercio y la actividad de nuestro país. Combatir el contrabando requiere otras cosas.

Quiero dejar constancia de esto, sin perjuicio de que en aras de que haya un acuerdo y podamos aprobarlo, acompañamos el planteo del señor senador Botana.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: efectivamente la Constitución de la república establece iniciativa privativa al Poder Ejecutivo para exonerar impositivamente de determinados tributos al conjunto de los sujetos obligados.

Si bien es cierto que hay que tener apego a lo que establecen las disposiciones, también lo es que la redacción de esta minuta habla de «facúltase» y no establece la exoneración. Diría que tiene una larga tradición este «facúltase» en el seno de esta cámara y podríamos decir que quien ha iniciado este criterio de manera –diría– innovadora fue el extinto y gran legislador Atchugarry. Esta era la fórmula Atchugarry, utilizada varias décadas atrás en más de una rendición de cuentas. Posteriormente, fue empleada en muchos aspectos por el Frente Amplio cuando tuvo mayorías parlamentarias y también lo ha sido por las actuales mayorías.

Más allá de eso, quiero señalar –es cierto lo que dice el señor senador Gandini– que los artículos que referían a las hojas 76, 23 y 78 –que el Frente Amplio no acompañó– no tienen la formulación del «facúltase», sino que exoneran directamente, razón por la cual en ese momento no los acompañamos. Si bien es cierto que estamos ante una diferencia gramatical, también lo es que debe haber muchas bibliotecas para interpretar esta situación.

Estamos procediendo de esta manera porque todos –para ser honestos desde el punto de vista intelectual– estamos preocupados por la situación del tipo de cambio con Argentina, que está generando una situación bastante difícil, ante la cual todas las medidas que se puedan llevar adelante serán pocas. Esta es una medida que trata de hacer algo para ayudar a los comerciantes y, particularmente, a los ciudadanos que están viviendo en esa franja fronteriza.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 29, con el agregado del paso fronterizo con Brasil.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: solicito que se tome votación de palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tómese la votación.

(Se toma en el orden siguiente).

SEÑORA ÁLVAREZ.- Afirmativa.

SEÑORA ASIAÍN.- Negativa.

SEÑORA BIANCHI.- Afirmativa.

SEÑOR BLÁS.- Negativa.

SEÑOR BOTANA.- Afirmativa.

SEÑOR BRENTA.- Afirmativa.

SEÑOR CAGGIANI.- Afirmativa.

SEÑOR CARDOSO.- Afirmativa.

SEÑOR CARRERA.- Afirmativa.

SEÑOR CASTILLO.- Afirmativa.

SEÑOR COUTINHO.- Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Afirmativa.

SEÑOR DOMENECH.- Afirmativa.

SEÑOR GANDINI.- Negativa, y quiero fundamentar el voto.

Voy a reiterar algo de lo que ya dije. Comparto el objetivo de esta iniciativa. Si bien creo que no es la única, es algo de lo que se podría hacer para ayudar a compensar una diferencia de cambio en la frontera, ya que ayuda a resolver por lo menos algunos de los aspectos de los ciudadanos que viven en esa zona.

Este artículo debería ser votado con el consentimiento complejo del Poder Ejecutivo y el Parlamento. La Constitución de la república sabiamente establece que en materia de exoneraciones impositivas es el Poder Ejecutivo que debe tener la iniciativa; de lo contrario, el Parlamento, con muy buenas intenciones, podría vaciar o generar al Gobierno graves problemas en materia fiscal. Por lo tanto, siempre es el Poder Ejecutivo el que debe tener la iniciativa.

Se ha dicho en sala que todos estamos de acuerdo en votar esto. No, todos no. El Poder Ejecutivo no está de acuerdo; si lo hubiese estado, habría enviado la iniciativa, pero no lo hizo. Este es un tema que también está a estudio en la Comisión de Hacienda del Senado y sobre el cual hemos discutido varias veces. Por alguna razón, el Poder Ejecutivo no envía la iniciativa.

Puedo discrepar del Poder Ejecutivo, pero ello no me permite violentar esta relación de poderes y entre poderes institucionalmente consagrada, que a mi juicio debe ser respetada.

Si bien el «facúltase» no subsana la iniciativa, el voto de esta norma con el «facúltase» tiene un efecto político, que es poner la carga en la mochila del Poder Ejecutivo, diciéndole que ahora depende de él. Es una manera de decirle: «No me lo mandó, pero yo ya lo resolví. Ahora, depende de ustedes». Es como decirle a la gente: «Mire, no sé. Hable con el Gobierno, porque el Parlamento ya se lo votó». Creo que no está bien. Esto requiere diálogo e intercambio, y el Poder Ejecutivo ha de estar tan preocupado como nosotros, pero debe mirar lo que le toca mirar.

Comparto la idea, pero como no tiene iniciativa, no lo acompaño.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Afirmativa.

SEÑORA LAZO.- Afirmativa.

SEÑOR MAHÍA.- Afirmativa.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Afirmativa, y quiero fundamentar el voto.

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTA.- Pido silencio en sala.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Hace tres años y algo presentamos un proyecto de ley que prácticamente establece los mismos términos que estamos votando hoy, cuando los puentes todavía estaban cerrados, proyecto que fue a la órbita del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hoy votamos por coherencia con lo que presentamos hace tres años.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR METHOL.- Afirmativa.

SEÑOR NUNES.- Afirmativa.

SEÑOR PEÑA.- Afirmativa.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Afirmativa.

SEÑOR RUSSI.- Afirmativa.

SEÑOR SABINI.- Afirmativa.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Por la positiva.

(Hilaridad).

SEÑORA SANGUINETTI.- Afirmativa.

SEÑOR SARAVIA.- Afirmativa.

SEÑOR SARTORI.- Afirmativa.

SEÑOR SILVA.- Afirmativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Afirmativa.

Dese cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Han sufragado veintinueve integrantes del Cuerpo: veintiséis lo han hecho por la afirmativa y tres por la negativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por lo tanto, la votación ha resultado: **Afirmativa**.

Continuamos con la consideración de los artículos desglosados.

Tiene la palabra el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- ¿Qué hoja va a poner a votación?

SEÑORA PRESIDENTA.- La que usted diga, senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- ¿Tengo ese poder?

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene ese poder.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Habría que considerar la hoja 36, que establece algo que creo que, dadas algunas discusiones políticas…

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio!

SEÑOR SÁNCHEZ.- Como decía, dadas algunas discusiones políticas que hemos tenido, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, en la hoja 36 estamos solicitando que, tanto para la Administración central como para los Gobiernos departamentales y demás instituciones del Estado, el ingreso de los funcionarios permanentes sea por concurso. Para que esta disposición abarque a los Gobiernos departamentales, obviamente deberá contar con dos tercios de los votos de la cámara.

Es cierto que también ha sido una iniciativa que se ha presentado en distintas oportunidades; incluso el senador Peña presentó un proyecto de ley en el mismo sentido. Nos parece que con este artículo podemos empezar a avanzar en esta temática, pues es un mensaje fuerte para que el ingreso de los funcionarios públicos permanentes sea equitativo, igualitario y por concurso, sin mecanismos de designación directa.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 36.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Quiero dejar constancia de que esto cuenta con el apoyo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, quien lo manifestó a texto expreso en la comisión y en los medios de comunicación en forma reiterada.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Me permite?

Estamos teniendo un problema reglamentario que me gustaría comentar –me parece que es importante solucionarlo–, que tiene que ver con el cuórum.

Puede continuar, señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Como ya manifesté –no sé si quedó claro–, la posición del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil es acompañar el artículo que estamos impulsando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 36.

(Se vota).

–20 en 29. **Afirmativa.**

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: quiero dejar constancia de que he votado afirmativamente.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Aunque la votación del artículo se proclamó como afirmativa, lo dispuesto no será de aplicación a los Gobiernos departamentales porque no ha contado…

(Interrupciones).

–Solicito que se rectifique la votación de la hoja 36.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente la hoja 36.

(Se vota).

–20 en 30. **Negativa.**

Se precisan 21 votos para que resulte aprobado el artículo.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Solicito que se pase a considerar la hoja 35.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 35.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Sugiero que tratemos las hojas 35 y 30 juntas, que son los dos artículos que remitió el Poder Ejecutivo en el inciso 12, «Ministerio de Salud Pública», y que tienen que ver con la política de prevención del consumo del tabaco. En el proyecto del Poder Ejecutivo son los artículos 263 y 264. Cuando la ministra Karina Rando concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda manifestó su beneplácito en cuanto a que fueran introducidos para su consideración y aprobados.

Creo que todos somos conscientes, porque está científicamente demostrado, que el tabaco ocasiona enfermedades graves y una muerte precoz a muchas de las personas

que lo consumen. Particularmente, es agravante de las dos principales causas de muerte en nuestro país, como son los problemas cardíacos y el cáncer.

Lo que pretende el Poder Ejecutivo es que no se comercialicen en nuestro país productos que se han desarrollado para inducir a los jóvenes al consumo del tabaco, con su interés comercial y las consecuencias trágicas para mucha gente que lo consume. Nosotros somos conscientes de que el tabaco es una actividad económica que da trabajo, pero pensamos que, a pesar de eso, no podemos propiciarla porque tiene consecuencias muy nefastas para la salud. En todo caso, deberemos encarar la reconversión de los trabajadores que están en este sector en la medida en que, producto de la prevención, vaya disminuyendo su espacio comercial. Para nosotros la decisión está entre la salud de nuestra gente y la industria tabacalera, y por eso propiciamos la aprobación de estos artículos.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

En aras de defender la salud de la población –en realidad, creo que nadie desconoce que la política llevada adelante por el expresidente Vázquez para combatir el cigarrillo ha contribuido a la mejora de la salud; nadie lo duda–, creo que, como en todas las cosas, no hay que exagerar y, en este caso, con un peligro grave para la salud. Si nosotros gravamos el tabaco o la hojilla que fuma el más pobre hoy, lo que vamos a conseguir es que ese ciudadano fume cigarrillos de contrabando de una calidad bastante peor que la del tabaco nacional que se consume en el país. Entonces, si bien la intención es buena, la realidad es que la gente va a sustituir el tabaco que fuma por uno más barato y los cigarrillos de contrabando están a disposición de toda la gente. Por eso, no encuentro razonable combatir la industria nacional y a su vez embromar la salud de la gente.

Muchas gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las hojas 30 y 35.

(Se vota).

–11 en 30. **Negativa.**

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Vamos a solicitar que se considere la hoja 23 y para su fundamentación solicitamos que se le dé la palabra a la senadora Della Ventura.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 23.

Tiene la palabra la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

La salud menstrual de aquellas personas que menstrúan y viven en situación de pobreza se ve doblemente vulnerada por su condición de mujer o disidencia y por vivir en la pobreza.

La desigualdad de género y la violencia económica afectan directamente la posibilidad de acceso a productos de primera necesidad en esta población, entre ellos, los relativos a la canasta menstrual. A eso deben agregarse otras consideraciones que a veces se dan como consecuencia del período menstrual como, por ejemplo, situaciones de anemia que generan nuevos gastos para poder acceder a medicación.

La Organización Mundial de la Salud pide que se reconozca, enmarque y aborde la salud menstrual como un problema de salud y derechos humanos y no como un problema de higiene. En ese sentido, presentamos este artículo aditivo en el que proponemos se otorgue una partida anual para impulsar la implementación de la canasta higiénica menstrual como prestación del Ministerio de Salud Pública, destinada a las personas que menstrúan. Entendemos que este debería ser un derecho para todas las personas que menstrúan, pero también comprendemos que los recursos del Estado son finitos y que hay prioridades. Como decíamos previamente, hay quienes realmente necesitan que se las ayude para poder enfrentar este gasto cada mes. En este artículo que presentamos en la hoja 23, decimos que en una primera etapa se priorizará a las beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social, a personas en situación de calle y a mujeres privadas de libertad. Este es el fundamento de esta propuesta del Frente Amplio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–11 en 28. **Negativa.**

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: proponemos que se considere la hoja 43, que fundamentará la senadora Della Ventura.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 43.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: hoy se hablaba de la problemática que están viviendo los departamentos de frontera y nosotros queremos proponer que se genere una partida para incrementar en un 50 % las AFAM-PE en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Esto se haría en forma transitoria y para atender la grave situación que enfrenta el litoral en el presente. También proponemos que se financie con cargo a la reducción de porcentaje que refiere al artículo 41 de la Ley n.° 17930.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–11 en 27. **Negativa.**

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: solicitamos que se considere la hoja 51, que será fundamentada por el senador Nunes.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la hoja 51.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Señora presidenta: la hoja 51 establece una partida de $ 150:000.000 para ASSE. Está definido el origen de los fondos que sería el objeto del gasto 4286, Compensaciones por reestructura, reforma del Estado. Se definió que este sería el origen de los fondos porque había una subejecución importante en ese rubro, mayor de lo que se está destinando aquí y tiene por objeto incrementar la remuneración de los médicos residentes de ASSE. Estos médicos tienen un régimen de 48 horas semanales y perciben una retribución nominal del orden de los $ 45.000 mensuales. Evidentemente, no es un salario muy elevado y si el profesional además tiene que radicarse en el interior del país, con todos los gastos que eso implica, la retribución resulta más esmirriada todavía. En ese sentido, entendemos que es bueno dar estos recursos a ASSE para que pueda mejorar esas retribuciones y de esa manera contribuir a paliar el déficit de médicos que tenemos en el interior del país y que en el norte del río Negro es mucho más grave aún.

Esa es la propuesta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 51.

(Se vota).

–12 en 29. **Negativa.**

En consideración la hoja 31.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- De alguna forma, el senador Carrera había fundamentado esto cuando se habló el tema del Poder Judicial.

Creemos que es de justicia lo que planteaba la Asociación de Magistrados cuando compareció en la comisión, en el sentido de que las juezas embarazadas tienen la misma licencia que normalmente se establece en nuestra legislación; en realidad, son trece semanas. Cuando las juezas se enfrentan al embarazo y luego al amamantamiento, si están frente a un caso, no pueden retirarse para amamantar. Hay excepciones a esta regla de las trece semanas y, en ese caso, nos solicitaban que se las pudiera amparar para que gozaran de veintiséis semanas de licencia. Al Frente Amplio le pareció de justicia y por eso lo estamos impulsando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 31.

(Se vota).

–12 en 29. **Negativa.**

La Mesa informa a los señores senadores que es de orden votar el artículo 1.º de la rendición de cuentas.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Señora presidenta: muchas gracias.

Me correspondió ser el miembro informante por la minoría y en el curso del debate un señor senador que había escuchado mi intervención –y le agradezco– se refirió a

ella diciendo que era fácil tomar algunos indicadores para señalar déficits de la gestión del Gobierno. Quiero decir que los indicadores que tomamos son los mismos con los que medimos nuestra propia gestión, que tienen que ver con la evolución del PIB, del salario real, del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones y de la evolución de los índices de pobreza.

En ese sentido, quiero aclarar que presentamos nuestro informe fundamentado en la tesis de que el desarrollo era un modelo de la desigualdad. Lo hicimos porque evaluamos nuestra gestión de esa misma manera y porque pensamos que así como durante los años en que el Frente Amplio fue gobierno se pudo compatibilizar el crecimiento económico con una mejor distribución de la riqueza –inclusive, en momentos muy tormentosos, como la crisis financiera internacional de 2008, ubicada como la del 29 por algunos analistas–, creemos que las cosas se podrían haber hecho de otra manera y lograr que este crecimiento económico se hubiese vertido mejor sobre el conjunto de la población. No tomamos esos indicadores por una opción fácil, sino porque son los que utilizamos para evaluar nuestra propia gestión y estamos convencidos de que podría haber habido una opción diferente.

Muchas gracias.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señora presidenta: simplemente, antes de terminar quiero volver a agradecer la labor de todos los funcionarios y la colaboración de todos los señores senadores en el trabajo de la comisión y acá también.

Ahora quiero hacer un reconocimiento que me faltó al inicio de estas sesiones; más allá de la colaboración de todos, debo agradecer, en especial, al senador Gandini, que estuvo siempre ayudándome en esta tarea.

Voy a solicitar que se vote el artículo 1.º.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 1.º de la rendición de cuentas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. **Afirmativa.**

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2022, con un resultado:

A) Deficitario de $ 86.160.070.000 (ochenta y seis mil ciento sesenta millones setenta mil pesos uruguayos) correspondientes a la ejecución presupuestaria.

B) Deficitario de $ 14.104.238.000 (catorce mil ciento cuatro millones doscientos treinta y ocho mil pesos uruguayos) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley como Anexo y forman parte de la misma.

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2024, excepto en aquellas disposiciones que en forma expresa se establezca otra fecha de vigencia.

Los créditos asignados para sueldos y para gastos de funcionamiento e inversión están cuantificados a valores de 1º de enero de 2023 y se ajustarán en la forma dispuesta en los artículos 68 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, 4º de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, con la modificación introducida por el artículo 2º de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, 4º de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, y 27 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

Artículo 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a corregir los errores u omisiones, numéricas o formales, que se comprobaren en la presente Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2022, requiriéndose el informe previo de la Contaduría General de la Nación si se trata de gastos de funcionamiento, o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto si se trata de gastos de inversión.

De las correcciones propuestas se dará cuenta a la Asamblea General, que podrá expedirse en un plazo de quince días, transcurrido el cual, sin expresión en contrario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, aprobará las correcciones. Si la Asamblea General se expidiera negativamente, las correcciones serán desechadas.

Si se comprobaren diferencias entre las planillas de créditos presupuestales y los artículos aprobados en la presente ley, se aplicarán estos últimos.

SECCIÓN II

FUNCIONARIOS

SISTEMA ESCALAFONARIO

Artículo 4º. (Creación).- Créase una estructura integrada por escalafones, ocupaciones y cargos, que constituyen el sistema escalafonario para los funcionarios del Poder Ejecutivo con excepción de los que revistan en los actuales escalafones del servicio exterior, militar, policial, docente, judicial y los dependientes de la Dirección General de Casinos, los funcionarios de la Dirección General Impositiva, de la Dirección Nacional de Aduanas y de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Artículo 5º. (Integración).- El sistema escalafonario creado por el artículo anterior, se integra por los siguientes escalafones: PT, Profesional y Técnico, AE, Administrativo y Especializado, y SG, Servicios Generales.

El Poder Ejecutivo podrá disponer la implementación gradual del nuevo sistema escalafonario estableciendo la correspondencia de cargos con el sistema de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, basándose, entre otros, en los principios de buena administración, objetividad, racionalidad y equidad, dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 6º. (Definición de escalafón).- Se entiende por escalafón un conjunto de cargos agrupados por ocupaciones asociados por el nivel de complejidad del trabajo para los que se requiere una formación determinada.

Artículo 7º. (Definición de ocupación).- Se entiende por ocupación la actividad conformada por un conjunto de tareas asociadas en base al tipo de trabajo asignado según los conocimientos, habilidades y competencias requeridas.

Artículo 8º. (Valoración de la ocupación).- La valoración de las ocupaciones estará basada en los siguientes factores: los conocimientos, capacidades y habilidades, la supervisión de personal y gestión de los recursos, el ambiente o entorno organizacional donde se ubica y el ambiente físico donde se desempeña.

Las retribuciones de cada cargo dentro de cada escalafón se corresponderán con la valoración de las respectivas ocupaciones.

Lo previsto en los incisos anteriores también será aplicable a las funciones contratadas.

Artículo 9º. (Catálogo de ocupaciones y valoración).- Apruébase el listado de ocupaciones por escalafón, con su correspondiente valoración, que se detalla a continuación:

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Servicios generales	Soporte de servicios generales	100	310	205

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Servicios generales	Soporte de servicios generales de salud	154	298	226
Servicios generales	Soporte de mantenimiento operativo	157	298	228
Servicios generales	Operador/a de unidades penitenciarias	231	364	298
Servicios generales	Operario/a de carpintería	231	410	321
Servicios generales	Conductor/a de vehículos livianos	258	401	330
Servicios generales	Operario/a de albañilería y pintura	186	475	331
Servicios generales	Mecánico/a	250	452	351
Servicios generales	Operario/a de herrería/tornería	231	475	353
Servicios generales	Operario/a de construcción de obras viales	243	475	359
Servicios generales	Operador/a de embarcaciones	289	437	363
Servicios generales	Soldador/a	272	475	374
Servicios generales	Operario/a de mantenimiento y reparación de embarcaciones	272	475	374
Servicios generales	Conductor/a de vehículos pesados	289	471	380
Administrativo/ Especializado	Relevador/a de datos en campo	301	476	389

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Administrativo/ Especializado	Gestor/a de registros nacionales	336	449	393
Administrativo/ Especializado	Asistente de servicios de salud	336	454	395
Administrativo/ Especializado	Soporte a infraestructura y operaciones de TI	282	517	400
Administrativo/ Especializado	Gestor/a administrativo/a	261	558	410
Administrativo/ Especializado	Oficial de operaciones aeroportuarias	373	476	425
Administrativo/ Especializado	Gestor/a de pagos, recaudación y adquisiciones	273	581	427
Administrativo/ Especializado	Operador/a en medios de comunicación	329	527	428
Administrativo/ Especializado	Gestor/a de la atención ciudadana	273	585	429
Administrativo/ Especializado	Intérprete de lengua de señas	345	526	436
Administrativo/ Especializado	Fiscalizador/a	397	558	478
Profesional/ Técnico	Evaluador/a - Restaurador/a de patrimonio cultural	437	553	495
Administrativo/ Especializado	Controlador/a de tráfico aéreo	430	562	496
Administrativo/ Especializado	Electrónica e instalaciones eléctricas	400	596	498
Profesional/ Técnico	Prótesis médicas y dentales	422	575	499

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Profesional/ Técnico	Educación física, deporte y recreación	417	584	501
Profesional/ Técnico	Articulador/a territorial de desarrollo, innovación y sostenibilidad	409	594	502
Profesional/ Técnico	Articulador/a territorial social	409	594	502
Profesional/ Técnico	Orientador/a en relaciones laborales	437	567	502
Profesional/ Técnico	Farmacéutico/a	437	567	502
Profesional/ Técnico	Enfermería	412	594	503
Profesional/ Técnico	Docente	422	584	503
Profesional/ Técnico	Examinador/a de marcas	417	593	505
Profesional/ Técnico	Gestor/a de vías navegables	437	572	505
Profesional/ Técnico	Operador/a de equipos de diagnóstico y tratamiento médico	442	567	505
Profesional/ Técnico	Analista de laboratorio (desarrollo, innovación y sostenibilidad)	410	616	513
Profesional/ Técnico	Fisioterapia y rehabilitación	437	591	514
Profesional/ Técnico	Gestor/a de bibliotecas y repositorios digitales	437	593	515
Profesional/ Técnico	Analista de laboratorio (salud)	422	616	519

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Profesional/ Técnico	Analista de seguridad vial	422	620	521
Profesional/ Técnico	Traductor/a	480	562	521
Profesional/ Técnico	Gestor/a de documentos y archivo	449	612	531
Profesional/ Técnico	Partero/a	472	594	533
Profesional/ Técnico	Comunicador/a institucional	437	631	534
Profesional/ Técnico	Analista de marketing	437	631	534
Profesional/ Técnico	Psicología clínica en salud	500	567	534
Profesional/ Técnico	Nutricionista/Dietista	500	581	541
Profesional/ Técnico	Gestor/a de educación y formación	449	639	544
Profesional/ Técnico	Gestor/a de unidades penitenciarias	454	651	553
Profesional/ Técnico	Examinador/a de patentes	437	675	556
Profesional/ Técnico	Gestor/a de procesos culturales	437	680	559
Profesional/ Técnico	Analista de datos e información	437	694	566
Profesional/ Técnico	Analista de empleo y formación profesional	449	687	568

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Profesional/ Técnico	Analista de proyectos	437	706	572
Profesional/ Técnico	Instrumentista quirúrgico	536	608	572
Profesional/ Técnico	Gestor/a de políticas sociales	442	714	578
Profesional/ Técnico	Analista de gobierno digital	437	727	582
Profesional/ Técnico	Gestor/a de infraestructura de TI	488	682	585
Profesional/ Técnico	Analista de gestión humana	437	739	588
Profesional/ Técnico	Gestor/a de procesos de catastro y expropiaciones	500	680	590
Profesional/ Técnico	Gestor/a de infraestructura edilicia y espacios	505	680	593
Profesional/ Técnico	Analista de planificación y diseño organizacional	437	751	594
Profesional/ Técnico	Analista de contabilidad y finanzas	500	706	603
Profesional/ Técnico	Asesor/a en salud y seguridad ocupacional	509	721	615
Profesional/ Técnico	Asesor/a en asuntos internacionales y cooperación	509	733	621
Profesional/ Técnico	Analista de aranceles y comercio exterior	512	738	625
Profesional/ Técnico	Negociador/a laboral	521	733	627

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Profesional/ Técnico	Gestor/a de obras de infraestructura	505	762	634
Profesional/ Técnico	Analista de planificación y presupuesto público	512	769	641
Profesional/ Técnico	Médico/a general	548	734	641
Profesional/ Técnico	Odontólogo/a	553	734	644
Profesional/ Técnico	Investigador/a	533	762	648
Profesional/ Técnico	Analista de desarrollo productivo e innovación	512	796	654
Profesional/ Técnico	Analista de ambiente y recursos naturales	512	801	657
Profesional/ Técnico	Desarrollador/a de soluciones de TI	536	784	660
Profesional/ Técnico	Escribanía y notariado	536	796	666
Profesional/ Técnico	Asesor/a legal	567	861	714
Profesional/ Técnico	Inspector/a	591	843	717
Profesional/ Técnico	Auditor/a interno	612	821	717
Profesional/ Técnico	Control central de presupuesto y finanzas	618	816	717
Profesional/ Técnico	Médico/a especialista	630	812	721

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Profesional/ Técnico	Evaluador/a ambiental	635	812	724
Profesional/ Técnico	Asesor/a de seguridad de la información	630	849	740
Profesional/ Técnico	Evaluador/a de políticas públicas	675	816	746
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de política tributaria	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de política económica	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de conocimiento e investigación	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de desarrollo productivo sostenible	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de seguridad y defensa	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de empleo y formación profesional	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de política energética	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de salud	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas sociales	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de educación y cultura	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de ambiente y recursos naturales	706	873	790

Escalafón	Ocupaciones	Puntaje mínimo	Puntaje máximo	Cálculo media
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de infraestructura, transporte y comunicaciones	706	873	790
Profesional/ Técnico	Asesoramiento y diseño de políticas de planificación y mejora del sector público	706	873	790

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:

"ARTÍCULO 35. (Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional).- Créase en el ámbito de la Presidencia de la República la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional.

La Comisión estará integrada por representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que la presidirá, y contará con el apoyo técnico de la Contaduría General de la Nación en el ámbito de su competencia. En los temas vinculados al Sistema de Carrera Administrativa por ocupaciones podrá participar un veedor de la Confederación de Funcionarios del Estado.

Los cometidos de la Comisión serán el estudio y asesoramiento del sistema ocupacional y retributivo de los Incisos de la Administración Central y del proceso de adecuación de las estructuras de cargos, debiendo pronunciarse preceptivamente acerca de la oportunidad y mérito de la provisión de vacantes. En cuanto al Sistema de Carrera Administrativa por ocupaciones, tendrá como cometido el análisis de las ocupaciones, el valor de las mismas y sus retribuciones, asesorando al Poder Ejecutivo en la materia y proponiendo los cambios que estime necesarios en el mismo.

Los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, que hagan uso de la facultad conferida por el artículo 18 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, atenderán las recomendaciones de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional que resulten del análisis realizado en cumplimiento del inciso precedente.

El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Comisión que se crea por el presente artículo pudiendo establecer para su apoyo la creación de subcomisiones técnicas, con participación de representantes de los funcionarios".

Artículo 11. (Inventario y actualización de ocupaciones).- Facúltase al Poder Ejecutivo a actualizar, incorporando, modificando, fusionando o eliminando ocupaciones y a redefinir las retribuciones relacionadas a dichas ocupaciones, así como las de carácter variable, contando con el previo análisis de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional creada por el artículo 35 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, en la redacción dada por el artículo 10 de la presente ley.

En todos los casos, deberá darse cuenta a la Asamblea General.

Artículo 12. (Definición de cargo).- Se entiende por cargo un puesto de trabajo previsto presupuestalmente dentro de la estructura de ocupaciones que conforman el sistema escalafonario, al que le corresponde un conjunto de tareas asociadas a una misma actividad dentro de una ocupación.

Artículo 13. (Definición de categorías de los cargos).- Dentro de cada escalafón, los cargos se agrupan en las siguientes categorías ascendentes, asociadas a la complejidad de las tareas de cada ocupación: Categoría I, Formación; Categoría II, Desarrollo; Categoría III, Especialización; y Categoría IV, Jefatura. Las jefaturas podrán tener una o más ocupaciones en su órbita.

Artículo 14. (Definición de grado).- El grado es la posición jurídica que tiene un cargo dentro de la ocupación, en el escalafón respectivo, en atención a su jerarquía en relación con los demás.

El grado 1 integra la Categoría I, Formación, los grados 2 y 3 integran la Categoría II, Desarrollo, los grados 4 y 5 integran la Categoría III, Especialización.

Artículo 15. (Jefaturas de departamento).- El nivel superior de la carrera administrativa es la jefatura de departamento que se encuentra inmediatamente por debajo de las funciones de Administración Superior.

Las jefaturas de departamento tendrán dos categorías. La categoría A para departamentos cuyos cometidos sean sustantivos de la organización. La categoría B para departamentos cuyos cometidos sean de soporte al funcionamiento de la organización.

En cada jefatura de departamento podrá haber una o más ocupaciones, según las características de la organización.

Artículo 16. (Escalafón Profesional y Técnico).- El escalafón PT, Profesional y Técnico, comprende los cargos y los contratos de función pública asimilados, correspondientes a las ocupaciones relativas al análisis, asesoramiento o ejecución de políticas para cuyo desempeño se requiere necesariamente formación terciaria.

Artículo 17. (Escalafón Administrativo y Especializado).- El escalafón AE, Administrativo y Especializado, comprende los cargos y los contratos de función pública asimilados, correspondientes a las ocupaciones relativas a la implementación de políticas que implican actividades de apoyo administrativo o especializado para cuyo desempeño se requiere formación de educación media superior o terciaria según el perfil del cargo.

Artículo 18. (Escalafón de Servicios Generales).- El escalafón SG, Servicios Generales, comprende los cargos y los contratos de función pública asimilados, correspondientes a las ocupaciones en las que predominan la destreza y habilidad manual en actividades de apoyo para cuyo desempeño puede requerirse formación en oficios.

Artículo 19. (Escala retributiva).- Las ocupaciones estarán asociadas a una escala retributiva compuesta por veintidós niveles de pago. A cada escalafón corresponderán los siguientes niveles mínimos y máximos correspondientes a una carga de trabajo equivalente a treinta y cinco horas semanales a valores de 2023, conforme a la escala siguiente:

Escalafón	Nivel mínimo (salario)	Nivel máximo (salario)
PT	10 ($ 51.460)	22 ($ 126.018)
AE	7 ($ 42.803)	16 ($ 79.413)
SG	1 ($ 30.174)	12 ($ 58.916)

A partir de la implementación en cada Inciso o unidad ejecutora del nuevo sistema escalafonario y de carrera administrativa, no serán de aplicación todas aquellas disposiciones generales o especiales que sean contrarias a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la presente ley.

Artículo 20. (Niveles retributivos de las jefaturas de departamento).- La categoría A de jefe de departamento será remunerada en el nivel de pago 17,

que tendrá un valor de $ 85.766 (ochenta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos uruguayos), a valores de enero 2023. La categoría B de jefe de departamento será remunerada en el nivel de pago 12 que tendrá un valor de $ 58.916 (cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos uruguayos), a valores de enero 2023.

Artículo 21. (Desaplicación).- A partir de la implementación en cada Inciso o unidad ejecutora del sistema escalafonario establecido en los artículos anteriores, dejarán de aplicarse en su ámbito los artículos 29 a 34 y 44 y sus modificativos, de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y los artículos 28 a 32 y sus modificativos, de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007.

SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Artículo 22. (Ingreso).- El ingreso a la carrera administrativa de los funcionarios del Poder Ejecutivo será por el cargo del último grado de la ocupación en el escalafón respectivo, siempre que exista vacante y no haya personal a redistribuir que pueda ocuparla.

Artículo 23. (Provisoriato).- La designación inicial tendrá carácter provisorio en los términos dispuestos por el artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

Artículo 24. (Titularidad de cargo).- Cumplido exitosamente el provisoriato, todo funcionario presupuestado es titular de un cargo y tiene el derecho y el deber de desempeñarlo en las condiciones que establezca la Administración, de conformidad con la Constitución de la República, la ley y los reglamentos.

Artículo 25. (Régimen de ascenso).- La carrera administrativa se desarrollará mediante el ejercicio del derecho al ascenso progresando en la escala jerárquica de cargos en base a las ocupaciones definidas en el nuevo sistema escalafonario para los funcionarios del Poder Ejecutivo comprendidos en la presente ley.

El Poder Ejecutivo, por razones fundadas y previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, podrá determinar un ámbito de aplicación diferente.

Artículo 26. (Procedimientos para el ascenso).- Verificada la existencia de vacantes que la Administración decida proveer, los ascensos se realizarán por concurso de oposición y méritos.

En dichos concursos se valorarán los conocimientos, aptitudes y actitudes de los postulantes, definidos para el ejercicio del cargo a proveer, su calificación o evaluación del desempeño anterior, la capacitación que posee con relación al cargo para el cual concursa y los antecedentes registrados en su foja funcional.

El Poder Ejecutivo reglamentará los aspectos de procedimiento y de integración de los tribunales de concurso.

Artículo 27. (Movilidad entre ocupaciones).- Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones precedentes, los funcionarios presupuestados podrán postularse para la provisión de cargos de cualquier escalafón y ocupación en el ámbito del Poder Ejecutivo en tanto reúnan los requisitos para ello.

Hasta que no se haya aplicado el presente régimen de carrera a todos los Incisos y unidades ejecutoras comprendidas en el artículo 4º de la presente ley, el Poder Ejecutivo por razones fundadas y previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá delimitar el ámbito de aplicación.

Artículo 28. (Publicidad de convocatorias).- Las convocatorias a concursos deberán ser publicadas en el Portal de Ascensos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, durante un plazo no inferior a quince días, sin perjuicio de toda otra publicidad específica que se disponga.

La omisión del cumplimiento de la obligación dispuesta en el inciso precedente constituirá falta grave.

Artículo 29. (Provisión de vacantes).- Cada Inciso iniciará el procedimiento de provisión de vacantes de ascenso anualmente en el momento que considere oportuno, en función de sus necesidades.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá llamar a concurso al 100% (cien por ciento) de las vacantes de ascenso generadas cada dos años.

Artículo 30. (Movilidad temporaria por razones de servicio).- A requerimiento del supervisor directo del funcionario, el director de unidad ejecutora podrá, por razones fundadas de servicio, asignar temporariamente al funcionario una ocupación distinta a la de su cargo, siempre que la ocupación que se requiere desempeñar temporalmente implique el desarrollo de tareas relacionadas con la formación, competencias y habilidades del mismo.

Si el valor de la ocupación a la que se lo asigna es igual o inferior a la de su cargo, este cambio no implicará modificación alguna en la remuneración percibida por el funcionario.

Si el valor de la ocupación al que se lo asigna es superior a la de su cargo, el funcionario tendrá derecho a percibir la diferencia salarial correspondiente, siempre que el Inciso cuente con disponibilidad presupuestal para cubrir esa diferencia.

En ambos casos la asignación no podrá realizarse por un período superior a dieciocho meses.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Artículo 31. (Sistema de Gestión del Desempeño - Creación).- Créase el Sistema de Gestión del Desempeño orientado a la mejora continua de la Administración que se realizará por competencias, a los efectos de su consideración en cuanto a la carrera administrativa, la formación, la movilidad, la permanencia en el ejercicio del cargo y las tareas asignadas o funciones.

Los principios rectores del Sistema de Gestión del Desempeño son imparcialidad, transparencia, validez, confiabilidad, equidad, respeto mutuo, aprendizaje y fortalecimiento del potencial individual y colectivo.

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, reglamentará el presente Sistema de Gestión de Desempeño, que comenzará a aplicarse con un plan piloto en el ejercicio 2024.

Una vez finalizado y evaluado el plan piloto, se implementará con carácter definitivo a partir del ejercicio 2025.

Artículo 33. (Evaluación por competencias).- La evaluación por competencias es el proceso de valorar la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes que se emplean en el desempeño de una ocupación.

Artículo 34. (Validación y certificación de competencias).- La Oficina Nacional del Servicio Civil validará y certificará en un proceso de aplicación gradual las competencias de los funcionarios en el desempeño de las ocupaciones.

Artículo 35. (Vigencia).- Hasta tanto no se aplique en forma definitiva el nuevo sistema de evaluación de desempeño, continuará vigente el régimen de los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013.

FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Artículo 36. (Administración superior).- La administración superior comprende las ocupaciones cuyas actividades se asocian a la función de liderazgo de equipos y cuyo desempeño impacta de forma sustantiva en los resultados estratégicos de la organización.

Artículo 37. (Línea de jerarquía).- Dentro de una unidad ejecutora la línea jerárquica se inicia con el jerarca de la misma y continúa como funciones de administración superior, comprendiendo las gerencias de área que tienen jerarquía sobre las direcciones de división.

Artículo 38. (Procedimiento para la asignación de funciones de administración superior).- La asignación de las funciones de administración superior se realizará por concurso de oposición y méritos, en el que se evaluarán las competencias requeridas para el desempeño de la ocupación.

El concurso se realizará mediante un llamado abierto al que podrán postularse funcionarios de la Administración Central de cualquier categoría y ocupación.

El concurso podrá prever la realización de una segunda convocatoria simultánea a funcionarios públicos en general y una tercera simultánea a la ciudadanía.

Artículo 39. (Reserva del cargo o función).- Los funcionarios públicos que accedan a las funciones de administración superior quedarán comprendidos en el régimen de reserva del cargo o función del artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 40. (Suscripción de un compromiso de gestión).- La persona seleccionada deberá suscribir de común acuerdo con el jerarca, un compromiso de gestión que se formalizará en un contrato en el que se detallen las tareas a desarrollar en la gerencia de área o división en atención a las pautas, políticas y estrategias definidas y alineado al Plan Estratégico de la Administración correspondiente.

El cumplimiento de dicho compromiso deberá ser evaluado anualmente y el vínculo contractual podrá no renovarse por evaluación insatisfactoria fundada, sin derecho a indemnización.

El incumplimiento del jerarca de efectuar la evaluación será considerado falta grave.

Artículo 41. (Duración).- Las funciones de administración superior tendrán una vigencia de hasta tres años, pudiendo ser renovados por hasta tres años más en caso de evaluación satisfactoria por parte del jerarca.

Vencido dicho plazo o su prórroga, la función deberá ser concursada nuevamente y quien la desempeñaba podrá volver a su cargo de origen.

Artículo 42. (Gobernanza).- La Comisión de Compromisos de Gestión, creada por el artículo 57 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 350 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, asesorará a los Incisos de la Administración Central en la elaboración de los compromisos de gestión.

La Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto llevarán un registro de las funciones de administración superior.

Los Incisos de la Administración Central deberán informar a estas oficinas respecto de las contrataciones, evaluaciones y desvinculaciones de las personas que ejercen funciones de administración superior.

NORMAS DE APLICACIÓN

Artículo 43.- La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios del Poder Ejecutivo podrá realizarse en régimen de teletrabajo, cuando lo permitan las necesidades y condiciones del servicio, y se cuente con la conformidad del funcionario.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en este artículo, estableciendo el régimen aplicable al teletrabajo, basado en las experiencias piloto desarrolladas en distintos organismos y con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 44. (Régimen de transición).- Los Incisos y unidades ejecutoras deberán tener aprobadas las reestructuras previstas en el artículo 8º de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, previo a la implantación del nuevo sistema escalafonario y de carrera previsto en la presente ley.

En cada Inciso y unidad ejecutora, hasta que no sea implantado el nuevo sistema escalafonario y de carrera, los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo continuarán rigiéndose por las normas vigentes del sistema previsto en la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 45.- En las reestructuras de puestos de trabajo que se realicen con los escalafones y grados previstos en las Leyes Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, los nuevos cargos tendrán en su denominación la serie a la que pertenecen, que estará asociada a un grupo ocupacional previsto en la nueva carrera administrativa.

Artículo 46. (Tutela de derechos adquiridos).- La migración funcional hacia el nuevo sistema escalafonario y de carrera administrativa no podrá significar lesión de derechos funcionales o pérdida retributiva.

Artículo 47. (Financiamiento del nuevo sistema de carrera).- A partir de la implementación en cada unidad ejecutora, de la nueva carrera administrativa regulada en la presente ley, todos los conceptos retributivos de carácter permanente de los funcionarios incluidos en la nueva carrera, clasificados conforme al artículo 51 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, como compensación especial o incentivo, no serán de aplicación.

Dichas compensaciones, cuando no correspondan al cumplimiento de tareas especialmente encomendadas por el jerarca, financiarán las ocupaciones resultantes de la nueva carrera administrativa. Si la retribución que le corresponde al cargo al que accede, correspondiente a la ocupación de la nueva carrera administrativa, fuera igual o superior a la que el funcionario percibe en la actual estructura, se asignará aquella. Si fuera menor, la diferencia se mantendrá como una compensación personal transitoria, que se irá absorbiendo en futuros incrementos por cambios en la tabla de sueldos y compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.

Dicha compensación personal llevará todos los aumentos que el Poder Ejecutivo disponga para los funcionarios de la Administración Central.

Al ingresar los funcionarios a las ocupaciones que en cada caso les correspondan, el jerarca de la unidad ejecutora, previa anuencia del jerarca del Inciso, con el informe previo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, revisará las compensaciones especiales que se hayan otorgado por el cumplimiento de las tareas especialmente encomendadas. Si la ocupación a la que accede el funcionario comprende dichas tareas, se dejará sin efecto la compensación especial sin que en ningún caso se pueda afectar el principio general consagrado en el artículo 46 de la presente ley.

No se encuentran comprendidas en lo antes dispuesto las compensaciones especiales que correspondan a nocturnidad, presentismo, vivienda, transporte, guardería, alimentación, dedicación exclusiva, subrogación, quebranto de caja, tareas insalubres, compromisos de gestión o incentivos al rendimiento y por trabajo en días inhábiles o tareas extraordinarias.

Los créditos correspondientes a las economías que se generen por la implementación de la nueva carrera se reasignarán al Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", programa 483 "Políticas de Recursos Humanos" y al objeto del gasto que a tales efectos habilitará la Contaduría General de la Nación.

El 60% (sesenta por ciento) de dichos créditos, calculados a setiembre de cada año, se destinarán a incrementar la escala retributiva prevista en el artículo 19 de la presente ley en el año subsiguiente. El 40% (cuarenta por ciento) restante, a aumentar los máximos retributivos.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

Artículo 48. (Recursos contra la migración a la ocupación).- En caso de interposición de recursos administrativos respecto de la asignación a un funcionario de la respectiva ocupación, será preceptivo el informe de la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional.

El organismo deberá remitir a la Comisión el recurso recibido en un plazo de diez días.

La Comisión se deberá expedir en un plazo de sesenta días.

Artículo 49. (Implementación).- Los funcionarios que ingresen al Poder Ejecutivo en Incisos o unidades ejecutoras donde esté implementado el nuevo sistema escalafonario y de carrera administrativa se regirán por sus disposiciones.

Artículo 50.- En las reestructuras de puestos de trabajo que se realicen al amparo de lo previsto por el artículo 8º de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, con los escalafones y grados previstos en la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y en la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, los cargos tendrán como denominación y serie a la que pertenecen la asociada a un grupo ocupacional y nivel previsto en la nueva carrera administrativa.

Aquellos cargos ocupados para los que exista ley que determine compensaciones de acuerdo con la actual denominación o serie se mantendrán incambiados y se modificarán al vacar indicando en la condición del cargo dicha modificación.

Los cargos que se crean o se transforman en la presente ley deberán adecuarse a lo previsto en el inciso primero del presente artículo, con el asesoramiento previo y preceptivo de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 51.- Dispónese que el derecho a optar previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, podrá ser ejercido por los funcionarios que se encuentren prestando tareas en comisión a la fecha de vigencia de la presente ley, cuando alcancen una antigüedad de tres años en la oficina de destino.

La incorporación se financiará, de ser necesario, con cargo a los créditos autorizados en la unidad ejecutora correspondiente, en el grupo 0 "Servicios Personales", sin verse afectados los créditos presupuestales del Inciso de origen. En ningún caso se podrá disminuir el nivel retributivo de los funcionarios.

Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el funcionario fuese menor a la que percibía en el organismo de origen, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en este artículo los funcionarios de los Entes Autónomos, los que revistan en los escalafones J "Docente en otros organismos", H "Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública", M "Servicio Exterior", K "Militar" y L "Policial".

Artículo 52.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a propuesta de los Incisos de la Administración Central, a designar en cargos presupuestados del último grado del escalafón respectivo, a quienes, al 31 de diciembre de 2022, se encuentren desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de arrendamientos de servicio, del artículo 7º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, y del artículo 92 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, siempre y cuando el personal contratado

haya sido seleccionado mediante un concurso celebrado a través de Uruguay Concursa, de organismos nacionales o internacionales de cooperación o procedimiento concursal similar.

Asimismo autorízase al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social" a designar en cargos presupuestados del último grado del escalafón respectivo a los funcionarios contratados al amparo del artículo 524 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

Las designaciones se deberán realizar bajo el régimen de provisoriato establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, las cuales estarán exceptuadas de los procedimientos regulados en los artículos 93 y 94 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013.

Las designaciones en la modalidad prevista en este artículo deberán realizarse en el último grado del escalafón correspondiente, pudiéndose crear las vacantes para este fin, dándose cuenta a la Asamblea General.

Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, aumento del grado del funcionario, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.

En los casos que corresponda, a efectos de determinar la retribución antes referida se tomará en cuenta el valor mensual correspondiente al vínculo contractual anterior excluido el impuesto al valor agregado. Asimismo, de corresponder, se deducirán las sumas correspondientes al aguinaldo cuando este no estuviera incluido en las retribuciones correspondientes al vínculo contractual anterior.

Se requerirá informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente artículo y el financiamiento de los cargos a crear.

Se autoriza a la Contaduría General de la Nación a reasignar al grupo 0 "Servicios Personales" los créditos presupuestales desde gastos de funcionamiento o inversiones, así como las reasignaciones que correspondan, a efectos de financiar lo dispuesto en el presente artículo, sin que ello implique costo presupuestal.

Lo dispuesto en esta disposición entrará en vigencia a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 53.- (Extensión de la licencia por maternidad para la funcionaria pública en casos de complejidad, licencia por paternidad del funcionario público y vigencia). La licencia maternal será de dieciocho semanas en el caso de nacimientos a término cuando el peso del bebé al nacer sea menor o igual a 1,5 kg.

Independientemente de la semana de gestación en que se produzca el nacimiento, en los casos en que el recién nacido presente algún trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección, que por su naturaleza o gravedad implique riesgo o compromiso de vida del recién nacido, con internación o con tratamiento domiciliario, la licencia por maternidad podrá extenderse hasta que el hijo de la beneficiaria cumpla seis meses de edad.

Por el mismo término se extenderá el período de amparo a la licencia por maternidad en los casos en que el recién nacido presente algún trastorno, enfermedad, comorbilidad o afección que, sin implicar riesgo de vida, involucra discapacidades sensoriales, físicas o intelectuales, que requieran internación o tratamiento, que a juicio del médico especialista necesite o se beneficie de los cuidados de la madre.

En todos los casos previstos en el presente artículo, la extensión de la licencia por maternidad será un derecho de la beneficiaria, para cuyo ejercicio no se requerirá preaviso al empleador.

En ningún caso, el período de licencia por maternidad será inferior a catorce semanas.

La licencia por paternidad será de treinta días en caso de nacimientos múltiples, pretérmino así como en las situaciones previstas en este artículo.

Los trabajadores públicos, serán beneficiarios de una licencia para el cuidado del recién nacido, que podrán usar indistintamente y en forma alternada el padre y la madre una vez finalizado el período de licencia maternal, hasta que el hijo de los beneficiarios cumpla seis meses de edad o hasta los nueve meses de edad, en las situaciones previstas en el presente artículo.

Uno u otro beneficiario solo podrán acceder a la licencia, siempre que la trabajadora permaneciera en actividad o amparada a licencia médica, salvo lo considerado en el inciso tercero del presente artículo.

Para poder ampararse a lo dispuesto en este artículo, las/os beneficiarias/os deberán presentar las constancias médicas correspondientes.

Lo establecido en el presente artículo será de aplicación a los nacimientos que ocurran a partir de la promulgación de esta ley.

También será de aplicación a los nacimientos que hayan tenido lugar antes de la promulgación de la presente ley, siempre que aún no haya finalizado el período de amparo a la licencia por maternidad de la beneficiaria o que aún no haya finalizado el amparo a la licencia por paternidad del beneficiario, ambos casos de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo.

La aplicación de este artículo no menoscabará la vigencia de reglamentos, decretos, convenios colectivos o individuales, que garanticen a los trabajadores o trabajadoras de la actividad pública condiciones más favorables que las previstas en la presente disposición.

SECCIÓN III

ORDENAMIENTO FINANCIERO

Artículo 54.- Sustitúyese el numeral 19) del literal D) del artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 314 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"19) La adquisición y reparación de bienes y la contratación de servicios, realizadas en el marco de las actividades de investigación científica desarrolladas por la Universidad de la República, por la Universidad Tecnológica o por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, hasta un monto anual de 50.000.000 UI (cincuenta millones de unidades indexadas), para cada uno de los organismos. Quedan comprendidos en esta excepción y por dicho monto anual los establecimientos de extensión e investigación agropecuaria pertenecientes a la Universidad de la República".

Artículo 55.- Sustitúyese el artículo 488 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 323 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020 (artículo 47 del TOCAF 2012), por el siguiente:

"ARTÍCULO 488.- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y con la conformidad del Tribunal de Cuentas, elaborará pliegos de condiciones estándar de acuerdo al objeto de la contratación y al tipo de procedimiento, los que podrán formularse en forma electrónica.

Los pliegos estándar deberán contener como mínimo:

1) Los requisitos de admisibilidad de las propuestas y los derechos y garantías que asisten a los oferentes.

2) Los lineamientos para la presentación de las propuestas, forma de cotización de precios y forma en que deben describirse los atributos de los bienes y servicios ofertados, a efectos de favorecer la correcta evaluación de la oferta.

3) Las condiciones económico-administrativas del contrato y su ejecución, en particular, lo concerniente a pautas para la evolución de precios y forma de pago.

4) Las acciones y penalidades derivadas de la eventual falta de cumplimiento del contrato.

5) Toda otra condición o especificación que se estime conveniente para asegurar la plena vigencia de los principios generales de la contratación administrativa.

Dichos pliegos conformarán un repositorio electrónico residente en la plataforma transaccional administrada y actualizada por la Agencia Reguladora de Compras Estatales, que permitirá a las unidades ejecutoras construir su pliego de condiciones particulares en un proceso integrado al ciclo de la compra.

Los pliegos estándar serán de aplicación obligatoria para todas las administraciones públicas estatales.

Todas las referencias normativas sobre el pliego único se entenderán realizadas a los pliegos estándar referidos en el inciso primero de este artículo.

El Poder Ejecutivo podrá delegar en la Agencia Reguladora de Compras Estatales la elaboración y aprobación de dichos pliegos".

Artículo 56. (Licencias especiales).- Sustitúyese el inciso 11 del artículo 15 de la Ley N° 19.121 (Estatuto del Funcionario Público) por el siguiente:

"Por adopción, de trece semanas continuas, que podrá ser aplicable a partir de que se haya hecho efectiva la entrega del menor. Cuando los dos padres adoptantes sean beneficiarios de esta licencia, solo uno podrá gozar de la misma, y al restante corresponderán diez días hábiles".

Artículo 57.- Sustitúyese el artículo 489 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 324 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020 (artículo 48 del TOCAF 2012), por el siguiente:

"ARTÍCULO 489.- El pliego de condiciones que en cada caso regirá el procedimiento administrativo de contratación se conformará con el pliego estándar a que refiere el artículo 488 de la presente ley, al que se integrará el conjunto de especificaciones particulares referidas al objeto concreto de la convocatoria.

Sin perjuicio de los requisitos previstos en los numerales 1) a 5) del inciso segundo del artículo 488, el pliego deberá contener los siguientes elementos:

A) La descripción detallada del objeto, incluyendo los servicios comprendidos dentro del mismo.

B) Las condiciones especiales de diseño, normas de fabricación o atributos técnicos requeridos.

C) Los criterios objetivos de evaluación, en un balance acorde al interés de la Administración de elegir la oferta más conveniente y la garantía en el tratamiento igualitario de los oferentes, conforme a uno de los siguientes sistemas:

1) Determinación del o de los factores (cuantitativos o cualitativos), pudiendo incluir el precio como factor cuantitativo, así como la ponderación de cada uno de ellos, a efectos de determinar la calificación técnica a ser asignada a cada oferta o alternativa evaluable ofrecida, incluyendo en esta valoración los atributos de experiencia e idoneidad del oferente.

2) Exigencia de requisitos mínimos y posterior empleo respecto de quienes cumplan con los mismos, de la aplicación del factor precio en forma exclusiva u otro factor de carácter cuantitativo, siempre que esto haya sido previsto en las bases que rigen el llamado.

D) El o los tipos de moneda en que deberá cotizarse, el procedimiento de conversión en una sola moneda para la comparación de las ofertas y el momento en que se efectuará la conversión, debiendo indicarse también si los precios son firmes o ajustables, en cuyo caso se deberá especificar los factores a usarse en su actualización.

E) La posibilidad de efectuar adjudicaciones parciales y las circunstancias en que ello sea aplicable.

F) Las clases y monto de las garantías, así como el alcance y cobertura de los términos de garantías y soporte técnico, en caso de corresponder.

G) El modo de proveer el objeto de la contratación y los criterios a utilizar en la evaluación de la calidad y recepción de los bienes y servicios objeto del contrato.

H) Si se otorgan o no beneficios fiscales o de otra naturaleza y la determinación de los mismos.

I) Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria para los posibles oferentes.

El ordenador interviniente determinará el precio a aplicar para el pliego que rige el llamado o si el mismo no tiene costo.

En ningún caso se exigirán a los oferentes en el pliego del llamado requisitos que no estén directamente vinculados a la consideración del

objeto de la contratación o a la evaluación de la oferta, salvo que estos se encuentren establecidos en alguna disposición legal que los prevea a texto expreso.

Se reserva exclusivamente al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

En caso de que el pliego del procedimiento exija documentación a la que se pueda acceder a través del Registro Único de Proveedores del Estado, la obligación se considerará cumplida.

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de las disposiciones sobre contenido de los pliegos a que refiere el artículo 8 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, y a las disposiciones contractuales sobre comparación de ofertas contenidas en contratos de préstamos con organismos internacionales de los que la República forma parte".

Artículo 58.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, con las modificaciones introducidas por los artículos 29 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y 14 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017 (artículo 50 del TOCAF 2012), por el siguiente:

"ARTÍCULO 31.- Es obligatoria la publicación en el sitio web de compras y contrataciones estatales, por parte de las administraciones públicas estatales, la convocatoria a todos los procedimientos competitivos correspondientes a contrataciones de obras, bienes y servicios, incluyendo la publicación del pliego de condiciones particulares, así como sus posteriores modificaciones o aclaraciones; esta obligación tendrá el alcance establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987.

Todas las administraciones públicas estatales deberán dar publicidad en el sitio web de compras y contrataciones estatales, al acto de adjudicación, declaración de desierta o de rechazo de ofertas, a todos sus procedimientos de contratación de monto superior al 20% (veinte por ciento) del límite de su procedimiento de compra directa, incluidos los realizados por mecanismos de excepción, así como las ampliaciones y los actos de reiteración de gastos observados por el Tribunal de Cuentas, en la forma que disponga la reglamentación. Estos organismos

contarán para ello con un plazo de diez días luego de producido el acto que se informa.

La Agencia Reguladora de Compras Estatales facilitará a las empresas interesadas la información de las convocatorias en forma electrónica y en tiempo real".

Artículo 59.- Agrégase como inciso quinto del literal E) del artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, el siguiente:

"Los contribuyentes que nunca hayan estado comprendidos en la exoneración establecida en el presente literal podrán, por única vez, quedar incluidos en la misma, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación".

Artículo 60.- Agréganse al literal D) del artículo 482 de la Ley Nº 15.903, (artículo 33 del TOCAF 2012) de 10 de noviembre de 1987, los siguientes numerales:

"38) Las compras de bienes que realice el Ministerio del Interior con el fin de reparar la flota destinada directamente a la seguridad pública hasta el monto establecido para la licitación abreviada.

39) Las compras de bienes y servicios tercerizados imprescindibles para reparar y mantener en condiciones dignas los establecimientos carcelarios en todo el país hasta el monto límite de hasta dos veces el establecido para la licitación abreviada.

40) La contratación temporal de docentes y conferencistas en el marco de las distintas actividades que ejecuta la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. Dichas contrataciones podrán recaer en personas nacionales o extranjeras y su pago será acumulable con todo tipo de remuneración de actividad o pasividad, sea de naturaleza pública o privada, permanente o eventual.

41) La contratación de bienes o servicios que integren la canasta de bienes y servicios que el Servicio de Cantinas de las Fuerzas Armadas debe proporcionar a sus beneficiarios en las condiciones que establezca la reglamentación.

42) La adquisición de materiales, equipo y demás suministros que realice el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada Nacional necesarios para la reparación de Buques de Terceros o ejecución de obras por cuenta de terceros".

Artículo 61.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 24 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 51 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas, a excepción de los Gobiernos Departamentales que se excluyen de dicha obligación, elaborarán planes anuales de contratación de bienes y servicios correspondientes al ejercicio financiero, que deberán publicar hasta el 31 de diciembre del año previo al planificado, en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales y que contendrán como mínimo, la descripción y el alcance del objeto y fecha estimada para la publicación del llamado".

Lo dispuesto en este artículo entrará a regir a partir de los planes anuales de contratación correspondientes al ejercicio 2025.

Artículo 62.- Exceptúase al Inciso 04 "Ministerio del Interior" de lo previsto en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 51 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, respecto a las compras de bienes y servicios vinculados a la seguridad pública financiadas con fondos provenientes de refuerzos de créditos en el marco del artículo 41 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 63.- Exceptúase al Ministerio del Interior de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 34 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022.

SECCIÓN IV

INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INCISO 02

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Artículo 64.- Facúltase al Poder Ejecutivo a aprobar una nueva estructura organizativa de la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes" del Inciso 02 "Presidencia de la República", con previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dando cuenta a la Asamblea General.

La nueva estructura podrá contener la redistribución de cometidos entre las distintas unidades organizativas comprendidas en la misma y será un insumo para las reformulaciones que se aprueben en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 7° de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, contemplando las funciones gerenciales previstas en el inciso tercero de dicho artículo, con criterio de optimización y complementariedad.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 65.- Créanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", los siguientes cargos:

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación	Serie
6	A	16	Asesor	Profesional
4	C	14	Administrativo	Administrativo

Las erogaciones resultantes de las creaciones dispuestas en el inciso precedente se financiarán con los créditos correspondientes a las supresiones de los siguientes cargos:

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación	Serie
1	J	3	Docente	DD.HH.
5	A	12	Asesor III	Médico
5	C	6	Administrativo IV	Administrativo

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación	Serie
9	C	1	Administrativo IX	Administrativo

El excedente resultante de la supresión de los cargos se reasignará al objeto del gasto 092.000 "Partidas Globales a Distribuir".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 66.- Modifícanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", las denominaciones y series de los siguientes cargos vacantes, sin que esto implique modificaciones en la retribución asignada a los mismos, de acuerdo al siguiente detalle:

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación Actual	Serie Actual	Denominación Proyectada	Serie Proyectada
1	A	16	Escribano de Gobierno y Hacienda	Escribano	Asesor	Profesional
1	A	14	Asesor I	Médico	Asesor I	Profesional
1	A	14	Asesor I	Arquitecto	Asesor I	Profesional
1	A	13	Asesor II	Licenciado en Bibliotecología	Asesor II	Profesional
1	A	12	Asesor III	Médico	Asesor III	Profesional
2	A	12	Asesor III	Licenciado en Bibliotecología	Asesor III	Profesional
1	A	12	Asesor III	Ciencias de la Comunicación	Asesor III	Profesional
1	A	11	Asesor IV	Electrónica	Asesor IV	Profesional
1	A	08	Asesor VII	Médico	Asesor VII	Profesional
1	B	12	Técnico I	Técnico Agropecuario	Técnico I	Técnico
1	B	12	Técnico I	Administración	Técnico I	Técnico

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación Actual	Serie Actual	Denominación Proyectada	Serie Proyectada
				Pública		
2	D	13	Especialista I	Periodismo	Especialista I	Especialización
1	D	13	Especialista I	Camarógrafo	Especialista I	Especialización
1	E	06	Oficial V	Sanitario	Oficial V	Oficios
1	E	06	Oficial V	Carpintería	Oficial V	Oficios
1	E	06	Oficial V	Electricidad	Oficial V	Oficios
1	E	06	Oficial V	Mecánica	Oficial V	Oficios

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 67.- Agrégase a la Ley N° 18.621, de 25 de octubre de 2009, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 12 Bis. (De los Centros Coordinadores de Emergencia Municipales).- Los Centros Coordinadores de Emergencias Municipales (CECOEM) son los órganos responsables de la formulación, en el ámbito de sus competencias y en consonancia con las políticas globales del Sistema Nacional de Emergencias y del Comité Departamental de Emergencias, de políticas y estrategias a nivel local:

A) Integración. El CECOEM o CECOEL estará integrado, como mínimo por el alcalde del municipio, un representante del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública o de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, según corresponda, y un representante de la Dirección Nacional de Bomberos así como de toda institución pública que esté radicada en la localidad de su jurisdicción y cuya comparecencia sea relevante para el mejor funcionamiento del centro coordinador.

B) Cometidos. Serán sus cometidos:

- Analizar los riesgos más probables de ocurrencia en su localidad.

- Desarrollar un plan de respuesta inicial ante un evento adverso o emergencia.

- Redactar los protocolos de actuación acorde a los riesgos detectados.

- Mantener enlace permanente con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales y los Comités Departamentales de Emergencias (CDE), de conformidad a los protocolos establecidos por cada CDE".

Artículo 68.- Sustitúyese el artículo 331 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 331. (Competencia).- A la Agencia Reguladora de Compras Estatales, le compete:

1) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación y conducción de la política en materia de compras públicas.

2) Asesorar a las entidades estatales dependientes del Poder Ejecutivo en materia de compras y contrataciones y, mediante convenios, a los entes autónomos y servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos.

3) Desarrollar y mantener el Registro Único de Proveedores del Estado al servicio de las entidades estatales y de las empresas proveedoras, proponiendo al Poder Ejecutivo las pautas técnicas y demás aspectos vinculados a la materia que deban ser objeto de la reglamentación.

4) Desarrollar, publicar y coordinar con las diversas entidades estatales, la efectiva aplicación de un catálogo único para la adquisición de bienes por parte del Estado.

5) Instrumentar un registro de normas técnicas y especificaciones de diseño referentes al catálogo único para la adquisición de bienes a que refiere el numeral precedente.

6) Elaborar guías para la contratación de bienes y servicios, con la finalidad de promover la adopción de estándares técnicos que permitan comparar con objetividad niveles de calidad, costos y eficiencia, de forma de procurar un adecuado control de la ejecución y correcto cumplimiento de los contratos.

7) Elaborar y difundir documentación y pautas técnicas en materia de adquisición de bienes y servicios, así como diseñar programas de capacitación, en especial, en aspectos vinculados a la elaboración y aplicación de normativa especializada, a la aplicación de las mejores prácticas a la identificación y a la mitigación de riesgos en los procedimientos administrativos de contratación y de ejecución de contratos.

8) Desarrollar y mantener el sitio web de compras y contrataciones estatales, como canal de comunicación y vínculo interactivo entre los proveedores y las entidades estatales.

9) Asesorar a las entidades estatales en la elaboración y difusión de su plan anual de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y sus modificativas.

10) Por cuenta y orden de las entidades estatales, personas públicas no estatales y personas de derecho privado que administren fondos públicos, realizar los procedimientos administrativos de contratación para la adquisición de bienes y servicios, de conformidad con la normativa vigente, así como asistirlos técnicamente en las diversas etapas de contratación.

11) Imponer las sanciones de advertencia, multa, ejecución de garantía de mantenimiento de la oferta o de fiel cumplimiento del contrato y suspensión ante incumplimiento de proveedores.

12) Promover el uso de las tecnologías de la información, observando los lineamientos y recomendaciones definidos por el Poder Ejecutivo, a fin de simplificar los procedimientos y favorecer el desempeño de compradores y proveedores, como herramientas para la mejora de la gestión y la transparencia del sistema de compras y contrataciones en el sector público.

13) Generar mecanismos que provean información al ciudadano sobre las contrataciones que realicen las entidades estatales, de manera actualizada y de fácil acceso, promoviendo la transparencia del sistema y la generación de confianza en el mismo.

14) Para el cumplimiento de sus cometidos, la Agencia Reguladora de Compras Estatales podrá comunicarse directamente con todas las entidades públicas, estatales o no, así como con las entidades privadas vinculadas a su ámbito de actuación.

15) Desarrollar y mantener la plataforma electrónica que permita el seguimiento y control de la ejecución de las contrataciones que efectúen las administraciones públicas estatales, proponiendo al Poder Ejecutivo los lineamientos técnicos a los efectos de su reglamentación".

Artículo 69.- Créanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", veinticuatro cargos de Asesor XI, Serie Profesional, escalafón A, grado 04 y dos cargos de Técnico X, Serie Técnico, escalafón B, grado 03, los que serán ocupados por aquellas personas que se encuentren cumpliendo tareas permanentes, propias de un funcionario público, que hayan sido seleccionadas mediante un concurso o procedimiento similar debidamente acreditado, cuyo vínculo haya iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, que el Poder Ejecutivo designará con previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes ingresarán al amparo del artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

A efectos de financiar las creaciones dispuestas en el inciso anterior, asígnase una partida de $ 3.584.689 (tres millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos uruguayos), para el ejercicio 2023. A partir del ejercicio 2024, se financiarán con cargo al Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", Proyecto 526 "ARCE", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 199.000 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores", por la suma de $ 14.338.754 (catorce millones trescientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos uruguayos).

Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 70.- Sustitúyese el artículo 308 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 308. (Competencia).- A la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, le compete:

1) Asesorar y asistir al Poder Ejecutivo y, en especial, a sus unidades ejecutoras, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas fijadas por éste.

2) Asesorar y asistir a solicitud de los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas ejecutadas por estos en el marco de sus respectivas competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 311 de la presente ley, en lo pertinente.

3) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo sobre los avances y resultados obtenidos respecto del monitoreo y evaluación de la ejecución de los programas, proyectos, objetivos y metas asociados a la gestión de gobierno.

4) Asistir a las entidades estatales coordinando los planes de trabajo asociados a la instrumentación de políticas públicas, cuando intervenga más de una unidad ejecutora.

5) Promover la aplicación de instrumentos que favorezcan la modernización de la gestión pública, priorizando la eficiencia en la utilización de los recursos del Estado en una visión estratégica definida. En tal sentido, requerirá a las entidades públicas la remisión de un relevamiento de los bienes del Estado.

6) Promover la participación ciudadana en la evaluación de los servicios a la población y en el control de la trasparencia en el manejo de los fondos públicos relacionados.

7) A solicitud del Ministro de Economía y Finanzas, podrá coordinar con la Auditoría Interna de la Nación, el análisis de los informes técnicos elaborados por esta, a efectos de realizar el correspondiente monitoreo para la efectiva aplicación de las correcciones y recomendaciones contenidas en dichos informes.

8) A solicitud del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, podrá asistir en materia de monitoreo y evaluación de proyectos contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, pudiendo realizar recomendaciones para el correcto desarrollo de los mismos.

9) A solicitud del Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, podrá asistir en materia de monitoreo y evaluación de la política de recursos humanos del Estado.

10) Asesorar al Poder Ejecutivo y a sus unidades ejecutoras en el monitoreo y evaluación de los procesos jurisdiccionales, contra todo órgano del Estado o empresas de derecho privado en las que el Estado tenga participación mayoritaria en su capital accionario, asesorando respecto a las políticas preventivas en tal sentido, en cuanto fuere pertinente.

11) Monitorear y evaluar los proyectos de innovación en la gestión pública que sean considerados de interés para la Presidencia de la República".

Artículo 71.- Créanse en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", Proyecto 000 "Funcionamiento", en la Financiación 1.1 "Rentas Generales", quince cargos de Asesor XI, Serie "Estrategias, Control y Fiscalización/SENACLAFT", escalafón A, grado 04.

Créase en el mismo Inciso, programa y unidad ejecutora una compensación especial por el desempeño de funciones especiales, de hasta $ 17.103.821 (diecisiete millones ciento tres mil ochocientos veintiún pesos uruguayos), más aguinaldo y cargas legales, la que deberá financiarse con créditos propios del Inciso. La misma se abonará a los funcionarios que cumplan efectivamente funciones en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación las reasignaciones de créditos presupuestales del grupo 0 "Servicios Personales", a medida que se vayan ocupando los cargos creados por este artículo.

La presente disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 72.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 18.191, de 14 de noviembre de 2007, con la modificación introducida por el artículo 40 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 29.-

De los diferentes elementos.

1) Todo vehículo automotor, para transitar por la vía pública, deberá poseer como mínimo el siguiente equipamiento obligatorio, en condiciones de uso y funcionamiento:

   A) Sistema de dirección que permita al conductor controlar con facilidad y seguridad la trayectoria del vehículo en cualquier circunstancia.

   B) Sistema de suspensión que proporcione al vehículo una adecuada amortiguación de los efectos que producen las irregularidades de la calzada y contribuya a su adherencia y estabilidad.

   C) Dos sistemas de frenos de acción independiente que permitan controlar el movimiento del vehículo, detenerlo y mantenerlo inmóvil.

   D) Sistemas y elementos de iluminación y señalización que permitan buena visibilidad y seguridad en la circulación y estacionamiento de los vehículos.

   E) Elementos de seguridad, matafuego, balizas o dispositivos reflectantes independientes para casos de emergencia.

   F) Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta que permitan al conductor una amplia y permanente visión adyacente al vehículo que no se puede observar de forma directa.

   G) Un aparato o dispositivo que permita mantener limpio el parabrisas asegurando buena visibilidad en cualquier circunstancia.

   H) Paragolpes delantero y trasero, cuyo diseño, construcción y montaje sean tales que disminuyan los efectos de impactos.

I) Un parabrisas construido con material cuya transparencia sea inalterable a través del tiempo, que no deforme sensiblemente los objetos que son vistos a través de él y que en caso de rotura, quede reducido al mínimo el peligro de lesiones corporales.

J) Una bocina cuyo sonido, sin ser estridente, pueda oírse en condiciones normales.

K) Un dispositivo silenciador que reduzca sensiblemente los ruidos provocados por el funcionamiento del motor.

L) Rodados neumáticos o de elasticidad equivalente que ofrezcan seguridad y adherencia aun en caso de pavimentos húmedos o mojados.

M) Guardabarros que reduzcan al mínimo posible la dispersión de líquidos, barro, piedras, etcétera.

N) Los remolques y semirremolques deberán poseer el equipamiento indicado en los literales B), D), L) y M), además de un sistema de frenos y paragolpes trasero.

Ñ) Los vehículos automotores de más de dos ruedas deberán llevar una rueda auxiliar en condiciones tales que pueda sustituir a las anteriores cuando sufran daños. Dicho elemento no será exigible a aquellos vehículos que cuenten con un sistema alternativo al cambio de ruedas que ofrezca suficientes garantías para la continuidad en la conducción y movilidad del vehículo.

2) En las combinaciones o trenes de vehículos deberán combinarse las siguientes normas:

A) Los dispositivos y sistemas de frenos de cada uno de los vehículos que forman la combinación o tren deberán ser compatibles entre sí.

B) La acción de los frenos de servicio, convenientemente sincronizada, se distribuirá de forma adecuada entre los vehículos que forman el conjunto.

C) El freno de servicio deberá ser accionado desde el comando del vehículo tractor.

D) El remolque deberá estar provisto de frenos y tendrá un dispositivo que actúe automática e inmediatamente sobre todas las ruedas del mismo si en movimiento se desprende o desconecta del vehículo tractor.

Las condiciones del buen uso y funcionamiento de los vehículos se acreditarán mediante un certificado a expedir por la autoridad competente o el concesionario de inspección técnica en quien ello se delegue, donde se establecerá la aptitud técnica del vehículo para circular.

3) Las motocicletas y bicicletas deberán contar con un sistema de frenos que permita reducir su marcha y detenerlas de modo seguro.

4) Los vehículos automotores no superarán los límites máximos reglamentarios de emisión de contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la población o comprometer su salud y seguridad.

5) Los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas de lona, que sirvan para acondicionar y proteger la carga de un vehículo, deberán instalarse de forma que no sobrepasen los límites de la carrocería y estarán debidamente asegurados. Todos los accesorios destinados a proteger la carga deberán reunir las condiciones previstas en el artículo 21.

6) El uso de la bocina solo estará permitido a fin de evitar accidentes.

7) Queda prohibida la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire comprimido.

8) Los vehículos habilitados para el transporte de carga en los que esta sobresalga de la carrocería de los mismos deberán ser debidamente autorizados a tal fin y señalizados, de acuerdo a la reglamentación vigente".

Artículo 73.- Las entidades públicas estatales y no estatales deberán publicar en sus respectivos sitios web la representación cartográfica de los

límites de su jurisdicción -cuando esta sea subnacional- y de los límites de las circunscripciones administrativas en las que organizan su gestión.

Cométese a la Infraestructura de Datos Espaciales, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Límites Administrativos, la definición de los criterios técnicos, entre los que se deberá prever la publicación en formato abierto, así como el contralor del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.

Artículo 74.- Atribúyese a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) el cometido de diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial basada en estándares internacionales, en los ámbitos público y privado. En todo lo que respecta al tratamiento de datos personales, será preceptiva la actuación conjunta con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP).

La estrategia deberá fundarse en principios de equidad, no discriminación, responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, auditoría e innovación segura, respetando la dignidad humana, el sistema democrático y la forma republicana de gobierno. Los principios de la protección de datos personales incluidos en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, serán parte de la citada estrategia.

Como parte de esta estrategia nacional de inteligencia artificial, se establece un plazo de ciento ochenta días para la presentación ante el Poder Legislativo de un informe y recomendaciones para su regulación legal, orientada a su desarrollo ético, la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, el fomento de la innovación tecnológica.

Para el cumplimiento de sus cometidos, AGESIC podrá establecer grupos de trabajo, comités asesores y otros mecanismos de participación que incluyan las perspectivas de actores del sector público, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil organizada.

AGESIC realizará recomendaciones específicas a entidades del sector público y del sector privado para el desarrollo e implementación de los sistemas de inteligencia artificial mencionados, y para la fiscalización de su cumplimiento, sin perjuicio de las competencias propias de la URCDP y de otras entidades públicas en sus respectivos ámbitos de actuación.

Artículo 75.- En el marco del diseño y desarrollo de la estrategia nacional de datos e inteligencia artificial, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de

Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) deberá identificar y proponer medidas en favor de la innovación, respetando los principios definidos en el artículo que antecede.

En especial, se promoverá la creación de entornos controlados de prueba con el objetivo de poner en práctica proyectos tecnológicos de innovación en ámbitos definidos con entidades interesadas.

Para la ejecución de los proyectos referidos, deberá contarse con el informe favorable de un comité técnico integrado en forma preceptiva por AGESIC, por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y por representantes de todas las entidades públicas con competencia específica en el proyecto de que se trate. El comité podrá invitar a otras entidades del sector público, sector privado, la academia y la sociedad civil a participar en el proceso de evaluación.

La presentación de los proyectos al comité deberá incluir protocolos de actuación, mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, evaluación de impacto en la protección de datos personales, gestión de eventuales perjuicios o daños, normativa impactada por el proyecto, plazo, excepciones requeridas para ser llevado a cabo, de corresponder, y otros requisitos que determine la reglamentación.

Las condiciones para la ejecución del proyecto y las excepciones solicitadas serán resueltas por resolución fundada de AGESIC, previo informe favorable del comité técnico.

AGESIC elaborará un proyecto de reglamentación de los entornos mencionados en este artículo que elevará al Poder Ejecutivo en un plazo de noventa días a contar de la promulgación de la presente ley.

Artículo 76.- Autorízase a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento, en su rol de responsable del Padrón Demográfico Nacional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, a suscribir los acuerdos necesarios con los organismos públicos y entidades privadas que correspondan para asegurar la completitud del conjunto mínimo de datos referido en el citado artículo. En el tratamiento de dichos datos, deberá darse cumplimiento a los principios establecidos en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.

Artículo 77.- Atribúyese a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), el cometido de asesorar al Ministerio de Salud Pública, en la aplicación de tecnologías de la información en el ámbito de la salud en general. En ese marco, AGESIC pondrá a disposición del Ministerio de Salud Pública, cuando este lo requiera, medios digitales para el procesamiento de información de salud y realizará su gestión en calidad de encargado de tratamiento de conformidad con la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, asegurando en todos los casos la calidad de los resultados y la seguridad y privacidad de la información recibida.

Artículo 78.- Las entidades públicas y las entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, referidas en el artículo 149 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, deberán:

A) Adoptar medidas de seguridad eficaces para proteger sus activos de información críticos, de conformidad con los lineamientos indicados por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).

B) Designar un responsable de seguridad de la información y comunicarlo a AGESIC.

C) Planificar la adopción de las medidas necesarias para mitigar y mejorar los controles existentes en la materia, y adoptar las medidas de prevención que determine la reglamentación.

D) Informar de forma completa e inmediata la existencia de un potencial incidente de ciberseguridad, de conformidad con los criterios establecidos por el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, y poner a disposición toda la información que le sea requerida por este.

E) Incorporar, en función de su nivel de madurez, el marco de ciberseguridad desarrollado por AGESIC.

F) Dar cumplimiento a otras medidas que se determinen por el Poder Ejecutivo a efectos de proteger los activos de información, siguiendo los estándares nacionales e internacionales en la materia.

A efectos de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, atribúyese a AGESIC el cometido de desarrollar, promover la implantación y monitorear una estrategia nacional de ciberseguridad.

Artículo 79.- Facúltase a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) a adoptar las siguientes medidas con respecto a las entidades que incumplan con las obligaciones establecidas en el artículo que antecede:

A) Requerir el ajuste de los procedimientos a la normativa vigente en materia de ciberseguridad en los plazos que se definan por AGESIC.

B) Requerir el cumplimiento de medidas específicas para la prevención de riesgos vinculados al sector de la entidad.

C) Requerir informaciones complementarias vinculadas a la ocurrencia de incidentes de seguridad, las medidas adoptadas y a la aplicación de la normativa en materia de ciberseguridad en general.

D) Apercibir, considerando la gravedad o reiteración del incumplimiento por parte de la entidad.

AGESIC comunicará en forma semestral a la Asamblea General el listado de las entidades que hayan incumplido con las obligaciones referidas en el artículo que antecede, y las medidas adoptadas en función de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 80.- Créase el Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad, el que será administrado por la Agencia para el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), en el que se ingresarán los datos técnicos y antecedentes vinculados a los incidentes de ciberseguridad denunciados, además de los informes elaborados por el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy).

Las entidades públicas y las entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, referidas en el artículo 149 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, deberán comunicar la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad a AGESIC en un plazo de veinticuatro horas de conocido y complementar la información necesaria para el registro efectivo a la brevedad.

Autorízase a AGESIC a comunicar datos básicos de la ocurrencia de los incidentes mencionados a otras entidades públicas o privadas pertenecientes a sectores o servicios críticos que puedan haberse visto afectados o se encuentren involucrados en el incidente.

La información gestionada y elaborada por el CERTuy en el marco de incidentes de seguridad específicos y la incorporada en el citado registro, podrá ser declarada reservada en función a lo dispuesto por el literal A) del artículo 9º de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008, cumpliendo con las demás estipulaciones del citado artículo.

Artículo 81.- La Agencia para el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) colaborará con la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) en la inclusión de requisitos de seguridad por diseño en los pliegos de compras públicas.

AGESIC y ARCE determinarán un listado de servicios o productos que requerirán, previo a la publicación de la compra respectiva, de un informe en materia de seguridad por parte de la Dirección de Seguridad de la Información de la AGESIC.

Artículo 82.- Autorízase a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) a aplicar la modalidad de contratación prevista en los artículos 7º y 8º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, para contratar funcionarios que desarrollen tareas en el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERTuy).

El Poder Ejecutivo podrá establecer un proceso de contratación simplificado a los fines indicados en el inciso anterior, previo asesoramiento de AGESIC y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Extiéndase la facultad conferida a AGESIC para el otorgamiento de la compensación prevista en el artículo 81 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, a los funcionarios que desempeñen tareas en el CERTuy.

Artículo 83.- Créase el Comité de Gestión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, integrado por un representante de cada uno de los siguientes órganos: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Central del Uruguay, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, Secretaría de Inteligencia

Estratégica de Estado, Agencia de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas y Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), que lo presidirá.

Son cometidos del Comité:

A) Apoyar a AGESIC en la implantación y monitoreo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

B) Colaborar con AGESIC en la puesta en práctica de las recomendaciones elaboradas por el Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información creado por el artículo 119 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022.

C) Proveer, en el marco de sus posibilidades, personal técnico para facilitar la actuación de AGESIC en el marco de las actividades referidas en los literales anteriores.

AGESIC podrá promover la creación de comités ad hoc específicos integrados por entidades públicas y privadas para asegurar la participación de múltiples actores en el diseño, implantación y monitoreo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, así como en la elaboración y puesta en práctica de recomendaciones en la materia.

La reglamentación establecerá la forma de funcionamiento del Comité de Gestión y de los comités asesores ad hoc que se creen.

Artículo 84.- Atribúyese al Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información creado por el artículo 119 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 71 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, la competencia de recomendar a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento la aplicación de normas técnicas específicas en materia de ciberseguridad en las entidades públicas y en las entidades privadas vinculadas a servicios o sectores críticos del país, referidas en el artículo 149 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 84 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

Artículo 85.- Sustitúyese el último inciso del artículo 49 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"En el caso de convenios celebrados con organismos estatales fuera del Presupuesto Nacional, los fondos percibidos en aplicación de los mismos constituirán "Recursos con Afectación Especial", cuya titularidad y disponibilidad corresponderá en su totalidad a AGESIC, estando exceptuados de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. El producido de la recaudación será destinado al cumplimiento de los cometidos establecidos en el inciso primero de este artículo".

Artículo 86.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 19.828, de 18 de setiembre de 2019, por el siguiente:

"ARTÍCULO 21.- Para participar de cualquier competencia deportiva en el deporte federado se deberá contar con el carné del deportista vigente, expedido por la Secretaría Nacional del Deporte, para la respectiva disciplina.

Los clubes, federaciones y organizadores de espectáculos deportivos no podrán incluir o admitir la participación de deportistas en sus competencias, sean estas de carácter oficial o amistoso, nacional o internacional, que no cuenten con el carné del deportista vigente.

En caso de incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme las normas y reglamentos de la respectiva federación o confederación, el club, federación u organizador del espectáculo deportivo, será sancionado por resolución de la Secretaría Nacional del Deporte con una multa entre 20 UR (veinte unidades reajustables) a 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables).

Son circunstancias agravantes:

A) La reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de una nueva infracción, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, dentro del plazo de cinco años contados desde la comisión de la anterior infracción.

B) La continuidad, entendiéndose por tal la violación a lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, cometida en el mismo momento o en momentos diversos como acciones ejecutivas de una misma resolución.

C) Que el deportista participe de la competencia sin contar con el certificado de aptitud médico-deportiva vigente a que refiere el artículo 447 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

D) La falsificación ideológica o material del certificado de aptitud médico-deportiva vigente a que refiere el artículo 447 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

E) La intención de engañar u ocultar información al presentar la documentación correspondiente ante la Secretaría Nacional del Deporte, a fin de que esta expida el carné del deportista.

F) Que la competencia se haya realizado sin el consentimiento de la federación reconocida como entidad dirigente, conforme a lo previsto en el literal E) del artículo 5º de la presente ley.

La acción judicial de cobro de la sanción pecuniaria prevista en el presente artículo será ejercida por la Secretaría Nacional del Deporte, aplicándose las disposiciones de los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

El producido de las multas recaudadas constituirán "Recursos con Afectación Especial", cuya titularidad y disponibilidad corresponderá en su totalidad a la Secretaría Nacional del Deporte, quedando exceptuada de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, la que podrá destinarlo a la Fundación Deporte Uruguay, a efectos de financiar la preparación y participación de deportistas en competencias internacionales representando a Uruguay".

Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 71 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 71.- Una vez aprobada la constitución de las sociedades anónimas deportivas por la Auditoría Interna de la Nación e inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán inscribirse en el Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte en un plazo de quince días corridos a partir de su publicación en el Diario Oficial".

Artículo 88.- Sustitúyese el artículo 72 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 72.- El capital mínimo de las sociedades anónimas deportivas y los porcentajes mínimos de suscripción e integración, serán los establecidos en general para las sociedades anónimas.

Las acciones serán nominativas y de igual valor".

Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 73 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 73.- Podrán ser accionistas de las sociedades anónimas deportivas las personas físicas y las personas jurídicas privadas. Ninguna persona física o jurídica podrá poseer en forma simultánea acciones en proporción superior al 1% (uno por ciento) del capital en dos o más sociedades anónimas deportivas que participen en la misma competición.

Para calcular el límite previsto en el inciso primero del presente artículo se computarán las acciones poseídas directa o indirectamente por el titular y las que lo sean por otra u otras personas o entidades que constituyan con aquel una unidad de decisión.

Aquellas personas físicas sujetas a una relación de dependencia con una sociedad anónima deportiva, ya sea en virtud de un vínculo laboral, profesional o de cualquier otra índole, no podrán poseer acciones de otra sociedad que participe en la misma competición que excedan de la proporción prevista en el presente artículo.

A efectos de respetar dichos límites, la superación de las cantidades previstas en el inciso tercero de este artículo implicará la obligación de enajenar la cantidad necesaria de acciones en el plazo de treinta días a partir de producida la violación.

La reglamentación establecerá la forma en que serán enajenadas las acciones que superen los máximos previstos en el presente artículo.

Quedan incluidos en el inciso primero del presente artículo los clubes deportivos que se constituyan como asociaciones civiles conforme lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley, en tanto se encuentren inscriptos y al día en el Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, no pudiendo poseer más de un 25% (veinticinco por ciento) de las acciones de una sociedad anónima deportiva.

Los clubes deportivos que se constituyan como asociaciones civiles conforme lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley no podrán ser accionistas de la Sociedades Anónimas Deportivas que participen en la misma competición".

Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 74 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 74.- Todos los actos o negocios jurídicos de los accionistas de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que supongan la enajenación, cesión, transferencia, gravamen, usufructo o disposición a cualquier título de las acciones de esta, deberán ser comunicados por la Sociedad al Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, dentro de los quince días corridos siguientes a la realización de los mismos.

Los estatutos de las SAD no podrán contener ninguna otra limitación a la libre transmisibilidad de las acciones.

Los fundadores de las SAD no podrán reservarse ventajas o remuneraciones de ningún tipo.

A los efectos de lo previsto en el artículo 380 del Código General del Proceso, y sus modificativas, se aplicarán a las acciones de las SAD las normas que rijan para las acciones de las sociedades anónimas".

Artículo 91.- Sustitúyese el artículo 75 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 75.- La sociedad anónima deportiva estará administrada por una comisión directiva compuesta por un mínimo de dos integrantes conforme la forma y condiciones que establezcan los estatutos.

El presidente de la comisión directiva representará a la sociedad, salvo pacto en contrario dispuesto en el estatuto".

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 77 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 77.- Aprobado por la Auditoría Interna de la Nación, todo aumento o disminución del capital, transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales deberán ser

comunicados por las correspondientes instituciones al Registro de Instituciones Deportivas de la Secretaría Nacional del Deporte, en un plazo máximo de quince días corridos desde la notificación de dicha aprobación.

Los actos eleccionarios, el nombramiento y la separación de los directivos de la SAD también deberán ser comunicados por las correspondientes instituciones al Registro mencionado en un plazo máximo de quince días corridos a partir de la realización de dichos actos".

Artículo 93.- Agrégase a la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 78 Bis.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los clubes deportivos constituidos como asociaciones civiles conforme a lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley podrán celebrar con la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) contratos de cesión de activos deportivos.

Tales contratos deberán ser previamente aprobados por la asamblea de socios del club deportivo constituido como asociación civil, debidamente convocada según lo previsto en el estatuto, a fin de tratar este como único punto del orden del día. La aprobación del convenio deberá contar con las mayorías que disponga el respectivo estatuto, que no podrá ser inferior al voto afirmativo de, al menos, el 60% (sesenta por ciento) de los socios con derecho a voto presentes en la asamblea.

Además de lo que las partes dispongan, dicho contrato deberá contener:

A) La referencia a la resolución de la asamblea de socios de la asociación civil que aprobó el acuerdo con la SAD.

B) El detalle de cada uno de los activos que se transfieren en el marco del contrato para ser administrados por la SAD.

C) El plazo del contrato.

D) Las garantías que se van a constituir.

E) Los derechos y obligaciones de ambas partes.

El contrato deberá presentarse, para su aprobación, ante la federación respectiva, y deberá adjuntarse testimonio notarial del acta de la asamblea de socios a que refiere el inciso segundo del presente artículo y certificado notarial que acredite que se ha cumplido con el estatuto.

Asimismo, deberá inscribirse ante la Secretaría Nacional del Deporte dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de su aprobación por parte de la federación respectiva.

La falta de aprobación por parte de la federación respectiva y de inscripción ante la Secretaría Nacional del Deporte determinará que el contrato no sea oponible a terceros, así como la imposibilidad de poder competir en cualquier competencia del deporte federado".

Artículo 94.- Agrégase a la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 78 Ter.- La transformación de clubes deportivos constituidos como asociación civil conforme lo previsto en el literal A) del artículo 67 de la presente ley, en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), sin perjuicio de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, deberá guardar las siguientes formalidades:

A) Ser aprobado por asamblea de socios del club deportivo constituido como asociación civil la cual deberá:

1) Ser convocada con una antelación no menor de cuarenta y cinco días a su celebración.

2) La convocatoria deberá publicarse en un diario de circulación nacional por el plazo de diez días corridos, y podrán también utilizarse otros medios de comunicación como ser redes sociales oficiales y sitios web o portales institucionales del club, o la notificación a los socios por correo electrónico o cualquier otro medio similar.

3) Ser convocada para tratar, como único punto del orden del día, la transformación a la SAD.

4) La transformación deberá ser aprobada por las mayorías que disponga el respectivo estatuto y no podrá ser inferior al voto afirmativo de al menos el 70% (setenta por ciento) de los socios con derecho a voto presentes en la asamblea.

B) Una vez aprobada la transformación, en el mismo acto se les otorgará a todos los socios con derecho a voto, hayan o no comparecido a la asamblea, el derecho a integrar el capital de la SAD en la forma y condiciones que establezca la reglamentación".

Artículo 95.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, en la redacción dada por el artículo 256 de la Ley Nº 20.130, de 2 de mayo de 2023, por el siguiente:

"ARTÍCULO 13. (Sujetos obligados no financieros).- Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

A) Los casinos.

B) Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, con excepción de los arrendamientos.

C) Los abogados únicamente cuando actúen a nombre y por cuenta de sus clientes en las operaciones que a continuación se detallan y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que den a sus clientes:

1) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.

2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.

3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

4) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.

5) Creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.

6) Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales.

7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo. Tratándose de venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos, estarán obligados tanto cuando actúen a nombre propio como a nombre y por cuenta de un cliente.

D) Los escribanos o cualquier otra persona física o jurídica, cuando participen en la realización de las siguientes operaciones para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que les presten:

1) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.

2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.

3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

4) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.

5) Creación, operación o administración de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.

6) Promesas, cesiones de promesas o compraventa de establecimientos comerciales.

7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo.

E) Los rematadores.

F) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o mediación en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas.

G) Los explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación.

H) Los proveedores de servicios societarios, fideicomisos y, en general, cualquier persona física o jurídica cuando en forma habitual realicen transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades:

1) Constituir sociedades u otras personas jurídicas.

2) Integrar el directorio o ejercer funciones de dirección de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, en los términos que establezca la reglamentación.

3) Facilitar un domicilio social o sede a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídica, en los términos que establezca la reglamentación.

4) Ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

5) Ejercer funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme a derecho, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, en los términos que establezca la reglamentación.

6) Venta de personas jurídicas, fideicomisos u otros institutos jurídicos.

I) Las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica.

J) Los contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas que actúen en calidad de independientes y que participen en la realización de las siguientes operaciones o actividades para sus clientes y en ningún caso por cualquier tipo de asesoramiento que les presten:

1) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de bienes inmuebles.

2) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.

3) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.

4) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.

5) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos.

6) Promesas, cesiones de promesas o compraventas de establecimientos comerciales.

7) Actuación por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

8) Las actividades descriptas en el literal H) del presente artículo.

9) Confección de informes de revisión limitada de estados contables en las condiciones que establezca la reglamentación.

10) Confección de informes de auditoría de estados contables.

K) Las administradoras de fondos de ahorro previsional.

L) Las sociedades anónimas deportivas.

Los sujetos obligados mencionados en los literales C), D) y J) del presente artículo, no estarán alcanzados por la obligación de reportar transacciones inusuales o sospechosas ni aun respecto de las operaciones especificadas en dichos numerales si la información que reciben de uno de sus clientes o a través de uno de sus clientes se obtuvo para verificar el estatus legal de su cliente o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación.

La información sobre operaciones inusuales o sospechosas deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Esta unidad, en coordinación con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento

del Terrorismo, reglamentará la forma en que se realizará dicha comunicación.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y el desarrollo de la debida diligencia de los clientes o aportantes de fondos. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que, por el número de sus integrantes, represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.

El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado, cuando corresponda, en forma temporaria o, con previa autorización judicial, en forma definitiva.

Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de tres meses.

El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI (mil unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor.

El Poder Ejecutivo establecerá los plazos, la forma y las condiciones en que se deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este artículo.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo podrá requerir a los sujetos obligados

mencionados en este artículo información periódica de todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, los que estarán obligados a proporcionarla, bajo apercibimiento de que se apliquen las sanciones previstas en el presente artículo".

Artículo 96.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 282.336 (doscientos ochenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia" al objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores".

Artículo 97.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2023, desde el Proyecto 720 "Centros Deportivos", objeto del gasto 799.000 "Otros Gastos", hacia el Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 98.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 2.032.960 (dos millones treinta y dos mil novecientos sesenta pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia", al objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores".

Artículo 99.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 291.000 "Servicios de vigilancia y custodia", al objeto del gasto 578.007 "Servicio odontológico, guardería y otros".

Artículo 100.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 7.809.550 (siete millones ochocientos nueve mil quinientos cincuenta pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 143.000 "Supergas", al objeto del gasto 219.000 "Otros servicios básicos".

Artículo 101.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 282 "Deporte comunitario", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", la suma de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), con destino a financiar las contrataciones de bienes y servicios vinculados al cumplimiento de los diversos cometidos de la referida unidad ejecutora.

Artículo 102.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 591.000 "Otras transferencias corrientes", al objeto del gasto 555.000 "Deportivas, culturales y recreativas".

Artículo 103.- Reasígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 855.183 (ochocientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y tres pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 591.000 "Otras transferencias corrientes", al objeto del gasto 555.000 "Deportivas, culturales y recreativas".

Artículo 104.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 591.000 "Otras transferencias corrientes", una partida anual de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2023 y una partida por única vez de $ 12.000.000 (doce millones de pesos uruguayos), para el ejercicio 2024, a efectos de atender las erogaciones resultantes de la candidatura de nuestro país para ser sede de la Copa Mundial FIFA 2030.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 105.- Créase la Comisión de Expertos en Política Poblacional, la cual funcionará en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que, teniendo en cuenta las variables demográficas actuales y las que sean previsibles para el futuro, con consecuencias en la dimensión y cualidad de la población del país, procure incrementar las mismas con los siguientes cometidos:

1) Analizar fortalezas y debilidades de las políticas actuales de población del país y cualificación de la misma, en todas las áreas, tomando especialmente en cuenta el último censo poblacional.

2) Examinar los impactos de la dinámica demográfica actual y las políticas y medidas que procuren evitar o disminuir sus componentes o impactos negativos, si los hubiere, y, en tal caso, corregirlos y mejorarlos, en aras de un mayor y mejor desarrollo social y económico del país y de su población.

3) Analizar las experiencias internacionales exitosas pertinentes.

4) Formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes legales, reglamentarios o de prácticas vigentes, al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y comunicarlas a la población en general.

A tales efectos, la Comisión recabará, además de la opinión de expertos, nacionales e internacionales, en las diferentes materias que hagan a la temática de sus cometidos, la opinión de las organizaciones, nacionales o extranjeras que se dediquen a la misma.

La Comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante de Presidencia de la República, el cual deberá tener vinculación con el Instituto Nacional de Estadística, y un representante de la OPP, que la presidirá.

Los miembros designados deberán tener notoria idoneidad en temas demográficos, educativos y de salud a ellos relacionados, inmigratorios, previsionales, económicos, legales u otros pertinentes para el cumplimiento de la tarea encomendada.

La integración reflejará la diversidad de visiones con respecto al tema, a cuyos efectos se invitará también a integrarla a los partidos políticos con representación parlamentaria.

Artículo 106.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida por única vez de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos), para el ejercicio 2023, con destino a la campaña publicitaria de prevención de ahogamiento infantil.

La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 107.- Suprímese en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", un cargo de particular confianza de "Director de División".

Créase en el mismo Inciso, programa y unidad ejecutora el cargo de particular confianza de "Subdirector de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas", el cual será designado por el Presidente de la República, entre personas que cuenten con notoria idoneidad y experiencia en la materia, cuya retribución se determinará aplicando el porcentaje de 55% (cincuenta y cinco por ciento) sobre el sueldo nominal de un Senador de la República, pudiendo adicionar a la misma exclusivamente los beneficios sociales, de conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

La erogación resultante de la creación dispuesta en el inciso segundo de este artículo, se financiará con los créditos correspondientes a la supresión del cargo de particular confianza dispuesta en el inciso primero, más el importe de $ 556.236 (quinientos cincuenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, del objeto del gasto 099.001

"Partida Proyectada", del Inciso 02 "Presidencia de la República", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", programa 481 "Política de Gobierno", Financiación 1.1 "Rentas Generales".

La Contaduría General de la Nación realizará las reasignaciones necesarias desde el Objeto del Gasto 099.001 "Partida Proyectada".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 108.- Asígnase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 283 "Deporte Federado", unidad ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte", proyecto 000 "Funcionamiento", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, objeto del gasto 555.000 "Deportivas, Culturales y Recreativas", con destino a financiar la iniciación deportiva federada infantil.

Artículo 109.- Exclúyese de la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, en la redacción dada por el artículo 226 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, a los usuarios directos e indirectos de zonas francas que desarrollen únicamente actividades logísticas y de movimiento de mercaderías previstas en la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987.

INCISO 03

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 110.- A efectos de lo dispuesto en los artículos 42 y 168 de la Ley Nº 19.775, de 26 de julio de 2019, y modificativas, solo se computarán los oficiales superiores que hayan ascendido a dicha jerarquía por vacante presupuestal real. La presente disposición será de aplicación hasta el 1º de enero de 2033.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Nº 19.775, de 26 de julio de 2019, solo se ascenderá a la jerarquía de oficial superior por vacante real presupuestal.

Artículo 111.- Sustitúyese el artículo 73 de la Ley Nº 10.808, de 16 de octubre de 1946, con la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley Nº 11.223, de 7 de enero de 1949, por el siguiente:

"ARTÍCULO 73.- La capacidad militar se probará con haber obtenido la calificación promedial de bueno, por lo menos, en las aptitudes de carácter, espíritu militar, instrucción, mando, gobierno y administración, cuyo conjunto determina la capacidad militar del oficial.

A) PARA EL CUERPO COMANDO:

Aspirantes: haber aprobado los exámenes prescritos por el plan de estudios de la Escuela Naval.

Guardia Marina y Alférez de Fragata: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo.

Alférez de Navío: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Alféreces de Navío para Tenientes de Navío.

Teniente de Navío: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Tenientes de Navío para Capitanes de Corbeta.

Capitán de Corbeta: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Capitanes de Corbeta para Capitanes de Fragata.

Capitán de Fragata: tener el tiempo de mando de equipaje y embarque o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Capitanes de Fragata para Capitanes de Navío.

Capitán de Navío: llenar las condiciones establecidas para el grado y haber realizado el curso de información para Capitanes de Navío.

B) PARA EL CUERPO DE APOYO Y COMPLEMENTO:

Aspirantes: haber sido aprobado el modo de reclutamiento detallado en el literal B del artículo 20 de la presente ley orgánica.

Guardia Marina y Alférez de Fragata: tener el tiempo de mando de equipaje o destino efectivo según el cuerpo.

Alférez de Navío: tener el tiempo de mando de equipaje o destino efectivo según el cuerpo y haber cumplido con aprobación el curso de pasaje de grado de Alféreces de Navío para Tenientes de Navío".

Artículo 112.- Incorpórase en el artículo 88 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, el siguiente inciso:

"Autorízase el pago de una compensación para el personal Superior y Subalterno de la unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada", desde la jerarquía de Cabo de Segunda a Capitán de Fragata del Comando de la Aviación Naval o sus unidades dependientes, que desempeñe efectivamente y en forma asidua servicios de mantenimiento y apoyo aeronaval, en las condiciones que establezca la reglamentación. Esta compensación se financiará con cargo a la partida prevista en el inciso primero de este artículo".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 113.- Sustitúyese el artículo 83 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, en la redacción dada por el artículo 88 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, por el siguiente:

"ARTÍCULO 83.- Asígnase una partida anual de hasta $ 7.362.013 (siete millones trescientos sesenta y dos mil trece pesos uruguayos) en la unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada" y de $ 481.812 (cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos doce pesos uruguayos) en la unidad ejecutora 004 'Comando General del Ejército' para otorgar un adicional de $ 195,68 (ciento noventa y cinco pesos uruguayos con sesenta y ocho centésimos) diarios para el Personal Superior y $ 152,91 (ciento cincuenta y dos pesos uruguayos con noventa y un centésimos) diarios para el Personal Subalterno, al personal que se indica a continuación:

1) Personal de las Fuerzas Armadas cumpliendo funciones de Represión de Contrabando en lugares aislados y alejados de centros poblados.

2) Personal del Servicio Geográfico Militar del programa 420 'Información Oficial y Documentos de Interés Público' del Ejército (Estudios Geográficos), por el cumplimiento de misiones de relevamientos cartográficos de la República, por los días pasados en trabajos de campo.

3) Personal de la Armada Nacional del programa 380 'Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio', por los días pasados en trabajos de campo o embarcados, realizando levantamientos hidrográficos en las aguas de jurisdicción o interés de la República con el objetivo principal de mantener actualizadas las Cartas y Publicaciones Náuticas del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada y por los días de guardia cumpliendo funciones de seguridad náutica a fin de dar cumplimiento a las obligaciones del país como Estado Ribereño en lo que refiere al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), Capítulo V, Seguridad a la Navegación, Regla 4 (avisos náuticos), Regla 5 (servicios y avisos meteorológicos) y Regla 9 (Servicios Hidrográficos).

4) Personal de la Armada Nacional del programa 380 "Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio", por los días pasados en trabajos de campo o embarcados y trabajos de altura en tareas de balizamiento para el Servicio de Iluminación y Balizamiento de la Armada (SERBA) y personal del SERBA que desempeña funciones en faros.

   En el caso del personal de la Armada Nacional que desempeñe funciones en los faros aislados del territorio nacional (faros de Isla de Flores e Isla de Lobos) percibirán una compensación especial de $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos) por día trabajado. Esta compensación es incompatible con la percepción de la prevista en el inciso anterior.

5) Personal del Servicio de Electrónica de la Armada, del programa 380 'Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio', que cumple tareas de instalación y mantenimiento del Sistema de Cadena de Radares, Micro-Ondas y Sistemas Comunicaciones, así como apoyo a la navegación.

6) Personal de la Armada Nacional del programa 380 'Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio', por los días trabajados en

tareas que involucren manipulación de armamento, munición y explosivos para el Servicio de Armamento de la Armada, desempeñando funciones en polvorines, ejercicios de tiro y todo lo que implique disposición final de los mismos, para una mejor gestión ambiental.

La partida asignada para atender esta compensación no podrá superar el monto del crédito asignado al objeto del gasto 042.024 "Adicional 30% desempeño funciones expresamente detalladas" al 1º de enero de 2011. La partida se ajustará en oportunidad y porcentaje igual a lo que se disponga para la Administración Central".

Artículo 114.- Dispónese que todos los buques, de bandera nacional o extranjera que de acuerdo con la normativa correspondiente tengan la obligación de contar con un Sistema de Identificación Automática (AIS) deben mantenerlo encendido y transmitiendo a efectos de permitir su identificación mientras navegan o se encuentren fondeados en aguas de la República Oriental del Uruguay.

Se encuentra prohibido tener configurado la señal del AIS con datos identificatorios distintos al del buque en el que se encuentra dicho equipo.

A los efectos del presente artículo, se entiende por aguas de la República Oriental del Uruguay las aguas interiores, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva.

El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones consagradas en los incisos primero y segundo de este artículo serán sancionadas con multa. El Poder Ejecutivo establecerá los montos de las multas y lo referido a la imposición, aplicación y percepción de las mismas. Lo recaudado será volcado a Rentas Generales.

Artículo 115.- Créase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", una compensación especial para el personal militar que desempeñe tareas prioritarias o sensibles vinculadas al área financiero contable, gestión de adquisiciones, planificación y ejecución presupuestal, por un monto total anual de $ 478.100 (cuatrocientos setenta y ocho mil cien pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.

Reasígnase con destino a financiar la compensación antes dispuesta, en el Inciso, programa y unidad ejecutora referidos, Financiación 1.1. "Rentas

Generales", la suma de $ 478.100 (cuatrocientos setenta y ocho mil cien pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 048.042 "Incr. salarial pers. subalt. K combatiente/no Combatiente", al objeto del gasto 042.568 "Comp. especial tareas prioritarias, sensibles área financiera".

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo.

Artículo 116.- Sustitúyese el artículo 66 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018, por el siguiente:

"ARTÍCULO 66.- Autorízase al Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', programa 440 'Atención Integral de la Salud', unidad ejecutora 033 'Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas', a abonar la diferencia de haberes que pudiera generarse en los casos de ascenso, en el subescalafón de los Servicios Generales, cuando el personal perciba una remuneración menor en el grado al que se asciende, la que será considerada una compensación personal y será absorbida en la oportunidad de generar derechos en la percepción de la permanencia en el grado.

La compensación que se crea por este artículo se financiará con cargo al crédito presupuestal previsto en los objetos del gasto 047.500 "Equiparación a Militares" y 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones específicas". En cada oportunidad, el Inciso deberá comunicar a la Contaduría General de la Nación el movimiento presupuestal correspondiente".

Artículo 117.- Sustitúyese el artículo 102 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 102.- Créase el Fondo de Viviendas para el Personal del Ministerio de Defensa Nacional administrado por el Servicio de Viviendas de las Fuerzas Armadas de la unidad ejecutora 034 'Dirección General de los Servicios' del Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', el cual será financiado de la siguiente manera:

A) Enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', que el Poder Ejecutivo determine de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

B) Los aportes o cualquier otro tipo de financiamiento que provengan de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como

todos aquellos aportes o financiamiento que provengan de cooperación interinstitucional nacional o internacional.

C) Donaciones con destino a la construcción, mejora y reparación de viviendas de servicio.

D) El Fondo estará integrado inicialmente con los recursos existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, previstos en el artículo 27 de la Ley Nº 13.033, de 7 de diciembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley Nº 13.911, de 23 de noviembre de 1970.

E) Otros recursos con los que cuenta el Ministerio de Defensa Nacional, que el Poder Ejecutivo determine.

F) Recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa Nacional en el Presupuesto Nacional o en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, con dicho destino.

G) Recursos provenientes de las cuotas por concepto de mantenimiento que fije a ser abonadas por los usuarios de viviendas de servicio.

H) Recursos provenientes del interés generado por los préstamos otorgados a los funcionarios en actividad del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" y a los retirados, jubilados y pensionistas del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, con destino a la compra, construcción, ampliación o reforma de única vivienda propia.

El Fondo de Vivienda para el Personal del Ministerio de Defensa Nacional constituirá fondos de terceros declarados por ley, cuyo destino será el mantenimiento, construcción, ampliación, reforma o reparación de las viviendas de servicio del Ministerio de Defensa Nacional, la construcción de viviendas para los funcionarios en actividad del Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', y los retirados, jubilados y pensionistas del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el otorgamiento de préstamos a tales funcionarios, retirados, jubilados y pensionistas, con destino a la compra, construcción, ampliación y reforma de única vivienda propia.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos en el programa 401 'Red de asistencia e integración social', unidad ejecutora

034 "Dirección General de los Servicios", Proyecto 785 'Viviendas para el personal del Ministerio de Defensa Nacional', Financiación 1.8 'Fondo de terceros declarados por ley'".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 118.- Créanse en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", Financiación 1.1 "Rentas Generales", veintiún cargos de Especialista X, Serie Controlador de Tránsito Aéreo, escalafón D, grado 1 y un cargo de Especialista X, Serie Operaciones, escalafón D, grado 1, para dar cumplimiento a los cometidos dispuestos por la Ley N° 19.925, de 18 de diciembre de 2020.

Lo dispuesto en el inciso anterior se financiará con el crédito resultante de la supresión de los siguientes cargos vacantes del programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", anteriores al 31 de diciembre de 2019:

Denominación	Serie	Escalafón	Grado
Técnico I	Controlador de Tránsito Aéreo	B	12
Técnico I	Controlador de Tránsito Aéreo	B	12
Técnico I	Controlador de Tránsito Aéreo	B	12
Técnico I	Controlador de Tránsito Aéreo	B	12
Técnico I	Controlador de Tránsito Aéreo	B	12
Técnico I	Controlador de Tránsito Aéreo	B	12
Auxiliar I	Rampa	F	6
Oficial I	Chofer	E	8
Oficial IV	Chofer	E	5
Oficial III	Mantenimiento mecánico	E	6
Oficial VI	Chofer	E	3
Oficial VI	Chofer	E	3

Denominación	Serie	Escalafón	Grado
Oficial VI	Chofer	E	3
Oficial VII	Chofer	E	2
Auxiliar IV	Servicios	F	3
Auxiliar IV	Servicios	F	3
Auxiliar IV	Servicios	F	3
Oficial V	Mantenimiento edilicio	E	4
Oficial V	Mantenimiento edilicio	E	4
Auxiliar I	Seguridad Aeroportuaria	F	6
Técnico II	Controlador de Tránsito Aéreo	B	11
Técnico VI	Controlador de Tránsito Aéreo Regionales	B	7
Técnico VI	Controlador de Tránsito Aéreo Regionales	B	7
Técnico VI	Controlador de Tránsito Aéreo Regionales	B	7
Técnico VI	Controlador de Tránsito Aéreo Regionales	B	7
Técnico VI	Controlador de Tránsito Aéreo Regionales	B	7
Especialista V	Operador de emergencias	D	6
Técnico IV	Controlador de Tránsito Aéreo Regionales	B	9
Técnico IV	Controlador de Tránsito Aéreo Regionales	B	9
Auxiliar III	Servicios	F	4
Especialista I	Dibujante	D	10
Oficial III	Mantenimiento edilicio	E	6
Oficial I	Oficios	E	8
Técnico I	Doctor en Diplomacia	B	12
Especialista VIII	Telefonista	D	3
Auxiliar V	Seguridad Aeroportuaria	F	2
Técnico X	Electrónico	B	3
Técnico X	Electrónico	B	3

Denominación	Serie	Escalafón	Grado
Técnico X	Electrónico	B	3
Auxiliar II	Servicio	F	5
Oficial I	Mantenimiento edilicio	E	8
Oficial I	Mantenimiento edilicio	E	8
Técnico V	Controlador de Tránsito Aéreo	B	8
Técnico V	Controlador de Tránsito Aéreo	B	8
Técnico V	Controlador de Tránsito Aéreo	B	8
Técnico V	Controlador de Tránsito Aéreo	B	8
Oficial VI	Oficios	E	3
Técnico X	Electrónica	B	3
Técnico X	Electrónica	B	3
Técnico X	Electrónica	B	3
Oficial VIII	Chofer	E	1
Oficial V	Chofer	E	4
Oficial II	Chofer	E	7
Auxiliar V	Rampa	F	2

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 119.- Créase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", una compensación especial para los Controladores de Tránsito Aéreo pertenecientes a la División de Tránsito Aéreo de la Dirección de Circulación Aérea, por concepto de equiparación salarial de grado, por un monto anual de $ 1.597.795 (un millón quinientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.

A efectos de financiar la compensación creada en el inciso anterior, reasígnase en el Inciso, programa y unidad ejecutora antes referidos,

Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 1.597.795 (un millón quinientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones especificas", al objeto del gasto 042.583 "Comp. Controladores Tránsito Aéreo equiparación salarial".

Dicha compensación estará sujeta a montepío y se ajustará anualmente de acuerdo al índice que determine el Poder Ejecutivo para los incrementos salariales de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 120.- Créase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", Financiación 1.1 "Rentas Generales", grupo 0 "Servicios Personales" una compensación especial para los Controladores de Tránsito Aéreo pertenecientes a la División de Tránsito Aéreo de la Dirección de Circulación Aérea, que cumplan efectivamente funciones de Instructor de Entrenamiento en el Trabajo con competencia para la Habilitación de Controladores de Tránsito Aéreo, en el objeto del gasto 042.582 "Comp. Controladores Aéreo c/función Instructor entrenamiento", por un monto anual en el ejercicio 2023 de $ 578.850 (quinientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales y un monto anual a partir del ejercicio 2024 de $ 2.315.401 (dos millones trescientos quince mil cuatrocientos un pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.

Reasígnase, con destino a financiar lo dispuesto en el inciso anterior, en el Inciso, programa y unidad ejecutora y financiación antes mencionados, los créditos presupuestales de acuerdo al siguiente detalle:

Objeto del gasto	2023	2024
042.520	578.850	2.315.401
059.000	48.238	192.950
081.000	122.282	489.128
082.000	6.271	25.084
087.000	28.943	115.770
095.008	144.921	579.681

La compensación autorizada en el presente artículo se fija en un valor hora de $ 714,63 (setecientos catorce pesos uruguayos con sesenta y tres centésimos), estará sujeta a montepío, se ajustará anualmente de acuerdo al

índice que determine el Poder Ejecutivo para los incrementos salariales de los funcionarios públicos, no será tenida en cuenta para el cálculo del valor hora ni para el cálculo de retribuciones que se liquiden en base a porcentajes y será abonada por hora efectiva de instrucción.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo.

Artículo 121.- Créanse en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", veinte cargos efectivos de Aerotécnico Tercero/Soldado de Primera, Serie Comando, escalafón K "Personal Militar", grado 15.

La creación de cargos referida en el inciso anterior se financiará con la supresión de las vacantes de los programas 343 "Formación y Capacitación" y 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", según el siguiente detalle:

Escalafón	Grado	Denominación	Serie
F	1	Auxiliar VI	Servicios
E	1	Oficial VIII	Chofer
E	1	Oficial VIII	Chofer
E	2	Oficial VII	Chofer
E	3	Oficial VI	Chofer
E	3	Oficial VI	Chofer
D	3	Especialista VIII	Telefonista
D	3	Especialista VIII	Telefonista
F	4	Auxiliar III	Seguridad Aeroportuaria
F	4	Auxiliar III	Rampa
F	4	Auxiliar III	Rampa
F	5	Auxiliar II	Servicios

Escalafón	Grado	Denominación	Serie
F	4	Auxiliar III	Servicios
F	3	Auxiliar IV	Servicios

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 122.- A los efectos de obtener las exoneraciones de tributos aplicables en ocasión de la importación al amparo de la Ley Nº 9.977, de 5 de diciembre de 1940, modificativas y concordantes, ante la Dirección General Impositiva o Dirección Nacional de Aduanas, las personas físicas o jurídicas deberán presentar únicamente y en todos los casos un certificado expedido por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica que establezca que el bien o bienes, repuestos y en general todo elemento a adquirir al amparo de la norma legal citada se trata de material destinado a la actividad aeronáutica y que no se produce o no hay producción nacional suficiente a precios razonables y de probada eficiencia en la República Oriental del Uruguay al momento de presentarse la respectiva solicitud.

Artículo 123.- Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional a propuesta de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, en aquellas situaciones en las que se deba cubrir necesidades del servicio y que sean de evidente utilidad técnica, pueda homologar a un grado militar a los funcionarios civiles que ocupen cargos profesionales de médicos, odontólogos, químicos, nurses y técnicos de la salud en atención directa al paciente, de la unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 440 "Atención Integral de la Salud".

1) Para otorgar las homologaciones, el Ministerio de Defensa Nacional tendrá en cuenta las siguientes condiciones:

   A) El grado de la homologación deberá guardar relación con la función y la responsabilidad del funcionario o cargo que se proveerá.

   B) Se otorgará acorde a las diferentes jerarquías militares previstas por los artículos 39 y 45 de la Ley Nº 19.775, de 26 de julio de 2019, tomando en cuenta la jerarquía máxima

existente en los subescalafones correspondientes a su función.

2) Los funcionarios civiles homologados a un grado militar no tendrán estado militar.

3) El personal civil homologado a un grado militar efectuará los aportes correspondientes al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y al Fondo Especial de Tutela Social de las Fuerzas Armadas.

La financiación del régimen de las homologaciones se hará con cargo al crédito del grupo 0 "Servicios Personales", de la unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", por lo cual previa a la designación deberá contar con informe favorable de la Contaduría General de la Nación en cuanto al financiamiento.

Exceptúase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", de lo previsto por el artículo 97 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, para todas las contrataciones de cargos profesionales de médicos, odontólogos, químicos, nurses y técnicos de la salud.

Lo dispuesto en este artículo tendrá vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición.

Artículo 124.- Reasígnase, en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", unidad ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica", programas 343 "Formación y Capacitación" y 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", en el objeto del gasto 578.099 "Gastos de promoción y bienestar social", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 24.862.868 (veinticuatro millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos uruguayos) con destino al pago de las compensaciones mensuales por alimentación y locomoción que percibe el personal que cumple funciones en la mencionada unidad ejecutora, desde los siguientes objetos del gasto del programa 367 "Política e Infraestructura Aeronáutica", Financiación 1.1 "Rentas Generales", según el siguiente detalle:

Objeto del gasto	Monto en $
095.008	17.072.868

Objeto del gasto	Monto en $
042.014	5.000.000
059.000	416.667
081.000	1.056.250
082.000	54.167
083.000	1.012.917
087.000	250.000

Facúltase al Ministerio de Defensa Nacional a redistribuir la partida asignada entre los programas que correspondan.

Artículo 125.- Créase un proyecto de funcionamiento "Gastos DIE" en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 003 "Estado Mayor de la Defensa", fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" y asígnase al mismo un crédito presupuestal de $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos uruguayos).

Lo dispuesto en el inciso anterior se financiará con la disminución del crédito presupuestal del objeto del gasto 199 "Otros bienes de consumo" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 003 "Estado Mayor de la Defensa", fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales".

Artículo 126.- Increméntase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 343 "Formación y Capacitación", unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 051.000 "Dietas", en $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, con destino al pago de las retribuciones por dietas docentes a los profesores civiles de la Escuela Naval.

El presente artículo se financiará, de acuerdo al siguiente detalle:

A) Con la supresión de hasta nueve vacantes civiles del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada".

B) El saldo remanente, con reasignaciones de partidas del grupo 0 "Servicios Personales" de la Financiación 1.1 "Rentas Generales" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", de la unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada" dentro de los cuales se podrán considerar los objetos del gasto 095.005 "Fondo para financiar funciones transitorias y de conducción", 095.002 "Fondos para contratos temporales derecho público y provisoriatos" y 095.008 "Fondos para contrato función pública".

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación los créditos presupuestales que se reasignan y las vacantes a suprimir, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 127.- Increméntase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", Financiación 1.1. "Rentas Generales", la partida establecida en el artículo 103 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, en $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales.

La partida autorizada en este artículo percibirá los incrementos salariales y ajustes que se determinen para los funcionarios públicos de la Administración Central y no serán utilizadas para el cálculo de ninguna otra retribución que se fije en base a porcentajes.

Artículo 128.- Increméntase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas", objeto del gasto 283.000 "Servicios médicos, sanitarios y sociales", Financiación 1.1. "Rentas Generales", la partida establecida en el artículo 91 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, en $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos).

Artículo 129.- Asígnase en el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", programa 300 "Defensa Nacional", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría de Estado", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 423.000.000 (cuatrocientos veintitrés millones de pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, para otorgar incrementos

salariales desde la jerarquía de Soldado de Primera hasta la jerarquía de Teniente Coronel, combatiente y no combatiente, del escalafón K "Personal Militar", y para los civiles equiparados a un grado militar, en los grados y sus equivalentes, de acuerdo al siguiente detalle:

GRADO	DENOMINACIÓN	AUMENTO $
4	TTE. CNEL. - CAP. DE FRAGATA	1.000
5	MAYOR - CAP. DE CORBETA	1.000
6	CAPITAN - TTE. NAVÍO	1.000
7	TTE. 1º - ALF. DE NAVÍO	1.000
8	TTE. 2º - ALF. DE FRAGATA	1.000
9	ALF.- GUARDIA MARINA	1.000
10	S.O.M. - S.O.C. SUP. AT.	1.000
11	SGTO. 1º - S.O. 1ª INST. AT.	1.000
12	SGTO. S.O. 2ª AT. PPAL.	1.000
13	CBO. 1ª AT. 1ª	1.000
14	CBO. 2ª AT. 2ª	1.000
15	SDO. 1ª MRO. 1ª - AT. 3ª	1.000

Las partidas autorizadas en este artículo percibirán los incrementos salariales y ajustes que se determinen para los funcionarios públicos de la Administración Central y no serán utilizadas para el cálculo de ninguna otra retribución que se fije en base a porcentajes.

El presente artículo se financiará parcialmente con un monto de $ 224.000.000 (doscientos veinticuatro millones de pesos uruguayos), de acuerdo al siguiente detalle:

A) Con la supresión de hasta ciento veinte vacantes civiles del Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, excepto la unidad ejecutora 033 “Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas”.

B) Con la supresión de ochenta y dos contratos permanentes civiles (naturaleza 1800) de la unidad ejecutora 018 “Comando General de la Armada”.

C) Con reasignaciones de partidas del grupo 0 “Servicios Personales”, Financiación 1.1 "Rentas Generales", del Inciso 03 “Ministerio de

Defensa Nacional", dentro de los cuales se podrán considerar los objetos del gasto 095.005 "Fondo para financiar funciones transitorias y de conducción", 095.002 "Fondos para contratos temporales derecho público y provisoriatos" y 095.008 "Fondos para contrato función pública".

Facúltase al Ministerio de Defensa Nacional a redistribuir la partida asignada entre sus unidades ejecutoras, programas y objetos del gasto que correspondan.

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación los créditos presupuestales que se reasignan y las vacantes a suprimir, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos precedentes, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.

INCISO 04

MINISTERIO DEL INTERIOR

Artículo 130.- Facúltase a la Policía Nacional a requerir a organismos públicos e instituciones privadas la entrega del respaldo de filmaciones de cámaras de seguridad que tengan en sus instalaciones, cuando las filmaciones contribuyan al esclarecimiento de delitos, faltas o hechos con apariencia delictiva.

La entrega del registro fílmico, deberá realizarse a la autoridad requirente en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de efectuada la solicitud.

Artículo 131.- Agréganse al artículo 107 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, los siguientes incisos:

"Además, tendrá a su cargo las tareas relacionadas a la detección, investigación, persecución y represión de las conductas y acciones antijurídicas relacionadas a delitos de explotación sexual infantil en línea.

También, realizará la investigación de los delitos informáticos o ciberdelitos, ejecutando las actividades y tareas concernientes a la prevención, detección, investigación, persecución y represión de los delitos computacionales, cibernéticos, electrónicos o vinculados a las tecnologías de la información, considerando los tipos penales previstos

en el Código Penal, leyes especiales y normativas vigentes en la materia".

Artículo 132.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 70 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"Quedan incluidas dentro de lo previsto en el literal D) anterior las retenciones solicitadas por el Ministerio de Defensa Nacional, derivadas de los préstamos con destino a vivienda otorgados al personal del Inciso en actividad, retirados, pasivos y pensionistas. También quedarán comprendidos en el literal D) los créditos otorgados a funcionarios del Inciso 04 "Ministerio del Interior", del escalafón L "Policial", por el Fondo de Tutela Social Policial o por cualquier forma de financiamiento cuyo destino sea la compra de vivienda. Cuando se trate de retenciones por concepto del servicio de garantía de alquileres provisto por el referido fondo o de las retenciones por el uso y goce de viviendas de propiedad de la unidad ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", con destino a casa-habitación de sus funcionarios, las mismas quedarán incluidas dentro de lo previsto en el literal A) anterior. Cuando se trate de retenciones por concepto de préstamos de carácter social provistos por el Fondo de Tutela Social Policial, las mismas quedarán incluidas dentro de lo previsto en el literal C)".

Artículo 133.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 9º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"En los Ministerios de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Salud Pública, de Desarrollo Social e Interior, los Directores Generales de Secretaría podrán contar con dos adscriptos".

Artículo 134.- Transfórmanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en los programas que se indican, unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", en el escalafón L "Personal Policial", los siguientes cargos:

Cantidad	Programa	Denominación	Subescalafón	Grado
2	460	Comisario Mayor	Policía Especializado-Educador Social	9

1	401	Comisario Mayor	Policía Especializado-Asistente Social	9
1	460	Comisario Mayor	Policía Técnico - Contador	9
3	460	Comisario	Policía Especializado-Educador Social	8
1	460	Comisario	Policía Especializado-Administrador de Sistemas	8

En:

Cantidad	Programa	Denominación	Subescalafón	Grado
2	460	Comisario Mayor	Policía Especializado	9
1	401	Comisario Mayor	Policía Especializado	9
1	460	Comisario Mayor	Policía Técnico Profesional	9
4	460	Comisario	Policía Especializado	8

Artículo 135.- Reasígnase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el objeto del gasto 095.005 "Fondo p/ financiar funciones transitorias y de conducción", una partida de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, al objeto del gasto 042.570 "Compensación especial transitoria, personal desempeñe efectivamente tareas en MI", más aguinaldo y cargas legales, creada por el artículo 182 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

Artículo 136.- Facúltase al Poder Ejecutivo a designar en el Ministerio del Interior a funcionarios del escalafón L "Personal Policial", en calidad de Encargados, en el desempeño de las funciones inherentes a los siguientes cargos: Director de la Policía Nacional, Subdirector Ejecutivo de la Policía Nacional, Subdirector de la Policía Nacional, Jefe de Policía de Montevideo, Jefes de Policía del Interior, Director de la Escuela Nacional de Policía, Director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Director Nacional de Sanidad Policial, Director Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Director Nacional de Identificación Civil, Director Nacional de Migración, Director Nacional de la Seguridad Rural.

Créase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 11.080.272 (once millones ochenta mil doscientos setenta y dos pesos uruguayos) en el objeto del

gasto 042.581 "Compensación especial Encargados Esc. Q-MI", más aguinaldo y cargas legales, con destino a abonar una compensación especial al personal del escalafón L "Personal Policial", que se desempeñen como Encargados de las funciones mencionadas en el inciso anterior, encontrándose vacante el correspondiente cargo Q "Particular Confianza". Una vez que dicho cargo sea ocupado, cesará la Encargatura y la compensación especial si la hubiera.

La referida compensación especial solo se podrá abonar a diez Encargados a la vez, como máximo. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Interior, determinará la cuantía de la compensación, que no podrá exceder el 45% (cuarenta y cinco por ciento) de la remuneración nominal del cargo Q de "Particular Confianza" respectivo.

Artículo 137.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", los siguientes cargos:

Cantidad	Denominación	Serie	Escalafón	Grado
3	Asesor	Profesional	A	16
3	Asesor I	Profesional	A	15
3	Asesor II	Profesional	A	14
9	Asesor III	Profesional	A	13
13	Asesor IV	Profesional	A	12
1	Técnico	Técnico	B	14
1	Técnico I	Técnico	B	13
1	Técnico II	Técnico	B	12
2	Técnico III	Técnico	B	11
2	Administrativo II	Administrativo	C	8
6	Administrativo III	Administrativo	C	7

Suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en los programas y unidades ejecutoras que se indican, los siguientes cargos técnicos del escalafón L "Personal Policial" y de los escalafones civiles A, B y C:

Unidad Ejecutora	Programa	Cantidad	Denominación	Serie	Escalafón	Grado
001	460	1	Abogado	Personal Técnico	A	8

Unidad Ejecutora	Programa	Cantidad	Denominación	Serie	Escalafón	Grado
				Profesional		
001	460	5	Contador Público	Personal Técnico Profesional	A	8
001	460	1	Profesional	Procurador	B	8
001	460	4	Administrativo	Administrativo	C	5
001	460	4	Comisario	Policía Técnico Abogado	L	8
026	461	1	Comisario	P.T. Médico Psiquiatra	L	8
001	460	6	Subcomisario	Policía Técnico Abogado	L	7
001	460	6	Oficial Principal	Policía Técnico Abogado	L	6
024	463	1	Oficial Principal	Profesiones Varias	L	6
026	461	1	Oficial Principal	Policía Técnico Jefe de Servicios de Oftalmología	L	6
018	460	1	Oficial Ayudante	Policía Técnico Abogado	L	5
033	460	1	Oficial Ayudante	Policía Técnico Profesional	L	5
026	461	3	Oficial Ayudante	Policía Técnico Profesional	L	5
001	460	2	Oficial Ayudante	Policía Técnico Arquitecto	L	5
001	460	1	Oficial Ayudante	Policía Técnico Escribano	L	5
001	460	4	Oficial Ayudante	Policía Técnico Asistente Social	L	5

A los efectos de financiar la creación de cargos prevista, reasígnase desde el programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 199.000 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores", la suma de $ 2.992.752 (dos millones novecientos noventa y dos mil

setecientos cincuenta y dos pesos uruguayos) para el ejercicio 2023 y la suma de $ 11.971.009 (once millones novecientos setenta y un mil nueve pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 138.- Facúltase al Inciso 04 "Ministerio del Interior", a transformar en el programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", un cargo de Cabo (PA) Escalafón L "Personal Policial", en el cargo que a continuación se detalla:

Unidad	Cantidad	Programa	Grado	Denominación	Subescalafón	Vínculo
001	1	460	02	Cabo	(PA)	1001

En:

Unidad	Cantidad	Programa	Grado	Denominación	Subescalafón	Vínculo
001	1	460	05	Oficial Ayudante	Policía Técnico Profesional (Archivóloga)	1001

La erogación resultante de la transformación se financiará con cargo a los créditos presupuestales del programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 095.005 "Fondo p/ financiar funciones transitorias y de conducción".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 139.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 19.315, de 18 de febrero de 2015, en la redacción dada por el artículo 58 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 24. (Unidades dependientes de la Dirección de la Policía Nacional).- De la Dirección de la Policía Nacional dependerán las siguientes unidades policiales:

A) Jefaturas de Policía Departamentales.

B) Dirección Nacional de la Guardia Republicana.

C) Dirección Nacional de Bomberos.

D) Dirección Nacional de la Educación Policial.

E) Dirección Nacional de Policía Científica.

F) Dirección Nacional de Policía Caminera.

G) Dirección Nacional de la Seguridad Rural.

H) Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.

I) Dirección General del Centro Comando Unificado.

J) Dirección General de Fiscalización de Empresas cuyo objeto sea la seguridad privada.

K) Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 140.- Increméntase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y Represión del Delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", la partida prevista en el artículo 89 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, en la redacción dada por el artículo 184 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en $ 513.706 (quinientos trece mil setecientos seis pesos uruguayos) anuales, incluido aguinaldo y cargas legales.

La erogación resultante se financiará con cargo a los créditos presupuestales del grupo 0 "Retribuciones Personales", objeto del gasto 092.000 "Partidas Globales a Distribuir", de la misma unidad ejecutora.

Artículo 141.- Reasígnase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) desde el objeto del gasto 092.000 "Partidas Globales a Distribuir", incluido aguinaldo y cargas legales, al objeto del gasto 052.001 "Por trabajo en horas nocturnas", más aguinaldo y

cargas legales, con destino a la remuneración del personal civil que realiza tareas en horas nocturnas.

Artículo 142.- Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 57 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, por el siguiente:

"El Ministerio del Interior retendrá el 85% (ochenta y cinco por ciento) del producido de la venta destinándose a inversiones; el 15% (quince por ciento) restante se volcará a Rentas Generales".

Artículo 143.- Agréganse los siguientes cargos al artículo 148 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 124 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, en los literales que a continuación se detallan:

B) Director o Encargado de la Dirección de Apoyo Tecnológico.

C) Encargado de la Dirección Nacional de Políticas de Género.

D) Director o Encargado de la División Sistemas de Información.

F) Subdirector o Encargado de la Subdirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género.

G) Subdirector o Encargado de la Unidad de Cibercrimen, Segundos Jefes de las Zonas Operacionales de la Jefatura de Policía de Montevideo, Director General o Encargado de Análisis y Violencia en el Deporte, Ayudantes del Comando de la Dirección de la Policía Nacional, Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de la Policía Nacional, Jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, Director o Encargado de Criminalística de la Dirección Nacional de Policía Científica, Director o Encargado de Identificación Criminal de la Dirección Nacional de Policía Científica, Jefes o Encargados de Regiones (I, II y III) del Comando de Bomberos del Área Metropolitana de la Dirección Nacional de Bomberos.

Suprímense los siguientes cargos en la norma referida en el inciso anterior, en los literales que a continuación se detallan:

D) Encargado de Dirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género.

G) Encargado de la Subdirección de la Dirección Nacional de Políticas de Género.

A efectos de financiar lo dispuesto en los incisos precedentes, reasígnase en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", una partida de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción" y una partida de $ 2.234.498 (dos millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos uruguayos), desde el objeto del gasto 092.000 "Partidas globales a distribuir", incluidos aguinaldo y cargas legales en ambas partidas, al objeto del gasto 042.550 "Compensación especial personal Superior", más aguinaldo y cargas legales.

Artículo 144.- Transfórmanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", en los programas y unidades ejecutoras que a continuación se detallan, los siguientes cargos del escalafón L "Personal Policial":

Programa	Unidad ejecutora	Cantidad	Denominación	Subescalafón	Grado
460	001	1	Oficial Ayudante	Ejecutivo	5
423	002	3	Suboficial Mayor	Especializado	4
423	002	2	Sargento	Especializado	3
461	026	1	Suboficial Mayor	Servicio	4
440	030	1	Cabo (CP)	Servicios Generales	2

En:

Programa	Unidad ejecutora	Cantidad	Denominación	Subescalafón	Grado
460	001	1	Subcomisario	Administrativo	7
423	002	3	Suboficial Mayor	Administrativo	4
423	002	2	Sargento	Administrativo	3
461	026	1	Suboficial Mayor	Administrativo	4
440	030	1	Cabo	Administrativo	2

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 145.- Facúltase al Ministro del Interior a que, mediante resolución fundada, otorgue al personal que presta servicios en la unidad ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", el uso y goce de las viviendas que son propiedad de la referida unidad ejecutora con destino a casa-habitación.

Dispónese en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", que los ingresos provenientes de la actividad referida en el inciso anterior constituyen "Fondos de Terceros Declarados por Ley", cuyo destino será el mantenimiento, construcción, ampliación, reforma, reparación y otras tareas análogas para conservar los bienes inmuebles propiedad de la citada jefatura.

Facúltase a la Jefatura de Policía de Montevideo a retener de la retribución salarial, en forma mensual, el importe fijado por esta, por concepto de uso y goce de la vivienda policial adjudicada.

Artículo 146.- Agrégase al artículo 131 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el siguiente inciso:

> "Ante situaciones excepcionales declaradas por el Sistema Nacional de Emergencias autorízase a incrementar la contratación de hasta cien ciudadanos adicionales a los indicados en el inciso anterior y por hasta el plazo de duración de la emergencia declarada que requiera la intervención de la Dirección Nacional de Bomberos. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales a tales efectos".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 147.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 024 "Dirección Nacional de Bomberos", cuatro cargos de Bombero, escalafón L "Personal Policial", subescalafón Administrativo, grado 1.

Suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 024 "Dirección Nacional de Bomberos", los siguientes cargos:

Cantidad	Denominación	Serie	Escalafón	Subescalafón	Grado

2	Oficial Principal	Policía Técnico-Profesional-Profesiones varias	L "Personal Policial"	Técnico-Profesional	6
1	Cabo	Policía Especializado	L "Personal Policial"	Especializado	2

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 148.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 15.896, de 15 de setiembre de 1987, con la modificación introducida por el artículo 36 de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos de policía de fuego, estableciendo las medidas y dispositivos de prevención de carácter permanente o circunstancial y los casos de su aplicación, así como las multas que correspondan por la contravención a sus disposiciones, las que se graduarán de acuerdo a su gravedad, entre un mínimo equivalente a 10 UR (diez unidades reajustables) y un máximo equivalente a 200 UR (doscientas unidades reajustables).

Los responsables técnicos habilitados para la presentación de proyectos en materia de protección y prevención contra incendios, podrán ser sancionados por las infracciones que cometan a la normativa vigente, de acuerdo al siguiente régimen:

- Primera observación: amonestación escrita.
- Segunda observación: suspensión por el plazo de noventa días corridos para actuar ante la Dirección Nacional de Bomberos.
- Tercera observación: suspensión por el plazo de ciento cincuenta días corridos para actuar ante la Dirección Nacional de Bomberos.
- Cuarta observación: suspensión por el plazo de doscientos cincuenta días corridos para actuar ante la Dirección Nacional de Bomberos.
- Quinta observación: suspensión por el plazo de hasta diez años como Técnico Registrado ante la Dirección Nacional de Bomberos, previa evaluación del Comité Técnico de Seguimiento.

Sin perjuicio del régimen progresivo establecido en este artículo, de existir razones fundadas, se podrán aplicar sanciones en función de la gravedad de la infracción sin respetar estrictamente la graduación establecida.

Las sanciones se aplicarán, en todos los procedimientos, previa vista al Técnico responsable. Las mismas se deberán anotar en el Registro de Técnicos que lleva la Dirección Nacional de Bomberos.

Las sanciones de suspensión producirán efectos desde el día siguiente a la notificación. El Técnico que es suspendido, no podrá presentar ningún trámite ante la Dirección Nacional de Bomberos, por el término de la suspensión y deberá retirar su patrocinio en todas las gestiones que tenga ante la Dirección Nacional de Bomberos en un plazo de veinte días. De no sustituirse al Técnico para la prosecución del trámite, este quedará paralizado".

Artículo 149.- Créanse en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 460 "Prevención y represión del delito", en las unidades ejecutoras que se indican, los cargos en el escalafón L "Personal Policial" que se detallan a continuación:

Unidad ejecutora	Cantidad	Denominación	Subescalafón	Grado
004	10	Sargento	Ejecutivo	3
006	3	Sargento	Ejecutivo	3
006	1	Cabo	Ejecutivo	2
033	10	Sargento	Ejecutivo	3

A efectos de financiar parcialmente los cargos creados por el inciso precedente, suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 343 "Formación y capacitación", unidad ejecutora 029 "Dirección Nacional de Educación Policial", veinticinco cargos de Cabo, escalafón L "Personal Policial", subescalafón "Ejecutivo", grado 2.

Artículo 150.- Agrégase al artículo 31 de la Ley Nº 19.315, de 18 de febrero de 2015, el siguiente inciso:

"Dependerá directamente del Ministro del Interior, debiendo coordinar su accionar operativo con la Dirección de la Policía Nacional".

Artículo 151.- Sustitúyese en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", la denominación de la "Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida" por "Dirección Nacional de Medidas Alternativas" y la denominación del cargo de "Director Nacional de Supervisión de Libertad Asistida" por el de "Director Nacional de Medidas Alternativas", ambos creados por el artículo 136 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022.

Artículo 152.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 93 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"Los saldos indisponibles deberán ser depositados por la autoridad administrativa en unidades indexadas, en la banca pública".

La presente disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 153.- Agrégase al artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.470, de 2 de diciembre de 1975, el siguiente inciso:

"Conforme a lo señalado en el inciso precedente, corresponderá exclusivamente al Instituto Nacional de Rehabilitación:

1) Ordenar, determinar y disponer la unidad de internación, alojamiento y reclusión de las personas privadas de libertad.

2) Ordenar el traslado, derivación, realojo o reintegro de las personas privadas de libertad, dentro de las diferentes unidades del referido instituto".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 154.- Agrégase al artículo 32 de la Ley Nº 19.315, de 18 de febrero de 2015, el siguiente inciso:

"Dependerá directamente del Ministro del Interior, debiendo coordinar su accionar operativo con la Dirección de la Policía Nacional".

Artículo 155.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 46.- Son causales de denegatoria de la residencia de las personas:

1) Haber sido formalizadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso cometidos en el país o fuera de él que merezcan, según las leyes del país donde se cometió la conducta delictiva, la aplicación de penas privativas de libertad mayores de los dos años.

2) Registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos.

En caso de que la constancia o certificado de antecedentes penales presentados por el interesado no cuente con información completa y que dicho documento no luzca la condena impuesta, se tomará como medida supletoria la pena que al delito corresponda aplicar según las leyes de la República Oriental del Uruguay.

Para que dichas personas puedan gestionar su residencia deberá haber transcurrido un término de cinco años sin haber cometido nuevo delito computado desde el cumplimiento efectivo de la condena. A tales efectos deberá descontarse, para la determinación del plazo, los días que el agente permaneciese privado de su libertad a raíz de la detención preventiva o por el cumplimiento de la pena".

Artículo 156.- Sustitúyese el literal c) del artículo 14 del Decreto-Ley Nº 14.762, de 13 de febrero de 1978, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"c) Desde los sesenta y ocho años de edad en adelante, permanente. En el caso de los residentes legales, para estar comprendidos en esta situación, deberán acreditar no haberse ausentado del país por un plazo superior a tres años en forma ininterrumpida".

Artículo 157.- Agréganse al artículo 65 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, los siguientes incisos:

"Transcurrido el plazo de diez años desde el depósito de la caución, manteniéndose desconocido el paradero del tripulante desertor, la Dirección Nacional de Migración devolverá dicha caución a la empresa o agencia a instancia de esta. La devolución de la caución no exonera de responsabilidad a la empresa o agencia, la que continuará obligada a hacer efectiva la medida de reconducción al país de procedencia del buque o de nacionalidad en caso de que el desertor sea ubicado.

Transcurrido el plazo antes indicado, de constatarse en forma fehaciente que la empresa o agencia se encuentre disuelta, sin actividad o no sea posible ubicar a sus representantes, la Dirección Nacional de Migración podrá disponer de dichos valores, los que constituirán Financiación 1.2 'Recursos con Afectación Especial', con destino a gastos de funcionamiento de la misma. En tal caso, la referida unidad ejecutora será responsable de la reconducción del tripulante al destino que corresponda si se toma conocimiento de su paradero dentro del territorio nacional".

Artículo 158.- Sustitúyese el literal C) del artículo 45 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:

"C) Haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y que la medida no haya sido revocada.

Sin perjuicio de lo indicado, cuando se trate de una expulsión administrativa que no comprenda las conductas mencionadas en los literales B) y D) de este artículo, podrá el extranjero expulsado ingresar nuevamente a Uruguay transcurridos tres años posteriores a la medida de expulsión".

Artículo 159.- Sustitúyese el artículo 52 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 52.- La Dirección Nacional de Migración, en los casos previstos en los literales A), B) y C) del artículo 51 de la presente ley, atendiendo a las circunstancias del caso -parentesco con nacional, condiciones personales y sociales del migrante- deberá intimarlo previamente a regularizar su situación en el país en un plazo perentorio de sesenta días corridos bajo apercibimiento de resolverse su expulsión".

Artículo 160.- Dispónese que la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior tiene atribuciones para solicitar al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales del Instituto Técnico Forense los antecedentes judiciales del indagado o imputado, según corresponda.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 161.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 8º de la Ley Nº 19.684, de 26 de octubre de 2018, por el siguiente:

"La Dirección General del Registro de Estado Civil debe remitir testimonio de las partidas rectificadas al gobierno departamental respectivo, a la Dirección Nacional de Identificación Civil y a la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros a fin de que se efectúen las correspondientes modificaciones, inscripciones o anotaciones en los documentos pertinentes. En todos los casos, se conservarán los mismos números de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica".

Artículo 162.- Sustitúyese el artículo 155 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente:

"ARTÍCULO 155.- Incorpórase al personal médico y paramédico del Inciso 04 'Ministerio del Interior', programas 440 'Atención integral de la salud' y 461 'Gestión de la privación de libertad', al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Los funcionarios médicos y paramédicos, presupuestados y contratados, que presten funciones como tales en los programas antes referidos, a los únicos efectos de la acumulación de cargos públicos, contabilizarán la carga horaria efectiva de trabajo.

La acumulación de cargos tendrá los siguientes límites:

1) La realización de hasta un máximo de setenta y dos horas semanales de trabajo efectivo, incluyendo dentro de las mismas las horas presenciales, de guardia o retén no presencial.

2) Un máximo diario de doce horas de trabajo efectivo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

A los efectos de la aplicación de este régimen, se entiende por personal médico a los profesionales médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos con título habilitante acorde a la normativa vigente y como personal paramédico a todas aquellas funciones relativas al desempeño de profesiones y servicios técnicos vinculados en forma directa a la atención y tratamiento de la salud humana que no se encuentren comprendidos en la categoría de personal médico".

Artículo 163.- Transfórmanse, en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", escalafón L "Personal Policial", los siguientes cargos:

Denominación	Subescalafón	Grado
Oficial Ayudante (PE)(CP)	Especializado	5
Oficial Ayudante (PA)(CP)	Administrativo	5
Oficial Ayudante (PA)(CP)	Administrativo	5
Cabo (PE)(CP)	Especializado	2
Agente (PA)	Administrativo	1
Agente (PS)(CP)	Servicios	1

En:

Denominación	Subescalafón	Grado
Comisario (PE)(CP)	Especializado	8
Subcomisario (PA)(CP)	Administrativo	7
Subcomisario (PA)(CP)	Administrativo	7
Subcomisario (PE)(CP)	Especializado	7
Oficial Principal (PA)(CP)	Administrativo	6
Sargento (PS)(CP)	Servicios	3

A efectos de financiar las transformaciones, suprímense en el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial", escalafón L, un cargo de Agente (PE) (CP) Ayudante de Odontología y un cargo de Agente (PE)(CP) Ayudante de Informática.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 164.- Agrégase a la Ley Nº 19.574, de 20 de diciembre de 2017, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 52 Bis. (Decomiso ampliado).- En los casos de condena por los delitos previstos en los artículos 30 a 35 o por las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley, el tribunal penal competente ordenará siempre el decomiso de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos de los que el condenado no pueda justificar su procedencia lícita.

Asimismo, también se ordenará el decomiso de aquellos bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos que se encuentren en poder del condenado, aunque la titularidad recaiga sobre otra persona física o jurídica que le preste su nombre.

En todos aquellos casos, en que el condenado no pueda justificar el origen lícito de los bienes, productos, instrumentos, fondos, activos, recursos o demás medios económicos, se presumirá que los mismos son producto de ganancias o reutilización de actividades ilícitas.

Desde la indagatoria preliminar, el tribunal penal competente podrá a solicitud del Ministerio Público, además de las previstas en el artículo 222 del Código de Proceso Penal, disponer las medidas cautelares que correspondan para asegurar el patrimonio del imputado a efectos de efectivizar el decomiso ampliado al momento de la condena".

Artículo 165.- Sustitúyese el artículo 310 del Código Penal, aprobado por la Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.645, de 27 de julio de 2018, por el siguiente:

"ARTÍCULO 310. (Homicidio).- El que, con intención de matar, diere muerte a alguna persona será castigado con una pena de cuatro a dieciocho años de penitenciaría.

Cuando se compute la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1) del artículo 46, la pena mínima será de dos años de penitenciaría".

Artículo 166.- Agrégase al artículo 312 del Código Penal, aprobado por la Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, el siguiente numeral:

"10. Con o seguido por el vilipendio, la mutilación, el desmembramiento o la incineración del cuerpo de la víctima".

Artículo 167.- Sustitúyese el artículo 536 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:

"ARTÍCULO 536.- El Registro Nacional de Antecedentes Judiciales, dependiente del Instituto Técnico Forense, solo comunicará los datos individualizados que obren en sus registros a los tribunales y juzgados del Poder Judicial y a la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior cuando así lo soliciten formalmente para dar cumplimiento a sus respectivos cometidos. Fuera de dichas autoridades y de la persona de cuyos propios datos se trate, nadie tendrá derecho a acceder a estos ni a solicitar copia alguna".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 168.- Sustitúyese el artículo 539 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, por el siguiente:

"ARTÍCULO 539.- Asimismo, deberán comunicarse las sentencias de condena y fecha de ejecutoriada de la misma, cambios de jurisdicción, forma en que fue cumplida la pena, libertad anticipada y condicional, así como su extinción o cumplimiento, toda otra forma de terminación de la causa, como la gracia, el fallecimiento, la prescripción, amnistía o clausura dispuestas por leyes especiales, y en general toda la información que indican las planillas de antecedentes.

Lo referido en el presente artículo también deberá ser comunicado a la Dirección Nacional de Policía Científica del Ministerio del Interior".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 169.- Sustitúyese el numeral 208.4 del artículo 208 del Código del Proceso Penal, aprobado por la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 208.4.- La resolución judicial que disponga la interceptación deberá indicar el nombre del afectado por la medida y de ser posible, la línea telefónica u otro medio de comunicación a intervenir, grabar o registrar. También indicará la forma, alcance, la autoridad o funcionario que se encargará de la diligencia y la duración de la medida, cuyo plazo podrá ser extendido de seis meses hasta los dos años para el caso de

investigaciones complejas o que involucren a organizaciones criminales".

Artículo 170.- Sustitúyese el artículo 304 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:

"ARTÍCULO 304 (Aplazamiento o sustitución excepcional del cumplimiento de la pena privativa de libertad).

304.1 Si mediaren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 228 de este Código, podrá sustituirse o aplazarse el ingreso o reintegro del penado a la cárcel. Será competente para dictar resolución el juez de la causa.

En los casos en que se resuelva aplazar o sustituir la pena privativa de libertad el juez competente impondrá al condenado una o varias de las condiciones o medidas limitativas de la libertad ambulatoria previstas en los artículos 221 o 295 BIS de este Código

La sustitución, cuando se trate de delitos dolosos o ultraintencionales de acuerdo con el régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal, solo podrá ser dispuesta cuando la pena impuesta no supere los veinticuatro meses de prisión.

304.2 Si las circunstancias excepcionales a que refiere el artículo 228 de este Código se produjeren durante el proceso de ejecución, conocerá el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia. El petitorio será formulado ante el Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, por el defensor o por el propio penado y se tramitará por vía incidental.

Lo dispuesto en este artículo no procede en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad".

Artículo 171.- Para las enajenaciones establecidas en el artículo 199 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, se prescindirá de la obtención del certificado especial previsto por el artículo 664 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 172.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 82 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018, por el siguiente:

"ARTÍCULO 82.- Cualquier medida de utilización de dispositivo electrónico, podrá contar previamente con un informe técnico favorable respecto a su efectividad y viabilidad. En todos los casos, se deberá recabar el consentimiento expreso de la víctima para ser usuaria del programa de monitoreo electrónico. Será competencia del Juez competente adoptar las medidas de conexión acordes a la sana crítica y la valoración de los hechos".

Artículo 173.- Agrégase al Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 37 BIS.- Cuando el delito tentado se cometiere en las inmediaciones o en el interior de las cárceles, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5) del artículo 36, el Juez podrá aplicar las disposiciones generales previstas en el artículo 87 de la Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933 (Código Penal), atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad del hecho cometido. En caso contrario, podrá mantener el régimen previsto en el artículo anterior.

En estos casos, el Juez al momento de dictar la sentencia de condena, impondrá juntamente con la pena que corresponda, la inhabilitación por un plazo máximo de cinco años, para el ingreso a establecimientos carcelarios y de privación de libertad de adolescentes infractores".

Artículo 174.- Sustitúyese el artículo 228 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:

"ARTÍCULO 228. (Elementos de especial relevancia).

228.1. Para decidir acerca de la imposición o en su caso la sustitución o la cesación de la prisión preventiva, el juez le asignará especial relevancia a los siguientes elementos de juicio:

a) necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su internación inmediata en prisión;

b) imputadas en estado de gravidez a partir del quinto mes de embarazo o madres que estén amamantando durante el primer año de lactancia;

c) imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o salud, extremo que deberá ser acreditado por el informe pericial correspondiente;

d) imputados mayores de setenta años cuando ello no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito cometido.

228.2. El juez ordenará la internación provisional del imputado en un establecimiento asistencial adecuado cuando se acredite por informe pericial que sufre una grave alteración de sus facultades mentales que acarree grave riesgo para su vida o salud.

228.3. En los supuestos previstos en los literales b) y c), previo a decidir, el Juez deberá solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud".

Artículo 175.- Sustitúyese el artículo 305 de la Ley Nº 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente:

"ARTÍCULO 305. (Enfermedad del condenado).-

305.1 Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad el condenado sufriera alguna enfermedad psíquica o física, la dirección del establecimiento deberá comunicarlo al Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia, quien previo los peritajes necesarios, podrá disponer su internación en establecimiento adecuado. En todos los casos y previo a decidir, el Juez deberá, de oficio, solicitar siempre la historia clínica al prestador de salud.

305.2 En caso de urgencia, la administración queda facultada para disponer el traslado del recluso enfermo dando cuenta de inmediato al juez, con los justificativos de la medida adoptada.

305.3 El tiempo de privación de libertad sufrida en internación hospitalaria será computado como cumplimiento efectivo de la pena".

Artículo 176.- Exceptúase al Ministerio del Interior de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, pudiendo el titular de ese Ministerio tener hasta catorce funcionarios en comisión en total, en forma simultánea.

Artículo 177.- Sustitúyese el numeral 8) del inciso segundo del artículo 414 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley Nº 19.247, de 15 de agosto de 2014, por el siguiente:

"8) Los delitos de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados".

Artículo 178.- Sustitúyese el literal D) del artículo 4º del Título 11 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 325 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, por el siguiente:

"D) Automóviles con cilindrada superior a los dos mil centímetros cúbicos adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer, que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo. Quedan comprendidos en el presente literal los vehículos adquiridos o importados para ser arrendados sin chofer al Ministerio del Interior por las referidas empresas, destinados al patrullaje policial".

Artículo 179.- Las sanciones a aplicar al personal de la escala básica de la Policía Nacional ante una falta leve, no podrán significar en ningún caso descuento de sus haberes.

Artículo 180.- Asígnase una partida anual de $ 300.000 (trescientos mil pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 401 "Red de asistencia e integración social", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", con destino a la contratación de servicios de interpretación virtual en lengua de señas para las comisarías.

Artículo 181.- Asígnase una partida anual de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 461 "Gestión de la privación de libertad", unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento", Objeto del Gasto 299.005 "Trabajo de reclusos remunerado", para la promoción del trabajo de personas privadas de libertad.

Artículo 182.- Asígnase una partida anual de $ 32.000.000 (treinta y dos millones de pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior",

programa 460 "Prevención y represión del delito", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", objeto del gasto 234.000 "Viáticos dentro del país", para funcionarios del Inciso.

Artículo 183.- Asígnase una partida anual de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) para el Inciso 04 "Ministerio del Interior", programa 461 "Gestión de la privación de libertad", unidad ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 111.000 "Alimentos para personas", para la mejora del servicio de alimentación, con destino prioritario para la Unidad Nº 4 "Santiago Vázquez" y la Unidad Nº 7 "Canelones".

Artículo 184.- Agrégase al artículo 66 de la Ley Nº 19.315, de 18 de febrero de 2015, el siguiente inciso:

> "El ascenso al grado de Comisario General y Comandante General, deberá contar con venia de la Cámara de Senadores, o de la Comisión Permanente cuando corresponda".

INCISO 05

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Artículo 185.- Sustitúyese el literal I) del artículo 31 de la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000, en la redacción dada por el artículo 145 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, por el siguiente:

"I) Las cláusulas que establezcan plazos límite previos a la renovación automática del contrato para que el consumidor manifieste su voluntad de no renovar. El consumidor podrá, dentro de los sesenta días corridos contados desde la fecha en que se produjo la renovación automática, rescindir o resolver el contrato, incluidos los contratos que impliquen el pago de una cuota social o afiliación, independientemente de su situación, teniendo el proveedor un máximo de quince días corridos para procesar la baja".

Artículo 186.- Agrégase al artículo 42 de la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000, el siguiente literal:

"I) Dictar instrucciones particulares a los proveedores, tendientes a promover la protección al consumidor y evitar futuros conflictos de consumo. El caso de incumplimiento será sancionado conforme a lo previsto en el artículo 47 de la presente ley".

Artículo 187.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000, por el siguiente:

"ARTÍCULO 50.- Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento: comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo, se labrará acta circunstanciada en forma detallada. En caso de que la comprobación sea en la tienda física, el acta será leída a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, quien la firmará y recibirá copia textual de la misma.

Tanto para las comprobaciones en tiendas físicas como en plataformas electrónicas, el infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la prueba en su caso, se dictará resolución".

Artículo 188.- Sustitúyese el artículo 228 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, por el siguiente:

"ARTÍCULO 228.- Derógase el artículo 677 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, y restablécese la prohibición a toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de carácter civil, comercial o industrial, de otorgar premios en efectivo o en especie a los consumidores de sus productos, cualquiera que sea el procedimiento empleado para ello.

Las infracciones a las prohibiciones serán sancionadas con multas de entre 10 UR (diez unidades reajustables) y 1.000 UR (mil unidades reajustables), las que se graduarán teniendo en cuenta los antecedentes registrados, la posición en el mercado del infractor y la gravedad del incumplimiento.

El producido de lo recaudado por las multas se destinará a Rentas Generales".

Artículo 189.- Sustitúyese el inciso final del artículo 162 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 131 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"El Poder Ejecutivo reglamentará las facultades de la Unidad Defensa del Consumidor en el cumplimiento de ese cometido".

Artículo 190.- Facúltase a la Unidad Defensa del Consumidor del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", a solicitar los resultados de las evaluaciones de conformidad, análisis y ensayos a productos de fabricación nacional o importados a la Dirección Nacional de Industrias del Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", para la publicación en su sitio web institucional, como así también difundirlo a los miembros de la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos, en la plataforma del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas de la misma organización y a los Estados Partes y Asociados del Mercosur.

Artículo 191.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 18.159, de 20 de julio de 2007, por el siguiente:

"ARTÍCULO 29.- En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, serán de aplicación las disposiciones del Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991, modificativas y concordantes".

Artículo 192.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 18.159, de 20 de julio de 2007, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 19.833, de 20 de setiembre de 2019, por el siguiente:

"ARTÍCULO 7º. (Solicitud de autorización de concentraciones).- Todo acto de concentración económica quedará condicionado a la autorización del órgano de aplicación cuando, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, se configuren acumulativamente los siguientes extremos:

1) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, sea igual o superior a 500.000.000 UI (quinientos millones de unidades indexadas).

2) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo de dos o más participantes en la operación, considerados individualmente, sea igual o superior a 30.000.000 UI (treinta millones de unidades indexadas).

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, cuando la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a 500.000.000 UI (quinientos millones de unidades indexadas) pero no se alcancen los umbrales individuales previstos en el numeral 2) en dicho ejercicio, los participantes del acto de concentración económica deberán informarlo al órgano de aplicación, quien podrá determinar, por resolución fundada dentro de los quince días hábiles siguientes a recibir la información, que el mismo quede sujeto a la solicitud de autorización prevista en la presente disposición.

Las solicitudes de autorización de concentraciones económicas deberán presentarse en forma previa al perfeccionamiento del acto o de la toma de control, lo que acaeciere primero.

A los efectos de la presente ley, se considerará concentración económica todo hecho, acto o convención que genere una transferencia o un cambio en el control de la totalidad o parte de uno o más participantes o unidades económicas, así como la creación o adquisición del control conjunto sobre una o varias entidades. A título enunciativo, comprende los llevados a cabo a través de: fusión de sociedades, adquisición de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisición total o parcial de activos empresariales. El término control se entenderá como la posibilidad de influir continua y decisivamente, de manera directa o indirecta, sobre la estrategia y el comportamiento competitivo de una o varias entidades.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición a propuesta del órgano de aplicación, debiendo determinar los criterios para la cuantificación de los umbrales indicados en el inciso primero, así como los requisitos y condiciones que deberán cumplirse para informar o solicitar la autorización de concentración ante el órgano de aplicación".

Artículo 193.- Establécese que los cargos de la unidad ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" que se detallan a continuación, modificarán al vacar su denominación, según el siguiente detalle:

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación Actual	Serie	Denominación al vacar
1	A	16	Director	Contador	Asesor
1	A	16	Director	Contador	Asesor

El presente artículo entrará en vigencia a la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 194.- Créase en la unidad ejecutora 002 "Contaduría General de la Nación" del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas" como "Incentivo", de acuerdo a lo que dispone el artículo 51 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, una compensación por compromisos de gestión.

El mismo se abonará al personal que desempeñe efectivamente tareas en la unidad ejecutora, condicionado al cumplimiento de metas anuales de desempeño, con las limitaciones que se establezcan en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. No podrán percibirlo quienes se encuentren prestando funciones en comisión en otros organismos.

Lo dispuesto en el inciso primero se financiará con cargo a créditos presupuestales del grupo 0 "Servicios Personales" de la citada unidad ejecutora, pudiendo a tales efectos reasignar créditos de los objetos del gasto 092.004 "Partida global para reformulación de estructuras", 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción", 095.008 "Fondo para Contrato función pública" y 099.000 "Otras retribuciones".

Artículo 195.- Sustitúyese el numeral 4) del artículo 48 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 238 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"4) Promover un sistema de información de auditoría interna gubernamental. A tales efectos, las unidades de auditoría interna o quienes ejerzan dicha función en los órganos de la Administración Central, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, cualquiera sea su grado de autonomía o descentralización, como así también las personas públicas no estatales, presentarán a la Auditoría Interna de la Nación:

A) Toda la información relativa a gobierno corporativo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio.

B) La información relativa a control interno dentro del segundo semestre del año civil.

C) Lo relativo a las actuaciones realizadas por dichas unidades dentro de los diez días hábiles inmediatos a la culminación de los procesos.

D) Toda la información relacionada al funcionamiento de las unidades de auditoría interna para el año civil corriente dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio.

La Auditoría Interna de la Nación queda facultada para determinar el alcance, el contenido, los requisitos a cumplir y las sanciones que puedan corresponder.

Los jerarcas de los respectivos organismos son directa y personalmente responsables por la omisión o el incumplimiento de la obligación de informar, así como por el contenido de la información presentada.

Para el caso de los entes autónomos y los servicios descentralizados, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el presente numeral, deberán comunicar la información, dentro de los plazos establecidos precedentemente, conjuntamente al Poder Ejecutivo, a través de los respectivos ministerios, y a la Auditoría Interna de la Nación. Dicha información se tendrá por aprobada fictamente si en el plazo máximo de veinte días hábiles no se formulara observaciones por parte del Poder Ejecutivo".

Artículo 196.- Sustitúyese el numeral 7) del artículo 212 de la Ley Nº 18.407, de 24 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.181, de 29 de diciembre de 2013, por el siguiente:

"7) Solicitar al juez competente:

A) La suspensión de las resoluciones de los órganos sociales contrarias a la normativa vigente al estatuto o al reglamento de la cooperativa.

B) La intervención judicial de su administración en los casos de violación de la normativa vigente o del estatuto social según determine la reglamentación.

C) Su disolución y liquidación cuando se compruebe fehacientemente la producción de una causal de disolución y la cooperativa no la haya promovido o cuando se comprueben actos ilícitos, incumplimientos u omisiones graves de lo dispuesto por la presente ley, por el estatuto o por el reglamento.

En los casos mencionados en este numeral y a solicitud de los organismos fiscalizadores será de cargo de la cooperativa la cobertura de todo gasto u honorarios que corresponda abonar a los veedores o interventores con facultades específicas, interventores administradores o intervención con desplazamiento de autoridades, así como liquidadores o comisión liquidadora en caso de disolución y con relación al desempeño de las tareas propias de la medida y por el plazo que esta dure, según lo establezca el juez competente en atención a la gravedad o entidad de las irregularidades constatadas".

Artículo 197.- Sustitúyese el ARTÍCULO VIII del artículo 51 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 138 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO VIII.- Las instituciones públicas cualquiera sea su naturaleza; las personas públicas no estatales; los organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado; los fideicomisos en donde el Estado sea fideicomitente, fiduciario o beneficiario; las personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza y finalidad en las que el Estado participe directa o indirectamente en todo o parte de su capital social, o las personas jurídicas de derecho privado reguladas o controladas por el Estado podrán solicitar a la Auditoría Interna de la Nación servicios de consultoría o auditoría.

La Auditoría Interna de la Nación podrá contratar con terceros, los apoyos necesarios para prestar los servicios previstos en el inciso anterior, debiendo planificar y fiscalizar su realización.

Dichas contrataciones serán abonadas con cargo a los montos que la Auditoría Interna de la Nación percibirá por parte de las entidades

solicitantes, a los que podrá adicionarse hasta un 5% (cinco por ciento) del monto acordado con las mismas por concepto de administración y gastos, todo lo cual deberá constar en el convenio previamente suscrito entre las partes.

La Auditoría Interna de la Nación podrá destinar hasta un 80% (ochenta por ciento) del adicional previsto en el inciso anterior, al pago de compensaciones especiales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

Los fondos percibidos en aplicación de los servicios de consultoría o auditoría realizados, constituirán 'Recursos con Afectación Especial' en los casos donde las entidades solicitantes no sean organismos del Presupuesto Nacional. La titularidad y disponibilidad de estos fondos corresponderán en su totalidad a la Auditoría Interna de la Nación y estarán exceptuados de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

La prestación de los servicios de consultoría o auditoría previstos en este artículo tendrá carácter excepcional y deberá realizarse sin desmedro del ejercicio de las competencias legales de la Auditoría Interna de la Nación".

Artículo 198.- Reasígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 489 "Recaudación y Fiscalización", unidad ejecutora 005 "Dirección General Impositiva", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 6.274.220 (seis millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos veinte pesos uruguayos) para el ejercicio 2023 y la suma de $ 25.096.881 (veinticinco millones noventa y seis mil ochocientos ochenta y un pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, incluido aguinaldo y cargas legales, desde el objeto del gasto 095.008 "Fondo para Contrato función pública", al objeto del gasto 057.000 "Becas de trabajo y pasantías", más aguinaldo y cargas legales, con destino a financiar la contratación de personal bajo la modalidad de becas de "Primera Experiencia Laboral en el Estado y en Personas Públicas No Estatales", programa "Yo Estudio y Trabajo", que brinda tareas de apoyo en dicha unidad ejecutora.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 199.- Sustitúyese el numeral 3. del literal B) del artículo 224 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:

"3. Luego de suscrita el acta y ocurrido el retiro de las mercaderías, la Dirección Nacional de Aduanas podrá recabar los informes internos pertinentes (tanto sea en valor, origen o clasificación arancelaria) y, a posteriori, elevará las actuaciones a la autoridad judicial competente con denuncia fundada, en un plazo no mayor de quince días hábiles".

Artículo 200.- Sustitúyese el artículo 226 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:

"ARTÍCULO 226. (Procedimiento de contravención).- La infracción de contravención será impuesta por la Dirección Nacional de Aduanas por sí o por medio de sus oficinas dependientes expresamente delegadas, previo procedimiento administrativo que asegure el derecho de defensa del imputado.

Contra la resolución que imponga la infracción podrán interponerse los recursos administrativos previstos en el artículo 317 de la Constitución de la República y deducirse, oportunamente, la acción de nulidad prevista en el artículo 309 de la misma norma".

Artículo 201.- Sustitúyese el numeral 3. del artículo 252 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:

"3. Vencido el plazo establecido, el Ministerio Público deberá solicitar, en un plazo de quince días hábiles, las medidas de ejecución tendientes a efectivizar el pago de los adeudos liquidados, entre las que se incluye el remate establecido en el artículo siguiente. El representante fiscal podrá solicitar el embargo genérico o específico de los bienes del deudor u objeto del comiso, u otras medidas que correspondan. La reinscripción de los embargos antes referidos deberá ser solicitada por el Ministerio Público antes de que se produzca la caducidad de los mismos".

Artículo 202.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:

"ARTÍCULO 16. (Requisitos para la habilitación de despachante de aduana persona física).-

1. El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará como despachante de aduana y autorizará su inscripción en el registro

previsto en el artículo 23 de este Código a quienes acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

A) Domicilio en el país.

B) Ser mayor de edad.

C) Haber aprobado el ciclo completo de enseñanza secundaria.

D) Haber aprobado un examen de competencia acerca de la materia aduanera y de comercio exterior ante un tribunal de tres miembros designados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno que lo presidirá, elegido directamente por dicho ministerio, otro a propuesta de la Dirección Nacional de Aduanas y el tercero propuesto por la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay.

E) No haber sido condenado por asociación para delinquir o por delitos contra la fe pública, la Administración Pública, la Administración de Justicia o la economía y la hacienda pública.

F) No haber sido declarado concursado o, en caso de haberlo sido, exista declaración judicial de conclusión del concurso de acreedores respectivo en los términos previstos en la legislación correspondiente.

G) Estar al día en el pago de sus obligaciones frente a la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social y la Dirección Nacional de Aduanas.

2. El Poder Ejecutivo podrá exigir además la aprobación de estudios terciarios vinculados con el comercio exterior en establecimientos educativos reconocidos por el Estado".

Artículo 203.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014 (Código Aduanero), por el siguiente:

"ARTÍCULO 19. (Fallecimiento o falta de habilitación del socio de despachante de aduana persona jurídica).- En caso de que la sociedad tenga un único socio habilitado como persona física despachante de aduana y se produjera su fallecimiento, la sociedad tendrá un plazo de hasta un año para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2. del

artículo 17 de este Código. Durante ese período la firma podrá realizar la tramitación de las operaciones aduaneras a través de un apoderado debidamente registrado ante la Dirección Nacional de Aduanas. Transcurrido este plazo sin que se hubiere subsanado la situación planteada, se aplicará lo previsto en el artículo siguiente".

Artículo 204.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014, (Código Aduanero), por el siguiente:

"ARTÍCULO 21. (Incompatibilidades).-

El despachante de aduana no podrá contratar con empresas transportistas nacionales o internacionales de mercaderías, agentes de transporte, agentes de carga, titulares de depósitos, proveedores de a bordo, operadores postales, operadores logísticos o portuarios, usuarios directos o indirectos de Zona Franca, empresas de entrega expresa e instituciones financieras o con otras empresas semejantes si el referido contrato implica una intermediación de parte de dichas personas entre el despachante de aduana y quien tenga la disponibilidad jurídica de la mercadería.

Será asimismo incompatible el ejercicio de la profesión de despachante de aduana con su contratación, bajo relación de dependencia, por personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente efectúen o se vinculen con operaciones aduaneras o de comercio exterior.

El despachante de aduana persona física no podrá ser socio en más de una persona jurídica despachante de aduana, ni podrá ejercer su actividad en forma individual, fuera de la sociedad de la que forme parte.

El despachante de aduana que incumpla lo dispuesto en cualquiera de los numerales precedentes quedará inhabilitado para actuar como tal".

Artículo 205.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014, (Código Aduanero), por el siguiente:

"ARTÍCULO 17. (Despachante de Aduana Persona Jurídica).-

1. Con el objeto de ejercer su profesión, los despachantes de aduana podrán constituir sociedades adoptando únicamente las formas de sociedad colectiva o de responsabilidad limitada conforme a la legislación nacional. En estos casos, los socios serán responsables en forma personal, solidaria e ilimitada con la

sociedad respecto de cualquier obligación pecuniaria de esta ante la Dirección Nacional de Aduanas, generada en el ejercicio de su actividad.

2. Estas sociedades, para poder ejercer su actividad deberán estar integradas, al menos, por un despachante de Aduana, persona física habilitada para ejercer como tal, quien la representará a todos los efectos ante la Dirección Nacional de Aduanas.

3. Todos los socios deberán acreditar haber cumplido con los literales E) y F) del artículo 16 de este Código".

Artículo 206.- Modifícanse en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", de la unidad ejecutora 007 "Dirección Nacional de Aduanas", las condiciones, denominaciones y serie de los siguientes cargos al vacar:

Puesto	Plaza	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Condición
24.717	1	C	08	Subjefe de Departamento	Administrativo	-
24.717	2	C	08	Subjefe de Departamento	Administrativo	-
24.873	2	C	09	Subjefe de Departamento	Administrativo	-
24.873	6	C	09	Subjefe de Departamento	Administrativo	-
24.873	8	C	09	Subjefe de Departamento	Administrativo	-
24.925	4	C	10	Subjefe de Departamento	Administrativo	-
24.822	1	D	12	Jefe de Departamento	Resguardo	-
25.003	2	C	12	Jefe de Departamento	Administrativo	-
25.052	2	D	12	Jefe de Departamento	Receptoría	-
25.052	3	D	12	Jefe de Departamento	Receptoría	-
25.109	3	D	12	Jefe de Departamento	Especializado Aduanero	-

Puesto	Plaza	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Condición
24.243	1	A	15	Jefe de Departamento	Arquitecto	-
24.824	1	A	12	Asesor IV	Médico	Se suprime al vacar
24.908	5	A	8	Asesor VII	Psicólogo	Se suprime al vacar
24.715	12	D	06	Especialista V	Especializado Aduanero	Se suprime al vacar
25.045	1	A	16	Director de División	Contador	

Por las siguientes:

Puesto	Plaza	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Condición
24.717	1	C	08	Subjefe de Departamento	Administrativo	Denominación al vacar - Administrativo
24.717	2	C	08	Subjefe de Departamento	Administrativo	Denominación al vacar - Administrativo
24.873	2	C	09	Subjefe de Departamento	Administrativo	Denominación al vacar - Administrativo
24.873	6	C	09	Subjefe de Departamento	Administrativo	Denominación al vacar - Administrativo
24.873	8	C	09	Subjefe de Departamento	Administrativo	Denominación al vacar - Administrativo
24.925	4	C	10	Subjefe de Departamento	Administrativo	Denominación al vacar - Administrativo
24.822	1	D	12	Jefe de Departamento	Resguardo	Denominación al vacar - Especialista
25.003	2	C	12	Jefe de Departamento	Administrativo	Denominación al vacar - Administrativo
25.052	2	D	12	Jefe de Departamento	Receptoría	Denominación al vacar - Especialista
25.052	3	D	12	Jefe de Departamento	Receptoría	Denominación al vacar - Especialista
25.109	3	D	12	Jefe de Departamento	Especializado	Denominación al vacar

Puesto	Plaza	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Condición
					Aduanero	- Especialista
24.243	1	A	15	Jefe de Departamento	Arquitecto	Denominación al vacar - Asesor I
24.824	1	A	12	Asesor IV	Médico	-
24.908	5	A	08	Asesor VII	Psicólogo	-
24.715	12	D	06	Especialista V	Especializado Aduanero	-
25.045	1	A	16	Director de División	Contador	Denominación al vacar - Asesor

El presente artículo entrará en vigencia a la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 207.- Reasígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 489 "Recaudación y Fiscalización", unidad ejecutora 007 "Dirección Nacional de Aduanas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 3.742.251 (tres millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y un pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, desde el objeto de gasto 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción", hacia el objeto de gasto 057.003 "Empleo Juvenil", más aguinaldo y cargas legales, con destino a financiar las contrataciones establecidas en los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 19.973, de 13 de agosto de 2021.

Artículo 208.- Sustitúyese el artículo 70 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 49 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 70.- Dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de los sesenta días contados desde el inicio de cada año civil, los Incisos del Presupuesto Nacional, deberán informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Dirección Nacional de Catastro sobre los inmuebles que tengan en propiedad o en posesión a cualquier título.

Dicho informe deberá indicar expresamente su uso, ubicación, características, área, situación jurídica y catastral, así como todo otro

elemento relevante a los efectos de su correcta individualización y valoración, debiéndose informar en forma fundada si se considera a dicho inmueble imprescindible o no.

Créase el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, que funcionará en el Inciso 02 "Presidencia de la República", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes" y tendrá por cometido el relevamiento de los inmuebles del Estado informados por las entidades estatales referidas para identificar aquellos que son prescindibles, a efectos de su disposición por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según lo dispuesto por el artículo 415 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, en la redacción dada por el artículo 328 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, de o para la enajenación de los mismos, según lo entienda más conveniente.

El Poder Ejecutivo declarará la prescindencia de los bienes, asignándoles el destino correspondiente según lo previsto en el inciso anterior, valiéndose de los asesoramientos que entienda necesarios, de acuerdo a las características de cada inmueble y atendiendo a las restricciones legales que pudieran existir en relación a su enajenación o cambio de destino.

Quedan exceptuados de la presente norma los bienes de los organismos estatales que presten función social o recreativa de sus funcionarios, los bienes inmuebles afectados a escuelas rurales, los bienes inmuebles del ex Instituto Nacional de Ciegos (General Artigas) transferidos al Ministerio de Desarrollo Social por el artículo 516 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, los bienes inmuebles en propiedad o posesión del Programa Nacional de Discapacidad, los bienes inmuebles en propiedad o posesión del Inciso 16 "Poder Judicial" y los bienes inmuebles en propiedad o posesión del Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo".

El producto de la enajenación de los bienes declarados prescindibles, luego de deducidos los gastos de la misma y el 1% (uno por ciento) que sobre el precio de venta final le corresponde a la Dirección Nacional de Catastro, se asignará en los siguientes porcentajes: hasta un máximo del 75% (setenta y cinco por ciento) al Proyecto de Inversión 727 "Programa de Mejoramiento de Barrios" y el resto al Inciso al cual el inmueble estaba afectado. En este último caso, los créditos solo podrán aplicarse a proyectos de inversión.

Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza, deberán, en el marco de sus competencias, informar al Registro de Inmuebles del Estado de la Dirección Nacional de Catastro sobre los inmuebles que tengan en propiedad o en posesión, a cualquier título, al solo efecto del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo y quedarán facultados a promover la enajenación de los calificados como prescindibles a través del programa que se crea en el inciso tercero del presente artículo. En caso de así disponerlo, el porcentaje asignado al organismo será de un 80% (ochenta por ciento) y el resultado de la enajenación se podrá destinar a inversiones, sin afectación de las partidas presupuestales que el organismo tenga aprobadas, asignándose el saldo de la venta en la forma prevista en el inciso precedente.

En caso de los Incisos 25 "Administración Nacional de Educación Pública" y 26 "Universidad de la República" el porcentaje asignado al organismo referido en el inciso anterior será del 100% (cien por ciento).

Deróganse los artículos 733 a 735 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

Artículo 209.- Dispónese que los fondos percibidos por la Dirección Nacional de Catastro por la enajenación de los bienes declarados prescindibles al amparo de lo establecido por el artículo 70 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, y modificativas, constituirán recursos con afectación especial de dicha unidad ejecutora y se destinarán a gastos de funcionamiento e inversión.

Artículo 210.- Asígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 421 "Sistema de Información Territorial", unidad ejecutora 009 "Dirección Nacional de Catastro", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 10.000.000 (diez millones de pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, con destino a atender gastos de funcionamiento e inversión.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 211.- Reasígnase en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 491 "Regulación de los juegos de azar", unidad ejecutora 008 "Dirección Nacional de Loterías y Quinielas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos

uruguayos) desde el objeto del gasto 095.008 "Fondo para Contrato función pública", hacia el objeto del gasto 092.000 "Partidas globales a distribuir", para atender los costos que demanden las transformaciones de cargos y la incorporación de funcionarios en dicha unidad ejecutora.

Artículo 212.- Exceptúanse del régimen general de quebranto de caja previsto en el artículo 103 de la Ley Especial Nº 7, de 23 de diciembre de 1983, en la redacción dada por el artículo 45 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, a los funcionarios pertenecientes a las salas de juego de la Dirección General de Casinos.

Apruébase el régimen especial de quebrantos de caja para los referidos funcionarios, que se regirá por las siguientes pautas, atendiendo a la naturaleza comercial de la actividad que lleva adelante el organismo y a los distintos roles que los mismos desempeñan en los establecimientos de juego:

A) El derecho al cobro de la prima de los funcionarios comprendidos en el ámbito subjetivo de la excepción se generará estrictamente por el ejercicio efectivo de la función de manejo de dinero o valores al portador, en atención a los riesgos que se asumen, y solo será de aplicación mientras se desempeñen dichas tareas.

B) Los plazos mínimos de desempeño en las tareas referidas para ser acreedor de la prima, las tareas o roles específicos alcanzados por la misma, así como el monto individual de la partida y demás parámetros que incidan en la ponderación de los riesgos asumidos por los beneficiarios según el casino o sala de esparcimiento en que se desempeñen, serán establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Casinos.

C) El funcionario tendrá derecho a percibir semestralmente el 75% (setenta y cinco por ciento) de la referida prima, luego de deducidos los faltantes de fondos producidos en el período. El 25% (veinticinco por ciento) restante se depositará en una cuenta individual en unidades reajustables a nombre del funcionario en el Banco Hipotecario del Uruguay.

D) Al cesar el funcionario en la tarea o en la relación funcional con el Estado, podrá retirar el saldo que tuviera en cuenta luego de transcurrido un año de producido tal hecho. Lo mismo podrán efectuar sus causahabientes, en caso de fallecimiento luego de tres meses de acaecido el mismo.

E) En todas las liquidaciones que se practiquen se tomará el valor vigente de las unidades reajustables al final del semestre correspondiente.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 213.- Sustitúyese el último inciso del artículo 1º de la Ley Nº 17.934, de 26 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.999, de 15 de noviembre del 2012, por el siguiente:

"Cuando se trate de operaciones comprendidas en los literales A) a D) del inciso anterior, la reducción del impuesto podrá ser total en tanto las mismas se realicen en alta temporada, los adquirentes sean personas físicas no residentes y sean abonadas mediante tarjetas de débito, crédito u otros instrumentos análogos, emitidos en el exterior. La reglamentación determinará las formalidades y condiciones en que operará la presente disposición".

Artículo 214.- Sustitúyese el artículo 14 TER de la Ley Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 129 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 14 TER.- Los usuarios de zonas francas podrán celebrar acuerdos con el personal dependiente, para que estos puedan prestar servicios en la modalidad teletrabajo exclusivamente desde su domicilio particular situado en territorio nacional. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones y límites para la celebración de dichos acuerdos, que deberá contemplar excepciones que incluyan la distancia entre el domicilio particular del trabajador y su lugar habitual de trabajo, la cantidad de personal dependiente del usuario o la relevancia de la inversión asociada. No se podrá condicionar el ejercicio del teletrabajo a un mínimo de empleados dependientes con que cuentan los usuarios.

El usuario de zona franca que implemente la modalidad teletrabajo, deberá asegurar en todo momento al Desarrollador el control de los recursos humanos que teletrabajan, con el detalle de días y horario dentro del cual lo efectúan, información que podrá ser solicitada por la Dirección Nacional de Zonas Francas cuando esta lo estime pertinente.

No quedan comprendidos en la autorización dispuesta en los incisos precedentes, los recursos humanos que desarrollen directamente las

actividades operativas de producción o fabriles, de distribución o logísticas. Tampoco se autorizará para el desarrollo de las actividades comerciales sustantivas definidas en el artículo 14 de la presente ley. Asimismo, la presente autorización legal no implicará bajo ninguna circunstancia la autorización para abrir oficinas de tipo alguno fuera de las zonas francas".

Artículo 215.- Agrégase al artículo 4º del Decreto-Ley Nº 14.841, de 22 de noviembre de 1978, el siguiente inciso:

"No podrá un mismo promotor, gestionante o similar, realizar más de cinco actos en el año civil de los previstos en el artículo 1º de esta ley, aunque se trate de distintos beneficiarios".

Artículo 216.- Agrégase al artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

"Q) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones de participaciones patrimoniales de personas jurídicas residentes fiscales en territorio nacional, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) los adquirentes sean personas jurídicas residentes fiscales en territorio nacional;

b) que la persona física enajenante sea propietaria final de la o las personas jurídicas adquirentes, ostentando dicha calidad en forma previa a la transferencia de las participaciones patrimoniales;

c) que la persona física enajenante luego de realizada la transmisión, mantenga en la o las personas jurídicas adquirentes la condición de propietaria final por al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) del porcentaje de las acciones transferidas, por un lapso no inferior a 4 (cuatro) años contados desde su comunicación al registro a que refiere el literal f). En ningún caso se considerará que existe alteración en la proporción patrimonial cuando la modificación tenga su origen en una sucesión, partición del condominio sucesorio, o disolución de la sociedad conyugal o su partición;

d) que la o las personas jurídicas adquirentes mantengan las participaciones recibidas durante un lapso no inferior a 4 (cuatro) años contados desde que opera la transferencia efectiva;

e) que el precio de la transferencia sea equivalente al valor fiscal de las participaciones transferidas a la fecha de la operación; y

f) que se haya comunicado al registro que llevará a tales efectos la Auditoría Interna de la Nación, la información relativa de la cadena hasta llegar al propietario o beneficiario efectivo de las participaciones que se transfieren. Dicho organismo establecerá la forma y condiciones de la citada comunicación.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por propietarios finales a las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas por el artículo 22 de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017, aunque posean menos del 15% (quince por ciento) que dispone dicha norma.

Cuando se verifique el incumplimiento de alguna de las condiciones dispuestas, la operación de transmisión tendrá el tratamiento tributario correspondiente al régimen general, debiéndose aplicar el término de prescripción de diez años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo dicho incumplimiento. En tal caso los tributos correspondientes deberán abonarse, sin multas ni recargos, actualizados por la evolución de la Unidad Indexada entre la fecha de su acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento.

Las personas jurídicas adquirentes serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesores, derivadas del referido incumplimiento. Dicha responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado con dolo.

El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en los que se aplicará esta disposición".

Artículo 217.- Facúltase a la Dirección Nacional de Catastro a exigir en oportunidad del registro de todo tipo de plano de mensura, que los mismos se presenten georreferenciados en el sistema de referencia geodésico de la cartografía del Uruguay (SIRGAS-ROU98 o actualizaciones futuras). El organismo establecerá la planificación temporal y espacial y los requisitos

técnicos necesarios, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente artículo.

Artículo 218.- Reasígnase para el ejercicio 2023 en el Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", programa 489 "Recaudación y Fiscalización", unidad ejecutora 007 "Dirección Nacional de Aduanas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el objeto del gasto 095.005 "Fondo p/financiar funciones transitorias y de conducción", la suma de $ 3.859.272 (tres millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, hacia el objeto del gasto 042.530 "Compensación especial por horario nocturno o trabajo en días inhábiles", más aguinaldo y cargas legales, con destino al pago de la compensación por nocturnidad.

Asígnase con el mismo destino, a partir del ejercicio 2024, la suma de $ 11.389.182 (once millones trescientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos uruguayos), más aguinaldo y cargas legales.

A los efectos de financiar la partida dispuesta para el ejercicio 2024, disminúyense en igual monto los créditos asignados a gastos de funcionamiento de la unidad ejecutora.

La Dirección Nacional de Aduanas, comunicará a la Contaduría General de la Nación, en un plazo no mayor a treinta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el programa, proyecto, financiación y objeto del gasto cuyos créditos corresponde disminuir para cumplir con lo previsto.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

INCISO 06

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Artículo 219.- Deróganse los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 19.841, de 19 de diciembre de 2019.

El personal del escalafón M "Personal de Servicio Exterior" que haya sido designado a prestar funciones permanentes en el exterior en el marco de lo dispuesto por los artículos que se derogan por la presente disposición mantendrá las condiciones establecidas por estos.

No obstante, quienes se encuentren en el primer trienio de su destino podrán optar, de manera expresa y por escrito, en el plazo de sesenta días a

partir de la vigencia de la presente ley, por el régimen previsto en el artículo 27 de la Ley Nº 19.841, de 19 de diciembre de 2019.

INCISO 07

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 220.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley Nº 19.175, de 20 de diciembre de 2013, en la redacción dada por el artículo 158 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 36. (Negociabilidad e inembargabilidad).- Prohíbese la realización de cualquier negocio jurídico que involucre permisos, concesiones y autorizaciones, ya sea a título gratuito u oneroso, aparejen o no transferencia en la titularidad. Los acuerdos que se realicen en contravención a la presente prohibición serán absolutamente nulos y se aplicarán las máximas sanciones previstas en el Capítulo X de la presente ley. Los cambios en el capital social o accionario de las empresas no implican cambios en la titularidad de los permisos concedidos.

Exceptúanse de la prohibición prevista en el inciso anterior los siguientes casos referidos a la transferencia en la titularidad de los permisos de pesca artesanal:

A) Transferencia del permiso por causa de muerte o ausencia de su titular. Mientras se tramite la sucesión judicial o declaración de ausencia y esté vigente el plazo originario del permiso, se admitirá que la actividad siga siendo explotada por quien o quienes tienen vocación hereditaria, el cónyuge supérstite que conviviera con el titular o concubino, con los mismos derechos y obligaciones que tenía aquel frente a la Administración, en las condiciones que establezca la reglamentación. En caso de discrepancia de los causahabientes, cónyuge o concubino, se estará a la decisión judicial sobre la administración de la herencia o del patrimonio del presunto ausente. En caso de que el vencimiento del plazo de la autorización, concesión o permiso ocurra durante la referida tramitación judicial, se admitirá la renovación en las condiciones establecidas por la presente ley y la reglamentación.

B) Edad mínima del titular de sesenta años, siempre que registre un mínimo de diez años de actividad inmediatos previos a la transferencia.

C) Incapacidad física permanente para el desarrollo de la pesca, en las condiciones y plazos que establezca la reglamentación.

D) Transferencia entre parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad en primer grado, el cónyuge que conviviera con el titular o concubino y su hijo, siempre que registre un mínimo de diez años de actividad consecutivos e inmediatos previos a la transferencia.

E) Transferencia a favor de personas físicas que acrediten poseer un mínimo de diez años en la pesca, mediante la libreta de embarque otorgada por la Prefectura Nacional Naval o el curso de capacitación impartido por la referida autoridad marítima. Asimismo, la persona que recibe el permiso de pesca artesanal deberá acreditar su domicilio real en la zona del permiso y no ser titular en la actualidad de un permiso de pesca artesanal o haberlo sido en un plazo inferior a diez años a partir de la fecha de solicitud de la transferencia.

Por su parte, la persona que transfiera el permiso de pesca artesanal deberá acreditar ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos la posesión de un mínimo de diez años de actividad consecutivos e inmediatos previos a la transferencia.

La persona que transfiere el permiso de pesca artesanal según los literales B), C), D), y E) no podrá ser nuevamente beneficiario de esa categoría de permiso, so pena de ser aplicables las consecuencias previstas en el inciso primero.

Exceptúanse de la prohibición establecida en el inciso primero los siguientes casos referidos a la transferencia en la titularidad de los permisos de pesca industrial:

A) Aquellos permisos de pesca industrial que hayan permanecido en actividad por más de cinco años consecutivos y cuyo titular no se haya modificado en este período de tiempo.

B) Transferencia del permiso por causa de muerte o ausencia de uno de sus socios o accionistas.

Los permisos de pesca serán inembargables".

Artículo 221.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, en la redacción dada por el artículo 151 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 62.- Fíjanse para la tasa de análisis químicos de fertilizantes o materias primas (para proceder a la liberación de derechos), cuya recaudación corresponde al Inciso 07 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca', unidad ejecutora 004 'Dirección General de Servicios Agrícolas', los siguientes valores en unidades indexadas (UI), según la composición del registro:

Fertilizante inorgánico según composición de nutrientes	Costo en UI
Nitrógeno	400
Fósforo	400
Potasio	400
Azufre	400
Calcio	400
Magnesio	400
Un micronutriente	450
Más de un micronutriente	900
Contaminantes	900

Fertilizante orgánico-mineral según la composición de nutrientes	Costo en UI
Nitrógeno	400
Fósforo	400
Potasio	400
Azufre	400

Fertilizante orgánico-mineral según la composición de nutrientes	Costo en UI
Calcio	400
Magnesio	400
Un micronutriente	450
Más de un micronutriente	900
Contaminantes	900
Carbono orgánico	450

Fertilizante orgánico según la composición de nutrientes	Costo en UI
Nitrógeno	400
Fósforo	400
Potasio	400
Contaminantes	900
Carbono orgánico	450

El valor de la tasa en su equivalente en moneda nacional se ajustará el 1º de enero y el 1º de julio de cada año por el valor de UI.

La tasa será de aplicación por trámite de importación, independientemente del volumen de la misma".

Artículo 222.- Incorpórase al artículo 177 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, en la redacción dada por el artículo 150 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, el siguiente numeral:

"7) Tasa de registro, renovación y control de productos fitosanitarios (plaguicidas), agentes de control biológico, inoculantes y promotores de crecimiento, destinados a exportación: 9.738,21 UI (nueve mil setecientos treinta y ocho con 21/100 unidades indexadas)".

Artículo 223.- Créase una tasa de prestación de servicios fitosanitarios brindados por el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad

ejecutora 004 "Dirección General de Servicios Agrícolas", a los transbordos de productos y subproductos de origen vegetal que se realicen en terminales portuarias y aeroportuarias del territorio nacional y soliciten el certificado de transbordo. Dicha tasa estará compuesta por un 10% (diez por ciento) del valor de la tasa de certificación de sanidad o calidad de productos de origen vegetal, cuya base de cálculo está establecida en la reglamentación dictada para los referidos servicios, con la correspondiente actualización de valores a la fecha, sumados a los costos de gestión, inspección y las medidas fitosanitarias que sean necesarias.

Artículo 224.- Reasígnase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", unidad ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", el equivalente en moneda nacional a US$ 12.000.000 (doce millones de dólares de los Estados Unidos de América) del objeto del gasto 152.018 "Vacunas fiebre aftosa", al objeto del gasto 153.001 "Vacunas fiebre aftosa", para uso animal.

Artículo 225.- Sustitúyese el artículo 152 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 152.- Decláranse de interés general para la explotación agropecuaria, los productos destinados al tratamiento, la prevención y el diagnóstico de enfermedades de los animales de todas las especies, incluidos los pequeños (o animales domésticos).

La unidad ejecutora 005 'Dirección General de Servicios Ganaderos', del Inciso 07 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca', a través de sus dependencias, es la autoridad oficial competente para:

A) Habilitar, registrar, controlar y auditar a todo establecimiento o empresa que fabrique, manipule, fraccione, distribuya, comercialice, almacene, importe, exporte o realice análisis de productos de uso veterinario para sí o para terceros, en todo el territorio nacional y en zonas francas.

B) Autorizar, registrar, fiscalizar y realizar el control permanente de productos de uso veterinario en todo el territorio nacional y las zonas francas, incluyendo la comercialización de dichos productos mediante publicaciones a través de medios digitales

(plataformas digitales, aplicaciones digitales y medios electrónicos).

C) Extender certificados correspondientes a registros de productos veterinarios; certificados de importación de materia prima y productos terminados; certificados de exportación, y certificados de habilitación de firmas registradas.

D) Retirar muestras de los establecimientos comprendidos en el literal A) del presente artículo a costo del registrante, en el marco del control permanente, a fin de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el registro del producto.

E) Establecer en forma debidamente fundada medidas cautelares de intervención sobre mercaderías o productos en presunta infracción y constituir secuestro administrativo si así lo considera necesario, cuando la infracción pueda dar lugar a comiso o confiscación.

F) Disponer la suspensión preventiva o transitoria, o eliminación del registro de los productos veterinarios que no cumplan con las condiciones especificadas en dicho registro.

Las empresas responsables de los medios digitales (plataformas digitales, aplicaciones digitales y medios electrónicos) podrán realizar publicaciones, anuncios o avisos publicitarios con el fin de comercializar productos veterinarios únicamente de personas físicas o jurídicas que cumplan con los registros, habilitaciones y autorizaciones especificadas en los literales A) y B) del presente artículo. Será de exclusiva responsabilidad de las personas físicas o jurídicas que anuncian u ofrecen en venta productos veterinarios el control de los referidos registros, habilitaciones y autorizaciones y el contenido de dichas publicaciones, anuncios o avisos publicitarios.

A dichos efectos, la División Laboratorios Veterinarios 'Miguel C. Rubino', de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca expedirá las constancias correspondientes.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca actualizará la nómina de empresas habilitadas y productos veterinarios registrados, en los

medios electrónicos institucionales, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación respectiva.

El incumplimiento de lo dispuesto por el presente artículo y las reglamentaciones que se dicten a su amparo, aparejará a los obligados la aplicación de las sanciones pertinentes, de conformidad a lo establecido en los artículos 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970, en la redacción dada por el artículo 134 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, y 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y sus modificativas.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley".

Artículo 226.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 19.300, de 26 de diciembre de 2014, con la modificación introducida por el artículo 58 de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:

"ARTÍCULO 5º.- Los propietarios de animales o titulares de explotaciones ganaderas, según corresponda, cuyos predios sean declarados foco de una enfermedad prevalente por la autoridad sanitaria, recibirán un subsidio para gastos de saneamiento que incluirá los siguientes conceptos: honorarios profesionales del veterinario de libre ejercicio acreditado, calculado según arancel fijado por la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, costos de laboratorio, vacunas obligatorias y tuberculinización.

Asimismo, para los propietarios de animales o titulares de explotaciones ganaderas registrados al amparo del artículo 311 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, incluirá el gasto devengado por concepto de compra de equipo pasteurizador o la adquisición de sustituto lácteo mientras dure el proceso de saneamiento del predio, previo informe técnico refrendado por la autoridad sanitaria.

El beneficio otorgado en los incisos precedentes estará sujeto al cumplimiento de un plan de saneamiento de los predios elaborado por un veterinario de libre ejercicio acreditado y aprobado por la autoridad sanitaria.

Los titulares de predios linderos y rastreos de tuberculosis bovina recibirán apoyo económico para la aplicación de medidas de prevención y vigilancia epidemiológica.

Los beneficios previstos en el presente artículo podrán ser otorgados en efectivo o en especie".

Artículo 227.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 19.300, de 26 de diciembre de 2014, en la redacción dada por el artículo 176 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2º.- El seguro creado se financiará mediante un fondo integrado de la siguiente forma:

A) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 2,00 (dos dólares de los Estados Unidos de América) que gravará la faena de cada res bovina llevada a cabo por todos los establecimientos de faena de bovinos.

B) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 1,50 (uno con cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por cada mil litros de leche recibidos en las plantas elaboradoras.

C) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 2,00 (dos dólares de los Estados Unidos de América) por cada bovino en pie con destino a exportación.

D) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 3,00 (tres dólares de los Estados Unidos de América) por cada tonelada de carne de suinos, sus menudencias y subproductos, provenientes de plantas de faena o de la importación, que se comercialicen en el mercado interno.

E) El aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 0,50 (cincuenta centavos de dólares de los Estados Unidos de América) por cada unidad de aves de la especie Gallus domesticus, de líneas puras o híbridas, para reproducción, importada definitivamente y el aporte de, como máximo, el equivalente en pesos uruguayos a US$ 0,20 (veinte centavos de dólares de los Estados Unidos de América) por cada unidad de huevo fecundado para incubación, de la especie Gallus

domesticus, de líneas puras o híbridas, para reproducción importada definitivamente.

En el momento de realizar el aporte, el importador deberá, mediante declaración jurada, informar el destino de las aves o huevos importados, sea para producción de pollos parrilleros o para aves de postura.

En los casos de exportación e importación definitiva de las mercaderías especificadas en los literales C), D) y E), la Dirección Nacional de Aduanas liquidará y cobrará el aporte correspondiente en el marco de las operaciones aduaneras asociadas.

Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas remitentes a los establecimientos de faena, los exportadores de bovinos en pie, los industrializadores de leche y los importadores de carne porcina y de genética aviar.

Por su parte, serán agentes de retención los establecimientos de faena vacuna y porcina, las empresas industrializadoras de leche y la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda.

Los depósitos se deberán efectuar en el Banco de la República Oriental del Uruguay. Las sumas retenidas deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes, con excepción de la Dirección Nacional de Aduanas, que podrá realizar dichos depósitos luego de transcurridas veinticuatro horas hábiles de retenida la suma correspondiente.

En todos los casos, se tomará como base de cálculo la cotización interbancaria fondo comprador del día anterior al depósito, con excepción de los casos de exportación e importación definitiva, en los que la Dirección Nacional de Aduanas tomará las cotizaciones ya previstas en las respectivas operaciones aduaneras.

Los fondos se administrarán en cuentas corrientes distintas en las que aportarán por separado el sector de ganado de carne, el sector de ganado de leche, el sector de carne aviar, el sector de aves de postura y el sector de suinos y cada una de ellas cubrirá el sector correspondiente.

El Poder Ejecutivo determinará los rangos correspondientes a la tasa y la iniciación del pago de los aportes previstos en el presente artículo".

Artículo 228.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", unidad ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos", en el marco de lo dispuesto por el artículo 174 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, las siguientes tasas:

1) Tasa de expedición de Pasaporte Equino Único por primera vez, abonándose al momento de la solicitud de expedición 276,90 UI (doscientas setenta y seis con 90/100 unidades indexadas).

2) Tasa de expedición de Pasaporte Equino Único por renovación, abonándose al momento de la solicitud de expedición 276,90 UI (doscientas setenta y seis con 90/100 unidades indexadas).

Artículo 229.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", a otorgar carné de aplicador de productos fitosanitarios, a los productores granjeros o sus empleados que desarrollen actividades relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios, incluidos los agentes de control biológico y otros bioinsumos que acrediten conocimientos apropiados para ejercer su actividad.

El carné autoriza a las personas a manipular y utilizar productos fitosanitarios de uso profesional y acredita que el personal que lo posee tiene los conocimientos, habilidades y aptitudes para poder aplicar y manipular productos fitosanitarios.

A tales efectos, la Dirección General de la Granja brindará la formación habilitante en coordinación con la Dirección General de Servicios Agrícolas y establecerá los requisitos y condiciones para su otorgamiento.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 230.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", el Registro Nacional de Productores de Animales de Granja, que funcionará en la órbita de esta última.

En este registro deberá inscribirse toda persona física o jurídica, institución pública o privada, cualquiera sea su naturaleza jurídica y escala productiva, que destine su producción a la comercialización interna o externa. La inscripción en el mencionado registro tendrá carácter gratuito y obligatorio.

Serán aplicables, en caso de comprobarse infracciones a lo dispuesto precedentemente, las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y sus modificativas.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de la Granja, establecerá la oportunidad, forma y condiciones de la inscripción, en el marco de lo dispuesto por este artículo.

Artículo 231.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", las siguientes tasas que gravarán:

A) Registro, renovación y habilitación de entidades oficialmente reconocidas, abonándose por única vez al momento de la solicitud del registro o renovación de la habilitación 5.000 UI (cinco mil unidades indexadas).

B) Solicitud de habilitación, renovación y auditoría de productos orgánicos importados, entre uno y diez productos 1.000 UI (mil unidades indexadas) y más de diez productos 2.000 UI (dos mil unidades indexadas).

Los fondos recaudados constituirán Recursos con Afectación Especial, programa 323 "Cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local", de la unidad ejecutora 006 "Dirección General de la Granja", y serán destinados a gastos de funcionamiento e inversión de dicha unidad ejecutora.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 232.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural, el que estará integrado de la siguiente manera:

1) Dos representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

2) Un representante del Instituto Nacional de Colonización.

3) Un representante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

4) Un representante del Instituto Plan Agropecuario.

5) Un representante del Instituto Nacional de la Leche.

6) Un representante del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

7) Un representante del Instituto Nacional de Carnes.

8) Un representante del Instituto Nacional de Semillas.

El Inciso brindará la infraestructura necesaria para el funcionamiento del mismo.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo.

Artículo 233.- Los cometidos del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural serán los siguientes:

1) Impulsar y fortalecer la interacción interinstitucional y la articulación público-privada para el diseño y ejecución de políticas públicas y otras acciones que promuevan el desarrollo rural.

2) Promover la difusión y el acceso a información técnica u operativa disponible con el fin de sustentar los procesos de toma de decisiones de las diversas acciones orientadas al sector agropecuario y medio rural.

3) Generar intervenciones territoriales específicas.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo.

Artículo 234.- Incorpórase al artículo 3º de la Ley Nº 18.126, de 12 de mayo de 2007, el siguiente literal:

"H) Un representante del Ministerio de Ambiente".

Artículo 235.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 18.126, de 12 de mayo de 2007, por el siguiente:

"ARTÍCULO 11.- En cada departamento funcionará por lo menos una mesa de desarrollo rural la que estará integrada por:

1) El Consejo Agropecuario Departamental.

2) Un representante de cada una de las Cooperativas Agropecuarias.

3) Un representante de cada una de las organizaciones gremiales agropecuarias.

4) Un representante de la Comisión de Agro de la Junta Departamental.

5) Un representante de los municipios de la circunscripción territorial correspondiente".

Artículo 236.- Declárase el día 22 de mayo de cada año como Día Nacional de la Protección de la Sanidad Animal y Vegetal.

Artículo 237.- Declárase de interés nacional el uso de los bioinsumos en la producción animal, vegetal y fúngica fomentando su producción, desarrollo, innovación y registro, con el objetivo de promover la incorporación de estas herramientas para que contribuyan al desarrollo sostenible.

A estos efectos, defínese "Bioinsumo" como todo producto que consista en el propio organismo, sea de origen o adopte mecanismos de animales, vegetales o microorganismos, destinado a ser utilizado en la producción animal, vegetal y fúngica.

Encomiéndase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la elaboración de un Plan Nacional de Bioinsumos, dentro de los ciento ochenta días de vigencia de la presente ley, para su aprobación por el Poder Ejecutivo.

Artículo 238.- Sustitúyese el literal D) del artículo 9º de la Ley Nº 18.471, de 27 de marzo de 2009, en la redacción dada por el artículo 381 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"D) Cumplir con las normas de identificación y castraciones de acuerdo al Programa Nacional de Control Reproductivo".

Artículo 239.- Reasígnanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras que se indican, los créditos presupuestales que se detallan a continuación:

Unidad ejecutora	Programa	Proyecto	Financiación	Objeto del gasto	Importe en $

Unidad ejecutora	Programa	Proyecto	Financiación	Objeto del gasto	Importe en $
001	320	721	2.1	799.000	-25.891.911
001	320	724	2.1	799.000	25.891.911
001	320	722	2.1	799.000	-2.452.661
001	320	724	2.1	799.000	2.452.661
001	320	722	2.1	799.000	-5.769.953
001	320	210	2.1	299.000	5.769.953
003	382	769	2.1	799.000	-10.435.081
001	320	210	2.1	299.000	10.435.081
007	322	749	2.1	799.000	-391.114
001	320	210	2.1	299.000	391.114
007	322	749	2.1	799.000	-23.397.478
001	320	212	2.1	299.000	23.397.478
007	322	749	2.1	799.000	-760.307
001	320	212	1.1	299.000	760.307
001	320	722	1.1	799.000	-956.940
001	320	212	1.1	299.000	956.940
003	382	769	1.1	799.000	-885.305
001	320	212	1.1	299.000	885.305
007	322	744	2.1	799.000	-32.200.672
001	320	210	2.1	299.000	32.200.672
007	322	744	2.1	799.000	-84.504.909
001	320	723	2.1	799.000	84.504.909

Artículo 240.- Reasígnanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las Financiaciones 1.1 "Rentas Generales" y 1.2 "Recursos con Afectación Especial", las siguientes partidas:

Unidad ejecutora	Programa	Proyecto	Objeto del gasto	Financiación	Importe en $
001	320	000	299.000	1.1	-300.000
001	320	000	721.000	1.1	300.000
002	322	000	299.000	1.2	-310.000
002	322	000	721.000	1.2	310.000
007	322	000	299.000	1.2	-250.000
007	322	000	721.000	1.2	250.000
009	322	000	299.000	1.1	-17.000
009	322	000	721.000	1.1	17.000

Artículo 241.- Agrégase al artículo 179 del Código Rural, aprobado por la Ley Nº 10.024, de 14 de junio de 1941, el siguiente inciso:

"Estarán exceptuados de la obligación establecida en el presente artículo los fideicomisos de garantía ganaderos (Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003)".

Artículo 242.- Sustitúyese el artículo 147 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 147.- Autorízase al Inciso 07 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca', unidad ejecutora 001 'Dirección General de Secretaría', la contratación de personal para atender las tareas inherentes a la preparación y ejecución del Censo General Agropecuario, en lo relativo a tareas de encuestadores, críticos-codificadores y supervisores de campo, las que serán realizadas bajo la modalidad de contrato zafral, establecida en la presente ley. La Administración establecerá las bases y condiciones para la contratación. Se deberá prever en el caso que el número de aspirantes así lo ameriten, una instancia de sorteo en forma previa al inicio del procedimiento de selección a aplicar.

Las contrataciones estarán exceptuadas del procedimiento del Sistema de Reclutamiento y Selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de lo dispuesto por el artículo 346 de la Ley Nº 19.889,

de 9 de julio de 2020, y podría acumularse a otro empleo público siempre que no superen en conjunto las sesenta horas semanales".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 243.- Determínase que las competencias comprendidas en el literal B) del artículo 292 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, serán asignadas a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

El Poder Ejecutivo reglamentará las competencias, funciones y cometidos asignados, en el marco de lo dispuesto en el referido literal, en el plazo de ciento ochenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá redistribuir a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" a aquellos funcionarios destinados a realizar las tareas para el cumplimiento de las competencias referidas en el inciso primero de este artículo, los que mantendrán su nivel retributivo. La compensación percibida por el artículo 140 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, en la redacción dada por el artículo 164 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, será asignada como "compensación especial", conforme a lo dispuesto en el inciso siguiente.

Créase en la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", una compensación especial que será percibida por los funcionarios afectados a las tareas comprendidas en el inciso primero del presente artículo, por un monto anual de hasta $ 11.122.173 (once millones ciento veintidós mil ciento setenta y tres pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a realizar las reasignaciones presupuestales correspondientes a efectos de financiar la redistribución de personal resultante de la aplicación del presente artículo.

Artículo 244.- Los Incisos de la Administración Central deberán suscribir convenios con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en un plazo no mayor de ciento ochenta días, a efectos de establecer posibles acciones que coadyuven al control de las obligaciones de esterilizar y registrar a los animales de compañía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 386 y 388 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, y sus modificativas, y el artículo 18 de la Ley Nº 18.471, de 27 de marzo de 2009.

Artículo 245.- Créase en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y

servicios", la unidad ejecutora 010 "Dirección General de Laboratorios", y el cargo de particular confianza de "Director General de Laboratorios", cuya retribución será equivalente a la de los directores de unidad ejecutora, de acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 16 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

Dicha unidad ejecutora tendrá como cometido unificar la gestión de los laboratorios del Inciso, así como todo otro cometido que le sea asignado en la reglamentación.

La creación del cargo dispuesta se financiará con la supresión de los siguientes cargos:

UE	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
005	R	10	Asesor IV	Operación (Interior)	1
005	R	10	Asesor VI	Operación (Interior)	2
005	R	10	Asesor VI	Operación (Montevideo)	3
006	B	11	Técnico IV	Enología (Montevideo)	1

El excedente resultante de la supresión de los cargos indicados, se asignará al objeto del gasto 099.001 "Partida Proyectada".

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, reglamentará el presente artículo, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la promulgación de la presente ley, reasignando los créditos presupuestales, recursos y puestos de trabajo correspondientes al referido Inciso.

La presente disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 246.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras y programas que se indican, los siguientes cargos:

Unidad ejecutora	Programa	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
001	320	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	33

Unidad ejecutora	Programa	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
001	320	B	3	Técnico XII	Técnico	28
001	320	C	1	Administrativo VIII	Administrativo	2
002	322	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	9
002	322	B	3	Técnico XII	Técnico	3
002	322	D	1	Especialista XIII	Especializado	1
002	322	E	1	Oficial VII	Oficios	1
003	380	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	12
003	380	B	3	Técnico XII	Técnico	2
003	380	C	1	Administrativo VIII	Administrativo	1
003	380	D	1	Especialista XIII	Especializado	2
004	320	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	4
005	320	B	3	Técnico XII	Técnico	1
007	322	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	26
007	322	B	3	Técnico XII	Técnico	4
007	322	C	1	Administrativo VIII	Administrativo	3
009	322	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	1

El Poder Ejecutivo designará en los cargos creados precedentemente, al amparo de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, a aquellas personas que se encuentren cumpliendo tareas permanentes, propias de un funcionario público, que hayan sido seleccionadas mediante un concurso o procedimiento similar debidamente acreditado y cuyo vínculo haya iniciado con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, previo informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.

A efectos de financiar la creación de los cargos, reasígnanse los siguientes créditos, según el siguiente detalle:

Unidad ejecutora	Programa	Proyecto	Objeto del gasto	Fuente de financiamiento	Importe $ 2024
001	320	721	799.000	2.1	21.267.311
001	320	205	299.000	1.1	2.602.552
001	320	205	299.000	2.1	71.277.200
001	320	721	799.000	1.1	4.130.322
001	320	721	799.000	2.1	2.452.661
001	320	000	299.000	1.1	2.346.215
002	322	208	551.000	1.1	9.200.000
002	322	000	299.000	1.2	7.897.499
003	380	206	299.000	1.1	1.101.533
003	380	206	299.000	2.1	22.762.083
003	380	206	799.000	2.1	2.010.011
007	322	204	199.000	1.1	2.809
007	322	204	299.000	2.1	17.175.930
007	322	204	299.000	1.1	9.120.767
007	322	207	299.000	1.1	1.044.404
007	322	207	299.000	2.1	22.827.495
007	322	207	799.000	2.1	1.197.231

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comunicará a la Contaduría General de la Nación las reasignaciones al Grupo 0 "Servicios Personales" de los créditos presupuestales, desde gastos de funcionamiento o inversiones, a los efectos de financiar lo estipulado en el presente artículo correspondiente al año 2023.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 247.- Reasígnanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras y programas que se indican, los siguientes créditos del grupo 0 "Servicios personales", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales":

Unidad ejecutora	Programa	Objeto del gasto	2023	2024
001	320	095.005	5.221.750	20.887.000
001	320	042.531	-912.125	-3.648.500
001	320	042.720	-625.000	-2.500.000
001	320	082.000	-17.581	-70.325
001	320	042.511	-85.750	-343.000
001	320	059.000	-135.240	-540.958
001	320	081.000	-342.832	-1.371.329
001	320	087.000	-81.144	-324.575
002	322	042.720	-177.750	-711.000
002	322	082.000	-3.166	-12.664
002	322	087.000	-14.613	-58.450
002	322	042.511	-114.500	-458.000
002	322	059.000	-24.354	-97.417
002	322	095.005	-285.563	-1.142.250
002	322	081.000	-61.738	-246.951
003	380	095.005	368.575	1.474.300
003	380	042.720	-287.500	-1.150.000

Unidad ejecutora	Programa	Objeto del gasto	2023	2024
003	380	081.000	-89.887	-359.548
003	380	059.000	-35.458	-141.833
003	380	087.000	-21.275	-85.100
003	380	082.000	-4.610	-18.438
003	380	042.511	-138.000	-552.000
004	320	087.000	-41.525	-166.100
004	320	042.511	-130.500	-522.000
004	320	042.720	-700.000	-2.800.000
004	320	081.000	-175.443	-701.773
004	320	059.000	-69.208	-276.833
004	320	082.000	-8.997	-35.988
004	320	095.000	-1.196.500	-4.786.000
005	320	042.720	-1.187.500	-4.750.000
005	320	095.005	183.500	734.000
005	320	042.511	-47.000	-188.000
005	320	059.000	-102.875	-411.500
005	320	081.000	-260.788	-1.043.153
005	320	082.000	-13.374	-53.495
005	320	087.000	-61.725	-246.900
006	323	042.720	-124.750	-499.000
006	323	059.000	-13.354	-53.417
006	323	081.000	-33.853	-135.411
006	323	082.000	-1.736	-6.944
006	323	095.005	673.622	2.694.486
006	323	087.000	-8.013	-32.050
006	323	042.511	-35.500	-142.000

Unidad ejecutora	Programa	Objeto del gasto	2023	2024
007	322	095.005	374.856	1.499.425
007	322	042.511	-6.750	-27.000
007	322	082.000	-73	-293
007	322	087.000	-337	-1.349
007	322	059.000	-563	-2.250
007	322	081.000	-1.426	-5.704
008	322	087.000	-2.650	-10.600
008	322	042.720	-32.500	-130.000
008	322	059.000	-4.417	-17.667
008	322	095.005	191.193	764.770
008	322	042.511	-20.500	-82.000
008	322	081.000	-11.196	-44.785
008	322	082.000	-574	-2.297
009	322	042.720	-41.500	-166.000
009	322	059.000	-3.708	-14.833
009	322	081.000	-9.401	-37.603
009	322	082.000	-482	-1.928
009	322	087.000	-2.225	-8.900
009	322	095.005	798.533	3.194.130
009	322	042.511	-3.000	-12.000

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 248.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras y programas que se indican, los siguientes cargos:

UE	Programa	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad

UE	Programa	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
005	320	A	4	Asesor XII	Inspección Veterinaria	1
005	320	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	6
005	320	B	3	Técnico XII	Técnico	2
005	320	D	1	Especialista XIII	Especializado	2
005	320	D	1	Especialista XIII	Inspección Veterinaria	1
009	322	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	2

A efectos de financiar los cargos que se crean, suprímense en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", los siguientes cargos:

UE	Programa	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
005	320	B	11	Técnico IV	Veterinaria (Interior)	4
005	320	A	12	Asesor IV	Veterinaria (Montevideo)	8
005	320	D	6	Especialista VIII	Inspección Veterinaria	1
005	320	D	6	Especialista VIII	Inspección	1
005	320	A	12	Asesor IV	Inspección Veterinaria	1
005	320	A	12	Asesor IV	Veterinaria (Interior)	3
005	320	D	6	Especialista VIII	Laboratorio (Montevideo)	5
009	322	D	6	Especialista VIII	Inspección (Montevideo)	5
009	322	B	11	Técnico IV	Veterinaria (Interior)	2
009	322	A	12	Asesor IV	Agronomía (Interior)	1

El excedente resultante se asignará al objeto del gasto 099.001 "Partida Proyectada".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 249.- Suprímense en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en las unidades ejecutoras que se detallan, los siguientes cargos:

Unidad ejecutora	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
1	A	12	Asesor IV	Agronomía (Interior)	1
1	B	11	Técnico IV	Veterinaria (Interior)	1
1	D	8	Especialista VI	Dibujo (Montevideo)	1
1	F	6	Auxiliar I	Servicios (Montevideo)	1
2	A	13	Jefe de Sección	Biología Pesquera (Interior)	1
2	A	4	Asesor XII	Ciencias Económicas	1
2	B	11	Técnico IV	Técnico Productos Pesqueros (Montevideo)	2
2	B	3	Técnico XII	Administración	1
2	D	7	Especialista VII	Técnico Productos Pesqueros (Montevideo)	1
2	D	6	Especialista VIII	Telefonista (Montevideo)	1
2	F	6	Auxiliar I	Servicios (Montevideo)	1
2	F	1	Auxiliar VI	Servicios	1
2	R	12	Subjefe de Sección	Operación de Buques (Montevideo)	1
2	R	11	Asesor V	Operación (Montevideo)	1
2	R	6	Marinero Pescador	Tripulación Cubierta (Montevideo)	1
3	D	10	Jefe de Sección	Impresión (Montevideo)	1
3	D	6	Especialista VIII	Laboratorio (Interior)	1
3	E	6	Oficial II	Chofer (Montevideo)	1
3	F	6	Auxiliar I	Servicios (Interior)	1
4	B	12	Técnico III	Agronomía (Montevideo)	1
4	B	11	Técnico IV	Agronomía (Interior)	1
4	B	11	Técnico IV	Agronomía (Montevideo)	2
4	D	6	Especialista VIII	Agronomía	3

Unidad ejecutora	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
4	D	6	Especialista VIII	Agronomía (Montevideo)	1
4	D	6	Especialista VIII	Especialización	1
4	D	6	Especialista VIII	Inspección	1
4	D	6	Especialista VIII	Laboratorio	3
5	A	13	Jefe de Sección	Agronomía (Montevideo)	1
5	A	13	Jefe de Sección	Veterinaria (Interior)	1
5	A	12	Asesor IV	Inspección Veterinaria (Montevideo)	1
5	A	12	Asesor IV	Veterinaria (Interior)	1
5	A	12	Asesor IV	Biología Pesquera (Montevideo)	1
5	A	4	Asesor	Inspección Veterinaria	1
5	A	4	Asesor	Químico	1
5	A	4	Asesor	Veterinaria	12
5	A	4	Asesor XII	Abogacía	1
5	A	4	Asesor XII	Inspección veterinaria	1
5	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	1
5	A	4	Asesor XII	Veterinaria	17
5	B	11	Técnico IV	Inspección veterinaria (Interior)	3
5	B	11	Técnico IV	Laboratorio (Interior)	2
5	B	11	Técnico IV	Veterinaria	1
5	B	11	Técnico IV	Veterinaria (Interior)	7
5	B	3	Técnico	Veterinaria	5
5	B	3	Técnico XII	Veterinaria	1
5	D	10	Jefe de Sección	Dibujo (Montevideo)	1
5	D	8	Especialista VI	Inspección (Montevideo)	2
5	D	8	Especialista VI	Laboratorio (Montevideo)	2
5	D	7	Especialista VII	Inspección (Montevideo)	2
5	D	7	Especialista VII	Laboratorio (Montevideo)	3
5	D	6	Especialista VIII	Inspección (Montevideo)	38
5	D	6	Especialista VIII	Inspección Veterinaria	2
5	D	6	Especialista VIII	Inspección Veterinaria (Montevideo)	40

Unidad ejecutora	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
5	D	6	Especialista VIII	Laboratorio (Montevideo)	3
5	D	6	Especialista VIII	Telefonista (Montevideo)	1
5	D	1	Especialista XIII	Inspección	6
5	D	1	Especialista XIII	Laboratorio	3
5	E	6	Oficial II	Chofer (Montevideo)	1
5	F	6	Auxiliar I	Servicios (Montevideo)	1
5	F	1	Auxiliar VI	Servicios (Interior)	1
9	A	12	Asesor IV	Veterinaria (Interior)	1
9	C	8	Administrativo I	Administrativo (Interior)	1
9	C	6	Administrativo III	Administrativo (Interior)	1
9	E	6	Oficial II	Oficios (Montevideo)	1
9	F	6	Auxiliar I	Servicios (Montevideo)	2

Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", los siguientes cargos:

Unidad ejecutora	Escalafón	Grado	Denominación	Serie	Cantidad
1	C	1	Administrativo VIII	Administrativo	3
2	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	5
2	R	1	Asesor XV	Tripulación Cubierta	1
2	R	1	Asesor XV	Operación de Buques	1
3	C	1	Administrativo VIII	Administrativo	2
4	C	1	Administrativo VIII	Administrativo	8
5	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	27
5	B	3	Técnico XII	Inspección Veterinaria	3
5	B	3	Técnico XII	Técnico	11
5	C	1	Administrativo VIII	Administrativo	15
5	D	1	Especialista XIII	Inspección	20
5	D	1	Especialista XIII	Inspección Veterinaria	37
5	D	1	Especialista XIII	Especializado	10
5	F	1	Auxiliar VI	Servicios	1
9	A	4	Asesor XII	Profesional Universitario	1
9	D	1	Especialista XIII	Inspección	2

Las creaciones dispuestas precedentemente se financiarán con los créditos presupuestales que surjan de la supresión de cargos vacantes establecidas en el presente artículo; del crédito remanente que surja, se asignará un monto anual de $ 24.620.883 (veinticuatro millones seiscientos veinte mil ochocientos ochenta y tres pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales al objeto del gasto 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones especificas" de la unidad ejecutora 005 "Dirección General de Servicios Ganaderos", y $ 1.876.212 (un millón ochocientos setenta y seis mil doscientos doce pesos uruguayos) al objeto del gasto 099.001, "Partida proyectada" de la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 250.- Créanse en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", en la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", las siguientes Gerencias: Planificación Estratégica, Financiera, de Gestión Humana, de Tecnologías y Rediseño de Procesos y Jurídico Notarial, que dependerán funcionalmente de la Dirección General de Secretaría.

Facúltase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", a contratar gerentes para cada una de las gerencias referidas en el inciso anterior.

Las condiciones para la contratación serán las establecidas en los artículos 38 al 41 de la presente ley.

El monto de cada contrato individual no podrá superar el equivalente a $ 174.407 (ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos uruguayos) por todo concepto, ajustándose en la misma oportunidad y porcentaje que se disponga para los funcionarios de la Administración Central.

Las contrataciones previstas en la presente norma serán financiadas con cargo al objeto del gasto 095.005 "Fondo para financiar funciones transitorias y de conducción", según el siguiente detalle:

Unidad ejecutora	Programa	Proyecto	Objeto del gasto	Financiación	Importe en $
01	320	000	095.005	1.1	4.980.188
02	322	000	095.005	1.1	1.961.000

Unidad ejecutora	Programa	Proyecto	Objeto del gasto	Financiación	Importe en $
03	380	000	095.005	1.1	1.517.000
04	320	000	095.005	1.1	4.185.000
05	320	000	095.005	1.1	753.000
06	323	000	095.005	1.1	343.500
08	322	000	095.005	1.1	444.000

Artículo 251.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo establecido en el artículo 374 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020.

Artículo 252.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" a realizar las siguientes reasignaciones de créditos presupuestales de las partidas y por los montos que se detallan a continuación, más aguinaldo y cargas legales:

Unidad Ejecutora	Programa	Proyecto	Financiación	Objeto del gasto	Total anual
002	322	000	1.1	042.509	-169.560
002	322	000	1.1	042.510	-91.644
002	322	000	1.1	042.511	-970.872
004	320	000	1.1	042.510	-115.224
005	320	000	1.1	042.509	-428.928
005	320	000	1.1	042.510	-766.332
005	320	000	1.1	042.513	-7.913.592
005	320	000	1.1	042.520	-32.311.392
005	320	000	1.1	042.521	-820.560
001	320	000	1.1	042.509	931.872
002	322	000	1.1	042.509	3.306.780
003	380	000	1.1	042.509	621.240
004	320	000	1.1	042.509	2.484.972
005	320	000	1.1	042.509	33.456.384
005	320	000	1.1	042.520	1.712.628
009	322	000	1.1	042.509	1.074.228

Facúltase a la Contaduría General de la Nación a efectuar las reasignaciones dispuestas en este artículo a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 253.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) en un plazo máximo de ciento veinte días deberá culminar el estudio del proyecto presentado por el Centro de Viticultores del Uruguay referido a la producción de mosto concentrado, rectificado, sulfitado, azúcar de uva y productos similares, y en un plazo máximo de ciento ochenta días realizará un llamado público a interés para la instalación de una planta industrializadora de uva con destino a la elaboración de mosto concentrado, rectificado, sulfitado, jugo de uva y azúcar de uva o productos similares a excepción de vino. Dichos plazos comenzarán a computarse a partir de la promulgación de la presente ley.

En el llamado referido en el inciso anterior, INAVI determinará las condiciones técnicas y económicas del mismo, para lo que se tendrán en cuenta los insumos de los actores directamente involucrados en la producción vitícola.

Con el objetivo de proteger la producción vitivinícola se fijará anualmente por parte de INAVI un porcentaje de la producción de uvas que, por su calidad enológica, tengan menor demanda en el mercado en cada zafra en particular. La referida fijación deberá contar con el voto conforme de uno de los dos delegados del Centro de Viticultores del Uruguay, integrantes del Directorio del Instituto.

En caso de no fijarse el porcentaje antes de la fecha señalada, quedará vigente la del año anterior.

Artículo 254.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.503, de 30 de mayo de 2002, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.827, de 21 de octubre de 2011, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º (Creación).- Créase el Fondo de Fomento de la Granja con destino a:

A) Promover la integración de los productores granjeros a las cadenas agroindustriales y comerciales generadoras de valor, empleo y desarrollo productivo del sector granjero, con los siguientes instrumentos:

1) Apoyo financiero a los planes o proyectos de fomento e integración de la cadena agroindustrial y comercial granjera.

2) Apoyo financiero a los planes o proyectos que promuevan la inserción internacional de la producción.

3) Apoyo financiero a las inversiones asociativas en infraestructura, maquinaria y equipos declarados de interés en el marco de las políticas y planes de desarrollo granjero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

4) Apoyo financiero a las inversiones en infraestructuras de acceso a fuentes de agua o reserva y equipamiento de riego.

5) Apoyo a las organizaciones y sus productores con destino a capacitación, asistencia técnica, estudios de prefactibilidad y factibilidad, consultorías en temas de interés, fortalecimiento institucional y desarrollo tecnológico, investigación e innovación.

B) Establecer un sistema de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático a través de los siguientes instrumentos:

1) Promoción de los seguros granjeros mediante acciones vinculadas a capacitación y promoción de herramientas adecuadas.

2) Apoyo financiero para la contratación de los seguros granjeros.

3) Indemnizar, financiar o cofinanciar los efectos de emergencias granjeras no cubiertas por los sistemas de seguros vigentes.

C) Promover un sistema de garantías para el sector granjero aportando recursos para fondos de garantía existentes o a crearse.

D) Promover la inocuidad, sustentabilidad y calidad de productos y procesos en toda la cadena agroalimentaria granjera, a través de los siguientes instrumentos:

1) Desarrollo de herramientas de información útiles y accesibles, que permitan conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos procurando la trazabilidad de las

frutas, hortalizas y los productos apícolas en todos los eslabones de la cadena agroindustrial y comercial.

2) Certificación de productos y procesos que promuevan el acceso a los mercados más exigentes ofreciendo garantías de inocuidad, de calidad y sanitarias a los consumidores y los mercados internacionales.

3) Capacitación y asistencia técnica en temas de inocuidad, sustentabilidad, buenas prácticas agrícolas y calidad.

E) Apoyar iniciativas vinculadas al estudio, la difusión y transferencia de aquellas técnicas de mitigación o combate de las plagas y enfermedades que afectan la producción granjera, priorizando aquellas que favorezcan sistemas de producción más sostenibles.

F) Desarrollar iniciativas vinculadas a la mujer de la granja, diseñando medidas diferenciales para el acceso al crédito, a la asistencia técnica, capacitación y apoyo financiero a planes o proyectos, que permitan potenciar emprendimientos productivos comerciales e industriales, para contribuir al logro de reducir la desigualdad basada en el género.

G) Otorgar apoyo financiero a los productores granjeros por aportes al Banco de Previsión Social, generados en el período comprendido entre el 1º de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. El beneficio cubrirá el aporte mínimo de la contribución patronal rural prevista por el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986, y en caso de corresponder, el aporte patronal correspondiente al seguro por enfermedad establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 16.883, de 10 de noviembre de 1997.

Facúltase a la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a establecer la nómina de beneficiarios, forma y condiciones para su determinación.

Los apoyos financieros previstos en este artículo serán total o parcialmente reembolsables o no reembolsables, y su otorgamiento será

aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por resolución fundada, quien determinará las prioridades específicas inherentes para el uso de dicho fondo".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 255.- Sustitúyese el literal C) del artículo 16 de la Ley Nº 18.471, de 27 de marzo de 2009, y modificativas, por el siguiente:

"C) Coordinar sus planes y programas con otros organismos públicos, pudiendo conformar o integrar para ello comisiones o grupos de trabajo. En especial, el Instituto Nacional de Bienestar Animal deberá coordinar sus acciones, planes y programas con el Ministerio de Salud Pública, la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis de dicho Ministerio, la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En este sentido, se deberá conformar un grupo de trabajo entre representantes de los Ministerios referidos, a los efectos de que la actividad administrativa de estos y del Instituto estén coordinadas y se complementen.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición".

Artículo 256.- Sustitúyese el literal D) del artículo 17 de la Ley Nº 18.471, de 27 de marzo de 2009, en la redacción dada por el artículo 378 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"D) Confiscar de forma preventiva o definitiva aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores, aquellos que impliquen un peligro grave y cierto para la salud de otros animales o la integridad física o salud de las personas, así como aquellos que se encontraran gravemente heridos o enfermos sin recibir la atención adecuada de su tenedor, tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso. Dichos animales podrán ser esterilizados, identificados y registrados en el Registro Nacional de Animales de Compañía, si correspondiere".

INCISO 08

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Artículo 257.- Transfórmanse en el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", en los programas y unidades que se mencionan, las denominaciones y series de los cargos vacantes que se detallan a continuación:

UE	Programa	Cantidad de cargos	Escalafón/Grado	Denominación actual	Serie actual	Denominación transformada	Serie transformada
001	320	1	A 14	Asesor II	Abogado	Asesor II	Profesional
001	320	1	B 13	Técnico II	Computación	Técnico II	Técnico
001	320	1	C 11	Jefe de Sección	Administrativo	Administrativo	Administrativo
001	320	1	C 11	Jefe de Sección	Administrativo	Administrativo	Administrativo
001	320	1	C 8	Administrativo I	Administrativo	Administrativo II	Administrativo
001	320	1	C 8	Administrativo I	Administrativo	Administrativo II	Administrativo
002	320	1	B 13	Técnico II	Adm. Pública	Técnico II	Técnico
002	320	1	B 13	Técnico II	Analista Univ. en Adminis. y Cont.	Técnico II	Técnico
002	320	1	C 9	Subjefe de Sección	Administrativo	Administrativo I	Administrativo
004	320	1	A 15	Asesor I	Abogado	Asesor I	Profesional
004	320	1	A 14	Asesor II	Lic. en Relaciones Internacionales	Asesor II	Profesional
004	320	1	A 14	Asesor II	Arquitecto	Asesor II	Profesional
004	320	1	A 14	Asesor II	Abogado	Asesor II	Profesional
004	320	1	A 14	Asesor II	Abogado	Asesor II	Profesional
004	320	1	A 14	Asesor II	Abogado	Asesor II	Profesional
004	320	1	C 10	Jefe de Sección	Administrativo	Administrativo	Administrativo

UE	Programa	Cantidad de cargos	Escalafón/Grado	Denominación actual	Serie actual	Denominación transformada	Serie transformada
007	320	1	A 14	Asesor II	Escribano	Asesor II	Profesional
007	320	1	A 13	Asesor III	Abogado	Asesor III	Profesional
007	320	1	A 13	Asesor III	Licenciado en Geología	Asesor III	Profesional
007	320	1	A 13	Asesor III	Licenciado en Geología	Asesor III	Profesional
007	320	1	A 12	Asesor IV	Licenciado en Geología	Asesor IV	Profesional
007	320	1	A 11	Asesor V	Ingeniero Agrónomo	Asesor V	Profesional
007	320	1	B 13	Técnico II	Geología	Técnico II	Técnico
007	320	1	B 9	Técnico VI	Geología	Técnico VI	Técnico
007	320	1	B 7	Técnico VIII	Geología	Técnico VIII	Técnico
007	320	1	C 10	Jefe de Sección	Administrativo	Administrativo	Administrativo
007	320	1	C 9	Jefe de Sección	Administrativo	Administrativo I	Administrativo
007	320	1	C 6	Administrativo III	Administrativo	Administrativo IV	Administrativo
007	320	1	C 6	Administrativo III	Administrativo	Administrativo IV	Administrativo
007	320	1	D 10	Especialista V	Geología	Especialista V	Especialista
007	320	1	D 9	Especialista VI	Geología	Especialista VI	Especialista
007	320	1	E 8	Capataz I	Perforador	Oficial II	Oficios
007	320	1	E 8	Capataz I	Perforador	Oficial II	Oficios
007	320	1	E 6	Oficial IV	Chofer	Oficial IV	Oficios
008	540	1	A 16	Asesor	Físico	Asesor	Profesional
009	320	1	A 13	Asesor	Profesional	Asesor III	Profesional
009	320	1	A 13	Asesor	Contador o Economista	Asesor III	Profesional

UE	Programa	Cantidad de cargos	Escalafón/Grado	Denominación actual	Serie actual	Denominación transformada	Serie transformada
011	482	1	A 15	Asesor I	Médico	Asesor I	Profesional

Artículo 258.- Sustitúyense los numerales 1 y 5 del artículo 99 de la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 395 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por los siguientes:

"1 solicitud de registro de marcas	1.1 Denominativa	1 clase	1121,03558
	1.2 Denominativa	Por cada clase adicional	672,62135
	1.3 Emblemática o mixta	1 clase	1569,44982
	1.4 Emblemática o mixta	Por cada clase adicional	896,828466
	1.5 Otros signos marcarios	1 clase	1569,44982
	1.6 Otros signos marcarios	Por cada clase adicional	896,828466"

"5 denominaciones de origen e indicaciones geográficas	1 clase	2690,4854
	Por cada clase adicional	1569,44982"

Artículo 259.- Sustitúyese el artículo 57 del Código de Minería, aprobado por el Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, por el siguiente:

"ARTÍCULO 57.- Las violaciones en general de las disposiciones de este Código y de las reglamentaciones correspondientes, así como el incumplimiento de las obligaciones y cargas que dichas normas imponen y toda forma de obstaculizar o impedir la ejecución de las actividades mineras, constituyen infracciones sancionadas por este Código.

En el caso de las violaciones mencionadas precedentemente, que a juicio de la Dirección Nacional de Minería y Geología sean consideradas graves, los inspectores de dicho organismo dispondrán en forma preventiva la clausura total o parcial de la mina sin que dicha clausura constituya sanción administrativa".

Artículo 260.- Sustitúyese el artículo 59 del Código de Minería, aprobado por el Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 18.813, de 23 de setiembre de 2011, por el siguiente:

"ARTÍCULO 59.- Las infracciones administrativas serán objeto de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.

b) Multas, que se graduarán según la infracción y la circunstancia agravante de reiteración, en leves, graves y muy graves, entre 4.000 UI (cuatro mil unidades indexadas) y 1.600.000 UI (un millón seiscientas mil unidades indexadas). Corresponde al Poder Ejecutivo a través de la reglamentación, determinar la calificación de las infracciones de acuerdo a las categorías precedentes.

c) Caducidad del derecho minero.

d) Desestimación de la solicitud minera en trámite.

A los efectos de aplicar las sanciones dispuestas precedentemente, la administración evaluará la naturaleza de la infracción cometida e impondrá la que estime pertinente.

Las sanciones enunciadas en el presente artículo serán aplicadas sin perjuicio de la clausura dispuesta en el artículo 57 la que no reviste naturaleza sancionatoria".

Artículo 261.- Sustitúyese el artículo 116 del Código de Minería, aprobado por el Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, en la redacción dada por el artículo 306 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, con la modificación introducida por el artículo 227 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 116.- El propietario del predio superficial de ubicación del yacimiento o un tercero, sea este persona física o jurídica, a quien el propietario autorice, en virtud de la reserva establecida por el artículo 5º, puede realizar actividad extractiva siempre que el fin no sea la enajenación del mineral extraído, bajo estas condiciones:

A) Si la actividad extractiva no tiene escala industrial y es requerida por una obra accesoria al predio superficial. El propietario o, en su caso, quien sea autorizado por el propietario está facultado a

realizar la extracción sin necesidad de título minero, sin perjuicio de la vigilancia de las autoridades mineras y del sometimiento a los reglamentos de seguridad y salubridad y a las reglas que aseguren la racionalidad de los trabajos.

La autorización será otorgada por la Dirección Nacional de Minería y Geología, previa verificación de los extremos expuestos por un plazo de hasta tres años.

Dicho plazo podrá ser objeto de hasta un máximo de dos prórrogas o renovaciones por la mitad del período inicial de cada uno por resolución de la citada dirección, en tanto la explotación del referido yacimiento sea justificable por persistir las razones para su otorgamiento.

Para obtener esta autorización, el solicitante deberá, además, acreditar la obtención de las autorizaciones ambientales cuando corresponda conforme a la normativa vigente.

No corresponde constituir una servidumbre minera de paso cuando exista una servidumbre predial de paso previamente constituida (artículos 581 y siguientes del Código Civil, y artículos 51 y siguientes del Código Rural, Ley Nº 10.024, de 14 de junio de 1941) que permita el acceso al predio en el cual se ubica el yacimiento.

La Dirección Nacional de Minería y Geología dispondrá los instructivos pertinentes a los efectos del otorgamiento de la autorización para la actividad extractiva y la autorización del propietario a terceros para realizar actividad extractiva, a las que refiere este artículo.

B) En los demás casos la actividad minera solo podrá ejecutarse en virtud del título minero correspondiente.

C) Si la actividad extractiva tiene como destino la realización de obra pública, por parte de los organismos correspondientes".

Artículo 262.- Incorpórase al Código de Minería, aprobado por el Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 126 Bis. (Transporte de minerales o rocas).-

a) Todo transporte de minerales o rocas que se realice dentro del territorio nacional deberá ir acompañado por un certificado-guía en soporte electrónico o papel.

b) Las personas públicas, incluyendo los gobiernos departamentales, y privadas que realicen compras de minerales o contraten obras que requieran la extracción y transporte de minerales, deberán exigir un certificado de existencia y vigencia de la correspondiente concesión para explotar, así como la emisión y entrega de los pertinentes certificados-guías. En caso de incumplimiento la autoridad minera impondrá la sanción conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del presente compendio normativo.

c) El certificado-guía en soporte papel se podrá utilizar excepcionalmente en caso de fallas en los sistemas informáticos o falta de cobertura de red debidamente justificadas.

d) Los funcionarios habilitados de la Dirección Nacional de Minería y Geología, en ejercicio de sus funciones, deberán requerir la exhibición del certificado-guía correspondiente a un transporte de rocas o minerales y podrán proceder a la requisa de los materiales transportados y del vehículo de transporte.

   En caso de no exhibirse el correspondiente certificado-guía o que el mismo presente irregularidades, dichos funcionarios podrán inhabilitar temporalmente el vehículo para el transporte de minerales o, con el auxilio de la fuerza pública, proceder a la incautación del mineral y del vehículo, los que quedarán a disposición del Ministerio del Interior; ambas medidas serán de carácter preventivo y no poseen naturaleza sancionatoria.

e) El transportista que se negare a exhibir el certificado-guía requerido por el funcionario habilitado o que exhiba un certificado irregular cometerá infracción administrativa, al igual que quien haya procedido a la extracción del mineral transportado sin expedir certificado-guía o haya expedido un certificado irregular; ambos serán susceptibles de las siguientes sanciones:

   1) Apercibimiento.

2) Multa.

El Poder Ejecutivo reglamentará la entidad de la infracción y asignará la correspondiente sanción. Si la infracción es sancionada con apercibimiento no corresponden medidas preventivas. Si la sanción es de multa se podrán tomar medidas preventivas de inhabilitación temporal del vehículo para el transporte de minerales o incautación; dichas medidas se levantarán en el plazo de setenta y dos horas una vez constatado el pago de la multa.

Las sanciones enumeradas precedentemente serán impuestas al transportista, otorgándosele al momento de la constatación de la infracción la correspondiente vista previa por el funcionario habilitado que haya intervenido en la fiscalización, conforme a la reglamentación que determine la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Los fondos recaudados por concepto de multa serán destinados a la mejora en la fiscalización e inspección minera a nivel nacional, así como al fortalecimiento de la ejecución de las funciones, competencias y cometidos de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

f) La Dirección Nacional de Minería y Geología dispondrá los medios electrónicos para la emisión de los certificados-guías o, en su caso, expedirá a costo del solicitante los certificados-guías papel, siempre que se encuentren en condiciones legales para proceder a la efectiva explotación de dichos minerales. La Dirección Nacional de Minería y Geología llevará un registro de los certificados-guías emitidos y de los utilizados".

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo no mayor a ciento veinte días.

Artículo 263.- Sustitúyese el inciso quinto del artículo 103 del Código de Minería, aprobado por el Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, en la redacción dada por el artículo 229 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"Las prórrogas deben ser solicitadas dentro del plazo de validez de la concesión y serán otorgadas contra la presentación del nuevo programa

de operaciones (literal d) del numeral 3) del artículo 100 de este Código) y justificación de estar al día en el pago del canon de producción y de superficie. En este caso, mientras no exista pronunciamiento expreso de la autoridad minera, el titular mantendrá sus derechos y seguirá sujeto a todas las cargas y obligaciones inherentes a la posesión de la mina".

Artículo 264.- Exceptúase de lo dispuesto en el inciso G) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, a la presentación de las declaraciones juradas realizadas ante el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas previsto en el artículo 44 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 19.685, de 26 de octubre de 2018.

Artículo 265.- Establécese que las autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión comunitaria que fueron otorgadas por resoluciones del Poder Ejecutivo Nº 885/008, de 24 de octubre de 2008 y Nº 141/011, de 23 de marzo de 2011, y que continúen emitiendo, vencerán el 31 de diciembre de 2030.

Artículo 266.- Establécese que las autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión de radio y la correspondiente concesión de su uso y asignación de espectro radioeléctrico que fueron otorgadas por un plazo de diez años de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Nº 19.307, de 29 de diciembre de 2014, durarán hasta el 31 de diciembre de 2030.

Artículo 267.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 180 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"Autorízase a las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas, y grupos de personas organizadas sin fines de lucro, a continuar usufructuando la frecuencia radioeléctrica adjudicada hasta el 31 de diciembre de 2030, en caso de que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley cuenten con la autorización para brindar el servicio de radiodifusión comunitaria en la modalidad de frecuencias compartidas, y se encuentren emitiendo dicho servicio. Transcurrido el plazo previsto en esta norma deberán cesar las emisiones".

Artículo 268.- Transfórmase en el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", programa 482 "Regulación y Control", unidad ejecutora 011 "Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección", un cargo de Especialista IV, Serie Especialización, escalafón D, grado 11, en un cargo de Asesor XII, Serie Profesional, escalafón A, grado 4. Dicha transformación se financiará con

los créditos inherentes al cargo que se transforma más aguinaldo y cargas legales. El excedente resultante se asignará al objeto del gasto 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones específicas".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 269.- Incorpórase al artículo 1º de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 238 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, y con la modificación introducida por el artículo 171 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, el siguiente literal:

"J) Las referidas a la energía solar térmica".

Artículo 270.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 712 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"Los titulares de servicios de televisión para abonados, de señales de televisión que se emiten por servicios de televisión paga y de señales de televisión con autorización para emitir por aire en Uruguay podrán presentar una denuncia fundada ante la URSEC, bajo declaración jurada, debiendo agregar, como mínimo, los recaudos técnicos y jurídicos que la respalden, sin perjuicio del inicio de las acciones judiciales que puedan corresponder".

Artículo 271.- Agrégase a la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 53 BIS.- Créase el Registro de Software que será llevado por la unidad ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", del Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería" y que tendrá por objeto el registro de las siguientes obras referidas en el artículo 5º de la presente ley:

Programas de Ordenador (programas fuente o programas objeto).

Compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual.

Expresión de ideas, informaciones y algoritmos, formulada en secuencias originales ordenadas de forma apropiada para ser usada

por un dispositivo de procesamiento de información o de control automático.

También se inscriben en el Registro creado por este artículo, las transmisiones de los derechos patrimoniales sobre las obras referidas en el inciso anterior.

Las obras y derechos objeto de este Registro quedan exceptuados de la inscripción prevista en el artículo anterior.

La inscripción en el Registro de Software será facultativa, de manera que su omisión no perjudica en modo alguno el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley. Los contenciosos registrales que se suscitaren serán resueltos por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y estarán sujetos al régimen recursivo general".

El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de seis meses a contar desde la promulgación de la presente ley, reglamentará la organización y funcionamiento del Registro de Software, el inicio de actividades y el traspaso de las inscripciones existentes.

En igual plazo, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Minería, elevará al Poder Legislativo un proyecto de ley de creación de las tasas aplicables a los servicios que prestará el Registro en materia de inscripción de obras y de transmisión de derechos patrimoniales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir otros tipos de obras registrables de acuerdo al avance de la tecnología.

Artículo 272.- Sustitúyese el artículo 292 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 292.- Los alimentos de origen mayoritariamente vegetal que sean envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores en el territorio nacional, para los cuales la normativa exija rotulado nutricional, deberán constar de un etiquetado en su cara frontal indicando su origen vegetal siempre que utilicen denominaciones asociadas a productos de origen animal y sus derivados. Los elaboradores, importadores o fraccionadores, tendrán la responsabilidad del cumplimiento, veracidad y legibilidad del rotulado frontal de los alimentos envasados.

Se prohíbe por cinco años la importación, fabricación y comercialización en el país, de productos para alimentación humana sustitutos de la carne, producidos en laboratorio de manera artificial en base a cultivos de células de origen animal. Esta prohibición no será aplicable a la importación o fabricación en el país de dichos productos con fines de investigación científica o académica."

Artículo 273.- Agrégase a la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 292 BIS.- Créase en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería, una Comisión de Seguimiento de la tecnología de producción de alimentos en base al cultivo de células de origen animal en laboratorio, el cual estará integrado por un representante titular y un alterno de los siguientes Organismos:

A) Ministerio de Industria, Energía y Minería, que la presidirá.

B) Ministerio de Salud Pública.

C) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

D) Ministerio de Relaciones Exteriores.

E) Ministerio de Ambiente, y

F) CONICYT (Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología).

Los cometidos de la Comisión de Seguimiento serán los siguientes:

1) Asesorar al Poder Ejecutivo en la contratación y evaluación de estudios a realizarse para profundizar sobre el conocimiento de las tecnologías relacionadas con la producción de alimentos a partir del cultivo en laboratorio de células de origen animal. En particular, aunque no exclusivamente, se deben relevar los aspectos en la salud humana, el impacto ambiental del ciclo de vida completo de tales alimentos, así como el impacto de dichas tecnologías en la competitividad de nuestro sector exportador.

2) Encargar a los organismos correspondientes informes sobre la evolución del mercado internacional de los alimentos en relación con la introducción de estos nuevos productos, así como las normativas relacionadas con el cultivo de células animales en laboratorio con

destino a la alimentación humana, desde el punto de vista comercial, arancelario, sanitario y para arancelario en los mercados relevantes.

3) Elaborar, para su presentación al Poder Ejecutivo antes del vencimiento del plazo de la prohibición prevista en el artículo anterior, un informe de evaluación final sobre la producción, consumo, comercialización e importación de alimentos basados en el cultivo en laboratorio de células de origen animal".

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 274.- Agrégase a la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 292 TER. (Régimen de transición).- Las personas físicas o jurídicas que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, acrediten el desarrollo de actividades de importación, comercialización o fabricación de productos alimenticios que contengan células de cultivo animal producidas en laboratorio de manera artificial, por un período de al menos dos años, dispondrán de un plazo de dos años adicionales para adecuar sus productos o servicios sin incurrir en responsabilidad por infracción.

A tales efectos, mientras transcurra el plazo previsto en la presente ley, los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

A) El ejercicio de cualquiera de las actividades mencionadas en el párrafo que antecede deberá continuar siendo ejercida por la misma persona física o jurídica. Tratándose de personas físicas podrá ser transmitido a los ascendientes o descendientes directos del titular originario. En el caso de personas jurídicas, este derecho permanecerá en casos de modificación del tipo social pero no en aquellas que impliquen la disolución o absorción de la persona jurídica originaria.

B) Cuando se trate de alimentos que contengan células de cultivo animal producidas de manera artificial en un laboratorio, no podrán utilizarse para referirse a ellos, hacer publicidad o comercializar, nombres asociados a productos de origen animal y sus derivados, ni utilizar ninguna etiqueta, documento comercial, descripción o representaciones pictóricas, material

publicitario o forma de publicidad y de representación que indique, implique o sugiera que se trata de un alimento de origen animal y sus derivados.

A efectos de poder hacer uso de este régimen de transición, los interesados deberán acreditar ante la Dirección Nacional de Industrias el cumplimiento de los requisitos referidos".

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley.

INCISO 09

MINISTERIO DE TURISMO

Artículo 275.- Créase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Turismo", el Sistema Nacional de Inteligencia Turística (SNIT).

El referido sistema tendrá los siguientes objetivos: contribuir a la mejora de los procesos de planificación estratégica de todo el sector, incluidos los destinos turísticos emergentes; recopilar, organizar y analizar diferentes fuentes de información, elaborando cuadros de mando e informes dinámicos adaptados a las necesidades de los usuarios y posibilitando la descarga de los mismos.

El tratamiento de los datos integrados al referido sistema estará amparado por el secreto estadístico previsto en el artículo 17 de la Ley Nº 16.616, de 20 de octubre de 1994.

El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, definiendo los distintos integrantes del sistema y las formas de funcionamiento.

Artículo 276.- Asígnase una partida anual de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos) para el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", programa 322 "Cadenas de valor motores de crecimiento", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Turismo", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", para el fomento del destino "Termas".

Artículo 277.- Asígnase una partida anual de $ 16.000.000 (dieciséis millones de pesos uruguayos) para el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", programa 322 "Cadenas de valor motores de crecimiento", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Turismo", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación

1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", para el financiamiento de publicidad no tradicional.

Artículo 278.- Asígnase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", programa 320 "Fortalecimiento de la Base Productiva de Bienes y Servicios", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Turismo", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", a los efectos de auspiciar eventos deportivos internacionales de vela.

Artículo 279.- Reasígnase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Turismo", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 4.345.195 (cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento noventa y cinco pesos uruguayos) del programa 322 "Cadenas de valores motores de crecimiento", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", al programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", objeto del gasto 031.012 "Contrato zafral", aguinaldo y cargas legales, a efectos de financiar las contrataciones establecidas en el artículo 8º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

Artículo 280.- Reasígnase en el Inciso 09 "Ministerio de Turismo", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el programa 322 "Cadenas de valores motores de crecimiento", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Turismo", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", la suma de $ 4.066.250 (cuatro millones sesenta y seis mil doscientos cincuenta pesos uruguayos), al programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", objeto del gasto 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones específicas", aguinaldo y cargas legales, a efectos de financiar el pago de la compensación dispuesta por el artículo 428 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

INCISO 10

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 281.- Asígnase en el Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", programa 362 "Infraestructura vial", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 747 "Obra Pública Vial por concesión", objeto del gasto 549.004 "Subsidio CVU-CREMAF",

la suma de $ 428.170.000 (cuatrocientos veintiocho millones ciento setenta mil pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino a atender las obligaciones emergentes de los contratos de diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público (CREMAF) ejecutados a través de la Corporación Vial del Uruguay.

Artículo 282.- Los permisos de extracción de áridos subacuáticos otorgados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mayores de cincuenta metros cúbicos mensuales, correspondientes a las cuencas del río Santa Lucía, río Yí, río Negro, río Cebollatí, Río de la Plata y río Uruguay, solo podrán concederse si previamente se acredita haber obtenido la autorización del Ministerio de Ambiente.

Artículo 283.- Sustitúyese el artículo 348 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 348.- Facúltase al Poder Ejecutivo la transferencia de los bienes afectados al Área Administración y Mantenimiento Portuario, de la Dirección Nacional de Hidrografía a la Administración Nacional de Puertos".

Artículo 284.- En relación a los Capitanes de puertos a los que refiere el inciso tercero del artículo 20 de la Ley Nº 16.246, de 8 de abril de 1992, establécese que los Capitanes de los puertos de Colonia y Nueva Palmira percibirán una remuneración equivalente al 100% (cien por ciento) de la que percibe el Capitán del Puerto de Montevideo, y los restantes Capitanes de puertos percibirán una remuneración equivalente al 80% (ochenta por ciento) de la que percibe el Capitán del Puerto de Montevideo. Todos ellos tendrán los cometidos y facultades establecidos en los artículos 15 a 18 de dicha ley.

Artículo 285.- Las embarcaciones deportivas de bandera extranjera, que se encuentren en jurisdicción de la República, podrán obtener por única vez su abanderamiento nacional exonerado de todo recargo, incluso el mínimo, del Impuesto Aduanero Único a la Importación, de la Tasa de movilización de Bultos, de la Tasa Consular y, en general de todo tributo de importación o aplicable en ocasión de la misma, incluyendo el Impuesto Específico Interno y el Impuesto al Valor Agregado, abonando en su lugar como única prestación tributaria, el 5% (cinco por ciento) del valor de factura o declaración en valor de la referida embarcación, al momento del otorgamiento de la bandera nacional, siempre que la solicitud de abanderamiento nacional se realice hasta el 30 de

abril de 2024. Para solicitudes realizadas con posterioridad a dicha fecha, la prestación tributaria podrá ser de hasta el 10% (diez por ciento).

Dicha prestación será liquidada y recaudada por el Ministerio de Defensa Nacional. Lo recaudado tendrá como destino Rentas Generales.

A efectos de quedar comprendidos en lo dispuesto en el presente artículo, deberán cumplir con los requisitos previstos con carácter general para el abanderamiento nacional.

El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en que se aplicará la presente disposición.

Artículo 286.- Podrán tramitar licencia de conducir en calidad de profesional, incluidas las categorías para camiones sin límites de cargas, todas aquellas personas de hasta setenta y cinco años de edad, que cumplan con la aptitud psicofísica y técnica exigidas.

Artículo 287.- Agrégase a la Ley Nº 19.824, de 18 de setiembre de 2019, el siguiente artículo:

> "ARTÍCULO 26 BIS. Establécese como tope máximo de multa por exceso de velocidad en rutas nacionales la suma de 10 UR (diez unidades reajustables). En base a dicho tope se fijarán las graduaciones que correspondan".

Artículo 288.- Sustitúyese el artículo 328 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 328.- Autorízase al Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad" a aplicar multas por infracciones de tránsito por exceso de velocidad, una vez comprobadas mediante dispositivos de fiscalización electrónica u otros dispositivos que se instalen a esos fines, dentro de la red vial nacional bajo su jurisdicción.
>
> El 70% (setenta por ciento) de los fondos recaudados será destinado al financiamiento de obras de infraestructura vial concesionadas en el marco del contrato-convenio de 5 de octubre de 2001 y el acuerdo de 9 de febrero de 2006, suscritos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, por lo que serán vertidos a tales fines a esa Corporación.

El 20% (veinte por ciento) se destinará a la Universidad Tecnológica (UTEC) para el crecimiento de la oferta educativa en el interior del país. El tope de fondos recaudados para dicho destino será de $100.000.000 (cien millones de pesos uruguayos) anuales y, de existir un sobrante al término de cada año, será vertido a la Corporación Nacional para el Desarrollo a los efectos de cumplir con el destino establecido en el inciso anterior. Priorizando para el ejercicio 2024, y por única vez, se destinará una partida de hasta $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos) al Inciso 26 "Universidad de la República" para la adquisición de un resonador magnético para el Hospital Veterinario, con características que permitan su uso en la práctica clínica en pequeños y grandes animales.

El 10% (diez por ciento) restante será destinado para la adquisición de equipamiento en seguridad y mejora tecnológica, por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo en acuerdo con el Inciso 04 "Ministerio del Interior", por lo que será vertido a tales fines a esa Corporación. De ese total hasta un 50% (cincuenta por ciento) y con un máximo de $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos uruguayos) será destinado a un servicio de atención sanitaria en rutas. El referido servicio será gestionado por el Sistema Nacional de Emergencias el que coordinará su ejecución con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

El 100% (cien por ciento) de los costos de administración será trasladado al financiamiento de obras de infraestructura vial referidos en este artículo.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos presupuestales correspondientes de acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo".

Artículo 289.- Agrégase a la Ley Nº 19.824, de 18 de setiembre de 2019, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 26 TER.- No se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito".

Artículo 290.- Todo radar de control de velocidad en rutas nacionales deberá instalarse conjuntamente con un radar pedagógico, que advierta a los

conductores de la velocidad a la que deben transitar, a una distancia no menor a los 100 (cien) metros.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas elaborará un plan para cumplir con lo establecido en el inciso anterior. Transcurridos dieciocho meses desde la vigencia de la presente ley, serán nulas las multas que provengan de radares de velocidad que no cumplan con lo establecido en el inciso anterior.

Artículo 291.- Los organismos públicos competentes deberán facilitar la información de la geolocalización de los radares de control de velocidad a efectos de su conocimiento por la ciudadanía en medios de comunicación institucionales.

INCISO 11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Artículo 292.- Sustitúyese el literal M) del artículo 51 de la Ley Nº 18.437, de 12 de diciembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 145 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"M) Diseñar, aprobar y asegurar el funcionamiento de los procedimientos de reválida y reconocimiento de títulos, certificados o diplomas obtenidos en el extranjero sobre cualquier disciplina o formación académica, incluida la formación docente, conforme a los principios establecidos en los acuerdos internacionales suscritos por el país, con el fin de que sus titulares puedan generar oportunidades de empleo en profesiones reglamentadas por normas nacionales o ejercer actividades libres como asesoría, consultoría, enseñanza o investigación. El procedimiento respecto al reconocimiento de cualificaciones habilitantes para la incorporación a trayectos educativos vigentes se realizará de acuerdo con lo establecido en el literal L) del artículo 63 de la presente ley, en la redacción dada por el artículo 158 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, el literal F) del artículo 21 de la Ley Nº 12.549, de 16 de octubre de 1958, y demás normas pertinentes".

Artículo 293.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 19.852, de 23 de diciembre de 2019, por el siguiente:

"ARTÍCULO 4º. (Consejo Directivo).-

A) Integración.

El Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria estará dirigido y administrado por un Consejo Directivo integrado por diez miembros titulares y diez miembros alternos que serán designados por el Presidente de la República actuando en acuerdo con el Ministro de Educación y Cultura. De ellos, cinco titulares y sus alternos, según el sistema preferencial, serán propuestos por las instituciones terciarias públicas a través del Sistema Nacional de Educación Terciaria; tres titulares y sus alternos, según el sistema preferencial, serán propuestos por las instituciones terciarias privadas reconocidas o autorizadas para funcionar como tales a través del Consejo de Rectores, y dos y sus alternos serán propuestos por el Ministerio de Educación y Cultura, uno de los cuales lo presidirá, contando con doble voto en caso de empate.

Los miembros alternos serán convocados por el propio Consejo para integrarlo en los casos de licencia o impedimento de los miembros titulares.

Si las propuestas no fueran realizadas dentro del plazo de treinta días siguientes al requerimiento que el Ministerio de Educación y Cultura formule a quien corresponda, el Poder Ejecutivo podrá proceder a la designación prescindiendo de la respectiva propuesta.

En todos los casos deberá tratarse de personas que posean título universitario y que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Actuarán con autonomía técnica en el desempeño de sus funciones y su permanencia no estará condicionada al mantenimiento de la confianza del o los proponentes.

Durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser designados nuevamente por un solo período consecutivo, manteniéndose en sus cargos hasta la designación de quienes deberán sucederlos.

Durante su mandato, no podrán ocupar cargos en órganos de máxima dirección o gobierno de las instituciones de enseñanza terciaria públicas o privadas.

Solo podrán ser cesados por el Poder Ejecutivo por ineptitud, omisión o delito, o actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución.

B) Funcionamiento.

El Consejo Directivo funcionará con un quorum mínimo de seis miembros. Las resoluciones se adoptarán, con carácter general, por mayoría simple.

El Consejo Directivo contará con el apoyo técnico y administrativo de una secretaría designada a esos efectos".

Artículo 294.- Créanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 342 "Coordinación de la educación", unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Educación", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", los siguientes cargos:

Denominación	Serie	Escalafón	Grado
Asesor XII	Profesional	A	04
Asesor IX	Profesional	A	07
Asesor IX	Profesional	A	07
Asesor VII	Profesional	A	09
Técnico III	Técnico	B	06
Técnico I	Técnico	B	14
Administrativo	Administrativo	C	07
Administrativo	Administrativo	C	07
Administrativo	Administrativo	C	07
Administrativo	Administrativo	C	11
Administrativo	Administrativo	C	14

Las creaciones dispuestas en el inciso anterior, se financiarán con la supresión de los siguientes cargos del mismo Inciso, programa, unidad ejecutora y fuente de financiamiento:

Denominación	Serie	Escalafón	Grado
Asesor XII	Nutricionista-Dietista	A	04
Asesor VII	Asistente Social	A	09
Especialista III	Especialista	D	06
Especialista II	Promoción Social	D	07
Especialista II	Promoción Social	D	07
Especialista II	CECAP	D	07
Especialista II	CECAP	D	07
Especialista II	CECAP	D	07
Auxiliar IV	Servicios	F	01
Auxiliar III	Servicios	F	02
Docente	Maestro	J	03
Instructor	Gastronomía	J	03
Maestro Subjefe		J	11

El presente artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 295.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 16.624, de 10 de noviembre de 1994, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 17.801, de 18 de agosto de 2004, por el siguiente:

"ARTÍCULO 7º.- Todo espectáculo de conjunto musical extranjero deberá aportar al Fondo un 5% (cinco por ciento) del total de lo recaudado siendo su organizador el obligado al pago en carácter de contribuyente.

Si el mismo estuviera complementado por lo menos por un espectáculo nacional, aportará al Fondo el 3% (tres por ciento) del total de lo recaudado.

Por total de lo recaudado se entenderá el producido bruto de toda suma que por cualquier concepto se perciba en ocasión de realizarse el espectáculo, sin descuento alguno.

En el caso de presentación de un espectáculo de conjunto extranjero de música clásica, la participación de un espectáculo musical nacional podrá sustituirse por la inclusión de una obra de compositor nacional.

Las personas físicas o jurídicas que expenden tickets para los espectáculos mencionados oficiarán como agentes de retención del aporte dispuesto en el presente artículo, en las condiciones previstas por el artículo 23 del Código Tributario, y estarán sujetos a responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Los organizadores obligados deberán indicar ante los agentes de retención, en carácter de declaración jurada, el porcentaje que corresponda retener según lo dispuesto en este artículo.

El agente de retención deberá entregar al Fondo Nacional de Música la declaración jurada presentada por el organizador conjuntamente con el detalle de las entradas vendidas, su valor y las sumas retenidas.

En el caso de discrepancia entre el porcentaje aportado y el que hubiera correspondido de acuerdo a la naturaleza del espectáculo, motivará la reliquidación del aporte y su pago por parte del organizador dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la reliquidación.

El no pago por el organizador del espectáculo del aporte creado por este artículo hará recaer sobre el propietario del local o predio en que se efectúe el espectáculo su responsabilidad solidaria por el aporte impago".

Artículo 296.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 15.913, de 27 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTÍCULO 3º. (Definición).- Se entiende por libro toda obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes, tomos o fascículos, contenida en cualquier soporte susceptible de lectura, percepción auditiva o táctil o de cualquier otra naturaleza, existente o a crearse en el futuro".

Artículo 297.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 19.252, de 28 de agosto de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 11.- En cada una de las categorías, se adjudicarán, en los dos rubros, édito e inédito, los premios que se mencionan a continuación, estableciendo además que podrán otorgarse hasta tres

menciones en caso de que el jurado de cada categoría lo considere pertinente, no implicando esto retribución ni compromiso editorial alguno:

A) Poesía: un primer, segundo y tercer premio.

B) Narrativa: un primer, segundo y tercer premio.

C) Literatura infantil y juvenil: un primer, segundo y tercer premio. Si alguno de los premios recayera en un libro álbum, cuyas ilustraciones sean de diferente autoría y fundamentales para la historia, a los solos efectos de la premiación, los creadores se considerarán coautores de la obra.

D) Dramaturgia: un primer, segundo y tercer premio.

E) Ensayos literarios: un único premio.

F) Ensayos sobre historia, memorias, testimonios y biografías: un único premio.

G) Ensayos de filosofía: un único premio.

H) Ensayos de lingüística: un único premio.

I) Ensayos de ciencias de la educación: un único premio.

J) Ensayos sobre arte y música: un único premio.

K) Obras sobre ciencias jurídicas: un único premio".

Artículo 298.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 19.252, de 28 de agosto de 2014, por el siguiente:

"ARTÍCULO 16.- El primer premio o premio único de cada categoría de obras inéditas recibirá una suma de dinero para su edición. Las condiciones de publicación serán reguladas por el Ministerio de Educación y Cultura una vez dictados los fallos".

Artículo 299.- Agréganse al artículo 17 de la Ley Nº 19.252, de 28 de agosto de 2014, los siguientes incisos:

"Los representantes que integren tribunales no podrán ser designados nuevamente jurados en la categoría que integraron o cualquier otra categoría en la siguiente edición de los Premios Nacionales de Literatura.

En el caso de que alguno de los representantes que integren tribunales, luego de haber aceptado la nominación, renuncie al cargo, no podrá ser designado nuevamente jurado en la categoría que integró o cualquier otra categoría, en las siguientes tres ediciones de los Premios Nacionales de Literatura".

Artículo 300.- Sustitúyese el artículo 223 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, por el siguiente:

"ARTÍCULO 223.- El Estado premiará la labor de los compositores o autores musicales, ciudadanos uruguayos naturales o legales, en este último caso, con cinco años de residencia en el país debidamente acreditada, mediante Premios Nacionales de Música que se otorgarán en forma anual y por categorías, a obras inéditas tanto instrumentales como vocales realizadas por aquellos.

Los premios no podrán ser otorgados a título póstumo, con la excepción que el compositor o autor fallezca dentro del período comprendido entre su presentación al mismo y la emisión de los fallos por parte de los tribunales intervinientes.

En el caso de obras en coautoría, el premio se dividirá en partes iguales entre los coautores salvo pacto expreso de los mismos que varíe dicha distribución, sin importar quién haya presentado la obra".

Artículo 301.- Establécese que los cometidos que le fueran asignados por el artículo 3º del Decreto-Ley Nº 10.277, de 18 de noviembre de 1942, a la "Comisión Nacional de Bellas Artes", cuya denominación fue modificada por el artículo 268 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, por la de Comisión Nacional de Artes Plásticas, serán ejercidos por la Comisión Nacional de Artes Visuales, creada por el artículo 236 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 200 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

Interprétase que el "Premio Nacional de Artes Visuales" es la continuación del denominado "Salón Nacional de Artes Plásticas", creado por el Decreto-Ley Nº 10.277, de 18 de noviembre de 1942. El Premio Nacional de Artes Visuales,

al igual que su antecesor, es un concurso que convoca a artistas de todo el país con el fin de exhibir y premiar aquellas obras que sean seleccionadas.

Artículo 302.- Créase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 281 "Institucionalidad cultural", unidad ejecutora 008 "Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación", un cargo de Asesor IV, Serie Licenciado en Ciencias Biológicas-Paleontología, escalafón A "Profesional", grado 11.

A efectos de financiar la creación dispuesta en el inciso anterior, suprímese en el programa 280 "Bienes y servicios culturales", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" del mismo Inciso, un cargo de Asesor V, Serie Veterinario, escalafón A "Profesional", grado 11.

Este artículo entrará en vigencia a la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 303.- Créase el Programa de Movilidad para la Participación de Jóvenes Investigadores en Congresos Latinoamericanos, con el objeto de facilitar la participación de jóvenes investigadores como expositores, tanto en el ámbito nacional como internacional, en todas las áreas del conocimiento.

Podrán ser beneficiarios del referido Programa, estudiantes de maestría y doctorado, así como investigadores que hayan culminado su doctorado con una anterioridad máxima de siete años a la realización de cada llamado anual.

La titularidad y administración del mencionado programa corresponderá al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", a través de la unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología".

A tales efectos, asígnase en el programa 240 "Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental", del referido Inciso y unidad ejecutora, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), con destino al programa que se crea en el presente artículo.

Autorízase a la unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología", en el marco del programa que se crea, a celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Los ingresos que se generen por lo dispuesto precedentemente constituirán "Recursos con Afectación Especial" en los casos en que dichas

entidades no sean organismos del Presupuesto Nacional y estarán exceptuados de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación y Cultura, reglamentará la presente disposición.

Artículo 304.- Reasígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 280 "Bienes y servicios culturales", unidad ejecutora 016 "Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos", las siguientes partidas:

Objeto del gasto	Financiación	Importe ($)
591.000	1.1	-280.193.268
599.007	1.1	280.193.268
591.000	1.2	-58.279.357
599.007	1.2	58.279.357

Artículo 305.- Sustitúyese el artículo 92 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, por el siguiente:

"ARTÍCULO 92. (Minutas).- Los actos y negocios jurídicos que se presenten a inscribir, cualquiera sea la forma del documento que los contenga, deberán estar acompañados de minuta con los datos que el reglamento determine.

La minuta podrá ser suscrita por las partes, el escribano interviniente o el interesado en la gestión.

Cuando la Dirección General de Registros determine el envío de la minuta por medios digitales, el inscribiente adjuntará la imagen escaneada del documento que contiene el acto o negocio jurídico a inscribir, salvo que la presentación de dicho documento se efectúe en forma digital y con firma electrónica avanzada, de acuerdo con la facultad conferida por el artículo 133 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017.

En ambos casos, el Registro conservará las imágenes de los documentos presentados, como respaldo del asiento registral".

Artículo 306.- Créase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 200 "Asesoramiento, cooperación y representación", unidad ejecutora 020 "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo", un cargo de Abogado Adjunto, escalafón N.

La creación dispuesta en el inciso anterior se financiará parcialmente con la supresión de un cargo de Asesor, Serie Contador, escalafón A, grado 16 de la misma unidad ejecutora y programa.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 307.- Sustitúyese el artículo 208 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 208.- Autorízase el traslado de hasta cuarenta y siete funcionarios del Poder Judicial que se encuentren afectados a la prestación de tareas de apoyo en las funciones vinculadas a la calidad de oficiales de estado civil de los jueces de paz del interior de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, para desempeñar en comisión, tareas en la órbita de la unidad ejecutora 021 'Dirección General de Registro de Estado Civil', en las condiciones previstas por el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, y sus modificativas, quedando exceptuados de los topes establecidos por los incisos cuarto y quinto del artículo mencionado.

Los referidos traslados deberán contar con la aprobación del Poder Judicial".

Artículo 308.- Autorízase por razones fundadas de idoneidad técnica y necesidades de servicio el traslado de hasta tres funcionarios de organismos públicos estatales al Ministerio de Educación y Cultura para desempeñar tareas en comisión en la unidad ejecutora 020 "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo", en las condiciones previstas por el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, y sus modificativas, quedando exceptuados de los topes establecidos por los incisos 4 y 5 del artículo mencionado.

Artículo 309.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley Nº 20.010, de 10 de diciembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 14. (Comisión para la Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio).- Créase la Comisión para la Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio, con el cometido de elaborar una reforma integral de todos los procesos que se tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sus trámites previos, integrada por dos representantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dos representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un representante designado en acuerdo por las facultades de Derecho de las universidades privadas que cuenten con ella, dos representantes del Colegio de Abogados del Uruguay y un representante de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. Cada representante contará con dos alternos designados del mismo modo que el titular, los que podrán participar con voz pero sin voto en las deliberaciones. Dicha Comisión deberá elaborar un anteproyecto de ley en el plazo de un año a contar de su constitución, y deberá elevar su texto a la Presidencia de la Asamblea General conjuntamente con los informes que entienda pertinentes".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 310.- Modifícase la denominación de la unidad ejecutora 021 "Dirección General del Registro de Estado Civil", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", creada en el artículo 1º de la Ley Nº 1.430, de 11 de febrero de 1879, por la de "Dirección Nacional del Registro de Estado Civil".

Toda mención efectuada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, se considerará referida a la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil.

Modifícase la denominación del cargo de particular confianza "Director del Registro de Estado Civil", dispuesta por el artículo 513 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, por la de "Director Nacional del Registro de Estado Civil".

Artículo 311.- Sustitúyese el artículo 52 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, en la redacción dada por el artículo 378 de la Ley Nº 14.106, de 14 de marzo de 1973, por el siguiente:

"ARTÍCULO 52.- La documentación que expida la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil podrá ser firmada por el director, inspectores, supervisores, jefes de departamento, jefes de sección y aquellos

funcionarios que sean autorizados a tales efectos por resolución fundada de la Dirección".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 312.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley Nº 1.430, de 11 de febrero de 1879, en la redacción dada por el artículo 54 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964, y con la modificación introducida por el artículo 127 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, por el siguiente:

"ARTÍCULO 20.- Toda persona puede pedir testimonios de cualquiera de las actas del Registro de Estado Civil, y la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil y el gobierno departamental correspondiente, en su caso, estarán obligados a darlos.

En aquellos trámites que realicen los ciudadanos naturales o legales, ante organismos estatales o paraestatales cuyo objeto no requiera la prueba del vínculo filial, bastará la presentación de la cédula de identidad vigente, no pudiéndose exigir la presentación del testimonio de la partida de nacimiento.

Los testimonios de las actas del Registro de Estado Civil harán plena fe respecto de los hechos y actos a que refieren, tanto en juicio como fuera de él.

Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores el acceso a la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil por los funcionarios consulares, a quienes se faculta a expedir y suscribir testimonios de las partidas de estado civil que obran en sus bases de datos, ya sea radicadas en sus archivos centrales o los asentados en las Intendencias".

Artículo 313.- Créase en la órbita de la unidad ejecutora 025 "Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" el Registro de Interventores de Entidades sin fines de lucro, a los efectos de ejercer la facultad del Poder Ejecutivo conferida por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.089, de 12 de diciembre de 1980.

Cométese al Ministerio de Educación y Cultura la formulación del reglamento que regulará el funcionamiento del registro creado, tanto en relación a las calidades requeridas para su inscripción, mecanismo de asignación de intervenciones, régimen retributivo y sancionatorio, que deberá ser elevado al

Poder Ejecutivo para su aprobación. Sin perjuicio de otras disposiciones que deberán plasmarse en el reglamento, el mismo deberá contener normas que aseguren el llamado público a interesados a integrarlo, los criterios de evaluación de méritos y de conformación del orden del registro.

Los interventores serán contratados en la forma y condiciones que surjan del Reglamento. En los casos en que la entidad intervenida carezca de los medios suficientes como para hacer frente a los honorarios del interventor, los mismos serán contratados bajo el régimen previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

A efectos de financiar las contrataciones dispuestas en el inciso anterior, reasígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el programa 280 "Bienes y servicios culturales", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", la suma de $ 285.000 (doscientos ochenta y cinco mil pesos uruguayos) del objeto del gasto 031.000 "Retribuciones Zafrales y Temporales", más aguinaldo y cargas legales, al programa 200 "Asesoramiento, cooperación y representación", unidad ejecutora 025 "Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales", objeto del gasto 031.012 "Contrato Zafral Art. 8 Ley Nº 19.996", más aguinaldo y cargas legales.

Artículo 314.- Sustitúyese el artículo 286 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 286.- Habilítase a las unidades ejecutoras del Inciso 11 'Ministerio de Educación y Cultura', a disponer de las partidas presupuestales existentes en los objetos del gasto 042.015 'Compensación por asiduidad', 042.018 'Compensaciones especificas s/disposiciones marco normativo', 042.034 'Remuneración complementaria: funciones distintas al cargo', 042.510 'Compensación especial por funciones especiales', 042.514 "Compensación especial mayor responsabilidad p/Provisoriatos', 042.520 "Compensación especial por cumplir condiciones específicas' y 047.002 'Equiparación salarial tareas similar responsabilidad', con la finalidad de compensar la asignación de tareas especiales, especialmente encomendadas, distintas al cargo, de mayor responsabilidad o dedicación, por cumplir condiciones específicas y que contribuyen con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de dichas unidades o del Inciso en general.

Facúltase al jerarca del Inciso a realizar las trasposiciones de crédito entre los objetos del gasto detallados en el inciso primero y las unidades ejecutoras para el cumplimiento de tal fin".

Artículo 315.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a atender el pago de aportes patronales correspondientes al Ministerio de Educación y Cultura, de las sentencias de condena dictadas en los expedientes identificados con la IUE 2-56607/2014 y 27-58/2020, por el período comprendido entre enero de 2011 a diciembre de 2021, con cargo al crédito presupuestal del objeto del gasto 711.000 "Sentencias judiciales Art. 52 Ley Nº 17.930".

Artículo 316.- Exceptúase de la aplicación del artículo 56 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 20.153, de 26 de mayo de 2023, a los cargos técnicos y técnicos profesionales de la unidad ejecutora 008 "Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

Artículo 317.- Los asesores externos, nacionales o extranjeros que sean contratados por el Ministerio de Educación y Cultura para que informen en las solicitudes de reválida y reconocimiento de títulos, certificados o diplomas obtenidos en el extranjero, en el marco de lo dispuesto en el literal M) del artículo 51 de la Ley Nº 18.437, de 12 de diciembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 145 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, serán remunerados mediante el régimen de "dieta".

La Dirección Nacional de Educación abonará el pago correspondiente de acuerdo a la remuneración que el Ministerio de Educación y Cultura determine. Las dietas que perciban dichos asesores son acumulables con todo tipo de remuneración de actividad o pasividad, sea de naturaleza pública o privada, permanente o eventual.

Artículo 318.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 240 "Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental", unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino al fortalecimiento de las actividades del Centro Latinoamericano de Biotecnología.

Artículo 319.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 200 "Asesoramiento, cooperación y representación", unidad ejecutora 020 "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino a atender gastos de funcionamiento.

Artículo 320.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 280 "Bienes y Servicios Culturales", unidad ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" (SECAN), Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024.

Artículo 321.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", unidad ejecutora 020 "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo", una partida por única vez de $ 1.530.000 (un millón quinientos treinta mil pesos uruguayos) con destino a la adecuación, reparación y adquisición de elementos de infraestructura.

El Ministerio de Educación y Cultura comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 322.- Créase el Departamento de Comunicación de la unidad ejecutora 008 "Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", y el cargo de Jefe de dicho departamento.

A los efectos de financiar lo dispuesto en el inciso anterior, asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", unidad ejecutora 008 "Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.

El Ministerio de Educación y Cultura comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 323.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, a constituir una fundación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 17.163, de 1º de setiembre de 1999.

La fundación que se constituirá, que se denominará Fundación de Amigos del Museo Escuela del Sur, tendrá como fin principal la creación y gestión de un museo dedicado a la Escuela del Sur, fundada por Joaquín Torres García.

El Poder Ejecutivo queda habilitado a transferir o ceder a la fundación que se crea, en carácter de aporte, a título gratuito, los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para su instalación y funcionamiento.

Facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar convenios con la Fundación de Amigos del Museo Escuela del Sur, que supongan la contratación de sus servicios por parte del Ministerio de Educación y Cultura, así como la utilización por parte de la Fundación de recursos de la secretaría de Estado.

Facúltase, asimismo, al Poder Ejecutivo a realizar transferencias monetarias a la Fundación, a través del Ministerio de Educación y Cultura.

Este artículo entrará en vigencia a la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 324.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 19.852, de 23 de diciembre de 2019, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 9º.- Autorízase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" a fijar las remuneraciones o dietas de los miembros del Consejo Directivo".

Artículo 325.- Facúltase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología", a realizar contratos laborales de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y por el artículo 195 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, en la redacción dada por el artículo 285 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, en lo que sea de aplicación para desempeñar tareas técnicas y administrativas vinculadas a la gestión de programas y proyectos de la citada unidad ejecutora.

A efectos de financiar lo dispuesto en el inciso anterior, asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 281 "Institucionalidad Cultural", unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 095.004 "Fondo para Contratos Laborales", una partida anual de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024.

Artículo 326.- Créase el Gran Premio Nacional de Ciencias, que se otorgará en forma trienal, como reconocimiento a los logros de científicos uruguayos que se hayan desempeñado tanto en el país como en el exterior.

Los candidatos podrán ser propuestos por instituciones universitarias o de investigación con reconocimiento oficial, así como por grupos de no menos de cinco académicos pertenecientes a cualquiera de las academias que integran el jurado. Las propuestas deberán presentarse debidamente fundadas y deberán ir acompañadas del currículum del candidato.

A efectos de financiar la creación del Gran Premio Nacional de Ciencias, reasígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", una partida de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), al Programa 321 "Cadenas de Valor Intensivas en Innovación", unidad ejecutora 012 "Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores".

El Ministerio de Educación y Cultura comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se disminuyen.

Artículo 327.- Transfórmanse en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", unidad ejecutora 011 "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable", la denominación y escalafón de los siguientes cargos ocupados que se detallan:

	Cargos a transformar				Cargos transformados			
Cant.	Esc.	Grado	Denominación	Serie	Esc.	Grado	Denominación	Serie
8	D	13	Investigador Asistente	Asistente	A	13	Profesor Agregado de Investigación	Profesional
16	D	11	Investigador Ayudante	Ayudante	A	11	Profesor Adjunto de Investigación	Profesional

Los mismos serán ocupados exclusivamente por los funcionarios cuya situación dio origen a las respectivas transformaciones. En ningún caso las transformaciones previstas en el presente artículo podrán significar lesión de derechos funcionales. Los cargos serán equiparados a los de la Universidad de la República, como lo indica el artículo 202 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, que establece el carácter docente de los investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y que mantendrán su carácter de dedicación total.

Artículo 328.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Programa 240 "Innovación, Investigación y Desarrollo Experimental", unidad ejecutora 011 "Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable", a partir del ejercicio 2024, un monto de $ 10.000.000 (diez millones de pesos uruguayos) para el Proyecto 762 "Equipamiento Científico" Objeto del Gasto 799.000 "Otros gastos" para el "Programa Una Salud".

Artículo 329.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTÍCULO 36.- El intérprete de una obra literaria o musical tiene el derecho de exigir una retribución por su interpretación difundida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la televisión, internet o redes digitales de cualquier tipo, o bien grabada o impresa sobre disco, película, cinta, hilo o cualquier otra substancia, medio o cuerpo apto para la reproducción sonora o visual. No llegándose a un acuerdo se recurrirá al Tribunal Arbitral establecido en el artículo 58 de la presente ley".

Artículo 330.- Agrégase al literal A) del artículo 39 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, el siguiente inciso:

"Artistas intérpretes o ejecutantes, respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones de temas musicales en audiovisuales, generan en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. Se establece asimismo que las entidades de gestión debidamente autorizadas a funcionar ejercerán la representación de artistas intérpretes o ejecutantes, de acuerdo a la reglamentación del Poder Ejecutivo, y según lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003".

Artículo 331.- Agrégase al artículo 58 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, en la redacción dada por el artículo 20 de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, el siguiente inciso:

"Declárase que las entidades de gestión colectiva de productores, sea cual fuere el objeto de su actividad, solo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagren expresamente en favor de los mismos".

Artículo 332.- Agrégase al artículo 24 de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, el siguiente inciso:

"Los derechos de comunicación al público de compositores, directores y guionistas serán percibidos por la entidad de gestión colectiva autorizada a funcionar".

Artículo 333.- Cuando los estatutos de las asociaciones civiles, cualquiera sea el objeto de las mismas, para la distribución y adjudicación de los cargos dentro de sus órganos, no establezcan un sistema específico o solo se refieran al sistema de representación proporcional o de representación proporcional integral, sin otra aclaración o calificativo, se entenderá que se remiten al régimen regulado para la elección de los Senadores de la República.

Artículo 334.- Facúltase al Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" a contratar, bajo el régimen de provisoriato establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, a quienes, a la fecha de la promulgación de la presente ley, se encuentren desempeñando en la unidad ejecutora 018 "Dirección General de Registros" tareas permanentes propias de un funcionario público, y hayan sido contratados bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, sea directamente o a través de otras instituciones, y tengan una antigüedad de, por lo menos, seis meses a la fecha de vigencia de la presente ley.

Las contrataciones que se realicen al amparo del presente artículo, estarán exceptuadas de los procedimientos regulados en los artículos 93 y 94 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013. Será requisito previo la realización de una prueba de suficiencia organizada por la unidad ejecutora, con la supervisión de un tribunal que deberá incluir a dos representantes de los trabajadores.

Estas contrataciones deberán realizarse en el último grado del escalafón correspondiente de la unidad ejecutora, creando las vacantes para este fin, los cuales mantendrán su nivel retributivo.

Una vez adecuada la retribución del funcionario al cargo presupuestado, la diferencia entre esta y su nivel retributivo anterior será asignada como una compensación personal transitoria, que se irá absorbiendo en futuros ascensos.

El presente artículo no podrá implicar costo presupuestal ni de caja. Autorízase a la Contaduría General de la Nación a reasignar al Grupo 0 "Servicios Personales" los créditos presupuestales desde gastos de

funcionamiento del Inciso, a efectos de financiar lo establecido en esta disposición.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 335.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 18.384, de 17 de octubre de 2008, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 1º. (Alcance subjetivo).- La actividad de los artistas intérpretes o ejecutantes y las actividades u oficios conexos a dicha profesión se regirán por las disposiciones de la presente ley.
>
> Se entiende por artista, creador, intérprete o ejecutante a todo aquel que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra artística, la dirija o realice cualquier actividad similar a las mencionadas, sea en vivo o registrada en cualquier tipo de soporte para su exhibición pública o privada, así como los autores y artistas visuales, plásticos, compositores y escritores.
>
> Se entiende por oficios conexos, aquellas actividades derivadas de las definidas en el inciso anterior y que impliquen un proceso creativo."

Artículo 336.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, a constituir una fundación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 17.163, de 1º de setiembre de 1999.

La fundación a constituir se denominará "Fundación Uruguay Cultura" (FUCU), y tendrá como fines principales promover la internacionalización de la cultura uruguaya en sus diferentes modalidades, promover el intercambio y la cooperación cultural, e incentivar la diversificación de la oferta cultural local con actividades provenientes del exterior.

Habilítase al Poder Ejecutivo a transferir o ceder a la "Fundación Uruguay Cultura", en carácter de aporte, a título gratuito, los bienes muebles e inmuebles y derechos necesarios para su instalación, no pudiendo disponer transferencias de recursos adicionales para su posterior funcionamiento.

Artículo 337.- Los beneficiarios de fondos y apoyos económicos de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura residentes en el interior del país, estarán eximidos de realizar la inscripción en el Registro

de Beneficiarios del Estado hasta tanto dicho trámite no se encuentre accesible en su totalidad en todo el territorio nacional, ya sea en forma virtual o presencial en oficinas descentralizadas.

Artículo 338.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 420 "Información Oficial y Documentos de Interés Público", unidad ejecutora 007 "Archivo General de la Nación", proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, para financiar las tareas de reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos.

Artículo 339.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura, programa 200 "Asesoramiento, cooperación y representación" unidad ejecutora 020, "Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo", proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores" una partida anual de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) con destino a atender gastos de funcionamiento derivados de la reforma del sistema contencioso anulatorio.

Artículo 340.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 280 "Bienes y Servicios Culturales" unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Cultura", proyecto 000, "Funcionamiento" objeto del gasto 559.000, "Transferencias Corrientes a otras instituciones sin fines de lucro" Financiación 1.1, "Rentas Generales" una partida de $ 18.000.000 (dieciocho millones de pesos uruguayos) con destino a los Centros Culturales Nacionales.

La asignación dispuesta se financiará con la supresión de vacantes que a tales efectos el Ministerio de Educación y Cultura comunicará a la Contaduría General de la Nación, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.

Vencido el plazo dispuesto precedentemente, autorízase a la Contaduría General de la Nación a suprimir las vacantes necesarias para la financiación dispuesta.

Artículo 341.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 342 "Coordinación de la Educación", unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Educación", proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 559.000 "Transferencias corrientes a otras

instituciones sin fines de lucro", una partida anual de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, que será destinada al funcionamiento del Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET), creado por la Ley Nº 19.852, de 23 de diciembre de 2019.

La asignación dispuesta se financiará con la supresión de vacantes que a tales efectos el Ministerio de Educación y Cultura comunicará a la Contaduría General de la Nación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.

Vencido el plazo dispuesto precedentemente, autorízase a la Contaduría General de la Nación a suprimir las vacantes necesarias para la financiación dispuesta.

Artículo 342.- Asígnase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 200 "Asesoramiento, Cooperación y Representación", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Financiamiento 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 559.000 "Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro", una partida anual de $ 1.200.000 (un millón doscientos mil pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, para aplicar como contrapartida nacional de la instalación y funcionamiento del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en el marco del Convenio que se celebrará con dicha entidad para la inauguración de un Laboratorio Internacional de Investigación (IRL) en Matemáticas en nuestro país.

Las partidas serán liberadas por el Ministerio de Educación y Cultura previa rendición de cuentas de partidas anteriores y presentación de proyectos a atender con los fondos entregados, todo en los términos y condiciones que surjan del acuerdo a celebrar con dicha entidad.

La asignación dispuesta se financiará con la supresión de vacantes que a tales efectos el Ministerio de Educación y Cultura comunicará a la Contaduría General de la Nación en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.

Vencido el plazo dispuesto precedentemente, autorízase a la Contaduría General de la Nación a suprimir las vacantes necesarias para la financiación dispuesta.

Artículo 343.- Reasígnase desde el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 280 "Bienes y servicios culturales", unidad ejecutora 016

"Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos", objeto del gasto 042.522 "Diferencia a tabla", la suma de $ 7.013.268 (siete millones trece mil doscientos sesenta y ocho pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales, hacia el Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 280 "Bienes y servicios culturales", unidad ejecutora 011 "Ministerio de Educación y Cultura", objeto del gasto 749.012 "Partidas a Reaplicar-Fdo. Desarrollo Artist y Cultural SODRE", de acuerdo a lo dispuesto en el literal A) del inciso segundo del artículo 203 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011.

Artículo 344.- Suprímense en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 280 "Bienes y servicios culturales", unidad ejecutora 016 "Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos", los siguientes puestos de trabajo:

DESCRIPCION		DSC1	DSC2	DESCRIPCION	DESCRIPCION
PRESUPUESTADOS CIVILES		A	4	DEN: ASESOR XI	SERIE: LICENCIADO EN PSICOLOGIA
PRESUPUESTADOS CIVILES		A	4	DEN: ASESOR XII	SERIE: BIBLIOTECOLOGO
PRESUPUESTADOS CIVILES		A	9	DEN: ASESOR VI	SERIE: LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGIA
PRESUPUESTADOS CIVILES		A	11	DEN: ASESOR IV	SERIE: ABOGADO
PRESUPUESTADOS CIVILES		A	11	DEN: ASESOR IV	SERIE: ABOGADO
PRESUPUESTADOS CIVILES		A	11	DEN: ASESOR IV	SERIE: CONTADOR
PRESUPUESTADOS CIVILES		A	15	DEN: ASESOR I	SERIE: ABOGADO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	1	DEN: ADMINISTRATIVO IV	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	1	DEN: ADMINISTRATIVO IV	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	1	DEN: ADMINISTRATIVO VI	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO

DESCRIPCION		DSC1	DSC2	DESCRIPCION	DESCRIPCION
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	2	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	3	DEN: ADMINISTRATIVO II	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	4	DEN: ADMINISTRATIVO I	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	4	DEN: ADMINISTRATIVO I	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	4	DEN: ADMINISTRATIVO III	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		C	8	DEN: JEFE	SERIE: ADMINISTRATIVO
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		C	10	DEN: JEFE DE DEPARTAMENTO	SERIE: ADMINISTRATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	1	DEN: ESPECIALISTA V	SERIE: INFORMATIVO
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	1	DEN: ESPECIALISTA V	SERIE: SONIDO TEATRO
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	1	DEN: ESPECIALISTA VIII	SERIE: UTILERO TEATRO
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	1	DEN: ESPECIALISTA VIII	SERIE: COPISTA
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	1	DEN: ESPECIALISTA VIII	SERIE: LUTHIER
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	1	DEN: ESPECIALISTA VIII	SERIE: ASIST. MAQUILLAJE
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	2	DEN: ENCARGADO DE LABORATORIO	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	2	DEN: MAQUINISTA DE TERCERA	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	3	DEN: MAQUINISTA DE SEGUNDA	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	4	DEN: LUMINOTECNICO I	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	4	DEN: LUMINOTECNICO I	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	4	DEN: LUMINOTECNICO I	
PRESUPUESTADOS		D	4	DEN: RADIOFONISTA	

DESCRIPCION		DSC1	DSC2	DESCRIPCION	DESCRIPCION
CIVILES				DE TERCERA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	5	DEN: ARCHIVISTA	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	5	DEN: JEFE	SERIE: FOTOGRAFO
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	6	DEN: RADIOFONISTA DE PRIMERA	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	6	DEN: SUB JEFE DE LUMINOTECNIA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: AYUDANTE ARCHIVISTA	
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	8	DEN: JEFE	SERIE: TECNICO FOTOTECA
PRESUPUESTADOS CIVILES		D	8	DEN: JEFE LUMINOTECNICO	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	9	DEN: CUERPO DE BAILE	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	9	DEN: CUERPO DE BAILE	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	9	DEN: CUERPO DE BAILE	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	11	DEN: SOLISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS		D	7	DEN: CORISTA	

DESCRIPCION		DSC1	DSC2	DESCRIPCION	DESCRIPCION
PERMANENTES CIVILES					
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	7	DEN: CORISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		D	9	DEN: CORISTA SOLISTA	
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	1	DEN: OFICIAL V	SERIE: SASTRERIA
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	1	DEN: OFICIAL V	SERIE: SASTRERIA
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	2	DEN: MODISTA	
CONTRATOS PERMANENTES CIVILES		E	3	DEN: OFICIAL V	SERIE: OFICIOS
PRESUPUESTADOS		E	4	DEN: OFICIAL IV	SERIE: OFICIOS

DESCRIPCION		DSC1	DSC2	DESCRIPCION	DESCRIPCION
CIVILES					
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	4	DEN: OFICIAL IV	SERIE: LUMINOTECNIA TEATRO
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	4	DEN: OFICIAL IV	SERIE: OFICIOS
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	4	DEN: OFICIAL ZAPATERO	
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	5	DEN: ENCARGADO DE SASTRERIA	SERIE: OFICIOS
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	5	DEN: OFICIAL I	SERIE: ELECTRICISTA
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	5	DEN: OFICIAL III	SERIE: OFICIOS
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	7	DEN: ENCARGADO DE ZAPATERIA	
PRESUPUESTADOS CIVILES		E	7	DEN: JEFE DE SECCION	SERIE: CARPINTERIA
PRESUPUESTADOS CIVILES		F	1	DEN: AUXILIAR IV	SERIE: SERVICIOS
PRESUPUESTADOS CIVILES		F	3	DEN: AUXILIAR II	SERIE: SERVICIOS
PRESUPUESTADOS CIVILES		F	7	DEN: ENCARGADO	SERIE: CHOFER
DOCENTES (ESCALAFON J)		J	3	DEN: INSTRUCTOR	SERIE: FOLKLORE
DOCENTES (ESCALAFON J)		J	3	DEN: INSTRUCTOR	SERIE: TECNICA VOCAL
DOCENTES (ESCALAFON J)		J	9	DEN: MAESTRO	
DOCENTES (ESCALAFON J)		J	9	DEN: MAESTRO	
DOCENTES (ESCALAFON J)		J	9	DEN: MAESTRO	
DOCENTES (ESCALAFON J)		J	9	DEN: MAESTRO	

Reasígnanse los créditos presupuestales correspondientes a los puestos de trabajo suprimidos, más aguinaldo y cargas legales, al Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 280 "Bienes y servicios culturales", unidad ejecutora 011 "Ministerio de Educación y Cultura, Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 749.012 "Partida a Reaplicar- Fdo. Desarrollo Artist y Cultural SODRE", de acuerdo a lo dispuesto en el literal A) del inciso segundo del artículo 203 de la Ley N° 18.834, de 04 de noviembre de 2011.

INCISO 12

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Artículo 345.- Asígnase en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", unidad ejecutora 103 "Dirección General de la Salud", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 000 "Funcionamiento", una partida anual de $ 13.600.000 (trece millones seiscientos mil pesos uruguayos) en el programa 440 "Atención Integral de la Salud", y una partida anual de $ 56.300.000 (cincuenta y seis millones trescientos mil pesos uruguayos) en el Programa 442 "Promoción en Salud", con destino a atender los cometidos en salud mental y adicciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Programa	Objeto del gasto	Importe en $
440	559.000	12.420.000
440	222.000	1.180.000
442	222.000	440.000
442	559.000	55.860.000

Artículo 346.- Sustitúyese el inciso quinto del literal D) del artículo 18 de la Ley Nº 18.335, de 15 de agosto de 2008, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018, por el siguiente:

"La historia clínica es de propiedad del paciente, será reservada y solo podrán acceder a la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con estos; el paciente o, en su caso, la familia; el Ministerio Público, cuando se trate de la historia clínica de una víctima de un delito cuya investigación tenga bajo su dirección, siempre que recabe previamente el consentimiento de aquella o, en su caso de la familia, y a los solos efectos de la acción penal, y el Ministerio de Salud Pública, cuando lo considere pertinente.

La Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, el Fondo Nacional de Recursos y la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria podrán solicitar, en forma fundada, ante el Ministerio de Salud Pública el acceso a la historia clínica, cuando ello sea indispensable para el cumplimiento de sus cometidos legales y no sea posible proceder a la disociación de datos.

El Ministerio de Salud Pública valorará la pertinencia de la solicitud y previa vista por el plazo de 10 días hábiles al paciente, emitirá una resolución fundada al respecto. En caso de acceder a lo requerido, el prestador de salud dejará registro en la historia clínica a efectos de comunicarlo al paciente.

Lo dispuesto en este artículo no afecta las competencias, atribuciones y poderes jurídicos atribuidos a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer según lo dispuesto en la Ley Nº 16.097, de 29 de octubre de 1989, ni su capacidad de acceso a la historia clínica en cualquier plataforma.

A los efectos de lo establecido en el inciso anterior, el médico al comunicar al paciente un diagnóstico de cáncer, o dentro de los 30 días siguientes, le informará acerca de la necesidad del registro epidemiológico de sus datos en el Registro Nacional de Cáncer dependiente de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer. Los profesionales que recolecten los datos así como todos los que accedan a los mismos, quedan obligados a mantener la confidencialidad de dichos datos".

Artículo 347.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, con la modificación introducida por el artículo 295 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 16.- Las entidades que se integren al Sistema Nacional Integrado de Salud ajustarán su actuación a las normas técnicas que dicte el Ministerio de Salud Pública y quedarán sujetas a su contralor.

Cuando el Ministerio de Salud Pública, en el ejercicio de sus competencias y en observancia de los principios y objetivos rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud, detecte situaciones en materia de financiamiento de sus actividades o graves problemas de funcionamiento institucional que puedan comprometer en un corto o mediano plazo la continuidad de una entidad prestadora integral de salud, tanto a nivel asistencial como económico financiero, podrá designar uno o más veedores por un período de hasta seis meses, a los solos efectos de recabar información sobre todos los aspectos involucrados en la operativa de la misma. Dicho período se podrá prorrogar por un plazo de hasta seis meses. Dichos veedores elevarán un informe a la Dirección General del Sistema Nacional de Salud en un plazo de diez días hábiles posteriores a recabar la referida información y

dicha dirección comunicará el informe a la entidad prestadora integral de salud correspondiente en un plazo de diez días hábiles posteriores a su recepción.

La tarea de dichos veedores será sin costo para las instituciones prestadoras de salud".

Artículo 348.- Sustitúyese el artículo 344 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, por el siguiente:

"ARTÍCULO 344.- Quedan exceptuados de la prohibición establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, modificativas y concordantes, el personal técnico y profesional de la salud perteneciente al Hospital del Banco de Seguros del Estado, siempre que no exista coincidencia total o parcial con los horarios establecidos para el cumplimiento de sus funciones".

Artículo 349.- Quedan exceptuados de la prohibición establecida por el artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, modificativas y concordantes, aquellos profesionales de la salud del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", unidad ejecutora 104 "Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos", que desempeñen funciones en el "Centro de Producción de Terapias Avanzadas".

En tales casos el límite horario será de ochenta horas semanales de labor en el conjunto de actividades.

Lo dispuesto en este artículo entrará a regir a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 350.- Asígnase en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 440 "Atención integral de la salud", unidad ejecutora 104 "Instituto Nacional de Donación y Trasplante de células, tejidos y órganos", Proyecto 406 "Centro de Producción de Terapias Avanzadas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 199.000 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos) a efectos de financiar gastos de funcionamiento del "Centro de Producción de Terapias Avanzadas", creado por el artículo 213 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

Artículo 351.- Agréganse al artículo 2º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 18.968, de 14 de setiembre de 2012, los siguientes incisos:

"Todo establecimiento asistencial público o privado está obligado a comunicar al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, todo fallecimiento acaecido en la institución y deberá brindarle los datos que dicho instituto determine.

El establecimiento asistencial entregará el cuerpo del fallecido una vez que haya realizado dicha comunicación.

Asimismo, todo establecimiento asistencial público o privado está obligado a informarle a dicho instituto, la nómina total de fallecidos acaecidos en la institución dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente. El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos será quien determine los datos que deben ser incluidos en el informe".

Artículo 352.- Facúltase a la unidad ejecutora 104 "Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos" del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" a controlar, cuando lo considere oportuno, los egresos de las unidades de cuidados intensivos de los establecimientos asistenciales públicos o privados a efectos de corroborar la información brindada por dichas instituciones.

Artículo 353.- Autorízase al Poder Ejecutivo, previo informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, a designar en cargos presupuestados del último grado del escalafón respectivo, al personal de las Comisiones de Apoyo y de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, que se encuentre prestando funciones en dependencias del Ministerio de Salud Pública, por al menos doce meses al momento de la promulgación de la presente ley, creándose los cargos para este fin.

Las designaciones se deberán realizar bajo el régimen de provisoriato establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021. Los jerarcas respectivos deberán acreditar el buen desempeño del personal y las necesidades del servicio para incorporarlos.

Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, aumento del grado del funcionario, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.

Autorízase a la Contaduría General de la Nación a reasignar en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" del grupo 5 "Transferencias" al grupo 0 "Servicios Personales", los créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, incluyendo aguinaldo y cargas legales. La presente disposición no podrá generar costo presupuestal ni de caja.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

INCISO 13

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 354.- Reasígnase en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", programa 501 "Relaciones y condiciones laborales", Financiación 1.1 "Rentas Generales", los créditos presupuestales que se determinan, de acuerdo al siguiente detalle:

Unidad ejecutora	Objeto del gasto	Monto en $
001	042.520	173.203
001	059.000	14.434
001	081.000	36.589
001	092.000	-1.438.249
001	082.000	1.876
001	087.000	8.660
002	042.520	546.968
002	059.000	45.581
002	081.000	115.547
002	082.000	5.925
002	087.000	27.348
004	042.520	340.942
004	059.000	28.412
004	081.000	72.024
004	082.000	3.693

Unidad ejecutora	Objeto del gasto	Monto en $
004	087.000	17.047

La presente reasignación tiene como destino financiar lo dispuesto en los artículos 469 y 471 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, 150 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017 y 195 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018.

Artículo 355.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 292 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"La misma alcanzará hasta un máximo de veinticinco funcionarios y no podrá superar el 30% (treinta por ciento) de las remuneraciones de naturaleza salarial".

Artículo 356.- Reasígnase en el Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", programa 501 "Relaciones y condiciones laborales", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el objeto del gasto 092.000 "Partidas globales a distribuir", la suma de $ 2.439.750 (dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, al objeto del gasto 042.014 "Compensación por permanencia a la orden", más aguinaldo y cargas legales, a los efectos de financiar la modificación dispuesta en el inciso segundo del artículo 292 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo anterior.

Artículo 357.- Agrégase a la Ley Nº 19.973, de 13 de agosto de 2021, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 20 Bis. (Programa Yo Estudio y Trabajo para el Sector Privado).- Créase el programa Yo Estudio y Trabajo para el Sector Privado, orientado a generar una primera experiencia laboral a jóvenes de entre 16 y 20 años, que estén cursando estudios en la educación formal o no formal.

A tales efectos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocará anualmente a empresas y jóvenes a participar del mismo, estableciendo los requisitos y condiciones para la ejecución del programa.

Dispónese un aporte estatal no reembolsable de hasta $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) mensuales por cada joven que contraten las empresas en el marco de este programa en régimen de 20 horas semanales, con cargo al financiamiento previsto en el artículo 48 de la presente ley.

Una vez culminado el contrato, si la empresa mantiene al joven en su plantilla se beneficiará con la exoneración de los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social correspondientes a ese contrato de trabajo mientras se continúe ese vínculo laboral. Esta exoneración se extenderá hasta que el joven cumpla 25 años. Los montos serán actualizados anualmente por el índice medio de salarios".

Artículo 358.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley Nº 19.973, de 13 de agosto de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 21. (No acumulabilidad).- El aporte estatal referido en los artículos 19 y 20 Bis de la presente ley, no será acumulable con ninguna otra prestación o subsidio vinculados al fomento del empleo y relacionados con el trabajador incorporado".

Artículo 359.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 19.973, de 13 de agosto de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 22. (Facultad del Poder Ejecutivo).- Facúltase al Poder Ejecutivo a suspender el aporte establecido en los artículos 19 y 20 Bis o dejarlo sin efecto, en todo o en parte, con carácter general".

Artículo 360.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 18.516, de 26 de junio de 2009, por el siguiente:

"ARTÍCULO 6º. (Registro de aspirantes).- A los efectos de la gestión de los sorteos, se implementará un registro de aspirantes al trabajo por categoría, en el que podrán registrarse aquellas personas que residan en un radio de cien kilómetros de la zona en la que se realizarán las obras, en forma independiente de las fronteras departamentales.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, instrumentará el mecanismo de dicho registro y la forma de acreditar la vecindad de las personas aspirantes.

En el momento de realizarse el sorteo público deberá ponerse a disposición de los presentes la lista completa con los nombres de

quienes participan en el mismo y el número que identifica a cada uno de ellos en el sorteo".

Artículo 361.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 18.516, de 26 de junio de 2009, por el siguiente:

"ARTÍCULO 9º. (Lista de espera).- Los obreros inscriptos que por exceso de aspirantes no hayan sido beneficiados en el sorteo, se ordenarán en una lista de espera, igualmente confeccionada por sorteo, con las prelaciones establecidas en el artículo 8º de la presente ley. Los obreros comprendidos en esa lista serán llamados sucesivamente para ocupar las vacantes que se produzcan en esa obra y durante un plazo de doce meses.

Cuando esté por agotarse la lista o terminado el plazo se llamará a nuevo sorteo".

Artículo 362.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley Nº 18.246, de 27 de diciembre de 2007, por el siguiente:

"ARTÍCULO 20.- Para determinar los derechos y obligaciones de seguridad social a que hubiere lugar, la prueba de los extremos requeridos por los artículos 1º y 2º de la presente ley se realizará en principio en el organismo previsional que correspondiere según la inclusión de los servicios respectivos, pudiendo la reglamentación establecer los mecanismos de coordinación que correspondan, y sin perjuicio de la eficacia que a tal fin tendrá, en lo pertinente, el reconocimiento judicial obtenido conforme a lo previsto en la ley.

Si el interesado pretende invocar el fallo judicial ante uno o más institutos de previsión social, con el propósito de gestionar una o más pensiones de sobrevivencia, deberá necesariamente emplazarlo conjuntamente con todos los institutos contra los cuales se pretenda hacer valer, so pena de no resultarles vinculante".

Artículo 363.- Dispónese que en tanto no esté operativa la Agencia Reguladora de la Seguridad Social creada por el artículo 236 de la Ley Nº 20.130, de 2 de mayo de 2023, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 250 de la citada ley, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultado a determinar el o los organismos públicos responsables de realizar los informes e intervenciones preceptivas previstas en la normativa.

Artículo 364.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 20.129, de 28 de abril de 2023, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2º.- Todo trabajador o trabajadora, tanto en la actividad privada como en la pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su relación laboral o funcional, tendrá derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, hasta cuatro horas al mes, a los efectos de acompañar a su cónyuge, concubina o pareja a los controles de embarazo. Dichas horas se computarán como trabajadas a todos los efectos legales y reglamentarios y no podrán ser descontadas del salario o remuneración".

INCISO 14

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 365.- Transfiérense de pleno derecho las unidades de propiedad horizontal que integran complejos habitacionales sitos en el departamento de Maldonado, localidad catastral Maldonado, empadronadas individualmente con los números: 16.297/001 a 16.297/017, 16.358/A/001 a 16.358/A/004, 16.358/A/101 a 16.358/A/104, 16.358/B/001 a 16.358/B/004, 16.358/B/101 a 16.358/B/104, 16.358/C/001 a 16.358/C/004, 16.358/D/001 a 16.358/D/004, 16.358/E/001 a 16.358/E/004, 16.358/F/001 a 16.358/F/004, 16.358/G/001 a 16.358/G/004, 16.358/H/001 a 16.358/H/004, 16.358/I/001 a 16.358/I/004, 16.358/J/001 a 16.358/J/004, 16.358/K/001 a 16.358/K/004, 16.358/K/101 a 16.358/K/104, 16.358/L/001 a 16.358/L/004, 16.358/L/101 a 16.358/L/104, 16.358/M/001 a 16.358/M/004, 16.358/N/001 a 16.358/N/004, 16.358/O/001 a 16.358/O/004, 16.358/P/001 a 16.358/P/004, 16.358/Q/001 a 16.358/Q/004, 16.358/R/001 a 16.358/R/004, 16.358/S/001 a 16.358/S/004, 16.358/T/001 a 16.358/T/004, 16.358/U/001 a 16.358/U/004, 16.358/V/001 a 16.358/V/004, 16.358/W/001 a 16.358/W/004, 16.358/X/001 a 16.358/X/004, 16.358/Y/001 a 16.358/Y/004, 16.358/Z/001 a 16.358/Z/004, 16.358/AA/001 a 16.358/AA/004, 16.358/AB/001 a 16.358/AB/004, 16.358/AC/001 a 16.358/AC/004, 16.358/AC/101 a 16.358/AC/104, 16.358/AD/001 a 16.358/AD/004, 16.358/AD/101 a 16.358/AD/104, 16.358/AE/001 a 16.358/AE/004, 16.358/AF/001 a 16.358/AF/004, 16.358/AG/001 a 16.358/AG/004, 16.358/AH/001 a 16.358/AH/004, 16.358/AI/001 a 16.358/AI/004, 16.358/AJ/001 a 16.358/AJ/004, 16.358/AJ/101 a 16.358/AJ/104, 16.358/AK/001 a 16.358/AK/004, 16.358/AK/101 a 16.358/AK/104, 16.358/AL/001 a 16.358/AL/004, 16.358/AM/001 a 16.358/AM/004, 16.358/AN/001 a 16.358/AN/004, 16.358/AO/001 a 16.358/AO/004, 16.358/AP/001 a

16.358/AP/004, 16.358/AQ/001 a 16.358/AQ/004, 16.358/AR/001 a 16.358/AR/004, 16.358/AS/001 a 16.358/AS/004, 16.358/AT/001 a 16.358/AT/004, 16.358/AU/001 a 16.358/AU/004, 16.358/AV/001 a 16.358/AV/004, 16.358/AW/001 a 16.358/AW/004, 16.358/AX/001 a 16.358/AX/004, 16.358/AY/001 a 16.358/AY/004, 16.358/AZ/001 a 16.358/AZ/004, 16.358/BA/001 a 16.358/BA/004, 16.358/BB/001 a 16.358/BB/004, 16.358/BC/001 a 16.358/BC/004, 16.358/BD/001 a 16.358/BD/004; 16.296/001 al 16.296/022, y 2521/A/001 a 2521/A/004, 2521/B/005 a 2521/B/012, 2521/C/013 a 2521/C/024, 2521/D/025 a 2521/D/032, 2521/E/033 a 2521/E/044, 2521/F/045 a 2521/F/052, 2521/G/053 a 2521/G/060, 2521/H/061 a 2521/H/068, 2521/I/069 a 2521/I/076, 2521/J/077 a 2521/J/084, 2521/K/085 a 2521/K/092, 2521/L/009 a 2521/L/016, 2521/M/001 a 2521/M/008, 2521/N/017 a 2521/N/032, 2521/O/033 a 2521/O/036, 2521/P/037 a 2521/P/052, 2521/Q/053 a 2521/Q/064, 2521/R/065 a 2521/R/072, 2521/S/073 a 2521/S/084, 2521/T/085 a 2521/T/096, 2521/U/001 a 2521/U/008, 2521/V/001 a 2521/V/003, 2521/W/001 a 2521/W/003, 2521/X/001 a 2521/X/003, propiedad de la Agencia Nacional de Vivienda en su calidad de fiduciaria de los fideicomisos: "Cartera Inmuebles IX - Fideicomiso Financiero", "Fideicomiso Social V - Fideicomiso Financiero" y "Fideicomiso Comercial y Social VI - Fideicomiso Financiero", a la Intendencia de Maldonado, ratificándola en la posesión que la misma ya tiene tomada.

La transferencia de la propiedad establecida en el inciso anterior comprende la totalidad de los derechos y obligaciones de que la Agencia Nacional de Vivienda en su calidad de fiduciaria sea titular, sin necesidad de notificación o consentimiento, cualquiera sea su naturaleza y fecha de devengamiento, a cambio de la deuda que dicha agencia, en su calidad de fiduciaria, mantiene en concepto de contribución inmobiliaria de los referidos padrones con la Intendencia de Maldonado.

Lo dispuesto en este artículo operará como título y modo de dichas traslaciones de dominio, bastando su inscripción en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, un testimonio de la presente disposición, el que podrá ser complementado con certificados notariales que contengan los datos pertinentes para el correcto asiento registral, y quedarán exoneradas dichas inscripciones de todo tributo registral.

Artículo 366.- Agrégase al artículo 331 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, el siguiente inciso:

> "La intimación de pago realizada en la forma indicada en el inciso anterior o por cualquier otro medio legal interrumpirá la prescripción

prevista en los artículos 1216 y 1217 del Código Civil cuando los acreedores sean el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia Nacional de Vivienda, por sí, en calidad de fiduciario o de administrador a cualquier título".

Artículo 367.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007, por el siguiente:

"ARTÍCULO 34. (Privilegio en la gestión y recuperación de créditos).- Respecto de los créditos originados en otras instituciones, así como sus novaciones o refinanciaciones, la Agencia, en su carácter de acreedor, administrador o fiduciario -en este último caso, solo si el beneficiario es público-, tendrá los mismos privilegios que la entidad que concedió el crédito, comprendidos el derecho de ordenar la retención de sueldos y prestaciones de seguridad social, venta extrajudicial de bienes hipotecados, la rescisión administrativa de promesas de compraventa de inmuebles y otros que pudieran corresponder legalmente.

La Agencia queda facultada, en caso de frustrarse el remate señalado en el artículo 2º de la presente ley, a disponer de una nueva subasta con una base que no podrá ser inferior al valor real vigente del inmueble fijado por la Dirección Nacional de Catastro.

No obstante, la Agencia tendrá la potestad de solicitar la adjudicación en pago de la propiedad a que refiere el artículo 82 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 (Ley Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay) en la redacción dada por el artículo 477 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, a favor de aquellos acreedores legitimados a disponer de la venta extrajudicial de bienes hipotecados, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 36 de la presente ley, en la redacción dada por el artículo 474 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, la que será decretada por juez competente, con la sola presentación de la Resolución de Directorio donde conste la intimación realizada al deudor y su incumplimiento, conforme a la normativa y reglamentación vigentes, otorgándose la misma por el importe equivalente al valor de rápida convertibilidad según tasación realizada por tasador designado por la propia Institución.

Respecto de otros créditos que gestione la Agencia, la recuperación de créditos se regirá por lo dispuesto en el Capítulo III de la presente ley.

La orden de retención que disponga la Agencia tendrá igual prioridad que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y, cuando concurra con una orden similar del BHU, se priorizará la que proceda del crédito más antiguo".

Artículo 368.- Sustitúyese el literal C) del artículo 381 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

"C) Las solicitudes de información registral, hasta tres por cada inmueble en los actos previstos en el literal A), y hasta dos por cada inmueble, referidas a los actos previstos en el literal B)".

Artículo 369.- Transfiérense, de pleno derecho y a título gratuito, del Banco Hipotecario del Uruguay al Banco de Previsión Social la propiedad del Complejo Habitacional F 10 A ubicado en el inmueble empadronado con el número 19.769 (diecinueve mil setecientos sesenta y nueve) del departamento de Rivera, compuesto por diecisiete unidades de propiedad horizontal, empadronadas individualmente con los números 19769/001, 19769/002, 19769/003, 19769/004, 19769/005, 19769/006, 19769/007, 19769/008, 19769/101, 19769/102, 19769/103, 19769/104, 19769/105, 19769/106, 19769/107, 19769/108, 19769/109, y la propiedad del Complejo Habitacional CR 91 ubicado en el inmueble empadronado con el número 55.591 (cincuenta y cinco mil quinientos noventa y uno) del departamento de Montevideo, compuesto por ochenta y ocho unidades de propiedad horizontal, empadronadas individualmente con los números 55591/001, 55591/002, 55591/003, 55591/004, 55591/005, 55591/006, 55591/007, 55591/008, 55591/009, 55591/010, 55591/011, 55591/012, 55591/013, 55591/014, 55591/015, 55591/016, 55591/017, 55591/018, 55591/019, 55591/020, 55591/021, 55591/022, 55591/023, 55591/024, 55591/025, 55591/026, 55591/027, 55591/028, 55591/101, 55591/102, 55591/103, 55591/104, 55591/105, 55591/106, 55591/107, 55591/108, 55591/109, 55591/110, 55591/111, 55591/112, 55591/113, 55591/114, 55591/115, 55591/116, 55591/117, 55591/118, 55591/119, 55591/120, 55591/121, 55591/122, 55591/123, 55591/124, 55591/125, 55591/126, 55591/127, 55591/128, 55591/129, 55591/130, 55591/201, 55591/202, 55591/203, 55591/204, 55591/205, 55591/206, 55591/207, 55591/208, 55591/209, 55591/210, 55591/211, 55591/212, 55591/213, 55591/214, 55591/215, 55591/216, 55591/217, 55591/218, 55591/219, 55591/220, 55591/221, 55591/222, 55591/223, 55591/224, 55591/225, 55591/226, 55591/227, 55591/228, 55591/229, 55591/230).

La transferencia de propiedad establecida en el inciso anterior comprende la totalidad de los derechos y obligaciones de que el Banco Hipotecario del

Uruguay sea titular, sin necesidad de notificación o consentimiento, cualquiera sea su naturaleza y fecha de devengamiento.

Lo dispuesto en este artículo operará como título y modo de dichas traslaciones de dominio, bastando su inscripción en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, un testimonio de la presente disposición, el que podrá ser complementado con certificados notariales que contengan los datos pertinentes para el correcto asiento registral, y quedarán exoneradas dichas inscripciones de todo tributo registral.

Artículo 370.- Transfiérese, de pleno derecho y a título gratuito, del Banco Hipotecario del Uruguay a la Administración de los Servicios de Salud del Estado la propiedad del Complejo Habitacional CR 90 ubicado en el inmueble empadronado con el número 408.483 (cuatrocientos ocho mil cuatrocientos ochenta y tres) del departamento de Montevideo, compuesto por cuarenta y seis unidades de propiedad horizontal, empadronadas individualmente con los números 408483/001, 408483/002, 408483/003, 408483/004, 408483/005, 408483/006, 408483/007, 408483/008, 408483/009, 408483/010, 408483/011, 408483/012, 408483/013, 408483/014, 408483/015, 408483/016, 408483/017, 408483/018, 408483/019, 408483/020, 408483/021, 408483/022, 408483/023, 408483/024, 408483/025, 408483/026, 408483/027, 408483/028, 408483/029, 408483/101, 408483/102, 408483/103, 408483/104, 408483/105, 408483/106, 408483/107, 408483/108, 408483/109, 408483/110, 408483/111, 408483/112, 408483/113, 408483/114, 408483/115, 408483/116, 408483/117.

La transferencia de propiedad establecida en el inciso anterior comprende la totalidad de los derechos y obligaciones de que el Banco Hipotecario del Uruguay sea titular, sin necesidad de notificación o consentimiento, cualquiera sea su naturaleza y fecha de devengamiento.

Lo dispuesto en este artículo operará como título y modo de dichas traslaciones de dominio, bastando su inscripción en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, un testimonio de la presente disposición, el que podrá ser complementado con certificados notariales que contengan los datos pertinentes para el correcto asiento registral, y quedarán exoneradas dichas inscripciones de todo tributo registral.

Artículo 371.- Sustitúyese el artículo 80 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay), en la redacción dada por el artículo 476 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 80.- El Banco podrá ejecutar judicialmente a sus deudores o proceder a la venta de las propiedades hipotecadas por sí, y sin forma alguna de juicio, ordenando el remate público con una base del 50% (cincuenta por ciento), del valor de tasación del inmueble, realizada por tasador designado por el propio Banco, en los siguientes casos y cuando:

1) Falten, en la época fijada en el contrato, al pago de las cuotas y dejen transcurrir noventa días sin reparar la falta, no solicitar espera, la que podrá ser concedida o negada.

2) En los préstamos en dinero efectivo, sin anualidades, el deudor no pagare la deuda a su vencimiento, procediendo a la ejecución, noventa días después del vencimiento, si no se le acordara alguna prórroga.

3) En el caso de siniestro, a que se refiere el artículo 69 de la presente ley, no se reconstruya la propiedad.

La ejecución deberá estar precedida de una intimación de pago al deudor principal y al hipotecante, si este último es persona distinta de aquel. La referida intimación, para el caso de ser extrajudicial, deberá ejecutarse por cualquier medio fehaciente y surtirá efecto interruptivo de la prescripción.

Interrumpida por la intimación la prescripción, comenzará a contarse nuevamente el término legal de la misma desde que se hizo la última gestión extrajudicial notificada en el domicilio contractual al deudor.

La ejecución será con plazo de diez días hábiles a contar desde el día hábil siguiente a la intimación efectuada por medio fehaciente".

Artículo 372.- A los efectos de dar cumplimiento a la publicidad dispuesta en el numeral 1) del artículo 81 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay), bastará con que los anuncios referidos contengan únicamente la denominación del rematador y la del organismo ejecutante, la fecha y hora del remate, el lugar de realización, el nombre del deudor, la individualización del inmueble ejecutado, y el link o enlace informático al sitio web institucional donde surgirá la publicación completa.

Artículo 373.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay), en la

redacción dada por el artículo 182 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, por el siguiente:

"ARTÍCULO 61.- Por el hecho de otorgar la escritura respectiva, los deudores transfieren a la institución los derechos que les acuerda el artículo 1844 del Código Civil. El Banco no hará entrega alguna al prestatario sin que previamente el empresario de las obras o constructor se haya notificado de la cesión a que se refiere el inciso precedente".

Artículo 374.- Sustitúyese el literal A) del artículo 18 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay), en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007, por el siguiente:

"A) Otorgar créditos en moneda nacional, unidades indexadas o unidades reajustables, con garantía hipotecaria:

a) A personas físicas para la adquisición, construcción, refacción y ampliación de la vivienda y para la adquisición de un terreno con destino vivienda.

b) A personas jurídicas para viviendas de sus integrantes, para iguales destinos, cuando cuente para ello con la total garantía del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de fondos especiales o de depósitos afectados a tal fin.

c) A beneficiarios de subsidios que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial otorgue para la adquisición, construcción o refacción de viviendas, como complemento del mismo y con el previo acuerdo de dicho Ministerio".

Artículo 375.- Derógase el literal f) del artículo 52 de la Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 (Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay), en la redacción dada por el artículo 184 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Artículo 376.- Transfiérese de pleno derecho el bien inmueble padrón Nº 11.329 (once mil trescientos veintinueve) del Departamento de Rocha, igual localidad catastral, propiedad del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) al Ministerio del Interior.

La transferencia de la propiedad establecida en el inciso anterior, comprende la totalidad de los derechos y obligaciones de que el BHU sea titular,

sin necesidad de notificación o consentimiento, cualquiera sea su naturaleza y fecha de devengamiento.

A los efectos de la inscripción de la transferencia dominial en el Registro de la Propiedad, Sección Inmobiliaria, bastará con la expedición por parte del BHU de los certificados notariales que contengan los datos pertinentes para el correcto asiento registral, y quedará exonerada dicha inscripción de todo tributo registral.

Artículo 377.- Sustitúyese el inciso final del artículo 105 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

"Los contratos serán regulados al amparo de lo establecido por la Ley Nº 9.624, de 15 de diciembre de 1936, modificativas y concordantes".

Artículo 378.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 415 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, en la redacción dada por el artículo 328 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tendrá un plazo de noventa días, contados a partir de la notificación de la existencia de un bien inmueble sin uso, para aceptar su transferencia. Si dicho Ministerio no se pronunciare dentro del referido término, se tendrá como rechazada la transferencia del bien inmueble de que se trate".

Artículo 379.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 21 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"(Programas de Actuación Integrada).- Los Programas de Actuación Integrada constituyen el instrumento para la transformación de sectores de suelo e incluirán, al menos:

a) La delimitación del ámbito de actuación en una parte de suelo con capacidad de constituir una unidad territorial a efectos de su ordenamiento y actuación.

b) La programación de la efectiva transformación y ejecución.

c) Las determinaciones estructurantes, la planificación pormenorizada y las normas de regulación y protección detalladas, aplicables al ámbito".

Artículo 380.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 24 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"A partir del inicio de la elaboración de los instrumentos, los gobiernos departamentales podrán establecer fundadamente la suspensión cautelar de las autorizaciones de uso, fraccionamiento, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos territoriales estratégicos, de oportunidad o que sea necesario proteger, debiendo en este último caso dictar las disposiciones de protección correspondientes. La suspensión cautelar se extinguirá, en todos los casos, con la aprobación definitiva del instrumento respectivo".

Artículo 381.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 30. (Categorización de suelo en el territorio).- La competencia exclusiva del gobierno departamental para la categorización de suelo en el territorio del departamento, como determinación sustancial, se ejercerá mediante los instrumentos de ordenamiento territorial del ámbito departamental.

El suelo se podrá categorizar en: rural, urbano o suburbano. Las categorías de suelo deberán reflejar las situaciones existentes o las previstas que concurran de manera inmediata en cada una de las zonas del territorio objeto de ordenación, de acuerdo a los supuestos definidos en la ley.

Para la planificación de los usos futuros de suelo se utilizará el atributo de potencialmente transformable, estableciéndose la categoría, los usos admitidos y determinaciones estructurantes básicas.

Para cada categoría podrán disponerse en los instrumentos subcategorías, además de las que se establecen en la presente ley".

Artículo 382.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 34. (Atributo de potencialmente transformable).- Los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales podrán delimitar ámbitos de territorio como potencialmente transformables previendo la categoría a la que se transformará el suelo los usos admitidos y demás determinaciones estructurantes básicas (FOS y FOT máximos y dimensiones mínimas del predio).

La transformación de la categoría de suelo se efectuará a través de la elaboración y aprobación de un programa de actuación integrada para un perímetro de actuación específicamente delimitado, en alguna de las modalidades previstas en la presente ley.

Mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente programa de actuación integrada, el suelo con el atributo de potencialmente transformable estará sometido a las determinaciones establecidas para la categoría de suelo en que fuera incluido".

Artículo 383.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 41 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"(Facultades de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado y suelo cuya categoría se transforma).- Los propietarios de inmuebles en suelo urbano no consolidado, así como en suelo con el atributo de potencialmente transformable o en suelo a transformar, una vez incluido en un programa de actuación integrada, tendrán las siguientes facultades:

a) Promover su ejecución y transformación en las condiciones y requerimientos que se establecen en la presente ley.

b) Adjudicación de parcelas resultantes de acuerdo con el proyecto de fraccionamiento o urbanización, en proporción a sus aportaciones al proceso de ejecución.

c) Edificar en dichas parcelas, conforme a las determinaciones del instrumento y una vez cumplidos los deberes territoriales".

Artículo 384.- Sustitúyese el artículo 42 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 42. (Obligaciones de la propiedad inmueble en suelo urbano no consolidado y suelo cuya categoría se transforma).- Los propietarios de inmuebles en suelo urbano no consolidado, así como en suelo con el atributo de potencialmente transformable o en suelo a transformar, una vez incluido en un programa de actuación integrada, tendrán las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar a su costo las obras de urbanización del ámbito.

b) Ceder a la Intendencia o a la entidad pública que esta determine, de forma gratuita, los terrenos del ámbito que los instrumentos de ordenamiento territorial prevean con destino a uso y dominio público.

c) Ceder a la Intendencia los terrenos urbanizados edificables o inmuebles en los que se concrete el derecho a la participación de esta en la distribución de los mayores beneficios.

d) Distribuir de forma equitativa o de compensar, entre todos los interesados del ámbito, los beneficios y cargas que se deriven de la ejecución del instrumento de ordenamiento territorial".

Artículo 385.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 43 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, en la redacción dada por el artículo 210 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018, por el siguiente:

"(Régimen de los fraccionamientos en suelo urbano, suburbano, suelo con el atributo potencialmente transformable o cuya categoría se transforma).- No podrán autorizarse fraccionamientos en suelo urbano, suburbano, con el atributo de potencialmente transformable o cuya categoría se transforma, siempre que generen superficies de uso público destinadas al tránsito, sin que se haya cumplido con las condiciones determinadas por el artículo 38 de la presente ley, y deberá figurar la constancia de su cumplimiento en el respectivo plano".

Artículo 386.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 46 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"(Retorno de las valorizaciones).- Una vez que se aprueben los instrumentos de ordenamiento territorial, la Intendencia tendrá derecho como, administración territorial competente, a participar en el mayor valor inmobiliario que derive para dichos terrenos de las acciones de ordenamiento territorial, ejecución y actuación, en la proporción mínima que a continuación se establece:

a) En el suelo a transformar el 5% (cinco por ciento) de la edificabilidad total atribuida al ámbito.

b) En el suelo urbano, correspondiente a áreas objeto de renovación, consolidación o reordenamiento, el 15% (quince por ciento) de la mayor edificabilidad autorizada por el nuevo ordenamiento en el ámbito".

Artículo 387.- Sustitúyese el artículo 49 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 49. (Prevención de riesgos).- Los instrumentos deberán tener en cuenta en la asignación de usos de suelo los objetivos de prevención y las limitaciones territoriales establecidas por los organismos competentes en lo referido a los riesgos para la salud humana.

Deberán proteger la sustentabilidad productiva del recurso suelo como bien no renovable, no autorizando las actividades causantes de degradación hídrica o del suelo, o las incompatibles con otros tipos de utilización más beneficiosa para el suelo, el agua o la biota.

Queda comprendida en las competencias de los instrumentos de ordenamiento territorial la facultad de establecer límites y distancias mínimas entre sí de cultivos agrícolas y forestales o con otros usos de suelo y actividades en el territorio.

Los instrumentos de ordenamiento territorial deberán orientar los futuros desarrollos urbanos hacia zonas no inundables identificadas por el organismo estatal competente en el ordenamiento de los recursos hídricos.

Los instrumentos de ordenamiento territorial del ámbito departamental referidos al suelo urbano y suburbano, deberán incluir un mapa de riesgo que definirá los niveles de riesgo de las áreas inundables del territorio objeto de regulación, clasificándolos en riesgo alto, medio y bajo, definiendo los usos y actividades admisibles en dichas zonas conforme a lo dispuesto por la reglamentación específica en la materia.

En áreas rurales o áreas urbanas y suburbanas que no cuenten con mapa de riesgo, la Dirección Nacional de Aguas definirá las zonas inundables según probabilidad de ocurrencia en los cuerpos o cursos de agua del país, entre ellas las zonas inundables con períodos de retorno menor a cien años, no siendo admisible el uso residencial permanente ni la creación de nuevos predios con usos incompatibles con la situación de inundación.

En caso de que no sea posible la definición del período de retorno mencionado se entenderá por zonas inundables las que se encuentren a

nivel inferior de cincuenta centímetros por encima de las más altas crecientes conocidas".

Artículo 388.- Agrégase a la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 79 Bis. (Sistema de Información Territorial).- El Sistema de Información Territorial de la unidad ejecutora 003 'Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial' del Inciso 14 'Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial' tendrá como objetivo gestionar, documentar y disponer información geográfica relativa al ordenamiento territorial, así como los desarrollos e implementaciones tecnológicas que den sustento a dichas tareas.

Funciona como uno de los nodos principales de la Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial pudiendo cooperar con los nodos de otras instituciones en las actividades que fortalezcan el funcionamiento de la misma".

Artículo 389.- Sustitúyese el artículo 79 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, por el siguiente:

"ARTÍCULO 79. (Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial).- La Infraestructura de Información Geoespacial para el Ordenamiento Territorial (IIGOT) es un ámbito de coordinación y cooperación interinstitucional que tiene como objetivo contribuir al conocimiento para la planificación y gestión territorial y la toma de decisiones eficaces y eficientes, mediante el uso de información geográfica accesible, oportuna e interoperable.

IIGOT está enmarcada dentro de los lineamientos generales establecidos por la Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay para la gestión de datos espaciales.

IIGOT tiene como cometido promover y facilitar la producción, uso y acceso a la información geográfica necesaria para el ordenamiento territorial en todas sus escalas y dimensiones, mediante la coordinación de las actuaciones de todas las entidades públicas con competencia y capacidad al respecto.

IIGOT se conforma por un Comité Directivo Honorario y una Secretaría Técnica.

El Comité Directivo estará integrado por representantes de los organismos y entidades nacionales, departamentales y locales, comprendiendo los ministerios, intendencias, municipios, entes autónomos y servicios descentralizados con competencia en la materia y la academia, así como toda otra organización o entidad afín que incorpore la reglamentación.

La Secretaría Técnica y la representación de la IIGOT serán ejercidas por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

El Comité Directivo establecerá las líneas de trabajo generales y la Secretaría Técnica será la encargada del desarrollo y aplicación de las mismas. Cada integrante de la IIGOT contará con un nodo de información geográfica que aportará al funcionamiento de la Infraestructura.

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, establecerá a través de la reglamentación, el funcionamiento e integración de la IIGOT en un plazo de ciento ochenta días".

Artículo 390.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 19.525, de 18 de agosto de 2017, por el siguiente:

"ARTÍCULO 22. (Aguas pluviales, áreas contaminadas e inundables).- Los instrumentos de ordenamiento territorial departamentales referidos al suelo urbano y suburbano deberán considerar las aguas pluviales, con los criterios establecidos por la autoridad nacional competente, y quedará prohibida la urbanización de las áreas contaminadas y de aquellas que se determinen como inundables".

Artículo 391.- Agréganse al artículo 12 de la Ley Nº 18.829, de 24 de octubre de 2011, con las modificaciones introducidas por los artículos 461 y 462 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, los siguientes literales:

"L) El fallecimiento de un participante, extremo que se acreditará con el testimonio de la partida de defunción, a efectos de dar la baja en el Registro Único de Participantes del Plan Juntos.

M) El egreso de un participante del núcleo familiar por sola voluntad del titular del núcleo familiar, extremo que se acreditará con la declaración jurada suscrita por este".

Artículo 392.- Sustitúyese el artículo 315 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 315.- Establécese que el subsidio previsto en el artículo 466 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 229 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por sus peculiaridades específicas y, por ser destinado exclusivamente a la modalidad establecida en el artículo 465 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, será considerado como una contribución económica no revisable (CENR) a favor del destinatario.

En los casos en que la misma sea otorgada para ser utilizada como entrega inicial en la compra o promesa de compraventa de una vivienda, con financiación a través de un préstamo hipotecario o prendario, será considerada al capital, mientras que, en el resto de los casos, se considerará a la cuota y en este último caso será no reintegrable.

Cuando se otorgue una CENR, tanto al capital como a la cuota, la vivienda no podrá ser enajenada (enajenación del inmueble o cesión de promesa) ni arrendada ni subarrendada, ni se podrá ceder su uso a ningún título, durante el término de veinticinco años, a contar desde la ocupación de la misma por el destinatario, sin contar con autorización previa del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Los negocios jurídicos realizados sin la obtención de la referida autorización por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial no serán inscribibles ante los registros públicos que administra la Dirección General de Registros, sin perjuicio de la sanción referida más adelante en este artículo.

Si la autorización se otorgara dentro de los diez primeros años a contar desde la ocupación, para los casos de otorgamiento de una CENR como entrega inicial de capital, el destinatario deberá reintegrarla, en forma previa o simultánea, conforme a lo siguiente:

a) Hasta el primer año de ocupada la vivienda, el total de la CENR que hubiera recibido como entrega de capital inicial.

b) A partir del segundo y hasta el décimo año, dicho reintegro se depreciará a razón de una décima parte por año.

Transcurrido dicho plazo y obtenida la referida autorización, no corresponderá el reintegro de la CENR.

En caso de enajenación, arrendamiento o subarrendamiento sin la referida autorización, el beneficiario y el adquirente, arrendatario o subarrendatario (según el caso) serán responsables solidarios por el reintegro del doble del monto resultante de aplicar la regla de los incisos precedentes.

A solicitud de los interesados y acreditado que el adquirente cumple con los requisitos para ser beneficiario, la autorización del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial podrá incluir el otorgamiento de una CENR, tanto sea al capital o a la cuota, a favor del comprador o cesionario, con la condición de que sea aceptada la novación del préstamo por la institución financiera respectiva.

En caso que el otorgamiento de la CENR se aplique a la cuota y no se dé cumplimiento a lo establecido en el inciso tercero del presente artículo para la enajenación del bien o cesión de la promesa, o en caso de declaración jurada falsa, no ocupación real y efectiva por el destinatario y su núcleo familiar, cambio de destino habitacional o el incumplimiento en el pago de las cuotas, el acreedor hipotecario o prendario, continuará percibiendo la referida CENR, hasta la enajenación del bien autorizada por el Ministerio o el remate del inmueble.

Para el caso que la CENR se aplique al capital, y no se dé cumplimiento a lo establecido en el inciso tercero del presente artículo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tendrá un crédito preferente, en segundo grado, para el caso de remate, en forma inmediata al del acreedor hipotecario o prendario, por el capital entregado en carácter de CENR.

En todos los casos en que se otorgue una CENR, deberá dejarse expresa constancia en la escritura de compraventa o promesas o cesiones de promesa, de las condiciones y prohibiciones establecidas en el presente artículo.

En todos los casos de incumplimiento, quedará el destinatario inhabilitado para acceder a otra solución habitacional en el sistema público de vivienda por el plazo de veinticinco años a partir de la ocupación inicial del bien".

Artículo 393.- Exceptúase de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6º de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, a los funcionarios que,

habiendo ingresado al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial" bajo la modalidad de contrato temporal de derecho público establecido en el artículo 53 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, y que cuentan con un régimen horario de treinta horas semanales, sean designados bajo el régimen del artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 329 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022.

Artículo 394.- Exceptúanse del cumplimiento de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 178 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, en la redacción dada por el artículo 125 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, a aquellos inmuebles por los que la Dirección Nacional de Catastro haya expedido constancia de tratamiento excepcional temporal de sesenta meses conforme al documento público que se haya presentado a efectos de acreditar que se actúa en beneficio de un particular en el marco de los Programas de Vivienda de los siguientes organismos: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (incluyendo cuando actúe con recursos provenientes del Fideicomiso de Integración Social y Urbana, constituido de conformidad por el artículo 236 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021), Banco Hipotecario del Uruguay, Agencia Nacional de Vivienda, MEVIR - Dr. Alberto Gallinal Heber, Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos, al Programa de Mejoramiento de Barrios, Intendencias Departamentales, Corporación Nacional Financiera de Administración de Fondos en su calidad de fiduciaria del Fideicomiso de Integración Social y Urbana.

El documento público podrá referir a un padrón específico o a la totalidad de un padrón matriz, según corresponda.

El régimen establecido en el inciso primero alcanzará a las expropiaciones de bienes realizadas por el Estado y los Gobiernos Departamentales, en aquellos casos en que se acredite a la Dirección Nacional de Catastro por medio de documento público".

Artículo 395.- Toda licitación o procedimiento competitivo realizado por las personas públicas estatales o no estatales que refieran a construcción, reforma, reparación o similar de edificios, oficinas o viviendas, deberán establecer en sus pliegos la posibilidad de que las construcciones puedan ser realizadas mediante técnicas o métodos no tradicionales debidamente habilitados, que incorporen a la madera u otros materiales sustentables. Los pliegos deberán establecer las especificaciones técnicas necesarias que permitan cumplir con la referida obligación.

Quedan exceptuados de la aplicación del presente artículo los casos en que la condición u objeto de las referidas construcciones, reformas, reparaciones o similares de edificios, oficinas o viviendas, no permitan incluir en los pliegos lo previsto en el inciso primero.

Artículo 396.- Agrégase a la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 21 BIS. (Tipos de Programas de Actuación Integrada).- El Programa de Actuación Integrada como instrumento que habilita la transformación de suelo, podrá ser Abreviado o Complementario.

A) PAI Abreviado es el que se realiza en un sector del territorio en el cual la planificación departamental asignó el atributo de potencialmente transformable, y cumple con lo establecido en dicha planificación respecto a la categoría a la que se transformará el suelo, el uso principal y demás requisitos que establezca la reglamentación. El Programa de Actuación Integrada Abreviado no requiere aprobación de evaluación ambiental estratégica ni expedición de informe de correspondencia y será obligatoria una única instancia de participación pública, sin perjuicio de su difusión.

B) PAI Complementario es el que se aplica a un sector del territorio de cualquier categoría de suelo que no cuenta con el atributo de potencialmente transformable, o modifica la categoría, el uso principal o la morfología prevista para un sector de suelo que ya cuenta con el atributo de potencialmente transformable. En el caso de suelo rural que no cuente con el atributo de potencialmente transformable, la transformación del suelo deberá ser declarada de interés departamental. El Programa de Actuación Integrada Complementario deberá cumplir con la totalidad de los procedimientos e instancias de participación previstas en esta ley".

Artículo 397.- Sustitúyese el numeral 1) del artículo 93 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990, por el siguiente:

"1) El Estado, los Gobiernos Departamentales, MEVIR - Dr. Alberto Gallinal Heber, los Entes Autónomos, y Servicios Descentralizados, con excepción de aquellos de carácter comercial o industrial".

Artículo 398.- Autorízase al Banco Hipotecario del Uruguay y al Banco de la República Oriental del Uruguay a intercambiar información y datos personales que sean necesarios para la realización de negocios coordinados, en su carácter de bancos públicos y a los efectos de cumplir con los cometidos previstos en sus respectivas cartas orgánicas.

Declárase que no regirán las limitaciones dispuestas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, y sus modificativas, a los efectos establecidos en el presente artículo.

Los organismos referidos tratarán los datos intercambiados en forma reservada y exclusivamente para los fines para los que fueron comunicados.

La información será entregada con carácter confidencial y recibirá dicho tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008, y modificativas.

Artículo 399.- Créase el Registro Nacional de Asentamientos Irregulares (RNAI), el que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Su cometido será registrar con fines administrativos y estadísticos, los ámbitos de informalidad y precariedad urbano-habitacional identificados como asentamientos irregulares. La reglamentación establecerá los contenidos del RNAI, los mecanismos de actualización y disposición pública de la información a través de Infraestructura de Datos Espaciales. La información contenida en este Registro estará amparada por las disposiciones relativas a la protección de datos personales dispuesta en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008 y normas complementarias.

INCISO 15

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 400.- Asígnase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", programa 401 "Red de Asistencia e Integración Social", unidad ejecutora 007 "Instituto Nacional de la Juventud", Proyecto 142 "Atención a situaciones de especial vulnerabilidad", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 519.000 "Otras transferencias corrientes al sector público", una partida de $ 95.000.000 (noventa y cinco millones de pesos uruguayos) con destino al "Programa de Promoción del bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes".

Artículo 401.- Asígnase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", programa 401 "Red de Asistencia e Integración Social", unidad ejecutora 002 "Dirección de Desarrollo Social", Proyecto 142 "Atención a situaciones de especial vulnerabilidad", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 559.000 "Transferencias corrientes a otras Instit. Sin Fines de Lucro", una partida de $ 145.000.000 (ciento cuarenta y cinco millones de pesos uruguayos), con destino al "Programa de Promoción de la Salud Mental y Atención de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas para personas con alta vulnerabilidad social".

Artículo 402.- Asígnase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", programa 401 "Red de asistencia e integración social", unidad ejecutora 002 "Dirección de Desarrollo Social", Proyecto 121 "Igualdad de Género", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 554.000 "De asistencia social", una partida de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos), a partir del año 2023, para ampliar la cobertura a todo el país de la Red de Servicios por una Vida libre de Violencia de Género, pertenecientes al Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género, del Instituto Nacional de Mujeres.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 403.- Reasígnase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", programa 403 "Sistema Nacional Integrado de Cuidados - protección social", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Proyecto 135 "Equidad Social y Rectoría", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", la suma de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos), desde la Financiación 2.1 "Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos" a la Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Artículo 404.- Asígnase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", unidad ejecutora 002 "Dirección de Desarrollo Social", Programa 401 "Red de Asistencia e integración social", Proyecto 141 "Atención a la dependencia y discapacidad", una partida de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos), con cargo a Financiación 1.1 "Rentas Generales", con destino a financiar la contratación de operadores laborales. Dichos operadores deben distribuirse geográficamente de manera que cada departamento cuente con, al menos, uno.

El Ministerio de Desarrollo Social comunicará a la Contaduría General de la Nación en el plazo de treinta días la apertura de los créditos a disminuir para el financiamiento de la asignación prevista en el inciso anterior.

Artículo 405.- Asígnase una partida anual de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos) para el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social" programa 401 "Red de asistencia e integración social" unidad ejecutora 002 "Dirección de Desarrollo Social", Financiación 1.1 "Rentas Generales" proyecto 141 "Atención a la dependencia y discapacidad", objeto del gasto 282.000 "Profesionales y técnicos" con destino al pago de técnicos para los programas de rehabilitación integral y atención temprana.

Artículo 406.- Asígnase en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", programa 401 "Red de Asistencia e Integración social", unidad ejecutora 002 "Dirección de Desarrollo Social", proyecto 141 "Atención a la dependencia y discapacidad", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 3.700.000 (tres millones setecientos mil pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino a financiar la compra de equipamiento y materiales para confeccionar las prótesis para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

INCISO 36

MINISTERIO DE AMBIENTE

Artículo 407.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Proyecto 732 "Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), para implementar una campaña de educación en el uso responsable del agua.

Artículo 408.- Reasígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 2.487.828 (dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil ochocientos veintiocho pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, desde el objeto del gasto 092.000 "Partidas globales a distribuir" y una partida de $ 3.706.454 (tres millones setecientos seis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales, desde el objeto del gasto 095.005 "Fondos p/ financiar funciones transitorias y de conducción", al objeto del gasto 057.015 "Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU" una partida de $ 553.392 (quinientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y dos pesos uruguayos) y al objeto del gasto 042.511 "Comp. Especial por funciones espec. Encomendadas-discrec" una partida de $ 4.161.738 (cuatro

millones ciento sesenta y un mil setecientos treinta y ocho pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales.

Artículo 409.- Reasígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el objeto del gasto 057.003 "Empleo juvenil", la suma de $ 1.781.488 (un millón setecientos ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos uruguayos) más aguinaldo y cargas legales, al objeto del gasto 057.015 "Pasantías laborales remuneradas para alumnos UTU".

Artículo 410.- Reasígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", Proyecto 732 "Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la suma de $ 4.200.000 (cuatro millones doscientos mil pesos uruguayos) desde la unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental", a la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

Artículo 411.- Reasígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 141.000 "Combustibles derivados del petróleo", una partida anual de $ 4.765.512 (cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos doce pesos uruguayos), según el siguiente detalle:

Unidad ejecutora	Monto en $
001	4.765.512
002	-2.756.973
003	-2.008.539

Artículo 412.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 264.000 "Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país", una partida de $ 1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos uruguayos), para la contratación de seguros en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990.

Artículo 413.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 452 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 171 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, por el siguiente:

"Los propietarios y los conductores de los vehículos respectivos son solidariamente responsables y serán sancionados con una multa de entre 5 UR (cinco unidades reajustables) y 1.000 UR (mil unidades reajustables), cuyos montos serán recaudados por el Ministerio de Ambiente. El monto de la sanción podrá incrementarse en un 50% (cincuenta por ciento) por cada reincidencia".

Artículo 414.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental", Proyecto 751 "Plan de producción y consumo ambientalmente sostenible", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 12.000.000 (doce millones de pesos uruguayos) con destino al uso sostenible del agua.

Artículo 415.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental", Proyecto 752 "Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida por única vez de $ 3.400.000 (tres millones cuatrocientos mil pesos uruguayos), con destino a financiar el desarrollo del sistema integrado de información de residuos y fortalecer el control de residuos industriales a través del uso de herramientas de tecnologías de la información.

Artículo 416.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 002 "Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental", Proyecto 742 "Sistema de Información Ambiental", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida por única vez de $ 4.600.000 (cuatro millones seiscientos mil pesos uruguayos) con destino a fortalecer las herramientas de procesamiento de imágenes satelitales para funciones de control, monitoreo y evaluación ambiental.

Artículo 417.- Derógase el artículo 18 de la Ley Nº 19.553, de 27 de octubre de 2017.

Artículo 418.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Aguas", Proyecto 774 "Sistema de administración del uso del agua", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de

$ 12.375.000 (doce millones trescientos setenta y cinco mil pesos uruguayos) con destino a fortalecer la gestión de los recursos hídricos.

Artículo 419.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Aguas", Proyecto 776 "Sistema de monitoreo e información de aguas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 12.375.000 (doce millones trescientos setenta y cinco mil pesos uruguayos) con destino a fortalecer el sistema de información de las estaciones telemáticas.

Artículo 420.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 382 "Cambio climático", unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Aguas", Proyecto 777 "Adecuación de la gestión de las aguas urbanas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 3.250.000 (tres millones doscientos cincuenta mil pesos uruguayos) para la implementación del Centro Experimental Regional de Tecnologías de Saneamiento.

Artículo 421.- Sustitúyese el artículo 54 de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, en la redacción dada por el artículo 186 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 54.- Autorízase al Inciso 07 'Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca' a que, en cumplimiento de sus cometidos sustantivos en materia de sanidad animal e inocuidad alimentaria y a través de sus unidades ejecutoras, proceda a decomisar definitivamente y sin más trámite, los animales y productos de origen animal y vegetal o productos de uso agrícola o veterinario que ingresen al país en contravención a las normas zoosanitarias o fitosanitarias de importación. Por resolución fundada se determinarán, con base en una evaluación de riesgo, el destino de los animales y mercaderías en infracción, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente norma. En caso de tratarse de especies de flora y fauna reguladas por la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES) y sus apéndices, ratificados por Decreto-Ley Nº 14.205, de 4 de junio de 1974 y Decreto-Ley Nº 15.626, de 19 de setiembre de 1984, o de cualquier especie silvestre, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca notificará al Ministerio de Ambiente de manera que este dé cumplimiento con sus cometidos, excepto que constituyan un riesgo sanitario en cuyo caso se actuará según lo previsto en el presente artículo. Si al cabo de dos días hábiles siguientes a la notificación, el Ministerio de Ambiente no hubiera dispuesto el destino de las especies decomisadas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca adoptará

resolución al respecto. En caso de tratarse de otros animales vivos, se noticiará al Instituto Nacional de Bienestar Animal a tales efectos.

En el caso de ingreso de flora y animales en infracción de cualquier especie, cuando constituyan un riesgo para la salud humana, animal y vegetal, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de sus unidades ejecutoras competentes, dispondrá el sacrificio sanitario y destrucción total, según corresponda, de acuerdo a las normas sanitarias y de bienestar animal vigentes. Sin perjuicio de lo antes previsto, para el caso de las especies de flora y fauna reguladas por la CITES y sus apéndices, o de cualquier otra especie silvestre, se podrá autorizar su ingreso al país por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca siempre que se cumplan las medidas de bioseguridad determinadas por este. En caso de incumplimiento de esas medidas, se podrá autorizar la repatriación de estas especies o proceder al sacrificio y destrucción en los términos explicitados en el presente artículo. Si el ingreso al país de flora y fauna constituyera un riesgo para el ambiente o estuviera en infracción con las normas medioambientales, la resolución final respecto al destino se adoptará en consulta previa y preceptiva con el Ministerio de Ambiente. La referida consulta se cursará en un plazo de dos días hábiles para que se expida el Ministerio de Ambiente; vencido dicho plazo sin recibirse respuesta, se adoptará resolución por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En cualquiera de los mencionados casos, los propietarios o tenedores de los ejemplares incautados no tendrán derecho a indemnización, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones legalmente establecidas y de las acciones penales que puedan corresponder.

En el proceso judicial, el juez competente no podrá dictar resolución sobre los animales y productos de origen animal y vegetal, de uso agrícola o veterinario, sin previo pronunciamiento preceptivo de la autoridad sanitaria, inocuidad y de bienestar animal competentes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En los casos de flora y fauna nativa y exótica silvestre o susceptible de tornarse silvestre, así como las especies reguladas por la Convención CITES, descartado el riesgo sanitario por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el pronunciamiento corresponderá preceptivamente al Ministerio de Ambiente. La autoridad requerida, a partir del momento en que sea notificada por la autoridad judicial, tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para expedirse, vencido el cual el juez adoptará resolución. En relación con el destino de los animales domésticos, el juez resolverá teniendo en cuenta lo indicado por el Instituto Nacional de Bienestar

Animal. En cuanto a los productos de origen animal, vegetal, de uso agrícola o veterinario, reunida la información sanitaria y de inocuidad pertinente, su destino será resuelto conforme a la facultad establecida por el literal D) del artículo 240 de la Ley Nº 19.276, de 19 de setiembre de 2014".

Artículo 422.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 004 "Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos", Proyecto 746 "Ampliación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos), para la elaboración de planes de manejo y acciones de conservación, control e infraestructura para uso público.

Artículo 423.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 004 "Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos", Proyecto 736 "Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), para el fortalecimiento del monitoreo de la fauna, el control y la vigilancia de la caza y tráfico ilegal de especies.

Artículo 424.- Cométese al Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 17.283, de 28 de noviembre de 2000, en la redacción dada por el artículo 216 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018, la determinación de las especies que puedan ser consideradas exóticas invasoras, así como la adopción de medidas para su control y erradicación.

Artículo 425.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 9.481, de 4 de julio de 1935, por el siguiente:

"ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo establecerá las especies que podrán ser objeto de caza, pudiendo indicar las condiciones para dicha actividad y la duración de los períodos de caza, así como las cuotas y los límites que se acuerden a la explotación de dichas especies y sus derivados.

A tales efectos, se utilizarán estudios poblacionales que, a criterio del Ministerio de Ambiente, muestren que es posible efectuar una extracción sostenible de ejemplares del medio silvestre sin afectar la supervivencia de las especies y el equilibrio natural de los ecosistemas".

Artículo 426.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", unidad ejecutora 004 "Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos", Proyecto 753 "Política de gestión costera y marina", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) para el fortalecimiento de los planes de acción costera y monitoreo y análisis de riesgo de las zonas de sensibilidad ambiental del espacio marino.

Artículo 427.- Facúltase al Poder Ejecutivo a designar en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", en cargos presupuestados del grado de ingreso al escalafón respectivo, a quienes se encuentren desempeñando tareas permanentes de carácter sustantivo, propias de un funcionario público, en régimen de dependencia, al 31 de diciembre de 2021, que cuenten con informe de desempeño favorable y que hubieran sido contratados a través de organismos nacionales o internacionales de cooperación siempre que se encuentren financiados con fondos presupuestales.

Las designaciones se deberán realizar bajo el régimen de provisoriato establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, las cuales estarán exceptuadas de los procedimientos regulados en los artículos 93 y 94 de la Ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013.

Las designaciones en la modalidad prevista en este artículo, deberán realizarse en el último grado del escalafón correspondiente, pudiéndose crear las vacantes para este fin, dando cuenta a la Asamblea General.

Si la retribución que corresponde al cargo en el que se incorpora el contratado fuese menor a la del vínculo anterior, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la que se irá absorbiendo por futuros incrementos, por cambios en la tabla de sueldos, ascensos, aumento del grado del funcionario, compensaciones o partidas de carácter permanente, cualquiera sea su financiación, que se otorguen en el futuro.

Se requerirá informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones precedentes y el financiamiento de los cargos a crear.

Se autoriza a la Contaduría General de la Nación a reasignar al Grupo 0 "Servicios Personales" los créditos presupuestales desde gastos de funcionamiento e inversiones, a efectos de financiar lo dispuesto en este artículo, sin que ello implique costo presupuestal.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 428.- Asígnase en el Inciso 36 "Ministerio de Ambiente", programa 380 "Gestión ambiental y ordenación del territorio", en el objeto del gasto 042.511 "Comp. especial por funciones especialmente encomendadas-discrecional", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 25.809.706 (veinticinco millones ochocientos nueve mil setecientos seis pesos uruguayos), más aguinaldo y cargas legales, para la implementación de la reestructura organizativa realizada en el marco de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, según el siguiente detalle:

	U.E. 001	U.E. 002	U.E. 003	U.E. 004	U.E. 005
042.511	1.653.670	8.586.924	8.510.724	4.523.148	2.535.240
059.000	137.806	715.577	709.227	376.929	211.270
081.000	349.338	1.813.988	1.797.890	955.515	535.569
082.000	17.915	93.025	92.200	49.001	27.465
087.000	82.684	429.346	425.536	226.157	126.762
Totales	**2.241.413**	**11.638.860**	**11.535.577**	**6.130.750**	**3.436.306**

Artículo 429.- Decláranse comprendidas en el inciso segundo del numeral 12) del artículo 17 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, las resoluciones del Ministerio de Ambiente que otorguen, modifiquen o extingan la autorización prevista en el artículo 7º de la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 y su reglamentación, respecto de aquellos proyectos que incluyan construcciones u obras, cuando la publicidad registral sea considerada necesaria por dicho Ministerio para asegurar la protección ambiental.

SECCIÓN V

ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

INCISO 16

PODER JUDICIAL

Artículo 430.- Sustitúyense los numerales 2), 3) y 4) del inciso primero del artículo 510 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por

el artículo 393 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, por los siguientes:

"2) Directores y Subdirectores del Instituto Técnico Forense, Director de Oficina, Inspectores de la División Servicios Inspectivos e Inspección General de Registros Notariales.

3) Directores de División del escalafón II "Profesional".

4) Director Nacional de Defensorías Públicas, Directores de Defensorías Públicas y del Servicio de Abogacía, Defensores Públicos, Secretario II de la Defensoría Pública y del Servicio de Abogacía, Asesores Escribanos de la Inspección General de Registros Notariales, Asesores Abogados de la Asesoría Jurídica".

Artículo 431.- Increméntase en el Inciso 16 "Poder Judicial", programa 202 "Prestación de servicios de justicia", unidad ejecutora 101 "Poder Judicial", en el grupo 0 "Servicios Personales", Financiación 1.1 "Rentas Generales", la partida asignada por el artículo 365 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, en $ 6.681.602 (seis millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos dos pesos uruguayos), con destino a complementar la financiación de la creación de los cargos de Defensor Público dispuesta por la norma citada. Dicho monto incluye aguinaldo, cargas sociales y las correspondientes partidas por perfeccionamiento académico.

Artículo 432.- Asígnase al Inciso 16 "Poder Judicial", programa 202 "Prestación de servicios de justicia", unidad ejecutora 101 "Poder Judicial", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 16.612.415 (dieciséis millones seiscientos doce mil cuatrocientos quince pesos uruguayos), en el objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", con destino a gastos de funcionamiento de los juzgados de paz seccionales del interior del país.

Artículo 433.- Autorízase la presupuestación de los funcionarios contratados con cargo de Auxiliar I, grado 8, en el escalafón VI "Auxiliar" del Inciso 16 "Poder Judicial", quienes, de acuerdo al artículo 247 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, optaron por permanecer en el mismo escalafón con la actual denominación del cargo. A tales efectos, la Suprema Corte de Justicia dictará la reglamentación.

Artículo 434.- Créase en el Inciso 16 "Poder Judicial", a partir del 1º de enero de 2024, un Tribunal de Apelaciones de Familia, que estará integrado por los cargos que se detallan a continuación:

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación	Vigencia
3	I		Ministro de Tribunal de Apelaciones	01.01.2024
1	II	17	Secretario I Abog.- Esc.	01.01.2024
3	III	10	Administrativo I	01.01.2024
1	IV	6	Auxiliar II	01.01.2024

Asígnase al Inciso 16 "Poder Judicial" una partida anual de $ 22.308.737 (veintidós millones trescientos ocho mil setecientos treinta y siete pesos uruguayos) a efectos de financiar las erogaciones resultantes de las creaciones dispuestas en el inciso precedente.

Autorízase al Inciso 16 "Poder Judicial" a asignar la función de Asistente Técnico a un funcionario, según el régimen establecido por el artículo 632 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, con destino al nuevo Tribunal de Apelaciones de Familia creado en este artículo.

Para financiar los gastos de funcionamiento que se produzcan por la instalación de este Tribunal de Apelaciones de Familia, se asigna al Inciso 16 "Poder Judicial", en la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual a partir del 1º de enero de 2024, de $ 589.058 (quinientos ochenta y nueve mil cincuenta y ocho pesos uruguayos).

Artículo 435.- Autorízase al Inciso 16 "Poder Judicial" a disponer de una modificación de grados y denominación del escalafón V "Administrativo" creado por el artículo 459 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 310 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, el que pasará a denominarse escalafón V "Administrativo Judicial", y tendrá la siguiente estructura de cargos:

Grado	Denominación
14	Director de Departamento
13	Subdirector de Departamento
12	Oficial Alguacil

Grado	Denominación
12	Jefe de Oficina
11	Intendente
11	Jefe de Sección
10	Administrativo I
9	Administrativo II
9	Subintendente
8	Administrativo III
7	Administrativo IV
6	Administrativo V

Aquellos funcionarios que ingresen en este escalafón, lo harán en calidad de contratados en el cargo de Administrativo V, grado 6, y una vez presupuestados, pasarán a ocupar el cargo de Administrativo IV, grado 7.

Suprímese en el Inciso 16 "Poder Judicial" el escalafón VI "Auxiliar", creado por el artículo 459 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 310 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, y con la modificación del artículo 465 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Los funcionarios que ocupen el escalafón que se suprime por el presente artículo pasarán a pertenecer al escalafón V, "Administrativo Judicial".

A tales efectos, modifícase la integración dispuesta por el mismo artículo, para el escalafón V "Administrativo Judicial", el que comprenderá los cargos y contratos de función pública que tienen asignadas tareas relacionadas con el registro, clasificación, manejo y archivo de datos y documentos en formato físico o digital, y el desarrollo de actividades como la planificación, coordinación, organización, dirección y control, portería, transporte de materiales o expedientes, vigilancia, conservación, así como toda otra actividad no incluida en los demás escalafones tendientes al logro de objetivos del servicio en el que se realizan.

Asígnase al Inciso 16 "Poder Judicial" una partida anual en "Servicios Personales", Financiación 1.1 "Rentas Generales", de $ 7.928.495 (siete millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos uruguayos) con destino a la transformación de los cargos del escalafón VI "Auxiliar", los que pasarán a formar parte del escalafón V "Administrativo Judicial" de la siguiente forma:

Grado Anterior	Denominación anterior dentro del escalafón VI " Auxiliar"	Nuevo Grado	Nueva denominación dentro del escalafón V "Administrativo Judicial"
8	Auxiliar I	8	Administrativo III
6	Auxiliar II (presupuestado)	7	Administrativo IV
6	Auxiliar II (contratado)	6	Administrativo V

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el sistema de presupuestación con la nueva integración de cargos contratados del escalafón a crearse en el presente artículo.

La aplicación de lo establecido en el presente artículo no podrá significar lesión de derechos funcionales, ni generar disminuciones de las retribuciones que percibían los funcionarios con anterioridad a la vigencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 436.- Sustitúyese el artículo 144 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

"ARTÍCULO 144.- Todo bien mueble depositado, por orden de cualquier tribunal, en depósitos pertenecientes a organismos públicos o privados, será rematado trimestralmente en el caso que se cumplieran las siguientes condiciones:

A) Que estuviere depositado por seis o más meses.

B) Que estuviere paralizado el expediente por el plazo de más de un año.

C) Que se tratare de efectos de difícil conservación cualquiera fuera el tiempo de depósito.

D) Los hallazgos, vencidos los plazos acordados en los artículos 725 y siguientes del Código Civil.

En todos los casos, deberá notificarse con un mínimo de noventa días al tribunal que ordenó el depósito, procediendo al remate si no mediare oposición dentro de los treinta días siguientes de recibida la respectiva comunicación.

En el caso de bienes muebles deteriorados y de escaso valor, transcurridos cinco años o más desde la fecha de designación de depositario de bienes muebles embargados por la sede judicial competente, no habiendo recaído decisión o mandato alguno sobre el destino de los mismos por igual período, los depositarios, previa comunicación a la sede judicial competente, podrán disponer de los mencionados bienes, debiendo comunicar su destino final".

Artículo 437.- Sustitúyese el artículo 145 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

"ARTÍCULO 145.- Los rematadores serán designados por los tribunales respectivos, de acuerdo a las disposiciones en vigencia".

Artículo 438.- Sustitúyese el artículo 146 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

"ARTÍCULO 146.- El producido del remate, previa deducción de los gastos de comisión correspondientes, será depositado en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden del Juzgado y bajo el rubro de los autos correspondientes".

Artículo 439.- Sustitúyese el artículo 147 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, por el siguiente:

"ARTÍCULO 147.- La Suprema Corte de Justicia establecerá por acordada la supresión de la División Remates y Depósitos Judiciales y la venta de bienes muebles en desuso del Poder Judicial".

Artículo 440.- Sustitúyese el artículo 249 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, en la redacción dada por el artículo 109 de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:

"ARTÍCULO 249.- Autorízase al Inciso 16 "Poder Judicial" a declarar como chatarra y proceder a la venta al peso real, estimado o por loteo, a fin de descongestionar los predios estatales donde se ubican, toda clase de vehículos automotores, incluyéndose birrodados, ómnibus, camiones, chatas, maquinaria vial, agrícola (sin que la presente enumeración sea considerada como taxativa), a la orden del Poder Judicial o de otros organismos nacionales o departamentales, que no puedan identificarse por ausencia de registros y a la intemperie, que por su estado de abandono y deterioro resulte antieconómico su traslado a otros predios.

La declaración de chatarra se dispondrá previo informe pericial, que determine el estado ruinoso de la mercadería.

Una vez decretado administrativamente que los bienes son considerados como chatarra, se dispondrá su venta de la forma que determine la Suprema Corte de Justicia, que reglamentará el procedimiento, pudiendo a esos efectos celebrar convenios con otros organismos públicos o privados.

En caso que el procedimiento sea seguido por la Suprema Corte de Justicia, el precio de venta de la chatarra se deberá depositar en la División Contaduría del Poder Judicial, dentro de los cinco días siguientes al retiro de la mercadería, y el organismo retendrá el 50% (cincuenta por ciento) del importe por gastos de administración, destinándose el restante 50% (cincuenta por ciento) a Rentas Generales. Si la venta se efectuare en el marco de un convenio celebrado por otros organismos públicos o privados, se estará a lo establecido".

Artículo 441.- Deróganse los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º y 10 de la Ley Nº 19.830, de 18 de setiembre de 2019.

Restablécese la vigencia de los artículos 78, 79, 83, 95, 96 y 97 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, en la redacción dada por la misma ley. También restablécese la vigencia del artículo 99 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, en la redacción dada por la misma ley y en la redacción dada por el artículo 403 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Los artículos 437 a 441 de la presente ley entrarán a regir a partir de su promulgación.

Artículo 442.- Asígnase al Inciso 16 "Poder Judicial" programa 203 "Gestión Adm. Serv. Apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas", unidad ejecutora 101 "Poder Judicial", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 15.000.000 (quince millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", con destino a la implementación del expediente judicial electrónico.

INCISO 17

TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 443.- Increméntanse en el Inciso 17 "Tribunal de Cuentas", programa 263 "Control de Org. que administran o reciben fondos públicos", unidad ejecutora 001, "Tribunal de Cuentas", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por la suma de $ 10.966.400 (diez millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos pesos uruguayos) los créditos presupuestales que se indican:

Objeto del Gasto	Importe en $
199.000	1.970.700
299.000	4.975.700
067.000	3.504.802
081.000	323.574
082.000	15.098
087.000	82.968
089.000	93.558
Total	**10.966.400**

Artículo 444.- Asígnase en el Inciso 17 "Tribunal de Cuentas", programa 263 "Control de Org. Que administran o reciben fondos públicos", Proyecto 973 "Inmuebles", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", la suma de $ 5.950.000 (cinco millones novecientos cincuenta mil pesos uruguayos).

Artículo 445.- Increméntase en el Inciso 17 "Tribunal de Cuentas", programa 263 "Control de Org. que administran o reciben fondos públicos", unidad ejecutora 001 "Tribunal de Cuentas", la partida asignada en el artículo 652 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en $ 20.060.167 (veinte millones sesenta mil ciento sesenta y siete pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales.

INCISO 18

CORTE ELECTORAL

Artículo 446.- Increméntase en el Inciso 18 "Corte Electoral", programa 485 "Registro cívico y justicia electoral", unidad ejecutora 001 "Corte Electoral", en la

Financiación 1.1 "Rentas Generales", la partida prevista por el artículo 504 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en $ 4.657.709 (cuatro millones seiscientos cincuenta y siete mil setecientos nueve pesos uruguayos), con destino al pago de compensaciones, el que será financiado con las partidas que se detallan a continuación:

Objeto del gasto	Importe $
024.000	3.506.859
036.000	66.952
022.000	1.009.073
021.000	74.825

Artículo 447.- Asígnase al Inciso 18 "Corte Electoral", programa 485 "Registro cívico y justicia electoral", unidad ejecutora 001 "Corte Electoral", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", en el objeto del gasto 211.000 "Teléfono, telégrafo y similares", una partida anual de $ 3.000.000 (tres millones de pesos uruguayos).

Artículo 448.- Asígnase en el Inciso 18 "Corte Electoral", programa 485 "Registro cívico y justicia electoral", unidad ejecutora 001 "Corte Electoral", Proyecto 972 "Informática", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 799.000 "Otros gastos", una partida anual de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos).

Artículo 449.- Asígnase al Inciso 18 "Corte Electoral", programa 485 "Registro Cívico y Justicia Electoral", unidad ejecutora 001 "Corte Electoral", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 972 "Informática", objeto del gasto 799.000 "Otros gastos", una partida anual de $ 3.000.000 (tres millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024.

Artículo 450.- Asígnase al Inciso 18 "Corte Electoral", programa 485 "Registro Cívico y Justicia Electoral", unidad ejecutora 001 "Corte Electoral", Financiación 1.1 "Rentas Generales", en el objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", una partida anual de $ 9.000.000 (nueve millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino a atender gastos de funcionamiento.

Artículo 451.- Asígnase al Inciso 18 “Corte Electoral” unidad ejecutora 001 “Corte Electoral” programa 485 “Registro Cívico y Justicia Electoral”, objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores",

una partida para el ejercicio 2023 de $ 830.000 (ochocientos treinta mil pesos uruguayos), con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales" con destino a los gastos de organización del plebiscito del Colegio Veterinario del Uruguay.

Lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 452.- Facúltase al Inciso 18 "Corte Electoral" a incorporar a su estructura de puestos de trabajo a aquellos funcionarios públicos provenientes de otros organismos del Estado que se encuentren desempeñando tareas en régimen de pase en comisión.

Dichos funcionarios públicos, cualquiera sea el organismo de origen, que hayan prestado funciones en forma ininterrumpida con un mínimo de dos años ante la Corte Electoral, podrán optar por su incorporación definitiva al organismo.

A tales efectos, su incorporación se efectuará siempre que medien acumulativamente las siguientes condiciones:

A) Informe de la Corte Electoral en el cual se deje constancia de la necesidad de personal para tareas de carácter transitorias y la solicitud de la efectiva incorporación del funcionario en comisión.

B) Acto administrativo de aceptación del jerarca del organismo de origen.

Resuelta la incorporación, el cargo y su dotación presupuestal deberán ser suprimidos en la repartición de origen, habilitándose ambos conceptos en el organismo de destino en idénticas condiciones. Sin perjuicio, en aquellos casos en los cuales el funcionario sea titular de un cargo cuyo grado sea inferior al último ocupado en la estructura de puestos de trabajo del Inciso 18 "Corte Electoral", su incorporación se realizará en el último grado ocupado en la serie y escalafón correspondiente, financiándose la diferencia con los créditos propios del Inciso de destino.

En el caso de incorporaciones de funcionarios provenientes de otros organismos no pertenecientes al Presupuesto Nacional, la Corte Electoral deberá financiar la totalidad del cargo y su dotación presupuestal.

A los efectos del cálculo de la retribución a percibir en la oficina de destino, se tomará la retribución del funcionario en su oficina de origen a la fecha de la supresión del cargo. La retribución comprenderá el sueldo y todas las

compensaciones de carácter permanente y retributivo percibidas en el organismo de origen, debiéndose entender como compensaciones de carácter permanente, aquellas cuyo derecho al cobro se genera por lo menos una vez en el año durante un período como mínimo de tres años, sean propias del cargo o discrecionales, con excepción del sueldo anual complementario. Asimismo, deberán considerarse de carácter retributivo aquellas partidas que, independientemente de su denominación o financiación, se abonen a los funcionarios por la prestación de servicios en el organismo de origen. Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable, se tomará el promedio de lo percibido en los últimos doce meses previos a la fecha de la incorporación a la Corte Electoral.

La inclusión del funcionario en la respectiva planilla presupuestal deberá efectuarse en el término de sesenta días, los que se computarán a partir de la fecha del dictado del acto administrativo de aceptación por el jerarca competente.

Alternativamente, aquellos funcionarios que desempeñen tareas en comisión en forma ininterrumpida durante un mínimo de tres años en la Corte Electoral, podrán solicitar su incorporación definitiva, la que se efectivizará en el último grado ocupado del escalafón y serie correspondiente, sin que ello implique disminución alguna de su nivel retributivo. El acto administrativo de designación es una potestad de la Corte Electoral, el que se dictará en aquellos casos en que exista necesidad de funcionarios en el organismo, disponibilidad de cargos vacantes y créditos presupuestales suficientes para ello.

INCISO 19

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Artículo 453.- La Jurisdicción Contencioso Administrativa será ejercida por el sistema orgánico de lo contencioso administrativo encabezado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (artículo 307 y siguientes de la Constitución) e integrado por los órganos jurisdiccionales inferiores (artículo 320 de la Constitución).

Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo le corresponde ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los órganos jurisdiccionales inferiores y demás dependencias que hacen parte del sistema orgánico de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Artículo 454.- En una primera etapa funcionarán dos Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio y, posteriormente, dos nuevos Juzgados Letrados más. Cuando el número de casos lo justifique, se instalará el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Anulatorio.

Artículo 455.- Créanse en el Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo" dos Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio.

Créanse en el Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo", programa 204 "Justicia administrativa", unidad ejecutora 001 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo" los siguientes cargos para el funcionamiento de las referidas sedes:

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	ESCALAFÓN	GRADO
2	Juez Letrado		
2	Actuario titular	I	15
2	Actuario adjunto	I	14
2	Alguacil	II	14
2	Jefes	II	12
5	Administrativo 1	II	9
4	Auxiliares	III	8

Asígnase a tales efectos en el objeto del gasto 098.000 "Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal." una partida para el año 2023 de $ 7.706.573 (siete millones setecientos seis mil quinientos setenta y tres pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales; y a partir de 2024 una partida de $ 30.826.290 (treinta millones ochocientos veintiséis mil doscientos noventa pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales.

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación la distribución de estas asignaciones.

Las remuneraciones de los Jueces Letrados de lo Contencioso Anulatorio serán equivalentes a las de los Jueces Letrados del Poder Judicial, con asiento en la capital.

Ambos Juzgados funcionarán con una única oficina integrada.

El presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 456.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dispondrá las medidas necesarias para la instalación de los tribunales inferiores, determinará las fechas en que empezarán a funcionar, así como su competencia territorial y radicación.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinará su funcionamiento en régimen de movilidad y conforme con las exigencias de los asuntos en los que deban conocer.

En el caso de los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio que tengan un mismo ámbito de competencia territorial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinará el régimen de turnos en que actuarán.

Artículo 457.- Los Jueces Letrados de lo Contencioso Anulatorio serán designados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante concurso y de conformidad con lo previsto en el artículo 320 de la Constitución, aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 244 y 245 de la Constitución, pudiendo establecer órdenes de prelación de acuerdo con los resultados del concurso para designaciones futuras por el plazo que se indique en cada caso.

Se regirán, en lo pertinente, por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, y sus modificativas.

Artículo 458.- El personal de los tribunales inferiores que hace parte del sistema orgánico de la Jurisdicción Contencioso Administrativa será nombrado por concurso, promovido y destituido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 a 66 de la Constitución, en lo que corresponda.

Artículo 459.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en instancia única de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos generales, cualquiera sea la denominación que se les atribuya, y de aquellas que no correspondan a los tribunales inferiores.

También entenderá en instancia única en las contiendas y diferencias a que refiere el artículo 313 de la Constitución.

Mientras no se instale el Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Anulatorio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias de los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio.

Artículo 460.- Los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio conocerán en primera instancia de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos que produzcan efectos jurídicos particulares, cualquiera sea la denominación que se les atribuya.

Entenderán en instancia única de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos en los siguientes casos:

A) Calificaciones de funcionarios públicos o de sanciones disciplinarias de observación, apercibimiento o suspensión que no exceda de quince días;

B) clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones o suspensiones de actividades que no superen el término de cinco días; y

C) fuera de los casos anteriores, cuando la cuantía del asunto no exceda de 70 Unidades Reajustables (setenta unidades reajustables), para cuya determinación se estará a la expresada por el actor en su demanda salvo que ella surja del acto cuya anulación se solicita.

Artículo 461.- En los procesos de regulación de honorarios profesionales que tramiten por el artículo 144 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, conocerá el tribunal ante quien los respectivos honorarios se hayan causado.

Cuando los honorarios a regular hayan sido causados en doble instancia, resolverá el Juez Letrado de lo Contencioso Anulatorio que hubiere entendido en el caso y su sentencia definitiva será apelable.

Artículo 462.- Los procesos que se tramiten ante los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio se desenvolverán, en lo pertinente, de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 20.010, de 10 de diciembre de 2021, la Ley Nº 15.869, de 22 de junio de 1987 y el Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, sus modificativas y concordantes.

Artículo 463.- Los tributos a que refieren los artículos 82 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990 y 182 y 183 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, regirán por igual para la parte actora, la parte demandada y el tercerista, cualquiera sea el número de sus integrantes, tanto para los procesos

que se sustancien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como ante los Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio.

Artículo 464.- Créase en el Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo", programa 204 "Justicia administrativa", unidad ejecutora 001 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo", un cargo de Defensor de Oficio en lo Contencioso Administrativo, Escalafón A, grado 14.

Asígnase a tales efectos en el objeto del gasto 098.000 "Serv. personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.", una partida para el año 2023 de $ 299.032 (doscientos noventa y nueve mil treinta y dos pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales y a partir del año 2024 de $ 1.196.128 (un millón ciento noventa y seis mil ciento veintiocho pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales.

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación la distribución de estas asignaciones. El presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 465.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo promoverá la capacitación de Magistrados, Defensores y Abogados del sector público y del sector privado mediante actividades organizadas con ese fin, pudiendo cobrar matrícula por las mismas, cuyo producido será destinado a mejoras de gestión.

A tal efecto, designará de entre los funcionarios que revistan en sus cuadros presupuestales un Coordinador Académico.

Artículo 466.- Sustitúyese el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 28.- El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo.
>
> Cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto administrativo impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte.
>
> Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos.

En el supuesto de que la decisión del Tribunal declare la nulidad de un acto administrativo de alcance general y abstracto, con efectos generales y absolutos, el Tribunal deberá comunicar dicha sentencia firme a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) a los efectos de darle publicidad, en la sección Documentos del Diario Oficial, y de incluir como constancia en la publicación electrónica de dicho acto que fue "Anulado por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con efectos generales y absolutos", lo que deberá constar en cada una de las disposiciones anuladas".

Artículo 467.- A los efectos del cumplimiento de lo establecido en el inciso final del artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) requerirá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la remisión de aquellas sentencias firmes que declararon la nulidad total o parcial de actos administrativos de alcance general y abstracto, con efectos generales y absolutos, desde el año 1985 a la fecha.

A los efectos del cumplimiento de los cometidos atribuidos legalmente al IMPO, este deberá mantener actualizado el contenido de toda la normativa que edita y publica en el Diario Oficial y en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, en todos sus formatos accesibles, haciendo constar en la publicación electrónica de los actos declarados nulos "Anulado por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con efectos generales y absolutos", lo cual deberá constar en cada una de las disposiciones anuladas.

Artículo 468.- La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo será oída en último término en todos los asuntos de competencia exclusiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (artículos 315 y 320 de la Constitución de la República).

En aquellas causas que admitan alzada, emitirá su dictamen en primera instancia, previo al dictado de la sentencia definitiva o interlocutoria que pudiere poner fin al proceso.

En las causas que hubieran sido objeto de apelación, la Procuraduría deberá expedirse nuevamente en el plazo de treinta días previo al dictado de la sentencia de segunda instancia.

En los asuntos de instancia única a cargo de los Juzgados Letrados, el Juez podrá requerir la opinión de la Procuraduría de lo Contencioso

Administrativo, excepcionalmente y ante la complejidad del caso, previo al dictado de la sentencia definitiva.

Se aplicarán en lo pertinente los plazos previstos por los artículos 8º, 9º y 11 de la Ley Nº 20.010, de 10 de diciembre de 2021 y el artículo 100 del Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, los que se contarán desde el día siguiente a la recepción del expediente en la oficina.

Artículo 469.- La Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo podrá solicitar en forma fundada las diligencias para mejor dictaminar que entienda pertinentes.

INCISO 25

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Artículo 470.- Autorízase al Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública" a utilizar con destino al grupo 0 "Servicios Personales", un monto anual de hasta $ 240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos uruguayos) en los ejercicios 2024 y 2025, que habiéndose originado en excedentes de crédito de ejercicios anteriores hubieren sido volcados al Fondo de Infraestructura Pública, creado por el artículo 672 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 256 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012.

Los montos referidos serán reintegrados a Rentas Generales por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Autorízase a la Contaduría General de la Nación a habilitar los créditos presupuestales en el grupo 0 "Servicios Personales" que sean necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero.

La Administración Nacional de Educación Pública comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos.

INCISO 26

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Artículo 471.- Asígnase en el Inciso 26 "Universidad de la República", programa 350 "Inserción Universitaria en el Sistema Integrado de Salud", unidad

ejecutora 015 "Hospital de Clínicas", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 100.000.000 (cien millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino al financiamiento de una sala de hospitalización de salud mental, con ocho camas y un área de atención en emergencia, del equipo de profesionales y recursos humanos necesarios para su funcionamiento, y de los insumos médicos y demás gastos de funcionamiento requeridos para dicha área.

La Universidad de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 472.- Asígnase en el Inciso 26 "Universidad de la República", programa 350 "Inserción Universitaria en el Sistema Integrado de Salud", unidad ejecutora 015 "Hospital de Clínicas", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos uruguayos), con destino al financiamiento de la ejecución de obras que converjan hacia la concreción de un nuevo Hospital de Clínicas.

La Universidad de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 473.- Asígnase en el Inciso 26 "Universidad de la República", programa 351 "Expansión y Desarrollo de la Universidad en el Territorio", unidad ejecutora 050 "Unidad Central", Financiación 1.1 "Rentas Generales", a partir del ejercicio 2024, una partida anual de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) con destino al desarrollo del Centro Universitario Suroeste, y de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) para el desarrollo del Centro Universitario Sector Este.

La Universidad de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 474.- Asígnase en el Inciso 26 "Universidad de la República", programa 347 "Calidad Académica, Innovación e Integración de Conocimiento", unidad ejecutora 050 "Unidad Central", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino al fortalecimiento del cuerpo docente, de los equipos técnicos, administrativos y de servicios, para el apoyo y la atención del crecimiento de la población estudiantil.

La Universidad de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 475.- Asígnase, en el Inciso 26 "Universidad de la República", programa 349 "Universidad Inclusiva y Efectivización de los Derechos de las Personas", unidad ejecutora 050 "Unidad Central", proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino a becas de grado para contribuir a la atención de la población estudiantil más vulnerable.

La Universidad de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 476.- El Rector, los Consejos de Facultad y los Decanos de la Universidad de la República podrán delegar, por resolución fundada, las atribuciones que les asignan las normas legales, cuando lo estimen conveniente, para la regular y eficiente prestación de los servicios a su cargo.

Esta disposición entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

INCISO 27

INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

Artículo 477.- Facúltase al Inciso 27 "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" (INAU) a contratar bajo el régimen de provisoriato a quienes, a la fecha de la promulgación de la presente ley, se encuentren desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de horas docentes, talleristas, contrato de función pública o contratos eventuales.

Estas contrataciones están exceptuadas de la selección mediante concurso de oposición y méritos.

El Directorio del INAU reglamentará el proceso de selección por el cual se procederá al cambio de modalidad contractual, teniendo en cuenta las evaluaciones de cada trabajador en su trayectoria institucional.

Las contrataciones al amparo del presente artículo se realizarán en el último grado del escalafón respectivo.

Las mencionadas contrataciones se financiarán con los créditos presupuestales del Inciso.

Autorízase al Directorio a transformar los contratos de función pública del presente artículo en los cargos presupuestados necesarios, una vez transcurrido el plazo de provisoriato.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

INCISO 29

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

Artículo 478.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 098.000 "Serv. Personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.", una partida de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos uruguayos), incluidos aguinaldo y cargas legales, para el ejercicio 2023 y una partida de $ 240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, a partir del ejercicio 2024, con destino a financiar la creación de cargos, extensiones horarias, complementos y adecuaciones salariales para la conformación de equipos especializados en el área de adicciones y para la atención asistencial que se brindará a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Policial, de conformidad a los convenios que se instrumentarán en este marco.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 479.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", Grupo 0 "Servicios Personales", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 760.000 (setecientos sesenta mil pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales para el año 2023 y una partida de $ 3.040.000 (tres millones cuarenta mil pesos uruguayos) incluido aguinaldo y cargas legales a partir del

año 2024, con destino a financiar la creación de cargos, extensiones horarias, complementos y adecuaciones salariales para la conformación de equipos especializados y de apoyo y otros servicios de similar naturaleza.

El presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 480.- Increméntase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención integral de la salud", unidad ejecutora 077 "Hospital del Cerro", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 098.000 "Serv. Personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal"., la partida prevista por el artículo 586 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en $ 15.462.500 (quince millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, para el ejercicio 2023 y en $ 61.850.000 (sesenta y un millones ochocientos cincuenta mil pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, a partir del ejercicio 2024, para la creación de cargos y complementos salariales que resulten necesarios para el funcionamiento del Hospital del Cerro.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 481.- Agrégase en el artículo 393 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, el siguiente inciso:

> "En ningún caso la presupuestación podrá significar un mayor costo para el Estado por lo que el personal contratado que optase por incorporarse al padrón presupuestal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, percibirá las retribuciones correspondientes a la función que desempeñen o pasen a desempeñar de acuerdo a las escalas salariales vigentes en el organismo. Derógase toda disposición que contravenga lo dispuesto en el presente inciso".

Lo dispuesto en este artículo entrará a regir a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 482.- Increméntase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención integral de la salud", unidad ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 098.000 "Serv. Personales para uso excl. Entes Descentr. Pto. Nal.", la partida prevista por el inciso segundo del artículo 385 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, en $ 250.000.000

(doscientos cincuenta millones de pesos uruguayos), con destino exclusivo a completar el financiamiento correspondiente a las diferencias en las cargas legales de los cargos creados al amparo del inciso primero del artículo 717 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 285 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, y por el artículo 393 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022.

Artículo 483.- Sustitúyese el artículo 287 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"ARTÍCULO 287.- Créase el "Programa para el Fortalecimiento de la Atención Médica en el Ámbito Rural", cuyos objetivos serán mejorar la accesibilidad a la atención integral de personas y familias en áreas rurales alejadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, y profundizar la formación de los especialistas de medicina familiar y comunitaria en el ámbito rural.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) podrá contratar hasta diez médicos, en régimen de trabajo de alta dedicación, preferentemente especialistas en medicina familiar y comunitaria, o médico general con posgrado universitario avanzado en la disciplina, o con experiencia y capacitación documentada en la disciplina, aunque no sistematizada en un posgrado.

La selección de profesionales será realizada a través de un llamado abierto que convocará la Red de Atención Primaria de la unidad ejecutora de la localidad que corresponda.

Reasígnase a ASSE, con destino al programa creado en el primer inciso, un importe de $ 18.000.000 (dieciocho millones de pesos uruguayos) de la partida dispuesta por el artículo 233 de la Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, y por el artículo 317 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018. El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación la distribución de la partida establecida".

Artículo 484.- Sustitúyese el artículo 388 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 388.- Facúltase al Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" a transferir hasta un monto anual de $ 200.000.000 (doscientos millones de pesos uruguayos), a partir del

ejercicio 2024, a la Comisión de Apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y al Patronato del Psicópata, para atender exclusivamente las sentencias de condena que se dicten contra dichas instituciones en juicios laborales o eventuales transacciones que se celebren en los mismos. Los montos autorizados corresponden a las transferencias totales por esos conceptos para ambas instituciones en conjunto.

Exceptúanse a las transferencias autorizadas en este artículo de las limitaciones establecidas por el inciso primero del artículo 721 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010".

Artículo 485.- Sustitúyese el artículo 593 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 593.- Incorpórase al personal presupuestado o contratado que desempeña tareas vinculadas en forma directa, a la atención de la salud humana, en el Inciso 29 'Administración de los Servicios de Salud del Estado', en el escalafón D) 'Especializado', escalafón F 'Servicios Auxiliares' y a quienes se desempeñen como choferes, al régimen de acumulación de cargos establecido en el artículo 107 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 486.- Créase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", la unidad ejecutora 047 "Centro Auxiliar de Nueva Helvecia" y la unidad ejecutora 090 "Centro Auxiliar de Nueva Palmira".

Exclúyese al "Centro Auxiliar de Nueva Helvecia" y al "Centro Auxiliar de Nueva Palmira" de la integración de la unidad ejecutora 048 "Red de Atención Primaria de Colonia".

Transfiérense los cometidos, derechos, obligaciones, recursos humanos y los bienes muebles e inmuebles, afectados al uso de la unidad ejecutora 048 "Red de Atención Primaria de Colonia", necesarios para el funcionamiento de las unidades ejecutoras que se crean.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la Nación las reasignaciones de créditos presupuestales

que correspondan, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, las que no podrán generar costo presupuestal ni de caja.

Artículo 487.- Créase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", la unidad ejecutora 089 "Centro Auxiliar de Sarandí del Yi".

Exclúyese al "Centro Auxiliar de Sarandí del Yi" de la integración de la unidad ejecutora 059 "Red de Atención Primaria de Durazno", dispuesta por el artículo 722 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

Transfiérense los cometidos, derechos, obligaciones, recursos humanos y los bienes muebles e inmuebles afectados al uso de la unidad ejecutora 059 "Red de Atención Primaria de Durazno", necesarios para el funcionamiento de la unidad ejecutora que se crea.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la Nación las reasignaciones de los créditos presupuestales que correspondan, a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, las que no podrán generar costo presupuestal ni de caja.

Artículo 488.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 089 "Centro Auxiliar de Sarandí del Yi", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 3.700.000 (tres millones setecientos mil pesos uruguayos), a los efectos de financiar el fortalecimiento del Centro Asistencial de Sarandí del Yi.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 489.- Autorízase al Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal de gastos de funcionamiento en la Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por el importe equivalente al incremento de la recaudación correspondiente al ejercicio 2020 que perciba cada unidad ejecutora por venta de servicios asistenciales a terceros o cualquier otro concepto, excluida la recaudación por el Fondo Nacional de Salud.

Artículo 490.- Autorízase a la Administración de los Servicios de Salud del Estado a retener y disponer del 80% (ochenta por ciento) del producido de la enajenación de sus bienes muebles e inmuebles para financiar proyectos de

inversión destinados a actividades vinculadas al Plan Nacional para la Salud Mental y el Tratamiento de las Adicciones. El restante 20% (veinte por ciento) se destinará a Rentas Generales.

Dispónese que los referidos fondos constituirán Recursos con Afectación Especial de la mencionada Administración.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 491.- Establécese que para la campaña de prevención y lucha contra la diabetes, dispuesta en el artículo 391 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, se coordine en conjunto con la Asociación de Diabéticos del Uruguay su implementación.

Artículo 492.- El 30% (treinta por ciento) de la recaudación obtenida por concepto de Hemoderivados generados a partir del plasma de donantes de sangre producido por la unidad ejecutora 066 "Servicio Nacional de Sangre - Hemocentro de Maldonado", del Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", Programa 433 "Ciencia y Tecnología de la Salud", será destinado a dicha unidad ejecutora para gastos de funcionamiento e inversión.

Artículo 493.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", Programa 440 "Atención Integral de la salud", unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 599.000 "Otras transferencias no incluidas en las anteriores", Financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", por un importe anual a partir del ejercicio 2024, de $ 5.700.000 (cinco millones setecientos mil pesos uruguayos), con destino al Programa Facilitadores Hospitales de Maldonado y San Carlos.

La Comisión de Apoyo de la unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", podrá contratar personal, por un monto anual de hasta $ 5.700.000 (cinco millones setecientos mil pesos uruguayos) a partir del 2024, para el funcionamiento de las unidades ejecutoras 102 "Centro Departamental de Maldonado" y 54 "Hospital de San Carlos", quedando exceptuada de las prohibiciones dispuestas en los artículos 721 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 19.275, de 19 de setiembre de 2014, y 607 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y de las limitaciones para la contratación de personal previstas por el artículo 719 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010,

en la redacción dada por el artículo 327 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, y el artículo 599 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

Facúltase al Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", a reasignar de los créditos del objeto del gasto 599.000 "Otras transferencias no incluidas en las anteriores", Financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", previo al informe favorable de la Contaduría General de la Nación, hacía la Comisión de Apoyo de la unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", los créditos necesarios para cumplir con el pago de las contrataciones realizadas.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 494.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 059 "Red de Atención Primaria Durazno", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en el Proyecto 974 "Vehículos", una partida anual de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos) para la adquisición de una ambulancia para la policlínica Ciudad del Carmen, y en el Proyecto 725 "Obras, Reformas y Reparaciones", una partida anual de $ 100.000 (cien mil pesos uruguayos) con destino a mejoras edilicias en la policlínica San Jorge y en la policlínica de Ronda Rural La Curva, respectivamente.

Artículo 495.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 052 "Centro Auxiliar de Río Branco", una partida anual de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", a los efectos de financiar el Centro Obstétrico.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 496.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" una partida por única vez de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) con destino a la mejora de traslados.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 497.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud" unidad ejecutora 054 "Hospital de San Carlos", proyecto 729 "Equipamiento Médico", una partida anual de $ 20.000.000 (veinte millones de pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, con cargo a la Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a los efectos de financiar el arrendamiento de servicios de un acelerador lineal del Centro Oncológico Regional Este.

Artículo 498.- Asígnase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud" unidad ejecutora 049 "Red de Atención Primaria de Maldonado", una partida anual de $ 2.300.000 (dos millones trescientos mil pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", a los efectos de financiar la atención médica en Pueblo Edén.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

Artículo 499.- Derógase el artículo 133 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022.

Reasígnase desde el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", Grupo 0 "Servicios Personales", la suma de $ 17.000.000 (diecisiete millones de pesos uruguayos), con destino al Inciso 04 "Ministerio del Interior", unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Programa 460 "Prevención y Represión del Delito", Grupo 5 "Transferencias", Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 500.- La Comisión de Apoyo de la unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", podrá contratar personal por un monto de hasta $ 7.731.250 (siete millones setecientos treinta y un mil doscientos cincuenta pesos uruguayos) para el año 2023 y por un monto anual de hasta $ 30.925.000 (treinta millones novecientos veinticinco mil pesos

uruguayos) a partir del año 2024, para el funcionamiento de la unidad ejecutora 077 "Hospital del Cerro", quedando exceptuada de las prohibiciones dispuestas en el artículo 721 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por los artículos 3º de la Ley Nº 19.725, de 21 de diciembre de 2018, y 607 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, y de las limitaciones para la contratación de personal previstas por el artículo 719 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por los artículos 327 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013, y 599 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

Facúltase al Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", a reasignar de los créditos del grupo 0 "Servicios Personales", Financiación 1.2 "Recursos de Afectación Especial", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 077 "Hospital del Cerro", previo informe favorable de la Contaduría General de la Nación, hacia la Comisión de Apoyo de la unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", los créditos necesarios para cumplir con el pago de las contrataciones realizadas.

Lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 501.- Increméntase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la salud", unidad ejecutora 059 "Red de Atención Primaria Durazno", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", objeto del gasto 299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores", en $3.100.000 (tres millones cien mil pesos uruguayos) con el objetivo de financiar gastos de funcionamiento.

Artículo 502.- Increméntase en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", programa 440 "Atención Integral de la Salud", unidad ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", objeto del gasto 559.000 "Transferencias corrientes a otras Instituciones Sin Fines de Lucro" en $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos) con destino a la Comisión de Apoyo de Durazno a fin de fortalecer la asistencia ginecológica en el Hospital Dr. Emilio Penza.

Exceptúanse las transferencias autorizadas en este artículo de las limitaciones establecidas por el inciso primero del artículo 721 de la Ley

Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 607 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

Artículo 503.- La Administración de los Servicios de Salud del Estado, traspondrá anualmente desde el programa 440 "Atención Integral de la Salud", Financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", dentro del Grupo 2 "Servicios no personales", desde la unidad ejecutora 068 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", hacia la unidad ejecutora 004 "Centro Hospitalario Pereira Rossell", el crédito presupuestal equivalente a los ingresos percibidos por esta, desde el Fondo Nacional de Recursos, correspondiente a los tratamientos médicos brindados por parte del Centro Hospitalario Pereira Rossell, lo cual será destinado a afrontar el costo de los referidos tratamientos médicos.

INCISO 31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Artículo 504.- Asígnase en el Inciso 31 "Universidad Tecnológica", programa 353 "Desarrollo Académico", unidad ejecutora 001 "Consejo Directivo Central", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino al grupo 0 "Servicios Personales", para financiar el fortalecimiento de las políticas vinculadas al apoyo a estudiantes y al desarrollo de personas.

La Universidad Tecnológica comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se asignan.

INCISO 32

INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA

Artículo 505.- Facúltase al Inciso 32 "Instituto Uruguayo de Meteorología" a contratar bajo el régimen del artículo 5º de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, con informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), a quienes, a la fecha de promulgación de la presente ley, se

encuentren desempeñando tareas mediante la modalidad de función pública, con el propósito de regularizar la situación de los mismos.

Estas contrataciones están exceptuadas de la selección mediante concurso de oposición y méritos, y excluidas del Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal de la ONSC.

Créanse en el Inciso 32 "Instituto Uruguayo de Meteorología", programa 420 "Información oficial y documentos de interés público", unidad ejecutora 001 "Instituto Uruguayo de Meteorología", cuarenta y siete cargos de acuerdo al siguiente detalle:

Cantidad	Escalafón	Grado	Denominación
21	ES	1	Especializado I
17	T/C	1	Técnico I
5	AD	1	Administrativo I
2	P/C	1	Asesor I
2	S/O	1	Auxiliar I

La creación de cargos del inciso anterior se financiará con la suma de $ 12.385.609 (doce millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos nueve pesos uruguayos) para el ejercicio 2023, y de $ 49.542.436 (cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos uruguayos) para el ejercicio 2024, con cargo al objeto del gasto 099.000 "Otras retribuciones", incluido aguinaldo y cargas legales.

La aplicación de lo establecido en la presente norma no podrá significar lesión de derechos funcionales ni generar disminución de las retribuciones que percibían los contratados con anterioridad.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 506.- Reasígnase en el Inciso 32 "Instituto Uruguayo de Meteorología", programa 420 "Información oficial y documentos de interés público", unidad ejecutora 001 "Instituto Uruguayo de Meteorología", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 8.000.000 (ocho

millones de pesos uruguayos), del objeto del gasto 099.000 "Otras retribuciones", incluido aguinaldo y cargas legales, al objeto del gasto 042.531 "Compensación sujeta a Compromisos de Gestión", más aguinaldo y cargas legales.

Dicha partida tendrá como destino abonar una compensación por compromisos de gestión a sus funcionarios, la que estará vinculada al cumplimiento de metas y objetivos establecidos en planes de trabajo específicos, aprobados por el Inciso y sujetos al informe favorable y seguimiento de la Comisión de Compromisos de Gestión, creada por el artículo 57 y siguientes de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013.

Artículo 507.- Sustitúyese el artículo 622 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, con la modificación introducida por el artículo 140 de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 622.- Facúltase al Inciso 32 'Instituto Uruguayo de Meteorología' (INUMET) a difundir y publicar gratuitamente, en forma libre, todos los datos climáticos y meteorológicos que el servicio descentralizado posea en su acervo.
>
> El INUMET podrá percibir un precio por la certificación documental, desarrollo técnico o elaboración de informes para las instituciones o personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que lo requieran, incluyendo los informes técnicos destinados al Poder Judicial. Asimismo, está facultado en los términos previstos por el artículo 271 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, a prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en el área de su especialidad, tanto en el territorio de la República como en el exterior.
>
> Los fondos que se recauden de acuerdo a lo previsto en el inciso anterior, se destinarán a financiar gastos de funcionamiento e inversión del Inciso, encontrándose incluidos en el régimen dispuesto por el artículo 595 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la modificación introducida por el artículo 128 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

Artículo 508.- Reasígnanse en el Inciso 32 "Instituto Uruguayo de Meteorología", programa 420 "Información oficial y documentos de interés público", unidad ejecutora 001 "Instituto Uruguayo de Meteorología",

Financiación 1.1 "Rentas Generales", las partidas que se detallan a continuación:

Objeto del gasto	Importe $
141.000 "Combustibles derivados del petróleo"	492.095
211.000 "Teléfono, telégrafo y similares"	527.980
212.000 "Agua"	82.964
213.000 "Electricidad"	512.987
264.000 "Primas y otros gastos de seguro contratados dentro del país"	1.037.742
285.001 "Servicio de mantenimiento SISCONVE"	18.244
299.000 "Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores"	-2.672.012

INCISO 33

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Artículo 509.- Facúltase al Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación" a crear hasta cinco fiscalías. La Fiscalía General de la Nación determinará la ubicación y fecha de instalación de las nuevas fiscalías que se creen, y fijará el régimen de turnos, así como de distribución de causas en trámite.

Lo dispuesto en este artículo será financiado con cargo a los créditos presupuestales de la Fiscalía General de la Nación y entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 510.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, una de estas Fiscalías a crearse deberá estar ubicada en Ciudad del Plata, Departamento de San José.

Artículo 511.- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 19.483, de 5 de enero de 2017, por el siguiente:

"ARTÍCULO 39. (Competencia funcional).- Corresponde a los Fiscales Letrados Suplentes:

A) Subrogar con carácter específico y provisorio, cuando las necesidades del servicio así lo impongan, a los Fiscales Letrados

de Montevideo, Fiscales Letrados Especializados y Fiscales Letrados Departamentales.

B) Cumplir, cuando no estuvieren desempeñando alguna de las actividades precedentes, las tareas técnicas acordes con su jerarquía que le fueran indicadas por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación".

Lo dispuesto en este artículo será financiado con cargo a los créditos presupuestales de la Fiscalía General de la Nación y entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 512.- Sustitúyese el artículo 58 de la Ley Nº 19.580, de 22 de diciembre de 2017, por el siguiente:

"ARTÍCULO 58. (Transformación de Fiscalías Penales de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género).- Transfórmanse las Fiscalías Penales de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género en Fiscalías Penales de Montevideo de Delitos Sexuales y Fiscalías Penales de Montevideo de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, las que entenderán en la investigación y litigio de los delitos que se le asignen en función de los criterios de flexibilidad y dinamismo (artículo 9º de la Ley Nº 19.483, de 5 de enero de 2017)".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 513.- Agrégase al literal c) del artículo 65 de la Ley Nº 19.580, de 22 de diciembre de 2017, el siguiente inciso:

"En los casos en que se considere en riesgo el derecho a la vida o a la integridad física de una víctima de violencia doméstica o de género, el tribunal podrá disponer la colocación del dispositivo de monitoreo electrónico en adolescentes. A esos efectos, el tribunal deberá fundamentar qué otro tipo de protección es insuficiente o inidóneo".

Artículo 514.- Créanse en el Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación", dos fiscalías penales de Montevideo especializadas en delitos sexuales, las que entenderán en la investigación y litigio de los delitos que se le asignen en función de los criterios de flexibilidad y dinamismo (artículo 9º de la Ley Nº 19.483, de 5 de enero de 2017).

Créanse, en las fiscalías penales detalladas en el inciso anterior, los siguientes cargos: dos Fiscales Letrados de Montevideo, escalafón N; cuatro Fiscales Letrados Adscriptos, escalafón N; dos Asesor I, Trabajo Social/Psicología, escalafón PC, grado V; un Asesor I, Abogacía, escalafón PC, grado V; dos Encargado/Administrativo III, escalafón AD, grado IV, y dos Administrativo II, escalafón AD, grado III.

Asígnase, a efectos de financiar la creación de cargos dispuesta en el inciso anterior y los gastos asociados a las fiscalías que se crean, en el programa 200 "Asesoramiento, cooperación y representación", Financiación 1.1 "Rentas Generales", en el grupo 0 "Servicios Personales", la suma de $ 7.221.295 (siete millones doscientos veintiún mil doscientos noventa y cinco pesos uruguayos) en el año 2023 y la suma de $ 28.885.179 (veintiocho millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos uruguayos) a partir del año 2024, incluido aguinaldo y cargas legales; en el objeto del gasto 284.003 "Part. perfeccionamiento académico y técnico", la suma de $ 100.050 (cien mil cincuenta pesos uruguayos) en el año 2023 y la suma de $ 400.200 (cuatrocientos mil doscientos pesos uruguayos) a partir del año 2024; en el objeto del gasto 284.004 "Part. de capacitación técnica -; Esc. B al F - Fiscal de Corte", la suma de $ 13.896 (trece mil ochocientos noventa y seis pesos uruguayos) en el año 2023 y la suma de $ 55.584 (cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos uruguayos) a partir del año 2024 y para gastos de funcionamiento la suma de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos) a partir del año 2024.

La Fiscalía General de la Nación determinará la fecha de instalación de las nuevas fiscalías creadas por la presente disposición, así como la distribución de expedientes en trámite.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 515.- Sustitúyese el artículo 646 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015, en la redacción dada por el artículo 408 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 646.- Autorízase el traslado de funcionarios de la Administración Central para desempeñar, en comisión, tareas en la Fiscalía General de la Nación, a expresa solicitud del Director General, debidamente fundada en razones de servicio, en las condiciones previstas en el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, y sus modificativas.

La Fiscalía General de la Nación podrá tener hasta diez funcionarios en comisión simultáneamente, al amparo del presente régimen".

Artículo 516.- Créanse en el Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación", ocho cargos de Fiscales Letrados Adscriptos, escalafón N.

Asígnase, a efectos de financiar la creación de cargos dispuesta en el inciso anterior, en el programa 200 "Asesoramiento, cooperación y representación", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", en el grupo 0 "Servicios Personales", para el año 2023, la suma de $ 5.186.073 (cinco millones ciento ochenta y seis mil setenta y tres pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales, y a partir del año 2024, la suma de $ 20.744.293 (veinte millones setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa y tres pesos uruguayos), incluido aguinaldo y cargas legales.

El presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

INCISO 34

JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Artículo 517.- Asígnase en el Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública", programa 262 "Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado", unidad ejecutora 001 "Junta de Transparencia y Ética Pública", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 284.000 "Servicios de capacitación", una partida anual de $ 300.000 (trescientos mil pesos uruguayos), con destino a la capacitación de los funcionarios de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Artículo 518.- Asígnase en el Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública", programa 262 "Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado", unidad ejecutora 001 "Junta de Transparencia y Ética Pública", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 282.000 "Profesionales y técnicos", una partida anual de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), con destino a la contratación de profesionales y técnicos especializados.

Artículo 519.- Asígnase en el Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública", programa 262 "Control de asuntos fiscales, fin. y gestión inst. del Estado", unidad ejecutora 001 "Junta de Transparencia y Ética Pública", Financiación 1.1 "Rentas Generales", Objeto del Gasto 098.000 "Servicios personales para uso excl. Entes Descentralizados Pto. Nal", una partida de

$ 677.708 (seiscientos setenta y siete mil setecientos ocho pesos uruguayos) para el ejercicio 2023 y una partida de $ 2.710.834 (dos millones setecientos diez mil ochocientos treinta y cuatro pesos uruguayos) a partir del ejercicio 2024, con destino a financiar una reestructura, la que se remitirá a consideración de la Asamblea General, debiendo la misma expedirse en un plazo de cuarenta y cinco días, vencido el cual, sin opinión en contrario, se entenderá aprobada.

Artículo 520.- Agrégase al artículo 16 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 19.797, de 13 de setiembre de 2019, el siguiente inciso:

"Una vez efectuada la comunicación de la calidad de omiso del funcionario, el organismo deberá dar cumplimiento a la retención prevista por el artículo 99 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la primera oportunidad de pago de salario, retribución, honorario, jubilación o subsidio, bajo apercibimiento de ser sujeto pasible de una multa de hasta UR 100 (cien unidades reajustables). La reglamentación del presente artículo deberá fijar los criterios para la aplicación de las sanciones propuestas y establecer la graduación de la multa, en base a criterios de cantidad o plazo de incumplimiento.

Dicha recaudación constituye "Recursos con Afectación Especial", de conformidad con lo previsto por el artículo 299 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018".

Artículo 521.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 19.797, de 13 de setiembre de 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 4º. (Pases en comisión).- Increméntanse en diez funcionarios los pases en comisión dispuestos en el artículo 15 de la Ley Nº 19.340, de 28 de agosto de 2015, y en las condiciones dadas en el artículo 298 de la Ley Nº 19.670, de 15 de octubre de 2018.

Cada miembro del Directorio podrá contar con un funcionario para desempeñar en comisión, tareas de asistencia directa a expresa solicitud de estos. Durante el período que dure el referido traslado, el funcionario quedará sometido al régimen de prohibiciones e incompatibilidades vigentes en el organismo de destino.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) definirá los perfiles de los candidatos en forma previa a la solicitud de cada pase, teniendo presente para ello las necesidades del servicio y la especialización

profesional adecuada para el cumplimiento efectivo de los cometidos que la JUTEP ostenta.

La JUTEP podrá solicitar a los organismos de contralor del Estado y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), el apoyo necesario para instrumentar las reformas que se estipulan en esta ley".

INCISO 35

INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE

Artículo 522.- Asígnase en el Inciso 35 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente", programa 461 "Gestión de la privación de libertad", unidad ejecutora 001 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente", objeto del gasto 199.000 "Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos), con destino al apoyo socioeconómico de los adolescentes que egresan, a efectos de atender el proceso de reinserción social.

Artículo 523.- Facúltase al Inciso 35 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente" a desarrollar programas de educación en el trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 del Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, dirigidos a todos los adolescentes que cumplan medidas judiciales en sus dependencias.

La reglamentación a dictarse determinará para las distintas actividades, los criterios de participación y la administración del producido de la enajenación de los bienes, que constituirán Fondos de Terceros, de forma tal, que los partícipes de estos programas perciban un ingreso, con cargo a los recursos previstos en el literal C) del artículo 18 de la Ley Nº 19.367, de 31 de diciembre de 2015.

Los participantes accederán al cobro total del acumulado, depositado en calidad de indisponible, una vez finalizadas las medidas judiciales.

Artículo 524.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 166 del Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, por el siguiente:

"Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, el

Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta de productos de su trabajo no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación".

Artículo 525.- Asígnase al Inciso 35 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente", programa 461 "Gestión de la Privación de Libertad", grupo 0 "Servicios Personales", una partida anual de $ 18.000.000 (dieciocho millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino al fortalecimiento de la estructura de cargos y funciones.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se le asignan.

Artículo 526.- Asígnase al Inciso 35 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente", programa 461 "Gestión de la Privación de Libertad", grupo 0 "Servicios Personales", una partida anual de $ 18.000.000 (dieciocho millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino a regularizar a los funcionarios con distintas escalas salariales.

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente comunicará a la Contaduría General de la Nación, dentro de los treinta días de aprobada la presente ley, la apertura de los créditos que se le asignan.

Artículo 527.- Autorízase al funcionariado de las distintas dependencias del Inciso 27 "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" que se encuentre cumpliendo funciones en la atención de las diferentes medidas socioeducativas no privativas de libertad reguladas por la ley en los distintos departamentos del país, a solicitar su traslado hacia el Inciso 35 "Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente del Uruguay".

El traslado se dispondrá por resolución fundada del INAU, debiendo contar en forma obligatoria con la previa aceptación del INISA. El funcionariado deberá acreditar la formación y el perfil requerido atendiendo al Modelo de Intervención vigente, para el cumplimiento de las sanciones no privativas de libertad para adolescentes en Uruguay.

La resolución de aceptación de INISA determinará la denominación, serie, escalafón y grado del cargo o función, así como los conceptos que integrarán la retribución del funcionario, previo procedimiento de adecuación presupuestal por redistribución. El traslado no podrá significar, en ningún caso, lesión de derechos funcionales.

El Inciso comunicará a la Contaduría General de la Nación, las reasignaciones de créditos correspondientes a fin de efectuar las modificaciones presupuestales pertinentes, lo que no podrá tener costo presupuestal ni de caja.

Lo dispuesto en este artículo se realizará en un plazo de doce meses a partir de la vigencia de la presente ley.

SECCIÓN VI

OTROS INCISOS

INCISO 21

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Artículo 528.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 18.640, de 8 de enero de 2010, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 5º.- Los integrantes del Consejo de Dirección del Centro serán designados por el Poder Ejecutivo, por el período de Gobierno. Podrán ser reelectos y se mantendrán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto sean nombrados quienes deban sustituirlos; serán honorarios, a excepción del Presidente que podrá ser rentado. En tal caso, el Poder Ejecutivo determinará la retribución correspondiente con cargo a la persona jurídica que se crea".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 529.- Contra las resoluciones del Consejo Directivo de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, ACAU dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

En lo pertinente y mientras el Consejo Directivo no previere algo distinto en su reglamentación interna, se aplicará a este procedimiento impugnatorio lo dispuesto para la Administración Central.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente que sea titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado, podrá interponer, únicamente por razones de legalidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno, a la fecha en que dicho acto fue dictado. La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días hábiles de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta. Dicho plazo se suspenderá durante las ferias judiciales y la Semana de Turismo. Si venciera en día inhábil, se correrá al hábil inmediato siguiente. Su tramitación seguirá el procedimiento previsto en el Código General del Proceso para el juicio ordinario, admitiendo la sentencia definitiva únicamente el recurso de reposición.

Lo dispuesto por el inciso anterior no será de aplicación a las resoluciones dictadas con motivo de la ejecución de contratos. Las responsabilidades que de estas emerjan se regirán por el derecho común.

Artículo 530.- Agréganse al artículo 2º de la Ley Nº 18.284, de 16 de mayo de 2008, en la redacción dada por el artículo 437 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, los siguientes literales:

"T) Llevar un Registro Público del Sector Cinematográfico y Audiovisual, de personas y empresas de producción, servicios, distribución, exhibición y otras conexas instaladas en el país, así como de las producciones nacionales y extranjeras realizadas en el país. Para estar comprendido dentro de los mecanismos previstos en la presente ley, será necesario estar inscripto en el Registro.

Todas las referencias legales y reglamentarias realizadas al Registro Público del Sector Cinematográfico y Audiovisual se entenderán en lo pertinente realizadas a este Registro. Se declaran válidas todas las acciones realizadas por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa referida en relación al Registro.

U) Difundir en canales propios o de terceros, obras nacionales apoyadas por fondos públicos respecto de las cuales posea derechos de explotación".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 531.- Asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", programa 442 "Promoción en salud", unidad ejecutora 012 "Ministerio de Salud Pública", Proyecto 000 "Funcionamiento", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 553.054 "Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis", una partida anual de $ 500.000 (quinientos mil pesos uruguayos) con destino a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 532.- Asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", unidad ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", objeto del gasto 591.014 "Instituto Nacional de Calidad", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino a atender gastos de funcionamiento.

Artículo 533.- Asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", unidad ejecutora 011 "Ministerio de Educación y Cultura", objeto del gasto 551.004 "Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA)", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 6.000.000 (seis millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino al pago de remuneraciones.

Artículo 534.- Increméntase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", programa 283 "Deporte Federado", unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", proyecto 000 "Funcionamiento", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", en el objeto del gasto 555.046 "Fundación Deporte Uruguay", por la suma de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con destino al apoyo de federaciones del deporte.

Artículo 535.- Asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", programa 400 "Políticas transversales de desarrollo social", unidad ejecutora 015 "Ministerio de Desarrollo Social", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), con destino a la Asociación Civil Seguridad y Justicia.

Artículo 536.- Increméntase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios",

unidad ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 551.022 "Parque Científico y Tecnológico de Pando", en $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos).

A efectos de financiar el incremento dispuesto, disminúyase la partida establecida en el artículo 461 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022.

Artículo 537.- Modifícase la denominación del "Patronato del Psicópata", creada por el artículo 1º de la Ley Nº 11.139, de 16 de noviembre de 1948, por la de "Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental".

Toda mención efectuada al "Patronato del Psicópata" se considerará referida a la "Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental".

Asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y subvenciones", programa 440 "Atención integral de la salud", unidad ejecutora 012 "Ministerio de Salud Pública", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos uruguayos) para la "Comisión Nacional de Apoyo a la Salud Mental", con destino a los cometidos en salud mental.

Artículo 538. (Cometidos del Parque Tecnológico Regional Norte).- El Parque Tecnológico Regional Norte, creado por el artículo 322 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, es una persona de derecho público no estatal que tendrá como objetivo la instalación de centros de conocimiento, investigación e innovación junto con empresas y emprendimientos innovadores, con el propósito de apoyar la conformación de un ecosistema innovador en el norte del país, interactuando con el sector académico y el sector productivo regional.

Artículo 539. (Integración y forma de actuación).- El Parque Tecnológico Regional Norte será dirigido y administrado por una Junta Directiva Honoraria compuesta por un delegado titular y un delegado alterno de los siguientes organismos públicos e instituciones privadas:

A) Un miembro designado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

B) Un miembro designado por la Intendencia Departamental de Rivera.

C) Un miembro designado por la Universidad de la República.

D) Un miembro designado por la Universidad Tecnológica.

E) Un miembro en representación del sector productivo de la región, designado por el Poder Ejecutivo.

La presidencia de la Junta Directiva Honoraria será definida entre sus miembros, una vez designados, y esta designación tendrá una duración de tres años, prorrogable por un máximo de otros dos años, sin perjuicio de su deber de permanecer en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.

La Junta Directiva Honoraria fijará su régimen de sesiones y funcionará con quórum mínimo de tres miembros. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 540. (Atribuciones de la Junta Directiva Honoraria).- La Junta Directiva Honoraria, en su carácter de órgano máximo del Parque Tecnológico Regional Norte, tendrá facultades para realizar todos los actos jurídicos convenientes para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

Tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

A) Designar al Gerente General, que será rentado y deberá ser una persona de reconocida trayectoria en el área de la gestión de actividades científicas, tecnológicas o de innovación; fijar su retribución y establecer sus atribuciones.

B) Aprobar los procedimientos de gestión del Parque Tecnológico Regional Norte, incluyendo aquellos relativos a las contrataciones y desarrollo del personal a lo largo de su vinculación con la institución, la gestión de compras y proveedores, de registro y contabilidad, la gestión de tesorería e inversiones, el establecimiento de sistemas de información y evaluación, etcétera.

C) Aprobar el Plan Estratégico del Parque Tecnológico Regional Norte, en la periodicidad que la Junta defina, con un máximo de cinco años para cada revisión.

D) En los casos que corresponda, aprobar la contratación de los empleados y asesores que se estimen necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos del Parque Tecnológico Regional Norte y disponer su desvinculación.

E) Crear e integrar las comisiones asesoras o consultivas que entienda pertinente para el mejor funcionamiento del Parque Tecnológico Regional Norte.

F) Instruir y resolver los recursos de reposición que se presenten contra sus resoluciones.

G) Aprobar el presupuesto, la memoria y el balance anual.

H) Administrar los recursos del Parque Tecnológico Regional Norte.

I) Delegar las atribuciones que estime convenientes en el Gerente General.

J) Mantener relaciones con autoridades públicas y entidades privadas, nacionales y extranjeras, pudiendo a tal efecto otorgar mandatos generales y especiales.

Artículo 541. (Recursos).- Constituirán recursos del Parque Tecnológico Regional Norte:

A) Los recursos y partidas que le asignen las leyes de Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

B) Los ingresos que pueda percibir por el arrendamiento de espacios y servicios a las organizaciones que se instalen en el Parque.

C) Los recursos extraordinarios que se puedan obtener por diferentes vías, incluyendo el financiamiento internacional.

D) Las herencias, legados y donaciones que acepte.

E) Los valores o bienes que se le asignen a cualquier título.

F) El aporte de los particulares a través del financiamiento total o parcial de programas específicos.

G) Los fondos provenientes de la cooperación, cualquiera sea su origen.

H) Todo otro recurso que le sea atribuido.

Artículo 542. (Régimen recursivo).- Contra las resoluciones de la Junta Directiva del Parque Tecnológico Regional Norte, procederá el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los quince días hábiles a partir del siguiente de la notificación. La Junta Directiva Honoraria dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días calendario para instruir y resolver el asunto. Denegado expresamente el recurso de reposición o vencido el plazo sin que la Junta Directiva haya resuelto el asunto, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del plazo de quince días hábiles a contar del siguiente a la denegatoria expresa o ficta.

Artículo 543. (Control).- La gestión económico financiera del Parque Tecnológico Regional Norte será fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la presentación periódica de otros estados que reflejen claramente su vida financiera (artículo 191 de la Constitución de la República).

Asimismo, la Auditoría Interna de la Nación ejercerá, sobre el organismo, las facultades de control que le han sido asignadas por el artículo 47 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 237 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

Artículo 544. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará lo referido al Parque Tecnológico Regional Norte, en todo lo necesario para la implementación, puesta en práctica y funcionamiento del mismo.

Artículo 545.- Asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", unidad ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 2.000.000 (dos millones de pesos uruguayos), en el objeto del gasto 551.028 "Parque Científico y Tecnológico Regional Norte (PTRN)", con destino al financiamiento de su operativa.

Artículo 546.- Autorízase a destinar del crédito presupuestal aprobado para el Instituto Nacional de Colonización (INC) por el artículo 308 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, un importe máximo de UI 21.000.000 (veintiún millones de Unidades Indexadas) a la adquisición de los inmuebles designados para ser expropiados por causa de utilidad pública, donde se dispondrá el obrador para la construcción de la represa de Casupá, padrones rurales Nº 16.460 (p), Nº 12.453 (dos avas partes identificadas a estos efectos) y Nº 16.459 ubicados en la 2ª Sección Catastral del departamento de Florida, y

padrón rural Nº 76 (p) ubicado en la 4ª Sección Catastral del departamento de Lavalleja.

Mientras no se ejecute la obra referida en el inciso anterior, el Instituto Nacional de Colonización constituirá, en los padrones rurales allí individualizados, un banco de forrajes para enfrentar eventos climáticos adversos. Tales padrones rurales no podrán ser destinados a crear una colonia de productores.

Previo al inicio de la obra de la represa de Casupá, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) deberá restituir al Instituto Nacional de Colonización el monto invertido en la adquisición de los padrones indicados en el inciso primero, debiendo el mencionado Instituto, aplicar los fondos al destino dispuesto por el artículo 308 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

Créase una comisión que estará integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la presidirá, un delegado de la Presidencia de la República, un delegado del Ministerio de Ambiente, un delegado de OSE y un delegado del INC, a los efectos de analizar la viabilidad de utilizar para riego el agua proveniente de Casupá sin restringir su empleo para consumo humano.

El presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 547.- Asígnanse en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" los créditos presupuestales que se enumeran, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", en los importes en moneda nacional, programas y unidades ejecutoras que se detallan, para el ejercicio 2024 y siguientes:

Prog.	UE	Institución	$
281	11	Asociación de Teatros del Interior - A.T.I.	2.000.000
442	12	Asociación de Laringectomizados del Uruguay	700.000
400	15	Fundación Madres del Cerro	700.000
442	12	Fundación Celíacos del Uruguay	300.000
400	15	Asociación de Discapacidad Motriz de Maldonado	300.000

Prog.	UE	Institución	$
400	15	Casa del Adulto Mayor "Lazos de Amistad" Minas de Corrales	300.000
400	15	Asociación Civil Centro "Francisco Pérez"	300.000
400	15	Club de Residentes y Amigos de Vichadero	300.000
320	07	Asociación Civil "Juan Edmundo Miller"	300.000
400	15	Asociación Civil "Familias Presentes"	300.000
400	15	Obra Misericordista del Uruguay	300.000
280	11	Asociación Civil Wilband Uruguay	300.000
280	11	Tároba Org	300.000
442	12	Asociación de Trasplantados del Uruguay - A.T.UR.	300.000
400	15	Centro Equinoterapia "En Progreso"	300.000
400	15	Hogar de Ancianos Santa Catalina	300.000
400	15	Asociación Civil "Crecer con Futuro"	300.000
400	15	Yaqu Pacha Uruguay	300.000
400	15	Asociación de Funcionarios Jubilados de la Enseñanza de San Carlos - A.FU.J.E.	300.000
400	15	CEA Azul	300.000
400	15	Asociación de Alzheimer Paysandú - ADAP	300.000
400	15	Asociación Dame tu mano	300.000
400	15	Hogar de Ancianos Máximo Cenoz Ita - Santa Lucía	300.000
400	15	Fundación OMBIJAM	300.000
400	15	Asociación Civil Resistiré	300.000
400	15	Asociación de padres de personas con Autismo - AgrupaTEA	300.000
400	15	ONG "Animales de Río Branco"	300.000

Prog.	UE	Institución	$
400	15	Baset Rescate Felino	300.000
400	15	Asociación Down de Florida	300.000
400	15	Asociación Cultural y Técnica	300.000
400	15	Asociación de Pasivos de Fray Marcos - A.DE.P.FRAY	300.000
400	15	Fundación Esperanza Joven	300.000
400	15	Escuela Granja "Nuestro Espacio"	200.000
400	15	Asociación Down de Rivera	200.000
400	15	Asociación Civil Mariposas	200.000
400	15	Clínica Escuela Esperanza	200.000
		TOTAL	12.900.000

Increméntanse a partir del ejercicio 2024 en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" los créditos presupuestales que se enumeran, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", en los importes en moneda nacional, programas y unidades ejecutoras que se detallan:

Prog.	UE	Institución	$
442	12	Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA)	560.000
283	02	Asociación Civil Olimpíadas Especiales Uruguayas	300.000
400	15	Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia FUNDAPASS	280.000
400	15	Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo	250.000
400	15	Unión Nacional de Protección a la Infancia	250.000
400	15	Comisión Pro-bienestar Social del Anciano de Young - Hogar	240.000
400	15	Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"	240.000
400	15	Federación Autismo del Uruguay	200.000

Prog.	UE	Institución	$
400	15	Asociación Civil Maestra Juana Guerra	200.000
400	15	Asociación Autismo en Uruguay	200.000
400	15	Asociación Síndrome de Down de Paysandú ASDOPAY	180.000
400	15	Moldeando el Futuro	160.000
400	15	Centro de Ayuda al Discapacitado de Young - CADY	160.000
400	15	El Sarandí Hogar Valdense	160.000
442	12	ONG – Pacientes oncológicos de Young	120.000
400	15	Sociedad "El Refugio" Asociación Protectora de Animales	100.000
400	15	Centro de Rehabilitación Ecuestre "El Tornado" Juan Lacaze	100.000
		TOTAL	3.700.000

Artículo 548.- Créase un fondo de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) a efectos de financiar becas para deportistas federados y entrenadores de todo el país, los cuales se encuentren preparando competencias del ciclo olímpico. Las mismas tendrán un valor de hasta 5 BPC (cinco Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales por deportista y serán distribuidas anualmente por la Fundación Deporte Uruguay, que seleccionará a los deportistas federados que ocuparán las becas según sus logros.

La beca no supone la condición de funcionario público y el deportista tendrá derecho a la misma hasta el momento en que la Fundación Deporte Uruguay seleccione a otro deportista con derecho a dicha beca.

A los efectos de la constitución del fondo, asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", programa 283 "Deporte Federado", unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", proyecto 000 "Funcionamiento", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida por única vez de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos), en el objeto del gasto 555.046 "Fundación Deporte Uruguay".

INCISO 23

PARTIDAS A REAPLICAR

Artículo 549.- Asígnase en el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", programa 440 "Atención Integral de la Salud", Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida anual de $ 135.100.000 (ciento treinta y cinco millones cien mil pesos uruguayos), con destino a la ampliación de las prestaciones vinculadas a la salud mental, en el marco de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007.

Facúltase a la Contaduría General de la Nación, una vez que el Poder Ejecutivo disponga el ajuste de las cuotas mensuales de prepago del Fondo Nacional de Salud, generado por la ampliación de las prestaciones referidas en el inciso anterior, a reasignar al Inciso 24 "Diversos Créditos", unidad ejecutora 024 "Dir. Gral. de Secretaría (MEF)", programa 440 "Atención Integral de la Salud", la partida antes asignada, con destino a financiar el incremento en los aportes del Banco de Previsión Social, a que refiere el literal A) del artículo 3º de la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007.

Artículo 550.- Asígnase en el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", programa 404 "Atención Integral a la Primera Infancia", una partida anual de $ 2.117.000.000 (dos mil ciento diecisiete millones de pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2024, con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", para el fortalecimiento de las políticas, programas y acciones destinadas a la atención integral de la primera infancia.

Créase el equipo de coordinación y seguimiento del Programa Atención Integral a la Primera Infancia, que estará integrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, uno del Ministerio de Salud Pública, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, uno de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y uno de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, quien lo coordinará.

El equipo de coordinación y seguimiento tendrá como cometido asegurar la instrumentación de los planes de trabajo en curso, promover la articulación de las acciones a cargo de las diferentes instituciones, proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de las partidas asociadas a planes de acción específicos y recomendar la eventual reasignación de aquellas partidas

generadas por economías o desvíos en los nuevos planes de trabajo acordados o los planes de trabajo en curso a la fecha de promulgación de la presente ley.

La ejecución de los créditos asignados se efectuará conforme a la efectiva instrumentación de los planes de trabajo acordados para el ejercicio 2024, los que serán analizados, evaluados e informados al Ministerio de Economía y Finanzas por el equipo de coordinación y seguimiento que se crea en el inciso segundo.

El monto establecido en el inciso primero del presente artículo se distribuirá según el siguiente detalle:

Ministerio de Desarrollo Social	$ 800.000.000
INAU (CAIF)	$ 400.000.000
ASSE	$ 110.000.000
Ministerio de Salud Pública - Fondo Especial para la Maternidad (Artículo 220, Ley Nº 19.996)	$ 30.000.000
Fondo Infancia (artículo 606 de la presente ley)	$ 200.000.000
Partidas asociadas a planes de acción específicos	$ 577.000.000
Total	$ 2.117.000.000

Dentro de los treinta días siguientes a la promulgación de la presente ley, el equipo de coordinación y seguimiento remitirá a la Asamblea General el plan de trabajo detallado para el ejercicio 2024, con los resultados a obtener por cada una de las instituciones y las acciones de articulación y comunicación enmarcadas en el plan de trabajo detallado.

Facúltase al Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo definido por el equipo de coordinación y seguimiento creado en el inciso segundo de este artículo, y previo informe de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos presupuestales desde el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" hacia los diferentes Incisos ejecutores del Programa Atención Integral a la Primera Infancia, para dar cumplimiento al plan de trabajo detallado a que refiere el inciso precedente, de conformidad con lo previsto en el inciso tercero del presente artículo.

A efectos de financiar la asignación dispuesta en el primer inciso, reasígnase de la partida aprobada por el artículo 312 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 551.- Asígnase en el Inciso 23 "Partidas a reaplicar", programa 440 "Atención Integral de la Salud", Financiación 1.1 "Rentas Generales", en el objeto de gasto 749.000 "Partidas a reaplicar", una partida por única vez de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2023.

Facúltase al Poder Ejecutivo a reasignar los créditos autorizados precedentemente con destino a incrementar las asignaciones presupuestales del Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado", lo que se podrá hacer efectivo a partir de la formalización de los acuerdos que surjan de los respectivos procesos de negociación colectiva con el personal de las Comisiones de Apoyo y del Patronato del Psicópata de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y con los funcionarios presupuestados de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Exceptúanse a las transferencias autorizadas en este artículo de las limitaciones establecidas por el inciso primero del artículo 721 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, en la redacción dada por el artículo 607 de la Ley Nº 19.355, de 19 de diciembre de 2015.

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la fecha de la promulgación de la presente ley.

Artículo 552.- Asígnase en el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", programa 481 "Política de Gobierno", Financiación 1.1 "Rentas Generales" una partida anual de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos uruguayos) en el proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 749.019 "Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio-TCA" y una partida por única vez de $ 10.000.000 (diez millones de pesos uruguayos) en el Proyecto 999 "Genérico de Inversiones", a efectos de financiar los gastos e inversiones asociados a la reforma de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Créase un grupo de coordinación entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Contaduría General de la Nación, a efectos de proyectar la distribución de las partidas antes referidas.

Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas, previo acuerdo del grupo de coordinación e informe favorable de la Contaduría General de la Nación, a reasignar los créditos referidos en el inciso anterior desde el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" hacia el Inciso 19 "Tribunal de lo Contencioso Administrativo", para la instalación y el funcionamiento de los nuevos juzgados.

Artículo 553.- Reasígnase de la partida dispuesta en el artículo 313 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, la suma de $ 30.000.000 (treinta millones de pesos uruguayos) con destino a financiar la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, creada en el artículo 236 de la Ley Nº 20.130, de 2 de mayo de 2023.

INCISO 24

DIVERSOS CRÉDITOS

Artículo 554.- Reasígnanse en el Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", unidad ejecutora 007 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", los créditos presupuestales que se detallan a continuación:

Proyecto	FF	Objeto del gasto	Importe en $
405	1.1	299.000	10.500.000
000	1.1	519.008	-10.500.000
405	2.1	299.000	4.500.000
000	1.1	519.008	-4.500.000
405	2.1	299.000	31.700.000
000	2.1	519.008	-31.700.000
980	2.1	799.000	13.300.000
000	2.1	519.018	-13.300.000

Artículo 555.- Sustitúyese el artículo 652 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 652.- A los efectos de arribar al 26,03% (veintiséis con cero tres por ciento) objeto del diferendo salarial derivado del artículo 64 de la

Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, se establecen las siguientes partidas:

A) Asígnase al Inciso 16 "Poder Judicial" una partida en el ejercicio 2023 de $ 104.073.010 (ciento cuatro millones setenta y tres mil diez pesos uruguayos) a valores 1º de enero de 2020, a los efectos de incrementar un 2,3% (dos con tres por ciento) a los funcionarios que perciben remuneraciones conforme al artículo 5º de la Ley Nº 19.625, de 11 de junio de 2018, y a los funcionarios que hubieran adherido a lo establecido por el artículo 651 de la presente ley.

B) Asígnase al Inciso 16 "Poder Judicial" una partida en el ejercicio 2024 de $ 171.272.501 (ciento setenta y un millones doscientos setenta y dos mil quinientos un pesos uruguayos) a valores de 1º de enero de 2020, a los efectos de incrementar un 3,7% (tres con siete por ciento) a los funcionarios que perciben remuneraciones, conforme al artículo 5º de la Ley Nº 19.625, de 11 de junio de 2018, y a los funcionarios que hubieran adherido a lo establecido por el artículo 651 de la presente ley.

Estas diferencias de retribución se establecen a los solos efectos del cumplimiento de los convenios referidos y de poner fin al diferendo derivado del artículo 64 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y por ende no se extienden a otros funcionarios fuera de los comprendidos.

A los efectos de financiar la presente disposición, la Contaduría General de la Nación habilitará los créditos previstos en este artículo, siempre y cuando se haya cumplido con los términos establecidos en los incisos tercero y cuarto del artículo 651 de la presente ley".

Artículo 556.- Increméntase en el Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", Proyecto 000 "Funcionamiento", objeto del gasto 553.018 "Instituciones en Convenio - Junta Nacional de Drogas", la partida asignada por el artículo 648 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, en $ 80.000.000 (ochenta millones de pesos uruguayos), con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", con destino al financiamiento del fortalecimiento de la Red Nacional de Atención y Tratamiento en Drogas.

Artículo 557.- Sustitúyese el artículo 660 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 660.- De la partida resultante del artículo 659 de la presente ley se deducirán sucesivamente:

A) En primer lugar, el 12,90% (doce con noventa decimales por ciento) que se destinará al Gobierno Departamental de Montevideo, deduciendo del mismo el importe ejecutado por dicho Gobierno Departamental del Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", del programa 372 "Caminería Departamental" de la unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", del Inciso 24 "Diversos Créditos".

B) En segundo lugar, el total ejecutado por los restantes Gobiernos Departamentales del Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", del programa 372 "Caminería Departamental" de la unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", del Inciso 24 "Diversos Créditos".

El Proyecto 999 antes mencionado se distribuirá y ejecutará conforme a los criterios establecidos por la Comisión Sectorial prevista en el literal B) del inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la República.

C) En tercer lugar, las partidas ejecutadas del Proyecto 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional", del programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales", de la unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República" del Inciso 24 "Diversos Créditos".

El remanente se distribuirá entre los Gobiernos Departamentales del interior de la República, de acuerdo con los siguientes porcentajes:

Departamento	%
Artigas	5,68
Canelones	10,09
Cerro Largo	5,83
Colonia	4,89

Departamento	%
Durazno	5,13
Flores	2,78
Florida	4,52
Lavalleja	4,42
Maldonado	7,92
Paysandú	6,44
Río Negro	4,74
Rivera	5,32
Rocha	5,03
Salto	6,81
San José	4,19
Soriano	5,34
Tacuarembó	6,29
Treinta y Tres	4,58

Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Congreso de Intendentes y previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a incrementar las asignaciones presupuestales de los proyectos de inversión mencionados en los literales B) y C) del presente artículo, con cargo a la partida referida en el artículo 658 de la presente ley".

El presente artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 558.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 658 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"De la partida resultante de aplicar dicho criterio se deducirán los montos establecidos en el inciso final del literal B) en la proporción correspondiente a la ejecución efectiva de las partidas establecidas en el inciso primero de dicho literal y los montos establecidos en el literal C) del artículo 664 de la presente ley".

Artículo 559.- Sustitúyese el inciso final del literal B) del artículo 664 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"A los efectos de la deducción establecida en el inciso tercero del artículo 658 de la presente ley, se considerarán únicamente los siguientes montos máximos, expresados a valores de enero de 2020 y que se ajustarán anualmente en base al Índice de Precios al Consumo: $ 600.000.000 (seiscientos millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2021, $ 700.000.000 (setecientos millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2022, $ 750.000.000 (setecientos cincuenta millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2023, y $ 850.000.000 (ochocientos cincuenta millones de pesos uruguayos) para el ejercicio 2024".

Artículo 560.- Increméntase en el Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 492 "Apoyo a los Gobiernos Departamentales y locales", unidad ejecutora 002 "Presidencia de la República", Proyecto 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", con cargo a la Financiación 1.1 "Rentas Generales", una partida por única vez de $ 77.000.000 (setenta y siete millones de pesos uruguayos) en el ejercicio 2023 y una partida por única vez de $ 82.000.000 (ochenta y dos millones de pesos uruguayos) en el ejercicio 2024.

Lo dispuesto precedentemente entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 561.- Sustitúyese el inciso quinto del artículo 666 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"Los proyectos ejecutados en el marco del Proyecto 994 "Complementario de Caminería Departamental y Subnacional", deberán ser financiados con un mínimo del 20% (veinte por ciento) con recursos propios de los Gobiernos Departamentales. A estos efectos, podrán afectarse las partidas asignadas al Proyecto 999 'Mantenimiento de la Red Vial Departamental', como contrapartida del Proyecto 994 "Complementario de Caminería Departamental y Subnacional".

Artículo 562.- Agrégase al artículo 667 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, el siguiente inciso:

"Si existiera un remanente de la partida asignada en el inciso primero después de determinado el importe del subsidio a percibir por cada Gobierno Departamental de acuerdo al inciso segundo, el mismo será redistribuido con el criterio aplicado para su determinación, aun cuando

se supere el porcentaje establecido en el inciso primero del presente artículo".

Lo dispuesto precedentemente entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 563.- Increméntase en el Inciso 24 "Diversos Créditos", programa 481 "Política de Gobierno", unidad ejecutora 024 "Dirección General de Secretaría (MEF)", Financiación 1.1 "Rentas Generales", objeto del gasto 298.000 "Asignación Contrataciones PPP", con destino a atender las obligaciones emergentes de los proyectos ejecutados bajo la modalidad de Participación Público Privada en UI 4.108.537 (cuatro millones ciento ocho mil quinientos treinta y siete unidades indexadas) a partir del ejercicio 2024, partida que deberá ser ejecutada por los correspondientes Incisos, de acuerdo al grado de avance de los proyectos.

SECCIÓN VII

RECURSOS

Artículo 564.- Agrégase como inciso segundo del artículo 8º de la Ley Nº 18.314, de 4 de julio de 2008, el siguiente:

"A partir del 1º de enero de 2024 la tasa aplicable al tramo de ingresos de más de 108 BPC (ciento ocho bases de prestaciones y contribuciones) y hasta 180 BPC (ciento ochenta bases de prestaciones y contribuciones) será del 8% (ocho por ciento), la que se reducirá al 6% (seis por ciento) a partir del 1º de enero de 2025".

Artículo 565.- Sustitúyese el literal A) del artículo 11 de la Ley Nº 18.833, de 28 de octubre de 2011, en la redacción dada por el artículo 105 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"A) Hasta el 70% (setenta por ciento) del total de las sumas entregadas con destino a financiar los proyectos, convertidas en unidades indexadas a la cotización del último día del mes anterior a la entrega efectiva de las mismas, se imputará como pago a cuenta del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en la Categoría I (Rentas del capital) y al Impuesto al Patrimonio".

Artículo 566.- Agrégase al Título 4 del Texto Ordenado 1996 el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 33 BIS. (Fusiones y Escisiones).- Las sociedades que resuelvan fusionarse o escindirse no computarán el valor llave a efectos fiscales, siempre que se cumplan con las siguientes condiciones:

A) Que los propietarios finales de las sociedades que participen en las fusiones y escisiones sean íntegramente los mismos, manteniendo al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) de sus proporciones patrimoniales y que no se modifiquen las mismas por un lapso no inferior a dos años contados desde la fecha de su comunicación al registro a que refiere el literal C). A tales efectos, no se considerará que existe alteración en la proporción patrimonial cuando la modificación tenga su origen en una sucesión, partición del condominio sucesorio, o disolución de la sociedad conyugal o su partición.

B) Que las referidas operaciones se realicen al valor contable del patrimonio transmitido.

C) Que se haya comunicado al registro que llevará a tales efectos la Auditoría Interna de la Nación la información relativa a la totalidad de la cadena de propiedad, identificando a todos los propietarios finales. Dicho organismo establecerá la forma y condiciones de la citada comunicación.

D) Que mantengan el o los giros de las sociedades antecesoras durante el lapso referido en el literal A).

A los efectos del presente artículo, se entenderá por propietarios finales:

1) Las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas por el artículo 22 de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017, aunque posean menos del 15% (quince por ciento) que dispone dicha norma.

2) Las sociedades que coticen en bolsas de valores nacionales, o bolsas de valores extranjeras de reconocido prestigio internacional siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.

3) Las entidades y estructuras jurídicas que, a solicitud de parte, determine en cada caso el Poder Ejecutivo, tomando en consideración aspectos tales como su naturaleza, los modos de

adquisición o integración de sus participaciones patrimoniales, la forma adoptada para su administración, el grado de vinculación y la cantidad de partícipes en su patrimonio o equivalente, el acceso a la identificación de los mismos, el grado de movilidad de sus participaciones u otros de naturaleza objetiva. En todos los casos, será condición que los estados financieros de las citadas entidades sean auditados por firmas de reconocido prestigio.

Cuando se verifique el incumplimiento de alguna de las condiciones dispuestas, la operación tendrá el tratamiento tributario correspondiente al régimen general, debiéndose aplicar el término de prescripción de diez años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo dicho incumplimiento. En tal caso, los tributos correspondientes deberán abonarse, sin multas ni recargos, actualizados por la evolución de la unidad indexada entre la fecha de su acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento.

Las fusiones y escisiones comprendidas en la presente norma de valuación son aquellas reguladas por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Las sociedades sucesoras serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesoras, derivadas del referido incumplimiento. Dicha responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado con dolo.

El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en los que se aplicará esta disposición".

Artículo 567.- Agrégase al Título 4 del Texto Ordenado de 1996, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 33 TER. (Transmisiones de participaciones patrimoniales).- Las transmisiones de participaciones patrimoniales de personas jurídicas residentes fiscales en territorio nacional se considerarán realizadas a su valor fiscal, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

A) Que las personas jurídicas enajenantes y adquirentes también sean residentes fiscales en territorio nacional.

B) Que los propietarios finales de las personas jurídicas enajenantes y adquirentes de las participaciones patrimoniales transferidas

sean íntegramente los mismos, manteniendo al menos el 95% (noventa y cinco por ciento) de sus proporciones patrimoniales y que no se modifiquen las mismas por un lapso no inferior a cuatro años contados desde su comunicación al registro a que refiere el literal E). A tales efectos, no se considerará que existe alteración en la proporción patrimonial cuando la modificación tenga su origen en una sucesión, partición del condominio sucesorio, o disolución de la sociedad conyugal o su partición.

C) Que las personas jurídicas adquirentes mantengan las participaciones recibidas durante un lapso no inferior a cuatro años contados desde que opera la transferencia efectiva.

D) Que el precio de la operación sea igual al valor contable de las participaciones transmitidas.

E) Que se haya comunicado al registro que llevará a tales efectos la Auditoría Interna de la Nación la información relativa de la cadena de propiedad, identificando a todos los propietarios finales. Dicho organismo establecerá la forma y condiciones de la citada comunicación.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por propietarios finales:

I) Las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas por el artículo 22 de la Ley Nº 19.484, de 5 de enero de 2017, aunque posean menos del 15% (quince por ciento) que dispone dicha norma.

II) Las sociedades que coticen en bolsas de valores nacionales o bolsas de valores extranjeras de reconocido prestigio internacional siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.

III) Las entidades y estructuras jurídicas que, a solicitud de parte, determine en cada caso el Poder Ejecutivo, tomando en consideración aspectos tales como su naturaleza, los modos de adquisición o integración de sus participaciones patrimoniales, la forma adoptada para su administración, el grado de vinculación y la cantidad de partícipes en su patrimonio o equivalente, el acceso a la identificación de los mismos, el grado de movilidad de sus participaciones u otros de naturaleza objetiva. En todos los

casos, será condición que los estados financieros de las citadas entidades sean auditados por firmas de reconocido prestigio.

Cuando se verifique el incumplimiento de alguna de las condiciones dispuestas, la operación de transmisión tendrá el tratamiento tributario correspondiente al régimen general, debiéndose aplicar el término de prescripción de diez años contados a partir de la terminación del año civil en que se produjo dicho incumplimiento. En tal caso los tributos correspondientes deberán abonarse, sin multas ni recargos, actualizados por la evolución de la unidad indexada entre la fecha de su acaecimiento y la de la configuración del incumplimiento.

Las personas jurídicas adquirentes serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesores, derivadas del referido incumplimiento. Dicha responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieren actuado con dolo.

El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones en los que se aplicará esta disposición".

Artículo 568.- Agrégase al artículo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

"X) Los resultados de tenencia o transferencia que paguen o pongan a disposición las sociedades administradoras de fondos de inversión, siempre que provengan de inversiones en valores públicos y valores privados con oferta pública.

A tales efectos se entenderá que tienen oferta pública los valores que verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

1) Que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública con la debida publicidad de forma de asegurar su transparencia y generalidad.

2) Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil en el país, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.

3) Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación no sea la licitación y exista un exceso de demanda sobre el total de la emisión, una vez contempladas las preferencias admitidas por la reglamentación, a adjudicarla a prorrata de

las solicitudes efectuadas. El Poder Ejecutivo podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente apartado.

Asimismo estarán exoneradas las referidas rentas cuando provengan de otros valores que disponga el Poder Ejecutivo siempre que estén destinados a financiar actividades en áreas categorizadas como prioritarias, ya sea por su importancia en la estructura productiva, su incidencia en la creación de empleo y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, o la pertenencia a cadenas agroindustriales, a la producción de energía, a las tecnologías de la información y comunicaciones, a la logística, a la biotecnología, la nanotecnología y el manejo del medio ambiente".

Artículo 569.- Agrégase al artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

"P) Los rendimientos y los incrementos patrimoniales de capital mobiliario que paguen o pongan a disposición las sociedades administradoras de fondos de inversión, siempre que provengan de inversiones en valores públicos y valores privados con oferta pública.

A tales efectos se entenderá que tienen oferta pública los valores que verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

1) Que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública con la debida publicidad de forma de asegurar su transparencia y generalidad.

2) Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil en el país, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.

3) Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación no sea la licitación y exista un exceso de demanda sobre el total de la emisión, una vez contempladas las preferencias admitidas por la reglamentación, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes efectuadas. El Poder Ejecutivo podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente apartado.

Asimismo estarán exoneradas las referidas rentas cuando provengan de otros valores que disponga el Poder Ejecutivo siempre

que estén destinados a financiar actividades en áreas categorizadas como prioritarias, ya sea por su importancia en la estructura productiva, su incidencia en la creación de empleo y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, o la pertenencia a cadenas agroindustriales, a la producción de energía, a las tecnologías de la información y comunicaciones, a la logística, a la biotecnología, la nanotecnología y el manejo del medio ambiente".

Artículo 570.- Agrégase al artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

"U) Los rendimientos y los incrementos patrimoniales de capital mobiliario que paguen o pongan a disposición las sociedades administradoras de fondos de inversión, siempre que provengan de inversiones en valores públicos y valores privados con oferta pública.

A tales efectos se entenderá que tienen oferta pública los valores que verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

1) Que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública con la debida publicidad de forma de asegurar su transparencia y generalidad.

2) Que dichos instrumentos tengan cotización bursátil en el país, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.

3) Que el emisor se obligue, cuando el proceso de adjudicación no sea la licitación y exista un exceso de demanda sobre el total de la emisión, una vez contempladas las preferencias admitidas por la reglamentación, a adjudicarla a prorrata de las solicitudes efectuadas. El Poder Ejecutivo podrá establecer excepciones a lo dispuesto en el presente apartado.

Asimismo estarán exoneradas las referidas rentas cuando provengan de otros valores que disponga el Poder Ejecutivo siempre que estén destinados a financiar actividades en áreas categorizadas como prioritarias, ya sea por su importancia en la estructura productiva, su incidencia en la creación de empleo y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, o la pertenencia a

cadenas agroindustriales, a la producción de energía, a las tecnologías de la información y comunicaciones, a la logística, a la biotecnología, la nanotecnología y el manejo del medio ambiente".

Artículo 571- Sustitúyese el inciso octavo del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"Los resultados que provengan de instrumentos financieros derivados, así como los correspondientes a primas de opciones, no se tendrán en cuenta a ningún efecto en la liquidación de este impuesto. Tampoco se tendrán en cuenta las transmisiones de participaciones patrimoniales que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 33 Ter del Título 4 de este Texto Ordenado".

Artículo 572.- Las referencias realizadas al Texto Ordenado 1996 efectuadas en la presente ley se consideran realizadas a las leyes que les dieron origen.

Artículo 573.- Sustitúyese el inciso decimoprimero del artículo 78 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"Para las entidades comprendidas en los literales B) a I) del numeral 2) del artículo 79 de este Título, el porcentaje a imputar como pago a cuenta dispuesto por el inciso primero del presente artículo será del 40% (cuarenta por ciento) y el 60% (sesenta por ciento) restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gastos de la empresa".

Artículo 574.- Sustitúyese el artículo 79 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"ARTÍCULO 79. (Donaciones especiales. Entidades).- Se encuentran comprendidas en el beneficio establecido por el artículo precedente, las donaciones destinadas a:

1) Educación primaria, secundaria y técnico-profesional:

A) Los establecimientos públicos de educación primaria, de educación secundaria, de educación técnico-profesional y de formación docente, las Direcciones Generales de Educación Secundaria y Técnico-Profesional y el Consejo de Formación en Educación, los servicios que integren la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, equipos técnicos universitarios interdisciplinarios, que

funcionen en el marco de proyectos dirigidos a mejorar la calidad educativa, previamente estudiados y aprobados por las autoridades pertinentes. La Administración Nacional de Educación Pública informará respecto de la conveniencia y distribución de los proyectos que se financien con las donaciones incluidas en el presente literal.

B) Las instituciones privadas cuyo objeto sea la educación primaria, secundaria, técnico-profesional, debidamente habilitadas, y que atiendan efectivamente a las poblaciones más carenciadas, así como para financiar infraestructura educativa de las instituciones que con el mismo objeto, previo a solicitar su habilitación, presenten su proyecto educativo a consideración del Ministerio de Educación y Cultura.

2) Educación terciaria e investigación:

A) Universidad de la República y fundaciones instituidas por la misma.

B) Universidad Católica del Uruguay.

C) Universidad de Montevideo.

D) Universidad ORT Uruguay.

E) Universidad de la Empresa.

F) Instituto Universitario CLAEH.

G) Instituto Universitario Francisco de Asís.

H) Sociedad de Amigos de la Educación Popular.

I) Instituto Metodista Universitario Crandon

J) Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable.

K) Fundación Uruguaya para la Investigación de las Enfermedades Raras (FUPIER).

L) Universidad Tecnológica.

3) Salud:

A) Construcción de locales o adquisición de útiles, instrumentos y equipos que tiendan a mejorar los servicios de las entidades con personería jurídica dedicadas a la atención de personas en el campo de la salud mental, que hayan tenido una actividad mínima de cinco años ininterrumpidos a la fecha de recibir la donación.

B) Fundación Teletón Uruguay para la rehabilitación pediátrica.

C) Fundación Peluffo Giguens y Fundación Dr. Pérez Scremini, en aquellos proyectos acordados con la Dirección del Hospital Pereira Rossell.

D) Fundación Álvarez - Caldeyro Barcia.

E) Fundación Porsaleu.

F) Hogar Español.

G) Fundación Corazoncitos.

H) Fundación Ronald Mc Donalds.

I) Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (APRODI).

J) Hogar Amelia Ruano de Schiaffino.

K) Fundación Oportunidad.

L) Fundación Clarita Berenbau.

M) Fundación Canguro.

N) Asilo de Ancianos y Huérfanos Israelitas del Uruguay.

Ñ) Asociación de Diabéticos del Uruguay.

O) Fundación Trompo Azul.

P) Fundación Hemovida.

Q) Fundación Jazmín.

R) Fundación Enfermedades Reumáticas Prof. Herrera Ramos.

S) Fundación Honrar la Vida.

T) Fundación San Pedro del Durazno.

U) Asociación de Sordos del Uruguay.

V) Fundación ASTUR.

W) Fundación Tiempo es Cerebro.

X) Asociación Civil por la Reconstrucción de Dolores.

Y) Fundación Douglas Piquinela.

Z) Fundación de Anestesia Pediátrica del Pereira Rossell.

Aa) Asociación Apoyo al Campo Canario del Sur.

Bb) Asociación de Trasplante Hepático.

Cc) El Sarandí Hogar Valdense.

Dd) Comisión de Apoyo Local al Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Ee) Fundación Manos de Héroes.

Ff) Asociación para la integración del Adulto Mayor de Cerro Largo.

Gg) Fundación Hilo Rosa.

Hh) Fundación Luis Manuel Calleja.

Ii) Asociación Civil Mentis.

Jj) Fundación Sentires.

Kk) Fundación Apoyo y Promoción Perros de Asistencia – FUNDAPASS.

El Ministerio de Salud Pública informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a estas instituciones.

4) Apoyo a la niñez y a la adolescencia:

A) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

B) Fundación Niños con Alas.

C) Aldeas Infantiles SOS.

D) Centro Educativo Los Pinos.

E) Fundación Salir Adelante.

F) Fundación TZEDAKÁ.

G) Fundación Niños y Niñas del Uruguay.

H) Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU).

I) Asociación Civil Fe y Alegría del Uruguay.

J) Fundación Pablo de Tarso.

K) Asociación Civil América - Proyecto Cimientos.

L) Fundación Logros.

M) Fundación Celeste.

N) Asociación Civil E-dúcate.

Ñ) Enseña Uruguay.

O) Fundación Forge.

P) Fundación Kolping.

Q) Asociación Red de Alimentos Compartidos (REDALCO).

R) Fundación Banco de Alimentos del Uruguay.

S) Fundación Sophia.

T) Servicio de Ayuda Rural del Uruguay.

U) Fundación Salesianos Don Bosco.

V) Fundación MIR.

W) Fundación Uruguay por una Cultura Solidaria - América Solidaria.

X) Desem - Jóvenes Emprendedores.

Y) Asociación Civil Centro Esperanza.

Z) Asociación Civil Emocionarte.

Aa) Centro de Promoción por la Dignidad Humana.

Bb) Asociación Civil Jóvenes Fuertes.

Cc) Federación de Obreros y Empleados de la Bebida.

Dd) Fundación ReachingU.

Ee) Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Ff) Asociación Civil El Palomar.

Gg) Asociación Civil Cireneos.

Hh) Asociación Civil Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales.

Ii) Uruguay Adelante.

Jj) Fundación Nuestro Camino.

Kk) Fundación Humaniza Josefina.

Ll) Fundación Centro de Educación Popular.

Mm) Asociación Civil Andares.

Nn) Fundación Impacto Las Higueras.

Ññ) Fundación Piso Digno.

Oo) Asociación Civil Rotary - Distrito 4975.

Pp) Rotary Club de Montevideo.

Qq) Por los Niños Uruguayos.

Rr) Centro Esperanza de Ombúes de Lavalle.

Ss) Huerta Taller Buscando Espacio - Colonia del Sacramento.

Tt) Centro Juvenil y Deportivo Quebracho.

Uu) Centro Educativo Unidos por los Niños.

Vv) Fundación en Red.

Ww) Club Náutico.

Xx) Fundación Retoño Uruguay.

Yy) Fundación Cienarte.

Zz) Obra Social Mandubí.

El Ministerio de Desarrollo Social informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a estas instituciones.

5) Rehabilitación Social:

A) Asociación Civil de Apoyo a la Rehabilitación e Integración Social.

B) Fundación Hogar Nuevos Caminos.

C) Fundación Ave Fénix.

D) Asociación Civil Padre Alberto Hurtado.

E) Fundación Caleidoscopio.

F) Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

El Ministerio del Interior o el Ministerio de Desarrollo Social, según corresponda, informarán respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a estas instituciones.

6) Otras instituciones no incluidas en los numerales anteriores:

A) Fundación Gonzalo Rodríguez. La Unidad Nacional de Seguridad Vial informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

B) Asociación Civil Un Techo para Uruguay. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

C) Red de Emprendedores Senior. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

D) Fundación Cero Callejero. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

E) Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU). El Ministerio de Desarrollo Social informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

F) Fundación Torres García.

G) Fundación Pablo Atchugarry.

H) Fundación José Gurvich.

I) Fundaciones instituidas por el Ministerio de Educación y Cultura.

El Ministerio de Educación y Cultura informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a estas instituciones.

J) Sistema B. El Ministerio de Ambiente informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

K) Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

L) Instituciones sin fines de lucro, para costear la reparación o refacción de inmuebles de su propiedad declarados como patrimonio histórico, sobre proyectos previamente aprobados por la unidad ejecutora 008 "Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación", del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura".

M) Fundación Bonet. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

N) Alianza Uruguaya por el Agua. El Ministerio de Ambiente informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

O) Instituciones sin fines de lucro de economía circular, cuyo objeto sea la protección del ambiente, la promoción de modelos de desarrollo sostenible y la prevención y reducción de los impactos negativos de la generación de residuos, en todas sus etapas de gestión, para proyectos aprobados por el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Educación y Cultura, según corresponda.

P) Fundación Mujeres Celestes. La Unidad Ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte" del Inciso 02 "Presidencia de la República", informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

Q) Red de Mujeres Ejecutivas del Uruguay. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución.

Los proyectos declarados de fomento artístico cultural, de acuerdo con lo establecido por el artículo 239 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por el artículo 190 de la Ley Nº 18.834, de 4 de noviembre de 2011, se seguirán rigiendo por dicha ley y sus modificativas.

Todas las instituciones que no cuenten con proyectos aprobados y vigentes en un período de dos años consecutivos, así como aquellas que mantengan proyectos vigentes pero no reciban donaciones por el mismo período, dejarán de integrar la lista precedente. El Poder Ejecutivo dará cuenta de ello a la Asamblea General y se dispondrá el cese de las mismas en la próxima instancia presupuestal o de rendición de cuentas".

Artículo 575.- Agrégase al artículo 79 (Donaciones Especiales. Entidades) del Título 4 del Texto Ordenado 1996, numeral 6) Otras instituciones no incluidas en los numerales anteriores, el siguiente literal:

"R) Fundación TOTEM XV. La Unidad Ejecutora 011 "Secretaría Nacional del Deporte" del Inciso 02 "Presidencia de la República", informará respecto de la conveniencia de los proyectos que se financien con las donaciones a esta institución".

Artículo 576.- Agréganse al artículo 1º BIS del Título 11 del Texto Ordenado 1996 los siguientes incisos:

"Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, a partir del 1º de enero de 2025 y por un plazo de 10 (diez) años, se fija en $ 0 (cero pesos uruguayos) el monto fijo por unidad física enajenada correspondiente a los bienes incluidos en el literal A), así como en 0% (cero por ciento) la tasa correspondiente a los bienes que se detallan en el literal B), siempre que el sujeto pasivo sea una entidad adherida a un plan nacional de gestión de residuos, de conformidad con la Ley Nº 17.849, de 29 de noviembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 227 de la Ley Nº 18.996, de 7 de noviembre de 2012, y que el referido plan cumpla con las siguientes condiciones:

A) Que se acredite ante el Ministerio de Ambiente el cumplimiento de las siguientes metas de recuperación:

Al 31 de diciembre de 2025, alcanzar el 50% (cincuenta por ciento) de valorización en peso global de materiales puestos en el mercado;

al 31 de diciembre de 2027, alcanzar el 60% (sesenta por ciento) de valorización en peso global de materiales puestos en el mercado; y

al 31 de diciembre de 2032, alcanzar el 85% (ochenta y cinco por ciento) de valorización en peso global de materiales puestos en el mercado.

El Ministerio de Ambiente establecerá la forma de determinación de los objetivos de valorización preestablecidos, así como los mínimos de valorización y reciclado por material así como otras metas relativas a la cobertura territorial.

B) Que el monto del depósito establecido para el funcionamiento del Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso, así como los aportes que las entidades mencionadas en el presente inciso realicen a dicho plan, sean aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Ambiente.

Solo podrán fabricar o importar productos alcanzados, las empresas que adhieran a un plan de gestión de envases aprobado por el Ministerio de Ambiente. Asimismo, el no

cumplimiento de las metas establecidas en el literal A) implicará la obligación del pago de los montos y tasas exonerados, con retroactividad al 1° de enero del año correspondiente.

El Poder Ejecutivo establecerá los términos y condiciones requeridos en el presente artículo".

Artículo 577.- Sustitúyese el artículo 79 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"ARTÍCULO 79.- Facúltase al Poder Ejecutivo a acordar a las Intendencias un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en:

A) Las adquisiciones de bienes de capital.

B) Las prestaciones de servicios de valorización de residuos en plantas industriales debidamente autorizadas por la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), siempre que sean contratados por licitación y que los residuos se reciban a través de los servicios de recolección de las referidas Intendencias en forma directa o por contratistas de las mismas. Será condición necesaria que se reduzca en más de un 70% (setenta por ciento) las toneladas de dichos residuos destinados a disposición final. La DINACEA certificará en los términos que esta disponga, el cumplimiento del extremo precedente".

Artículo 578.- Sustitúyese el artículo 110 del Título 3 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"ARTÍCULO 110.- Inclúyese en las exoneraciones dispuestas por el artículo 1º de este Título a las empresas periodísticas. Asimismo quedarán incluidas en las exoneraciones referidas, las empresas de radiodifusión y televisión, siempre que sus ingresos en el ejercicio no superen los 4.000.000 UI (cuatro millones de unidades indexadas).

Se entenderá por empresa periodística a las de prensa escrita gráfica o con reproducción digital transmitida en forma telemática o mediante aplicaciones informáticas".

Artículo 579.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los sujetos pasivos del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), el régimen de facilidades previsto en los artículos 11 y siguientes de la Ley Nº 17.555, de 18 de setiembre de 2002, respecto de las obligaciones tributarias del referido impuesto cuyo hecho generador se haya configurado hasta el 31 de diciembre de 2022.

Quedan incluidas en lo dispuesto en el presente artículo las infracciones tributarias previstas en la Sección Primera del Capítulo Quinto del Código Tributario, con excepción de la tipificada en el artículo 96 del referido Código.

Artículo 580.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluidos en una canasta de productos por las compras realizadas en comercios de pasos de frontera del litoral del país que se ubicaren en un radio máximo de 50 (cincuenta) kilómetros de los pasos de frontera con la República Argentina y la República Federativa del Brasil.

La devolución dispuesta en el inciso anterior regirá exclusivamente cuando la compra sea realizada por personas mayores de edad, residentes en esos departamentos y debidamente registrados a tales efectos. El régimen de devolución aplica para las compras efectuadas a través de medios de pago electrónicos a nombre del titular beneficiario.

El Poder Ejecutivo dispondrá la forma y condiciones en que operará el presente régimen a efectos de su funcionamiento y contralor, pudiendo limitar su alcance o ampliar las zonas geográficas de acuerdo con los precios de los bienes de la canasta sujeta al beneficio, en la República Argentina y la República Federativa del Brasil. La reglamentación establecerá asimismo, el límite temporal de aplicación del régimen, el detalle de productos que integran la canasta sobre el que se aplica la devolución del IVA y un tope máximo de devolución de IVA por mes y por persona.

SECCIÓN VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 581.- Sustitúyese el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por el artículo 194 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente:

"ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de las sanciones preceptuadas por el Decreto-Ley Nº 14.855, de 15 de diciembre de 1978, y para las situaciones no previstas en el mismo, las violaciones al presente decreto ley, decretos y resoluciones administrativas del Poder Ejecutivo y resoluciones del Instituto Nacional de Carnes, así como los incumplimientos y anulaciones relacionadas con operaciones de exportación, serán sancionados por el Instituto Nacional de Carnes con multas de hasta 15.000 UR (quince mil unidades reajustables), sujetas a la reglamentación que a estos efectos dicte el Poder Ejecutivo. Dicho monto máximo será aplicable, asimismo, a las situaciones comprendidas en el numeral 2º) del literal C) del artículo 2º del Decreto-Ley Nº 14.855, de 15 de diciembre de 1978".

Artículo 582.- Sustitúyese el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por el artículo 362 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 25.- La notificación a los interesados de las resoluciones del Instituto Nacional de Carnes (INAC) podrá hacerse indistintamente por cedulón entregado en el último domicilio registrado en el Instituto, o mediante telegrama colacionado, carta certificada o domicilio electrónico, transcribiéndose en todos los casos la parte dispositiva de la resolución. Podrá, asimismo, citarse a los interesados por cualquiera de los medios indicados precedentemente o por publicación en el Diario Oficial, en caso de desconocerse su domicilio, para que concurran a notificarse a las oficinas del Instituto. En tal caso, si no lo hicieran dentro de los diez días hábiles siguientes, se tendrán por notificados a todos los efectos. Todas las personas físicas y jurídicas que se vinculen directa o indirectamente con el INAC deberán constituir domicilio electrónico en el sistema que el Instituto establezca con la finalidad de recibir notificaciones y otro tipo de comunicación".

Artículo 583.- Sustitúyese el literal B) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por el artículo 210 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"B) El importe de las tarifas que establezca por la prestación o utilización de sus servicios, las cuales tendrán como límite máximo el costo que tengan para el Instituto Nacional de Carnes, los servicios prestados".

Artículo 584.- Sustitúyese el literal B) del artículo 85 de la Ley Nº 16.811, de 21 de febrero de 1997, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 18.467, de 27 de febrero de 2009, por el siguiente:

"B) Multa desde 5 UR (cinco unidades reajustables) hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables)".

Artículo 585.- Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir un Fideicomiso de Administración de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003, y su respectiva reglamentación, así como la celebración del correspondiente Contrato de Fideicomiso a otorgarse (en adelante, "el Fideicomiso"), el cual se denominará "Fideicomiso para la Movilidad Sostenible". Este fideicomiso tendrá como objeto la administración de recursos destinados a programas que posibiliten el transporte terrestre colectivo de pasajeros de modo sostenible y a precios accesibles.

El Fideicomiso para la Movilidad Sostenible tendrá por fideicomitentes al Poder Ejecutivo, actuando a través de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) en tanto que el beneficiario final será el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Fideicomiso para la Movilidad Sostenible será administrado por un fiduciario financiero profesional, de acuerdo con lo previsto en los numerales 1) y 35) del literal D) del artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 314 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020.

Autorízase a los Ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas a otorgar, en representación del Estado, el Contrato de Fideicomiso, conjuntamente con ANCAP y el fiduciario a contratar.

Artículo 586.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer que los recursos que actualmente se destinan al Fideicomiso de Administración del Boleto sean asignados al Fideicomiso para la Movilidad Sostenible una vez constituido.

La totalidad de los bienes, créditos, derechos, obligaciones y recursos existentes en el Fideicomiso de Administración del Boleto se transferirán de pleno derecho al patrimonio fideicomitido del fideicomiso referido en el inciso anterior.

El Poder Ejecutivo reglamentará la transición y condiciones para la implementación de los cambios.

Artículo 587.- El Fideicomiso para la Movilidad Sostenible estará exonerado de toda obligación tributaria de carácter nacional o departamental, creada o a crearse.

Artículo 588.- A los efectos de lo dispuesto por el numeral 6º) del artículo 85 de la Constitución de la República, se autoriza al Gobierno Central a contraer un total de endeudamiento neto para el ejercicio 2024, que no podrá superar el equivalente a US$ 2.300.000.000 (dos mil trescientos millones de dólares de los Estados Unidos de América).

Resultarán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 697 a 701 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

Artículo 589.- Interprétase que la percepción de los incrementos salariales otorgados por los artículos 80 y 459 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, a los funcionarios públicos civiles pertenecientes a la Administración Central y a los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, representados por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, en el marco de la negociación colectiva y reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, categorizada como compensación personal que no se absorbe, no disminuirá compensaciones personales ni otras compensaciones que conformen la retribución mensual normal de dichos funcionarios.

Artículo 590.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.298, de 18 de agosto de 1992, en la redacción dada por el artículo 385 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

> "ARTÍCULO 1º.- Para las enajenaciones previstas en el numeral 8) del artículo 663, y en los numerales 3), 4) y 5) del artículo 664 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, se prescindirá de los certificados expedidos por el Banco de Previsión Social (BPS) a que

refieren dichas normas, cuando las enajenaciones se lleven a cabo por expropiación, por cumplimiento forzado de la Ley Nº 8.733, de 17 de junio de 1931, y concordantes, o por ejecución forzada judicial o extrajudicial.

Asimismo, se prescindirá de los referidos certificados:

A) En las adjudicaciones posteriores a remates frustrados, en favor del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Intendencias o de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV); esta última cuando sea adjudicataria por sí o en carácter de administrador o fiduciario de créditos cuyo beneficiario sea persona pública estatal.

B) En las situaciones del literal anterior, también en la primera enajenación subsiguiente a la adjudicación, siempre que con posterioridad a esta última no se hubieran realizado obras, de lo que se dejará constancia en la escritura mediante declaración jurada.

C) En las enajenaciones, cesiones o adjudicaciones de bienes inmuebles que realice el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el BHU y la ANV, en cumplimiento de sus cometidos en materia de política de vivienda, actuando estos por sí o en carácter de fiduciario o administrador de carteras de tales organismos, y las Intendencias. Lo dispuesto en el presente literal regirá exclusivamente respecto de viviendas con permiso de construcción o cuya entrega se hubiere otorgado con anterioridad a la promulgación de la presente ley.

   Cuando el organismo enajenante sea la Intendencia, deberá controlarse la declaración del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el BHU y la ANV, ratificando la existencia de algún convenio de participación, con el fin de atender la problemática social habitacional.

D) En los casos en que la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR - Dr. Alberto Gallinal Heber) sea adquirente de bienes inmuebles no mayores de quince hectáreas, destinados a la construcción de viviendas o servicios anexos. En este caso las eventuales deudas a favor del BPS gravarán los restantes inmuebles del enajenante.

E) Cuando la Comisión Honoraria antes referida enajene sus inmuebles.

F) En las enajenaciones de bienes inmuebles que por vía de remate realice la Junta Nacional de Drogas.

G) En las enajenaciones de inmuebles ocupados por asentamientos irregulares en favor del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial o de Intendencias, realizadas en el marco del proceso de su regularización.

En todos los casos previstos en el presente artículo no serán de aplicación los artículos 667 y 668 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990".

Lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 591.- Agréganse al artículo 165 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, los siguientes incisos:

"Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a abonar los aportes patronales que correspondan a sentencias de condenas, referidas a rubros salariales de funcionarios de los Incisos del Presupuesto Nacional con cargo al crédito presupuestal del objeto del gasto 711.000 'Sentencias judiciales Art. 52 Ley Nº 17.930', considerando a tales efectos, previo informe de la Contaduría General de la Nación, abatir en el siguiente ejercicio presupuestal, los créditos destinados a funcionamiento del Inciso condenado.

A efectos de ejercer la facultad prevista en el inciso anterior, los Incisos condenados, a través del Gerente Financiero o quien haga sus veces, deberán, en un plazo de cinco días corridos, desde la notificación judicial de la suma adeudada, líquida y exigible, poner en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, el monto líquido de la obligación, así como el de los impuestos y contribuciones a la seguridad social, personal y patronal (artículo 13 de la Ley Nº 19.438, de 14 de octubre de 2016). No obstante, el Inciso condenado deberá igualmente regularizar la historia laboral de los funcionarios involucrados en el plazo establecido en el inciso segundo de la presente disposición.

La omisión a suministrar la información antes referida, será considerada falta grave".

Artículo 592.- Sustitúyese el artículo 377 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, por el siguiente:

"ARTÍCULO 377.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exceptuar a las instituciones nacionales de investigación, universidades públicas y a las universidades e institutos terciarios reconocidos por el Ministerio de Educación y Cultura, de su inclusión en el régimen previsto en los incisos primero y segundo del artículo 581 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001".

Artículo 593.- Sustitúyese el artículo 3º del Título 3 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"ARTÍCULO 3º.- Quienes gocen de las exoneraciones a que refiere el artículo 1º de este Título, inclusive cuando la franquicia esté otorgada por remisión de otras leyes, solo podrán importar bienes a su amparo cuando tengan por destino exclusivo el desarrollo de la actividad que motiva la exoneración.

El Poder Ejecutivo deberá considerar que los bienes a importar cumplan directamente con los fines esenciales tutelados.

Otorgada la exoneración, los bienes no podrán enajenarse a ningún título, por un plazo de diez años a partir de la fecha de su introducción definitiva al país, con las siguientes excepciones:

A) Las computadoras personales, las impresoras y los accesorios vinculados directamente a las mismas, en cuyo caso el plazo será de tres años.

B) Los demás bienes importados podrán ser enajenados a título gratuito a organismos públicos, a partir de los cinco años.

Las instituciones que importen bienes para cumplir fines institucionales de beneficencia a pobres, enfermos e inválidos y las instituciones que importen bienes que por su naturaleza serán entregados en concepto de premio, condecoración o distinción, en virtud de la participación en eventos, vinculados directamente a sus fines, quedan exceptuadas de los plazos dispuestos precedentemente y dichos bienes podrán ser enajenados únicamente a título gratuito.

Los incumplimientos de la presente franquicia darán lugar a la revocación de la autorización concedida y al cobro de la totalidad de los impuestos exonerados, más las multas y recargos correspondientes".

Artículo 594.- Sustitúyese el artículo 323 BIS del Código Penal, aprobado por la Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 17.951, de 8 de enero de 2006, por el siguiente:

"ARTÍCULO 323 BIS.- El que, con motivo o en ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público que tuviera por objeto la recreación o el esparcimiento, al ingresar, durante el desarrollo del mismo o al retirarse, participare de cualquier modo en una riña, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión y prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo de uno a tres años.

El que, en las mismas circunstancias del inciso anterior, portare armas (artículo 293) o las introdujere en el recinto en el que se desarrollare la competencia deportiva o el espectáculo público, sin la debida autorización para su porte o tenencia será castigado con pena de seis a veinticuatro meses de prisión y prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo de tres a cinco años.

En todos los casos, se procederá al comiso de las armas incautadas.

Si de la riña resultare muerte o lesión, se aplicará lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 323 de este Código, incrementándose la pena en un tercio siempre que el resultado fuere previsible para el partícipe.

Si de las conductas descriptas en los incisos anteriores resultare muerte o lesión se aplicará, además de la pena que corresponda al delito, la pena de prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo de cinco a quince años".

Artículo 595.- Sustitúyese el artículo 358 BIS del Código Penal, aprobado por la Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 22 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, por el siguiente:

"ARTÍCULO 358 BIS.- El que destruyere o de cualquier modo dañare total o parcialmente una cosa ajena mueble o inmueble, con motivo o en

ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público, durante su desarrollo o al ingresar o retirarse del mismo, será castigado con pena de tres a quince meses de prisión y prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo de uno a cinco años".

Artículo 596.- Sustitúyese el artículo 360 BIS del Código Penal, aprobado por la Ley Nº 9.155, de 4 de diciembre de 1933, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 19.120, de 20 de agosto de 2013, por el siguiente:

"ARTÍCULO 360 BIS.- Si las faltas previstas en el numeral 1º del artículo 360 se cometieren en ocasión o con motivo de la disputa de un espectáculo deportivo de cualquier naturaleza, se dispondrá la prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo de seis meses a doce meses.

En caso de que el inculpado registrare antecedentes como infractor por violencia en espectáculos públicos, el referido plazo tendrá un mínimo de doce meses y un máximo de veinticuatro meses".

Artículo 597.- Sustitúyese el artículo 81 de la Ley Nº 18.446, de 24 de diciembre de 2008, en la redacción dada por el artículo 8º de la Ley Nº 19.763, de 21 de junio de 2019, por el siguiente:

"ARTÍCULO 81.- El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta veinte funcionarios públicos de cualquier dependencia o Poder del Estado, todo de acuerdo con lo que establece el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, y normas modificativas".

Artículo 598.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 51 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, por el siguiente:

"El contratado no podrá superar las treinta horas semanales de labor y tendrá una remuneración de 4 BPC (cuatro bases de prestaciones y contribuciones); en caso de pactarse un régimen horario inferior, la remuneración será proporcional al mismo. Si se trata de una mujer embarazada o de un padre o una madre de un hijo menor a cuatro años,

la remuneración será de 6 BPC (seis bases de prestaciones y contribuciones) por treinta horas semanales".

Artículo 599.- Agréganse al artículo 2º de la Ley Nº 17.684, de 29 de agosto de 2003, los siguientes literales:

"L) Acceder a la carpeta investigativa de la Fiscalía en los casos que actúe como denunciante en relación a personas privadas de libertad.

M) Consultar y estudiar las historias clínicas de las personas privadas de libertad que autoricen su acceso y en el caso que dichas personas hayan fallecido, también poder hacerlo a los efectos de analizar el contexto y causas de su deceso".

Artículo 600.- Sustitúyese el artículo 44 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, (Código General del Proceso) en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.090, de 14 de junio de 2013, por el siguiente:

"ARTÍCULO 44. (Representación judicial de los abogados y escribanos).-

44.1 En cualquier etapa del proceso, ante cualquier órgano con función jurisdiccional, salvo que se tratare de materia penal, el abogado firmante, en su calidad de patrocinante de la parte, además de las facultades que acuerda el artículo 143 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985) y siempre que así se conviniere mediante escrito o acta judicial, quedará investido, en especial y para ese proceso, del carácter de representante judicial de aquella, con todas las facultades procesales, excepto las que impliquen disponer de los derechos sustanciales. De igual manera podrá investirse de representación al escribano patrocinante en los procesos para los cuales dicho profesional está habilitado por ley a actuar. La investidura regirá para todos los actos, incidentes y etapas del proceso, incluyendo la liquidación y ejecución de sentencia, la entrega de la cosa subastada, la expedición de segundas copias relativa al bien rematado y el juicio ordinario posterior al ejecutivo o al de ejecución.

44.2 Para que la autorización sea válida, la parte deberá establecer en el escrito su domicilio real, así como comunicar en la misma forma los cambios que el mismo experimentare.

44.3 El abogado o escribano en su caso deberá instruir especialmente al interesado de la representación de que se trata y de sus alcances, dejándose constancia expresa de ello en el escrito o acta judicial pertinente.

44.4 La parte interesada podrá, en todo momento, sustituir a su representante judicial siempre que lo haga por escrito ante el tribunal correspondiente, el que lo hará saber por notificación en el domicilio al abogado o escribano cesante.

44.5 En caso que el abogado o escribano desee poner fin a su patrocinio, deberá hacerlo por escrito firmado conjuntamente con la parte, ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

44.6 Si se desconociere el actual domicilio real del patrocinado o este se negare a firmar, se le notificará en el último domicilio real que hubiere denunciado en autos, con el apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 71.1 y según lo establecido en los artículos 123.2 y 123.3.

44.7 El cese de responsabilidad profesional es sin perjuicio de la continuidad del proceso y de las medidas que en el plano procesal pudiere dictar el órgano jurisdiccional y operará una vez cumplida la notificación prevista en el numeral anterior".

Artículo 601.- Créase la Comisión Nacional Honoraria Asesora en Políticas de Frontera, la que será presidida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y tendrá por cometido asesorar en asuntos vinculados a la situación laboral y del comercio en los departamentos de nuestro país limítrofes con la República Argentina y la República Federativa del Brasil.

La Comisión estará integrada por los delegados y sus respectivos alternos de los siguientes organismos y entidades: dos de la OPP, dos del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Congreso de Intendentes, uno del Plenario de Municipios, uno del Congreso Nacional de Ediles, uno de las Intendencias de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Rivera y Cerro Largo; y uno por cada centro comercial de los citados departamentos.

Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión deberá:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo en relación a las políticas relativas a la protección de la situación laboral y del comercio en los departamentos de frontera.

B) Garantizar la articulación entre las diferentes instituciones y entidades que abordan la temática, así como aquellas con competencia en la misma.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo de treinta días.

Artículo 602.- Agrégase el siguiente artículo a la Ley Nº 19.824, de 18 de setiembre de 2019:

"ARTÍCULO 26 BIS.- Los vehículos ambulancias, debidamente empadronados, que en el estricto cumplimiento del servicio de traslado de pacientes excedan los límites de velocidad establecidos en la normativa nacional y departamental a fin de cumplir con tratamientos médicos inherentes a potencial riesgo de vida, no serán pasibles de la aplicación de multas de tránsito.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición".

Artículo 603.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 19.824, de 18 de setiembre de 2019, por el siguiente:

"ARTÍCULO 18.- Los conductores de vehículos no pueden estacionar en las áreas afectadas para la circulación de ciclistas. Estas serán demarcadas mediante señalización horizontal, vertical o ambas, de acuerdo a lo que fije la reglamentación.

La disposición referida en el inciso anterior no aplicará para aquellas áreas donde, producto de una asistencia médica, las ambulancias debidamente empadronadas estacionen en espacios prohibidos a fin de desarrollar una actividad asistencial de forma temporal y transitoria".

Artículo 604.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, por el siguiente:

"ARTÍCULO 3º.- A los efectos de la presente ley, créase un Fondo Nacional de Recursos que se integrará de la siguiente manera:

A) El aporte del Estado para cubrir la atención de los habitantes poseedores del correspondiente carné de asistencia otorgado por el Ministerio de Salud Pública.

B) El aporte del Estado, de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados y de las Administraciones Departamentales para cubrir la atención de aquellas personas cuya asistencia médica esté directamente a su cargo.

C) El aporte de las instituciones de asistencia médica colectiva para cubrir la atención de sus afiliados.

D) El aporte por afiliación directa de todas aquellas personas que deseen contratar un seguro de atención médica para estas prestaciones.

E) El producido del gravamen de un 5% (cinco por ciento) sobre los premios a abonar a consecuencia de los aciertos producidos en el juego denominado "Cinco de Oro".

F) El aporte de los seguros parciales que brinden cobertura médica y quirúrgica, para cubrir la atención de sus afiliados.

G) El aporte del Banco de Previsión Social (BPS), equivalente al gasto que le genere la atención de la población a los que se encuentren obligados, cuando sean designados Centro de Referencia de acuerdo a la Ley Nº 19.666, de 4 de octubre de 2018.

H) El aporte proveniente de los copagos de prestaciones cuando así lo determine la reglamentación correspondiente.

Los aportes referidos en los literales A), B), C) y F) serán mensuales, consecutivos y directamente proporcionales a la cantidad de beneficiarios cuya asistencia médica sea responsabilidad de cada uno de los sectores o instituciones mencionados, con independencia del número de actos médicos realizados.

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Policial podrán optar por el costo de los actos médicos efectivamente realizados o por la situación actual.

La Comisión Honoraria Administradora fijará el monto y forma de actualización de los mismos.

Es aplicable a los efectos de su versión al Fondo Nacional de Recursos por las entidades mencionadas en los literales A), B) y C) de este

artículo el régimen de recargos e intereses establecido en el Código Tributario, sin perjuicio de lo cual, en los casos pertinentes, los adeudos por ese concepto serán compensables con los pagos que deba realizarse el Banco de Previsión Social, en aplicación del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, y normas complementarias, por el procedimiento que determinará la reglamentación. El mismo régimen de recargo o intereses se aplicará en caso de atraso en los pagos a los institutos de medicina altamente especializada por parte del Fondo Nacional de Recursos.

El patrimonio que compone el Fondo Nacional de Recursos estará destinado exclusivamente a los fines previstos por la presente ley.

Los fondos serán depositados en bancos oficiales en cuentas especiales y se girará contra las mismas con la firma de dos de los integrantes de la Comisión Honoraria Administradora, uno de los cuales será el Presidente de la referida Comisión.

El Ministerio de Economía y Finanzas, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las administraciones departamentales, cuando correspondiere, verterán mensualmente el importe establecido en los literales A), B) y E) de este artículo en dichas cuentas especiales.

Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer los sistemas de percepción de los aportes determinados para las instituciones de asistencia médica colectiva definidas en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, de modo de asegurar el debido y oportuno cumplimiento, por parte de las entidades referidas.

Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer los sistemas de percepción de los aportes determinados por el literal G) del inciso primero del presente artículo, de modo de asegurar el debido y oportuno cumplimiento por parte de las entidades referidas".

Artículo 605.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 19.666, de 4 de octubre de 2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 18. (Financiamiento).- El financiamiento de la atención de patologías que se brinde en los centros y servicios de referencia, designados de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, se solventará como se establece en los literales siguientes:

A) Las prestaciones que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, seguirán siendo financiadas por el mismo.

B) Las prestaciones que, estando incluidas en los programas integrales de atención en salud aprobados por el Ministerio de Salud Pública, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y no estén cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, serán financiadas por este en las condiciones que establezca la reglamentación.

C) Las prestaciones que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no estén incluidas en los programas integrales de atención en salud aprobados por el Ministerio de Salud Pública, quedarán sujetas a informe favorable de evaluación económica y de impacto presupuestal realizado por el Fondo Nacional de Recursos y avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas de manera de acreditar la sustentabilidad financiera.

La financiación a cargo del Fondo Nacional de Recursos implicará deducir de las cápitas que les corresponda percibir a los prestadores de servicios integrales de salud incorporados al Seguro Nacional de Salud el costo equivalente asociado a dichas prestaciones que determine el Poder Ejecutivo.

Dicho costo equivalente será mensual, consecutivo y directamente proporcional a la cantidad de usuarios inscriptos en los padrones de los prestadores, con independencia del número de actos médicos realizados.

La reglamentación establecerá los mecanismos conforme a los cuales se realizará la referida compensación.

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior podrán optar por el prepago al Fondo Nacional de Recursos calculado en base al número total de sus respectivos usuarios o por el pago del costo de los actos médicos efectivamente realizados. Igual criterio se aplicará respecto de usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado que posean carné de asistencia extendido por la misma.

Cuando las prestaciones fueran financiadas por el Banco de Previsión Social, una vez nombrado 'Centro de Referencia', dichos fondos serán transferidos al Fondo Nacional de Recursos a efectos de poder cubrir el financiamiento de las mismas, en la forma en que determine la reglamentación".

Artículo 606. (Creación del Fondo Infancia).- Créase el Fondo Infancia como persona jurídica de derecho público no estatal.

Artículo 607. (Objetivos).- El objetivo del Fondo Infancia es poner fin a la pobreza infantil. A tales efectos, tendrá como principal cometido utilizar los recursos que le son asignados en la presente ley, destinándolos al financiamiento de planes, acciones, proyectos o programas, en convenio con instituciones públicas o privadas, a efectos de instalar o fortalecer condiciones adecuadas para la inserción social integral de los niños, niñas y adolescentes integrantes de hogares en situación de pobreza, que viven junto con sus referentes adultos, especialmente mujeres a cargo de sus hogares, en condiciones de vulnerabilidad. En tal sentido, la asistencia y el fortalecimiento del entorno familiar, particularmente en el período de gestación, crecimiento y desarrollo infantil son cometidos sustanciales del Fondo. Los planes, acciones, proyectos o programas que se financien deberán orientarse con una visión integradora a las siguientes prestaciones: alimentación, salud, educación, acceso a la vivienda digna, prevención de la violencia, cultura y capacitación para el trabajo, que también podrán ser atendidas mediante transferencias monetarias, mejoradas en su diseño y en su vinculación con el resto de las políticas públicas.

A los efectos de la presente ley se entiende que los niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de vulnerabilidad si son partícipes de alguna de las siguientes categorías:

A) En estrategias de supervivencia.

B) En situación de calle.

C) Víctimas de abuso, maltrato o abandono.

D) Institucionalizados.

E) Con problemas de adicciones.

F) Integrantes de núcleos familiares con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Artículo 608. (Programa Anual de Acción).- Compete al Poder Ejecutivo la fijación de la política nacional para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes integrantes de hogares en situación de pobreza. El Fondo Infancia se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, a quien le compete la elaboración del Programa Anual de Acción para el abatimiento de la pobreza infantil, que incluirá metas cuantificables y plazos para su cumplimiento.

Artículo 609. (Órganos).- Los órganos del Fondo Infancia son el Consejo Administrador, la Dirección Ejecutiva y el Consejo Asesor Nacional.

Artículo 610. (Consejo Administrador).- El Consejo Administrador será el jerarca del Fondo Infancia y estará integrado por el Ministro de Desarrollo Social que lo presidirá, el Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que ocupará la vicepresidencia, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social.

Los miembros del Consejo Administrador tendrán carácter honorario, sin perjuicio de las remuneraciones que les corresponda por el ejercicio del cargo respectivo en su organismo de origen.

Por cada integrante, se designará un suplente que sustituirá al titular en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

Artículo 611. (Duración del mandato).- La duración del mandato de los miembros del Consejo Administrador será por todo el período de gobierno. No obstante, permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados.

Artículo 612. (Régimen de sesiones).- El Consejo Administrador fijará sus regímenes de sesiones, procurando la realización de reuniones periódicas en distintas ciudades del interior del país. Las decisiones se adoptarán por el voto conforme de la mayoría de sus miembros, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.

Artículo 613. (Dirección Ejecutiva).- La Dirección Ejecutiva será desempeñada por un Director Ejecutivo que será designado por el Consejo Administrador. Deberá ser una persona de reconocida trayectoria, solvencia e

idoneidad técnica en la temática establecida en el artículo 607 de la presente ley.

El Director Ejecutivo asistirá a las sesiones del Consejo Administrador en las que tendrá voz, pero no voto.

Artículo 614. (Consejo Asesor Nacional).- El Consejo Asesor Nacional tendrá carácter honorario y será un órgano de apoyo y consulta del Consejo Administrador. Las entidades que estarán representadas por el mismo serán determinadas por el Consejo Administrador a propuesta del Director Ejecutivo. Sus miembros serán designados por el Consejo Administrador previa propuesta de las entidades que lo componen.

Artículo 615. (Cometidos).- El Fondo Infancia tendrá los siguientes cometidos:

A) Elaborar la planificación anual para el período de gestión correspondiente a efectos de instrumentar el Programa Anual de Acción para el Abatimiento de la Pobreza Infantil.

B) Difundir públicamente las áreas de acción y las poblaciones a las cuales se les dará prioridad en el período.

C) Determinar los planes, acciones, proyectos o programas a financiar con los recursos del Fondo. Las mismas deberán contener los criterios y las variables aplicables para la selección de las propuestas y los requisitos exigibles a las instituciones públicas o privadas que participen en los convenios, así como metas cuantificables y plazos para su cumplimiento.

D) Seleccionar los planes, acciones, proyectos o programas que integrarán la planificación del Programa Anual de Acción para el Abatimiento de la Pobreza Infantil a ser financiado por el Fondo.

E) Controlar y evaluar la gestión de las instituciones con las cuales se acuerdan los convenios para la ejecución de los planes, acciones, proyectos o programas financiados por el Fondo.

F) Interactuar con el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales en la formulación de las políticas sociales para la atención de niños, niñas y adolescentes integrantes de hogares en situación de pobreza.

G) Promover la innovación, el aprendizaje y la mejora de la eficiencia en las políticas orientadas al abatimiento de la pobreza infantil.

Artículo 616. (Atribuciones del Consejo Administrador).- El Consejo Administrador, en su carácter de órgano administrador del Fondo Infancia tendrá, las siguientes atribuciones:

A) Dictar el Reglamento General del organismo.

B) Aprobar el estatuto de sus empleados dentro de los seis meses de su instalación. El mismo se regirá, en lo no previsto, por las reglas del Derecho Privado.

C) Designar, trasladar y destituir personal en base a las propuestas elevadas por la Dirección Ejecutiva.

D) Determinar las prioridades en el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional, regional y departamental, así como aquellas referentes a cooperación técnica externa, las que deberán estar enmarcadas dentro de la política en la materia fijada por el Poder Ejecutivo.

E) Aprobar el presupuesto general y el presupuesto de funcionamiento del Fondo Infancia, debiendo elevarlo al Poder Ejecutivo para su conocimiento, conjuntamente con el plan de actividades.

F) Aprobar los planes, acciones, programas o proyectos que se implementarán en cumplimiento de lo previsto en el artículo 615 de la presente ley.

G) Aprobar la memoria y los estados contables.

H) Adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes.

I) Delegar sus atribuciones por mayoría absoluta de sus miembros y mediante resolución fundada.

J) En general, realizar todos los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna y efectuar las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración con arreglo a los cometidos y a la especialización de la institución.

Artículo 617. (Atribuciones del Director Ejecutivo).- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

A) Informar y someter a consideración del Consejo Administrador los planes, proyectos y programas que serán objeto de convenios con las instituciones públicas o privadas, en las condiciones establecidas en el artículo 615 de la presente ley.

B) Implementar la planificación anual en función de los planes, proyectos o programas referidos en el literal A) del presente artículo y que hayan sido aprobados por el Consejo Administrador.

C) Elaborar y someter a consideración del Consejo Administrador el presupuesto general y el presupuesto de funcionamiento del Fondo.

D) Ordenar el seguimiento y la evaluación del Programa Anual de Acción para el Abatimiento de la Pobreza Infantil e informar periódicamente el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos en los distintos proyectos, planes, acciones o programas en ejecución que integran el mismo. A tales efectos, deberán instrumentarse sistemas de información y monitoreo permanentes, los cuales podrán requerir la participación de entidades independientes.

E) Ejecutar las resoluciones aprobadas por el Consejo Administrador.

F) Administrar los recursos de la institución e informar trimestralmente al Consejo Administrador del estado de avance de la ejecución presupuestal.

G) Proponer al Consejo Administrador planes para el desarrollo de los recursos humanos.

H) Realizar todas las tareas inherentes a la administración de personal y a la organización interna de la institución.

I) Promover el establecimiento de relaciones de coordinación con entidades nacionales vinculadas al objetivo del Fondo Infancia.

J) Promover el fortalecimiento de la cooperación técnica y económica internacional con especial énfasis en la coordinación con institutos afines.

K) Toda otra función que el Consejo Administrador le encomiende o delegue.

Artículo 618. (Régimen financiero).- Constituirán recursos del Fondo Infancia los siguientes:

A) Los recursos que se le asignen en el Presupuesto Nacional o Rendiciones de Cuentas.

B) Las herencias, legados y donaciones que acepte la institución.

C) Los valores o bienes que se le asignen a la institución a cualquier título.

D) Los recursos provenientes de préstamos de organismos internacionales que el Estado le asigne.

Artículo 619. (Publicaciones).- El Fondo Infancia publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, el Programa Anual de Acción para el Abatimiento de la Pobreza Infantil financiado por la institución y la evaluación del cumplimiento de los planes, proyectos, acciones o programas ejecutados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 191 de la Constitución de la República.

Los estados contables y sus anexos deberán requerir previamente el visado del Tribunal de Cuentas.

Artículo 620. (Contralor administrativo).- El contralor administrativo del Fondo Infancia será ejercido por el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicho contralor se ejercerá tanto por razones de juridicidad como de oportunidad y conveniencia. A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá formularle las observaciones que crea pertinentes, así como proponer la suspensión de los actos observados, y los correctivos o remociones que considere del caso.

Sin perjuicio del contralor que realice el Ministerio de Economía y Finanzas, la Auditoría Interna de la Nación tendrá las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera de la institución.

Artículo 621. (Recursos).- Contra las resoluciones del Consejo Administrador procederá el recurso de revocación, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, el Consejo Administrador dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto. Se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de revocación, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta.

La demanda de anulación solo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Cuando la resolución emanare del Director Ejecutivo, conjunta o subsidiariamente con el recurso de revocación, podrá interponerse el recurso jerárquico ante el Consejo Administrador.

Este recurso de revocación deberá interponerse y resolverse en los plazos previstos en los incisos anteriores de este artículo, el que también regirá en lo pertinente para la resolución del recurso jerárquico y para el posterior contralor jurisdiccional.

Artículo 622. (Exoneraciones).- El Fondo Infancia estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones de seguridad social y, en lo no previsto especialmente de la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a su contabilidad, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 623. (Inembargabilidad).- Los bienes del Fondo Infancia son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 624. (Funcionarios).- El personal técnico y especializado del Fondo Infancia será designado ordinariamente por concurso de oposición, méritos u oposición y méritos, por períodos no mayores de cinco años renovables en las

condiciones que establezca el estatuto a que refiere el literal B) del artículo 616 de la presente ley.

El resto del personal será designado por el sistema de selección que prevea dicho estatuto, atendiendo a las características de cada categoría.

Respecto a la extinción de la relación laboral, el estatuto establecerá las garantías de que gozará el personal del Fondo Infancia de modo que la renovación de contrato resulte fundada y se asegure el ejercicio del derecho de defensa del empleado.

Artículo 625. (Deber de guardar reserva).- Los jerarcas y empleados del Fondo deberán guardar especial y estricta reserva sobre todo dato y hecho que hayan conocido en razón de su tarea, hasta tanto el Consejo Administrador resuelva levantar esa reserva.

Los mecanismos de divulgación de la información científica y técnica serán reglamentados.

Artículo 626. (Excusación).- Los miembros del Consejo Administrador se excusarán de participar de la aprobación del financiamiento por el Fondo Infancia de cualquier plan, acción, proyecto o programa presentado a consideración de este Consejo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 616 de la presente ley, del que pudiere resultar un beneficio de cualquier orden para sí o para un familiar del mismo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o para una entidad en la que sea miembro cualquier familiar suyo hasta los grados referidos, tenga intereses directos en las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley.

Artículo 627. (Tope presupuesto de funcionamiento).- El presupuesto anual de funcionamiento administrativo del Fondo Infancia destinado al pago de retribuciones personales, gastos e inversiones no podrá superar en ningún caso el menor de los siguientes topes: 4.000.000 UI (cuatro millones de unidades indexadas) o el 5% (cinco por ciento) de los recursos asignados de acuerdo a lo establecido por el artículo 618 de la presente ley.

Artículo 628. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará el Fondo Infancia creado por la presente ley en todo lo necesario para la implementación, puesta en práctica, asignación de recursos y funcionamiento del mismo, en un plazo de sesenta días desde la promulgación de la presente ley.

Asígnase en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", programa 404 "Atención Integral a Primera Infancia", unidad ejecutora 021 "Subsidios y

Subvenciones", una partida para el año 2023 de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos uruguayos), con destino al Fondo Infancia. A tales efectos, la Contaduría General de la Nación habilitará el objeto del gasto correspondiente.

Artículo 629.- Los artículos 606 a 628 de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su promulgación.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 630.- Exceptúase de lo dispuesto en el inciso G) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, la presentación de declaraciones juradas de solicitud de becas nuevas y renovaciones de becas del Fondo de Solidaridad.

Artículo 631.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 8º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 19.589, de 28 de diciembre de 2017, por el siguiente:

> "Los gastos de administración y funcionamiento del Fondo de Solidaridad a partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2024 no podrán insumir más de un 9% (nueve por ciento) de los ingresos brutos del ejercicio inmediato anterior, actualizados por el Índice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, excluidos los ingresos derivados del adicional. Los excedentes generados anualmente serán destinados a constituir un fondo de reserva que deberá ser aplicado al otorgamiento de becas en futuros ejercicios".

Artículo 632.- No podrá negarse a las personas físicas deudoras el acceso a servicios o suministros comprendidos entre los cometidos de los organismos públicos, estatales o no estatales, incluyendo entre otros los servicios de garantía de alquiler de la Contaduría General de la Nación y las prestaciones del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Agencia Nacional de Vivienda, por el solo hecho de que los datos relativos a su actividad comercial o crediticia se encuentren registrados en fuentes de acceso público de dominio privado, procedentes de informaciones facilitadas por un acreedor o varios acreedores o en las circunstancias previstas en el artículo 22 de la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, en la redacción dada por el artículo 152 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 633.- Agrégase al artículo 20 del Título 7 del Texto Ordenado 1996 el siguiente inciso:

"En la enajenación, promesa de enajenación, cesión de promesa de enajenación o cualquier otra forma de trasmisión de solares y construcciones a favor de quienes habiten en asentamientos en proceso de regularización, el valor a considerar a los efectos de lo dispuesto por el literal A) del presente artículo, será el valor real territorial vigente fijado por la Dirección Nacional de Catastro. Lo antes dispuesto será de aplicación siempre que se cuente con la declaratoria de la Intendencia Departamental respectiva, de que la operación se encuentra comprendida en el marco de la política de regularización de asentamientos irregulares en lotes con o sin servicios".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 634.- Agrégase al artículo 4º del Título 19 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

"D) Para las enajenaciones, promesas de enajenación, cesiones de promesa de enajenación o cualquier otra forma de trasmisión de solares y construcciones a favor de quienes habiten en asentamientos en proceso de regularización, el valor real territorial fijado de acuerdo con el artículo 10 del Título I de este Texto Ordenado y vigente en el momento en que se configure el hecho gravado, actualizado de acuerdo con la variación operada en el índice de precios al consumo entre el mes en que la fijación tuvo lugar y el anterior al de dicha configuración. Lo dispuesto precedentemente será de aplicación siempre que se cuente con la declaratoria de la Intendencia Departamental respectiva, de que la operación se encuentra comprendida en el marco de la política de regularización de asentamientos irregulares en lotes con o sin servicios".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 635.- Agrégase al artículo 7º del Título 19 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

"I) Los adquirentes en el caso de las enajenaciones, promesas de enajenación, cesiones de promesa de enajenación o cualquier otra forma de trasmisión de solares y construcciones a favor de quienes habiten en asentamientos en proceso de regularización siempre que

se cuente con la declaratoria de la Intendencia Departamental respectiva, de que la operación se encuentra comprendida en el marco de la política de regularización de asentamientos irregulares en lotes con o sin servicios".

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 636.- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y el Fiscal Adjunto de Corte estarán inhibidos por tres años, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros.

En el caso de los Fiscales Letrados con competencia en materia penal estarán inhibidos por un año, desde su cese, de intervenir en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones durante el año anterior a su cese, patrocinando o asistiendo a terceros.

Los Fiscales comprendidos en el presente artículo que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de la desvinculación de sus cargos, tendrán derecho a percibir por el tiempo de la inhibición un subsidio equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) del total de haberes del cargo en actividad, siendo de aplicación el régimen establecido en el artículo 5 de la Ley N° 15.900, de 21 de octubre de 1987.

La percepción del subsidio creado en el presente artículo es incompatible con la percepción de haberes de actividad con cargo a fondos públicos, excepto los derivados del ejercicio de actividad docente en la enseñanza pública.

Artículo 637.- Las personas de derecho público estatal y no estatal, dentro del ámbito de sus competencias, colaborarán en la planificación, implementación y evaluación de programas y actividades tendientes a acercar y facilitar en el territorio la capacitación en oficios, educación no formal, dirigidos a los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad social, que tengan como objetivo favorecer su acceso a una actividad laboral remunerada por cuenta propia o ajena, pudiendo a tales efectos suscribir convenios interinstitucionales y con terceras personas físicas o jurídicas.

Artículo 638.- Declárase computable a los efectos jubilatorios el tiempo usufructuado por licencia especial sin goce de sueldo al amparo del literal a) del artículo 37 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, el literal a) del artículo 71 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, y el artículo 866 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, de los cónyuges y concubinos, también funcionarios públicos, del personal diplomático que cumplan funciones en el extranjero y por el período que dure su misión, considerándose dicho período como cantidad de meses y años fictos.

Artículo 639.- Sustitúyese el literal G) del artículo 5º de la Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004, por el siguiente:

"G) Recibir y centralizar información y actuar de oficio ante conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias; llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiere".

Artículo 640.- Sustitúyese el artículo 6º de la Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTÍCULO 6º.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación estará integrada por nueve miembros designados de la siguiente manera:

A) Un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, que la presidirá.

B) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura.

C) Un representante del Ministerio del Interior.

D) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

E) Un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

F) Tres representantes designados por el Presidente de la República, entre las personas propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

G) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social".

Artículo 641.- Sustitúyese el artículo 9º de la Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTÍCULO 9º.- La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República suministrará la infraestructura y los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la Comisión Honoraria, de acuerdo a la organización que establezca el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario".

Artículo 642.- Agrégase a la Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 12. (Disposición Transitoria).- Hasta tanto se designen nuevos integrantes de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, por el procedimiento previsto en el artículo 6º de la presente ley, seguirán actuando los integrantes designados previamente".

Artículo 643.- Sustitúyese el artículo 57 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente:

"ARTÍCULO 57. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el tribunal de familia de oficio o ante el solo pedido de parte, decretará medidas para el constreñimiento del deudor incumplidor alimentario, de conformidad con el artículo 60 y dará cuenta de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, a los efectos previstos por el artículo 279 BIS del Código Penal.

El progenitor que haya representado a los hijos en el juicio de alimentos será considerado, a todos los efectos, representante de la víctima a los efectos previstos en los artículos 79 y siguientes y concordantes del Código del Proceso Penal.

Cualquiera de las partes del juicio de alimentos podrá obtener para su agregación al juicio, testimonio de las actuaciones del juicio penal".

Artículo 644.- Sustitúyese el artículo 60 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente:

"ARTÍCULO 60. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama.

El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico.

Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

La retención como forma de ejecución forzada ante el incumplimiento del deudor, se podrá disponer por el tribunal en todos los casos en que se entienda necesaria para satisfacer el derecho a recibir alimentos, aunque la sentencia o convenio del cual surja la obligación haya dispuesto otra forma de pago.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

En caso de que el deudor alimentario incumpliere la prestación alimentaria, el Juez podrá decretar las siguientes medidas respecto al deudor incumplidor:

A) Suspensión de la libreta de conducir automotores por hasta seis meses.

B) Cierre de fronteras.

C) La comunicación de los datos del deudor alimentario inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios creado por Ley Nº 17.957, de 4 de abril de 2006, a las reparticiones públicas que atienden público como ser oficinas de trámites, de prestación de servicios públicos y para el ejercicio de obligaciones cívicas, a los efectos de que al presentarse el deudor a realizar una gestión o trámite ante dichas reparticiones públicas, el funcionario dé noticia al Juez de la causa, comunicando los datos identificatorios del deudor incluyendo documento de identidad, datos de contacto telefónico, domicilio real, laboral y electrónico, ocupación y lugar de trabajo y todos aquellos que permitan a criterio del Juez ubicar al deudor.

D) El embargo y secuestro de los bienes del deudor alimentario incluyendo los referidos en el artículo 381 del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, en la redacción

dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.090, de 14 de junio de 2013, numerales 2) a 4).

E) Toda otra medida que a juicio del Juez permita, al amparo del ordenamiento jurídico vigente, la identificación del deudor alimentario y la conminación al pago de la obligación alimentaria".

Artículo 645.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 17.957, de 4 de abril de 2006, por el siguiente:

"ARTÍCULO 2º. (Deudores alimentarios).- Se consideran deudores alimentarios, a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, a aquellas personas que reúnan acumulativamente las siguientes condiciones:

A) Que estén obligadas a servir una pensión alimenticia cuyos beneficiarios sean niños o niñas o adolescentes, menores de veintiún años, o mayores de veintiún años si se trata de personas discapacitadas, habiendo nacido la obligación por sentencia ejecutoriada o convenio homologado judicialmente. La sentencia que decrete u homologue judicialmente la pensión alimenticia será título de ejecución para el cobro de la misma en los términos del artículo 377 del Código General del Proceso.

B) Que adeuden más de tres cuotas alimenticias, total o parcialmente, ya sea que se trate de alimentos provisorios o definitivos.

C) Que previamente se le haya intimado judicialmente los adeudos y que el obligado no haya probado fehacientemente que carece momentáneamente de recursos para afrontar las obligaciones alimenticias.

Una vez que sea intimado, si el obligado se encontrare imposibilitado de cumplir, la tramitación de la oposición se realizará por la vía incidental.

D) No será procedente la inscripción en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, cuando de oficio o a petición de parte se acredite que existe una acción de rebaja o de exoneración de la pensión alimenticia no abonada por el obligado, iniciada con anterioridad a la petición de inscripción y esté pendiente de resolución definitiva".

Artículo 646.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 17.957, de 4 de abril de 2006, por el siguiente:

"ARTÍCULO 3º. (Inscripción).- Verificados los extremos previstos en el artículo 2º de esta ley, el Juez, a pedido de parte, ordenará la inscripción del obligado en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, librando el oficio correspondiente, el que deberá contener:

A) Nombres y apellidos y domicilio del obligado.

B) Número del documento de identidad del obligado. No obstante, si de las actuaciones judiciales no surgiera éste o el actor lo desconociere, el Juzgado hará constar este hecho y ordenará la inscripción. En tal caso el Juzgado también oficiará al Registro Nacional de Identificación Civil a los efectos de que remita al Juez toda la información disponible de la o las personas que surjan de dicho Registro identificadas con los nombres y apellidos del obligado, el que deberá remitirla dentro del plazo de tres días hábiles, acompañada de las fotografías identificatorias de cada uno. La parte actora procederá a la identificación del obligado de entre las personas cuyos nombre y apellidos coincidan con la de aquel, a los efectos de que conste su número de documento de identidad.

C) Monto y cantidad de cuotas de pensiones incumplidas.

D) Nombres y apellidos y domicilio de los beneficiarios.

Cuando el oficio fuera librado por un Juzgado Letrado del interior de la República, el mismo deberá ser remitido directamente por la Sede al Registro Nacional de Actos Personales, el que deberá acusar recibo de su inscripción.

E) Fotografía facial identificatoria, en caso de contar con ella, y todo otro dato disponible que permita la identificación y comunicación con el obligado.

F) Número de teléfono, domicilio electrónico, identificación de las cuentas de redes sociales disponibles y todo otro dato que permita ubicar e identificar al obligado".

Artículo 647.- Sustitúyese el artículo 46 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente:

"ARTÍCULO 46. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

En caso de no contar con información acerca de los ingresos del obligado alimentario, el Tribunal deberá de todas formas fijar una prestación alimenticia universal de 1 BPC (una Base de Prestaciones y Contribuciones) por núcleo familiar como mínimo a servir por el obligado alimentario".

Artículo 648.- Sustitúyese el artículo 381 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, (Código General del Proceso), en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 19.090, de 14 de junio de 2013, por el siguiente:

"ARTÍCULO 381. (Bienes inembargables).- No se trabará embargo en los siguientes bienes:

1) Las remuneraciones, por cualquier concepto, de los empleados públicos y privados; las pensiones, jubilaciones y retiros; así como las pensiones alimenticias, salvo en este último caso que sean suntuarias.

No obstante, podrán afectarse las remuneraciones, pensiones, jubilaciones y retiros en los siguientes casos:

a) Cuando se tratare de deudas por tributos o de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrán embargarse hasta la tercera parte; en los casos de pensiones alimenticias en favor de menores e incapaces servidas por sus ascendientes, serán embargables hasta la mitad.

b) Cuando una ley habilite el embargo o afectación por retención, por orden judicial, en cuyo caso regirá el límite de la tercera parte.

Cuando hubiere más de un embargo o afectación por retención, será aplicable el régimen de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, y sus modificativas.

2) Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o que se tratare de deudas por más de dos mensualidades de pensiones alimenticias de los hijos, decretadas u homologadas judicialmente y se omitiere intencionalmente su pago; se exceptúan de la inembargabilidad los bienes suntuarios.

3) Los libros relativos a la actividad laboral del deudor persona física, salvo que se tratare de deudas por más de dos mensualidades de pensiones alimenticias de los hijos, decretadas u homologadas judicialmente y se omitiere intencionalmente su pago.

4) Las máquinas e instrumentos de que se sirva el deudor persona física para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o profesión, salvo el caso de bienes prendados para garantizar el precio de la adquisición o que se tratare de deudas por más de dos mensualidades de pensiones alimenticias de los hijos, decretadas u homologadas judicialmente y se omitiere intencionalmente su pago.

5) Los alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de su familia durante tres meses.

6) Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso y habitación.

7) Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se hubiere hecho constar su valor al tiempo de la entrega, por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquiriesen.

8) Toda clase de bienes, cuentas o créditos del Estado y de los Gobiernos Departamentales (artículo 460 del Código Civil).

9) Los bienes afectados al culto de cualquier religión.

10) Los derechos funerarios.

11) Los bienes que expresamente establezca la ley con ese carácter".

Artículo 649.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República la Comisión Nacional Honoraria Asesora de Protección y Restitución del Derecho a la Identidad de Origen, que tendrá por cometido brindar respuesta a todas las situaciones referidas a la protección y restitución del derecho a la identidad de origen, unificando los procedimientos de búsqueda.

La Comisión será presidida por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República que también brindará el apoyo administrativo necesario.

La Comisión estará integrada por los delegados y sus respectivos alternos de los siguientes organismos:

- Un integrante de la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior.

- Un integrante del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos del Ministerio de Salud Pública.

- Un integrante del Archivo General de la Nación y un integrante de la Dirección General del Registro de Estado Civil del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un integrante de la Dirección Nacional de Defensorías Públicas y un integrante de la oficina de Archivos Judiciales procedentes de la Justicia Militar del Poder Judicial.

- Un integrante del Área de Adopciones y un integrante del Archivo Nacional de Historias de Vida del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

- Un integrante de Registros Médicos del Banco de Previsión Social.

- Un integrante de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

- Un integrante de la División de Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública.

- Un integrante del Congreso de Intendentes.

- Un integrante de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República.

- Un integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo en carácter de observador.

- Tres integrantes de organizaciones de la sociedad civil versados en el tema.

Los cometidos de la Comisión serán los siguientes:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo en relación a las políticas relativas a la protección y restitución del derecho a la identidad de origen.

B) Garantizar la articulación entre las instituciones que abordan la temática.

C) Propiciar y diseñar instancias de capacitación dirigidas a los funcionarios de las instituciones que conforman la Comisión. Las capacitaciones abordarán el tema desde la perspectiva jurídica, histórica y psico-social con la finalidad de comprender las situaciones particulares, ofrecer contención y brindar el asesoramiento que garantice la protección y restitución del derecho a la identidad de origen.

D) Todos los que se dispongan por la reglamentación respectiva.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en el plazo de noventa días.

Artículo 650.- Declárase que en el caso de los trabajadores contratados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 17.902, de 23 de setiembre de 2005, la extinción de la relación contractual luego de transcurrido el plazo inicial de doce meses les dará derecho a la indemnización por despido y derecho al beneficio del seguro por desempleo, siendo de aplicación para el

pago de los mismos lo establecido en el artículo 34 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

En los casos referidos en el inciso anterior, una vez transcurridos veinticuatro meses del plazo contractual no será necesario realizar posteriores renovaciones a dicho contrato.

Artículo 651.- Sustitúyese el artículo 669 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 416 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 669.- Declárase que las personas públicas estatales a que refiere el artículo 430.2 del Código General del Proceso, es el Poder Ejecutivo, actuando indistintamente a través del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento territorial, conforme al siguiente procedimiento:

Antes de disponerse por el tribunal competente la venta de los inmuebles que integran el patrimonio de la herencia yacente, deberá recabarse el pronunciamiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, respecto a su interés y destino, para proceder a su incorporación, contando para ello con un plazo improrrogable de treinta días corridos.

La falta de pronunciamiento dentro del plazo indicado, se entenderá como decisión a favor de la venta judicial, asignándose el monto correspondiente de la venta al Ministerio de Desarrollo Social, con destino exclusivo al Fondo Infancia.

En caso que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial haya optado y hecho efectiva la incorporación del bien a su patrimonio, dicho Ministerio será el responsable del pago del tercio que corresponde cobrar al denunciante de la herencia yacente.

Los bienes inmuebles que no se realizaren en el proceso de herencia yacente, pasarán a integrar el patrimonio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial".

Artículo 652.- Sustitúyese el artículo 671 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 419 de la Ley N° 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 671.- La providencia que recaiga sobre toda denuncia de

herencia yacente se notificará al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en sus domicilios legales, bajo pena de nulidad insubsanable (artículo 87, 110 y siguientes y 429 del Código General del Proceso).

A partir de esa notificación, las referidas personas públicas estatales serán consideradas como interesadas en esos procedimientos a todos sus efectos.

Asimismo, desde esa notificación, cesará toda actuación o intervención del Ministerio Fiscal en dicho proceso.

Lo que antecede es sin perjuicio de lo que dispone el artículo 432 del mencionado Código, respecto del Ministerio Público".

Artículo 653.- Instruméntese un convenio entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado con la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Policial, por el cual se creará una comunidad terapéutica para cuarenta usuarios, asignándose a tales efectos veinte camas a cada unidad ejecutora.

El Ministerio de Defensa Nacional aportará el lugar físico adecuado para el cumplimiento del objeto referido y la Administración de los Servicios de Salud del Estado aportará los recursos humanos.

Artículo 654.- Encomiéndase al Banco de Previsión Social, a través de las Prestaciones de Salud del Centro de Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (CRENADECER), Unidad de atención ambulatoria e internación, a ampliar el apoyo nutricional que brinda a personas con diagnóstico de Fenilcetonuria, Atrofia girata, Argininemia, Aciduria glutárica tipo 1 y Homocistinuria incluyendo también en la canasta de alimentos calificados como aproteicos tales como pasta dietética aproteica, harina dietética aproteica, mixtura para preparación de pan dietética aproteica, sustituto del huevo dietético aproteico, arroz aproteico y similares, que deberán ser provistos.

Artículo 655.- Agréganse a la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, (Código General del Proceso), los siguientes artículos:

"ARTÍCULO 89 BIS. (Periódico de la localidad habilitado).- A los efectos de lo previsto en el primer inciso del artículo 89, se entiende por periódico de la localidad habilitado, aquel que cumple con todos los siguientes requisitos:

A) La empresa de prensa escrita está legalmente constituida y radicada en el país.

B) Se dedica a distribuir el periódico en la localidad o departamento de la localidad a la que se refiere el contenido del aviso jurídico a publicar, incluyendo en los periódicos artículos, notas y noticias periodísticas de la localidad o departamento de la localidad a la que se refiere el contenido del aviso jurídico a publicar, que están organizados en diversas secciones.

C) Se encuentra al día con los tributos que recauda la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social y cumple con la inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

D) Acredita a través de comprobantes válidos la utilización de recursos humanos y papel para la producción y distribución del periódico, en cantidad y calidad acordes a la frecuencia, características y tiraje de este.

E) Tiene un mínimo de 90% (noventa por ciento) de sus empleados radicados en la localidad o departamento de la localidad a la que se refiere el contenido del aviso jurídico a publicar.

F) Cuenta con documentación probatoria de la vigencia de la declaración jurada realizada ante el Ministerio de Educación y Cultura, de conformidad con el artículo 4º de la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989.

G) El promedio de sus rentas anuales es generado principalmente por la actividad periodística, siendo las rentas por publicaciones de actos jurídicos de carácter complementario.

H) Ha presentado dentro de los sesenta primeros días de cada año una declaración jurada ante la Comisión Honoraria creada por el artículo 30 de la Ley de Seguridad Social de las Empresas Periodísticas Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, sobre el cumplimiento de lo indicado en los numerales anteriores".

"ARTÍCULO 89 TER.- Cométese a la Comisión Honoraria creada por el artículo 30 de la Ley de Seguridad Social de las Empresas Periodísticas Nº 13.641, de 2 de enero de 1968, la formulación, mantenimiento y actualización de la nómina de los periódicos que podrán actuar como periódico de la localidad habilitado referido en los artículos 89 y 89 BIS de este Código, facultándola a solicitar y recabar de las empresas de prensa escrita propietarias de dichos periódicos toda la información, documentación y declaraciones que correspondan, así como a realizar los controles y verificaciones que entienda necesarios para ese fin.

La nómina actualizada de los periódicos de localidad habilitados será consultada por el Poder Judicial a los efectos de la aplicación del presente artículo.

A los efectos establecidos en este artículo, interprétase la expresión diez días hábiles y continuos empleada en el artículo 89 de este Código como diez ediciones impresas continuas, respetando su frecuencia de impresión".

Artículo 656.- Agrégase al artículo 2º de la Ley Nº 17.684, de 29 de agosto de 2003, el siguiente literal:

"L) Promover ante las autoridades administrativas y ante el Poder Judicial la formulación e implementación de Planes Individuales de Tratamiento según lo establecido por las "Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos - Reglas Nelson Mandela" para toda persona sometida a sanción penal".

Artículo 657.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 499 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, el artículo 14 de la Ley N° 19.438, de 14 de octubre de 2016, y el artículo 236 de la Ley N° 19.924, de 18 de diciembre de 2020.

"Con el propósito de promover la producción en las regiones de menor desarrollo económico relativo del territorio nacional, el margen de preferencia previsto en el inciso séptimo del presente artículo podrá ser de hasta el 16% (dieciséis por ciento), según el departamento en que la empresa oferente produzca los bienes objeto de la contratación. El Poder Ejecutivo fijará el porcentaje de preferencia correspondiente a cada uno de los departamentos teniendo en consideración el ingreso medio del departamento en relación con el ingreso medio nacional,

como así también la forma en que se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos".

Artículo 658.- Exonérase de todo recargo, incluso el mínimo, el Impuesto Aduanero Único a la importación, la Tasa de movilización de bultos, la Tasa Consular y en general de todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los bienes destinados a integrar el costo de equipos para el transporte y acopio de cargas, así como a los materiales, materias primas, partes, piezas, repuestos y kits de dichos equipos, siempre que los mismos hayan sido declarados no competitivos de la industria nacional.

Serán condiciones necesarias para configurar la exoneración:

A) Que la importación sea realizada por empresas que desarrollen la actividad de fabricación de camiones, tractocamiones, remolques, tráileres, semirremolques, acoplados, estructuras agregadas a estos bienes destinadas a contener o estivar la carga, con función pasiva, y las cajas volcadoras, con destino al transporte terrestre profesional de cargas para terceros declarada promovida al amparo del artículo 11 de la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, y.

B) Que la venta de los bienes que dieron origen a dicha declaratoria, represente más del 60% (sesenta por ciento) del total de ingresos. A efectos de determinar dicho porcentaje se deberán considerar las ventas e ingresos referidos al último ejercicio cerrado previo a la importación.

Lo establecido en este artículo es de conformidad con las condiciones, requisitos y controles que determine la reglamentación que dicte el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Artículo 659.- Sustitúyese el artículo 774 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 774.- Sin perjuicio del porcentaje a contratar con medios públicos dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nº 17.904, de 7 de octubre de 2005, en los casos que corresponda, deberá destinarse al menos un 20% (veinte por ciento) del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del

interior, que tengan como área de servicio o distribución principal el lugar de su radicación u otras localidades del interior del país.

En el caso de los entes autónomos y servicios descentralizados integrantes del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinados a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia, el monto mínimo que deberán destinar a medios radicados en el interior del país será del 10% (diez por ciento) del monto total de publicidad.

De los montos anteriores deberá destinarse al menos un 0,5% (cero con cinco por ciento) por cada departamento del interior del país.

En el caso de medios de comunicación cuyos estudios principales y plantas de emisión estén ubicados en localidades del interior pero que tengan cobertura parcial en el departamento de Montevideo, será de aplicación el presente artículo si sus contenidos están dirigidos clara y principalmente a los residentes en la localidad de origen.

Todos los organismos obligados deberán publicar un informe detallado sobre el cumplimiento de los referidos porcentajes. En caso de incumplimiento, el organismo deberá abonar una multa del triple del importe de la publicidad que contrató en contravención de lo dispuesto por el presente artículo.

La URSEC controlará el cumplimiento de lo dispuesto y el producido de las multas se destinará en un 30% (treinta por ciento) a inversiones de la URSEC y un 70% (setenta por ciento) a la UTEC con régimen de libre disponibilidad".

Artículo 660.- En las promesas de compraventa, compraventas, adjudicación por disolución de cooperativas o cualquier otra forma de enajenación de los solares y construcciones a favor de las personas que habiten asentamientos en proceso de regularización, atento a lo dispuesto en el artículo 20 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 686 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, la comparación del precio pactado, que es el valor de acuerdo al artículo 25 de dicho Título o valor en plaza, se efectuará sobre el valor territorial vigente fijado por la Dirección Nacional de Catastro, sin considerar el valor catastral total que incorpora el valor de las mejoras.

A los efectos de la determinación del impuesto a las trasmisiones patrimoniales correspondiente a las enajenaciones referidas en el inciso anterior, el monto imponible para la parte vendedora estará constituido por el valor territorial establecido en el presente artículo.

Será condición necesaria para la aplicación de la presente disposición contar con la declaración de la Intendencia Departamental respectiva, de que se trata de una operación efectuada en el marco de la política de regularización de asentamientos irregulares en lotes con o sin servicios.

Exonérase del impuesto a las trasmisiones patrimoniales a los adquirentes de los bienes inmuebles referidos en este artículo, así como de la exigencia de la declaración jurada de caracterización.

Este artículo entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 661.- Agrégase a la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, el siguiente artículo:

> "ARTÍCULO 36 BIS.- Es de aplicación al derecho de superficie la misma normativa sobre dimensiones mínimas de predios o lotes que establece la legislación nacional o departamental (IOT).
>
> Lo establecido en el inciso anterior no le será de aplicación a aquellos derechos de superficie promovidos por MEVIR - Dr. Alberto Gallinal Heber".

Artículo 662.- Establécese que el "Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios" creado por el artículo 7° de la Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011, pasará a denominarse "Fondo de Garantía".

Incorpórase al artículo 7° de la Ley N° 18.795, de 17 de agosto de 2011, la finalidad de garantizar contratos de leasing inmobiliarios con opción de compra, con destino a las personas físicas previstas en dicha disposición.

A los efectos del "Fondo de Garantía" entiéndese por contrato de leasing inmobiliario con opción de compra, aquel por el cual el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien inmueble para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. El dador deberá ser un organismo estatal o una persona pública no estatal.

Artículo 663.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 16 de la Ley Nº 10.723, de 21 de abril de 1946, en la redacción dada por el artículo 231 de la Ley Nº 19.996, de 3 de noviembre de 2021, por el siguiente:

"Queda prohibida, con las mismas sanciones establecidas en los artículos 11 y 19 de la presente ley, en la redacción dada por el numeral 1) del artículo 83 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, y por el artículo 1º de la Ley Nº 10.866, de 25 de octubre de 1946, toda división de tierra, realizada en suelo categorizado como rural, que implique crear lotes independientes menores en superficie a las cinco hectáreas, o a tres hectáreas para los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Colonia, siempre que no incluyan las calzadas de servicio o sendas de paso a que refiere el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 10.382, de 13 de febrero de 1943, en la redacción dada por el artículo 248 de la Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022, con las excepciones establecidas en el inciso final del artículo 2º de la presente ley. Asimismo, quedan exceptuadas las destinadas a las infraestructuras necesarias para los sistemas de saneamiento realizados en el marco de los programas de la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR - Dr. Alberto Gallinal Heber), así como las que se dispongan hasta un mínimo de una hectárea en sectores particulares delimitados en los instrumentos de ordenamiento territorial del ámbito departamental, aprobados conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, y que no sea en suelos categorizados como rural natural, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 15.239, de 23 de diciembre de 1981".

Artículo 664.- Sustitúyese el numeral 6 del literal A) del artículo 3º del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, en la redacción dada por la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"6) La habilitación, registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor en el departamento de Montevideo.

Los locales de venta al público de carne aviar y derivados en todo el país serán habilitados para su funcionamiento por las intendencias respectivas que realizarán la comunicación correspondiente al Instituto Nacional de Carnes para que este lo incorpore a sus registros.

Las habilitaciones se ajustarán a un protocolo específico para esta

actividad que será acordado entre el Congreso de Intendentes y el Instituto Nacional de Carnes con participación de los acotes del sector en un plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley".

Artículo 665.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 19.783, de 23 de agosto de 2019, en la redacción dada por la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 4º. (Facultades inspectivas y sancionatorias de alcance nacional).- El Instituto Nacional de Carnes tendrá competencias inspectivas y sancionatorias en todo el territorio nacional, así como de suspensión temporaria a quienes se les constate incumplimientos graves que pudieran afectar la inocuidad y transparencia comercial. Las mismas se aplicarán en cualquier ámbito donde se realicen actividades de comercialización, transporte y almacenamiento de carnes y derivados, así como su transformación en los puntos de venta al público.

El Instituto Nacional de Carnes comunicará al Gobierno Departamental que concedió la habilitación, la suspensión aplicada al infractor, dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles.

A los efectos de este artículo se entiende por incumplimiento grave:

A) La puesta en peligro o daño de la salud pública.

B) La inobservancia de indicaciones técnicas de los organismos competentes.

C) El comportamiento infraccional reincidente, tanto en materia de inocuidad como de transparencia comercial. La suspensión temporaria y comiso se aplicarán en cualquier ámbito donde se realicen actividades de comercialización, transporte y almacenamiento de carnes y derivados, así como su transformación en los puntos de venta al público".

Artículo 666.- Sustitúyese el artículo 5º de la Ley Nº 19.783, de 23 de agosto de 2019, en la redacción dada por la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, por el siguiente:

"ARTÍCULO 5º. (Comunicación al Registro Nacional de Carnicerías).- Cométese a los Gobiernos Departamentales con competencias en la habilitación de locales de carnicería donde se comercialicen carnes,

menudencias, subproductos y productos cárnicos, comunicar al Registro Nacional de Carnicerías a cargo del Instituto Nacional de Carnes, de todas las habilitaciones, modificaciones, suspensiones y clausuras de dichos locales, en un plazo máximo de 15 días hábiles. La comunicación de las habilitaciones de los locales, y eventuales modificaciones, es condición necesaria para iniciar o mantener la habilitación de las operaciones de los locales de carnicería".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de octubre de 2023.

BEATRIZ ARGIMÓN
Presidenta

GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO
Secretario

14) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 00:44, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Álvarez, Asiaín, Bianchi, Blás, Botana, Brenta, Caggiani, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, Della Ventura, Domenech, Gandini, Kechichian, Lazo, Mahía, Manini Ríos, Methol, Nunes, Peña, Rodríguez, Russi, Sabini, Sánchez, Sanguinetti, Saravia, Sartori y Silva).

BEATRIZ ARGIMÓN
Presidenta

José Pedro Montero
Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro
Secretario

María Alcalde
Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Corrección y control
División Diario de Sesiones del Senado

Diseño - Impresión
División Diseño e Impresión del Senado